

Universidad de Burgos
Facultad de Derecho
Departamento de Derecho Privado

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA EN RAZÓN DE LA SEPARACIÓN O EL DIVORCIO

BERTA GIL-MERINO RUBIO

Tesis doctoral presentada para la obtención
del Grado de Doctora en Derecho

Director
Dr. D. José María Caballero Lozano
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Burgos

ÍNDICE

ABREVIATURAS	9
INTRODUCCIÓN.....	11

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

1.1.- Concepto de desequilibrio económico	13
1.2.- Causas del desequilibrio económico que dan lugar a la pensión compensatoria.....	20
1.2.1.- La separación o divorcio como causa del derecho a la pensión	22
1.2.2.- El desequilibrio económico como causa de la pensión compensatoria	22
1.3.- Modificaciones de las causas del desequilibrio económico	25
1.4.- Cese del desequilibrio económico	26
1.4.1.- Mejora de la situación económica del acreedor de la pensión compensatoria.....	27
1.4.2.- Empeoramiento de la situación económica del deudor de la pensión compensatoria	34

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.1.- Proyectos de Código Civil	41
2.2.- Ley del Divorcio de la II República Española: Ley de 2 de marzo de 1.932	44
2.3.- Ley del Divorcio de 1.981: Ley 30/1.981, de 7 de julio	50
2.4.- Reforma de la Ley del Divorcio: Ley 15/2.005, de 8 de junio	59
2.5.- Regulación actual	63

2.5.1.- Legislación estatal.....	65
2.5.2.- Legislaciones autonómicas.....	75
2.5.2.1.- Comunidad Autónoma de Cataluña	76
2.5.2.2.- Comunidad Autónoma de Aragón.....	89
2.5.2.3.- Comunidad Autónoma de Galicia	91
2.5.2.4.- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.....	93
2.5.2.5.- Comunidad Autónoma de Valencia.....	93
2.5.2.6.- Comunidad Autónoma del País Vasco	95
2.6.- Ley 15/2.015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria.....	98

CAPÍTULO III

DERECHO COMPARADO (I): LA UNIÓN EUROPEA

3.1.- Introducción	111
3.2.- Derecho Francés	115
3.2.1.- Generalidades	115
3.2.1.1.- El convenio regulador	120
3.2.1.2.- Liquidación del régimen matrimonial.....	122
3.2.1.3.- La reforma de la Ley de 1.975	124
3.2.1.4.- Efectos del divorcio en las relaciones patrimoniales.....	125
3.2.1.5.- Regulación de la pensión compensatoria	128
3.2.1.6.- La reforma de 2.000	130
3.3.- Derecho Italiano.....	141
3.1.2.1.- La Ley Italiana de 1.970	143
3.1.2.2.- La Ley Italiana de 1.987	144
3.4.- Derecho Alemán.....	148
3.5.- Derecho de Gran Bretaña	150
3.6.- Derecho Portugués.....	154

CAPÍTULO IV

DERECHO COMPARADO (II): PAÍSES LATINOAMERICANOS

4.1.- Derecho Argentino	163
4.2.- Derecho Boliviano.....	167
4.3.- Derecho Brasileño.....	169
4.4.- Derecho Chileno.....	171
4.5.- Derecho Colombiano	175
4.6.- Derecho Costarricense	177
4.7.- Derecho Cubano.....	179
4.8.- Derecho Dominicano	181
4.9.- Derecho Ecuatoriano	184
4.10.- Derecho Guatemalteco.....	187
4.11.- Derecho Mexicano	191
4.12.- Derecho Nicaragüense	196
4.13.- Derecho Panameño	201
4.14.- Derecho Paraguayo	205
4.15.- Derecho Peruano	208

4.16.- Derecho Puertorriqueño.....	211
4.17.- Derecho Uruguayo	215
4.18.- Derecho Venezolano	220

CAPÍTULO V

DERECHO COMPARADO (III): PAÍSES ASIÁTICOS Y PAÍSES ÁRABES

5.1.- Países Asiáticos	225
5.1.1.- Derecho de Singapur	226
5.1.2.- Derecho de China	228
5.2.- Derecho de los Países Árabes y/o Islámicos	229
5.2.1.- La disolución del matrimonio en el Derecho islámico	229
5.2.1.1.- El matrimonio como contrato rescindible por el marido	229
5.2.1.2.- Formas de disolución del matrimonio: divorcio y repudio	229
5.2.1.3.- Los efectos patrimoniales del divorcio y del repudio respecto de los esposos y de los hijos.....	232
5.2.1.4.- Efectos del divorcio y del repudio respecto de los hijos: tutela y <i>Hadana</i>	234
5.2.2.- En particular, Marruecos	239

CAPÍTULO VI

NATURALEZA JURÍDICA DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

4.1.- Alimenticia.....	245
4.2.- Asistencial	248
4.3.- Reparadora.....	249
4.4.- Indemnizatoria.....	249
4.5.- Compensatoria	250
4.6.- Mixta.....	251
4.6.1.- Alimenticia e indemnizatoria	251
4.6.2.- Indemnizatoria y asistencial.....	251

CAPÍTULO VII

DISTINCIÓN ENTRE LA PENSIÓN COMPENSATORIA Y OTRAS FIGURAS AFINES

5.1.- Pensión de alimentos al cónyuge.....	253
5.2.- Cargas del matrimonio	258
5.3.- Indemnización prevista en el artículo 1.438 CC	261

CAPÍTULO VIII

FUNDAMENTO, FINALIDAD Y FUNCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

6.1.- Matrimonio.....	265
6.1.1.- La solidaridad post conyugal.....	267
6.1.2.- Enriquecimiento injusto	267
6.1.3.- Responsabilidad por daños.....	268
6.2.- Parejas de hecho	272

CAPÍTULO IX

REQUISITOS DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

7.1.- Origen de la pensión compensatoria.....	289
7.1.1.- La separación o divorcio como causa del derecho a la pensión	290
7.1.2.- El desequilibrio económico como causa de la pensión compensatoria	290
7.2.- Mantenimiento de la pensión compensatoria	294
7.3.- Extinción de la pensión compensatoria conforme a las causas contempladas en el artículo 101 CC	296
7.3.1.- Nuevo matrimonio del acreedor	298
7.3.2.- Convivencia marital del acreedor con otra persona	299
7.3.3.- La pensión de viudedad y la pensión compensatoria.....	302
7.4.- Otras causas de extinción de la pensión compensatoria: la renuncia	307
7.4.1. La renuncia expresa al derecho de la pensión compensatoria	308
7.4.1.1.- En los pactos prenupciales	310
7.4.1.2.- En los convenios postnupciales	312
7.4.1.3.- En las capitulaciones matrimoniales	315
7.4.2.- La renuncia tácita al derecho a la pensión compensatoria	323
7.4.3.- La renuncia al derecho a la pensión compensatoria en favor de terceros	324

CAPÍTULO X

TEMPORALIDAD DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

8.1.- En la Ley 30/1981, de 7 de julio	325
8.1.1.- Antecedentes	325
8.1.2.- Requisitos para la temporalización de la pensión compensatoria	333
8.2.- La Ley 15/2005, de 8 de julio	334
8.3.- Criterios jurisprudenciales	337

CAPÍTULO XI

FORMAS DE PAGO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

9.1.- Pago de una cantidad mensual fija.....	349
9.2.- Sustitución del pago de la pensión compensatoria	350
9.3.- Formas de sustitución del pago de la pensión compensatoria.....	364
9.3.1.- Prestación única en bienes o dinero, constituyendo una renta vitalicia.....	367
9.3.2.- Constitución de un usufructo sobre determinados bienes	369
9.3.3.- Entrega de un capital en bienes o dinero.....	372

CAPÍTULO XII

CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL IMPAGO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

10.1.- En el orden civil	375
10.2.- En el orden penal.....	377

TABLAS ORIENTATIVAS DE LA DURACIÓN Y CUANTÍA DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA.....

387

CONCLUSIONES.....

391

JURISPRUDENCIA

405

BIBLIOGRAFÍA.....

549

ABREVIATURAS

AP	Audiencia Provincial
AAPP	Audiencias Provinciales
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOP	Boletín Oficial de la Provincia
CC	Código Civil
CC ARGENTINO	Código Civil Argentino
CF BOLIVIANO	Código de Familia Boliviano
CC BRASILEÑO	Código Civil Brasileño
CC CATALÁN	Código Civil Catalán
CC COLOMBIANO	Código Civil Colombiano
CF CUBANO	Código de Familia Cubano
CC ECUATORIANO	Código Civil Ecuatoriano
CC FEDERAL	Código Civil Federal Mexicano
CC FRANCÉS	Código Civil Francés (Code Civile)
CC GUATEMALTECO	Código Civil Guatemalteco
CC PANAMEÑO	Código Civil Panameño
CC PORTUGUÉS	Código Civil Portugués
CC URUGUAYO	Código Civil Uruguayo
CC PARAGUAYO	Código civil Paraguayo
CC PERUANO	Código Civil Peruano
CC PUERTORRIQUEÑO..	Código Civil Puertorriqueño
CC VENEZOLANO	Código Civil Venezolano
CE	Constitución Española
CEP M (<i>MUDAWANA</i>)	Código del Estatuto Personal de Marruecos
CF ARGELINO	Código de Familia Argelino
CF DE CATALUÑA	Código de Familia de Cataluña
CF COSTARRICENSE	Código de Familia Costarricense
CF PANAMEÑO	Código de Familia Panameño
CP	Código Penal
LA NICARAGUA	Ley de Alimentos de Nicaragua
LD PARAGUAY	Ley de Divorcio de Paraguay

LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECR	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LF CUBA	Ley de Familia Cubana
LO	Ley Organica
NLMC CHILENA	Nueva Ley del Matrimonio Civil Chilena
S	Sentencia
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
SAT	Sentencia Audiencia Territorial
STC	Sentencia Tribunal Constitucional
STS	Sentencia Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la pensión compensatoria, la cual se encuentra regulada en el artículo 97 CC, desde el momento de su regulación y sus modificaciones.

La pensión compensatoria consiste en una cantidad económica mensual o única, que se establece en beneficio de uno de los cónyuges y a cargo del otro, cuando concurren determinados requisitos que analizaremos, y como consecuencia de la sustanciación de un proceso de divorcio o separación matrimonial.

La concurrencia de dichos requisitos, cuyo núcleo, lo constituye la existencia de un desequilibrio económico, es lo que da lugar al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria, y ha de darse en el momento de la ruptura matrimonial.

Dentro de este estudio efectuaremos una reflexión acorde con la función que la pensión compensatoria tiene en el contexto social actual, su origen, evolución histórica, razones que dan lugar a su origen, modificaciones legales en su otorgamiento, mantenimiento y extinción, la limitación en el tiempo de la duración de dicha pensión, es decir, la temporalidad de la pensión compensatoria, si ha de ser vitalicia en todos los casos o no, periodos, duración, incluyendo una tabla orientativa, criterios generales sobre el otorgamiento de la pensión compensatoria temporal o vitalicia.

La regulación actual de la pensión compensatoria supone una consecuencia de la evolución de la doctrina y la jurisprudencia, en concordancia con la propia evolución de la sociedad, y concretamente con la mayor preparación formativa e incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo.

Así, como tradicionalmente el establecimiento de la pensión compensatoria a favor del cónyuge al que se le producía un desequilibrio económico solía ser vitalicio, la tendencia actual, desde hace unos años, es que se establezca la pensión con carácter temporal, atendiendo a las circunstancias concurrentes, e incluso mediante la entrega de un pago

único, o la atribución en propiedad de un bien, constituyendo, el mismo, el pago de la pensión compensatoria.

Analizaremos la repercusión de los factores mencionados, los antecedentes en la legislación española, en el Derecho Civil Común, en las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, y sus distintas denominaciones, así como la regulación específica de la legislación de éstas en materias de su competencia, como por ejemplo las parejas de hecho.

A continuación analizaremos, también, la regulación de la pensión compensatoria en los países del entorno europeo, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y Portugal, país o países que han influido en la legislación española a partir de la aprobación del divorcio, la regulación en los países Iberoamericanos, con las características propias en dichos países, con denominaciones confusas entre la pensión compensatoria y la pensión de alimentos al cónyuge, ya sea por necesidad o por culpabilidad.

En el análisis veremos también la ausencia de la pensión compensatoria, en los términos que se regula en la legislación española, en los países Asiáticos, Singapur y China, y países árabes y musulmanes con una referencia concreta a Marruecos, efectuando un estudio de Derecho Comparado.

Interesa destacar, que supone un análisis con nuevas peculiaridades, al haberse producido una reforma de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad desde enero de 2.008, por las consecuencias que se producen para el devengo y su cobro, ya que la pensión compensatoria tiene que estar pactada y reconocida en la sentencia recaída en el procedimiento de separación o divorcio.

De forma breve, veremos el tratamiento fiscal tanto del pago como del cobro de la pensión compensatoria, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, las consecuencias de su impago, tanto en el orden civil como en el orden penal.

Y, junto a todo lo expuesto, se incluye una amplia relación de sentencias de las Audiencias Provinciales, ya que la interpretación de la pensión compensatoria, su nacimiento, mantenimiento, extinción y temporalidad, es obra de los jueces y tribunales, inicialmente.

CAPÍTULO I

CONCEPTO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

1.1.- Concepto de desequilibrio económico

Para poder definir el concepto de pensión compensatoria que se regula en el artículo 97 CC, es preciso previamente definir y conceptuar el desequilibrio económico ya que el Código Civil no lo define.

De conformidad con el artículo 97 CC, redactado por Ley 30/1981, de 7 de julio, en el que se regula la pensión compensatoria, se establece una definición de la misma¹.

Pensión compensatoria: “Es la cantidad periódica que un cónyuge debe satisfacer a otro tras la separación o el divorcio, para compensar el desequilibrio padecido por un cónyuge (el acreedor), en relación con el otro cónyuge (el deudor), como consecuencia directa de dicha separación o divorcio, que implique un empeoramiento en relación con su anterior situación en el matrimonio”.

Citado artículo 97 CC recoge el contenido de la pensión compensatoria, como forma de corregir un desequilibrio que surge como consecuencia de la ruptura de la pareja, estableciendo un derecho de crédito a favor de una de las partes que constituye una obligación o deuda para la otra parte; compensar es «dar una cosa en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado», en otro sentido; compensar es equilibrar.

En consecuencia, con el contenido de dicho precepto, la definición de la pensión compensatoria supone la entrega de una cantidad económica, si

¹ Art. 97 CC: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia”.

bien existen otras formas de pago, de una cantidad previamente fijada, bien de común acuerdo entre las partes o fijada judicialmente. Siendo obligado a su abono y que debe satisfacer, el cónyuge a cuyo favor se ha producido el desequilibrio económico tras la separación o el divorcio, para compensar el desequilibrio que implique un empeoramiento en relación con su anterior situación en el matrimonio que es el otro cónyuge receptor de la misma.

La pensión compensatoria como concepto, es una cantidad económica que entrega el cónyuge con mayores posibilidades económicas al otro cónyuge cuyo procedimiento de separación o divorcio le produce un desequilibrio económico respecto a la situación anterior a dicho proceso, es decir, a la situación de matrimonio.

Sobre la pensión compensatoria, la doctrina ha elaborado distintos conceptos. Así para Peña Bernardo de Quirós², la pensión compensatoria es “el derecho de crédito de régimen peculiar que la ley confiere a uno de los cónyuges (frente al otro) cuando la separación o el divorcio produzca un empeoramiento económico respecto de su situación en el matrimonio, y que tiene por objeto, ordinariamente, la entrega de pensiones periódicas”.

Para autores como Campuzano Tome³ y otros como Pereda Gómez, y Vega Sala⁴, la pensión compensatoria es definida, como: *“Aquella prestación satisfecha normalmente en forma de renta periódica, que la ley atribuye, al margen de toda culpabilidad, al cónyuge que con posterioridad a la sentencia de separación o divorcio se encuentre — debido a determinadas circunstancias, ya sean personales o configuradoras de la vida matrimonial— en una situación económica desfavorable en relación con la mantenida por el otro esposo y con la disfrutada durante el matrimonio y dirigida fundamentalmente a restablecer el equilibrio entre las condiciones materiales de los esposos, roto con la cesación de la vida conyugal”*.

² PEÑA BERNARDO DE QUIROS, Manuel. *“Manual de Derecho de Familia”*. Universidad de Madrid 1.989. Página 125.

³ CAMPUZANO TOME, Herminia. *“La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración a los presupuestos de otorgamiento”*. Librería Bosch, Barcelona 1.986. Página 28.

⁴ PEREDA GOMEZ, Francisco Javier, y VEGA SALA, Francisco: *“Derecho de Familia”*, Edición Praxis, S.A., Barcelona 1.994, (actualizado). Página 157.

Vega Sala considera una excelente definición del concepto de pensión la expuesta por Escarpín Ipiens, que definía la pensión compensatoria “como prestación que corresponde a un criterio estrictamente igualitario entre los cónyuges, establecida pues por criterios objetivos basados en el desequilibrio económico producido a cualquiera de los cónyuges a consecuencia de la separación y el divorcio, siempre que dicho desequilibrio produzca un empeoramiento en la situación de un cónyuge en relación con la posición del otro”.

Para Martín es partidario de interpretar el desequilibrio económico de forma objetiva y considera que “la pensión compensatoria consiste en un derecho de los cónyuges a conservar el mismo nivel de vida que tenían durante el matrimonio, aunque se moviera en el terreno de los superfluo”.

En la misma línea, Sancho Rebullida afirma que “la idea del artículo 97 CC es que roto el matrimonio, ningún cónyuge debe notar en su vida material los efectos de la ruptura; quien tiene menos debe recibir de quien tiene más lo suficiente para seguir viviendo al mismo nivel de vida que antes del divorcio o la separación”.

Fosar Benlloch y Valladares Rascón no comparten el criterio de Para Martín y Sancho Rebullida, entendiendo que no se debe de establecer una especie de “derecho adquirido” a mantener la posición económica que se tuvo con el matrimonio, a costa del otro cónyuge.

Por lo tanto, el desequilibrio económico es el presupuesto básico del otorgamiento de la pensión compensatoria, experimentado por alguno de los esposos con posterioridad al procedimiento de separación o de divorcio, pero el matrimonio no debe, por sí mismo, crear un derecho a la pensión compensatoria.

El desequilibrio económico es una alteración patrimonial negativa o de empeoramiento que padece o experimenta uno de los cónyuges. Este empeoramiento hace referencia siempre a los aspectos materiales y económicos, recursos con los que cuenta, que se ven disminuidos e influyen de forma determinante en su bienestar económico que la crisis matrimonial ha creado en el que pretende percibir la pensión compensatoria.

Es intención del legislador, parece deducirse del contenido del artículo 97 CC, intentar evitar un desequilibrio o una situación desfavorable en los aspectos materiales de uno de los cónyuges en relación con el otro cónyuge y con la situación que disfrutaba durante el matrimonio, pretendiendo que se mantenga el nivel de vida que venía disfrutando durante la existencia del matrimonio.

El concepto pues, del desequilibrio económico tiene una vertiente objetiva, la inexistencia de un cónyuge favorecido y otro perjudicado sin que por ello la pensión compensatoria se haya de constituir en igualadora de patrimonios, debiendo entenderse que el desequilibrio económico no hace referencia de forma exclusiva a que el patrimonio de uno de los esposos en el momento de la crisis matrimonial por separación o divorcio por ser superior se haya de generar el pago de dicha pensión.

Dicho concepto de desequilibrio económico tiene también una vertiente subjetiva, abarcando de forma más amplia factores que han de tenerse en cuenta para que dicho desequilibrio dé origen al otorgamiento de la pensión compensatoria, englobando no solo el aspecto sobre el patrimonio de cada uno de los cónyuges sino también al que disfrutaban durante el matrimonio y otros factores que se enumeran el artículo 97 CC, como la edad, el estado de salud, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración prestada, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, las cualificaciones profesionales, etc.

Esta vertiente subjetiva es la que prima actualmente en la jurisprudencia al entenderse que el desequilibrio económico sin más, o apreciado de forma objetiva, no puede constituir el presupuesto de otorgamiento de la pensión compensatoria sin tener en cuenta otros factores, ni constituye una forma de igualar patrimonios, sino que se ha de atener a criterios de proporcionalidad.

Este concepto de desequilibrio económico no tiene nada que ver con la pensión alimenticia ni hace referencia a la necesidad o subsistencia, sino que compensa el desequilibrio económico en el *modus vivendi* para equilibrar la situación de un cónyuge en relación con el otro.

Es por ello que este concepto de desequilibrio económico a mi juicio es obsoleto, pues el legislador del año 1.981 partía de una sociedad en la que los roles entre el hombre y la mujer estaban claramente diferenciados,

habitualmente el hombre trabajaba y la mujer atendía a los hijos y se quedaba en el hogar. Pero esta situación social ha cambiado sustancialmente en los últimos 30 años: la mujer se ha incorporado de forma masiva al mercado de trabajo, se ha producido una igualación real - no solo legal- de la consideración de la mujer, motivada fundamentalmente por la educación universal para todos, y el notable aumento de mujeres universitarias hace que en la actualidad de forma habitual ninguna mujer tenga el rol tradicional de permanecer en el hogar al cuidado de los hijos, percibiendo una retribución por su trabajo en igualdad con el hombre, salvo en algunos sectores.

Y ello con independencia del patrimonio individual de cada uno de los cónyuges, que, como es de imaginar, cuando se trata de parejas jóvenes este patrimonio es inexistente, y cuando no lo es, se suele proceder a elegir el régimen matrimonial de separación de bienes, otorgando las pertinentes capitulaciones matrimoniales.

Parece oportuno hacer referencia a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo durante los últimos años, sobre pensión compensatoria a causa del divorcio, marcando factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de fijar una pensión compensatoria en caso de divorcio, como el tiempo dedicado a la familia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 21 de febrero de 2.014⁵ (recurso número 2.197/2.012), por la que declara que a efectos de la fijación de la pensión compensatoria en caso de divorcio, debe tenerse en cuenta el período de tiempo en el que la mujer se dedicó en exclusiva a las atenciones familiares y su influencia negativa en su desarrollo profesional, pues ese dato resulta de esencial importancia para apreciar el desequilibrio entre las situaciones económicas de los cónyuges a efectos del artículo 97 CC.

⁵ STS de fecha 21 de febrero de 2.014, Recurso 1297/2.012: Los hechos: La demandante nació en 1949. Contrajo matrimonio con el demandado en 1972 y se dedicó exclusivamente a la familia y sus tres hijos durante 21 años. La demandante realizó trabajos intermitentes, principalmente, en servicios de limpieza y geriátricos desde 1993. En la actualidad se encuentra jubilada con una pensión de 519.50 euros y tiene reconocida una discapacidad del 15%. Tras la separación y desde marzo hasta diciembre de 2009 el demandado (que también se encuentra jubilado, percibiendo una pensión de unos 1.640 euros), abonó a la demandante la cantidad de 700 euros mensuales. El matrimonio obtuvo sentencia de divorcio en diciembre de 2.010. En la misma se reconocía a la demandante una pensión compensatoria de 400 euros mensuales por doce mensualidades.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia de divorcio en diciembre de 2.010, en la misma se reconocía a la demandante una pensión compensatoria de 400 euros mensuales por doce mensualidades.

Recurrida en apelación la sentencia de instancia, la AP Madrid dictó sentencia por la que revocó la anterior por entender “no haber lugar en el caso a señalar pensión compensatoria del artículo 97 CC a favor de la Sra. F al no darse en este ámbito de ‘Familia’ desequilibrio”.

Los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Fiestas Arroyo, se contienen en su fundamento de Derecho Tercero, que es del siguiente tenor:

“TERCERO.- Motivo primero. Infracción del artículo 97 CC, concurriendo interés casacional al haber infringido en su interpretación el criterio doctrinal establecido por la STS Sala 1ª de 19 de enero de 2.010.

Se estima el motivo.

Alega la recurrente que la pensión compensatoria pretende evitar el perjuicio que puede producir que una extensa convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello debe tenerse en cuenta lo ocurrido durante la vida matrimonial”.

Esta Sala en sentencia de 16 de julio del 2.013, recurso: 1044/2012, declaró:

“El artículo 97 CC exige que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2.010, de Pleno, de 19 enero.

La pensión compensatoria –declara la sentencia- “pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge;

El régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación.

De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función:

a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias.

b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones:

- a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria.
- b)Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia.
- c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal”.

Esta doctrina se ha aplicado en las sentencias posteriores 856/2011, de 24 noviembre, 720/2011, de 19 octubre, 719/2012, de 16 de noviembre y 335/2012, de 17 de mayo 2013.

En STS, 4 de diciembre del 2.012, recurso: 691/2010, se fijó que:

“...por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial...”

A la vista de esta doctrina y de los hechos declarados acreditados se debe hacer constar⁶ los datos de hecho del matrimonio.

Esta Sala debe declarar que en la sentencia recurrida no se ha tenido en cuenta el amplio período de tiempo que la demandante se dedicó en exclusiva a las atenciones familiares y su influencia negativa en el desarrollo profesional de la Sra. F. Igualmente ese prolongado lapso de dedicación a la familia es el que determina que la pensión cotizada sea inferior, lo que exige la oportuna compensación.

Este dato, de esencial importancia y recogido expresamente como uno de los elementos a valorar en el artículo 97 CC, provoca un desequilibrio entre uno y otro de los cónyuges, en relación con sus

⁶ Hechos: 1. La Sra. F. nació en 1949. 2. El matrimonio se contrajo en 1972. 3. Se encuentra jubilada con una pensión de 519.50 euros. 4. Tiene una discapacidad reconocida del 15 %. 5. Durante el matrimonio nacieron tres hijos (ya independientes) y se dedicó exclusivamente a la familia durante 21 años. 6. Tuvo trabajos intermitentes, principalmente, en servicios de limpieza y geriátricos desde 1993. 7. El demandado trabajó hasta su jubilación en la empresa de automoción I desde el año 1962 (documento núm.7), con categoría de “Jefe 1ª”, percibiendo una pensión de jubilación de 1.640,48 euros. 8. Tras la separación y desde marzo hasta diciembre de 2009 el Sr. T abonó a la Sra. F la cantidad de 700 euros mensuales.

respectivas situaciones económicas, habida cuenta que por la discapacidad y edad de ella, no es previsible que pueda mejorar su situación profesional o económica.

Por tanto, la sentencia recurrida infringe el artículo 97 CC, cuando declara que la pensión de ella es “la justa y acoplada a las aptitudes y actitudes de la Sra. F”. Igualmente es rechazable, en este caso, el argumento de que la pensión compensatoria “no es un mecanismo dador de cualidades profesionales que no se tienen”.

Por lo argumentado procede la casación de la sentencia recurrida, asumiendo, por su corrección jurídica, en su integridad, el fallo de la sentencia dictada en primera instancia”.

1.2.- Causas del desequilibrio económico que dan lugar a la pensión compensatoria

La pensión compensatoria, regulada en el artículo 97 CC, surge cuando se produce un divorcio o separación, ya que la causa, que no es otra que el desequilibrio económico, surge como consecuencia de la ruptura matrimonial.

Partiendo de que dicho desequilibrio económico no es un concepto totalmente objetivo, pues se pone de manifiesto a partir de unas premisas que han de analizarse en cada caso concreto y que no obedecen a una simple operación aritmética, se ha de analizar los parámetros de carácter objetivo que se consideran como desequilibrio económico, siendo preciso, en todo caso, que sean analizadas individualmente las causas que dan lugar al origen de la pensión compensatoria.

El concepto de desequilibrio económico es la situación diferenciada y no equivalente en la que queda cada uno de los cónyuges después de la ruptura matrimonial, ya que durante el matrimonio y con independencia del régimen económico matrimonial existente, o de los bienes propios que pudiera tener cada uno de los esposos, se iguala la situación económica y el nivel de vida es compartido, sea éste más alto o menos alto.

Este concepto es relativo, pues se trata de un nivel económico en relación con el habido anteriormente, es decir, durante el matrimonio, y lo

es en relación con el otro cónyuge, y siempre que se produzca un deterioro de la situación económica que se tenía antes.

Todo ello se ha de conformar en relación a las necesidades que han de ser cubiertas por separado, partiendo del presupuesto de que la ruptura del matrimonio normalmente supone un empobrecimiento, al menos de carácter temporal, para ambos ex cónyuges, y de los recursos con los que cada uno cuenta para cubrir dichas necesidades.

Para Roca Trías, éste desequilibrio económico no puede tratarse del que revista el carácter de mínimo, “sino que sólo deberá tomarse en consideración aquél que provoca una real situación de desventaja económica entre ambos cónyuges”.

Tampoco puede tratarse de un desequilibrio económico que se asimile a una situación de necesidad, pues entonces estaríamos hablando de la pensión de alimentos, que es lo que trata de cubrir ésta, ni tampoco se puede asimilar a términos de carácter social, derivados de cierto estatus, asistencia a eventos o protagonismo en los mismos, el desequilibrio económico alude a una pérdida efectiva e importante de nivel de vida de uno de los cónyuges siempre que sea como consecuencia de la crisis matrimonial.

En todo caso, para determinar el posible desequilibrio económico se ha de ir más allá de a la simple necesidad, en un sentido más amplio, y que constituya un perjuicio económico derivado de la crisis matrimonial.

El artículo 97 CC no expresa o delimita el concepto de desequilibrio económico, si bien pone de manifiesto que se ha de apreciar en relación con la posición del otro cónyuge, y que ha de implicar un empeoramiento del que la solicita en relación con la que se mantenía con anterioridad.

En todo caso, dicho desequilibrio por su propio concepto hace referencia a los aspectos materiales y económicos, los recursos con los que cada uno de los ex cónyuges cuenta para hacer frente a sus necesidades diarias no de forma abstracta ni de necesidades vitales sino siempre en relación con la situación anterior y en comparación con la situación que quedan cada uno de ellos.

1.2.1.- La separación o divorcio como causa del derecho a la pensión

Evidentemente la causa del derecho a la pensión compensatoria surge como consecuencia del proceso de separación, ya que si hay reconciliación, desaparece el desequilibrio económico y, por lo tanto, el derecho a la pensión compensatoria. Y ello, aunque con matices, también es aplicable al proceso de divorcio, aunque en este caso, si éste ha concluido con sentencia declarando el divorcio, los ex cónyuges deberán contraer de nuevo matrimonio.

La determinación del momento en que debe apreciarse el desequilibrio económico es discutido doctrinalmente entendiendo de forma distinta el contenido del artículo 97 CC. Así para Campuzano Tomé, el momento en que debe apreciarse el desequilibrio económico es el del cese efectivo de la convivencia conyugal, pues citado artículo hace referencia “a la situación anterior en el matrimonio”.

1.2.2.- El desequilibrio económico como causa de la pensión compensatoria

El desequilibrio económico que se produce entre los esposos es la causa principal de la pensión compensatoria. La finalidad de la concesión de la pensión compensatoria es precisamente paliar el desequilibrio producido, entendiéndose que los elementos integrantes del desequilibrio son, de una parte, el desequilibrio que ha de afectar a la posición económica de un cónyuge en relación con la mantenida por el otro, efectuándose una comparación entre las necesidades de cada uno de los ex cónyuges y de los recursos que tienen para satisfacerlas; de otra, ha de implicar un deterioro respecto de la situación económica anteriormente disfrutada durante el matrimonio, en el sentido de que exista “una real situación de desventaja económica entre ambos cónyuges”.

El desequilibrio no es referido solo al estatus social, sino el que se traduce en el reconocimiento y satisfacción de determinadas necesidades, no pudiendo identificarse con la imposibilidad de atender a las necesidades vitales, diferenciando así la necesidad de la noción de desequilibrio económico, para diferenciar la pensión de alimentos con la pensión compensatoria, entendiéndose que el concepto de desequilibrio es más amplio y se dirige a restablecer el perjuicio económico derivado de los supuestos de crisis.

A los efectos de la apreciación del desequilibrio económico que pueda existir entre los ex cónyuges, tiene relevancia el régimen económico matrimonial, ya que si bien no tiene relevancia en constante matrimonio, la tiene en la ruptura de la convivencia y se procede a la liquidación del régimen económico matrimonial, cuanto mayor haya sido la comunidad, menor será el posible desequilibrio existente entre ambos tras esa liquidación.

“Un régimen de sociedad legal de gananciales o de participación en ganancias, puede implicar, en algunos casos, la corrección de cualquier posible desequilibrio entre los esposos, como consecuencia del reparto igualitario del haber común que comporta su liquidación; por el contrario, un régimen de separación absoluta de bienes puede comportar un mayor desequilibrio tras la ruptura conyugal, al ser más patente el empeoramiento que se producirá en la situación económica del cónyuge que no ha aportado durante matrimonio ninguna fuente de ingresos, y de la que carece tras la separación o divorcio”.

Para que proceda la pensión compensatoria es necesario, además de ese desequilibrio entre las situaciones de los ex esposos, que se haya producido un descenso del nivel de vida respecto del mantenido constante el matrimonio. El objetivo de la pensión compensatoria es el mantenimiento del nivel de vida o mantenimiento del nivel económico, el *modus vivendi*. La separación y el divorcio, suelen conllevar un empeoramiento económico, aunque sea temporal, del nivel de vida de ambos esposos.

En consecuencia, si ambos cónyuges cuentan con bienes o ingresos propios suficientes para continuar manteniendo un nivel de vida similar al disfrutado constante matrimonio, no procederá el derecho a la pensión compensatoria aunque exista una notable diferencia entre el patrimonio de los cónyuges separados o divorciados, y si ambos sufren pérdida respecto de la situación anterior durante en el matrimonio, pero en igual medida, no habrá desequilibrio y, consecuentemente, tampoco derecho a la pensión.

En todo caso, la situación de deterioro económico debe ser apreciada en relación con la anteriormente mantenida en el matrimonio, y todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 97 CC, lo cual plantea

problemas de interpretación dependiendo también de la duración del matrimonio.

El momento en el que debe apreciarse el desequilibrio y por lo tanto, el momento para fijar la determinación del derecho a la pensión compensatoria es el de la ruptura de convivencia y no el de la ruptura del matrimonio.

Al ser el desequilibrio económico la causa del nacimiento del derecho a la pensión compensatoria, la desaparición del desequilibrio conlleva, consecuentemente, la desaparición del derecho al cobro de la pensión compensatoria, al desaparecer la causa que la motivó, por lo que mientras subsista el desequilibrio económico debería de mantenerse la pensión en los mismos términos en que fue concedida.

Pero la desaparición del equilibrio puede darse por la mejora de la situación del acreedor, o por el empeoramiento de la situación del deudor; así, cualquiera que sea la causa de la mejora de la fortuna del acreedor de la pensión puede ser alegada como causa de extinción: la incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera se considera causa extintiva de la pensión compensatoria, como una herencia cuantiosa, un premio etc..., debiendo en todo caso instarse un nuevo procedimiento encaminado a demostrar que ha desaparecido el desequilibrio económico.

Cuando concurre un empeoramiento de la situación del deudor, por ejemplo, respecto a la situación laboral, si bien la situación de paro laboral no implica *per se* la desaparición de la pensión, para ello es necesario que la reducción de los ingresos que se venían percibiendo hasta los propios del subsidio de desempleo implique una práctica igualación con la situación económica del ex cónyuge acreedor de la pensión compensatoria.

“La norma no puede pretender, por razones de equidad, gravar al deudor, incluso sobre su mínimo vital, para mantener al acreedor en una situación confortable o al menos desahogada. En este caso, la imposibilidad de mantenimiento del status anterior, que gravitaba

*exclusivamente sobre el cónyuge obligado, debe ser soportada por ambos*⁷.

Más problemática y menos aceptada jurisprudencialmente, es cuando la causa de extinción alegada es la existencia de nuevas obligaciones familiares del deudor de la prestación, ya que las nuevas cargas familiares se contraen de forma voluntaria y con pleno conocimiento de las anteriores obligaciones, siendo estimada esta causa como extintiva de la pensión, o de reducción de la misma, sólo en caso de real insuficiencia del patrimonio del deudor para atender a las obligaciones que tiene hacia su nueva prole.

Pero también esta causa, la del empobrecimiento del deudor, sin tener que llegar a la indigencia, se puede interpretar como desaparición del desequilibrio económico ente los ex cónyuges, y considerarse como causa extintiva de la pensión.

Por último, pueden darse las dos circunstancias conjuntamente: el enriquecimiento del acreedor y el empobrecimiento del deudor, produciéndose un nuevo equilibrio al aproximarse los medios de subsistencia de ambos.

Si el desajuste económico viene derivado de otras causas que no sea el tenor literal del artículo 97 CC, la separación o el divorcio podría interpretarse que no es causa de extinción de la pensión compensatoria el desequilibrio surgido.

1.3.- Modificaciones de las causas del desequilibrio económico

Las causas del desequilibrio económico no permanecen de forma inalterable, pudiendo concurrir modificaciones en las mismas que en unos casos no extinguirán el mantenimiento de la pensión compensatoria y en otros casos producirán el cese del desequilibrio económico y por lo tanto la extinción de la pensión compensatoria.

Si se producen modificaciones en las circunstancias del acreedor de la pensión o del deudor de la misma, podrá modificarse incluso extinguirse la pensión compensatoria, bien de mutuo acuerdo entre las partes o

⁷ TORRES LANA, José Ángel. “Comentario al artículo 101 del Código Civil en el Matrimonio y Divorcio”. Comentarios al nuevo Título IV del Libro 1º del Código Civil, Madrid 1.982. Página 787.

mediante la intervención judicial a través de la interposición de la oportuna demanda. Así, si el acreedor de la pensión se incorpora al mercado laboral de forma estable, puede reducirse la cuantía de la pensión compensatoria, si bien cada vez hay más supuestos en los que se contempla en la propia resolución judicial el mantenimiento de la pensión compensatoria si el acreedor de la misma percibe ingresos por debajo de una cantidad predeterminada extinguiéndose la misma si se supera dicho umbral.

Si, por el contrario, deudor de la pensión sufriera un empeoramiento en su situación económica, y se produjera un nuevo equilibrio entre ambos, también podría reducirse la cuantía de la pensión compensatoria, o incluso extinguirse, pudiendo darse ambas circunstancias simultáneamente.

1.4.- Cese del desequilibrio económico

El cese del desequilibrio económico dará lugar a la extinción de la pensión compensatoria. Más allá de las modificaciones en las posibilidades económicas que puedan tener tanto el acreedor como el deudor de la pensión compensatoria, el artículo 101 CC establece determinados supuestos en los que se ha de considerar que desaparece el desequilibrio económico al concurrir causas de extinción de la pensión compensatoria, así: por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio, o por vivir maritalmente con otra persona⁸, las cuales han de ser analizadas.

Al establecerse como núcleo y razón del otorgamiento de la pensión compensatoria el desequilibrio económico, y la extinción de la pensión compensatoria en el artículo 101 CC que entre otras establece, el cese de la causa que lo motivo, ha de entenderse que el cese del desequilibrio económico dará lugar a la extinción de la pensión compensatoria. Cuestiones que serán tratadas con mayor detenimiento en Capítulo VII, apartado 3, sobre extinción de la pensión compensatoria.

⁸ GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar. *“La ‘vida marital’ del Perceptor de la Pensión Compensatoria”*. Cuadernos de Aranzadi Civil-Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi 2.013. Páginas 30 y ss.

1.4.1.- *Mejora de la situación económica del acreedor de la pensión compensatoria*

La situación del deudor puede mejorar, después de haberse acordado o haber sido impuesta la pensión compensatoria por resolución judicial, y ello, por múltiples razones que pueden acontecer a lo largo del ciclo vital, mejoras en términos laborales, herencias, incluso premios producto del azar, y de esta forma, determinar la desaparición del equilibrio económico. La nueva situación puede tener problemas de prueba, a falta de reconocimiento de quién es el acreedor de la pensión compensatoria, aunque hay situaciones de carácter objetivo en las que es obvia la situación nueva acontecida.

Cuando se produce la celebración de un nuevo matrimonio por parte del acreedor o beneficiario de la pensión compensatoria, se interpreta que este nuevo matrimonio determina la extinción de la pensión compensatoria, al deducirse que la nueva situación civil del que era receptor de la pensión compensatoria mejora en el ámbito económico incluso aunque realmente no fuera así, estableciéndose una presunción legal *iuris et de iure* porque no precisa ninguna prueba ni admite prueba en contrario.

La razón de que se entienda que ha desaparecido el desequilibrio económico que existía estriba en una concepción de la pensión compensatoria no solo de desequilibrio económico, sino, aunque no se exprese así, como de desaparición de un posible desamparo del cónyuge que vuelve a contraer matrimonio, y que es habitualmente reconocida como tal en el Derecho Comparado, atribuyendo a la nueva situación razones de tipo económico que justifican esta causa de desaparición del desequilibrio económico, que, en consecuencia, producen la extinción de la pensión compensatoria:

“El hecho de contraer nuevo matrimonio permitirá normalmente al cónyuge beneficiario de la pensión reequilibrar su status económico-social, por lo cual cesa la ratio de aquella”⁹.

⁹ GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar. “La <vida marital> del Perceptor de la Pensión Compensatoria”. Cuadernos de Aranzadi Civil-Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi 2.013. Páginas 35 y ss.

Si el fundamento de esta causa extintiva radica en que los recursos del nuevo cónyuge resultan suficientes para hacer desaparecer el desequilibrio económico inicialmente existente, realmente lo que ocurre es que se produce el cese de la causa que motivó el derecho a la pensión, siendo, al ser formulada esta causa de extinción, de forma objetiva, independiente que se produzca o no equilibrio económico.

“La pérdida del derecho a la pensión por razón del matrimonio del cónyuge acreedor, es por pensarse que, por este nuevo matrimonio el acreedor de la pensión tendrá solventadas sus necesidades por lo que debe acabar la referencia equilibrada a la situación conyugal anterior”¹⁰.

Otros autores fundamentan esta causa de extinción de la pensión compensatoria en razones de índole moral o ético, por entender que la subsistencia de la pensión a cargo del ex cónyuge beneficiaría a un tercero, el nuevo cónyuge del acreedor¹¹, y no tanto por razón de la desaparición del desequilibrio económico.

Por otra parte, se fundamenta esta causa de extinción de la pensión compensatoria en que el deber de socorro, regulado en el artículo 68 CC, descansa sobre el nuevo cónyuge, razón por la cual se produce el efecto extintivo de la pensión¹².

Por último, se fundamenta en la denominada teoría del coste de oportunidades, que consiste en determinar el grado de perjuicio derivado de la ruptura de la convivencia, y evitar que gravite exclusivamente sobre uno sólo de los cónyuges. Así, para el cálculo del desequilibrio económico necesariamente han de compararse las situaciones de ambos cónyuges después de la convivencia matrimonial, y este desequilibrio ha de existir en

¹⁰ ZARRALUQUI SANCHEZ-EZNARRIAGA, Luis. *“La Pensión Compensatoria en la nueva Ley del Divorcio: Su temporalización y su sustitución”*. Sevilla, septiembre 2.003. Páginas 49 y ss.

¹¹ DE LA HAZA DIAZ, Pilar. *“La Pensión de Separación y Divorcio”*. La Ley. Madrid 1.989. Página 78.

¹² ROCA TRIAS, Encarnación. *“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”*. Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil. Dirigidos por Manuel Albadalejo. Editorial Revista de Derecho Privado/Edersa, 2ª Edición- Madrid. 1.982. Página 621.

relación con la posición del otro cónyuge, haciendo una comparación, que tiene un carácter objetivo y subjetivo¹³.

Por los mismos criterios que los empleados para determinar la desaparición del desequilibrio económico cuando el acreedor o beneficiario de la pensión compensatoria contrae nuevo matrimonio, paralelamente, y por equiparación de las situaciones legales con las situaciones de hecho reales, de acuerdo con la evolución de la sociedad en la actualidad, el artículo 101 CC contempla, como causa de extinción de la pensión compensatoria, la convivencia del acreedor con otra persona, entendiendo como tal convivencia *more uxorio*, debe ser una relación con carácter similar a la conyugal, la unión regular con comunicación personal y de intereses, en cuanto a grupo, comunes, distinta de la simple relación sentimental.

Esta causa de extinción de la pensión compensatoria requiere necesariamente una cohabitación o convivencia de carácter permanente y estable que en la práctica venga a generar una posesión de estado familiar de facto. Esto es, en definitiva, que se trate de una convivencia *more uxorio*, lo que exige las notas de habitualidad y estabilidad propias del matrimonio, fundamentándose esta causa de extinción de la pensión compensatoria igualmente en el deber de socorro de la nueva pareja, y el hecho de que la convivencia determina, normalmente, la desaparición del desequilibrio que está en el origen de la pensión¹⁴.

Por medio de la pensión compensatoria, no se trata de reparar otros daños causados por un cónyuge a otro, cuya reclamación tiene un cauce y unos medios diferentes:

1.- La solidaridad post conyugal.-

Este concepto de extender la solidaridad del matrimonio más allá de sus propios límites temporales, especialmente cuando se ha terminado por causa habitualmente de enfrentamientos entre los cónyuges.

¹³ BELIO PASCUAL, Ana Clara. “La Pensión Compensatoria”. (Ocho años de aplicación práctica de la Ley 15/2.005, de 8 de julio). Editorial Tirant lo Blanch. Tratados. 2.013. Páginas 73 y ss.

¹⁴ GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar. “La <vida marital> del Perceptor de la Pensión Compensatoria”. Cuadernos de Aranzadi Civil-Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi 2.013. Páginas 69 y ss.

2.- Enriquecimiento injusto.-

Es más preciso hablar del empobrecimiento injusto, ya que este principio unificaría todas las obligaciones que se contraen sin convenio, cuyo concepto es más amplio que el de enriquecimiento injusto.

El enriquecimiento injusto de una persona implica, por definición, el empobrecimiento injusto de otra, y una relación de causa a efecto entre ambos fenómenos. Pero puede haber también empobrecimientos injustos sin contrapartida; o al menos donde no importe si ha habido o no un enriquecimiento simultáneo para alguien.

De cualquier forma, este empobrecimiento necesitará para justificar el derecho a una pensión a cargo de otro, el componente de injusticia que le califica y una razón que haga recaer en el otro cónyuge la obligación de compensar este empobrecimiento.

Este mismo principio básico del Derecho puede ser el fundamento de justamente lo contrario y convertirse en un óbice para el nacimiento del derecho a la pensión.

Si el cónyuge que sufre el desequilibrio por la separación o el divorcio es el causante, incluso doloso, o más aún, delictivo, atentando contra la vida del otro, de la ruptura, su enriquecimiento a través de la compensación debería ser calificado de gravísimamente injusto.

3.- Responsabilidad por daños.-

Las obligaciones, nacen, de acuerdo con el artículo 1.089 CC, de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

En consecuencia, si la obligación de resarcir a través de la pensión compensatoria, tuviera su origen en un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, el matrimonio se referiría a una responsabilidad contractual. Pero no es así en el artículo 97 CC, ya que no existe obligación conyugal alguna de equilibrar los patrimonios durante la vigencia de la unión, lo cual no es obstáculo para que cualquier daño, causado por un esposo al otro, en el que sea de aplicación el artículo 1.902 CC, pueda ser objeto de una acción independiente, criterios que se han

seguido para la imposición de la obligación de compensar, como los siguientes:

A) Imponer la obligación de compensar al causante físico del daño o cambio peyorativo.

B) Imponer la obligación al culpable del daño (responsabilidad por culpa).

C) Imponer la obligación a quien se benefició del perjuicio ajeno, pero sólo hasta donde se benefició (enriquecimiento injusto).

D) Imponer la obligación a quien se benefició del riesgo (responsabilidad por riesgo).

E) Imponer la obligación, por motivos de equidad, a quien estando unido con el perjudicado por vínculos familiares o consorciales, no ha sufrido daño o ha resultado menos perjudicado como consecuencia de un cambio fortuito (compensación propiamente dicha).

Estas indemnizaciones de equidad pertenecen a la misma clase de obligaciones que la pensión compensatoria. Estamos, pues, ante un supuesto de responsabilidad objetiva. Pero ésta no tiene su justificación en el riesgo, con este principio de responsabilidad objetiva, se pretende reformar el concepto de culpa, con repercusiones sobre la imputabilidad y la responsabilidad individual, en los que está presente también el elemento de peligrosidad.

Se ha ampliado este criterio de la responsabilidad objetiva teniendo en cuenta otros factores, diferentes del riesgo, como es la protección de la confianza, la justicia distributiva y otras semejantes de matiz social. Así, se han incorporado a esta determinación de responsabilidad, sectores como el de las leyes protectoras de consumidores y usuarios, las relativas a productos defectuosos o la prestación de servicios alimenticios, farmacéuticos, sanitarios y para niños.

En suma, se trata de una fundamentación basada en la equidad. De esta forma, la imputación de la responsabilidad a quien produce el daño no es absoluta.

Así, en la responsabilidad objetiva, la exclusiva culpa del paciente del daño exonera al agente de responsabilidad, porque es esencial a los efectos de este trabajo, y su proyección en la pensión compensatoria es fundamental.

Resulta lógico que, al considerar la responsabilidad del productor de los daños, en determinados casos, como objetiva, con independencia de su culpa o de cualquier otro requisito más, por su parte, hay un factor que debe limitar estas consecuencias para el agente. Se trata de aquellos casos en que la culpa corresponde exclusivamente al que sufre el daño.

Si se intenta analizar los fundamentos posibles de la pensión compensatoria, se ha de concluir que la única base o justificación de la pensión compensatoria de la separación y el divorcio matrimonial, resulta de la responsabilidad objetiva, informada por un principio de equidad.

En la obligación de indemnizar, se han de analizar los elementos concurrentes:

a) Daño

Se ha dicho que “el fundamento de esta pensión compensatoria es objetivo, basado en la diferencia del nivel de vida de los cónyuges en relación al status matrimonial”. Se trata de un resarcimiento por la concurrencia de un daño objetivo producido por la ruptura, pero la pensión compensatoria no tiene la naturaleza de la responsabilidad civil, se trata de una indemnización en el sentido estricto del término, puesto que el daño objetivo a resarcir viene caracterizado por consistir en la pérdida de expectativas de todo tipo que pertenecían al propio estatuto del matrimonio, y que desaparecen como consecuencia del divorcio.

En realidad, el daño lo ha concretado la Ley, en el artículo 97 CC, en el desequilibrio. Sea éste lo que sea, existe, pues, un daño que es causado por la separación o el divorcio: el desequilibrio.

b) Relación de causa a efecto

En lo que respecta a la relación de causa a efecto, es evidente que en cada caso particular habrá de constatarse la realidad de que ese desequilibrio, daño, haya sido producido directamente por la separación o el divorcio y no por cualquier otro hecho o causa, quizá concurrente en el tiempo. Tiene que ser la separación o el divorcio el que produzca directa y efectivamente el desequilibrio, de forma que si no hubiera tal ruptura, el desequilibrio no se produciría.

c) Imputación

Es en la imputación de la responsabilidad donde se debe analizar, la causa del daño, el desequilibrio no viene producido por la acción de uno de la que el otro es sujeto pasivo, sino por la separación o el divorcio. Así la pensión compensatoria no puede descansar en la culpa, ya que en la determinación del derecho a la pensión del artículo 97 CC debe prescindirse del elemento culpa, por parte de ninguno de los cónyuges.

La realidad es que el fundamento de la pensión compensatoria debe ser la equidad, para todos los supuestos, tanto en los supuestos en que no exista un convenio entre los cónyuges, ni acción de ninguna clase dolosa, ni culposa, por parte del deudor, como en los demás casos.

La equidad aparece recogida en el artículo 3 CC¹⁵, si bien en su párrafo segundo se indica que *“La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”*.

Otro tanto se puede decir de la sucesión *mortis causa* en la obligación y su vinculación a la legítima de los herederos del deudor, que resulta antagónica con la compensación de un daño, padecido y medido en un momento determinado. La modificación por esta causa o por “alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge”, sólo pueden explicarse con normas o criterios de equidad.

La equidad puede ser la justificación de que en el artículo 97 CC se regule la compensación de un desequilibrio económico por medio de una obligación pecuniaria y que a la hora de cuantificar la equivalencia se valoren factores tan poco congruentes con los económicos como la edad y el estado de salud (2ª), la dedicación pasada y futura a la familia (4ª), la colaboración prestada (5ª) o la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal (6ª). Factores que pueden ser tenidos en cuenta pero

¹⁵ Art. 3 CC: “1.- Las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2.- La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”.

que difieren del criterio del desequilibrio económico y sin embargo, se tienen en cuenta para la cuantificación de la pensión compensatoria.

Además de que el fundamento de la pensión compensatoria pueda descansar en el criterio de la equidad, como justicia aplicada al caso concreto, existen otros principios que pueden aplicarse incluso corregir el principio de equidad, como el principio de igualdad, el deber de trabajar, el régimen económico conyugal.

Si el origen del otorgamiento de la pensión compensatoria se basa en la concurrencia de un desequilibrio económico respecto de la situación anterior al procedimiento de separación o de divorcio, es decir, el matrimonio, consistiendo en la prestación económica de un cónyuge al otro cónyuge en el que concurra el desequilibrio respecto de la situación de matrimonio, la extinción de la pensión compensatoria viene determinada por diversas causas reguladas en el artículo 101 CC: por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio, o por vivir maritalmente con otra persona.

1.4.2.- Empeoramiento de la situación económica del deudor de la pensión compensatoria

El desequilibrio económico que constituye la causa del otorgamiento de la pensión compensatoria puede desaparecer por un empeoramiento de la situación económica del deudor, y ello, por las mismas razones por las que puede producirse una mejora de la situación económica del acreedor de la pensión compensatoria, pero a la inversa, es decir, por los múltiples circunstancias que pueden acontecer a lo largo del ciclo vital, máxime en la actualidad: empeoramiento en el ámbito laboral, desempleo, pérdida del cobro del subsidio por desempleo por agotamiento del cobro de la prestación en términos laborales, y de esta forma, determinar la desaparición del equilibrio económico.

Esta circunstancia, la del empeoramiento de la situación económica del deudor de la pensión compensatoria, ha de tener un carácter objetivo, que pueda probarse documentalmente, ya que de otra forma no quedaría acreditada la desaparición del desequilibrio económico, debiendo de excluirse algunas circunstancias tales como el hecho de tener que asumir más obligaciones, como la de tener más hijos el deudor de la pensión compensatoria, ya que dicha polémica por tal circunstancia ha quedado

resuelta por la jurisprudencia al determinar que cuando se asumen nuevas obligaciones se ha de ser consciente de las ya asumidas con anterioridad y que no pueden ser obviadas.

El artículo 101 CC añade en un segundo párrafo¹⁶ que el derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

Ello implica que, fallecido el deudor del pago de la pensión compensatoria, el legislador no considera que por ello, por dicha defunción, ha desaparecido el desequilibrio económico que existía previamente al constituirse u otorgarse el derecho al cobro de la pensión compensatoria.

Así, la deuda consistente en el abono periódico del importe en el que consista la pensión compensatoria o en la forma que estuviera establecida, ya que también se contempla la posibilidad de sustituirse la pensión fijada judicialmente en clara y expresa referencia a la que se establece en el artículo 97 CC.

Así, en el artículo 99 CC¹⁷ se establece la posibilidad de sustitución y las diferentes modalidades, como una renta vitalicia, usufructo de algunos bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

Sea en la forma de renta periódica o de otra forma, el pago de la pensión compensatoria subsiste para los herederos del deudor del pago de ésta, con el límite de la legítima, esto es, del tercio de la herencia que ha de ir preceptivamente a los herederos del causante, preceptuando el Código Civil la posibilidad de éstos, los herederos, de poder solicitar su reducción o supresión de la pensión compensatoria, atendidas las circunstancias concurrentes, no ya en relación directa al desequilibrio económico, sino a

¹⁶ Art. 101 CC en un segundo párrafo: *“El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima”*.

¹⁷ Art. 99 CC: *“En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero”*.

la propia situación económica de los nuevos obligados a su abono como herederos del deudor y al montante económico existente de la herencia.

El Código Civil establece, así mismo, la restricción de la modificación de las pensiones fijadas en resoluciones judiciales, pero en referencia a las pensiones en general, no de forma exclusiva a la pensión establecida en el artículo 97 CC.

Así, en el artículo 100 CC¹⁸ se hace mención de modo expreso que han de concurrir modificaciones sustanciales para que la pensión fijada sea modificada.

El Código Civil establece otros supuestos en los que se hace referencia al artículo 97 con remisión a éste a los efectos del nacimiento de un derecho a indemnización, distintos al establecido en el artículo 97 CC: así en el artículo 98 CC¹⁹ respecto a los efectos de la declaración de nulidad de un matrimonio, reconociéndose al cónyuge de buena fe el derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97 CC, no en relación directa a la existencia de un desequilibrio económico.

El texto literal del artículo 99 CC – que no ha sido reformado - dice que la modificación de la pensión puede realizarse “*en cualquier momento*”, lo que da una clara idea de manifiesta amplitud. Sin embargo, el propio precepto limita su autorización a “*la pensión fijada judicialmente*”.

En las causas de extinción de la pensión compensatoria deben de incluirse todos aquellos supuestos, que con independencia de que se contemplen o no en el artículo 101 CC²⁰, determinen la desaparición hacia el futuro de la pensión por desequilibrio económico²¹.

¹⁸ Art. 100 CC: “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge”.

¹⁹ Art. 98 CC: “El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97 del Código Civil”.

²⁰ Art. 101 CC: “El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la

En el artículo 101 CC se contemplan como causas de extinción de la pensión compensatoria: el cese de la causa que motivo la pensión o el desequilibrio, el nuevo matrimonio del acreedor de la pensión o su convivencia marital con otra persona. No se contemplan en este artículo la renuncia, la muerte del acreedor o la prescripción entre otras causas que pueden producir idéntico efecto extintivo. Además, el cuadro de causas extintivas de la pensión compensatoria debería de completarse con las que para las obligaciones en general establece el artículo 1.156 CC²².

Pero, además, el artículo 101 CC no resulta claro al establecer de una forma genérica como causa de extinción de la pensión compensatoria, “por cese de la causa que lo motivó”, planteando numerosos problemas de interpretación²³.

No todos los supuestos de desaparición del desequilibrio económico son causa de la extinción de la pensión compensatoria, ni las causas de extinción de ésta son únicamente las reguladas en el artículo 101 CC.

En conclusión, no siempre que se produce la extinción de la pensión compensatoria se debe a la desaparición del desequilibrio económico que constituye el objeto y causa del nacimiento de la pensión compensatoria.

Es causa del establecimiento de la pensión compensatoria el propio proceso de divorcio o separación²⁴. También lo es el desequilibrio económico²⁵ surgido entre los cónyuges²⁶. Por ello se han de analizar las²⁷ causas que motivaron el desequilibrio económico²⁸.

reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima”.

²¹ SANCHEZ GONZALEZ, María Paz. “*La Extinción de la Pensión Compensatoria*”. Colección de Estudios de Derecho Privado. Editorial Comares. Granada 2.005.

²² Art. 1.156 CC: “Las obligaciones se extinguen: Por el pago o cumplimiento. Por la pérdida de la cosa debida. Por la condonación de la deuda. Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor. Por la compensación. Por la novación”.

²³ VILLAGOMEZ CEBRIAN, Alfonso J. “Establecimiento de la pensión compensatoria bajo condición o término”. Página 192.

²⁴ TORRES LANA, José Ángel. “Comentario al artículo 101 del Código Civil en el matrimonio y divorcio”. Comentarios al nuevo Título IV del Libro 1º del Código Civil, Madrid 1.982. Página 787.

²⁵ GONZALEZ POVEDA, Pedro. Tratado de Derecho de Familia. La Ley del divorcio. Editorial Sepin. Madrid 1.987. Página 97.

Pueden las partes pactar que, la sustitución realizada mediante la entrega de bienes o dinero, se realice de forma aplazada o fraccionada en plazos.

La diferencia puede tener relevancia si durante el tiempo que media entre la sustitución y la entrega real y completa, se produce alguna causa de extinción, como la muerte del acreedor. Si es el consentimiento el que produce la novación, existirá, en caso de defunción del beneficiario, un crédito que se integrará en su sucesión; y si contrae matrimonio o convive maritalmente con otro, mantendrá el derecho a cobrar lo que se le adeude. Por el contrario, si sólo el cumplimiento total de la obligación sustitutoria es el que produce la extinción o modificación de la obligación de pago de la pensión compensatoria, la causa extintiva operará respecto a las cantidades no vencidas, aunque no en cuanto a las vencidas y no satisfechas, en que el crédito se ha consolidado.

Si habiéndose acordado la entrega de un capital, fallece, bien el cónyuge acreedor, bien el deudor antes de que sea satisfecho, aunque nos hallemos ante un derecho de crédito, existe un componente familiar que hace que la solución no pueda ser la misma que cuando se trata de un derecho de crédito de otra clase y así, si el acreedor fallece antes de haber cobrado la cantidad acordada, sus herederos no pueden reclamar el pago acordado, ya que ha desaparecido la base familiar para la que se había convenido dicho pago; si quien fallece es el deudor, deberá aplicarse la misma norma del artículo 101.2 CC, de modo que los herederos asumen la obligación de su causante, pero siempre con la limitación de los derechos de legítima correspondientes y la suficiencia del caudal hereditario²⁹.

Esta solución pretende armonizar las características de estos negocios jurídicos de naturaleza familiar, con el texto literal del artículo 99 CC, que se refiere a entrega, que tiene un sentido de efectivo cumplimiento

²⁶ PONS GONZALEZ, Manuel y DEL ARCO TORRES, Miguel Ángel. *“Separación, Divorcio y Nulidad Matrimonial, Régimen Jurídico”*. Granada 1.992. Página 316.

²⁷ RUIZ-RICO, RUIZ-MORON, J. *“La concesión temporal de la pensión por desequilibrio económico”*. Editorial Aranzadi Civil, 1.995, volumen I. Páginas 119 y siguientes, concretamente la pág. 121.

²⁸ MARTIN GARCIA DE LEONARDO, Teresa. *“La Temporalidad de la Pensión Compensatoria”*. Editorial Tirant Lo Blanch, 1ª Edición. Valencia. 1.997.

²⁹ ROCA TRIAS, Encarnación. *“El Convenio Regulador y los conceptos de alimentos, cargas familiares, pensión por desequilibrio e indemnización en caso de nulidad”*, Barcelona 1.996.

y de transmisión posesoria de los bienes o el dinero, y no de mero convenio. Por otra parte, la falta de total cumplimiento de la obligación, aunque se haya pactado el aplazamiento, no parece que deba beneficiar al que no ha completado su prestación.

Esta consecuencia debe también aplicarse al supuesto del matrimonio o convivencia *more uxorio* del acreedor. Hay que tener en cuenta que en este pacto sustitutorio, la posibilidad de tales nupcias o convivencias posteriores, es básica en su negociación: para el acreedor, al eliminar los riesgos de pérdida; y para el deudor para reducir la cuantía por idéntica razón.

Sin embargo, cuando los plazos son periódicos, iguales y por un plazo de tiempo de una cierta extensión, podría considerarse el fraccionamiento como una pensión limitada temporalmente y durante su vigencia estar sujeta a la normativa íntegra de la pensión compensatoria. El pacto novatorio está sujeto a la interpretación de la voluntad de los estipulantes. Porque con independencia de la sustitución que regula el artículo 99 CC, los cónyuges o ex cónyuges, en uso de su libertad de contratar, pueden sustituir la pensión inicialmente establecida por el juez o convenida por ellos, por otra compensatoria, de diferente cuantía o límite temporal, quizá transigiendo posibles modificaciones por alteración de las circunstancias.

Si no hay tal acuerdo, *“el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias”* que seguidamente especifica, pero que son determinantes para fijar la cuantía, pero no la procedencia de la pensión, ni la oportunidad de la temporalización o no, ni, en caso positivo, la concreción del tiempo de vigencia, ni la posibilidad de que sea una pensión o una prestación única.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.1.- Proyectos de Código Civil

La introducción de la pensión compensatoria en nuestro Derecho fue obra de la Ley 30/1.981, de 7 de julio, por la que se modificó el régimen del matrimonio en el Código Civil y se determinó el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio³⁰.

A pesar del tiempo transcurrido desde que dicha pensión compensatoria accedió a nuestro ordenamiento jurídico, la citada institución no ha dejado de motivar discrepancias tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, en relación con los límites concretos de la misma, y sobre su procedencia, extensión y duración.

Históricamente, en nuestro Derecho hubo regulación del divorcio en España, antes del Concilio de Trento. Fue Felipe II quien dictó la Real Cédula de 12 de julio de 1.564, que entre otras cosas, consagró legalmente la indisolubilidad del matrimonio³¹.

La Real Cédula significa el triunfo del principio de la indisolubilidad del matrimonio, principio que ha venido rigiendo sin solución de continuidad hasta la Ley del divorcio de 2 de marzo de 1.932, al menos en materia civil.

Los codificadores se enfrentaron con la Real Cédula de Felipe II de 12 de julio de 1.564 que se había recogido en la Novísima Recopilación, por la

³⁰ SANCHEZ GONZALEZ, M^a Paz. *“La extinción del derecho a la pensión compensatoria”*. Granada 2.005. Colección de Estudios de Derecho Privado. Editorial Comares. “Los precedentes”. Página 6.

³¹ VALLADARES RASCON, *“Nulidad, separación, divorcio. Comentarios a la Ley de Reforma del Matrimonio”*, Editorial Civitas, Madrid, 1.982. Página 187.

que el Rey declaraba aplicable en España la obra legislativa del Concilio de Trento³².

En el momento en que se llevo a término la introducción en nuestro derecho de la figura de la pensión compensatoria, el legislador, dada la inexistente tradición divorcista en nuestro país, tomo como referente, con alta probabilidad, el Derecho francés, al que la doctrina de manera mayoritaria, señala como precedente de la pensión que se regula en el artículo 97 CC.

En el Derecho Canónico, la Iglesia Católica mantuvo siempre el sistema de la indisolubilidad del vínculo matrimonial para dar una organización firme a la familia legítima.

El Proyecto de Código Civil de 1.820³³ reconoció el matrimonio canónico como el único productor de efectos civiles. Así se mantuvo también en el Proyecto de 1.851³⁴, conocido con el nombre de su autor más significado, García Goyena, y, por tanto, el matrimonio canónico era el único eficaz, que producía efectos civiles. Este proyecto estableció requisitos civiles previos y la separación, que se denomina divorcio.

La Ley Provisional de Matrimonio Civil de 18 de junio de 1.870³⁵ surgió como consecuencia de la revolución de 1.868 (la Gloriosa contra Isabel II)³⁶ y la consiguiente proclamación de la Constitución. Se estableció el principio de libertad de conciencia y se alcanzó el carácter exclusivo y excluyente de la potestad legislativa del Estado en la relación matrimonial.

³² El Concilio de Trento fue el XIX Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica, se inicio en 1.545 y se terminó en 1.563, tuvo lugar en Trento, ciudad del norte de la Italia actual. Fue Convocado por el Papa Paulo III en 1.542. El tema en discusión fue la escisión de la Iglesia por la reforma protestante.

³³ El Proyecto de Código Civil de 1.820 quedo inconcluso, se hizo a propuesta del Diputado Damián de Lasanta el día 16 de julio de 1.820

³⁴ El Proyecto de Código Civil de 1.851 fue llamado “Proyecto García Goyena”, por ser Florencio García Goyena, ejerció un considerable influjo sobre el vigente Código Civil.

³⁵ La Ley de Matrimonio Civil de 18 de junio de 1.870 implantó el matrimonio civil obligatorio. Gaceta de Madrid numero 172, de 21 de junio de 1.870.

³⁶ La revolución de 1868, fue llamada la Gloriosa, porque se hizo en la época del reinado de de Isabel II, se inició en los días 19-27 de septiembre de 1.868 en Cádiz, y fue una sublevación militar a la que se unieron civiles y tuvo como consecuencia el exilio de la reina Isabel II.

El matrimonio civil era el único eficaz, evitando así la desigualdad ante la Ley (de los no católicos), suprimiendo trabas religiosas. Se reconoció a todos los españoles la posibilidad de celebrar el matrimonio canónico como segundo matrimonio, que civilmente era ineficaz.

La Ley de Matrimonio Civil de 1.870, al igual que en la normativa canónica, proclama la indisolubilidad del matrimonio. El divorcio es mirado con la misma óptica de la ley eclesiástica, es decir, como simple separación de los cónyuges. La Ley desconoce el divorcio vincular.

Tres artículos fundamentales especifican el criterio del legislador:

En el artículo 1 se define su perpetuidad y su indisolubilidad³⁷. En el artículo 83 se afirma que los efectos del divorcio son únicamente la separación de la vida en común, pero no la disolución del vínculo³⁸. Y en el artículo 84 se prohíbe el divorcio excepto por mandado judicial³⁹.

Respecto a las causas del divorcio, esta ley señala que “el principio generador de todas ellas es el mismo en que se inspira la jurisprudencia eclesiástica, que es la más celosa de la perpetua y constante unión de los esposos”.

Las causas del divorcio se regulan en el artículo 85 la Ley del Matrimonio Civil, estableciéndose como causas tanto el adulterio de la mujer como del marido, pero debiendo concurrir en el caso del marido el escándalo público o el abandono completo de la mujer o el hecho de que el marido adultero tuviese a la mujer con la que comete el adulterio en la casa conyugal. Los malos tratos graves de palabra o de obra del marido a la mujer, la violencia para obligarla a cambiar de religión, el intento de prostituir a la mujer o la proposición a la prostitución. Los malos tratos a los hijos, siempre que peligre su vida, el intento de corromperles y la

³⁷ Art. 1 de la Ley de Matrimonio Civil de 1.870: “El matrimonio es por su naturaleza perpetuo e indisoluble”.

³⁸ Art. 83 de la Ley de Matrimonio Civil de 1.870: “El divorcio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan sólo la vida común de los cónyuges y sus efectos”.

³⁹ Art. 84 de la Ley de Matrimonio Civil de 1.870: “Los cónyuges no podrán divorciarse, ni aun separarse, por mutuo consentimiento, para ello es indispensable en todo caso el mandato judicial”.

complicidad en la prostitución o corrupción. Y por último, la condena a cualquiera de los cónyuges a cadena perpetua⁴⁰.

2.2.- Ley del Divorcio de la II República Española: Ley de 2 de marzo de 1.932

Con la llegada de la Segunda República vuelve el divorcio vincular a España y así se mantiene durante el septenio 1.931-1.939⁴¹. El régimen del General Franco⁴² vuelve al criterio anti-divorcista y se mantiene el artículo 22 del Fuero de los Españoles⁴³ que afirmaba que el matrimonio es único e indisoluble.

La primitiva redacción del artículo 43 de la Constitución de 1.932 contemplaba el divorcio por mutuo disenso, por la libre voluntad de la mujer y a solicitud del marido con alegación, en este caso, de justa causa. La evidente discriminación entre el hombre y la mujer que ello suponía se justificaba pretendidamente en base a la realidad social de la época, pues, en muchos casos la mujer preferirá, por pudor, no pedir el divorcio a airear ante los Tribunales su intimidad familiar.

Sin embargo, prevaleció la postura contraria, fundada en que ello vendría a consagrar la inferioridad de la mujer y en que contravendría el principio de igualdad entre los sexos. Por tanto, en su versión definitiva, la Constitución recogía sólo el divorcio por mutuo disenso y a petición de uno de los cónyuges con alegación de causa.

⁴⁰Art. 85 de la Ley de Matrimonio Civil de 1.870: "Son causas de divorcio: 1º. Adulterio de la mujer, no remitido expresa o tácitamente por el marido. 2º. Adulterio del marido con escándalo público o con el abandono completo de la mujer, o cuando el adúltero tuviere a su cómplice en la casa conyugal, con tal que no hubiera también sido remitido expresa o tácitamente por la mujer. 3º. Malos tratamientos graves de obra o de palabra inferidos por el marido a la mujer. 4º. Violencia moral o física ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla a cambiar de religión. 5º. Malos tratamientos de obra inferidos a los hijos, si pusieren en peligro su vida. 6º. Tentativa del marido para prostituir a su mujer, o la proposición hecha por aquél a ésta para el mismo objeto. 7º. Tentativa del marido o de la mujer para corromper a sus hijos y la complicidad en su corrupción o prostitución. 8º. Condenación por sentencia firme de cualquiera de los cónyuges a cadena perpetua o a reclusión perpetua.

⁴¹ La Ley del divorcio de 2 de marzo de 1.932 aceptó el matrimonio civil y el divorcio.

⁴² Con la llegada de la Guerra Civil y el triunfo del General Franco desaparece la posibilidad del divorcio, el matrimonio es indisoluble.

⁴³ El Fuero de los Españoles es de 18 de julio de 1.945, es una de las ocho Leyes Fundamentales del franquismo y en ella se establecía una serie de derechos, libertades y deberes del pueblo español.

El artículo 3 de la Ley del divorcio de 2 de marzo de 1.932⁴⁴ establecía como causas de divorcio⁴⁵, entre otras: el adulterio, siempre que no fuera consentido, la bigamia, la tentativa del marido para prostituir a su mujer y el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, o la connivencia en éstas, el desamparo de la familia sin justificación, el abandono durante un año, la ausencia del cónyuge dos años desde la fecha de su declaración judicial, el atentado de un cónyuge contra la vida del otro, o contra la vida de los hijos, los malos tratamientos de obra y las injurias graves, la violación de alguno de los deberes que impone el matrimonio y la conducta inmoral o deshonrosa de uno de los cónyuges, la enfermedad contagiosa y grave de carácter venéreo, la enfermedad grave, la contagiosa, contraídas ambas antes del matrimonio y culposamente ocultas al tiempo de celebrarlo, la condena del cónyuge a pena de privación de libertad por tiempo superior a diez años, la separación de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres años y, la enajenación mental de uno de los cónyuges.

En conclusión, la Ley republicana contemplaba los tres tipos de divorcio posibles: divorcio por mutuo disenso, divorcio-sanción o divorcio por culpa, y también divorcio-remedio.

En su época esta Ley fue enjuiciada favorablemente, sobre todo en base a la admisión del divorcio por mutuo disenso que se recogía en un número relativamente pequeño de legislaciones. De hecho, fue un modelo a adoptar para muchos países europeos⁴⁶ cuyas legislaciones contemplaban un modelo de familia que, al menos en las grandes ciudades

⁴⁴ La Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1.932 admitía el divorcio por mutuo disenso, divorcio-sanción o divorcio por culpa, y también divorcio-remedio, se aprobó siendo Ministro de Justicia D. Fernando de los Ríos.

⁴⁵ Art. 3 de la Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1.932: Causas de divorcio: 1ª. El adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue. 2ª. La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitar cualquiera de los cónyuges. 3ª. La tentativa del marido para prostituir a su mujer y el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución. 4ª. El desamparo de la familia, sin justificación. 5ª. El abandono culpable del cónyuge durante un año. 6ª. La ausencia del cónyuge cuando hayan transcurrido dos años desde la fecha de su declaración judicial, computada conforme al artículo 186 del Código Civil”.

⁴⁶ Algunos de los países europeos de nuestro entorno que adoptaron como modelo la Ley del Divorcio de la República en sus legislaciones fueron Italia y Portugal.

y en las zonas industrializadas, no respondía a la realidad social del momento⁴⁷.

Nuestra Ley de Divorcio de 1.932⁴⁸ fue tachada de adelantarse a la sociedad española, señalando nuevos caminos de solución pacífica de los conflictos familiares a los que no se encontraba demasiado acostumbrada.

En 1.932, época de la II República, existía el divorcio en España, pero la Ley de 2 de marzo de 1.932⁴⁹ no puede considerarse un precedente de la pensión compensatoria, pues la pensión existente en esa época era de naturaleza propiamente alimenticia y no compensatoria.

Dicha Ley de 1.932, en su artículo 30 establecía la culpabilidad o inocencia de cada uno de los cónyuges en el divorcio, y declaraba el derecho del cónyuge inocente a reclamar una pensión alimenticia, condicionada a la carencia de bienes propios para atender a su subsistencia, separando esta pensión de alimentos de la pensión de alimentos de los hijos a su cuidado. Y solo para el supuesto en que ninguno de los dos cónyuges fuese declarado culpable, entonces podría darse de forma indistinta el derecho a reclamar una pensión de alimentos entre los cónyuges.⁵⁰

La Ley de 1.932 en su artículo 31, declaraba los supuestos de extinción del derecho a los alimentos, de forma tasada, por muerte del alimentista, por contraer nuevo matrimonio o vivir de hecho con otra persona. Sin embargo la muerte del obligado al abono de la pensión de alimentos no se extinguía por la muerte de este, sino que se trasmitía a sus herederos, respetando la legítima de la herencia⁵¹.

⁴⁷ El modelo de familia en las grandes ciudades y en las zonas industrializadas era mucho más moderna y abierta que en las zonas rurales.

⁴⁸ La Ley de 1.932 fue la primera en establecer el divorcio en España.

⁴⁹ La pensión compensatoria se regula por primera vez en España con la Ley 30/1.981, Ley del Divorcio de 1.981, modificándose algunos artículos del Código Civil.

⁵⁰ Art. 30 de la Ley de 1.932: "El cónyuge inocente, cuando carezca de bienes propios bastante para atender a su subsistencia, podrá exigir del culpable una pensión alimenticia, independientemente de la que corresponde a los hijos que tenga a su cuidado. Si el divorcio se decretare por causa que no implique culpabilidad de ninguno de los cónyuges, ambos podrán exigirse recíprocamente alimentos en su caso,

⁵¹ Art. 31 de la Ley de 1.932: "El derecho a los alimentos cesará por muerte del alimentista o por contraer éste nuevo matrimonio o vivir en concubinato. La obligación

La Ley de 1.932 en su artículo 32, declaraba la posibilidad de que variase la cuantía de la pensión de alimentos entre cónyuges en función de las necesidades del alimentista y la situación económica del cónyuge obligado a su abono, fijando el ejercicio de garantías para que el obligado al pago hubiere de satisfacer el abono de la pensión, tales como la posibilidad de constituir una hipoteca sobre los bienes inmuebles del obligado a dar alimentos, e incluso otras garantías que decidiese el juez que éste hubiere de prestar⁵².

La finalidad de la prestación⁵³ era la de cubrir las necesidades básicas de subsistencia de uno de los ex cónyuges, más similar a los alimentos entre parientes, regulados en el artículo 142 CC, que a la pensión por desequilibrio económico, regulado en el artículo 97 CC. Además basaban la prestación en la culpa, no cual no ocurre en nuestro Derecho en la actualidad.

Derogada la Ley de 1.932⁵⁴ en la época franquista, el divorcio no se contemplaba ni se regulaba, estaba prohibido. Esta situación duró casi cuarenta años, y no se regula el divorcio en España hasta que en 1.981, el día 7 de julio de 1.981 se reformó el Código Civil, redactándose en el artículo 85⁵⁵ en el que se afirma que el matrimonio se disuelve por el fallecimiento de uno de los cónyuges o por el divorcio.

Esta regulación de la institución surge como desarrollo al precepto constitucional, previsto en el artículo 32 de la Constitución Española de

del que haya de prestarlos se transmite a sus herederos, dejando a salvo las legítimas cuando sean herederos forzosos”.

⁵² Art. 32 de la Ley de 1.932: “Los alimentos se reducirán o se aumentarán proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la situación económica del cónyuge obligado a satisfacerlos”. “El alimentista puede exigir la constitución de hipoteca especial sobre los bienes inmuebles del obligado a dar alimentos, suficiente para garantizar el cumplimiento de la obligación. Si el obligado careciese de bienes propios en que constituir la hipoteca o fuesen insuficientes, el Juez determinará, según las circunstancias, las garantías que haya de prestar”.

⁵³ El artículo 32 de la Ley de 1.932 establecía un sistema de alimentos cuya finalidad no es corregir un desequilibrio sino la obligación contenida en el artículo 142 del Código Civil, el deber de prestar alimentos.

⁵⁴ La Ley del Divorcio con entrada en vigor el día 2 de marzo de 1.932 fue derogada por la Ley de 23 de septiembre de 1.939, publicada en el B.O.E. de fecha 5 de octubre de 1.939, que deroga dicha ley y declara nulas todas las sentencias de divorcio a instancia de una de las partes.

⁵⁵ Art. 85 CC: “El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio”.

1.978⁵⁶, previamente, en su elaboración, se presentaron tres Propositiones del Ley, por los Grupos con representación parlamentaria, Grupo Comunista, Grupo Socialista y Grupo Mixto, siendo, sin embargo, el Proyecto del Gobierno, en el que, tras diversas propuestas de modificación que fueron rechazadas, salió aprobado.

Las enmiendas trataron sobre la transmisión *mortis causa* de la pensión compensatoria y las causas de extinción de la misma: tales como el nuevo matrimonio del acreedor de la pensión, su convivencia marital con otra persona, llevar una vida notoriamente deshonesto, o el acceso del deudor a un puesto de trabajo que le permitiese mantenerse económicamente. Se convirtió en Ley, rechazándose las enmiendas en el Senado, y denominándose la Ley, Proyecto Fernández Ordóñez⁵⁷, por ser el Ministro de Justicia de la época.

Pero durante este periodo, se ha de mencionar el Decreto de 26 de octubre de 1.956⁵⁸, por el que se modifican determinados artículos de la Ley y Reglamento del Registro Civil de 1.870 de acuerdo con el Concordato.

El Concordato de 27 de agosto de 1953⁵⁹ firmado en Roma por Doménico Tardini y Alberto Martín Artajo con Fernando María Castiella⁶⁰, en su artículo 23 indicaba que el Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico, bastando para el reconocimiento por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico, que el acta de éste sea inscrita en el Registro Civil correspondiente.

⁵⁶ La Constitución Española de 1.978, entró en vigor el mismo día de su publicación el día 29 de diciembre de 1.978.

⁵⁷ Francisco Fernández Ordóñez, fue Ministro de Justicia desde el día 9 de septiembre de 1.980 hasta el día 1 de septiembre de 1.981 siendo Presidente de Gobierno Adolfo Suárez, y Ministro de Asuntos Exteriores de España desde el día 6 julio de 1.985 hasta el día 2 de junio de 1.992 siendo Presidente de Gobierno Felipe González.

⁵⁸ Decreto de 26 de octubre de 1.956, ⁵⁸ por el que se modifican los artículos 37, 38, 40, 41 y 100 de la Ley y Reglamento del Registro Civil de 1.870.

⁵⁹ El Concordato entre el Estado español y la Santa Sede fue firmado en la Ciudad del Vaticano.

⁶⁰ D. Fernando María Castiella y Maís fue embajador de España ante la Santa Sede, habiendo sido solicitado por Franco al cumplirse 100 años del anterior Concordato.

El Protocolo final dispuso que en materia de matrimonio mixto entre personas católicas y no católicas, por el que “el Estado pondrá en armonía su propia legislación con el Derecho Canónico”.

Este mandato llevó al Gobierno español a dictar el Decreto de acomodación de 26 de octubre de 1.956, cuyo artículo 1º modificó el artículo 37 del Reglamento del Registro Civil de 13 de diciembre de 1.870⁶¹ en los términos siguientes, es decir, que el matrimonio civil será autorizado en el sólo caso de que ambos contrayentes prueben que no profesan la religión católica.

Quedaron también reformados los artículos 38, 41 y 100 del mismo Reglamento, con el deseo de armonizar estas normas con el Código Civil.

El Concordato reconocía los plenos efectos civiles del vínculo canónico, aunque no tocaba de manera expresa el sistema matrimonial establecido en el Código Civil ni su interpretación oficial de la Orden de 1.941, partiendo de la idea de conformidad entre las legislaciones canónica y civil en orden a los sujetos obligados a la forma canónica matrimonial.

De ahí que, a raíz de la promulgación de dicho Concordato, comenzara un movimiento doctrinal dirigido a la reforma del Código Civil a fin de adecuar sus disposiciones a las del Derecho Canónico.

La regulación contenida en el artículo 23 del Protocolo suponía la absoluta recepción del Derecho Canónico por el Concordato, siendo importante la novedad contenida en el artículo 41 del Reglamento reformado del Registro Civil, que indicaba que tratándose de bautizados en la Iglesia católica, no se permite el matrimonio civil sin previo control de la prueba presentada por la Autoridad eclesiástica, que será informada previamente por el Juez, en comunicación circunstanciada, no pudiéndose celebrar el matrimonio civil antes de que haya transcurrido por completo un mes, a partir de la fecha en la cual haya sido informada la Autoridad Diocesana.

⁶¹ Art. 37 del Reglamento del Registro Civil: de 13 de diciembre de 1.870: "De conformidad con el artículo 42 del Código Civil, el matrimonio civil será autorizado en el sólo caso de que ambos contrayentes prueben que no profesan la religión católica".

En la Ley de 8 de junio de 1.957⁶² se insistía en que había de acreditarse la no profesión de la Religión Católica para autorizar el matrimonio civil, y el Reglamento de 14 de noviembre sobre Registro Civil de 1.958⁶³, que fue promulgado al poco tiempo, continuaba en su artículo 244 con la exigencia de la presentación de tal prueba con la solicitud.

La Ley de 24 de abril de 1.958⁶⁴ hablará ya de “el adulterio de cualquiera de los dos cónyuges”, sin más requisitos.

2.3.- Ley del Divorcio de 1.981: Ley 30/1.981, de 7 de julio

La Ley del Divorcio de 1.981, Ley 30/1.981, de 7 de julio, publicada en el BOE de 20 de julio de 1.981, reguló, por segunda vez en España la institución del divorcio, pero previamente a su regulación, y como antecedentes de la misma, el Decreto de 9 de febrero de 1.975 supuso un paso atrás al acogerse el principio de compatibilizar las potestades legislativas eclesiásticas y estatales, y se restableció la eficacia civil del matrimonio canónico y con efectos retroactivos para los matrimonios celebrados en el arco de tiempo que iba desde 1.970 a 1.975.

Se mantuvo el principio de eficacia civil del matrimonio no canónico y este sistema «mixto» fue recogido en la Base 3ª de la Ley de Bases del Código Civil de 11 de mayo de 1.888⁶⁵ y de ahí pasó, en tales condiciones, a su articulado. El Estado español detentaba facultades legislativas compartidas con las Comunidades Autónomas en algunos aspectos.

Con anterioridad a la aprobación de la Constitución Española en 1.978, el anteproyecto de dicha Constitución decía en su artículo 27, apartado 2: “El Derecho civil regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución, y sus efectos”.

⁶² La Ley de 8 de junio de 1.957, del Registro Civil estará en vigor hasta el día 15 de julio de 2.015.

⁶³ Decreto de 14 de noviembre de 1.958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil y desarrolla la Ley de 8 de junio de 1.957.

⁶⁴ La Ley de 24 de abril de 1.958 sustituyó el concepto “casa del marido” con el que se definía entonces la vivienda común del matrimonio, para transformarlo en el “hogar conyugal”.

⁶⁵ La Ley de Bases del Código Civil de 11 de mayo de 1.888 mantuvo el criterio de compatibilizar las potestades legislativas eclesiásticas y estatales, y la eficacia civil del matrimonio canónico y para los matrimonios celebrados con anterioridad.

En el mismo Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso se publicaron dos votos particulares:

El del Grupo Parlamentario Comunista dice que el matrimonio: “Podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa”.

El del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que afirma que: “El matrimonio puede disolverse por mutuo disenso y a petición de cualquiera de los cónyuges, si concurre justa causa en la forma que se establezca por Ley de divorcio”.

En ambos casos se trata de garantizar, mediante su inclusión en el texto constitucional, que la futura Ley admitirá el divorcio por mutuo consentimiento.

Antes de la aprobación de la ley del divorcio, existieron diversas proposiciones de ley. Así en el año 1.979 se presentan a las Cortes Generales tres proposiciones de Ley relativas al divorcio:

1.- Propuesta comunista: considera al divorcio como un elemento de consolidación de la democracia. Son causas de divorcio:

- La cesación, voluntaria o involuntaria, por cualquier causa de la vida conyugal, durante los dos años inmediatamente anteriores a la demanda de divorcio.
- El incumplimiento grave de los deberes propios del matrimonio.
- La enfermedad de cualquiera de los cónyuges que afecte gravemente a la vida en común. No podrá decretarse el divorcio en virtud de esta causa, si no queda asegurada la asistencia al cónyuge enfermo.
- La infidelidad y los malos tratos, injurias y ofensas graves a la integridad, dignidad y libertad, imputable a uno de los cónyuges, en relación al otro o a los hijos.
- La imposibilidad de la normal convivencia entre los cónyuges por incompatibilidad de caracteres.

2.- Propuesta socialista: el artículo 2 establece el divorcio por mutuo consentimiento y el artículo 4 determina que “con independencia de que concurran algunas de las causas recogidas en el artículo anterior, el

divorcio podrá ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, cuando exista ruptura de la vida conyugal o deterioro de la paz doméstica”.

Por lo tanto, el cónyuge culpable puede divorciarse siempre, bien por la vía del artículo 2, por mutuo consentimiento, bien por la vía del artículo 4, a solicitud de uno de los cónyuges, siempre que exista ruptura conyugal, o, bien por la vía de la causa primera del artículo 3, que establece como causas de divorcio:

- El transcurso de un año desde la firmeza de la sentencia o desde la separación de hecho y en distinto domicilio libremente consentida.

- La falta de consumación del matrimonio a partir del año de su celebración.

- La esterilidad de uno de los cónyuges antecedente al matrimonio e ignorada por el otro, así como la esterilidad sobrevenida con posterioridad al matrimonio cuando no exista descendencia común. En ambos casos, la acción no podrá ser ejercitada hasta que hayan transcurridos tres años desde la celebración del matrimonio.

- La conducta o situación personal de uno de los cónyuges que produzca perturbación en las relaciones matrimoniales que haga insoportable o muy difícil para el otro cónyuge o para los hijos la continuación de la vida en común.

- El quebrantamiento de la fidelidad conyugal no consentido ni perdonado. En todo caso, la acción solo podrá ejercitarse dentro de los seis meses a partir del momento en que se tuvo conocimiento de ello y nunca después de transcurridos tres años.

- La conducta o situación personal de uno de los cónyuges que produzca tal.

- El alcoholismo y la toxicomanía.

- Los malos tratamientos de obra y las injurias graves reiteradas, así como las acciones que puedan poner en peligro la vida del otro cónyuge, de los hijos comunes o de cualquiera de los cónyuges.

- La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitar cualquiera de los cónyuges.

- El desamparo de la familia.

- El abandono durante un año del cónyuge o de los hijos comunes o de los de cualquiera de los cónyuges.

- La desaparición sin noticias de uno de los cónyuges durante un año.

- La negativa permanente a la procreación o al acto conyugal.

- La introducción o la prostitución del cónyuge, de los hijos comunes o de los de cualquiera de los cónyuges.

3.- Propuesta feminista⁶⁶: el artículo 2 señala que “El divorcio se concederá a petición de cualquiera de las partes y en caso de existir mutuo acuerdo entre los cónyuges éste será siempre vinculante para la decisión judicial”. El artículo 3 afirma que: “Se decretará el divorcio siempre que los cónyuges se hallen separados o divorciados por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal civil o eclesiástico, español o extranjero”.

El Proyecto de 13 de marzo de 1.980⁶⁷ configura el divorcio en torno a la previa separación, judicial o de hecho del matrimonio. Con arreglo del artículo 81 de este proyecto, “Podrá decretarse judicialmente la separación:

- A petición de uno de los cónyuges, cuando el otro este incurso en causa legal de separación.

- A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro cuando, transcurrido el primer año del matrimonio, exista quiebra profunda y difícilmente superable de la convivencia conyugal.

Por su parte, el artículo 82 CC establece como causas de separación las siguientes:

- El abandono injustificado del hogar, las relaciones sexuales extra conyugales, la conducta injuriosa o cualquier otra violación grave de los deberes conyugales. No podrá invocarse como causa las relaciones sexuales extra conyugales si existe previa separación de hecho libremente consentida por ambos o impuesta por el demandante.

- Cualquier violación grave de los deberes respecto de los hijos comunes.

- La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a seis años.

- El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés de la familia exija la suspensión de la convivencia y no pueda esperarse razonablemente su restablecimiento.

⁶⁶ La propuesta feminista propugna el derecho al divorcio como libre decisión de las partes.

⁶⁷ El Proyecto de 13 de marzo de 1.980, llamado el Proyecto de Cervera, ya que tras las elecciones de 1.979, Adolfo Suárez nombro al demócrata cristiano Iñigo Cervera, Ministro de Justicia, estipulaba la disolubilidad del vínculo por motivos graves.

Finalmente el artículo 86 CC establece como causas de divorcio las siguientes:

- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, dos años ininterrumpidos desde la admisión de la demanda de separación fundada en haber incurrido un cónyuge en causa legal, siempre que el divorcio sea pedido por el otro, una vez firme la resolución estimatoria de la demanda.

- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, dos años ininterrumpidos desde la admisión de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos y consentida por el otro, siempre que el divorcio sea pedido por ambos, una vez firme la resolución judicial.

- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos, cuatro años ininterrumpidos;

- Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde la firmeza de la separación judicial, a petición de cualquiera de ellos.

- Cuando quien pide el divorcio acredita que al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en causa legal de separación.

La Ley 30/1.981, de 7 de julio⁶⁸, fruto del mandato constitucional contenido en el artículo 32 de nuestra Constitución, por el que se instaba al legislador a regular los derechos y deberes de los cónyuges en situación de plena igualdad jurídica; introdujo una modificación de amplio calado en el régimen matrimonial español heredado de la época franquista⁶⁹. Se reconocieron y regularon normativamente los efectos de la separación y el divorcio, estableciéndose una serie de previsiones comunes a ambas, entre las cuales se encontraba una figura ya ampliamente extendida en el Derecho Comparado: la pensión compensatoria⁷⁰.

Contenida en el artículo 97 CC⁷¹, la pensión compensatoria se trata de una cuantía que uno de los cónyuges ha de satisfacer a favor del otro,

⁶⁸ La Ley 30/1.981, de 7 de julio, publicada en el B.O.E. de fecha 20 de julio de 1.981 por la que se modifica el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.

⁶⁹ CUENCA ALCAINE, Begoña, "Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de Separación de Bienes, ¿procede o no procede?", *Noticias Jurídicas*, 1 de mayo de 2.010.

⁷⁰ La pensión compensatoria estaba regulada en muchos países de nuestro entorno, Francia, que sirvió de referente y antecedente de nuestra pensión compensatoria.

⁷¹ Concepto y evolución de la pensión compensatoria regulada en el Código Civil.

normalmente bajo la forma de una renta periódica, que tiene su origen en el desequilibrio que este último ha sufrido en relación con el que conserva el primero, como consecuencia directa de la separación o divorcio que ha implicado el cese de su vida en común. Tiene, pues, por objeto el resarcimiento de uno de los cónyuges por el correlativo deterioro en su situación económica como consecuencia de la ruptura matrimonial, ya se haya disuelto –divorcio- o no –separación- su vínculo.

Tradicionalmente los roles de los cónyuges dentro del matrimonio formado por un hombre y una mujer, estaban claramente diferenciados: así mientras el hombre trabajaba fuera del hogar y era quien mantenía económicamente a la familia, la mujer se encargaba del hogar y de los hijos habidos en el matrimonio, sin percibir por ello retribución alguna, ya que se consideraba que en términos legales de la época, se dedicaba “a las labores propias de su sexo”⁷².

La Ley del divorcio en España⁷³ es relativamente reciente, en términos históricos, data del año 1.981, diferencia entre los procedimientos de separación legal y divorcio, procedimientos causales, estableciendo sus causas en los artículos 81 y 86 CC vigente en la época.

Como consecuencia de ello, si un matrimonio se separaba, el cónyuge perjudicado y al que se le producía desequilibrio económico, habitualmente era la mujer, quien además solía ser el cónyuge custodio, es decir, aquél a quien generalmente se le atribuía la custodia de los hijos menores habidos en el matrimonio, y la atribución del uso de la que fuera vivienda conyugal, gozando el cónyuge alimentador del derecho de visitas de sus hijos, así como de la patria potestad compartida, debiendo abonar pensión de alimentos a los hijos menores habidos en el matrimonio, y la pensión compensatoria en muchos casos.

La realidad social ha de conllevar, consecuentemente, una evolución en la legislación y en la jurisprudencia, y así, todavía hoy, la custodia de los hijos menores habidos en el matrimonio se sigue atribuyendo mayoritariamente a la madre, si bien es cierto que surgida la figura de la

⁷² Expresión utilizada de forma frecuente y legalmente, referida a su ocupación en el Registro Civil.

⁷³ La Ley 30/1.981, de 7 de julio, publicada en el B.O.E. de fecha 20 de julio de 1.981.

custodia compartida, se tiende con frecuencia a la misma, fundamentalmente por acuerdo entre los progenitores.

Y ello es así por convenio regulador, cuando el procedimiento de separación o divorcio se hace de mutuo acuerdo; en cambio, cuando el procedimiento de separación o divorcio se realiza de forma contenciosa, se dirimirá en la sentencia que recaiga, y ello tiene su base en una consideración social genérica que atribuía a la mujer una casi exclusiva dedicación a los hijos; “la mujer tiene una tendencia natural y biológica al cuidado de los hijos”⁷⁴, si bien, en la actualidad, hay más casos de atribución de la custodia de los menores a los padres que antes.

A diferencia de lo que ocurre con la atribución de la custodia de los menores, actualmente la mujer se incorpora al mercado de trabajo casi con igualdad al hombre, por lo que salvo en lo que respecta a las pensiones de alimentos a favor de los hijos, no suele imponerse de forma tan habitual pensión compensatoria, al no observarse desequilibrio económico real, que a veces si existe, se compensa a través de la pensión de alimentos, aunque no de forma expresa.

Ello ocurre, también, porque, en muchos casos, el hombre, que ha de seguir pagando la mitad de la hipoteca de la vivienda que constituyera el hogar conyugal y ha de abonar la pensión de alimentos, es quien sufre un desequilibrio económico perjudicial y no la mujer.

Durante los años transcurridos ha habido una evolución en la duración de la pensión compensatoria, que se ha limitado en el tiempo; así la pensión compensatoria que era mayoritariamente vitalicia, ha pasado por vía de la jurisprudencia casuística a ser de carácter temporal, y posteriormente por reconocimiento legal, a través de las reformas, en la que el periodo de tiempo de duración de la pensión compensatoria suele oscilar entre dos años y cinco años.

Conforme a los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial para 2.024 en su pagina web de información a los ciudadanos, las parejas que deciden poner fin a su matrimonio va en aumento, siendo la media nacional de 2,9 por cada mil habitantes, siendo mayor el numero de

⁷⁴ EIXIMENIS, Francesc, Ediciones La Caixa, Barcelona 1.983, “Lo libre de les dones”. Página 86. Expresión recogida incluso en resoluciones judiciales y extraídas del texto.

disoluciones matrimoniales consensuadas que no consensuadas, tratándose de un porcentaje relativamente alto, teniendo en cuenta que la introducción del divorcio en nuestro país es relativamente tardía respecto a la introducción del divorcio en países de nuestro entorno, debido fundamentalmente a las condiciones políticas y sociales existentes.

La pensión compensatoria mediante la regulación del divorcio y separación matrimonial, surgió en España en el marco de una sociedad de fuerte base tradicional, en la que consecuentemente, la mujer tenía un rol de permanencia en casa al cuidado de los hijos y de escasa incorporación al mercado laboral.

En este contexto la ruptura del matrimonio podía causar un perjuicio intolerable en esa persona que renunció a la posibilidad de desarrollar una vida profesional, dedicándose a una labor igualmente esencial como era el cuidado de la familia. De ahí que se considerara como imprescindible el establecimiento de un mecanismo que permitiera reequilibrar las posiciones de ambos cónyuges, de tal forma que esa esposa no quedara en situación de desamparo y se instituyera la figura de esta pensión, que el ex cónyuge varón debería satisfacer con carácter periódico con el fin de garantizar una renta existencial a su ex pareja.

En la actualidad y pese a apoyarse en los mismos fundamentos que dieron lugar a su institución, la pensión compensatoria podría llegar a ser concedida en un número muy diverso de supuestos. Por supuesto, podría ser cónyuge acreedor tanto la esposa como el marido, todo dependería de las circunstancias económicas propias de cada uno de ellos, si bien es cierto que todavía son aquéllas quienes, en mayor medida, se convierten en beneficiarias de la misma, en buena medida por la mayor tasa de desempleo femenino y por la desigualdad salarial, si bien atemperada, que todavía impera en nuestro mercado laboral.

Por otra parte, en nuestros días viene poniéndose un cada vez mayor énfasis en su carácter primordialmente temporal, viniendo ello reforzado por la modificación normativa introducida por la Ley 15/2.005⁷⁵, concibiéndose como una prestación que tendría por objeto ayudar y aportar un sustento eventual a esa ex pareja hasta que pudiera obtener una

⁷⁵ Ley 15/2.005 de 8 de julio publicada en el B.O.E. el sábado día 9 de julio de 2.005, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

procura que le permitiera valerse por sí misma (por ejemplo, llevando a cabo un reciclaje profesional durante el tiempo en que perciba esa pensión). Se trataría de que el cónyuge beneficiario pudiera situarse, potencialmente, ante las mismas oportunidades que hubiera tenido de no haber existido ese vínculo matrimonial.

La pensión compensatoria se encuentra muy íntimamente ligada al concepto jurídico de equidad⁷⁶, siendo prueba de ello el uso para su cálculo de elementos no estrictamente económicos. Por otro lado, existe un cierto consenso doctrinal a la hora de descartar su posible carácter indemnizatorio o alimenticio, afirmándose que ésta tendría más bien una naturaleza resarcitoria o compensatoria; si bien en numerosas sentencias de las Audiencias Provinciales se hace un uso indistinto de todos estos términos.

En todo caso, es prácticamente unánime la doctrina en señalar su finalidad primordialmente reequilibradora⁷⁷. Y es que el cese en la convivencia y en los deberes de asistencia y de socorro mutuos entre los cónyuges podría dar lugar, en alguno de ellos, a un desequilibrio de índole económica respecto de esa situación que se encontraba disfrutando previamente a la ruptura.

El derecho a la pensión compensatoria tiene un fuerte componente fáctico, casuístico y circunstancial, puesto que su concesión en ningún caso se produciría automáticamente tras la separación o el divorcio. Es el análisis detallado de la situación en que quedarían los cónyuges tras la ruptura de su matrimonio, así como de una serie de factores específicos lo que determinará su posible concesión así como la cuantía que, en particular, se estipule.

Por otra parte, una vez establecido este derecho por resolución judicial, éste quedaría condicionado a las circunstancias de las vidas de ambos cónyuges (lo que no hace sino reforzar su fuerte componente de carácter temporal) de forma que si se produjeran cambios en las mismas

⁷⁶ CUENCA ALCAINE, Begoña, "Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de Separación de Bienes, ¿procede o no procede?", *Noticias Jurídicas*, 1 de mayo de 2.010.

⁷⁷ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria", *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011.

que afectaran a la estabilidad económica de alguno de ellos, la pensión compensatoria podría ser objeto de modificación o, incluso, de supresión.

A diferencia de lo que sucede con una pensión alimenticia, la pensión compensatoria tiene carácter indudablemente disponible, siendo, pues, esta figura de derecho dispositivo. Muestra de ello es que su concesión tan solo procede mediando una solicitud expresa por parte de aquél cónyuge que entiende que, por el hecho de haber tenido lugar la ruptura de su matrimonio, va a sufrir un correlativo empeoramiento en su situación económica respecto del estatus del que pudo gozar durante el mismo.

En definitiva, es la propia parte interesada quien puede optar por hacer valer o no su derecho a la pensión compensatoria, siendo posible realizar una renuncia expresa e inequívoca a este derecho en el Convenio Regulador de la separación o el divorcio una vez que éste es homologado judicialmente⁷⁸.

2.4.- Reforma de la Ley del Divorcio: Ley 15/2.005, de 8 de junio

Desde que en el año 1.981 se instauró la pensión compensatoria hay que reconocer que pocos cambios legislativos ha sufrido el artículo 97 CC y, sin embargo, muchos han sido los cambios sociales.

La Ley 15/2.005, de 8 de julio, es la Ley por la que se modifican algunos artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, permaneciendo vigente en la actualidad.

La separación queda establecida en el artículo 81 CC de la siguiente manera:

“Se decretará judicialmente la separación cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1º.- A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

2º.- A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el

⁷⁸ ZARRALUQUI SANCHEZ EZNARRIAGA, Luis. *“La Pensión Compensatoria de la Separación conyugal y el Divorcio”*, Edición Lex Nova, 2ª Edición 2.003.

transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

A la demanda se acompañara propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación”.

El divorcio queda establecido en el artículo 86 CC de la siguiente manera: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, la petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno solo con el consentimiento del otro, cuando concurren los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81 CC...”.

La principal novedad es que la legislación actual suprime las causas de divorcio de cualquier tipo. Actualmente, el Código Civil no exige ninguna causa para solicitar el divorcio, lo cual es una ventaja general para todas las parejas casadas, tanto heterosexuales como homosexuales.

Respecto a la pensión compensatoria, regulada también en el artículo 97 CC, la única modificación importante introducida por la reforma del año 2.005 es que cambió la expresión "tiene derecho a una pensión" por "tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia".

Además, enfatiza su citado carácter temporal, ahora ya recogido expresamente en la nueva redacción del mencionado artículo 97 CC, haciéndose hincapié en que su concesión únicamente procedería durante el tiempo que se estimara oportuno para que ese cónyuge pudiera, por sí mismo, acceder a nuevas oportunidades (fundamentalmente de carácter laboral) que le permitieran restablecerse de ese desequilibrio en que inicialmente incurrió tras romperse la pareja. Así pues, se entiende hoy por hoy que su concesión con carácter vitalicio (indefinido) sería la excepción a la regla general, pudiendo ésta incluso tener lugar a través de un pago único.

No obstante, hay que tener presente que el Tribunal Supremo ha resuelto numerosos recursos de casación que han permitido delimitar el

régimen jurídico de esta compensación como más adelante tendremos ocasión de comprobar.

La pensión compensatoria diseñada por el legislador de 1.981 obedecía a un patrón perfectamente definido: mujer de mediana edad, dedicada toda su vida a la atención al esposo y a los hijos y que, repentinamente veía como, después de bastantes años de matrimonio, se decreta la separación o el divorcio y no tenía ninguna perspectiva de trabajo por su edad y su falta de cualificación, a lo que se añadía el obstáculo de tener que seguir atendiendo a los hijos hasta que se produjera su emancipación económica.

Las relaciones de pareja han tenido en nuestro país, al igual que en la mayoría de países de nuestro entorno una revolución espectacular. En España, de los matrimonios para toda la vida hemos pasado a un gran porcentaje de rupturas de pareja.

Según el INE, (Instituto Nacional de Estadística), en la actualidad la duración media de un matrimonio cuando los cónyuges se enfrentan al divorcio no llega a los quince años y es una tendencia que va a la baja. La edad media de la mujer que se divorcia es de 41 años y de 44 la de los hombres.

Por otro lado hay que tener en cuenta el imparable descenso de la natalidad en los matrimonios, lo que provoca divorcios sin hijos o con uno solo hijo. También confluye en el panorama actual el aumento de las familias reconstruidas.

Cada vez se accede más tarde al matrimonio. Sea por motivos económicos o porque los jóvenes se lo piensan más, la realidad es que queda muy lejana aquella época en la que los jóvenes contraían matrimonio antes de los veinticinco años, como media de edad, considerándose tardíos a los que se casaban con posterioridad a dicha edad, siendo incluso más jóvenes las mujeres que contraían matrimonio.

Ello tiene la consecuencia de que cuando se contrae el matrimonio los cónyuges ya han sentado las bases para su futuro laboral. Por otro lado hay otra predisposición en la mujer muy distinta a la dedicación exclusiva a la casa e hijos, al igual que el hombre se incorpora decididamente a las tareas domésticas y educacionales de los hijos.

La presente y nueva regulación de la separación y divorcio instaurada por la Ley 15/2.005, de 8 de julio es claramente distinta; actualmente basta la voluntad de uno sólo de los cónyuges para que, después de tres meses de haberse celebrado el matrimonio, quede disuelto.

Si bien cabe en el Derecho civil de obligaciones y contratos la posibilidad de poner fin a una relación obligacional por la sola voluntad de una de las partes, no existe ningún contrato en el que efectuándose así, ello no tenga ningún tipo de perjuicio económico para el contratante disidente⁷⁹.

Así, cabe preguntarse si la pensión compensatoria puede pactarse con anterioridad a la celebración del matrimonio, o dicho de otra forma, previamente a contraerse el matrimonio. En la legislación nacional no existe ningún precepto que regule la cuestión, sin embargo, en los ordenamientos autonómicos si se han establecido normas al respecto⁸⁰.

Por ejemplo, en el artículo 231 CC Catalán, se indica que estos pactos llamados “en previsión de una ruptura matrimonial”⁸¹, pueden otorgarse en capitulaciones matrimoniales, pre-matrimoniales, o mediante escritura pública, y se establece un régimen jurídico para los mismos (deber de información del Notario, pactos recíprocos, deber de información entre cónyuges, y previsión en torno al cambio de circunstancias posteriores a su otorgamiento).

El artículo 25 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano⁸² también abre la puerta a su existencia, aunque no contiene una normativa tan precisa como la catalana.

En muchas de las leyes reguladoras de las parejas de hecho también se hace referencia a la posibilidad de incluir pactos para el momento en el que cese la relación de pareja.

⁷⁹ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “Enfoque actual de la Pensión Compensatoria”, *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011.

⁸⁰ Código Civil de Cataluña, Código de Familia, artículo 231, apartado 20.

⁸¹ Formas de pactar las consecuencias de una posible ruptura matrimonial en el Código Civil de Cataluña, Código de Familia.

⁸² Ley 10 /2.007 de 20 de marzo, de la Generalitat, Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.

2.5.- Regulación actual

La regulación actual de la pensión compensatoria se recoge en la Ley del Divorcio, Ley 15/2.005 de 8 de junio, que reforma la Ley de 7 de julio de 1.981.

Desde que la pensión compensatoria se introdujo en nuestro Derecho se ha venido reconociendo en la gran mayoría de los supuestos de separación o divorcio a favor de aquél de los cónyuges que quedara en peor situación económica, lo cual, sin necesidad de un proceso valorativo de mayor alcance, propiciaba que el natural beneficiario de la institución fuera la mujer.

Pero desde aquel momento la estructura social en España ha cambiado, al ser cada vez más frecuente que ambos cónyuges desempeñen un trabajo retribuido, y este dato nos lleva a replantear el modo en que ha de interpretarse la pensión compensatoria.

Ésta se ha venido reconociendo con carácter general a la esposa que se había dedicado al cuidado de la familia y del hogar mientras que su marido desarrollaba una actividad profesional remunerada⁸³.

La situación de desamparo en que quedaba en estos casos la mujer dotaba a la pensión compensatoria de un tinte asistencial⁸⁴ o incluso lo convirtió en un derecho a mantener el nivel de vida que había venido disfrutando durante la convivencia conyugal⁸⁵.

En definitiva, la inicial generalidad de modelo descrito propició una cierta inercia en el reconocimiento de la pensión compensatoria sólo a favor de la esposa incluso en supuestos que nada tienen ya que ver con la

⁸³ MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celian: “Una nueva lectura de la Pensión Compensatoria desde una perspectiva del Enriquecimiento Injusto”, “...compensar el tiempo dedicado a la familia y el hogar en relación con la indemnización contemplada en el artículo 1.438 del Código Civil”.

⁸⁴ ZARRALUQUI SANCHEZ-EZNARRIAGA, Luís. “*Naturaleza jurídica de la Pensión Compensatoria, discusión doctrinal sobre su carácter asistencial, artículos 67 y 69 del Código Civil, deber de ayuda y socorro de los esposos*”.

⁸⁵ Función reequilibradora en el sentido de un derecho a mantener el nivel de vida que había venido disfrutando durante la convivencia conyugal.

finalidad apuntada⁸⁶, que ha llegado a adquirir un carácter claramente discriminatorio en su aplicación práctica que parece ser momento ya de modificar, reconduciendo la institución a cauces que la devuelvan a su auténtica razón de ser.

De esta manera, frente a la anterior situación⁸⁷, podemos advertir que muchos de los matrimonios de la actualidad no responden ya al esquema planteado. La actividad profesional desarrollada por ambos cónyuges les permite contar con cierta autonomía económica tras la separación o el divorcio, superándose la dependencia que antes se predicaba de forma habitual respecto de la mujer.

Pese a ello, se sigue reconociendo aun en estos casos a uno de los cónyuges el derecho a una pensión compensatoria. Si tenemos en cuenta que las normas han de ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas conforme al artículo 3.1º CC⁸⁸, quizá sea conveniente replantear el sentido del desequilibrio económico que constituye el presupuesto para que conforme al artículo 97 CC proceda el pago de la pensión.

A tal efecto creemos conveniente incidir en el fundamento de la pensión compensatoria, pero también en las circunstancias a tener en cuenta para advertir la producción del desequilibrio, y que quizá no debieran reducirse a las enumeradas legalmente.

Por lo que se refiere al fundamento o finalidad de la pensión compensatoria, parece discutible que haya de ser el mantenimiento del nivel de vida que se tenía durante la convivencia o la protección frente a la peor situación económica en que queda uno de los cónyuges con la ruptura, con base en una solidaridad post conyugal o en la idea de equidad.

⁸⁶ En el momento de su inicial regulación se produjo un reconocimiento de la pensión compensatoria a favor de la esposa de forma generalizada, conforme a la jurisprudencia mayoritaria de las Audiencias Provinciales.

⁸⁷ Esquema tradicional de la familia, donde el padre desarrollaba una actividad profesional retribuida y la madre se quedaba al cuidado de la familia.

⁸⁸ Art. 3-1º CC: "Las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Quizá debiera situarse ahora en el enriquecimiento injusto de uno de los esposos con relación al otro, que se encontraría en peor situación precisamente por esa dedicación a la familia o contribución en las actividades mercantiles, profesionales o industriales del otro cónyuge, concediéndose dicha pensión de forma muy restrictiva y solo en los casos en que realmente proceda.

2.5.1.- Legislación estatal

Ante la ausencia de ulteriores reformas la regulación actual en España en el marco legal nacional sigue siendo la regulada en el artículo 97 CC de la Ley del Divorcio, Ley 15/2.005 de 8 de junio que se basa en el desequilibrio económico.

Conforme a dicho precepto el pago de una pensión compensatoria exige realizar previamente una doble comparación: por un lado, la situación en que queda cada uno de ellos tras el cese de la vida en común, y por otra parte, la diferencia entre esta nueva situación y la que existía durante la convivencia matrimonial.

Si a partir de ello se constata en la situación de uno de los cónyuges un desequilibrio económico frente a la posición del otro esposo, tendrá derecho a percibir de éste una pensión compensatoria.

El problema radica en precisar el significado que se debe atribuir a este desequilibrio económico⁸⁹, cuestión que consideramos condicionada por el fundamento que atribuyamos a la pensión. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se viene entendiendo de manera generalizada que la pensión compensatoria tiene un carácter indemnizatorio o reparador por la situación en que se deja a uno de los cónyuges tras la separación o el divorcio.

Se estima procedente el otorgamiento de la pensión compensatoria cuando por alguna de las circunstancias del artículo 97 CC uno de los esposos queda en una posición inferior a la del otro desde un punto de vista económico, lo que en realidad no es, sino atribuir a la pensión, la

⁸⁹ CAMPUZANO TOME, Herminia. “*La Pensión Compensatoria por Desequilibrio Económico en los casos de Separación y Divorcio, Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento*”. Editorial Librería Bosch, 1.986. Página 21.

función de asegurar al cónyuge separado o divorciado el mismo nivel de vida que disfrutaba durante la convivencia conyugal.

Asimismo, se reconoce en otras ocasiones el derecho a la pensión cuando tras la separación o el divorcio, uno de los cónyuges no se encuentre en condiciones de desenvolverse en el futuro procurándose su propio medio de vida, básicamente por haberse dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos⁹⁰.

Entonces, el fundamento de la pensión compensatoria sería paliar las necesidades de quien tras la separación o el divorcio queda en una situación económica de cierta precariedad, lo que equivaldría a otorgarla un carácter alimenticio o asistencial.

Sin embargo, no nos parece que su existencia haya de encontrarse vinculada directamente con ninguna de estas dos finalidades, sino que más bien el fundamento de la pensión compensatoria tiene un carácter de restaurar el desequilibrio surgido por razón de la ruptura matrimonial⁹¹ y no el mantenimiento del nivel de vida habido en el matrimonio⁹².

Respecto a los pactos prematrimoniales hechos fijando una pensión compensatoria por el cese de la convivencia⁹³, en la legislación nacional no se regula de forma expresa y sí en algunas autonomías con derecho civil propio. Las controversias respecto a los pactos prematrimoniales en relación con la pensión compensatoria se centran en la validez o no de la renuncia⁹⁴, que se contengan en aquellos, también nos hemos encontrado

⁹⁰ Art. 152 CC: “Cesará también la obligación de dar alimentos: 2º Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia”.

⁹¹ CAMPUZANO TOME, Herminia. *“La Pensión Compensatoria por Desequilibrio Económico en los casos de Separación y Divorcio, Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento”*. “Empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio”. Editorial Librería Bosch, 1.986. Página 92.

⁹² Es la postura que sostiene Celia Martínez Escribano en su Art. “Una nueva lectura de la Pensión Compensatoria desde la perspectiva del Enriquecimiento Injusto”.

⁹³ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “Enfoque actual de la Pensión Compensatoria”, *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 2.

⁹⁴ DIEZ MASEDA, Sandara. “Breves apuntes sobre la Renuncia al Derecho a la Pensión Compensatoria”, *Revista de Derecho Uned*, numero 2, 2.007. Página 245.

en la práctica con pactos que fijan las bases para una futura compensatoria y que analizaremos posteriormente.

El pacto prematrimonial renunciando a la pensión compensatoria es posible, al no tratarse de una norma de derecho imperativo, sino de derecho dispositivo, que puede ser renunciada por las partes no haciéndola valer y que no afecta a las cargas del matrimonio, respecto de las cuales sí se refiere la función tuitiva, todo ello con la facultad de pedir alimentos, si se cumplen los requisitos legales como derecho concurrente.

No existe un criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia en relación a la validez y eficacia de la renuncia a la pensión compensatoria efectuada en un pacto prematrimonial o incluido dentro de las capitulaciones matrimoniales otorgadas antes de contraerse el matrimonio. Hay tres posiciones dominantes:

1) Tesis que mantiene la ineficacia de la renuncia previa⁹⁵

El argumento jurídico de los partidarios de esta tesis es que la renuncia a los derechos o beneficios otorgados o concedidos por las leyes, solo cabe respecto de los que tiene por objeto algún concreto elemento de los que se hallen en el patrimonio jurídicos del renunciante.

Así se recoge en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: STS de 18 de noviembre de 1.957: "La renuncia a los derechos o beneficios otorgados o concedidos por las leyes sólo cabe respecto de los que se hallen en el patrimonio jurídico del renunciante por haberlos adquirido ya éste en el momento de la renuncia, la cual como acto de enajenación de hacer ajeno lo propio o de desapoderarse de lo que en su poder tiene, constituye un acto voluntario de disposición que no puede producirse sino sobre aquello de que se puede disponer"

2) Tesis a favor de la validez de la renuncia previa⁹⁶

⁹⁵ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria", *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 3.

⁹⁶ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria", *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 3.

Los partidarios de esta tesis ponen de manifiesto que en nuestro ordenamiento jurídico existen supuestos en los que se permite la renuncia a derechos futuros, así por ejemplo, con carácter general el artículo 1.271 CC⁹⁷ admite como objeto de los contratos las cosas o derechos futuros, el artículo 1.108 CC⁹⁸ admite renunciar anticipadamente a la indemnización de daños y perjuicios por mora; los artículos 1.475 CC⁹⁹ y siguientes posibilitan renunciar a la acción de saneamiento y evicción en la compraventa; la LAU da vía libre a la renuncia anticipada del derecho de tanteo y retracto en el artículo 25-8^o¹⁰⁰ en relación con el artículo 31¹⁰¹.

Por otro lado, también se parte de lo establecido en el artículo 6 CC¹⁰². Si la pensión compensatoria es un derecho dispositivo de las partes, su renuncia no contraría el interés o el orden público. Además hay que tener en cuenta que en el texto del artículo 6-2^o CC en ningún momento se hace referencia a la condición futura del derecho renunciado.

Por lo que respecta al posible vicio del consentimiento cuando un futuro contrayente renuncia a la pensión compensatoria, contrarresta este sector doctrinal y jurisprudencial que el consentimiento que se otorga

⁹⁷ Art. 1.271 CC: “Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y tras disposiciones particional conforme a lo dispuesto en el artículo 1.056. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o la las buenas costumbres”.

⁹⁸ Art. 1.108 CC: “Si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”.

⁹⁹ Art. 1.475 CC: “Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor”.

¹⁰⁰ Art. 25-8^o de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente. En los casos en que se haya pactado dicha renuncia, el arrendador deberá de comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa.

¹⁰¹ Art. 31 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “Derecho de adquisición preferente: Lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley será de aplicación a los arrendamientos que regula este Título”.

¹⁰² Art. 6-2^o CC: “La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán validas cuando no contrarién el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”.

cuando se suscriben unas capitulaciones matrimoniales es informado merced a la intervención notarial evitando posiciones negociadoras desiguales. Obviamente la renuncia a derechos en las capitulaciones matrimoniales debe ser recíproca, ya que atentaría contra el principio de igualdad que aquella fuese unilateral, o que no afectase de igual modo a ambas partes.

Cuando los cónyuges pactan el régimen de separación de bienes, y no el de gananciales, están renunciando a participar en los ingresos económicos que obtiene el otro cónyuge, y nadie cuestiona la validez de ello.

3) Tesis intermedia¹⁰³

Los partidarios de esta tesis admiten la validez de la renuncia previa a la pensión compensatoria si bien entienden que a pesar de ello no debe excluirse un control judicial a posteriori que tendría lugar cuando se produce la crisis de la pareja y que estaría dirigida a evitar resultados gravemente perjudiciales para los derechos de uno de los cónyuges, evitando que tras la convivencia uno de ellos quede en una situación de no poder atender a sus propias necesidades.

Sólo si la renuncia conlleva que uno de los cónyuges no pueda, dentro de los límites, atender a su subsistencia, debe estimarse que el acuerdo es gravemente perjudicial y el juez debe negarse a darle eficacia¹⁰⁴. En el mismo sentido se pronunció Roca Trías, al señalar que si el Juez considera la renuncia gravemente perjudicial para el renunciante podría rescindirla en todo o en parte¹⁰⁵.

Actualmente el criterio mayoritario es dar plena validez a los acuerdos adoptados por los cónyuges sobre la renuncia a la pensión compensatoria en el convenio regulador de la separación y el divorcio, al ser de aplicación la doctrina de los actos propios. Si en esos convenios los

¹⁰³ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “Enfoque actual de la Pensión Compensatoria”, *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 4.

¹⁰⁴ DIAZ MASEDA, Sandara. “*Revista de Derecho UNED*”, numero 2, 2.007. Página 256.

¹⁰⁵ ROCA TRIAS, Encarnación. “*Comentarios al Derecho Civil y Compilaciones Forales*”. Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil dirigidos por Manuel Albadalejo. Editorial Revista de Derecho Privado/ Endersa, 2ª edición, Madrid 1.982. Página 644.

cónyuges renunciaron expresamente a reclamarse pensión compensatoria, la solicitud efectuada en el posterior procedimiento de separación o divorcio será denegada, ya que dichos acuerdos son considerados como un negocio de derecho de familia plenamente válido y exigible respecto a las cuestiones de derecho dispositivo de los cónyuges, y, si además, se ratificó judicialmente su validez es plena.

En todo caso, la renuncia debe constar expresamente, ya que en otro caso, el acuerdo no impedirá que pueda solicitarse posteriormente una pensión compensatoria.

Pero este criterio general de no fijar pensión compensatoria cuando ha existido una renuncia previa tiene excepciones¹⁰⁶, en aquellos supuestos en los que el otro cónyuge no ha cumplido con lo pactado en otra de las cláusulas y aquellos en los que a pesar de la renuncia a la pensión compensatoria se ha accedido a su fijación en el divorcio al apreciarse una conducta fraudulenta en el esposo.

Si no existe renuncia previa a la pensión compensatoria habrá que determinar si en el caso concreto en litigio existe o no desequilibrio económico, ya que es el requisito básico para la fijación de la compensación. Si bien es cierto que el desequilibrio se deduce de comparar la capacidad económica de cada uno de los cónyuges, han de tenerse en cuenta las circunstancias enumeradas en el artículo 97 CC¹⁰⁷.

La STS de 19 de enero de 2.010 (Civil, Sección 1ª, R. 864/2.010), relativa a los presupuestos para la fijación de la pensión compensatoria, ha venido a sentar como doctrina jurisprudencial que: *"Para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatorio debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto*

¹⁰⁶ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria", *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 5.

¹⁰⁷ El art. 97 CC describe: la edad, el estado de salud, la cualificación profesional, las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge, y cualquier otra circunstancia relevante.

el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio".

Por lo tanto, estos serán los presupuestos a tener en cuenta a partir de ahora para determinar la existencia de desequilibrio económico.

Si ambos cónyuges realizan un trabajo y perciben ingresos por la realización de dicho trabajo no existe un criterio unánime en la jurisprudencia en relación con la fijación de la pensión compensatoria, ya que dependerá si a pesar de ello subsiste un desequilibrio económico entre ambos en el momento de la ruptura matrimonial¹⁰⁸.

Un sector de la doctrina sostiene que el reequilibrio que trata de paliar la pensión compensatoria no ha de suponer igualdad entre los patrimonios de ambos cónyuges, ni es dador de cualidades profesionales que no se tienen. Si ambos cónyuges trabajan no puede hablarse de desequilibrio, y cada cónyuge ha de procurarse su autonomía con los ingresos acoplados a sus actitudes y aptitudes para generarlos.

En cambio, otro sector doctrinal entiende que si los ingresos de ambos tienen una notable diferencia, pues por ejemplo, el esposo percibe casi el doble de ingresos que la esposa, aunque la esposa pueda vivir bien con su sueldo, no quiere decir que el divorcio no le haya supuesto un desequilibrio económico apreciable en función del nivel que el matrimonio se podía permitir, por lo que se fija una pensión compensatoria.

Para concluir la cuestión, aunque cada cónyuge tenga su trabajo independiente no es obstáculo para que pueda fijarse una pensión compensatoria si existe desequilibrio económico en el momento de la separación.

Es criterio jurisprudencial que la figura contemplada de la pensión compensatoria del artículo 97 CC no puede concebirse, en cualquier caso y con independencia de las circunstancias concurrentes, como un instrumento jurídico de nivelación económica automática, o al menos de aproximación, de las diferentes capacidades pecuniarias de uno y otro cónyuge, existente durante el matrimonio.

¹⁰⁸ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier. "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria". Boletín de Derecho de Familia. Art. publicado 01/09/2.011. Página 7.

La finalidad fundamental de dicha institución es la de ayudar al cónyuge beneficiario a alcanzar, si ello fuere viable, aquel grado de autonomía económica de que hubiere podido disfrutar, por su propio esfuerzo, de no haber mediado el matrimonio, en cuanto el mismo, y la consiguiente dedicación a la familia, haya supuesto un impedimento, u obstáculo, en su desarrollo laboral o, en general, económico.

Como consecuencia de la crisis económica, nos encontramos con situaciones en las que en el momento de fijarse la pensión compensatoria ninguno de los cónyuges percibe ingresos debido a que el que siempre los obtuvo actualmente se encuentra en paro y cabe preguntarse si en estos supuestos debe o no fijarse pensión compensatoria. En puridad no hay desequilibrio económico y por lo tanto no procedería fijar pensión compensatoria.

Ahora bien, aunque no haya desequilibrio económico sí existe un desequilibrio de oportunidades, y precisamente por ello, algunas sentencias de Audiencias Provinciales han fijado pensión compensatoria en supuestos en los que uno de los esposos coyunturalmente no percibía ingresos.

Lo importante es determinar la existencia de un desequilibrio económico y tener en cuenta las circunstancias que se detallan en los supuestos del artículo 97 CC, y si el matrimonio no ha impedido trabajar al cónyuge que solicita la pensión compensatoria por no haber supuesto el matrimonio ningún obstáculo para desarrollar su actividad laboral no es procedente fijar pensión compensatoria ya que el derecho a la pensión compensatoria no es un derecho de alimentos, sino que está basado en la existencia de desequilibrio vinculado a la ruptura por lo que debe demostrarse este elemento siendo irrelevante la concurrencia de necesidad.

En el artículo 97 CC, los años de convivencia se configuran como un parámetro más para establecer la cuantía de la pensión compensatoria, sin embargo, se ha consolidado un criterio entre los Juzgados y Audiencias Provinciales en cuanto a que una breve convivencia entre los cónyuges no da derecho a la pensión compensatoria¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Cfr. relación de Sentencias de las Audiencias Provinciales.

Pero para que se declare la existencia de un desequilibrio económico en un cónyuge en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, será necesario que la convivencia matrimonial se haya prolongado durante algún tiempo, ya que de no ser así no se habrá consolidado un status matrimonial¹¹⁰.

Si ha habido una escasa duración del matrimonio y además no ha habido descendencia común y la edad de los cónyuges es joven, el criterio mayoritario de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales es no fijar pensión compensatoria en estos casos. A estos efectos será indiferente que un cónyuge pueda obtener más ingresos que el otro, sin que haya un criterio uniforme respecto a la duración suficiente del matrimonio que, en todo caso, habrá de ser superior a cinco años.

Para determinar la cuantía de la pensión compensatoria, a diferencia de lo que sucede con la pensión alimenticia, intervienen numerosos factores. No basta, por tanto, con conocer los ingresos del cónyuge deudor y si el cónyuge beneficiario percibe o no ingresos, sino que hay que tener en cuenta los años de matrimonio, la edad y el estado de salud del cónyuge solicitante, la existencia de descendencia y la edad de los hijos, la formación del cónyuge beneficiario y las posibilidades de acceso a un empleo, etc.).

Para el cálculo de la pensión compensatoria la cantidad que percibe el esposo debe ser minorada en las cargas de carácter permanente y estable que debe soportar, entre las que se pueden incluir las pensiones alimenticias de los hijos, el pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar si hubiere hijos menores, el alquiler de vivienda u otras de carácter semejante que tenga que satisfacer.

Por esas circunstancias será difícil ofrecer unos criterios para fijar la cuantía de la pensión. No obstante, algunas Audiencias Provinciales han establecido algunos topes para dicha pensión, en el sentido de que no

¹¹⁰ Criterios jurisprudenciales de las Audiencias Provinciales fijan un periodo mínimo medio de entre 3 y 5 años de convivencia matrimonial.

pueden superar un determinado porcentaje de los ingresos que percibe el cónyuge deudor de la misma y que van del 30 al 45%¹¹¹.

Por último, la novedad de la última reforma del Código Civil es la regulación legal de la posibilidad de temporalizar la pensión compensatoria, que venía siendo por tiempo indefinido.

Una vez acreditada la existencia de desequilibrio económico, para determinar si procede o no fijar una pensión temporal o por tiempo indefinido la cuestión es compleja. En el artículo 97 CC no se establece ninguna pauta para decidir esta cuestión, si bien el Tribunal Supremo, nos facilita esta tarea en las múltiples sentencias que ha dictado en este sentido:

Lo determinante, según el Tribunal Supremo es si la pensión compensatoria temporal puede cumplir la función reequilibradora que persigue la institución: *"Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión"*.

Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión *ex ante* de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación".

El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, o la concurrencia de los requisitos para su extinción¹¹² para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea

¹¹¹ Consejo General del Poder Judicial. Criterios orientadores para fijar las pensiones, 2.014 y Tabla orientativa que figura en la parte final de este trabajo. Página web del Consejo General del Poder Judicial.

¹¹² Art. 101-1º CC: "El derecho a la pensión se extingue por la extinción de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.

oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección¹¹³.

En la STS de 9 de octubre de 2.008 se indicaba que *"La temporalidad no es imperativa, y su admisión exige que con ello no se resienta la función reequilibradora, condición que obliga al órgano judicial, a la hora de optar por fijar un límite temporal, a atender a las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquéllas que permiten valorar la "idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico" y que "atendiendo a la naturaleza y función de la pensión compensatoria, las circunstancias fácticas concurrentes en el caso de autos no justifican el establecimiento de un plazo de duración determinado, habida cuenta que la beneficiaria no es una persona joven que cuente con gran experiencia laboral ni con una gran cualificación profesional, de manera que la situación fáctica lejos de conducir a una previsión favorable a una fácil reinserción laboral, aplicando la lógica y la razón tales circunstancias son más bien indicadoras de lo contrario: que no va a poder procurarse en poco tiempo un medio de vida que le permita prescindir de la pensión, y que no va a lograr por sí desenvolverse autónomamente y superar el desequilibrio, lo que obliga a mantener la pensión durante toda su vida"*.

Es admisible que el tribunal señale un plazo distinto de duración de la pensión compensatoria solicitado por las partes, y así mismo puede fijarse un plazo por el propio tribunal para revisar la temporalidad de la pensión compensatoria.

2.5.2.- Legislaciones autonómicas

Si como indicábamos, en la legislación nacional no existe ninguna novedad legislativa respecto a la regulación de la pensión compensatoria, excepto por vía jurisprudencial, en las legislaciones autonómicas se han introducido novedades relativas a la introducción de preceptos que regulan la cuestión de la posibilidad de pactar sobre la pensión compensatoria previamente a contraerse el matrimonio, estableciéndose normas al respecto, si bien es la Comunidad Autónoma de Cataluña la que introduce novedades. A continuación procedemos al análisis de algunas peculiaridades en esta materia de la legislación de las Comunidades

¹¹³ PÉREZ MARTÍNEZ, Antonio Javier, "Enfoque actual de la Pensión Compensatoria", *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011, Página 11.

Autónomas de Cataluña, Aragón, Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

2.5.2.1.- Comunidad Autónoma de Cataluña

La pensión compensatoria es conocida en el Derecho Civil Catalán como prestación compensatoria desde el 1 de enero de 2.011, nominación que cambió con la entrada en vigor del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña que derogaba el anterior Código de Familia. La pensión compensatoria se encuentra regulada en el artículo 233-14 CC Catalán con su propia denominación y peculiaridades¹¹⁴.

La prestación compensatoria del Derecho catalán se trata de una indemnización que tiene derecho a solicitar el cónyuge que, como consecuencia de la ruptura del matrimonio, vea como su nivel de vida se ve disminuido. Se debe entender que el nivel de vida que desea tener el solicitante no debe ser superior al que mantenía durante la convivencia matrimonial ni puede ser superior al que tenga el cónyuge que se puede ver obligado a pagarla.

Aunque ambas son figuras afines, no es lo mismo la prestación compensatoria que la compensación económica por razón del trabajo, ya que ésta puede atribuirse a uno de los cónyuges cuando se produce la disolución del régimen económico matrimonial de la separación de bienes, que está regulada en el artículo 232-5 CC Catalán¹¹⁵.

¹¹⁴ Art. 233-14 CC Catalán: "Prestación Compensatoria: 1. El cónyuge cuya situación económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia resulte más perjudicada tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida del que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho a la prestación compensatoria el cónyuge de buena fe, en las mismas circunstancias.

¹¹⁵ Art. 232-5 CC Catalán: "Compensación económica por razón del trabajo: 1.- En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta dedicación siempre y cuando en el momento de la extinción del régimen por separación, divorcio, nulidad o muerte de uno de los cónyuges, o en su caso, del cese efectivo de la convivencia, el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con lo establecido por la presente sección. 2.- Tiene derecho a compensación en los mismos términos establecidos por el apartado 1, el cónyuge que ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente. 3.- Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención

Según el artículo 233-15 CC Catalán¹¹⁶ las condiciones que debe valorar el Juez para estimar la conveniencia de establecer una prestación compensatoria son las siguientes:

- Posición económica de los aún cónyuges. Debe tener en cuenta la existencia de una posible compensación económica por razón del trabajo y las posibles atribuciones que deban realizarse en la eventual liquidación del régimen económico matrimonial.

- La dedicación a la familia, si por este motivo el solicitante ha visto disminuida su capacidad de generar ingresos; si uno de los cónyuges ha tenido que quedarse en casa para poder atenderla, tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria que no exceda del nivel de vida del que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de los hijos, que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho a la prestación compensatoria el cónyuge de buena fe, en las mismas circunstancias.

- Edad, estado de salud, formación y atribución de la guarda de los hijos comunes, si los hay.

- Duración de la convivencia.

- Nuevos gastos familiares del posible deudor, si procede; puede ser un punto polémico porque se puede considerar que el solicitante de la prestación compensatoria no debe verse afectado por la nueva situación familiar del obligado a pagar la prestación, pero el hecho de pagar una prestación compensatoria no significa que el obligado a pagarla tenga que desatender el resto de sus obligaciones.

De acuerdo con el artículo 233-16 CC Catalán¹¹⁷, en los pactos previos a la ruptura matrimonial se puede llegar a acuerdos sobre la prestación

personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges. 4.- La compensación económica por razón de trabajo tiene como límite la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios calculada de acuerdo con las reglas establecidas por el artículo 232-6. Sin embargo, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior, la autoridad judicial puede incrementar esta cuantía. 5.- En caso de extinción del régimen de separación por muerte, el cónyuge superviviente puede reclamar la compensación económica por razón de trabajo como derecho personalísimo, siempre y cuando los derechos que el causante le haya atribuido, en la sucesión voluntaria o en previsión de su muerte, o los que le correspondan en la sucesión intestada no cubra el importe que le correspondería económica”.

¹¹⁶ Art. 233-15 CC Catalán: “Determinación de la prestación compensatoria”.

¹¹⁷ Art. 233-16 CC Catalán: “Pactos previos a la ruptura matrimonial: 1.- En previsión de ruptura matrimonial, puede pactarse sobre la modalidad, cuantía, duración y extinción de la prestación compensatoria, de acuerdo con el artículo 231-20. 2.- Los pactos de renuncia no incorporados a una propuesta de convenio regulador no son

compensatoria, que en todo caso deberán tener carácter recíproco y el acuerdo puede versar sobre la modalidad, cuantía, duración y extinción de la prestación compensatoria.

El CC Catalán regula en su Libro segundo la compensación económica por razón de trabajo. La compensación por razón de trabajo responde al mandato del Consejo de Europa, 37/1.978 de 27 de septiembre¹¹⁸, pensado para paliar la desigualdad que se produce, en caso de disolución del matrimonio, entre cónyuges casados en régimen de separación de bienes.

El objetivo de la resolución era impulsar una política común sobre la igualdad de los esposos en Derecho civil que, en materia de relaciones patrimoniales, se concretó en conseguir el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para “asegurar que cada cónyuge tenga, en caso de divorcio o de nulidad del matrimonio el derecho a obtener una parte equitativa de los bienes del ex cónyuge o una suma pecuniaria indemnizatoria de toda desigualdad económica aparecida durante el matrimonio”.

La finalidad no es otra que la de encontrar un paliativo a la desigualdad económica que provoca la extinción del régimen de separación de bienes.

Fue el contenido del artículo 23 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, después del artículo 41 del Código de Familia y ahora lo es del artículo 232.5 CC Catalán¹¹⁹, integrado en el Capítulo 2º donde se regula el régimen de separación de bienes.

En primer lugar, en torno a la aplicabilidad de la posible temporalidad de la norma, ésta se aplica conforme a la Disposición Transitoria Segunda, apartado primero, a los casos de crisis de matrimonios regidos por la separación de bienes catalana cuya demanda

eficaces en lo que comprometan la posibilidad de atender a las necesidades básicas del cónyuge acreedor”.

¹¹⁸ MIRALLES GONZÁLEZ, Isabel. “La compensación económica por razón de trabajo en el Libro segundo del Código Civil de Cataluña: algunas cuestiones civiles y fiscales”, *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, enero 2.012. Página 4.

¹¹⁹ Art. 232-2 CC Catalán: Bienes propios. “En el régimen de separación de bienes, son propios de cada uno de los cónyuges todos los que tenía como tales cuando se celebró el matrimonio y los que adquiriera después por cualquier título”.

de separación, divorcio o nulidad, sea posterior al día 31 de diciembre de 2.010, teniendo su entrada en vigor el día 1 de enero de 2.011¹²⁰.

En segundo lugar, en torno a la ley aplicable a determinados efectos de la separación, sí será aplicable la ley de la residencia habitual común en el momento de presentación de la demanda o, por el contrario y por lo que se refiere a la incidencia de la separación en el régimen económico matrimonial y a su liquidación, ésta deberá regularse por el Derecho aplicable a los efectos del matrimonio, es decir, por lo previsto en los artículos 9.2 y 9.3 CC Catalán.

La necesidad de calificar la compensación económica por trabajo a efectos de determinar si pertenece al régimen económico matrimonial o a los efectos de la separación, es fundamental, pues de ello dependerá la norma de conflicto aplicable a la compensación por trabajo, bien la relativa a los efectos del matrimonio, artículos 9.2 y 9.3 CC Catalán, bien la de separación matrimonial, artículo 107 CC Catalán.

La naturaleza de la compensación por trabajo ha girado en torno a tres requisitos¹²¹:

1.- La realización de unas prestaciones de trabajo, (bien en la casa o en la actividad del otro), no retribuidas o retribuidas de forma insuficiente.

2.- La existencia de una desigualdad patrimonial entre ambos cónyuges, en el momento de plantear la separación o el divorcio, causada por ese defecto retributivo.

3.- Diferencia económica que implica un enriquecimiento injusto.

La indemnización compensatoria en manera alguna puede confundirse con la pensión compensatoria que contemplaba el artículo 84 CF Catalán vigente hasta el día 1 de enero de 2.011, y aprobado por Ley 25/2.010, de 29 de julio.

¹²⁰ BAYO DELGADO, Joaquín, *Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña*, Editorial Sepin, Las Rozas (Madrid) 2.011. Página 694.

¹²¹ MIRALLES GONZÁLEZ, Isabel. "La compensación económica por razón del trabajo en el Libro segundo del Código Civil de Cataluña: algunas cuestiones civiles y fiscales", *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, enero 2.012, Página 5.

La primera, la indemnización compensatoria, es un elemento corrector para salvar la desigualdad patrimonial entre los cónyuges al disolverse el régimen económico matrimonial de separación de bienes por sentencia de separación judicial, nulidad o divorcio, dado que aquél régimen no supone comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge. Es, en definitiva, una norma de liquidación de bienes en casos de crisis del matrimonio y así es tratada en la Sección Primera del Capítulo 1 del Título III del CC de Cataluña¹²².

La segunda, en cambio, la pensión compensatoria, residenciada en el Título III del Código, que está dedicado a los efectos de la nulidad del matrimonio del divorcio y de la separación judicial, tiene su núcleo en la debilitación económica que puede sufrir uno de los cónyuges a consecuencia de la disolución matrimonial respecto a la situación o estatus que mantenía constante el vínculo.

La naturaleza jurídica de esta compensación, que surge como correctivo del régimen de separación de bienes, del artículo 23 de la compilación compensa desequilibrios pasados, corrige una situación de desigualdad patrimonial generada durante el matrimonio por la dedicación de uno de los cónyuges a la casa o al trabajo del otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente, mientras que la pensión compensatoria del artículo 97 CC tiende a eliminar desequilibrios futuros.

Las características que presenta son:

a) Su funcionalidad es corregir desequilibrios pasados, esto es, una situación de desigualdad patrimonial generada durante el matrimonio como consecuencia de la dedicación de uno de los cónyuges a la casa o al trabajo del otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente.

b) Esa actividad provoca un enriquecimiento injustificado.

c) Es compatible con otros derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiario, como la pensión compensatoria (prestación compensatoria), y debe tenerse en cuenta para la fijación de los mismos.

El preámbulo de la Ley 25/2.010, de 29 julio, que aprueba el Libro Segundo del CC Catalán, relativo a la persona y la familia, señala que el

¹²² MURILLAS ESCUDERO, Juan Manuel, “La practica legislativa de las CCAA sobre su Derecho Civil propio”, *Anuario Jurídico de La Rioja*, 2.015, página 155.

artículo 23 de la Compilación compara los patrimonios de ambos cónyuges y pretende corregir el enriquecimiento injustificado de uno de ellos como consecuencia del trabajo no compensado del otro.

En resumen, lo que se compensaba era la desigualdad patrimonial una vez extinguido el régimen económico matrimonial de separación de bienes, ya que a través de esta indemnización se intenta corregir el descenso económico que puede sufrir uno de los esposos comparando su situación constante matrimonio y aquella en que quedará después de la separación o el divorcio.

En este sentido, la nueva regulación¹²³ abandona toda referencia a la compensación como remedio sustitutorio de un enriquecimiento injusto, prescinde de la idea de la contribución a los gastos familiares, implícita en la formulación del artículo 41 del Código de Familia, vigente hasta la entrada en vigor de la Ley, y se fundamenta, en el desequilibrio que produce entre las economías de los cónyuges el hecho de que uno realice una tarea que no genera excedentes acumulables y el otro realice otra que sí que los genera.

Por ello, basta con acreditar que uno de los dos se ha dedicado a la casa sustancialmente más que el otro. Para calcular el importe de la compensación se tienen en cuenta el tipo de trabajo prestado y la duración e intensidad de la dedicación, y se restringe la discrecionalidad judicial a la hora de apreciar la relevancia de estos factores con el establecimiento de un límite de cuantía, que es el de la cuarta parte de la diferencia de los incrementos patrimoniales obtenidos por los cónyuges durante la vigencia del régimen.

Sin embargo, se permite el otorgamiento de una compensación de cuantía superior si el cónyuge acreedor puede probar que la incidencia de su trabajo en el incremento patrimonial del otro cónyuge ha sido notablemente superior.

La regulación de la compensación aclara también el alcance de la autonomía del pasado, no de una compensación de futuro, aunque los criterios para valorar esa compensación quedaran al arbitrio judicial. El

¹²³ Derecho Civil Catalán, Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia en vigor desde el 1 de enero de 2.011, cambia la denominación de Pensión Compensatoria por Prestación Compensatoria.

artículo 23 de la Compilación compara los patrimonios de ambos cónyuges y pretende corregir el enriquecimiento injustificado de uno de ellos como consecuencia del trabajo no compensado del otro.

La regulación del artículo 232-5 CC Catalán¹²⁴ ha sufrido un cambio importante por la necesidad de atemperar determinados efectos perversos del régimen de separación, insertando una regla de liquidación del régimen para los casos de separación, nulidad, divorcio y muerte, que permite compensar determinados desequilibrios patrimoniales que son consecuencia directa de la mayor dedicación de uno de los cónyuges a la familia o a las actividades económicas del otro cónyuge.

Se trata de un mecanismo que pretende paliar la desigualdad entre los esposos que puede producirse en el régimen de separación absoluta. La función social de la institución es, por tanto, procurar la compensación de un perjuicio patrimonial, derivado de una actividad realizada por uno de los cónyuges, basada en la buena fe y en el principio de confianza -la estabilidad de la convivencia- que, en un momento determinado, se ve defraudada por la crisis matrimonial.

En definitiva, y como regla, a partir de ahora se aplica a todos los casos de liquidación del régimen de separación. Es una medida que determina que el “*régimen de separación*” es de separación pero con sus propias peculiaridades¹²⁵.

Las características que presenta:

a) Es una norma de liquidación del régimen económico. Está incluida en el régimen de separación, donde se señala que cada cónyuge tiene la propiedad, goce, administración y disposición de todos sus bienes y que “sus bienes” son los que tenía cuando se celebró el matrimonio y los adquiridos después por cualquier título.

¹²⁴ Art. 232-5 CC Catalán: “Compensación económica por razón de trabajo: Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges”.

¹²⁵ BAYO DELGADO, Joaquín, *Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña*, Editorial Sepin, Las Rozas (Madrid) 2.011, Página 697.

b) Su contenido es exclusivamente económico y el legislador lo ha configurado como un derecho general en los casos de liquidación del régimen cuando se produce un presupuesto: perjuicio que sufre el cónyuge que ha llevado una actividad que el Derecho quiere compensar (trabajo para la casa o para el otro sin retribución o con retribución insuficiente), la cual ha provocado una pérdida de oportunidades causante de un efecto desequilibrador.

c) El legislador ha separado los dos criterios que originan el nacimiento del derecho. Para el trabajo doméstico exige que el beneficiario haya trabajado sustancialmente más que el otro, con lo que partiendo de la idea de que ambos deben trabajar en la casa y compartir las actividades domésticas y el cuidado de los hijos, se valora, para establecer la compensación, el que uno de ellos haya trabajado sustancialmente más que el otro.

Se valora la mayor dedicación de uno de los cónyuges como presupuesto para el nacimiento del derecho a ser compensado. En párrafo separado, se ha regulado la compensación por la actividad profesional llevada a cabo para el otro y en este caso exige actividad sin retribución o con retribución insuficiente. Se trata de un trabajo que, si fuera realizado por un tercero, sería remunerado según los parámetros de mercado.

Señala Bayo Delgado que cuando esa remuneración completa es efectiva no se dará el presupuesto para el nacimiento del derecho, aunque es posible que esa remuneración sea meramente nominal, “sin reflejo en los ingresos reales del pretendido beneficiario, por motivos fiscales de la empresa o actividad profesional del otro cónyuge. Puede ocurrir que la retribución se realice mediante el disfrute de los beneficios que proporcione el citado negocio, empleados para hacer frente a los gastos de la familia. Si uno de los cónyuges consigue ahorro o inversión particulares (privativos) nos encontraremos nuevamente ante una diferencia patrimonial injustificada que daría lugar a la compensación”.

d) Es una acción de resarcimiento de un daño objetivo: la desigualdad patrimonial inducida y el coste de oportunidades que esa actividad ha representado para el que reclama. Se prescinde de la idea de enriquecimiento injusto del demandado, aunque ese enriquecimiento está latente, ya que la norma acaba obligando –si así se solicita- a traspasar

bienes a quien ha obtenido menos ganancias que el otro en el momento de liquidar el régimen.

La ley establece unas reglas de cálculo y unos criterios de valoración de este derecho, pero el artículo 232-7 CC Catalán¹²⁶ admite la validez de pactos sobre compensación, por lo que son lícitos los acuerdos que, en previsión de ruptura matrimonial o de disolución del matrimonio, establezcan un incremento, reducción o exclusión de la compensación por razón de trabajo. Lo que se exige es que, en la medida en que se excluyan o limiten derechos, el pacto sea recíproco y precise con claridad los derechos que limita o a los que se renuncia, conforme al artículo 231-20.3 CC Catalán¹²⁷.

El derecho a percibir la compensación por razón de trabajo es una norma de liquidación de régimen económico. Se trata de un derecho compatible con los demás derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge acreedor y debe tenerse en cuenta para fijarlos o en su caso modificarlos, conforme al artículo 232-10 CC Catalán¹²⁸.

Por ello, cuando se determina la prestación compensatoria, conforme al artículo 233-15 CC Catalán¹²⁹, la autoridad judicial, para fijar la cuantía y duración de la misma, debe valorar entre otros datos la posición económica de los cónyuges, teniendo en cuenta, la compensación

¹²⁶ Art. 232-7 CC Catalán: “Pactos sobre la compensación: En previsión de una ruptura matrimonial o disolución del matrimonio por muerte, puede pactarse el incremento, reducción o exclusión de la compensación económica por razón de trabajo de acuerdo con lo establecido por el artículo 231-20 del Código Civil Catalán”.

¹²⁷ Art. 231-20.3 CC Catalán: “Los pactos de exclusión o limitación de derechos deben tener carácter recíproco y precisa con claridad los derechos que limitan o los que se renuncia”.

¹²⁸ Art. 232-10 CC Catalán: “Compatibilidad: El derecho a la compensación económica por razón de trabajo es compatible con los demás derecho de carácter económico que corresponden al cónyuge acreedor y deben tener en cuenta para fijar estos derechos y, si procede para modificarlos.

¹²⁹ Art. 233-15 CC Catalán: “Determinación de la prestación compensatoria: La autoridad judicial para fijar la cuantía y duración de la prestación compensatoria debe valorar especialmente: a) La posición económica de los cónyuges teniendo en cuenta, si procede, la compensación económica por razón de trabajo o las previsibles atribuciones derivadas de la liquidación del régimen económico matrimonial. b) La realización de tareas familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia durante la convivencia, si eso ha reducido la capacidad de uno de los cónyuges para obtener ingresos. c) Las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en cuenta su edad y estado de salud y la forma en que se atribuye la guarda de los hijos comunes. d) La duración de la convivencia. e) Los nuevos gastos familiares del deudor, si procede”.

económica por razón de trabajo o las previsibles atribuciones derivadas de la liquidación del régimen económico matrimonial.

Para concretar el régimen jurídico debemos distinguir entre los casos en los que el derecho de compensación es consecuencia de una ruptura matrimonial por razón de crisis, supuestos de nulidad matrimonial, separación matrimonial o divorcio, o en su caso, la situación de hecho por el cese efectivo de la convivencia, respecto de aquellos otros en los que el efecto se produce como consecuencia de la muerte.

En los casos de ruptura por nulidad matrimonial civil, la compensación económica deberá pedirse en el proceso que causa la extinción del régimen y, tratándose de nulidad canónica, en el proceso en el que se solicite el reconocimiento de efectos civiles.

El supuesto de disolución del matrimonio por muerte la pretensión para solicitar la compensación económica es una novedad.

El artículo 232-11.2 CC Catalán contempla dos supuestos diferentes¹³⁰:

a) El primero es una reclamación autónoma que el/la beneficiado/a por la norma interpone frente a los herederos del cónyuge fallecido y para el que la ley señala un plazo de prescripción de tres años, a contar desde el fallecimiento del cónyuge obligado.

Es una acción al margen de un proceso matrimonial y, por consiguiente, con un contenido exclusivo y autónomo. La compensación por razón de trabajo es compatible con cualquier otro derecho de carácter económico que corresponda al cónyuge acreedor y se ha de tener en cuenta para fijar este derecho o si fuera el caso para modificar los derechos que el causante le haya atribuido en la sucesión voluntaria o en previsión de su

¹³⁰ Art. 232-11.2 CC Catalán: “Ejercicio del derecho a la compensación: En el caso de extinción del régimen de separación por muerte, la pretensión para reclamar la compensación económica por razón de trabajo prescribe a los tres años del fallecimiento del cónyuge. Sin embargo, si el cónyuge superviviente interpone una demanda al amparo del artículo 233-14.2 debe reclamar la compensación en el mismo procedimiento”.

muerte, o los que le correspondan en la sucesión intestada conforme al artículo 232-2.2 CC Catalán¹³¹.

b) El segundo supuesto es el de reclamación de la compensación por razón de trabajo, junto con la compensación económica por desequilibrio y la posibilidad de que la acción continúe tras la muerte del cónyuge a los únicos efectos económicos.

Ocurre igual que en la reclamación *inter vivos* en la que hay que acumular ambas acciones para realizar adecuadamente los cálculos.

Extinguido el proceso judicial matrimonial por muerte, podrá reclamarse a los herederos del difunto la prestación compensatoria en el plazo de tres meses a contar desde la muerte de aquél, conforme al artículo 233-14.2 CC Catalán¹³². Y en esa misma acción podrá acumularse la pretensión de compensación económica conforme al artículo 232-11.2 CC Catalán¹³³, ya que la una determina la existencia o la cuantía de la otra; tras la compensación es posible que no haya desequilibrio.

Si en el patrimonio del cónyuge deudor no hubiera bienes suficientes para satisfacer la compensación económica por razón de trabajo el acreedor podrá pedir la reducción o supresión de los actos gratuitos hechos por el deudor durante la vigencia del régimen, comenzando por la más reciente. Si la fecha de las donaciones fuera la misma la reducción se hará a prorrata. Tratándose de actos onerosos la impugnación requerirá la constatación del fraude a los derechos de aquel.

¹³¹ Art. 232-9 CC Catalán: “Actos en perjuicio del derecho a la compensación: Si en el patrimonio del cónyuge deudor no existen bienes suficientes para satisfacer la compensación económica por razón de trabajo, el acreedor puede solicitar la reducción o supresión de las donaciones y atribuciones particulares en pacto sucesorio hechas por aquel durante la vigencia del régimen, comenzando por la más reciente y así sucesivamente, por orden inverso de fecha. La reducción debe de hacerse a prorrata si la fecha es la misma o es indeterminada. El acreedor también puede impugnar los actos a título oneroso realizados por el deudor en fraude de su derecho”.

¹³² Art. 233-14.2 CC Catalán: “Prestación compensatoria: Si uno de los cónyuge muere antes de que pase un año desde la separación de hecho, el otro, en los tres meses siguientes al fallecimiento puede reclamar a los herederos su derecho a la prestación compensatoria. La misma regla debe aplicarse si el procedimiento matrimonial se extingue por el fallecimiento del cónyuge que debería pagarla”.

¹³³ Art. 232-11.2 CC Catalán: “Ejercicio del derecho a la compensación: En caso de extinción del régimen de separación por muerte, la pretensión para reclamar la compensación económica por razón de trabajo prescribe a los tres años del fallecimiento del cónyuge. Sin embargo, si el cónyuges superviviente interpone una demanda al amparo del artículo 233-14.2 debe reclamar la compensación en el mismo procedimiento”.

El plazo de impugnación es de 4 años y es de caducidad. El plazo empieza a contarse desde la extinción del régimen y no puede actuarse contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe.

Para determinar la compensación, conforme al artículo 232-5.3 CC Catalán¹³⁴, se ha de tener en cuenta la duración y la intensidad de la dedicación, atendidos los años de convivencia y concretamente, en caso de trabajo doméstico, el hecho de que esa dedicación haya incluido la crianza de los hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges. Esta compensación tiene como límite la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos patrimoniales de los cónyuges.

Es ésta una de las principales novedades de la reforma que pone límites a la discrecionalidad judicial, introduciendo un factor de relativa seguridad y que supondrá que no habrá en el futuro compensaciones con una cuantía injustificable en términos reales.

No obstante, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior a la que ha prestado el otro, el Juez podrá incrementar esta cuantía. El artículo 232-7 CC Catalán¹³⁵ prevé la posibilidad de que se establezcan pactos sobre la compensación en previsión de disolución del régimen por ruptura o por muerte.

Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial pueden otorgarse en capítulos matrimoniales o en escritura pública, y establece un régimen jurídico para los mismos (deber de información del Notario, pactos recíprocos, deber de información entre cónyuges, y previsión en torno al cambio de circunstancias posteriores a su otorgamiento). En dichos pactos puede establecerse el aumento, la reducción o incluso la exclusión de la compensación, aunque se exige, conforme al artículo 231-

¹³⁴ Art. 232-5.3 CC Catalán: “Compensación económica por razón de trabajo: Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges”.

¹³⁵ Art. 232-7 CC Catalán: “Pactos sobre la compensación: En previsión de una ruptura matrimonial o de disolución del matrimonio por muerte, puede pactarse el incremento, reducción o exclusión de la compensación económica por razón de trabajo de acuerdo con el artículo 231-20 del Código Civil Catalán”.

20 CC Catalán¹³⁶, que los pactos tengan carácter recíproco y que conste con claridad los derechos que se limitan o a los que se renuncia.

Para calcular la diferencia entre los respectivos incrementos el artículo 232.6 CC Catalán¹³⁷, establece que tratándose de partir incrementos habrá que fijar cuál es el patrimonio inicial y el final para, obtenida la diferencia, apreciar el enriquecimiento.

Se excluyen de la valoración los actos de liberalidad efectuados a favor de los hijos comunes, así como las denominadas liberalidades de uso o regalos, adecuados al nivel de vida de la familia y a la capacidad económica del que las realiza.

El pago deberá hacerse en dinero, salvo que las partes acuerden otra cosa. Si existe causa justificada a petición de cualquiera de las partes o de

¹³⁶ Art. 231-20 CC Catalán: “Pactos en previsión de una ruptura matrimonial: 1.- Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial pueden otorgarse en capítulos matrimoniales o en escritura pública. En el supuesto de que sean antenupciales, sólo son válidos si se otorgan antes de los treinta días anteriores a la celebración del matrimonio. 2.- El notario, antes de autorizar escritura a que se refiere el apartado 1, debe informar por separado a cada uno de los otorgantes sobre el alcance de los cambios que pretender introducirse con los pactos respecto al régimen legal supletorio y debe advertirlos de su deber recíproco de proporcionarse la información a que se refiere el apartado 4. 3.- Los pactos de exclusión o limitación de derechos deben tener carácter recíproco y precisar con claridad los derechos que limitan o a los que se renuncia. 4.- El cónyuge que pretenda hacer valer un pacto en previsión de una ruptura matrimonial tiene la carga de acreditar que la otra parte disponía, en el momento de firmarlo, de información suficiente sobre su patrimonio sus ingresos y sus expectativas económicas, siempre y cuando esta información fuese relevante con relación al contenido del pacto. 5.- Los pactos en previsión de ruptura que en el momento en que se pretende el cumplimiento sean gravemente perjudiciales para un cónyuge no son eficaces si este acredita que han sobrevenido circunstancias relevantes que no se previeron ni podían razonablemente preverse en el momento en que se otorgaron”.

¹³⁷ Art. 232.6 CC Catalán: “Reglas de cálculo: Los incrementos de los patrimonios de los cónyuges se calculan de acuerdo con las siguientes reglas: a) El patrimonio de cada uno de los cónyuges está integrado por los bienes que tenga en el momento de la extinción del régimen o, en su caso, del cese efectivo de la convivencia, una vez deducidas las cargas que los afecten y las obligaciones. b) Debe añadirse al patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor de los bienes de que haya dispuesto a título gratuito, calculado en el momento de su transmisión, excluidas las donaciones hechas a los hijos comunes y las liberalidades de uso, así como el valor del detrimento producido por actos efectuados con la intención de perjudicar al otro cónyuge. c) debe descontarse del patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor de los bienes que tenía al comenzar el régimen y que conserva en el momento en que se extingue una vez deducidas las cargas que los afecte, así como el valor de los adquiridos a título gratuito durante la vigencia del régimen y las indemnización por daños personales, excluida la parte correspondiente al lucro cesante durante el tiempo de convivencia. 2.- Las atribuciones patrimoniales que el cónyuge deudor haya hecho al cónyuge acreedor durante la vigencia del régimen se imputan a la compensación por el valor que tienen en el momento de la extinción del régimen”.

los herederos del deudor, la autoridad judicial puede ordenar el pago total o parcial en bienes.

El uso de la vivienda que fuere familiar también será una forma posible de pago de la compensación, y como tal se contabilizará. El pago debe realizarse en el momento en que se extingue el régimen y se determina la cuantía de la compensación¹³⁸.

El artículo 25 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano¹³⁹ también abre la puerta a su existencia aunque no contiene una normativa tan precisa como la catalana. En muchas de las leyes reguladoras de las parejas de hecho también se hace referencia a la posibilidad de incluir pactos para el momento en el que cese la relación de pareja.

2.5.2.2.- Comunidad Autónoma de Aragón

El Derecho Civil Foral de Aragón se ampara jurídicamente en el artículo 149-1-8ª CE y específicamente, en el artículo 35.1-4ª de la Ley Orgánica 5/2.007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón¹⁴⁰, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Aragonés, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, así como del Derecho procesal civil derivado de las peculiaridades del Derecho sustantivo Aragonés.

Con la aprobación y entrada en vigor del Código Foral Aragonés, que se regula en el Decreto legislativo 1/2.011, de 22 de marzo, del Gobierno de

¹³⁸ MIRALLES GONZÁLEZ, Isabel. "La compensación económica por razón del trabajo en el Libro segundo del Código Civil de Cataluña: algunas cuestiones civiles y fiscales", *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, enero 2.012, Página 14.

¹³⁹ Ley 10/2.007, de 20 de marzo, Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Art. 25: "El contenido de la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales: En la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales se puede establecer el régimen económico del matrimonio y cualesquiera a otros pactos de naturaleza patrimonial o personal entre los cónyuges o a favor de ellos, de sus hijos nacidos o por nacer, ya para que produzcan efectos durante el matrimonio o incluso después de la disolución del mismo, sin más límites que los que establece esta ley, lo que resulte de las buenas costumbre y lo que imponga la absoluta igualdad de derechos y obligaciones de los consorte dentro de su matrimonio.

¹⁴⁰ LO 5/2.007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, publicada en el BOE de fecha viernes 20 de abril de 2.007.

Aragón¹⁴¹, por el que se aprueba, con el título de “Código del Derecho Foral de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, se ha procedido a la modernización del Derecho Civil de Aragón, que se contenía en la Compilación de 1.967¹⁴².

El Código Foral Aragonés se encabeza con Preámbulo, un Título Preliminar: Las normas en el Derecho Civil de Aragón; y cuatro libros: Libro Primero, “Derecho de la Persona”; Libro Segundo, “Derecho de la Familia”; Libro Tercero, “Derecho de Sucesiones por causa de muerte”; y, Libro Cuarto, “Derecho patrimonial”. En la parte final del Código se recogen las disposiciones adicionales y transitorias de las leyes refundidas debidamente regularizadas y adaptadas al nuevo marco normativo.

En lo que respecta a la pensión compensatoria, en Aragón es denominada *asignación compensatoria*, es equivalente a la pensión compensatoria establecida en el artículo 97 CC y se regula en el artículo 83 del Código de Derecho Foral de Aragón¹⁴³.

Conceptualmente la asignación compensatoria responde a un presupuesto básico, consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico. Este desequilibrio económico se ha producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio, y su finalidad es restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre estos.

Tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura.

¹⁴¹ El Código Foral Aragonés fue publicado en el B.O.A. núm. 63, de 29 de marzo de 2.011.

¹⁴² La Compilación de 1.967 se contiene en la Ley 15/1.967, de 8 de abril, sobre la compilación del derecho civil de Aragón, publicada en el BOE de 11 de abril de 1.967, y vigente desde el día 1 de mayo de 1.967, hasta el 23 de abril de 2.011.

¹⁴³ Art. 83-1 del Código de Derecho Foral de Aragón: “La asignación compensatoria: 1.- El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria”.

Es decir, se debe partir de la efectiva existencia de un desequilibrio económico y que este se derive de la separación o el divorcio. El objeto es restablecer dicho desequilibrio no asimilándose a una renta vitalicia que perpetúe una situación preexistente durante el matrimonio.

La pensión compensatoria debe ser un mecanismo que posibilite poner al cónyuge en igualdad de oportunidades laborales, atendiendo a circunstancias derivadas de una mayor dedicación al cuidado de la familia, que haya podido afectar a las mismas; así como que el desequilibrio debe existir en el momento de la separación o el divorcio y no por sucesos posteriores.

Como circunstancias a valorar, de forma paralela a las recogidas en el artículo 97 CC, son indicativas las que se recogen en el Código Foral Aragonés en su artículo 83-2 como:

- Los recursos económicos de cada cónyuge.
- La edad del solicitante, sus perspectivas económicas y de acceso al trabajo.
- La edad de los hijos.
- La atribución del uso de la vivienda familiar.
- Las funciones familiares desempeñadas por los cónyuges.
- La duración de la convivencia.

2.5.2.3. - Comunidad Autónoma de Galicia

El Derecho Civil de Galicia tiene su expresión máxima en la vigente Ley de Derecho Civil de Galicia, Ley 2/2.006, de 14 de junio, publicada en el Diario Oficial de Galicia el día 29 de junio de 2.006, y entrada en vigor el día 19 de Julio de 2.006¹⁴⁴.

El Preámbulo de la Ley se inicia señalando que: “El Derecho Civil de Galicia es una creación genuina del pueblo gallego”, reconociendo que el derecho civil histórico gallego ha de coexistir con la organización territorial española de las nacionalidades y regiones que la integran.

¹⁴⁴ MURILLAS ESCUDERO, Juan Manuel, “La practica legislativa de las CCAA sobre su Derecho Civil propio”, *Anuario Jurídico de La Rioja*, 2.105, página 207.

Esta reforma legislativa, reforma y sustituye la Ley anterior, Ley 4/1.995 que recogía el Derecho civil gallego, y la amplía de los 170 artículos de la anterior a 308 artículos, 4 disposiciones adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 1 disposición final. Al enumerar en su artículo 1 las fuentes del derecho, la ley, la costumbre y los principios generales que integran e informan el ordenamiento jurídico gallego. La costumbre regira en defecto de ley gallega aplicable. En defecto de ley y costumbre gallegas, será de aplicación con carácter supletorio el el derecho civil general del Estado, cuando no se oponga a los principios del ordenamiento jurídico gallego, y como ordenamiento jurídico cerrado y completo.

Esta Ley no otorga la condición de derecho foral gallego a todas las normas autonómicas civiles, como en lo relativo a la normativa de protección del menor, la adopción y la autotutela, que como novedad posibilita el nombramiento de tutor en una persona física o jurídica en previsión de una posible incapacidad futura, designación que debe hacerse en escritura pública.

En cuanto a la pensión compensatoria no hay en el Derecho civil de Galicia una regulación específica, remitiéndose a estos efectos al Derecho Civil común.

Existe una única novedad en referencia a esta materia y es la que se contiene en la Disposición Adicional Tercera, que en su anterior regulación equiparaba los deberes y derechos de las parejas de hecho al matrimonio, señalando que, “se extienden a los efectos de su aplicación los derechos y obligaciones de los cónyuges a los miembros de parejas de hecho que convivan un año o tengan hijos en común”.

El contenido de esta Disposición Tercera, fue modificado mediante la Ley 10/2.007, de 28 de junio, con entrada en vigor el día 2 de julio de 2.007, de reforma de la disposición citada para eliminar la discriminación existente entre los matrimonios y las uniones de hecho análogas a la conyugal¹⁴⁵.

¹⁴⁵ “Ley 10/2.007, de 28 de junio, de Galicia, Disposición Adicional Tercera: 1.- A los efectos de aplicación de la presente Ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente Ley reconoce a los cónyuges”. 2.- Tendrán la condición de parejas de hecho las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en

Se establece la posibilidad de hacer pactos los convivientes en escritura pública, con limitaciones a su contenido respecto a que no sean contrarios a las leyes, contravengan la igualdad de los cónyuges o sean perjudiciales para cada uno de ellos. Y se mantiene la libertad de autonomía de la voluntad de la pareja respecto a su equiparación o no, con el matrimonio.

2.5.2.4.- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

El Decreto Legislativo 79/1.990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares, publicado en el BOIB (Boletín Oficial de las Illes Balears), número 120 de 02 de octubre de 1.990, estando vigente desde el día 22 de octubre de 1.990 y hasta el día 25 de mayo de 2.009.

La Ley Orgánica 1/2.007, de 28 de febrero de 2.007, publicada en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares) número 32 de 01 de marzo de 2.007, con entrada en vigor desde el día 02 de marzo de 2.007 por la que se reforma el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares¹⁴⁶, en vigor hasta el día 18 de julio de 2.010, en que ha sido revisado, proclama que toda la materia de Derecho Civil que no quede reservada expresamente al Estado es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, es decir, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio son normas de competencia del Estado, sin hacer ninguna mención expresa a la pensión compensatoria.

2.5.2.5.- Comunidad Autónoma de Valencia

La Ley Orgánica 1/2.006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1.982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana¹⁴⁷, en su preámbulo reconoce a la Comunidad

una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio. No pueden constituir parejas de hecho: 1- Los familiares en línea recta por consanguinidad o adopción. 2- Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. 3- Los que estén ligados por matrimonio o formen pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona”.

¹⁴⁶ LO 1/2.007, de 1 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares que reforma la Ley Orgánica 2/1.983, de 25 de febrero de 1.983.

¹⁴⁷ LO 1/2.006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1.982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Valenciana como Nacionalidad histórica y le atribuye competencia exclusiva para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil Foral Valenciano.

El desarrollo del Derecho Civil Valenciano se ha iniciado con la promulgación de la Ley 10/2.007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial, recurrida ante el Tribunal Constitucional¹⁴⁸, y modificada en la línea del criterio de dicho Tribunal, mediante la Ley 8/2.009, de 4 de noviembre, que modificó diversos artículos.

La Ley 5/2.011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, ha sido publicada en el BOE número 98 del lunes 25 de abril de 2.011.

En lo que respecta a la materia que nos ocupa no hay regulación específica de la pensión compensatoria, como en el resto de las Comunidades Autónomas que no se detallan, siendo de aplicación el Código Civil, si bien se ha aprobado la Ley 5/2.011, de 1 de abril,¹⁴⁹ de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no conviven, que da preferencia a la custodia compartida de los hijos en las separaciones y divorcios, con las posibles consecuencias que puedan darse en el aspecto económico en lo referente a la posibilidad de que exista un posible desequilibrio económico entre los cónyuges.

En muchas de las leyes reguladoras de las parejas de hecho también se hace referencia a la posibilidad de incluir pactos para el momento en el que cese la relación de pareja.

Tal y como se ha hecho referencia en lo relativo a la adjudicación del uso de la vivienda que fuere familiar como forma de compensación en el Derecho Catalán, en la Comunidad Autónoma Valenciana podría aplicarse también a través del artículo 25 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.

¹⁴⁸ Auto 280/2.013, de fecha 3 de diciembre de 2.013 del Pleno del Tribunal Constitucional por el que: “se mantiene la suspensión del artículo 14 de la Ley 5/2.0012, de 15 de octubre de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana, levantándose la suspensión en lo demás”.

¹⁴⁹ Ley 5/2.011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana de “Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no conviven”, publicada en el BOE de fecha 25 de abril de 2.011.

2.5.2.6.- Comunidad Autónoma del País Vasco

En la legislación del País Vasco no se encuentra ninguna referencia específica a la pensión compensatoria; sin embargo, y en relación con el tema, la Ley del Parlamento Vasco 6/1.988, de 18 de marzo¹⁵⁰, de modificación parcial del Derecho Civil Foral, en el título IV, regula el régimen de bienes del matrimonio. Esta Ley fue modificada por la Ley 3/1.992 de 1 de julio del Derecho Foral del País Vasco, que tras ser revisada, está en vigor desde el día 31 de diciembre de 1.999.

Respecto al régimen de bienes del matrimonio, la Ley del Parlamento Vasco 3/1.992, en su artículo 93¹⁵¹, declara el derecho de pactar el régimen económico matrimonial o modificarlo libremente, antes o después de la celebración del matrimonio.

Conforme a la reforma del Código Civil, en materia de vecindad civil, en el artículo 94 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1.992¹⁵², se elimina toda discriminación por razón de sexo, incluso cuando se trata de determinar el régimen de bienes en el caso de que los cónyuges tengan vecindad diferente.

El régimen legal de comunicación de bienes queda extinguido en los casos de separación, nulidad o divorcio, y también mediante pacto conforme a lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1.992¹⁵³.

¹⁵⁰ Ley del Parlamento Vasco 6/1.988, de 18 de marzo, publicada en el BOPV (País Vasco), de fecha 12 de abril de 1.988 Ley del Parlamento Vasco 6/1.988, de 18 de marzo, reguladora del Régimen de Bienes del Matrimonio modificada por Ley 3/1.992 de 1 de julio del Derecho Foral del País Vasco, en vigor desde el día 31 de diciembre de 1.999.

¹⁵¹ Art. 93 LPV 3/1.992; “El régimen económico del matrimonio será el que libremente pacten los cónyuges, antes o después de su celebración. El régimen económico matrimonial, tanto el pactado como el legal, podrá ser modificado mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. En ningún caso las modificaciones en el régimen económico matrimonial perjudicarán los derechos adquiridos por terceros, ni los derivados de la troncalidad”.

¹⁵² Art. 94 LPV 3/1.992: “A falta de pacto, se entenderán sujetos a comunicación foral los matrimonios en que ambos contrayentes sean vizcaínos aforados, o al falta de vecindad común, si fijan la residencia habitual común inmediatamente posterior a su celebración en la Tierra Llana, y, a falta de dicha residencia común, si en ella ha tenido lugar la celebración del matrimonio”.

¹⁵³ Art. 95 LPV 3/1.992, “En virtud de la comunicación foral se harán comunes, por mitad entre marido y mujer, todos los bienes muebles o raíces, de la procedencia que

Varios preceptos, los artículos del 97 al 102 LPV nueva aclaran la distinción entre bienes ganados y bienes procedentes de cada cónyuge y precisan su régimen jurídico, manteniéndose la exigencia foral del consentimiento conjunto de ambos cónyuges en los actos de disposición, que se concreta en el artículo 99 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1.992¹⁵⁴.

En los supuestos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, la presente ley sigue la norma foral que distingue entre el supuesto de que haya hijos comunes y el de que no los haya.

Habiendo hijos comunes, la comunicación se consolida como se expresa en el artículo 104 LPV 3/1.992¹⁵⁵, y se establece una comunidad hereditaria entre el viudo y los sucesores del premuerto hasta la división y adjudicación de los bienes; pero el cónyuge designado comisario puede adjudicarse la mitad de todos y cada uno de los bienes conforme al artículo 106 LPV 3/1.992¹⁵⁶, y tendrá además el usufructo de todo el caudal conforme al artículo 105 LPV 3/1.992¹⁵⁷.

En los casos en los que el matrimonio se disuelva por sentencia de nulidad, separación o divorcio, o cuando no haya hijos comunes, la comunicación se disuelve por un sistema similar a la sociedad de gananciales tal y como preceptúa el artículo 109, aunque, en el último caso,

sean, pertenecientes a una u otra, por cualquier título tanto los aportados como los adquiridos en constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen”.

¹⁵⁴ Art. 99 LPV 3/1.992, “En la comunicación foral, los actos de disposición de bienes requerirán del consentimiento de ambos cónyuge. Si uno de los cónyuges podrá, por sí solo, disponer del dinero o valores mobiliarios de los que sea titular”.

¹⁵⁵ Art. 104 LPV 3/1.992, “Cuando el matrimonio se disuelva por la muerte de uno de los cónyuges, dejando hijos o descendientes comunes, se consolida la comunicación foral y se transforma en comunidad de bienes entre el cónyuge viudo, de una parte, y los hijos o descendientes que sean sucesores del premuerto, de otra, hasta división y adjudicación de los bienes”.

¹⁵⁶ Art. 106 LPV 3/1.992, “Por excepción a lo dispuesto en el artículo 104, el cónyuge viudo, nombrado comisario, podrá adjudicarse la mitad de todos y cada uno de los bienes, dejando la otra mitad para la sucesión del premuerto, sin perjuicio de la reserva de bienes troncales...”.

¹⁵⁷ Art. 105 LPV 3/1.992, “Si el causante hubiera designado comisario, los bienes permanecerán en comunidad hasta que haga la designación de sucesor. Mientras los bienes continúen en ese estado, el cónyuge viudo, salvo disposición contraria del testador, será el único representante de la herencia y administrador de todo el caudal, en tanto no medie aceptación de la herencia por los sucesores designados”.

el viudo conserva algunos derechos de raigambre foral según se describe en el artículo 110 LPV 3/1.992¹⁵⁸.

No existe en la legislación del País Vasco ninguna referencia a la pensión compensatoria de forma específica, siendo por ello de aplicación el contenido del artículo 97 CC.

Con fecha 24 de julio de 2.015 se ha publicado en el BOE, número 176 la Ley 5/2.015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco y en la misma fecha se ha publicado en el BOE, número 176, la Ley 7/2.015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Esta ley introduce la custodia compartida como régimen más adecuado en los casos de separación, divorcio o nulidad, con las instituciones existentes hasta la fecha, en tanto en cuanto se necesitan y complementan mutuamente y siempre velando por los intereses de los menores.

Se regulan los pactos en previsión de ruptura de la convivencia y convenio regulador y en caso de no acuerdo las decisiones que tendrá que adoptar el juez, como la guarda y custodia, que en principio será compartida, y el uso de la vivienda que no irá condicionado de forma rígida a la atribución de la custodia y concluirá al término del abono de las pensiones de alimentos.

En lo que respecta a la pensión compensatoria, el artículo 5-2 ¹⁵⁹ de la Ley 7/2.015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, al hacer referencia en el capítulo II, al Convenio Regulador, desarrolla el contenido del convenio que las partes han de acordar en previsión de la ruptura de la convivencia y del convenio regulador, y entre otras, en su apartado d) se refiere a al establecimiento de una pensión haciendo una mención expresa a la misma con remisión al artículo 97 CC y al artículo 5 de la Ley 2/2.003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

¹⁵⁸ Art. 110 LPV 3/1.992, “Cuando se trate de disolución por muerte de un cónyuge y no existan descendientes, además de las normas del artículo anterior se aplicaran...”.

¹⁵⁹ Art. 5-2 de la Ley 7/2.015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores: El Convenio regulador deberá contener: la pensión compensatoria que pudiera corresponder conforme al artículo 97 del Código Civil y el artículo 5 de la Ley 2/2.003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho”.

En la exposición de motivos de la ley se hace una referencia a la a la igualdad entre hombres y mujeres y a la búsqueda en el plazo menor de tiempo de la autonomía de los progenitores, que constituye una finalidad pretendida y que se concreta en el capítulo V dedicado al uso de la vivienda, que determina el uso que se dará al hogar familiar y al ajuar doméstico y, aunque no de forma expresa, pero sí de manera indirecta tiene relación con la pensión compensatoria y su temporalidad en caso de otorgamiento.

2.6.- Ley 15/2.015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria¹⁶⁰

Ha de hacerse mención a la ley de jurisdicción voluntaria, que ha sido publicada en el B.O.E. de 3 de julio de 2.015, entrando en vigor a los veinte días de su publicación con las excepciones que contempla la disposición final vigésimo primera de la ley. La nueva Ley de la jurisdicción voluntaria ha supuesto la introducción de una importante reforma en el articulado del Código Civil, en materia de disolución por divorcio y separación matrimonial.

En materia de separación y disolución por divorcio del vínculo matrimonial, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, aun no afectando desde luego a los presupuestos sustantivos o de fondo de ambas figuras, incide de modo importante sobre ellas.

Es elevado el número de artículos referidos al régimen de la separación o de la disolución por divorcio que ahora reciben nueva redacción: artículos 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 95 párrafo primero, 97 último párrafo, 99, 100 y 107 apartado 2 CC, entrando en vigor de forma inmediata sin demorarse al 30 de junio de 2.017, como sí acontece respecto a otros artículos del Código Civil afectados asimismo por la reforma (como lo son, con excepciones, los referidos a la forma de celebración matrimonial).

La novedad fundamental en lo que atañe a la separación y al divorcio viene constituida, sin duda, por la posibilidad de que los cónyuges, concurriendo determinadas circunstancias, puedan instar la separación o

¹⁶⁰ CARRIÓN VIDAL, Almudena, “Divorcio y separación en el Código Civil tras la reforma por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 3, agosto 2015, páginas 395-412.

la disolución del matrimonio ante funcionarios distintos de aquellos que tienen atribuida la potestad jurisdiccional.

La exposición de motivos de la Ley, se refiere en los siguientes términos: “...al tiempo que se introducen modificaciones que afectan a la regulación de la separación o divorcio de mutuo acuerdo de los cónyuges sin hijos menores de edad fuera del ámbito judicial, atribuyendo al Secretario judicial y al Notario las funciones que hasta ahora correspondían al Juez...”

Los presupuestos que necesariamente habrán de concurrir para que los cónyuges puedan acogerse a lo dicho son: de un lado, que la separación o la disolución por divorcio lo sean *de mutuo acuerdo* conforme a los artículos 82.1 CC y 87 CC; de otro, *que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores* conforme al artículo 81, párrafo primero, ya que en este segundo supuesto aunque la separación o divorcio sea de mutuo acuerdo el conocimiento y tramitación entonces está reservada en exclusiva la competencia al órganos jurisdiccional.

En efecto, el artículo 81, párrafo 1 CC dispone que: “*Se decretará judicialmente la separación (obviamente en cualquiera de sus modalidades, “de mutuo acuerdo” o “contenciosa”) cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio*”.

De otro lado, el inciso relativo a que lo dispuesto en el artículo 81 CC será de aplicación *cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio*. Es decir, será de aplicación, tanto si el matrimonio se haya celebrado de forma canónica o en alguna de las formas religiosas admitidas, lo cual resulta innecesario ya que el régimen jurídico contenido en el Código Civil es de aplicación en general y para cualquier forma de celebración del matrimonio.

El artículo 82.1 CC dispone tras facultar a los cónyuges para “acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario...”, en el mismo artículo en su número 2, artículo 82.2 CC dispone que: “No

será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores”.

Es decir, que otorga la facultad a los cónyuges para proceder a la separación de mutuo acuerdo ante el Secretario judicial o en escritura pública ante un Notario, transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, condicionando esta facultad a que, o bien no tengan descendencia, o éstos sean mayores de edad.

En cuanto a la disolución por divorcio la regulación es sustancialmente idéntica, siquiera ahora con remisión del artículo 87 CC al contenido del artículo 82 CC: *“Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82 CC, debiendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en él”*

En consecuencia, y al igual que en la separación, existiendo hijos en la circunstancias anteriormente descritas, la disolución por divorcio (ya de mutuo acuerdo, ya contencioso) precisará en todo caso de la intervención de los órganos jurisdiccionales.

La circunstancia de que la disolución del matrimonio pueda ahora tener lugar “por decreto que así lo declare” (ante el Secretario judicial), o “desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública” (ante Notario), ambos supuestos son con la existencia de “mutuo acuerdo”.

El artículo 85 CC (del texto de la Ley 30/1.981) se ha de poner en relación con el artículo 89 CC, que expresamente declara, que la disolución del matrimonio por divorcio, *“sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare”*.

Dado el carácter facultativo de los nuevos artículos 82 CC y 87 CC *“los cónyuges podrán”*, sigue siendo posible que los ciudadanos que así lo deseen puedan tramitar su divorcio o separación “de mutuo acuerdo” ante órganos jurisdiccionales.

Los nuevos artículos 82 CC y 87 CC se refieren a la “formulación” del convenio, a diferencia de la anterior redacción de “propuesta”.

El nuevo artículo 90, número 2, párrafo tercero CC, contempla el supuesto en el que, advertidos los otorgantes por el Secretario judicial o el Notario, del carácter dañoso o gravemente perjudicial de alguna de las cláusulas del convenio, “la aprobación de la (nueva) propuesta de convenio” corresponderá ya, exclusivamente, al Juez.

Se marca así una diferencia, entre que la tramitación de la separación/divorcio “de mutuo acuerdo” se lleve a cabo ante el Juez o, por el contrario, ante el Secretario judicial o el Notario, puesto que en el primer caso habrá formular nuevas “propuestas” hasta que, finalmente, recaiga la homologación judicial conforme al artículo 90.2 CC, segundo párrafo.

En el segundo caso, que la tramitación de la separación/divorcio “de mutuo acuerdo” se lleve a cabo ante el Secretario judicial o el Notario, tal posibilidad se excluye, cuando el Secretario judicial o Notario “considerasen que, a su juicio, alguno de ellos (de los acuerdos) pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para. . . lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente, en este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador” conforme al artículo 90.2 CC, párrafo tercero.

El artículo 82 CC se refiere literalmente a la “formulación del convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario”, siendo necesaria la intervención personal de los cónyuges en el otorgamiento, “sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio”, parece obligue a concluir que los cónyuges comparecerán ante Secretario judicial o Notario con un texto (proyecto) de convenio escrito (ya discutido y consensuado previamente, con el asesoramiento de sus respectivos letrados), y será sobre ese texto previo sobre el que se desarrollará la labor “homologadora” del Secretario judicial o el Notario, prácticamente de modo idéntico a lo que ocurrirá en el caso de que la separación/divorcio “de mutuo acuerdo” se tramite ante el Juez.

Cuando se trate de tramitación judicial se tratará de “presentar” una propuesta de convenio, en tanto que cuando se trate de tramitación ante

Secretario judicial o Notario, la “elaboración o confección” mismas del convenio van a llevarse a cabo ante dichos funcionarios.

El texto definitivo del convenio se incorporara o plasmara en la escritura pública notarial o en el documento autorizado por el Secretario judicial.

Por lo demás, el contenido mínimo del convenio regulador, igual que en la legislación anterior, viene fijado en el artículo 90 CC.

En el convenio regulador se debe determinar “las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación”. En la nueva legislación debe constar asimismo “la voluntad inequívoca de separarse”, bastando con que exista un “propósito serio” de separarse/divorciarse, pero ese propósito serio, a su vez, deberá inferirse del hecho mismo de la formulación del convenio regulador, pero aun concurriendo dicha “voluntad”, ello no es óbice a una hipotética “reconciliación” posterior de los cónyuges separados conforme al artículo 84 CC, que pondrá “término al procedimiento de separación (si este no hubiere concluido) y dejará sin efecto ulterior lo resuelto en él” (si ya hubiere finalizado).

La intervención de los cónyuges “en el otorgamiento” deberá llevarse a cabo “de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio”. No siendo posible hacerlo por representación.

Asimismo, “deberán otorgar el consentimiento. . .los hijos mayores o menores emancipados. . .respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar” conforme al artículo 82. 1 CC, párrafo segundo, inciso final.

La nueva redacción del artículo 83 CC incluye las referencias a los funcionarios ante quienes se puede proceder a la separación, ya que la separación “de mutuo acuerdo” puede ahora tener lugar ante funcionarios distintos de los investidos de potestad jurisdiccional.

Los efectos del “decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine” (“La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica”) produce los mismos efectos, que ahora se extienden

al “decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine”. El único deber conyugal que queda en suspenso es el de convivencia, subsistiendo los de socorro y fidelidad.

El párrafo segundo del artículo 83 CC precisa que *“los efectos de la separación. . .se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82 CC”*.

Cuando la separación se tramite ante Secretario judicial igualmente deberá ser “firme” el decreto expedido por aquél que la declare, y finalmente, cuando lo sea ante Notario la “producción” de esos efectos tendrá lugar “desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública”.

En el párrafo primero se dice del “otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador”; en el párrafo segundo el legislador se refiere a “la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública”.

A diferencia de la regulación anterior, en la que no se hacía referencia a la inscripción de la sentencia en el Registro Civil, en la nueva redacción el párrafo segundo, inciso final del artículo 83 CC establece que: “Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura pública al Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe”.

El nuevo artículo 84 CC, referido a la “reconciliación” de los cónyuges separados coincide con el texto respecto al párrafo primero, precisando ahora el segundo que: *“Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones”*, añadiendo el párrafo tercero y último que *“La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente”*.

Cuando la separación tramitada ante Secretario judicial o Notario, la reconciliación deberá venir formalizada, en “escritura pública o acta de manifestaciones”. Mientras el otorgamiento de la escritura pública

corresponderá, exclusivamente, a los Notarios, el “acta de manifestaciones” podrá formalizarse por comparecencia de los cónyuges ante Notario, o ante Secretario judicial. Y, obviamente, en ambos casos, el Notario que proceda al otorgamiento de la escritura (en su caso, del acta) o el Secretario ante el cual se formalice el acta, podrán ser, o no, aquéllos ante los cuales se tramitó la separación.

La redacción actual del artículo 87 CC, (referido a la disolución por divorcio “de mutuo acuerdo”, es reproducción, por remisión al artículo 82 CC, de la de este último, (referido a la separación “de mutuo acuerdo”).

El artículo 89 CC, que se refiere a la disolución por divorcio, tiene una única modificación en el inciso inicial, la referida a la circunstancia de que la disolución del matrimonio: *“Sólo podrá tener lugar por sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza”*, en la actual *“Los efectos de la disolución por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87 CC”*.

En cuanto al artículo 90 CC, las alteraciones introducidas en su texto por la Ley 15/2015, son la de posibilitar el divorcio o la separación “de mutuo acuerdo” ante funcionarios no investidos de potestad jurisdiccional.

Comparando así la nueva redacción respecto a la anterior, se constatan las siguientes diferencias: permanece igual el número 1, afectando las modificaciones a los números 2, 3 y 4.

En cuanto al número 2, párrafo primero, la modificación de su redacción, pasa a ser una “posibilidad”, y no ya una “necesidad”, la de que *“los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio (vengan) presentados ante el órgano judicial”*.

Se mantienen idénticos el resto del párrafo primero y el segundo, atinente al régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos.

Más modificada es la redacción del párrafo tercero del citado número 2, y de la que se infiere una primacía de la homologación judicial del

convenio regulador, frente a la posibilidad de formalización de aquél ante el Secretario judicial o Notario.

En este segundo supuesto, si “éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos (literalmente “de ellos”, de los acuerdos, “rectius”, “de las cláusulas” del acuerdo) pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador”.

El párrafo concluye con una referencia a la “aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública”, momento a partir del cual “los acuerdos podrán hacerse efectivos por la vía de apremio”.

Finalmente, el número 3 del precepto prevé la posibilidad de alteración, en su caso, de las medidas adoptadas en los acuerdos formalizados ante el Secretario judicial o en escritura pública, *“cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de circunstancias de los cónyuges”*: en tal caso *“podrán (aquellas) ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código”*.

La circunstancia de que el acuerdo originario se formalizare, por ejemplo, ante Secretario judicial, o, por el contrario, ante Notario, no empece lo más mínimo para que ese “nuevo acuerdo” de modificación del primero pueda, a su vez, venir formalizado ante funcionario distinto de aquél ante el cual se formalizó el acuerdo que ahora se modifica.

El artículo 90 CC modificado establece que las partes *“Podrán establecer” “las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio”*.

La modificación del artículo 95 CC afecta únicamente al párrafo primero, ya que en el segundo sólo se sustituye la forma verbal en presente (“Si la sentencia de nulidad declara la mala fe...”) por el condicional (“deklarara”).

El párrafo primero amplía la referencia anterior, que se refería solo a la “sentencia firme”; la actual lo hace también al “decreto firme” o a “la

escritura pública que formalicen el convenio regulador”, que “producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto”.

La nueva redacción del párrafo primero concluye que “la sentencia, el decreto o la escritura” producirá la disolución del régimen económico matrimonial, y “aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto”.

Dicha liquidación procederá cuando se esté en presencia de un régimen económico de comunidad (sociedad de gananciales, participación en ganancias, etc), de algún modo también habrá que practicarla cuando el régimen sea el de separación de bienes.

Las partes que formalizan el convenio regulador, puedan dejar fuera la formalización la “liquidación” del régimen, si no hubiere mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto.

Pero como la “liquidación” del régimen económico matrimonial forma parte del “contenido mínimo” que en todo caso por imperativo del artículo 90.1, e) CC deberá reflejarse en el convenio¹⁶¹.

¹⁶¹ Art. 90 CC: “El convenio regulador a que refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá contener, al menos, los siguientes extremos: A) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. B) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación con los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquellos. C) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. D) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías, en su caso. E) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio. F) La pensión que conforme al artículo 97 CC correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges. Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que éstos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos tendrá que hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por vía de apremio. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.

En consecuencia, al menos en un primer momento, en el de elaboración, redacción y tramitación del convenio regulador ante cualquiera de los funcionarios competentes para su “formalización”, hay que presumir necesariamente la existencia de mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. Si posteriormente, en el momento de la “formalización” definitiva, quedase fuera de aquella “la liquidación” (por inexistencia de mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto), aun habiéndose formalizado el convenio, la “liquidación” del régimen vendrá demorada a un momento posterior: el momento en el que ese “mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto” exista o tenga lugar.

El legislador reconoce y admite la posibilidad de que la postura de cada cónyuge respecto a la liquidación del régimen pueda cambiar, o experimentar alteración, en el curso de la tramitación misma del convenio regulador, y que, en consecuencia, las posiciones iniciales (las de admisión a trámite del proyecto de convenio) no sean ya las existentes en el momento de la “formalización” definitiva de aquél. Para tal caso, la “disolución” del régimen no irá acompañada de su “liquidación”, que se realizará en un momento posterior.

El artículo 97 CC se modifica en el último párrafo: por un lado, por la atribución al Secretario judicial y al Notario de funciones que hasta ahora correspondían al Juez: y por otro, por la oportunidad de llevar a aquél extremos que, o bien se inferían siquiera implícitamente de otros preceptos (así la duración o el momento de cese de la pensión, cuya necesidad de fijación se deducía implícitamente del carácter temporal que, en su caso, tuviere aquélla), o convenía “reagrupar” conjuntamente: *“En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad”*.

El artículo 99 CC sólo se modifica en que, por de un lado, se suprime la referencia *“conforme al artículo 97 CC”*, que se contenía inmediatamente después del inciso “la pensión fijada judicialmente” (redacción de 1981), y por otro, añade ahora: *“O por convenio regulador formalizado conforme al artículo 97”*.

El artículo 97 CC contiene los criterios que deberán ser tenidos en cuenta en la fijación de la pensión compensatoria, tanto si esa fijación se

lleva a cabo por el Juez en el curso de un procedimiento contencioso, o de mutuo acuerdo, como si lo fuere en la tramitación de un convenio regulador ante Secretario judicial o Notario.

El convenio regulador “se formaliza” conforme al artículo 97 CC, refiriéndose a que será la pensión compensatoria pactada, en su caso, en el marco de un convenio “formalizado” de conformidad con otros preceptos, la que deberá sus criterios de determinación a las reglas que aparecen recogidas en el citado artículo 97 CC.

La nueva redacción del artículo 100 CC se amplía, pasando de un párrafo a dos. El párrafo primero establece que, *“Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen”*.

Evidentemente el legislador se refiere a un divorcio/separación ante el Juez, y es indiferente que el divorcio/separación lo haya sido contencioso o “de mutuo acuerdo”. En tal caso, la modificación en el importe de la pensión exigirá “alteraciones” en la fortuna de alguno de los cónyuges. En la nueva redacción el adjetivo “sustanciales” (“alteraciones sustanciales”) que se contenía en el texto proveniente de 1.981 se ha suprimido, con la consecuencia de la ampliación de los márgenes de apreciación de los jueces acerca de cuando existan, o no, alteraciones que deban incidir en el importe fijado en su día.

El párrafo segundo del artículo 100 CC dispone que *“La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código”*.

Las modificaciones precisarán en todo caso “alteraciones” (siquiera no ya necesariamente “sustanciales”) en la fortuna de uno u otro cónyuge; no parece pueda predicarse esta característica en el caso de que la pensión, y bases de actualización de la misma, vengan fijadas en un convenio regulador ante Secretario judicial o Notario.

Cabe concluir que con la presente reforma legal los cónyuges gozaran de una mayor autonomía para fijar la pensión y las bases de actualización de la misma en los supuestos señalados en el artículo 100 CC.

CAPÍTULO III

DERECHO COMPARADO (I): LA UNIÓN EUROPEA

3.1.- Introducción

La armonización comunitaria de las legislaciones sobre divorcio de los Estados miembros de la Unión Europea es un asunto todavía pendiente no resuelto por las autoridades comunitarias y que sigue planteando numerosos problemas para su puesta en práctica.

Por lo que respecta a los ámbitos de la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones de divorcio, sí se ha avanzado significativamente, pues las normas del Reglamento 2201/2.003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis) se superponen a las normas internas de los Estados miembros en las materias reguladas.

Así, un matrimonio “internacional” que quiera divorciarse en la UE está sujeto desde el 1 de marzo de 2.005 a las normas de competencia del Reglamento Bruselas II bis. Del mismo modo, si tal matrimonio quiere que se reconozca (o que se ejecute) en un Estado miembro una sentencia de divorcio pronunciada en otro Estado miembro, también estará sujeto a las normas sobre reconocimiento y ejecución de tal Reglamento.

Recientemente se ha publicado la ley 29/2.015 de cooperación internacional en materia civil, publicada en el BOE de 31 de julio de 2.015, aplicándose la ley en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Esta ley integra y detalla el artículo 177 LEC, dedicado a la cooperación internacional.

Sin embargo, en el ámbito de la ley aplicable al divorcio “internacional” no existe ningún instrumento comunitario que armonice las legislaciones de los Estados miembros y prevalezca sobre las distintas legislaciones nacionales. Así, en los supuestos de divorcio “internacional” en la UE, una vez incoado el proceso de divorcio ante el órgano

jurisdiccional de un Estado miembro (cuya competencia responderá a los criterios recogidos en el Reglamento Bruselas II bis), la legislación aplicable al caso se determinará de conformidad con las normas nacionales de conflicto de leyes de ese Estado. En el caso español, la norma de conflicto de leyes aplicable en materia de divorcio es el artículo 107.2 CC.

Como pone de manifiesto la Comisión Europea en su *Libro verde sobre la legislación aplicable y la competencia en asuntos de divorcio* (2.005),¹⁶² la falta de armonización comunitaria en las normas de conflicto de leyes en materia de divorcio produce efectos negativos como la falta de seguridad jurídica y de predictibilidad para los cónyuges y el riesgo de obtener un resultado que no corresponde a las legítimas expectativas de los ciudadanos, entre otros. Por ello, resultaría muy conveniente conseguir la adopción de un instrumento comunitario que llevara a cabo la armonización de las normas de conflicto de leyes en materia de divorcio en la Unión Europea¹⁶³.

Por último, por lo que se refiere a la regulación sustantiva (y procesal) del divorcio en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, se aprecian diferencias significativas entre los Estados.

Todos los Estados miembros salvo Malta¹⁶⁴ admiten el divorcio¹⁶⁵. Cabe apreciar una tendencia reciente entre los Estados miembros de la Unión a favorecer el divorcio de mutuo acuerdo y eliminar la culpa como

¹⁶² Documento web: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com_2005_0082es01.pdf.

¹⁶³ *Libro verde la Comisión, tipos de normas de conflicto de normas de los Estados miembros*, internet: http://europa.eu.int/comm/justice.home/doc_centre/civil/doc/sec_2005_331_en.pdf.

¹⁶⁴ Malta no permite el divorcio pero reconoce las sentencias de divorcio pronunciadas por los tribunales extranjeros competentes.

¹⁶⁵ Hasta hace muy poco Irlanda prohibía el divorcio. Los irlandeses se pronunciaron en referéndum a favor de su legalización. La principal condición para la admisión del divorcio es la separación durante cuatro de los cinco años anteriores a la demanda. Asimismo, se requiere que no exista intención de reconciliación y que se protejan debidamente los intereses de los hijos y de los cónyuges.

causa de divorcio. En este sentido, hay que hacer referencia a las leyes francesa y española sobre el divorcio¹⁶⁶.

Pero persisten diferencias significativas en el ámbito de las causas de divorcio y en el ámbito del procedimiento de divorcio entre los Estados miembros.

En primer lugar, vamos a examinar sucintamente las distintas causas de divorcio admitidas en las legislaciones de los Estados miembros de la UE.

Respecto del divorcio por mutuo acuerdo, cabe decir que algunos Estados miembros consideran el mutuo acuerdo como una causa de divorcio suficiente¹⁶⁷, mientras que para otros es una causa válida pero no suficiente a la que se deben añadir otras circunstancias. Respecto del divorcio por ruptura irremediable del matrimonio, ésta causa se admite generalmente en todos los Estados miembros¹⁶⁸, aunque dicha circunstancia tiene que ser probada por distintos hechos, por ejemplo, un periodo de separación de hecho, la duración mínima del matrimonio o la edad mínima de los cónyuges entre otros.

En lo que se refiere al divorcio basado en la culpa, son varios los Estados miembros que lo permiten¹⁶⁹. Esta causa de divorcio exige que se hayan producido graves o repetidas violaciones de los deberes y obligaciones maritales, haciendo que la convivencia entre los esposos sea de todo punto intolerable. Aquí se incluyen circunstancias como la violencia doméstica, el adulterio y el incumplimiento de los deberes económicos para el levantamiento de las cargas del matrimonio. Por otro lado, en lo que respecta al divorcio por causa de separación de hecho

¹⁶⁶ La ley francesa sobre divorcio es la Ley 2.004-439 de 26 de mayo de 2.004, publicada en el Journal officiel de la République française, 2004, núm.122, 27.05.2004, Página 9319.

¹⁶⁷ Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Portugal.

¹⁶⁸ Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Reino Unido (en las tres jurisdicciones británicas: Inglaterra/Gales, Escocia e Irlanda del Norte). Antes de la nueva ley española sobre el divorcio (2005), se incluía a España en este grupo de países, por interpretar la antigua causa de divorcio de la “falta de affectio maritalis” como una quiebra irreparable del matrimonio.

¹⁶⁹ Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia (aunque la nueva ley de 2.004 margina esta causa de divorcio por culpa), Lituania, Luxemburgo y Portugal.

previa, algunos Estados miembros la tienen como una causa autónoma y suficiente para el divorcio¹⁷⁰, mientras que otros Estados consideran el periodo de separación de hecho como prueba que justifica el divorcio por causa de quiebra irreparable del matrimonio¹⁷¹.

Por último, respecto del divorcio sin causa, cabe referirse a las legislaciones de Suecia y Finlandia, pues junto con España, son los únicos Estados miembros que admiten el divorcio sin causa. Tanto en el caso sueco como en el finlandés no se exige causa de divorcio, sino únicamente un periodo de consideración o reflexión de 6 meses. La legislación finlandesa exige en todo caso este periodo de consideración, mientras que la legislación sueca sólo lo exige cuando uno de los cónyuges no consiente o cuando los cónyuges tienen la custodia de un hijo menor de 16 años.

Pero, consecuentemente, bajo la legislación sueca, si el divorcio es de mutuo acuerdo y los cónyuges no tienen bajo su tutela a un hijo menor de 16 años, no se reclamará ningún periodo de consideración para proceder al divorcio.

En otro orden de cosas, conviene hacer una breve referencia a los Estados miembros de la UE que contemplan en sus legislaciones nacionales la separación legal como institución jurídica autónoma y la posibilidad de convertir dicha separación legal en divorcio. Así, los Estados que admiten la separación legal son Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Reino Unido. De estos Estados sólo un pequeño grupo permiten la conversión de la separación legal en divorcio, a saber: Bélgica, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo (después de tres años), Portugal (después de dos años) y Dinamarca (después de un año).

A continuación se analizarán con mayor detenimiento las legislaciones de Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, Reino Unido, con mención a Canadá por la influencia de Francia y Gran Bretaña, y de Portugal.

¹⁷⁰ Bélgica (2 años), Chipre (5 años), Francia (2 años), Irlanda (4 años), Letonia (3 años), Lituania (1 año), Luxemburgo (3 años si hay acuerdo entre los esposos y 5 años a falta de acuerdo), Portugal (1 año si hay acuerdo, 3 años a falta de acuerdo).

¹⁷¹ Alemania, Austria, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Reino Unido y República Checa.

3.2.- Derecho Francés

3.2.1.- Generalidades

La pensión compensatoria que se regula en el Derecho francés se considera como un claro precedente para la introducción y regulación de la pensión compensatoria que se contiene en el artículo 97 CC, sin embargo se diferencia claramente del derecho español en dos aspectos fundamentales¹⁷²:

1º.- Porque únicamente puede tener lugar en los supuestos de divorcio, para los supuestos de separación no es aplicable, ya que rige en esta situación el llamado “deber de socorro entre cónyuges”, sin embargo en España puede tener lugar tanto en los casos de divorcio como de separación matrimonial.

2º.- En el momento que deberá tomarse en consideración para determinar la existencia de una diferencia patrimonial en la situación de los cónyuges, diferencia que es la que concretamente se pretende compensar con la pensión, de ahí su denominación de compensatoria, momento que es el de la firmeza de la sentencia de divorcio, sin embargo en España es el momento de la ruptura matrimonial.

En el momento en que el legislador introduce en nuestro ordenamiento la pensión ya se había producido en el Derecho francés¹⁷³. En Francia el régimen legal se había establecido por una ley de 11 de junio de 1.975 que modificaba la anterior regulación de 1.884¹⁷⁴, y se encontraban en fase de modificación en el Derecho italiano, los postulados que habían regido durante décadas en relación con el divorcio. En lo relativo a los principios de culpabilidad se sustituyeron por las de desafección, como elemento fundamentador de la disolución del vínculo.

¹⁷² HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofía, “*La Pensión Compensatoria*”. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873. Página 6.

¹⁷³ SANCHEZ GONZALEZ, María Paz. “*La Extinción del Derecho a la Pensión Compensatoria*”. Editorial Comares. Granada 2.005. Página 12.

¹⁷⁴ El artículo 301 del Code Civil de 1.884 otorgaba al cónyuge que había obtenido el divorcio el derecho a una pensión alimenticia que no podía exceder de la tercera parte de los ingresos del cónyuge deudor.

El sistema francés establecía distintos tipos de divorcio en función de las circunstancias concurrentes en la ruptura: divorcio por culpa, divorcio por cese de la convivencia y divorcio por mutuo consentimiento.

La Ley Francesa de Divorcio se preocupa de las relaciones y obligaciones de los ex-cónyuges con posterioridad a la declaración del divorcio, y más concretamente en lo relativo al derecho de alimentos de cada uno de ellos.

El derecho de alimentos entre los cónyuges ha constituido siempre una cuestión no resuelta en aras de un estricto sentido de justicia, y por aplicación directa de los principios de equidad, como forma de equilibrar o compensar la peor situación económica en que uno de los cónyuges quede como consecuencia de la ruptura del matrimonio en relación con el otro.

La solución que en un principio se adoptó, se resolvió a partir del concepto de culpa: se imponía la pensión alimenticia al cónyuge culpable en favor del inocente, y ello en contra incluso de las pretensiones de la propia ley.

El sistema que se estableció en la Ley Francesa de 1.792¹⁷⁵, pretendía que el divorcio resolviera toda relación, todo vínculo económico entre los ex-esposos, salvo, en su caso, la pensión alimenticia que debiera un cónyuge satisfacer al otro para el mantenimiento de los hijos comunes.

A pesar de ello, en Francia se estableció muy pronto la pensión alimenticia al cónyuge inocente como una consecuencia lógica del divorcio-sanción: el cónyuge culpable debía ser sancionado mediante la satisfacción de una pensión alimenticia al inocente que a la par se constituía en pena para el culpable e indemnización de los perjuicios materiales y morales sufridos por el inocente.

La precedente formulación se recogió en el artículo 301 CC Francés, por medio de una interpretación jurisprudencial que señalaba que la

¹⁷⁵ Ley Francesa de 1.792. Fue una consecuencia lógica de su época, de la Revolución Francesa, al considerar el matrimonio un contrato civil. La Ley del Divorcio de 1.792 concedía 7 motivos para poder divorciarse: La demencia; La condenación de uno de los cónyuges a penas aflictivas e infamantes; Los crímenes, sevicias o lesiones graves de uno de ellos hacia el otro; La conducta pública desordenada; El abandono al menos durante dos años; La ausencia sin noticias por lo menos durante cinco años; La emigración”.

pensión del párrafo 1º del artículo 301 era una pensión alimenticia destinada a reparar el perjuicio resultante de la desaparición anticipada del deber de socorro, de la que resultaba su prolongación y sustitución.

Francia mantiene después de la reforma de 1.975,¹⁷⁶ en virtud de la Ley de 11 de Julio, de reforma del Código Civil, un sistema de pensión por divorcio, en el que mantiene rasgos del viejo sistema de la pensión fundada en el divorcio-sanción, en uno de los supuestos concretos de divorcio que el Código regula.

En el Derecho Francés se regulan tres prestaciones de contenido económico que pueden establecerse como consecuencia del divorcio, de aplicación para cada una de las situaciones que en el Código Civil Francés se regulan, encontrándose claramente diferenciadas en razón de los fines que con las mismas se persiguen:

- La primera de las medidas es la denominada indemnización de daños y perjuicios contenida en el artículo 266 CC Francés¹⁷⁷, y a la que habrá lugar cuando el divorcio es pronunciado por culpa exclusiva de uno de los cónyuges.

En este caso puede el cónyuge culpable ser condenado a la indemnización de daños y perjuicios en reparación de los perjuicios morales o materiales que la disolución del matrimonio hubiese ocasionado al otro. El cónyuge perjudicado sólo podrá solicitar la reparación de los daños y perjuicios que le hubiesen sido ocasionados como consecuencia del propio divorcio, pensión indemnizatoria que se entiende se constituye como precedente de la prestación económica de carácter indemnizatorio contenida en el artículo 98 de nuestro Código Civil para los supuestos de nulidad.

- La segunda de las medidas económicas reguladas en el Derecho Francés es la denominada prestación compensatoria, regulada en el

¹⁷⁶ Reforma de 1.975, Ley de 11 de Julio de 1.975 de reforma del Código Civil, Casos de divorcio por culpa exclusiva de uno de los cónyuges o por mutuo consentimiento. Art. 270 del Code Civil: Establecimiento de una pensión destinada a compensar, en la medida de lo posible, la disparidad que la ruptura del matrimonio crea en las condiciones de vida respectivas.

¹⁷⁷ Art. 266 CC Francés: "Indemnización de daños y perjuicios cuando el divorcio es pronunciado por culpa exclusiva de uno de los cónyuges".

artículo 270 CC Francés¹⁷⁸, que constituye el precedente inmediato de la pensión que se establece en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 97 CC.

Este tipo de pensión procede en el Derecho francés cuando el divorcio no es pronunciado por ruptura de la vida en común, también llamado divorcio con consentimiento, y ello porque si bien el pronunciamiento del divorcio extingue el deber de socorro entre los cónyuges, vigente hasta el momento de la disolución del vínculo matrimonial, puede uno de los cónyuges ser obligado a satisfacer al otro una prestación destinada a compensar en lo posible las diferencias económicas que la ruptura ha creado en sus condiciones de vida. Esta pensión encuentra su regulación en el artículo 270 CC Francés, e inspira, como se ha señalado, la pensión que establece el artículo 97 de nuestro Código Civil. De ahí la denominación que la doctrina y la jurisprudencia le otorgan de compensatoria, tal como sucede en el Derecho Francés.

Dicha prestación se fija según las necesidades del cónyuge acreedor y los recursos del deudor, teniéndose en cuenta para su determinación la situación en el momento del divorcio y su evolución en un futuro previsible conforme al artículo 271 CC Francés¹⁷⁹.

Para determinar la cuantía de la prestación en ambas legislaciones, se parte de los recursos de los que disponga el cónyuge obligado, constituyéndose como referentes para su determinación la edad, el estado de salud de los esposos, el tiempo ya dedicado o el que presumiblemente será preciso dedicar a la educación de los hijos, la cualificación profesional de cada uno de ellos, la pérdida eventual de sus derechos en materia de pensiones y la situación patrimonial de cada cónyuge en relación con la liquidación del régimen matrimonial, todo ello conforme a las previsiones del artículo 272 CC Francés,¹⁸⁰ claro precedente de las circunstancias consideradas en el artículo 97 CC.

¹⁷⁸ Art. 270 CC Francés: Se contiene la prestación compensatoria, claro precedente de nuestro artículo 97 del Código Civil. Procede cuando el divorcio no es pronunciado por ruptura de la vida en común, o divorcio con consentimiento.

¹⁷⁹ Art. 271 CC: “La cuantía de la prestación se fijara según las necesidades del cónyuge acreedor, y los recursos del deudor, teniéndose en cuenta para su determinación la situación en el momento del divorcio y su evolución en un futuro previsible”.

¹⁸⁰ Art. 272 CC Francés: “Para determinar el montante de la pensión se tendrá en cuenta la edad, el estado de salud de los esposos, el tiempo, ya dedicado o el que

Dado su eminente carácter compensatorio, la prestación se configura a tanto alzado y no puede ser revisada, salvo si la ausencia de revisión tuviera para uno de los cónyuges consecuencias de una extraordinaria gravedad, conforme al artículo 273 CC Francés, también claro precedente del artículo 100 CC, modificación de la pensión compensatoria por concurrencia de determinadas circunstancias.

La renta se establece con una duración igual o inferior a la vida del cónyuge acreedor, encontrándose sujeta a actualización, conforme al artículo 276.1 CC Francés, a la muerte del cónyuge deudor la obligación se transmitirá a sus herederos, como se indica en el artículo 276.2 CC Francés, también precedente del artículo 101.2 CC.

En el Derecho francés no habrá lugar a la fijación de tal prestación compensatoria en los supuestos de que la conducta del beneficiario sea la causante del divorcio. Sin embargo, en tal supuesto el citado cónyuge puede obtener una indemnización de carácter excepcional cuando, atendida la duración del matrimonio, el cónyuge hubiera prestado una colaboración directa a la profesión del otro y apareciera manifiestamente contrario a la equidad de negarle una compensación pecuniaria como consecuencia del divorcio,¹⁸¹ conforme al artículo 280.1 CC Francés, precedente de la prestación regulada en el artículo 23 de la Ley 8 /1993 de la Compilación de Cataluña.

- Como tercera prestación económica posterior al divorcio, el Derecho francés establece la del deber de socorro después del mismo, para los supuestos en que el divorcio se pronunciase por ruptura de la vida en común. En este caso, el esposo que ha tomado la iniciativa queda obligado al deber de socorro¹⁸².

En el supuesto de enfermedad mental, el deber de socorro cubre todo lo necesario para el tratamiento médico del cónyuge enfermo, conforme al artículo 281 CC Francés.

presumiblemente será preciso dedicar a la educación de los hijos, la cualificación profesional de cada uno de ellos, la pérdida eventual de sus derechos en materia de pensiones y la situación patrimonial de cada cónyuge en relación con la liquidación del régimen matrimonial”.

¹⁸¹ Art. 280.1 CC Francés: “No ha lugar a la pensión compensatoria cuando el divorcio se haya producido por la conducta del cónyuge beneficiario de la misma.”

¹⁸² Art. 281 CC Francés: “Deber de socorro mutuo entre los ex cónyuges que se concreta en forma de pensión”.

El cumplimiento del deber de socorro reviste la forma de una pensión alimenticia. Puede ser revisada en función de los recursos y necesidades de cada esposo, conforme al artículo 282 CC Francés¹⁸³, y cesa cuando el cónyuge contrae nuevo matrimonio o vive en estado de concubinato notorio, conforme al artículo 283 CC Francés¹⁸⁴, precedente del artículo 101.1 CC Español. A la muerte del deudor, la carga se transmite a sus herederos conforme al artículo 284 CC Francés¹⁸⁵, precepto inspirador del artículo 101.2 CC.

Cuando exista posibilidad para ello, la pensión alimenticia periódica se sustituirá por la constitución de un capital. En los casos en que constituido éste, sea insuficiente para cubrir las necesidades del acreedor, puede demandar un complemento bajo la forma de pensión periódica conforme al artículo 285 CC Francés.

Comparando la pensión del artículo 97 de nuestro CC con la prestación compensatoria francesa se observa, en primer lugar, que esta última es un sustituto del derecho de socorro para el caso de divorcio, mientras que en los supuestos de separación judicial subsiste íntegro el deber de socorro de los esposos, que toma la forma de una prestación alimenticia, conforme al artículo 303 CC Francés. Por ello, no puede por menos que concluirse que la pensión del artículo 97 CC es una copia de la prestación que regula el artículo 270 CC Francés, y que se constituye en el valor que uno de los cónyuges deba de satisfacer al otro a fin de restablecer entre ellos el equilibrio. Por eso se afirma que el empeoramiento debe referirse a un momento previo a la ruptura o separación.

3.2.1.1.- El convenio regulador

Nuestro denominado convenio regulador tiene un claro precedente en la regulación del Derecho Francés, en el que se distinguen dos clases de convenios: por una parte, el denominado convenio temporal y por otra el convenio definitivo, que en nuestro derecho sería el equivalente a las medidas provisionales y definitivas.

¹⁸³ Art. 282 CC Francés: “Modificación de la pensión por concurrencia de determinadas circunstancias, ingresos del obligado a su pago y necesidades del acreedor de la misma”.

¹⁸⁴ Art. 283 CC Francés: “La pensión establecida cesará cuando el cónyuge acreedor contrae nuevo matrimonio o vive en estado de concubinato notorio”.

¹⁸⁵ Art. 283 CC Francés: “A la muerte del deudor, la pensión no queda extinguida, la carga se transmite a sus herederos”.

El convenio o acuerdo temporal del Derecho francés es el primer documento que debe acompañarse obligatoriamente como requisito inicial del procedimiento, siendo un acuerdo de efectos temporales encaminado a regir provisionalmente la situación de los esposos, y en su caso la de los hijos, durante la tramitación del procedimiento.

Este acuerdo tiene por objeto y viene a sustituir en los divorcios contenciosos las medidas provisionales ordenadas por el Juez, conforme previenen los artículos 255 y 256 CC Francés. En el citado acuerdo se fijarán, conforme al artículo 256 CC Francés¹⁸⁶, las modalidades del ejercicio de la autoridad parental, guarda y custodia, el derecho de visitas, así como la pensión de alimentos que debe un cónyuge al otro a título de contribución para el cuidado de los hijos.

En contraposición a estas medidas, imperativas, las relativas a los propios esposos son facultativas, aunque es indispensable que el acuerdo contenga disposiciones sobre todos los puntos enumerados en el artículo 255 CC Francés¹⁸⁷, siendo al menos necesario señalar que los esposos han convenido en relación con su residencia respectiva, sobre el uso de la vivienda conyugal y del mobiliario, pareciendo oportuno precisar el montante de la pensión alimenticia, o sobre su ausencia y la causa que lo motiva.

Con el fin de asegurar y evitar decisiones repentinas, la Ley exige a los esposos un tiempo de reflexión de tres meses a su término, disponiendo de un plazo de seis meses más para ratificar su pretensión conforme al artículo 231.2 CC Francés¹⁸⁸, a su término para ratificar su pretensión. Esto quiere decir que los esposos tienen un plazo mínimo de tres meses y un plazo máximo de nueve para ratificar su demanda.

¹⁸⁶ Art. 256 CC Francés: “Los acuerdos deberán contener al menos disposiciones sobre el lugar de residencia de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, así como las visitas a los hijos menores de edad, alimentos que debe de entregar en concepto de alimentos para el cuidado de los hijos”.

¹⁸⁷ Art. 255 CC Francés: “Los acuerdos deberán contener al menos disposiciones sobre el lugar de residencia de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar, y del mobiliario, montante de la pensión alimenticia, o ausencia de esta y causa que lo motiva”.

¹⁸⁸ Art. 231.2 CC Francés: “El juez examinará la demanda con cada uno de los cónyuges; posteriormente los reunirá. Convocará luego al o a los abogados. Si los cónyuges persistiesen en su intención de divorciarse, el juez les indicará que su demanda deberá renovarse tras un plazo de reflexión de tres meses. A falta de renovación en los seis meses posteriores a la expiración de dicho plazo de reflexión, la demanda conjunta quedará sin efecto”.

El acuerdo definitivo, claro precedente de nuestro convenio regulador, requiere la expresa regulación sobre dos cuestiones: la liquidación del régimen matrimonial y la prestación compensatoria.

3.2.1.2.- Liquidación del régimen matrimonial

El procedimiento de la liquidación del régimen matrimonial se regula en el artículo 1.097 del Código de Procedimiento Francés, siendo necesario que comprenda una liquidación del régimen matrimonial o una declaración de su improcedencia.

Y para ello no basta un simple resumen de liquidación, breve: es necesario que el acuerdo contenga un verdadero estado de liquidación, completamente valorado, conteniendo a la vez las cuestiones relativas a la liquidación así como todas aquéllas sobre el reparto subsiguiente.

Los esposos no pueden en ningún caso modificar las reglas ordinarias de la liquidación del régimen matrimonial, únicamente les está permitido prevenir un reparto no igualitario, que puede combinarse con el mecanismo de la prestación compensatoria, no estándoles prohibido convenir la continuación de la indivisión.

La regulación expuesta del Derecho francés, inspira la regulación del Código Civil español, aunque no se traslade en su integridad al derecho español, sobre todo en lo relativo a la liquidación del régimen ganancial y a la pensión compensatoria, sobre la que no se hace ninguna mención expresa. De esta manera, queda abierta, la posibilidad de su renuncia expresa o tácita, suprimiéndose la imperatividad de pronunciarse sobre la misma de manera expresa como requisito previo a su aprobación judicial.

Cuestiones que dejan abierta la posibilidad de nuevos procedimientos de carácter incidental, base de la modificación legislativa francesa y verdadero fundamento de la aprobación judicial, inspiradora de una reforma que persigue evitar los procedimientos posteriores entre los cónyuges y lograr y, por otra, permitir la liquidación total de las relaciones entre los mismos.

La legislación francesa es globalizadora de la cuestión y, en consecuencia, se incardina de forma preceptiva en el convenio el régimen de liquidación de la sociedad ganancial, lo que permite evitar litigios

posteriores relativos a la liquidación, permitiendo a los cónyuges, al incluir la liquidación de la sociedad ganancial en el convenio, proceder, por medio de la adjudicación de los bienes que a cada uno de ellos corresponda, a compensar o satisfacer a tanto alzado sus recíprocas obligaciones, dado el carácter alzado de la pensión compensatoria.

Finalmente, dado que la pensión compensatoria solamente tendrá lugar como consecuencia de la sentencia de divorcio y más concretamente desde que ésta devenga firme, será precisamente éste el momento para determinar la existencia de diferencia económica que deberá ser compensada; diferencia económica que será la real como consecuencia de la previa atribución de bienes que a consecuencia de la liquidación se hubieren adjudicado a cada uno de los cónyuges. Por ello la diferencia económica es la situación definitiva alcanzada por cada uno de los ex-esposos tras el divorcio y ya materializada la disolución de la sociedad conyugal, razón por la cual la diferencia económica que se pretende compensar alcanza parámetros de globalidad, al considerarse la situación económica definitiva de cada uno de los ex-cónyuges.

En principio, el divorcio pone fin al deber de socorro, mas ello no puede por menos que dar lugar a una prestación destinada a compensar la disparidad de carácter económico que la ruptura del matrimonio provoque en uno de los esposos, con el fin de restaurar sus condiciones de vida en relación al momento anterior, es decir constante matrimonio, todo ello conforme al artículo 270 CC Francés. En los divorcios contenciosos es el Juez quien debe decidir en relación con la prestación compensatoria y fijar su modalidad. En el divorcio de mutuo acuerdo son los esposos los que deberán hacerlo, conforme al artículo 278 CC Francés¹⁸⁹.

Si bien es cierto, que los esposos son libres de establecer o no una prestación compensatoria y de establecerla, además, a su libre arbitrio, el Juez puede denegar su homologación hasta que se fijen de manera

¹⁸⁹ Art. 278 CC Francés: "En caso de divorcio por mutuo acuerdo, los esposos fijarán el importe total y las modalidades de la prestación compensatoria en el convenio que sometan a la homologación del Juez. Podrán prever que el pago de la prestación cese en el momento en que se produzca un acontecimiento determinado. La prestación podrá tomar la forma de una renta atribuida por una duración determinada. El Juez, sin embargo, se negará a homologar el convenio si éste fijara desigualmente los derechos y las obligaciones de los esposos".

concreta los derechos y obligaciones de las partes conforme al artículo 232-2 CC Francés¹⁹⁰.

Cuando el convenio reconoce a uno de los esposos el derecho a la prestación compensatoria ésta debe regularse en todo lo relativo a su modalidad, bien sea en forma de capital o renta, importe y garantías de pago. Si la prestación compensatoria consiste en una renta, es necesario acompañar, conforme al artículo 279-3 CC Francés¹⁹¹, una cláusula que permita a cada uno de los esposos pedir al Juez la revisión de la prestación convenida en caso de cambio imprevisto en sus recursos o necesidades.

Tal cláusula puede provocar entre los esposos un contencioso que el legislador pretende evitar, y por ello es aplicable a la revisión de la prestación compensatoria, la revisión excepcional prevista por el artículo 273 CC Francés¹⁹².

3.2.1.3.- La reforma de la Ley de 1.975

La continuación de los litigios después del divorcio dadas las distintas regulaciones pecuniarias, entre otras razones, puso de relieve los fallos de una legislación superada. Así, mediante la obligatoriedad de recurrir a un divorcio contencioso, los esposos proseguían con las hostilidades por las obligaciones existentes ligadas al matrimonio, al potenciar la Ley de 1.884 el divorcio por ruptura de la vida en común, también llamado divorcio contencioso, frente a los divorcios de mutuo acuerdo, que fueron los que se potenciaron con la reforma de 1.975.

El mantenimiento del deber de socorro del antiguo artículo 301 CC Francés después del divorcio entrañaba una posibilidad permanente de revisión, causa de numerosos procesos que el legislador de 1.975 quiso evitar mediante la modificación en cuatro ámbitos:

¹⁹⁰ Art. 262 CC Francés: “El plazo finalizará si tuviera lugar un parto tras la sentencia que autorice u homologue la residencia por separado o, en su defecto, tras la fecha en la que la sentencia de divorcio hubiera pasado a tener fuerza de cosa juzgada Si el marido muriera antes de que la sentencia de divorcio pasara a tener fuerza de cosa juzgada, el plazo empezará a contar a partir de la sentencia que autorice u homologue la residencia por separado”.

¹⁹¹ Art. 279-3 CC Francés: “En aplicación del artículo 268, cuando los cónyuges sometan a la homologación del juez un convenio regulador relativo a la prestación compensatoria, serán aplicables las disposiciones de los artículos 278 y 279.

¹⁹² Art. 273 CC Francés: “La prestación compensatoria tendrá un carácter a tanto alzado”.

1ª) Consistió en multiplicar las posibilidades de divorcio con acuerdo, así como de favorecerla, potenciando el acuerdo durante la tramitación del divorcio, lo que daba oportunidad a una ejecución armoniosa después del divorcio.

2ª) Consistió en disociar la atribución de los daños y las regulaciones pecuniarias. Los artículos 262 y siguientes del CC Francés señalan con precisión la fecha de los efectos patrimoniales del divorcio.

3ª) Es la relativa a la regulación y liquidación de los bienes. Los artículos 264-1 a 269 CC Francés regulan en general, y para cada clase de divorcio en particular, los efectos relativos a los bienes de los antiguos esposos.

4ª) Es la relativa a la concreción de las distintas obligaciones económicas para cada uno de los supuestos de divorcio, los artículos 270 a 285-1 CC Francés¹⁹³ previnieron, en su caso, las diferentes reglamentaciones pecuniarias.

A las previsiones anteriores debe añadirse lo dispuesto en el artículo 1.116 del Código de Procedimiento, que regula las liquidaciones de los regímenes matrimoniales¹⁹⁴.

3.2.1.4.- Efectos del divorcio en las relaciones patrimoniales

A) El principio de desaparición del deber de socorro. Excepciones:

¹⁹³ Art. 262 CC Francés: “El plazo finalizará si tuviera lugar un parto tras la sentencia que autorice u homologue la residencia por separado o, en su defecto, tras la fecha en la que la sentencia de divorcio hubiera pasado a tener fuerza de cosa juzgada. Si el marido muriera antes de que la sentencia de divorcio pasara a tener fuerza de cosa juzgada, el plazo empezará a contar a partir de la sentencia que autorice u homologue la residencia por separado”.

Art. 279 CC Francés: “El convenio homologado tendrá la misma fuerza ejecutoria que una resolución de justicia. Los esposos tendrán sin embargo la facultad de prever en su convenio que cada uno de ellos pueda, en caso de cambio importante en los recursos y las necesidades de una u otra de las partes, solicitar al Juez que revise la prestación compensatoria. Será aplicable también lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 275 así como en los artículos 276-3 y 276-4, según que la prestación compensatoria tome la forma de un capital o de una renta temporal o vitalicia”.

¹⁹⁴ Art. 1.116 del Código de Procedimiento Francés: regula las liquidaciones del régimen económico matrimonial.

El matrimonio se disuelve por la decisión adoptada en sentencia de divorcio una vez que ésta ha adquirido la condición de cosa juzgada conforme al artículo 260 CC Francés¹⁹⁵ y el deber de socorro entre los esposos cesa, en principio, en la citada fecha.

La Ley de 11 de julio de 1.975 pone fin en la mayor parte de los divorcios de la pensión del antiguo artículo 301 CC Francés en un artículo declarativo de principios, el artículo 270 CC Francés. El texto del antiguo artículo evocaba a la vez una pensión alimentaria que se sobreponía al deber de socorro que era de aplicación únicamente a los divorcios y que poseía un carácter indemnizatorio.

Con la nueva legislación se ha intentado regular de una manera definitiva las relaciones económicas de los esposos y, en concreto, las posibles diferencias económicas derivadas de la ruptura por medio de una regulación a tanto alzado y definitiva. Legalmente sólo se encuentra prevista en la que subsiste el deber de socorro y que concierne a los supuestos de divorcio por ruptura de la vida en común. Este supuesto es excepcional después de la modificación del artículo 270 CC Francés y únicamente aplicable a la citada forma de divorcio.

Pues bien, mantenidos o transformados los deberes antes existentes entre los cónyuges, la nueva Ley conserva la posibilidad de una condena a daños y perjuicios contra aquel de los esposos que hubiera cometido un hecho determinante de la ruptura del matrimonio, sin perjuicio de la aplicación del derecho común.

B) Regulación de las relaciones posteriores al divorcio:

La Ley ha previsto detalladamente la regulación de las relaciones pecuniarias entre los esposos. Éstos pueden establecer las reglas de su separación, con las únicas limitaciones derivadas del orden público familiar.

C) La prestación compensatoria

¹⁹⁵ Art. 260 del Código Civil Francés: "La resolución que pronuncie el divorcio disolverá el matrimonio en la fecha en que adquiriera fuerza de cosa juzgada".

El artículo 270 CC Francés establece la desaparición del deber de socorro, con la excepción de cuando uno de los esposos haya tenido que realizar al otro una prestación destinada a compensar, en lo que sea posible, la diferencia que la ruptura del matrimonio haya creado en las respectivas condiciones de vida.

Para evitar la confusión se ha de distinguir entre una demanda de prestación compensatoria con una demanda de contribución a las cargas del matrimonio o una demanda de prestación alimentaria.

La deuda alimentaria puede tener dos orígenes: la ley y el pacto establecido por las partes, habiendo admitido como convenio válido dentro de los establecidos entre los esposos, en el convenio regulador de las relaciones consecuencia del divorcio, el establecimiento de una pensión alimentaria. El legislador ha excluido, para otorgarlo, todo criterio relacionado con los perjuicios del divorcio.

D) La indemnización excepcional

El apartado 2º del artículo 280.1 CC Francés expresa la voluntad del legislador de no convertir la resolución sobre la disolución del matrimonio en un expediente sancionador, aun cuando no se renuncia por ello a reintroducir la equidad.

La indemnización no puede ser acordada a título excepcional y únicamente sí aparece que un hecho es manifiestamente contrario a la equidad.

El fundamento del texto es el enriquecimiento sin causa, por lo que se necesita la existencia del elemento del enriquecimiento contrario pero el texto no menciona las condiciones, por lo que se evidencia que se funda en un deber de equidad de orden moral sin verdaderas referencias económicas.

El supuesto típico es el de la colaboración de uno de los esposos en la actividad profesional del otro, pues resulta evidente que tal colaboración comporta un enriquecimiento para el titular de la actividad, y un correlativo empobrecimiento para el colaborador. De ahí la necesidad de la indemnización compensatoria del citado perjuicio.

3.2.1.5.- Regulación de la pensión compensatoria

A) Momento de apreciación

El artículo 270 CC Francés hace referencia a la ruptura del matrimonio, en la que se deben tener en cuenta todos los elementos que se producen hasta el día de la decisión, o, hasta que ésta adquiere la condición de cosa juzgada, y, en consecuencia, comprenderá todos aquellos aspectos que se hayan acontecido entre la primera instancia y la apelación, pues hasta este momento el divorcio no ha devenido definitivo.

No es posible remontarse a la fecha de la separación, al objeto de apreciar la disparidad requerida, ya que en ese momento se halla pendiente aún la liquidación de bienes. Además, el texto refrenda como momento determinante para apreciar la disparidad y el desequilibrio, no el de la ruptura de la vida en común sino el de la ruptura del matrimonio, la cual se ha producido cuando, habiendo desaparecido el vínculo, los ex-esposos se han desvinculado definitivamente a nivel económico, por la liquidación de la sociedad conyugal, y ya no existe posibilidad de afección de sus patrimonios respectivos por la conducta del otro cónyuge. Es en este momento en el que tendrá que constatarse esta disparidad a pesar de la separación anterior.

B) Demanda posterior de la pensión compensatoria

Cuando no se ha solicitado inicialmente la pensión compensatoria ya no se puede solicitar excepto cuando la omisión de la demanda respecto del momento del divorcio proviene de una valoración insuficiente de los resultados de una liquidación realizada ulteriormente. En dichos supuestos la prestación puede ser revisada cuando la falta de revisión acarreará consecuencias de una excepcional gravedad, y ello con fundamento en que ningún precepto lo prohíbe expresamente.

Deberá, así mismo, señalarse que el legislador señala el principio de una prestación compensatoria mediante la entrega de un capital en el artículo 274 CC Francés¹⁹⁶, y la misma es consecuencia del carácter alzado, aun cuando no impide la constitución de una renta.

¹⁹⁶ Art. 274 CC Francés: “El juez decidirá las modalidades según las cuales se ejecutará la prestación compensatoria entre las formas siguientes: 1º Pago de una

C) Término

La prestación, cuando se establezca mediante la forma de renta, puede ser atribuida con una duración determinada o por la vida del esposo acreedor, y puede establecerse con una duración que se concrete en la liquidación de la comunidad.

D) Revisión

Para los supuestos de renta rige el principio de indexación, sistema utilizado para compensar las pérdidas de valor de las obligaciones a largo plazo, deudas, obligaciones, salarios, etc, producidos por las desvalorizaciones monetarias o la inflación. Consiste en fijar un índice IPC, el valor de un bien o servicio, etc., que sirva como referencia para determinar el rendimiento o evolución de dicho elemento. Con relación a la revisión, el legislador ha establecido, en el artículo 273 CC Francés el principio de la ausencia de indexación, el cual surge de la naturaleza alzada de la prestación compensatoria.

El artículo 273 CC Francés establece la posibilidad de la revisión ante consecuencias de excepcional gravedad. Ante la ausencia de una cláusula de revisión una de las partes puede acudir al artículo 279 párrafo 3° CC Francés para instar la revisión en supuestos de excepcional gravedad.

El divorcio, que fue introducido en Francia por Ley n° 75-617 de 11 de julio de 1.975, ha sido objeto de diversas reformas¹⁹⁷.

cantidad de dinero, pudiendo quedar subordinado el pronunciamiento del divorcio a la constitución de las garantías previstas en el artículo 277. 2° Atribución de bienes en propiedad, o de un derecho temporal o vitalicio de uso, de vivienda o de usufructo, actuando la sentencia como cesión forzosa a favor del acreedor. Sin embargo se exigirá el acuerdo del cónyuge deudor para la atribución en propiedad de bienes que él haya recibido por herencia o donación”.

¹⁹⁷ La nueva ley del divorcio francesa suprime el “divorcio por ruptura de la vida en común” que sólo representaba el 1,3% de los divorcios y exigía que durante un plazo de seis años hubiera habido una separación de hecho de los cónyuges o una alteración de las facultades mentales de uno de los esposos lo suficientemente grave para que no existiera ni pudiera razonablemente existir una comunidad de vida entre los esposos.

3.2.1.6.- La reforma de 2.000¹⁹⁸

La reforma de 30 de junio de 2.000¹⁹⁹ pretende mitigar los excesos de las rentas vitalicias. El nuevo texto afirma la primacía de la entrega de la pensión compensatoria en capital, formulando la misma de forma más clara que la reforma de 1.975. Solo de forma excepcional y mediante una decisión especialmente motivada podrá el juez otorgar una renta vitalicia.

La entrega de esta renta podrá siempre ser reemplazada por la entrega de un capital a petición del deudor de la pensión o del acreedor. Las rentas en curso podrán ser igualmente revisadas. El capital podrá ser también sustituido, suprimiéndose el régimen fiscal más favorable al pago de la pensión compensatoria, mediante una renta en menoscabo del establecido para la entrega de un capital.

El derecho a la pensión compensatoria se enmarca dentro de las reglas de fondo y procedimiento aplicables al divorcio. Los principios esenciales del divorcio son:

- Los cuatro casos de divorcio: el divorcio de la demanda presentada de forma conjunta de los esposos, el divorcio de la demanda interpuesta por uno de los esposos aceptada por el otro, el divorcio por ruptura de la vida en común y el divorcio por falta.

- La separación de cuerpos.
- Las medidas provisionales.
- Los efectos del divorcio.
- Los convenios de divorcio.

A los efectos de la prestación compensatoria, en la demanda presentada de forma conjunta por ambos esposos²⁰⁰, si se establece una pensión compensatoria a favor de uno de ellos, los esposos deben de realizar ante el juez una declaración jurada “de honor” que certifique la exactitud de sus recursos, patrimonio y condiciones de vida. El convenio

¹⁹⁸ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. “La prestation compensatoire et le divorce”. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición, 2.002, pag. 26 y ss.

¹⁹⁹ BÉNAVENT, A. “*Plaidoyer pour quelques reformes du divorce*”: D. 1.999, chron. Página 225.

²⁰⁰ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. “La prestation compensatoire et le divorce”. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición. 2.002. Páginas 15 y ss.

definitivo debe de contener un proyecto de liquidación del régimen matrimonial, los resultados serán tenidos en cuenta para regular otros aspectos del divorcio y, en particular, para apreciar el montante de la prestación compensatoria y organizar las modalidades de ejecución de ésta.

La ley de 30 de junio de 2.000 establece de forma estricta las formas de pago de la pensión compensatoria que puede decidir el juez, pero al contrario deja una gran libertad para que los esposos puedan elegir, pudiendo hacerse el pago mediante una renta temporal, lo que no puede hacer el juez. Pueden también prever que la prestación compensatoria cese a partir de la concurrencia de un supuesto determinado, por ejemplo en el momento de la jubilación de deudor de la pensión compensatoria. Los esposos pueden también prever la revisión de la prestación compensatoria en caso de que exista un cambio importante en sus ingresos y necesidades, pudiendo solicitar la revisión uno de ellos.

En el supuesto de divorcio de la demanda interpuesta por uno de los esposos aceptada por el otro²⁰¹, puede deberse bien al deseo de uno de ellos en divorciarse, o bien que se acepte el divorcio planteado por no desear plantear un divorcio por falta. En este tipo de divorcio si se reclama una prestación compensatoria por el esposo que inicialmente pretende el divorcio, que puede pasar a ser una demanda conjunta, como en el supuesto anterior, los esposos deben de realizar ante el juez una declaración jurada “de honor” que certifique la exactitud de sus recursos, patrimonio y condiciones de vida. El cónyuge que reclame una pensión compensatoria debe reunir las condiciones necesarias para poder demandar al otro la pensión compensatoria.

El juez puede, de oficio, encargar a un notario o profesional cualificado para que haga un proyecto de reglamento de prestaciones y pensiones después del divorcio, y puede también encargar a un notario la elaboración de un proyecto de liquidación del régimen matrimonial.

Los esposos pueden pactar que reconocen que no tienen derecho a una prestación compensatoria ninguno de ellos. También puede uno de ellos obtener una indemnización a título excepcional teniendo en cuenta el

²⁰¹ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. “La prestation compensatoire et le divorce”. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición. 2.002. Páginas 29 y ss.

tiempo de vida en común y la colaboración aportada a la profesión de uno al otro esposo y ser contrario a la equidad rehusar dicha compensación pecuniaria.

En el divorcio por ruptura de la vida en común²⁰² la situación del demandante financieramente es desventajosa, le será imposible obtener una prestación compensatoria. Si, finalmente se dicta pronunciando un divorcio por falta, puede tener que abonar una pensión compensatoria al otro cónyuge.

En este supuesto de divorcio el demandante sólo puede pedir una indemnización excepcional pero no una prestación compensatoria.

Si la separación de hecho es de larga duración y ha durado al menos seis años, uno de los esposos puede solicitar el divorcio, entendiéndose que hay separación a partir del momento en el que cesa la convivencia conjunta. La separación debe de ser intencionada, aunque no tiene por qué ser consecuencia de una voluntad común, pero tiene que ser continuada.

Si el divorcio se produce por falta²⁰³, hay un cónyuge culpable y un cónyuge inocente; el cónyuge culpable se encuentra no solo privado de las ventajas y beneficios en su condición de esposo, sino que se puede encontrar obligado a conceder al cónyuge inocente una prestación compensatoria por los daños y perjuicios causados, si bien esto no tiene lugar de pleno derecho, ya que el cónyuge inocente debe reunir los requisitos necesarios para la concesión de dicha prestación compensatoria.

El cónyuge inocente que pretende obtener una indemnización por el perjuicio material no puede obtener también una prestación compensatoria, ya que se daría una duplicidad entre la indemnización por daños y perjuicios con ésta.

El Código civil francés regula el divorcio por culpa en sus artículos 242 a 246. Así, el artículo 242 CC Francés señala que el divorcio puede ser

²⁰² HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2ª edición. 2.002. Páginas 55 y ss.

²⁰³ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2ª edición. 2.002. Páginas 37 y ss.

solicitado por uno de los esposos cuando ciertos hechos constitutivos de una violación grave o repetida de los deberes y obligaciones del matrimonio sean imputables a su cónyuge y hagan intolerable el mantenimiento de la vida en común. Aquí se incluyen los casos de violencia doméstica, para los cuales se prevén medidas urgentes en el artículo 220 CC Francés. Posteriormente, la reforma legal de 2.004 introdujera importantes reformas en el procedimiento del divorcio.

Respecto a las consecuencias fiscales²⁰⁴ del divorcio y en lo que respecta la prestación compensatoria tanto si es bajo la forma de renta periódica mensual de una cantidad pagable por encima de doce meses, la prestación compensatoria es deducible para el deudor, y su importe debe ser declarado por el esposo que la percibe.

En el convenio de divorcio²⁰⁵ y respecto a la prestación compensatoria los esposos pueden decidir libremente las modalidades de una pensión compensatoria, desde la reforma de la ley de 30 de junio de 2.000, en los otros casos de divorcio la renta no puede ser vitalicia, solo puede establecerse de forma temporal en el convenio de divorcio, debiéndose precisar la fecha de expiración del término, y establecer la posibilidad de un evento para su cese o conclusión.

Si la prestación compensatoria es fijada bajo la forma de capital pagable a término o plazo, los cónyuges podrán prever la remisión de su montante, y no solo las modalidades de pago, en caso de modificación de sus recursos y necesidades. Como se puede constatar el convenio de divorcio ofrece a los esposos una gran libertad en la determinación de la prestación compensatoria.

En cuanto a la modificación o revisión del convenio homologado²⁰⁶ respecto a la prestación compensatoria, los esposos tienen la facultad de prever en el convenio la reglamentación de los efectos del divorcio que

²⁰⁴ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a édition, 2.002. Páginas 86 y ss.

²⁰⁵ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a édition. 2.002. Páginas 81 y ss.

²⁰⁶ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a édition. 2.002. Páginas 97 y ss.

cada uno de ellos podrá solicitar al juez la revisión de la pensión compensatoria en caso que se produzca un cambio en los recursos y necesidades.

A falta de existir una cláusula de revisión en el convenio, la ley de 30 de junio de 2.000 establece que la revisión es aplicable a todas las prestaciones compensatorias bajo la forma de renta.

El fundamento de la pensión compensatoria²⁰⁷ es corregir la disparidad de las condiciones de vida, el objeto es compensar, si es posible la disparidad que la ruptura del matrimonio ha creado en las condiciones de vida de los esposos. El juez debe tener en cuenta la situación de los esposos en el momento del divorcio y de su evolución en un devenir previsible.

Desde la reforma de la ley de 30 de junio de 2.000, la prestación compensatoria tiene²⁰⁸ un carácter indemnizatorio, ya que está fijada conforme al derecho común y un carácter, al menos parcialmente, alimentario, al ser excepcionalmente en forma de una renta vitalicia.

La prestación compensatoria ha evolucionado en la práctica de la prestación y es menos frecuente que antaño, ello se corresponde con la época en la que numerosas mujeres tenían poca formación profesional.

En los debates parlamentarios de la ley el senador Nicolas About, senador y coautor de la proposición de ley, manifestó que el matrimonio no puede ser un negocio financiero o un seguro de vida, no se debe de contraer matrimonio para acceder a un nivel de vida, cada uno debe de contar con sus propios esfuerzos, tener un trabajo o actividad profesional.

En cuanto a la competencia del juez en el divorcio, tiene competencia exclusiva en caso de divorcio contencioso en lo que concierne a la fijación de la prestación compensatoria.

²⁰⁷ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. "La prestation compensatoire et le divorce". Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición. 2.002. Páginas 101 y ss.

²⁰⁸ MAZEAUD, CHAVAS. "*Lesson de droit civil*", t. I. 3^o volumen, "La famille. Montchrestien 7^a ed., par L. LEVENER, núm.1506 a 1508. Sur la loi du 30 du juin 2.000.

La petición de la prestación compensatoria debe de ser hecha durante la instancia del divorcio, en la primera instancia o la primera vez en apelación.

En cuanto a la determinación de la pensión compensatoria el juez toma en consideración los elementos enumerados en el artículo 272 CC francés reformado con la ley de 30 de junio de 2.000²⁰⁹, a saber:

- La edad y el estado de salud de los esposos.
- La duración del matrimonio.
- El tiempo dedicado –consagrado– y el que queda dedicar a la educación de los hijos.
- La cualificación y situación profesional del trabajo.
- Los derechos existentes y previsibles.
- Su situación en materia de de pensión de jubilación.
- Su patrimonio, tanto en capital como en rendimientos, después de la liquidación del régimen matrimonial.

En cuanto a las formas de pago de la prestación compensatoria²¹⁰, esta puede adoptar la forma de un capital o de una renta²¹¹.

La ley de 30 de junio de 2.000 reafirma más claramente el principio y encuadra estrictamente el rol del juez. La prestación compensatoria adopta la forma de un capital cuyo montante es fijado por el juez; solo en caso excepcional y mediante una decisión especialmente motivada por el juez la prestación compensatoria puede adoptarla forma de una renta vitalicia. La ley no permite combinar la entrega de un capital y de una renta vitalicia salvo que la prestación compensatoria esté fijada en un convenio de divorcio por consentimiento mutuo.

Cuando la prestación compensatoria consiste en la entrega de un capital, puede darse de tres formas: con una suma de dinero; con la

²⁰⁹ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. “La prestation compensatoire et le divorce”. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a édition. 2.002. Páginas 105 y ss.

²¹⁰ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. “La prestation compensatoire et le divorce”. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a édition. 2.002. Páginas 113 y ss.

²¹¹ BATTEUR A. et RAOUL-CORMEIL G. “*Fin ou éclatement de la notion de prestation compensatoire: Dr. et patrimoine*”. 2.001, núm. 97. Página 34.

entrega de bienes, muebles o inmuebles, en propiedad, en usufructo; para el uso de una habitación; o mediante la entrega de valores.

La prestación compensatoria mediante en la entrega de una renta²¹² suele ser muy rara, la ley anterior de 1.975 admitía que en defecto de un capital o si este era insuficiente, la prestación compensatoria podría adoptar la forma de una renta. El nuevo texto legal es más restrictivo, y solo a título excepcional y por una decisión especialmente motivada el juez puede fijar la prestación compensatoria bajo la forma de una renta vitalicia.

La elección de una renta vitalicia debe concederse teniendo en consideración las necesidades del esposo acreedor y no sólo en función de las disponibilidades del esposo deudor. La renta vitalicia estará justificada en función de si la edad y el estado de salud del cónyuge acreedor no le permita cubrir a sus necesidades. El desarrollo del trabajo de las mujeres y su competencia profesional deberán contribuir también a precisar con menos frecuencia la fijación de una renta.

La cuantía o montante de la renta es fijado por el Juez teniendo en cuenta las necesidades del acreedor y las posibilidades financieras del deudor. La dificultad se encuentra en prever la evolución de éste último, ya que la renta puede durar un largo tiempo: las posibilidades de solicitar la revisión en caso de cambio importante o sustancial en los recursos o necesidades de las partes limitan al menos los inconvenientes de previsión del futuro.

La ley de 2.004

La ley de 30 de junio de 2.000 ha sido objeto de reforma por Ley nº 2004-439 de 26 de mayo de 2.004, en vigor desde el 1 de enero de 2.005. Esta nueva ley modifica varios artículos del Código Civil francés relativos al divorcio.

De conformidad con la nueva ley, el artículo 229 CC Francés enuncia los tipos de divorcio: (1) por consentimiento mutuo; (2) por aceptación del

²¹² HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. *“La prestation compensatoire et le divorce”*. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2ª edición. 2.002. Páginas 137 y ss.

principio de la ruptura del matrimonio; (3) por alteración definitiva del vínculo conyugal; (4) por culpa.

El divorcio por consentimiento mutuo o mutuo acuerdo está regulado en los artículos 230 y 232 CC Francés. Así, el divorcio puede ser solicitado conjuntamente por los esposos cuando éstos estén de acuerdo en la ruptura del matrimonio y sus efectos, mediante el sometimiento de un convenio regulador de las consecuencias del divorcio a la aprobación de un juez. El juez homologará el convenio y pronunciará el divorcio si ha adquirido la convicción de que la voluntad de cada uno de los esposos es real y que su consentimiento es libre y claro. No obstante, el juez puede rechazar la homologación y negarse a pronunciar el divorcio si constata que el convenio preserva los intereses de los hijos o de uno de los cónyuges de forma insuficiente.

En lo que respecta al divorcio por aceptación del principio de la ruptura del matrimonio, está regulado en los artículos 233 y 234 CC Francés. Así, se establece que el divorcio puede solicitarse por uno u otro cónyuge o por ambos cónyuges cuando éstos acepten el principio de la ruptura del matrimonio sin considerar los hechos que han originado tal ruptura. Si está convencido de que cada uno de los esposos ha prestado su acuerdo al divorcio libremente, el juez pronunciará el divorcio y determinará sus efectos.

De la lectura de estos preceptos se observa que ambos tipos de divorcio (consentimiento mutuo y aceptación del principio de ruptura del vínculo conyugal) suponen el acuerdo de los cónyuges para proceder al divorcio. Sin embargo, existe una diferencia entre ellos. Así, en el divorcio por consentimiento mutuo los cónyuges no tienen que expresar la causa de divorcio y sólo deben someter al juez un proyecto de convenio regulador en el que se precisan los términos de su acuerdo.

Son los propios cónyuges los que han determinado de común acuerdo las consecuencias de su divorcio y la intervención judicial consiste en una homologación de tal acuerdo. En cambio, en el divorcio por aceptación del principio de ruptura del vínculo conyugal, los cónyuges reconocen hechos que han impedido el mantenimiento de la vida en común, pero las consecuencias del divorcio son dictadas por el juez.

En este segundo caso no hay acuerdo previo de los cónyuges sobre los efectos del divorcio.

En tercer lugar, cabe referirse al divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal, regulado en los artículos 237 y 238 CC Francés.

Así, el divorcio podrá ser solicitado por uno de los cónyuges cuando el vínculo conyugal esté definitivamente alterado. La alteración definitiva del vínculo conyugal resulta de la cesación de la comunidad de vida entre los esposos, cuando estos vivan separados desde hace dos años en el momento del emplazamiento o requerimiento para el divorcio.

Es decir, en la fecha del emplazamiento, los cónyuges deben vivir separados y la comunidad de vida debió haber cesado dos años atrás²¹³.

La Corte de Casación ha previsto un sistema consistente en determinar un capital antes de convertirlo en renta. Este procedimiento presenta una ventaja para el deudor que adquiere conciencia más clara de su compromiso. Así, la renta deberá ser determinada a partir de un capital fijado previamente por el juez. En todo caso no se ha de confundir la entrega de un capital con la entrega de una renta como forma de pago de la prestación compensatoria.

La renta no podrá ser vitalicia; esta forma de pago de la prestación compensatoria deviene aún más excepcional.

La renta obligatoriamente deberá ser indexada, igualmente que las pensiones de alimentos, esto es, existe la obligación legal que el juez debe imperativamente respetar, si el juez no indexara la renta, se deberá de considerar como una laguna u omisión en el sentido del artículo 462 del nuevo código de procedimiento civil; el índice a aplicar o indexación será de elección libre, que puede hacer en función de un índice igual o superior a una tasa.

El juez puede así mismo hacer variar la renta por periodos sucesivos en función de la evolución probable de los recursos del deudor y de las necesidades del acreedor, pero con la condición de fijar el montante de la

²¹³ LIENHARD, Godfrey. Disponible en la web: http://www.cnb.avocat.fr/PDF/2003-09-18_colloque_div_Lienhard.pdf.

renta en cada periodo. Puede ser oportuno prever una reducción de la renta a partir del año de la jubilación del deudor.

La exigibilidad del pago de la renta se da a partir de que el divorcio sea definitivo; durante la duración del procedimiento de divorcio, el deber de litispendencia subsiste y se traduce en la obligación alimentaria, la prestación compensatoria no podrá tener efecto en tanto que el divorcio no sea definitivo.

Con fecha 24 de septiembre de 2.014 mediante resolución judicial, la Corte de Casación ha determinado que los esposos pueden tener derecho a una pensión compensatoria en caso de que la disparidad en sus respectivas condiciones de vida haya tenido lugar por el hecho de la ruptura de su unión fijando la misma en una cantidad total a abonar en un pago único.

Después de la ley de 30 de junio de 2.000 la renta no puede ser vitalicia, salvo si es fijada de común acuerdo entre los esposos en el convenio de divorcio. En los otros casos de divorcio, las rentas temporales encuentran un equivalente a la entrega de un capital cuando es superior a 8 años y a veces es más ventajosa.

La renta vitalicia puede ser sustituida por la entrega de un capital²¹⁴, incluso si la renta vitalicia ha sido ordenada por el juez o estipulada por los esposos en el convenio de divorcio, es posible siempre volver a la solución propuesta por la ley, es decir, el pago de la prestación compensatoria mediante la entrega de un capital. En cualquier momento el acreedor puede demandar esta sustitución si la situación del deudor se lo permite. La liquidación del régimen matrimonial si sus consecuencias no han estado correctamente previstas puede ser una razón para demandar la conversión de la entrega de un capital en lugar de la entrega de una renta. El régimen fiscal de la sustitución de la entrega de un capital por la entrega de una renta es incierto en numerosos puntos.

Cuando el que demanda es el deudor del pago de la prestación compensatoria lo puede hacer en cualquier momento sin que la ley le imponga condiciones particulares. Generalmente, el acreedor no obtendrá más que un capital correspondiente al valor teórico de su renta. La ventaja

²¹⁴ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. *“La prestation compensatoire et le divorce”*. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición. 2.002. Páginas 144 y ss.

es que se pone fin a las relaciones financieras entre los ex esposos. El sacrificio provisional del deudor encuentra también una contrapartida en la clarificación de la situación, el cambio de la renta era impredecible, y en cambio el importe del capital es perfectamente medible.

Cuando el que demanda es el acreedor de la prestación compensatoria, su demanda solo podrá ser aceptada si la situación del deudor se lo permite. La liquidación del régimen matrimonial puede ser un motivo pero existen otras causas como un cambio en la situación profesional, que reciba una herencia o una donación, una indemnización o una ganancia en el juego.

El acreedor será generalmente informado del cambio de situación de su deudor, aunque no contara con todos los datos y precisiones necesarias para convencer al juez de la posibilidad de la sustitución. La sustitución de un capital es una operación de naturaleza análoga a la revisión de la renta vitalicia.

En cualquier caso, las partes pueden, en cualquier momento, tener la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo o entendimiento, sin tener que hacer una petición al juez. Sin duda, aunque no hay alusiones a un convenio en el texto legal, en virtud de los principios generales se debe permitir que se pueda proceder de esta forma. Cada una de las partes tiene la facultad de renunciar a un derecho o a una acción y también a transigir.

El acuerdo entre las partes deberá, por lo tanto, precisar las condiciones que permitan realizar la operación conforme a las disposiciones legales, en su defecto la validez de una renuncia total o parcial a la renta vitalicia podrá ser discutida en razón de su carácter alimentario. Eventualmente, las partes pueden solicitar un juicio al juez de los asuntos familiares para que pruebe su acuerdo. Mientras, la partes deseen tomar su decisión el juez les puede aconsejar que procedan a celebrar un juicio.

Respecto a la revisión de la renta vitalicia²¹⁵, es una novedad esencial de la reforma de la ley de 30 de junio de 2.000. El texto de 1.975 limitaba las posibilidades de revisión, no pudiendo tener lugar salvo a título

²¹⁵ HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François. *“La prestation compensatoire et le divorce”*. Litec. Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición. Páginas 155 y ss.

excepcional, el principio era que la renta vitalicia no podía ser revisada, excepcionalmente podía ser admitida la revisión si la ausencia de ésta revisión podía dar lugar a un conjunto de consecuencias de una excepcional gravedad.

Esta situación o condición era apreciada de forma muy restrictiva y el texto legal no permitía tener en cuenta la mejoría en la situación económica del acreedor de la prestación compensatoria, al no constituir una consecuencia de excepcional gravedad. Ello constituía una injusticia a menudo denunciada.

El cambio es importante, para proceder a la revisión de la prestación compensatoria se debe interponer la correspondiente demanda por el deudor o sus herederos y puede ser interpuesta por un cambio importante en los recursos y necesidades de las partes. Esta condición es, evidentemente, mucho menos restrictiva que la antigua "consecuencias de una excepcional gravedad".

La ley permite también tener en cuenta la mejor situación del acreedor, ya sea porque el mantenimiento de una renta vitalicia en provecho de una mujer que vuelve a contraer matrimonio o vive en concubinato, resulta no equitativo para el acreedor por la disminución de sus recursos. O la situación del cónyuge que haya perdido su empleo, que deberá tenerse en cuenta para que se proceda a la reducción de la renta vitalicia o a su supresión si las circunstancias económicas del acreedor lo permiten.

Los modos de revisión de la renta vitalicia son: la reducción, la suspensión, la supresión. Estos modos de revisión pueden efectuarse ante el Juzgado y mediante un acuerdo entre las partes sin intervención judicial.

3.3.- Derecho Italiano

En Italia la Ley de 1 de diciembre de 1.970 de derecho de familia, regulaba la pensión en su artículo 5º estableciendo que con la Sentencia que acordase la disolución o cesación de efectos civiles del matrimonio, el Tribunal disponía, habida cuenta de las condiciones económicas de los cónyuges y de las razones de la decisión, de la "posibilidad" de imponer la obligación a uno de los cónyuges de suministrar al otro, periódicamente,

una pensión en proporción a sus capitales y rentas. Para la determinación de la pensión el Juez debía tener en cuenta la contribución personal y económica aportada por cada uno de los cónyuges a la dirección de la familia y a la formación del patrimonio familiar.

Para su fijación, la citada norma señalaba los criterios que el Juez debía tener en consideración²¹⁶: El resarcitorio, que partía de la responsabilidad por el fracaso del matrimonio. El compensatorio, sobre la respectiva contribución personal de cada uno de los cónyuges a la conducción de la familia. Y, el asistencial, encaminado a tutelar la posición del cónyuge que como consecuencia de la disolución del matrimonio viniese a encontrarse en dificultades o en una peor condición por haber perdido el sostén, o se encontrase en una situación más desfavorable que la que tenía durante la convivencia matrimonial, sin hallarse en disposición de dedicarse a una actividad laboral.

En el Derecho Italiano la pensión compensatoria tiene un marcado carácter indemnizatorio, unido al carácter obligatorio que tiene la pensión compensatoria. El aspecto más importante de la pensión compensatoria es cuestionar el motivo por el cual la Ley obliga a una persona a pagar a otra una cantidad, normalmente periódica, después de verificada la ruptura matrimonial.

En este sentido, la posible equiparación de la pensión compensatoria a una función indemnizatoria procede claramente del derecho italiano. La jurisprudencia italiana afirma que la pensión periódica prevista en el artículo 5 de la Ley Italiana de 1 de diciembre de 1.979 número 898, a diferencia de la prevista en la separación matrimonial, no tiene un carácter de alimentos o de mantenimiento, sino que tiene una naturaleza indemnizatoria, tendente a reequilibrar la situación económica del cónyuge que como consecuencia de la cesación del vínculo matrimonial sufra una disminución patrimonial.

No obstante lo expuesto en el precedente, la doctrina mayoritaria se destaca por su negativa respecto a otorgar el carácter indemnizatorio de la

²¹⁶ HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofia, “*La Pensión Compensatoria*”. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873. Página 8.

pensión, para otorgarle un determinado carácter material, encontrando su fundamento en el principio de la solidaridad post-conyugal²¹⁷.

Asignar a la pensión el pretendido carácter indemnizatorio, equiparando indemnización con reparación de los daños que procedan de actividad culposa o negligente, sería un error. Sin embargo, lo que sí podría admitirse es que la responsabilidad sea objetiva, es decir, que la existencia de un desequilibrio económico otorgara inmediatamente la obligación de repararlo mediante el pago de una pensión, mas siendo irrelevante el concepto de culpa y atendiendo exclusivamente para la reparación al concepto de perjuicio y a su producción, sin que sea requisito de la reparación del daño o perjuicio, la existencia de una actividad o de una culpa del sujeto responsable.

3.1.2.1.- La Ley Italiana de 1.970

En la regulación legal de la Ley de 1.970, la jurisprudencia Italiana señala que tres son los criterios que el Juez debe tener en cuenta, según una valoración completa y contextual para la atribución y la determinación de la pensión en los supuestos de divorcio, debiendo distinguirse entre: el criterio resarcitorio, compensatorio y asistencial.

El criterio resarcitorio toma en consideración la responsabilidad por el fracaso del matrimonio. El criterio compensatorio hace referencia a la respectiva contribución personal de cada uno de los cónyuges a la conducción de la familia.

Y el criterio asistencial, mira más propiamente a tutelar la posición del cónyuge que como consecuencia de la disolución del matrimonio se encuentre en dificultades o en una condición económica más deteriorada, por haber perdido el sostén, o tener una situación más desfavorable que la que tenía durante la convivencia matrimonial, y no se encontrase en disposición de dedicarse a una actividad laboral.

²¹⁷ HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofía, *“La Pensión Compensatoria”*. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873. Página 18.

3.1.2.2.- La Ley Italiana de 1.987

La regulación legal de la Ley de 1.987 sobre la pensión compensatoria se contiene en la legislación italiana en el artículo 10 de la Ley de 6 de marzo de 1.987²¹⁸, número 74. El número 6° del vigente artículo 5°, reformula el precedente número 4° del artículo 5 de la Ley de 1 de diciembre de 1.970²¹⁹, en relación a los criterios que deberán tenerse en cuenta para la determinación y cuantificación de la pensión en el divorcio, precepto tendente a superar los inconvenientes puestos de manifiesto durante la vigencia de la ley anterior.

Característica de la nueva legislación de la Ley Italiana de 6 de marzo de 1.987 es la superación de la concepción de la pensión propia de la regulación precedente, a una concepción exclusivamente asistencial, basada esencialmente en un criterio de solidaridad que intenta sobrevivir al matrimonio como si éste no hubiera cesado, al menos en sus aspectos civiles.

En el citado contexto del carácter de la pensión ha perdido el triple carácter que tenía en la Ley Italiana de 1.970 (resarcitorio, compensatorio y asistencial), afirmando que la nueva norma ha establecido un criterio único en sentido asistencial por el reconocimiento del derecho a la pensión, indicando, al solo fin de la cuantificación, una serie de elementos entre los cuales se encuentra el trabajo, junto al anterior criterio resarcitorio y compensatorio.

Dadas las novedades introducidas por la nueva regulación, ha sido la jurisprudencia la que ha venido a precisar las novedades que caracterizan la pensión de divorcio del nuevo artículo 5 de la Ley Italiana, y en tal sentido señala que constituye la regulación de las consecuencias patrimoniales para cada cónyuge tras la sentencia, estando relacionado con la superación de la naturaleza compuesta de la pensión, presentada como una exigencia de la relación.

²¹⁸ El divorcio se introdujo en la legislación italiana por la ley número 898 de 1 de diciembre de 1970 sobre la disolución del matrimonio.

²¹⁹ La legislación italiana de 1 de diciembre de 1970 sobre la disolución del matrimonio fue posteriormente modificada por la ley número 151 de 1975 sobre la reforma del derecho de familia, y también por la ley número 74 de 6 de marzo de 1987, art. 5, núm. 4 de la Ley de 1 de diciembre de 1.970.

Partiendo del carácter innovador de la nueva Ley, el texto derogado establecía, que, con la sentencia que decreta la disolución del vínculo o la cesación de los efectos civiles del matrimonio, el tribunal habrá de disponer, teniendo en cuenta las condiciones económicas de los cónyuges y los razonamientos de la decisión, la obligación para uno de los cónyuges de suministrar al otro periódicamente una asignación proporcional a sus propias necesidades y rentas. Estableciendo que para la determinación de tal asignación, el Juez habrá de tener en cuenta la contribución personal y económica de cada uno de los cónyuges a la familia y a la formación del patrimonio conyugal.

En tanto, que la nueva regulación establece la necesidad de que el juez valore, igualmente, la contribución de cada uno a la formación del patrimonio del otro, valorando todos aquellos elementos que hayan supuesto una aportación durante el matrimonio, e impone, además, la obligación a uno de los cónyuges de suministrar al otro periódicamente una asignación cuando este último no posea medios adecuados o no pueda procurárselos por causas objetivas.

La nueva normativa establece la relevancia para la atribución y asignación de la pensión a uno de los cónyuges, a elementos personales del beneficiario y no sólo a las condiciones económicas de los cónyuges, siendo determinante la falta de medios de vida adecuados por parte del cónyuge necesitado, así como la imposibilidad de procurárselos por razones objetivas²²⁰.

La doctrina italiana, respecto al nuevo artículo 5, párrafo 6° CC Italiano, señala que el sensible cambio de la morfología conyugal incide en el divorcio de la misma forma que en la reforma del modelo de separación, del cual depende estadísticamente el mayor número de pronunciamientos de disolución o de cesación de los efectos civiles del matrimonio.

Por ello se afirma que la consideración de las circunstancias objetivas de carácter personal no puede llevar a concluir en una función asistencial de la pensión para el cónyuge efectivamente necesitado respecto a la función resarcitoria y compensatoria en la que verdaderamente se

²²⁰ El hecho de residenciar el nacimiento del derecho a una pensión en la falta de medios de vida adecuados por parte del cónyuge necesitado, así como la imposibilidad de procurárselos por razones objetivas se asimila mas al derecho de alimentos que se regula en el artículo 142 CC que a la pensión compensatoria que se regula en el artículo 97 CC.

encuentra inspirada, y que muestra una vuelta a situaciones puramente de rendimiento, lo que hace afirmar a la citada doctrina que la pensión refleja una concepción patrimonialista de la condición conyugal.

La doctrina italiana afirma que el presupuesto fundamental para la atribución de la pensión, y en definitiva el elemento representativo de ésta, es el desequilibrio surgido para el cónyuge por efecto del cual uno de ellos queda privado de los medios para el propio mantenimiento, bien sea por imposibilidad transitoria o permanente de procurárselo. En igual sentido la jurisprudencia se ha orientado, para su concesión, a considerar la situación concreta y la dificultad real en que se encuentra el cónyuge para integrarse en el mundo del trabajo y conseguir su propia independencia económica, acogiéndose para ello a las líneas doctrinales y legales seguidas por las doctrinas germánicas.

La jurisprudencia italiana ha reiterado la anterior posición declarando que, en relación con el presupuesto para la atribución de la pensión, no debida ésta cuando no concorra la condición necesaria para su concesión, que no es otra que el cónyuge reclamante no haya podido adecuar o mantener un tenor de vida análogo a aquel del que había disfrutado constante el matrimonio, y en consecuencia, proclamando la naturaleza eminentemente asistencial de la pensión.

Consecuencia del posicionamiento previamente expuesto es el que la misma jurisprudencia asume una posición contraria a la actualización o modificación, atribuyendo al cónyuge destinatario de la pensión, como única solución, la posibilidad de hacer valer el perjuicio sobrevenido por el procedimiento de revisión del artículo 9 de la Ley Italiana de 1.987, que denomina la concurrencia de circunstancias extraordinarias.

En conclusión, en Italia el divorcio se introdujo en la legislación italiana por la ley nº 898 de 1 de diciembre de 1.970 sobre la disolución del matrimonio, que fue posteriormente modificada por la ley nº 151 de 1.975 sobre la reforma del derecho de familia, y también por la ley nº 74 de 6 de marzo de 1987. En abril 2.005 el Parlamento italiano empezó a discutir una propuesta de ley para reformar el divorcio (“divorzio veloce”) que, esencialmente, pretende reducir de tres años a uno el periodo de separación requerido para poder solicitar el divorcio. Asimismo, se prevé la elaboración de una ley de medidas urgentes en materia de derecho de familia y de los menores. Sin embargo, a la espera de estas nuevas normas

en la materia, es necesario remitirse a la legislación vigente de 1.970, 1.975, 1.987, 2.000 y la última reforma de marzo de 2.005.

Así, de conformidad con el artículo 1 de la ley de 1.970, el matrimonio puede disolverse cuando el juez establezca que la unión espiritual y material entre los cónyuges no puede ser mantenida o reconstituida.

La legislación italiana admite dos tipos de divorcio: el divorcio inmediato (que se aplica en situaciones excepcionales) y el divorcio diferido (que se aplica generalmente a todos los casos de divorcio).

En todos los casos de divorcio (sean o no contenciosos) se exige una audiencia preliminar en la que el juez intentará la reconciliación de las partes. Si se produce la reconciliación la demanda de divorcio será desestimada.

- El divorcio inmediato: se puede pedir por el cónyuge que sea “víctima” en tres supuestos: a) condena del cónyuge por delitos graves cometidos antes o durante el matrimonio; b) obtención del divorcio o nuevas nupcias en el extranjero por parte del cónyuge extranjero; y c) no consumación del matrimonio. No se exige ningún plazo previo para solicitar el divorcio inmediato en estos casos.

- El divorcio diferido: se puede conceder a los cónyuges que hayan vivido separados de forma continua durante un cierto periodo de tiempo.

La separación puede ser consensual²²¹ o judicial²²². En ambos casos, se requiere que haya sido declarada en comparecencia ante el juez²²³. Sin

²²¹ La separación consensual se refiere a los casos en que los esposos piden conjuntamente la separación, o bien un esposo la solicita y el otro acepta. El juez simplemente homologa judicialmente esa separación, lo que crea una presunción de permanencia de la separación.

²²² Cada uno de los cónyuges puede pedir al juez la separación judicial cuando independientemente de la voluntad de uno de los esposos o de ambos, se hayan producido hechos que hacen imposible el mantenimiento de la vida en común o que perjudican gravemente la educación de los hijos. Así se dice en el nuevo artículo 151 del Código Civil, cuya redacción resulta de la ley de 1.975 y que sustituye a la separación culposa, la cual sólo podía ser solicitada por el esposo inocente. No obstante, los hechos que generalmente se invocan para pedir la separación judicial coinciden esencialmente con los que se consideran “culpables” en otros países: *el adulterio, la crueldad o el rechazo a mantener relaciones sexuales*

²²³ La separación de hecho desde 1.975 ya no se considera causa autónoma de divorcio, pues la ley autoriza a uno de los cónyuges o a ambos de pedir ante el juez la homologación o la declaración de su separación.

embargo, hay que tener en cuenta que el juez no acordará el divorcio automáticamente tras el transcurso del plazo de separación, sino que los cónyuges deberán introducir una demanda de divorcio, alegando como causa del mismo la separación.

Desde la aprobación de la ley de 6 de marzo de 1.987 el plazo de separación previo a la introducción de la demanda de divorcio es de tres años en todos los casos, si bien anteriormente se exigían cinco o siete años. El plazo empieza a contar desde el pronunciamiento judicial acordando la separación. Una vez introducida la demanda de divorcio, el juez debe comprobar la realidad de la separación, teniendo en cuenta que la separación no implica necesariamente una residencia separada, pero sí implica que ya no existan lazos afectivos entre los esposos.

3.4.- Derecho Alemán

Dentro del marco europeo y en su referente al derecho de familia coexisten dos concepciones diferentes que pretenden fundamentar la pensión que un cónyuge debe satisfacer al otro como consecuencia de la desaparición del vínculo, con fundamento en concepciones radicalmente distintas²²⁴.

La denominada concepción germánica, en la que se incluyen los países del norte y centro de Europa, la pensión que un cónyuge ha de satisfacer al otro tiene una finalidad de readaptación del pensionista a la vida activa como consecuencia de los perjuicios económicos subsiguientes a la disolución del matrimonio. La principal consecuencia de tal concepción es que la pensión no debe ser una garantía de manutención de por vida, pues el matrimonio después de su disolución no puede crear un derecho automático a un apoyo financiero de carácter permanente, pues cada esposo deberá ser normalmente capaz de mantenerse por sí mismo (también el Derecho Canadiense en su nueva regulación).

Contrapuesta a la doctrina precedente se encuentra la denominada concepción latina, que afirma que el matrimonio crea un deber de asistencia entre los esposos, deber de asistencia que se prolonga incluso después de su disolución. El fundamento de la pensión se concreta en la

²²⁴ HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofía, “La Pensión Compensatoria”. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873. Página 7.

citada concepción en la necesidad razonable de cada esposo, para lo cual deberán tenerse en cuenta diversos factores (edad, duración del matrimonio, hijos y capacidad de readaptación a la vida activa).

En el Derecho alemán cada esposo debe subvenir después del divorcio a sus necesidades. Sólo quién no pueda hacerlo, tiene derecho a percibir alimentos del otro cónyuge. El montante de la pensión alimenticia está determinado por la situación social de los esposos y las posibilidades financieras del deudor de los alimentos, que se entiende, constituye el precedente de la pensión compensatoria del derecho francés²²⁵.

La exclusión de la culpa preside la solución del derecho alemán. Ahora bien, el artículo 1.579.1 núm. 4 del BGB permite la supresión o la disminución del derecho al sostenimiento en el caso de que exista un motivo particularmente grave.

Por lo tanto, el carácter de la pensión en Alemania solo se concederá con carácter restrictivo y temporal, dada su naturaleza más propiamente asistencial que compensatoria.

La Conferencia de Viena de 1.977 sobre el derecho de familia, citada por los defensores del Proyecto de Ley en el debate del Congreso, que posteriormente dio lugar a la actual regulación del derecho de familia, recomendaba que las legislaciones nacionales debían consagrar el principio de que la pensión alimenticia después del divorcio debería ser atribuida, según las necesidades económicas del cónyuge acreedor, independientemente de la inocencia o culpabilidad del deudor, pero teniendo en cuenta las posibilidades económicas tanto del acreedor como del deudor.

La ley alemana de 14 de junio de 1.976 que modificó el Código Civil Alemán abolió el divorcio por culpa o culposo. Desde entonces, el Código Civil Alemán prevé una única causa de divorcio: el fracaso del matrimonio, o, dicho de otra manera, la ruptura irremediable del matrimonio.

Según el artículo 1.565, apartado 1º CC Alemán: *“Un matrimonio puede ser disuelto cuando ha fracasado”*. Existe tal fracaso cuando ya no existe la comunidad de vida y es improbable que ésta pueda ser restaurada.

²²⁵ Que a su vez constituye el precedente de nuestra pensión compensatoria regulada en el artículo 97 CC aunque con características diferentes.

De conformidad con el artículo 1566 CC Alemán, el fracaso del matrimonio se constata de oficio:

a) Cuando los esposos viven separados desde hace más de un año y están de acuerdo en divorciarse, pudiendo resultar tal acuerdo de una demanda conjunta o de la aceptación por un cónyuge (el demandado) de la demanda introducida por el otro cónyuge;

b) O, cuando los esposos viven separados desde hace tres años. En este caso no se exige el acuerdo de los esposos y la iniciativa de divorcio puede ser unilateral.

Así, en principio los esposos deben haber vivido separados durante un año antes de poder solicitar el divorcio. Este plazo puede acortarse si el demandante establece que el hecho de mantener el matrimonio representaría una dureza extrema para sí mismo. En este caso, los motivos invocados por el demandante reposan en el comportamiento del demandado.

Sin embargo, una vez se constata de oficio la ruptura del matrimonio, el juez no debe ejercer ningún control sobre los motivos alegados.

En los demás casos, el juez debe verificar que en efecto existe una ruptura irremediable del matrimonio, es decir, una ausencia de comunidad de vida. La separación puede constatarse aunque los esposos vivan bajo el mismo techo si resulta probado que llevan una vida independiente el uno del otro. La carga de la prueba corresponde al cónyuge demandante.

Según el artículo 1.568 CC Alemán, el juez puede denegar el divorcio si el mantenimiento del matrimonio, por razones particulares, se revela excepcionalmente indispensable en interés de los hijos menores o del demandado. Sin embargo, el juez no recurre a esta posibilidad salvo en muy contadas ocasiones.

3.5.- Derecho de Gran Bretaña

En Inglaterra, el “*Matrimonial Proceedings and Property Act*”²²⁶ disponía que el Tribunal debería esforzarse en colocar a los cónyuges²²⁷, en

²²⁶ “Matrimonial Proceedings and Property Act” es la Ley de Procedimiento en procesos Matrimoniales en Gran Bretaña.

la medida de lo posible, en la misma situación financiera que la que habrían disfrutado si el matrimonio no hubiera fracasado y cada uno hubiera cumplido sus deberes y responsabilidades respecto al otro²²⁸.

En Gran Bretaña existen tres jurisdicciones diferentes que aplican también legislaciones diferentes, Inglaterra y Gales, Escocia y por último, Irlanda del Norte. La legislación sobre divorcio “*Matrimonial Causes Act*” de 1.973.

Así, en primer lugar, para obtener el divorcio en Inglaterra y Gales uno de los cónyuges debe presentar una demanda escrita al tribunal de condado (*county court*). El demandante debe probar que la ruptura matrimonial es irremediable y aportar pruebas de al menos uno de los cinco hechos que se indican más adelante.

La demanda de divorcio no se puede interponer hasta un año después de la celebración del matrimonio, como mínimo. No obstante, las pruebas de la ruptura irremediable pueden corresponder al primer año.

Respecto de las causas del divorcio, la “*Matrimonial Causes Act*” de 1.973 recoge como única causa admisible de divorcio la ruptura irremediable del matrimonio. Para demostrar que el matrimonio ha fracasado de manera irremediable, es necesario aportar pruebas de una o más faltas conyugales.

Existen cinco tipos de faltas conyugales:

- a) El adulterio, si el demandante considera intolerable la convivencia con su cónyuge;
- b) El comportamiento irracional, que significa que el cónyuge se ha comportado de tal manera que el demandante tiene motivos para considerar que la convivencia no es posible;
- c) El abandono, que significa que el demandante ha sido abandonado por su cónyuge durante un periodo de dos años previo a la presentación de la demanda de divorcio;

²²⁷ En ausencia de acuerdo entre las partes mediante convenio, con una naturaleza claramente reequilibradora de la pensión compensatoria.

²²⁸ HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofía, “*La Pensión Compensatoria*”. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873. Página 8.

d) La separación durante un periodo de dos años anterior a la interposición de la demanda de divorcio (con el consentimiento del otro cónyuge);

e) La separación durante un periodo de cinco años anterior a la interposición de la demanda (sin el consentimiento del otro cónyuge).

Se deben presentar pruebas de que se ha cometido al menos una de estas faltas y de la imposibilidad del demandante de seguir conviviendo con su cónyuge. El tribunal, por su parte, deberá investigar en la medida de lo posible los hechos alegados por el demandante y los alegados por su cónyuge (demandado). Si el tribunal considera satisfactorias las pruebas de que la ruptura matrimonial es irremediable, el juez de distrito dictará la sentencia de divorcio.

El tribunal puede suspender los procedimientos en cualquier momento para que los cónyuges traten de reconciliarse y salvar su matrimonio. Sin embargo, si el tribunal está convencido del carácter irremediable de la ruptura matrimonial, dictará en primer lugar una sentencia condicional. La sentencia firme de divorcio se podrá solicitar transcurridas seis semanas. No existe límite de tiempo para solicitarla.

Pero, si la solicitud de sentencia firme se presenta transcurridos más de doce meses desde la adopción de la sentencia condicional, el solicitante deberá adjuntar una explicación por escrito, indicando:

a) los motivos del retraso.

b) si ha convivido con su cónyuge desde la fecha en que se dictó la sentencia condicional y, si es así, las fechas de inicio y fin de dicha convivencia.

c) en el caso de que sea la esposa quien ha interpuesto la demanda, si ha tenido descendencia tras la obtención de la sentencia condicional y, si es así, los hechos pertinentes y si alega o no la paternidad o posible paternidad de su esposo.

Por último, en lo que respecta a la separación, las condiciones necesarias para obtener la separación legal son las mismas que se aplican al divorcio. El demandante debe aportar pruebas de la ruptura irremediable del matrimonio y demostrar la existencia de, al menos, una de las causas de ruptura del matrimonio.

En cuanto a la relación personal entre los cónyuges, la pareja no tendrá que seguir conviviendo, los cónyuges podrán decidir libremente si desean mantener o cambiar sus apellidos.

El reparto de bienes entre los esposos en Inglaterra y Gales por motivo de divorcio se rige por la Ley de divorcio "*Matrimonial Causes Act*". El tribunal puede ordenar la transferencia de los bienes de un cónyuge al otro, a un hijo común o a otra persona en interés del menor.

En cuanto a la obligación de pagar alimentos al otro esposo, la obligación de mantener al otro cónyuge se extinguirá al obtenerse el divorcio, excepto en lo relativo a la disposición prevista sobre el reparto de bienes conyugales.

La separación, en la práctica tiene como consecuencias que después de dictarse sentencia de separación, el demandante deja de estar obligado a convivir con su cónyuge, sin embargo no podrá contraer matrimonio de nuevo. La separación se configura como una alternativa al divorcio. Las condiciones necesarias para obtener la separación legal son las mismas que las que se aplican al divorcio, las partes deben aportar pruebas de la ruptura irremediable del matrimonio.

El Derecho francés en Québec y el Derecho británico en el resto de Canadá tiene una gran influencia, Canadá está constituida por antiguas colonias británicas, el common law de origen inglés está presente en el derecho Canadiense, si bien la tradición de origen francés está viva en Quebec, donde se fundó la colonia llamada Nueva Francia en 1.608 y sometida expresamente por un edicto real en 1.663 a la aplicación exclusiva de la costumbre de París²²⁹. Por el Tratado de París de 1.763, que pone fin a la Guerra de los Siete años, Nueva Francia pasa a Inglaterra, si bien el nuevo soberano mantiene la aplicación del Derecho francés en la colonia, pero su administración se hace de conformidad con el Derecho inglés, la dualidad de fuentes en Quebec se mantiene hasta la actualidad.

En Canadá, el nuevo Código Civil vigente, que entró en vigor el día 1 de enero de 1.994, sustituyendo el anterior que tenía una clara influencia del Código Civil Napoleónico²³⁰, establece que el apoyo financiero a la

²²⁹ E. Mitjans y J.M. Castellá Jords. "*Introducción al sistema político y jurídico en Canadá*". Barcelona 2.001. Páginas 282-328.

²³⁰ Código Civil Canadiense de 1 de enero de 1.994.

disolución del matrimonio tiene como fin la readaptación por consecuencia de las desventajas económicas causadas por el matrimonio, no debiendo constituirse como una garantía de manutención de por vida para los esposos en otro tiempo dependientes entre sí²³¹.

El derecho al sustento se deberá prolongar tanto tiempo como exista razonablemente la necesidad²³², y, en consecuencia, puede ser temporal o vitalicio. El esposo beneficiario de la pensión deberá proveer a sus propias necesidades en un plazo razonable después de la disolución del matrimonio, salvo si por la duración de éste, por la naturaleza de las necesidades y por el origen de las mismas no fuera razonable, y no fuera irracional que el deudor continuase asumiendo esta responsabilidad.

3.6.- Derecho Portugués

El Código Civil Portugués de 1.867 estableció la indisolubilidad de la unión conyugal al disponer en su artículo 1.056 CC Portugués²³³ que el matrimonio es un contrato perpetuo hecho entre dos personas de sexo diferente, con el fin de constituir legítimamente la familia. Se reconocían efectos civiles al matrimonio canónico y se reservaba el matrimonio civil a los no católicos²³⁴.

La Revolución de 1.910 modificó sustancialmente el sistema, al implantar, por Ley de 25 de diciembre de 1.910, el matrimonio civil obligatorio, aunque ya anteriormente otra Ley, de 3 de noviembre de 1.910, introdujo, por primera vez, el divorcio en el país, tanto por consentimiento mutuo como por diversas causas subjetivas y objetivas. Así pues, el divorcio fue promulgado por primera vez en Portugal mediante el Decreto de 3 de noviembre de 1.910, por el que el divorcio era aplicable tanto a los casados bajo la forma católica como a los casados civilmente, admitiéndose tanto la disolución de mutuo consentimiento como la litigiosa.

²³¹ HOYA COROMINA, José, ANAUT ARREDONDO, Sofia, “*La Pensión Compensatoria*”. Estudios Jurídicos. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, 15 de julio de 2.000, núm. 1873. Página 8.

²³² Con influencia de la concepción germánica de la legislación alemana y carácter asistencial.

²³³ Art. 1.056 CC Portugués de 1.867: “El matrimonio es un contrato perpetuo hecho entre dos personas de sexo diferente, con el fin de constituir legítimamente la familia”.

²³⁴ DE PERALTA Y CARRASCO, Manuel. “*El Divorcio en el Derecho Portugués*”. “El divorcio en el Derecho Iberoamericano”. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 552 y ss.

A partir del día 1 de agosto de 1.940²³⁵, y debido a la firma de un Concordato con la Santa Sede, el divorcio pasó a estar prohibido para aquellos que contrajesen matrimonio católico desde su entrada en vigor.

Dicha situación se mantuvo en la redacción del Código Civil Portugués, pero manteniéndose como una alternativa válida y posible para los que hubiesen contraído matrimonio, ya fuese civil o canónicamente, antes de esa fecha en la que estaba vigente la Ley del Divorcio.

La misma situación continuaría en la redacción del Código Civil Portugués de 1.966, en la que no podían divorciarse los matrimonios canónicos celebrados con posterioridad al 1 de agosto de 1.940, ni los civiles que con posterioridad a dicha fecha hubiesen celebrado matrimonio católico, y aunque se mantuvo el divorcio litigioso para matrimonios civiles, y para los católicos celebrados antes del 1 de agosto de 1.940, se suprimió el divorcio por mutuo consentimiento.

El cambio no se produjo hasta que el 15 de febrero de 1.975, se rubricó la firma de un Protocolo Adicional del Concordato con la Santa Sede, por el que se revocaba la prohibición del divorcio de los matrimonios canónicos posteriores al 1 de agosto de 1.940, y el impedimento a la tramitación de separación en caso de petición de divorcio de mutuo acuerdo, pasando a ser admitido el divorcio tanto el litigioso como el de mutuo acuerdo.

A partir de dicha fecha, cualquiera de los cónyuges tiene derecho al divorcio, bien con la conjunción de voluntades, o bien por voluntad unilateral. Con la verificación de ciertos supuestos legalmente tasados, puede ser disuelto el matrimonio, siendo necesario para su extinción, mediante el divorcio, una relación matrimonial, una declaración de voluntad complementada por una posterior decisión judicial tal y como se establece en el Código Civil Portugués.

Características del divorcio en Portugal:

-Se considera un derecho personal e intransmisible.

²³⁵ Concordato de Portugal con la Santa Sede celebrado en Roma el día 7 de mayo de 1.940 y ratificado el día 1 de agosto de 1.940, incorporándose al Derecho Portugués con fecha 1 de agosto de 1.940.

- Detentan la legitimidad para interponer la acción de divorcio:

- En el caso de divorcio de mutuo acuerdo la legitimación corresponde a los dos cónyuges conforme a los artículos 1.775 y siguientes del CC Portugués²³⁶.

- En el caso de divorcio litigioso la legitimación procesal activa puede corresponder a ambos cónyuges cuando hay una separación de hecho durante tres años consecutivos, o al cónyuge ofendido o a su representante legal con autorización del Consejo de Familia, si éste está tutelado, cuando invoca la violación de los deberes conyugales, o solo por uno de los cónyuges en función de la causa invocada.

El titular del derecho, es decir, los cónyuges, no pueden renunciar voluntariamente al ejercicio de este derecho, no siendo posible una renuncia genérica o total, que implique una renuncia a pedir el divorcio por todas o cualquiera de las causas que lo posibilite ni una renuncia específica a pedir el divorcio con base a determinadas causas, ni una renuncia parcial condicionada a que se cumplan o no ciertas condiciones.

En el divorcio de mutuo acuerdo o consentimiento, los cónyuges no tienen que revelar la causa de la demanda de divorcio, y puede ser solicitado por los cónyuges en cualquier momento. El divorcio de mutuo acuerdo se concibe como un divorcio sin causa que nace del cese de la “*affectio maritalis*”, en virtud de la cual los cónyuges quieren dar por finalizada la relación conyugal.

Estos procesos de divorcio son simples y rápidos, el juez únicamente ha de velar para que el consentimiento de cada cónyuge se otorgue con pleno conocimiento y libertad, así como por la idoneidad de los acuerdos patrimoniales, y los relativos a los hijos. Se puede solicitar ante el Tribunal o a la Conservatoria del Registro Civil. Para que pueda ser solicitado en el Registro Civil la pareja no tienen que tener hijos menores, o teniéndolos, el ejercicio de la patria potestad ha de estar judicialmente regulada. Por el contrario, si la pareja tuviera hijos o el ejercicio de la patria potestad no estuviese judicialmente determinado, es necesaria la intervención de una autoridad judicial.

²³⁶ Art. 1.775 CC Portugués: “Los cónyuges deben acordar la prestación de alimentos al cónyuge que los necesite, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores, la atribución de la vivienda familiar”.

No obstante la sencillez del procedimiento, para evitar la toma de decisiones precipitadas, el artículo 1.776 CC Portugués²³⁷ establece que una vez recibida la demanda de divorcio, el Juez convocará a los cónyuges para una reunión, en la que se intentará la conciliación entre los cónyuges, la cual si no fuese posible habrán de reiterar después de un periodo de reflexión de tres meses.

Así mismo, se establece la necesidad de un acuerdo o propuesta que regule aspectos como los alimentos al cónyuge necesitado, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de edad, y la atribución de la vivienda familiar, conforme al artículo 1.775 CC Portugués.

El artículo 1.775 CC Portugués pone de manifiesto la existencia de una pensión entre cónyuges con claro carácter asistencial, equiparable a nuestro derecho de alimentos regulado en el artículo 142 CC, pero no a la pensión compensatoria regulado en el artículo 97 CC.

Esta propuesta debe ser tutelada por la autoridad judicial, debiendo el juez requerir a las partes, en caso de que aprecie que el acuerdo no satisface suficientemente el interés de alguno de los hijos, para que se rehaga la propuesta. Si esta propuesta se recoge en la sentencia se decretará la definitiva disolución conyugal, pero si esos acuerdos no protegiesen suficientemente los intereses de uno de los cónyuges o de los hijos, la homologación será rechazada y la petición de divorcio desestimada.

El divorcio contencioso tiene lugar normalmente a petición de uno de los cónyuges, que ha de basar la misma en la concurrencia de alguna de las causas legalmente tasadas, en virtud de las cuales se produce un quebranto de los derechos y deberes conyugales, que abre la puerta a la posible disolución del matrimonio por voluntad unilateral del cónyuge ofendido.

²³⁷ Art. 1.776 CC Portugués: Artigo 1.776: Primeira conferência 1. Recebido o requerimento, o juiz convocará os cônjuges para uma conferência em que tentará conciliá-los; se a conciliação não for possível, adverti-los-á de que deverão renovar o pedido de divórcio após um período de reflexão de três meses, a contar da data da conferência, e dentro do ano subsequente à mesma data, sob pena de o pedido ficar sem efeito. 2. O juiz deve apreciar na conferência os acordos a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, convidando os cônjuges a alterá-los se esses acordos não acautelarem suficientemente os interesses de algum deles ou dos filhos; deve ainda homologar os acordos provisórios previstos no n.º 3 do mesmo artigo, podendo alterá-los, ouvidos os cônjuges, quando o interesse dos filhos o exigir. 3. Se os cônjuges persistirem no seu propósito, o dever de coabitação fica suspenso a partir da conferência e qualquer deles pode requerir arrolamento dos seus bens próprios e dos bens comuns.

Dicho divorcio puede plantearse bajo supuestos subjetivos, que han de ser denunciados y debidamente valorados por el tribunal, cuales son los establecidos en el artículo 1.779 CC Portugués²³⁸, y bajo la formulación de circunstancias objetivas, tasadas en el artículo 1.781 CC Portugués²³⁹. No obstante, el artículo 1.774 CC Portugués²⁴⁰ establece que es necesario intentar la conciliación del matrimonio, que de no resultar, hace necesario el intento de reconversión del divorcio litigioso en divorcio de mutuo acuerdo, intento que ha de procurarse en cualquier momento del proceso litigioso, que, de darse, ha de procurarse con la consiguiente adaptación del proceso y medidas en curso.

El divorcio contencioso por vía judicial comienza con una demanda inicial, presentada ante el juzgado territorial competente, el del domicilio o residencia del actor, que debe contener unos hechos causales u objetivos, que justifican la disolución del vínculo matrimonial y pueden aportarse los medios de prueba pertinentes, junto con los documentos relativos a los certificados de las partidas de registro del matrimonio y de nacimiento de los hijos comunes que deberán adjuntarse con la demanda.

Recibida la demanda inicial, el juez fijara la fecha para un intento de reconciliación entre los cónyuges, que deberán acudir personalmente. Esta conciliación puede darse y se concluye el procedimiento, puede convertirse el procedimiento contencioso en uno de mutuo acuerdo, o no conseguirse ésta y continuarse el procedimiento judicial, contestando a la demanda la otra parte en el plazo de 30 día, posteriormente se señalara una audiencia

²³⁸ Art. 1.779 CC Portugués: Artigo 1.779: Violação culposa dos deveres conjugais 1. Qualquer dos cônjuges pode requerer o divórcio se o outro violar culposamente os deveres conjugais, quando a violação, pela sua gravidade ou reiteração, comprometa a possibilidade da vida em comum. 2. Na apreciação da gravidade dos factos invocados, deve o tribunal tomar em conta, nomeadamente, a culpa que possa ser imputada ao requerente e o grau de educação e sensibilidade moral dos cônjuges.

²³⁹ Art. 1.781 CC Portugués: Artigo 1.781: Ruptura da vida em comum. São ainda fundamento do divórcio litigioso: a) A separação de facto por três anos consecutivos; b) A separação de facto por um ano se o divórcio for requerido por um dos cônjuges sem oposição do outro; c) A alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure há mais de três anos e, pela sua gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum; d) A ausência, sem que do ausente haja notícias, por tempo não inferior a dois anos.

²⁴⁰ Art. 1.774 CC Portugués: Artigo 1.774: Tentativa de conciliação; conversão do divórcio litigioso em divórcio por mútuo consentimento 1. No processo de divórcio haverá sempre uma tentativa de conciliação dos cônjuges. 2. Se, no processo de divórcio litigioso, a tentativa de conciliação não resultar, o juiz procurará obter o acordo dos cônjuges para o divórcio por mútuo consentimento; obtido o acordo ou tendo os cônjuges, em qualquer altura do processo, optado por essa modalidade do divórcio, seguir-se-ão os termos do processo de divórcio por mútuo consentimento, com as necessárias adaptações.

final para la práctica de la prueba propuesta documental y testifical, dictándose sentencia en primera instancia.

Las causas de la demanda de divorcio pueden ser subjetivas y objetivas.

Son causas subjetivas del divorcio: La violación grave o reiterada de los deberes conyugales, de tal manera que un acto voluntario e ilícito realizado por uno de los cónyuges, en el que quiebran los deberes conyugales pactados, que por su gravedad y/o reiteración, compromete la vida en común (deber de respeto, deber de fidelidad, deber de convivencia, deber de cooperación, deber de asistencia).

Son causas objetivas del divorcio:

- La separación de hecho durante tres años consecutivos.
- La separación de hecho durante un año, si uno de los cónyuges demanda el divorcio y el otro no se opone.
- La alteración de las facultades mentales de un cónyuge cuando dure más de tres años y, por su gravedad, pueda poner en peligro la convivencia.
- La ausencia, sin noticias del ausente, durante al menos dos años.

Junto a la separación de hecho, que con el transcurso del tiempo supone causa objetiva de divorcio litigioso, cabe la separación judicial, siendo aplicables las disposiciones relativas al divorcio, si bien la separación judicial en cuanto a sus efectos, no disuelve el vínculo matrimonial pero suprime los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho de alimentos, y en cuanto a los bienes produce los mismos efectos que la disolución matrimonial. En cuanto a los motivos para instar la separación judicial son los mismos que los del divorcio por vía judicial.

Los efectos jurídicos del divorcio en lo personal, son: se disuelve el matrimonio desde que se decreta judicialmente: no obstante la extinción del vínculo conyugal el ordenamiento jurídico portugués permite que uno de los miembros de la pareja pueda conservar los apellidos que haya adoptado del otro, siempre que éste dé su consentimiento o lo autorice el tribunal.

Los efectos jurídicos del divorcio en lo patrimonial son: se calcularán retroactivamente desde la fecha de interposición de la demanda; no obstante, los efectos patrimoniales del divorcio solo afectarán a terceros desde la fecha de registro de la sentencia.

El cónyuge declarado único o principal responsable pierde todas las ventajas recibidas o que deba recibir del otro cónyuge, o de un tercero, en razón del matrimonio, o en consideración del estado de casado, con independencia de que se hayan estipulado antes o después de la celebración del matrimonio. Por el contrario, el cónyuge inocente o que no sea el principal responsable conservará todas las ventajas recibidas o que deba recibir del otro cónyuge o de un tercero, aunque hayan sido estipuladas con cláusula de reciprocidad.

El cónyuge declarado único o principal responsable del divorcio, y el cónyuge que haya solicitado el divorcio aduciendo la alteración de las facultades mentales del otro cónyuge, debe reparar los daños no materiales causados al otro cónyuge por la disolución del matrimonio. La petición de la indemnización se incluirá en la propia demanda de divorcio.

Respecto a la obligación alimenticia para con el cónyuge en los términos previstos en el artículo 1.675 CC Portugués²⁴¹, queda tasada de manera expresa en el artículo 2.015 CC Portugués²⁴², estableciendo en el artículo 2.016 CC Portugués²⁴³, que en el caso de divorcio, igual que en el caso de separación judicial, se mantiene el derecho de alimentos.

²⁴¹ Art. 1.675 CC Portugués: “Artigo 1.675: Dever de assistência. 1. O dever de assistência compreende a obrigação de prestar alimentos e a de contribuir para os encargos da vida familiar. 2. O dever de assistência mantém-se durante a separação de facto se esta não for imputável a qualquer dos cônjuges. 3. Se a separação de facto for imputável a um dos cônjuges, ou a ambos, o dever de assistência só incumbe, em princípio, ao único ou principal culpado; o tribunal pode, todavia, excepcionalmente e por motivos de equidade, impor esse dever ao cônjuge inocente ou menos culpado, considerando, em particular, a duração do casamento e a colaboração que o outro cônjuge tenha prestado à economia do casal”.

²⁴² Art. 2.015 CC Portugués: “Artigo 2015: Obrigação alimentar relativamente a cônjuges. Na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges são reciprocamente obrigados à prestação de alimentos, nos termos do artigo 1.675”.

²⁴³ Art. 2.016 CC Portugués: “Artigo 2016: Divórcio e separação judicial de pessoas e bens. 1. Têm direito a alimentos, em caso de divórcio: a) O cônjuge não considerado culpado ou, quando haja culpa de ambos, não considerado principal culpado na sentença de divórcio, se este tiver sido decretado com fundamento no artigo 1779.º ou nas alíneas a) ou b) do artigo 1781.º; b) O cônjuge réu, se o divórcio tiver sido decretado com fundamento na alínea c) do artigo 1781.º; c) Qualquer dos cônjuges se o divórcio tiver sido

De dicho articulado se desprende que tienen derecho a la prestación alimenticia:

- El cónyuge no considerado responsable o, cuando ambos sean responsables, no considerado el principal responsable en la sentencia de divorcio, si éste hubiera sido el resultado del incumplimiento de los deberes conyugales, o resultase de la separación de hecho durante tres años consecutivos, o de la separación de hecho durante un año, si el divorcio es solicitado por uno de los cónyuges, sin oposición del otro.

- El cónyuge responsable, si el divorcio se ha concedido como resultado de una alteración grave de las facultades mentales del otro cónyuge que pueda poner en peligro la convivencia, desde hace más de tres años.

- Cualquiera de los cónyuges, si el divorcio se ha resuelto por mutuo consentimiento o si, tratándose de divorcio por vía judicial, los dos son declarados igualmente responsables.

Excepcionalmente, el tribunal, por motivos de equidad, puede conceder el derecho de alimentos al cónyuge que no tendría derecho a ellos habida cuenta la duración del matrimonio y su aportación a la economía familiar. Para fijar la cuantía de los alimentos, el tribunal debe tener en cuenta la edad y el estado de salud de los cónyuges, sus cualificaciones profesionales y posibilidades de acceso a un empleo, el tiempo que tendrán que dedicar, eventualmente, a educar a los hijos comunes, sus ingresos y renta y, en general, todas las circunstancias que influyan en las necesidades del beneficiario de los alimentos y en los medios del que los presta. Dicho derecho de alimentos se perderá, conforme al artículo 2.019 CC Portugués²⁴⁴, si el beneficiario, tras divorciarse contrajese un nuevo matrimonio, o si demuestra ser indigno por su comportamiento moral.

decretado por mútuo consentimento ou se, tratando-se de divórcio litigioso, ambos forem considerados igualmente culpados. 2. Excepcionalmente, pode o tribunal, por motivos de equidade, conceder alimentos ao cônjuge que a eles não teria direito, nos termos do número anterior, considerando, em particular, a duração do casamento e a colaboração prestada por esse cônjuge à economia do casal. 3. Na fixação do montante dos alimentos deve o tribunal tomar em conta a idade e estado de saúde dos cônjuges, as suas qualificações profissionais e possibilidades de emprego, o tempo que terão de dedicar, eventualmente, à criação de filhos comuns, os seus rendimentos e proventos e, de modo geral, todas as circunstâncias que influam sobre as necessidades do cônjuge que recebe os alimentos e as possibilidades do que os presta. 4. O disposto nos números anteriores é aplicável ao caso de ter sido decretada a separação judicial de pessoas e bens”.

²⁴⁴ Art. 2.019 CC Portugués: Artigo 2.019: “Cessação da obrigação alimentar. Em todos os casos referidos nos artigos anteriores, cessa o direito a alimentos se o alimentado

contrair novo casamento, ou se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral”.

CAPÍTULO IV

DERECHO COMPARADO (II): PAÍSES LATINOAMERICANOS

4.1.- Derecho Argentino

En el Derecho Argentino se implantó la institución del divorcio de manera sistematizada en el año 1.989, tras la sanción de la Ley 23.515. Con anterioridad el Código Civil Argentino, en vigor desde el día 1 de enero de 1.871, establecía una única modalidad para contraer matrimonio: el matrimonio religioso. Por lo tanto, las causas del divorcio (no vincular, es decir, con el alcance de la actual figura de la separación personal donde no queda disuelto el vínculo matrimonial) entre personas casadas ante la Iglesia Católica o con autorización de ésta cuando se trataba de matrimonios mixtos, eran competencia de los tribunales eclesiásticos²⁴⁵.

Excepcionalmente las causas de divorcio planteadas por matrimonios religiosos celebrados sin la pertinente autorización, eran competencia de los juzgados civiles, cuando las causas eran:

- a) Adulterio de la mujer o del marido.
- b) Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.
- c) Ofensas físicas o malos tratamientos.

En el año 1.888 se sanciona la Ley 2.393; que incorpora al Código Civil Argentino el Matrimonio Civil. Así se produce la secularización del matrimonio y las consecuentes modificaciones que se introducen a la legislación de fondo como ser la competencia del juez civil para entender en los conflictos de divorcio no vincular. En el marco de esta Ley sólo se admitía el divorcio sanción para determinados supuestos.

Este sistema de divorcio con el alcance de la separación personal, se mantuvo invariable hasta el año 1.954, donde se sanciona la Ley 14.394;

²⁴⁵ HERRERA, Marisa. "El Divorcio en el Derecho Argentino". *"El divorcio en el Derecho Iberoamericano"*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 85 y ss.

esta normativa lleva al divorcio vincular (ruptura del vínculo matrimonial), por vía de conversión, es decir, se admitía la petición de la correspondiente transformación del divorcio no secular en divorcio vincular cuando se cumplieran ciertos requisitos.

Este procedimiento tuvo escasa vigencia ya que el Decreto-Ley 4.070 del año 1.965 decretó la suspensión de la norma transcrita hasta tanto se adoptara una Ley integral sobre el tema, lo que ocurrió en el año 1.987 con la sanción de la Ley 23.515 por la que se introduce en el Código Civil Argentino una regulación sobre el divorcio vincular en el Derecho Argentino.

Las causas de divorcio eran las únicas que se podían alegar para conseguir una sentencia de divorcio (no vincular), conforme al artículo 67, siendo todas ellas causales culpables, la rigidez de la legislación obligaba a que los cónyuges, de manera ficticia, alegaran mutuamente causas culpables en un procedimiento que sería “seudo contradictoria” para así alcanzar la sentencia de separación de cuerpos que ambos tenían como objetivo.

Ante dicha situación la Ley 17.711 de 1.968 incorpora al derecho civil el artículo 67 bis mediante el cual se permite solicitar el divorcio (no vincular) por mutuo acuerdo de los cónyuges. Esta norma es la base del actual artículo 236 CC Argentino²⁴⁶ que regula el procedimiento para el divorcio vincular o la separación personal por presentación conjunta o mutuo acuerdo. Así mismo el Máximo Tribunal Federal de Argentina, con fecha 27 de noviembre de 1.986, declaró inconstitucional el artículo 64 y concordantes (71 bis y 81) que disponían la indisolubilidad del vínculo matrimonial.

²⁴⁶ Art. 236 CC Argentino: “En los casos de los artículos 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos: • 1º. Tenencia y régimen de visitas de los hijos; • 2º. Atribución del hogar conyugal; • 3º. Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización. También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de la misma tramitará por vía sumaria. El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no constarán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno”.

Respecto a los efectos derivados del divorcio se diferencian las distintas causas como las dos instituciones –separación personal o divorcio vincular-, los efectos que repercuten de manera directa en los cónyuges o ex cónyuges que en el sistema argentino se denominan alimentos y no pensión compensatoria.

En materia alimentaria, los cónyuges están facultados para pactar o acordar la asistencia material, con total libertad, mediante la modalidad que les resulte más apropiada²⁴⁷

Más allá de ello, la Ley establece ciertos efectos con respecto a esta clasificación doctrinal:

- Alimentos amplísimos: son los alimentos regulados a favor del cónyuge enfermo en el marco de la separación personal por trastorno de la conducta. Se regulan en el artículo 208 CC Argentino²⁴⁸, que expresa un supuesto de separación regulado en el artículo 203 CC Argentino²⁴⁹ decretándose una pensión a favor del cónyuge enfermo, que contenga además lo necesario para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges, y teniendo carácter hereditario la misma en caso de fallecimiento del acreedor de la pensión.

Por lo tanto, al cónyuge enfermo no solo le corresponde la obligación alimentaria con la extensión que el artículo 207 CC Argentino²⁵⁰ le otorga al cónyuge inocente, sino que, además le corresponde la obligación de proveer lo necesario para su tratamiento y recuperación: agregándose que

²⁴⁷ Equivalente a nuestro derecho de alimentos entre cónyuges regulado en el artículo 142 CC.

²⁴⁸ Art. 208 CC Argentino: “Cuando la separación se decreta por alguna de las causas previstas en el artículo 203 regirá, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior a favor del cónyuge enfermo, a quien, además, deberán procurársele los medios necesarios para su tratamiento y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges. Fallecido el cónyuge obligado, aunque se hubiere disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular con anterioridad, la prestación será carga en su sucesión debiendo los herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cumpliéndola”.

²⁴⁹ Art. 203 CC Argentino: “Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos”.

²⁵⁰ Art. 207 CC Argentino: “El cónyuge que hubiera dado causa a la separación personal en los casos del artículo 202, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos”.

esta obligación, a diferencia de los otros supuestos, será la carga de la sucesión, es decir, deberá ser cumplida por los herederos del alimentante.

- Alimentos amplios: se regulan en el artículo 207 CC Argentino, contiene la pensión compensatoria un poco *sui generis* pero con similitudes con la contenida en nuestro artículo 97 CC, pues aunque formula el término de cónyuge causante de la separación, establece el criterio del mantenimiento del nivel económico del que gozaron durante la convivencia. Y matiza en cuanto a su fijación el término muy empleado en las distintas legislaciones sobre los recursos de ambos.

Continúa el artículo 207 CC Argentino²⁵¹ describiendo los factores a tener en cuenta para la fijación de la pensión, tales como la edad y el estado de salud de los cónyuges, la dedicación al cuidado de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos, la capacitación laboral y posibilidad de acceso al mercado laboral y probabilidades del acceso a un empleo del alimentista, la eventual pérdida de un derecho de pensión, el patrimonio y las necesidades de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal.

Esta disposición vale tanto para los casos de separación personal como de divorcio vincular, conforme al artículo 217 CC Argentino²⁵² de carácter subjetivo, es decir, donde se dirimen culpas. El cónyuge culpable debe cumplir una obligación alimentaria que le permita al otro mantener el nivel de vida que tenía durante la convivencia, estableciéndose ciertas pautas para la fijación de dicha obligación.

- Alimentos restringidos: los alimentos restringidos se regulan en el artículo 209 CC Argentino²⁵³, que declara el derecho a alimentos al

²⁵¹ Art. 207 CC Argentino: ²⁵¹ “Para la fijación de la pensión se tendrá en cuenta: 1.- La edad y estado d salud de los cónyuges. 2. La dedicación al cuidado de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos. 3.- La capacitación laboral y posibilidad de acceso al mercado laboral y probabilidades del acceso a un empleo del alimentado. 4.- La eventual pérdida de un derecho de pensión. 5.- El patrimonio y las necesidades de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal. En la sentencia el Juez fijara las bases para actualizar el monto alimentario”.

²⁵² Art. 217 CC Argentino: “La sentencia de divorcio vincular producirá los mismos efectos establecidos para la separación personal en los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212. Los cónyuges recuperarán su aptitud nupcial y cesará la vocación hereditaria recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 3574, último párrafo”.

²⁵³ Art. 209 CC Argentino: “Cualquiera de los esposos, haya o no declaración de culpabilidad en la sentencia de separación personal, si no tuviera recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si

cónyuge que no tenga recursos suficientes para su subsistencia, con independencia de quien haya sido el causante de la separación.

Estos son los alimentos de extrema necesidad, por lo cual, su cuantía debe tender a proporcionar lo mínimo para la subsistencia del ex cónyuge que los solicita. Esta obligación alimentaria es reconocida a:

- El cónyuge culpable de la separación personal o del divorcio vincular.
- Los cónyuges separados o divorciados por alguna de las causas objetivas de separación de hecho o presentación conjunta.
- El cónyuge sano en la separación personal por trastornos de la conducta.

En todos los supuestos donde subsiste la obligación alimentaria, ya sea por vía contractual o legal, se pierde o cesa, “si el cónyuge que lo percibe vive en concubinato o incurre en injurias graves contra el otro cónyuge”, conforme al artículo 218 CC Argentino²⁵⁴, para el caso de divorcio vincular.

4.2.- Derecho Boliviano

Los antecedentes en Bolivia respecto al divorcio son el Código Civil de 1.831, que formó parte de los llamados Códigos Santa Cruz, debido al nombre del Presidente que los promulgó. Atribuía a los tribunales eclesiásticos la competencia para conocer y fallar sobre el divorcio, pero no reconocía el divorcio absoluto, únicamente estaba permitida la separación de los cónyuges o divorcio relativo, manteniéndose el vínculo conyugal, que solo podía disolverse por la muerte real o presunta²⁵⁵.

Posteriormente, el día 15 de abril de 1.932 fue sancionada la Ley del divorcio absoluto, que introdujo la posibilidad en Bolivia de obtener el

tuviera medios, le provea lo necesario para su subsistencia. Para determinar la necesidad y el monto de los alimentos se tendrán en cuenta las pautas de los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 207”.

²⁵⁴ Art. 218 CC Argentino: “La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207, 208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge”.

²⁵⁵ MARTÍNEZ CENTENO, Toribio “El Divorcio en el Derecho Boliviano”. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalia, 2.009. Páginas 101 y ss.

divorcio absoluto de matrimonios celebrados en el extranjero, siempre que el país donde se hubiese celebrado admitiese la desvinculación conyugal.

El Código de Familia Boliviano de 1.972, ratificó que el matrimonio se disuelve por la muerte o por la declaración de fallecimiento presunto de uno de los cónyuges o, también, por sentencia ejecutoria de divorcio.

La normativa vigente admite el divorcio sobre la base de las siguientes causas: el adulterio, crimen o tentativa de crimen contra la vida del otro consorte, su honra o sus bienes, corrupción o prostitución del cónyuge o de los hijos, sevicias, injurias graves y malos tratos, abandono del hogar, separación libre y continuada por más de dos años.

En el derecho Boliviano en lo relativo al divorcio se regula en el Código de Familia que tiene su origen en la Ley del Divorcio Absoluto de 15 de abril de 1.932.

Respecto a los efectos patrimoniales derivados del divorcio, el primer efecto que se produce es la división de los bienes gananciales, sistema económico matrimonial que se adopta desde el momento de su celebración, haciendo partibles por mitad igual para cada uno de los cónyuges.

Así mismo, se producen efectos de asistencia familiar entre los esposos e hijos. Si el esposo que no dio motivo para el divorcio carece de medios suficientes para su subsistencia y los necesita, puede pedir pensión de asistencia familiar conforme al artículo 143 CF Boliviano²⁵⁶.

Pero, además de la pensión asistencial de prestación de alimentos, el derecho boliviano regula una pensión en concepto de resarcimiento de daños materiales y morales en su artículo 144 CF Boliviano²⁵⁷, equivalente

²⁵⁶ Art. 143 CF Boliviano, (Pensión de Asistencia): "Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no tiene medios suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia en las condiciones previstas por el artículo 21. Esta obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario contrae nuevo matrimonio, cuando obtiene medios suficientes de subsistencia o cuando ingresa en unión libre o de hecho. Si el divorcio se declara por culpa de ambos cónyuges, no hay lugar a la asistencia. En caso de divorcio declarado con apoyo del artículo 131, se fijará una pensión de subsistencia al cónyuge que la necesite".

²⁵⁷ Art. 144 CF Boliviano, (Resarcimiento): "Independientemente, el cónyuge culpable puede ser condenado al resarcimiento del daño material y moral que haya causado al inocente por la disolución del matrimonio".

a la indemnización que se contiene en el artículo 1.438 CC, si bien, sólo de forma parcial y en algunos aspectos.

La fijación de una pensión a favor del esposo no culpable en caso de necesidad, podría ocasionar situaciones incómodas, sobre todo para la mujer causante del divorcio, atentando contra la equidad y la justicia.

La asistencia familiar comprende todo lo indispensable para el sustento, la educación, el vestido y la atención médica, siendo de cumplimiento inexcusable y obligatorio, de conformidad con el artículo 14 CF Boliviano.

Con independencia de la asistencia familiar que pueda ser fijada a favor de uno de los cónyuges, de conformidad con el artículo 144 CF Boliviano, el cónyuge culpable de la desvinculación conyugal también puede ser condenado al resarcimiento de los daños materiales y morales que hubiese causado al cónyuge inocente, si bien en la práctica no es frecuente la solicitud de daños y perjuicios ocasionados por el matrimonio.

4.3.- Derecho Brasileño

La institución del divorcio en Brasil²⁵⁸ es relativamente reciente; data de mediados de 1.977, al aprobarse la Enmienda Constitucional número 09 de 28 de junio de 1.977²⁵⁹ y Ley de 1.977. Mientras que en otros países fundamentalmente los europeos el divorcio se introdujo a principios del siglo XX, así en Portugal el divorcio se introdujo en 1.910, a través del Decreto de 3 de noviembre de 1.910 pero en Brasil durante siglos perduro la indisolubilidad del matrimonio.

Como efectos personales del divorcio están los efectos sobre el nombre, posibilidad de contraer nuevo matrimonio y pensión alimenticia. Respecto de esta última, debe ser preservado, en la medida de lo posible, el status quo del cónyuge y de los hijos, por medio de la pensión alimenticia, alargando el concepto de necesidad no solo para fines de subsistencia y

²⁵⁸ VAINSENER, Tania. "El Divorcio en el Derecho Brasileño". *"El divorcio en el Derecho Iberoamericano"*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalia, 2.009. Páginas 123 y ss.

²⁵⁹ La Enmienda Constitucional número 09 de 28 de junio de 1.977 dio lugar a la promulgación de la Ley número 6.515, de 26 de diciembre de 1.977 que la reglamentó.

supervivencia, sino también para el mantenimiento del mismo patrón de vida existente durante la vigencia del matrimonio.

En la pensión de alimentos conviven dos conceptos, necesidad y posibilidad, exigiéndose la comprobación de la necesidad de quien pleitea, no bastando ser titular del derecho. La necesidad de alimentos depende de la posibilidad del otro para proveerlos, y debe ser entendida como prueba de la dificultad financiera, con la caída del patrón de las condiciones de vida del titular del derecho, y, además, imposibilidad de obtener por su cuenta y riesgo los rendimientos necesarios, sea por inexistencia de patrimonio, de renta o de incapacidad para el trabajo.

La prueba de la necesidad es prescindible cuando se trate de alimentos para los hijos menores, por ser legalmente presumida. Tratándose del cónyuge, se ha de observar si la parte ejerció actividad remunerada durante la convivencia familiar, principalmente por imposición del otro.

La obligación de alimentar puede existir de cualquier cónyuge para el otro, independientemente del sexo, a tenor del principio de igualdad preconizado en la Constitución Federal.

La posibilidad del deudor de soportar el débito debe pautarse en los rendimientos reales, que efectivamente sirvan para el pago de los alimentos, sin perder de vista la manutención propia del alimentante.

En el Derecho Brasileño no existe ninguna previsión legal de protección o porcentaje para la fijación de los alimentos, tomando como base la renta del alimentante, el criterio primordial para la fijación de los alimentos deberá ser lo considerado razonable.

La pensión alimenticia es irrenunciable, por tratarse de un derecho indisponible. El cónyuge puede dejar de ejercer el derecho a pensión alimenticia, cuando se produzca el decreto del divorcio, pero no podrá renunciar al derecho, debiendo ser proporcional con la necesidad del alimentando (reclamante) y/o posibilidad del alimentante (persona obligada), todo ello conforme al artículo 1.694 CC Brasileño²⁶⁰.

²⁶⁰ Art. 1.694 CC Brasileño: "Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com

El nuevo matrimonio del cónyuge deudor, per se, no es causa suficiente para que se produzca el cese del pago de la pensión pero sí para que se produzca la disminución del valor de la pensión alimenticia, a través de la acción de revisión. Esta revisión tendrá lugar en la hipótesis de que el cónyuge alimentante contraiga nuevas nupcias, y sobrevengan hijos del nuevo matrimonio. En estos casos si se produce una alteración de su situación financiera, lo cual debe de comprobarse en el sentido de que dicha alteración sea efectiva, como se contempla en el artículo 1.699 CC Brasileño²⁶¹.

Las prestaciones alimenticias no se extinguen automáticamente por nuevo matrimonio del deudor de las mismas, conforme al artículo 1.709 CC Brasileño²⁶².

En el Derecho Brasileño el no cumplimiento de la obligación de alimentar tiene como hipótesis de coerción máxima la imposición de pena privativa de libertad con la finalidad de conferir al acreedor de alimentos un medio eficaz de incitar al deudor al cumplimiento de su obligación.

4.4.- Derecho Chileno

En Chile se dictó en 1.884 la Ley del Matrimonio Civil, que secularizó el matrimonio pero las condiciones de validez y las formas de disolución reconocidas siguieron de cerca el Derecho Canónico. El divorcio fue reconocido en la legislación sólo como una “separación de cuerpos”, sin efectos sobre el vínculo matrimonial, que seguía plenamente vigente²⁶³.

El divorcio vincular fue reconocido en la Nueva Ley del Matrimonio Civil Chilena de 17 de mayo de 2.004. Sin embargo desde 1.925 se

a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

²⁶¹ Art. 1.699 CC Brasileño “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar a o juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

²⁶² Art. 1.709 CC Brasileño: “El nuevo matrimonio del cónyuge deudor no extingue la obligación constante de la sentencia de divorcio”.

²⁶³ TAPIA RODRÍGUEZ, Mauricio. “El Divorcio en el Derecho Chileno”. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Página 147 y ss.

reconocía vía jurisprudencial la práctica de la llamada nulidad fraudulenta como método de divorcio –divorcio de mutuo acuerdo sin protección ni para el cónyuge desfavorecido ni para los hijos–, por ello se dice que la Nueva Ley del Divorcio vincular no introdujo el divorcio en Chile sino que lo democratizó.

Los efectos patrimoniales del divorcio, de la misma manera que los efectos personales, alcanzan a los cónyuges y a los hijos.

Así, respecto a los efectos que se producen a los cónyuges:

- Se disuelve el régimen de bienes existente entre los cónyuges, la sociedad conyugal o participación en los gananciales.
- Terminan todos los derechos sucesorios recíprocos que hubo entre los cónyuges.
- El cónyuge propietario de un bien declarado familiar (residencia familiar), puede pedir su desafectación al tribunal, para poder enajenarse o gravarse, ya que precisa autorización del otro cónyuge.
- Nace el derecho para revocar todas las donaciones que se hicieron por causa del matrimonio al cónyuge que dio lugar al divorcio por su culpa.
- Nace el derecho para exigir compensación económica en beneficio del cónyuge que se dedicó al hogar y a los hijos, y que por ello no pudo realizar, o lo hizo en menor medida, una actividad remunerada durante el matrimonio, conforme al artículo 61 NLMC Chileno²⁶⁴. Este derecho intenta disminuir la disparidad que la ruptura provoca en las condiciones de vida, y para fijar su procedencia²⁶⁵ y monto se toma en cuenta no sólo la pasada inactividad laboral de un cónyuge, sino también su edad, estado de salud, calificación profesional, patrimonio, etc.

²⁶⁴ Art. 61 NLMC Chileno: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”

²⁶⁵ Art. 62 de la NLMC Chileno: “Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios provisionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Si se decretare el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal, o disminuir prudencialmente su monto”.

Los artículos siguientes 63²⁶⁶ y 64²⁶⁷ NLMC Chilena se refieren a la determinación de la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, debiendo de tenerse en cuenta la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios provisionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

La compensación económica y su montante o cuantía, así como la forma de pago, en su caso, serán convenidas por los cónyuges mediante acuerdo que constará en escritura pública o “acta de avenimiento”, acuerdo o convenio, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal. A falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su cuantía o montante conforme al artículo 65 NLMC Chilena²⁶⁸.

Si no se solicitare en la demanda, el juez informará a los cónyuges de la existencia de este derecho durante la audiencia de conciliación. Pedida en la demanda, en escrito complementario de la demanda o en la reconvencción, el juez se pronunciará sobre la procedencia de la compensación económica y su montante, en el evento de dar lugar a ella, en la sentencia de divorcio o nulidad. En la sentencia, además, el juez

²⁶⁶ Art. 63 NLMC Chileno: “La compensación económica y su monto y forma de pago, en su caso, serán convenidos por los cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal”.

²⁶⁷ Art. 64 NLMC Chileno: “A falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su monto. Si no se solicitare en la demanda, el juez informará a los cónyuges la existencia de este derecho durante la audiencia de conciliación. Pedida en la demanda, en escrito complementario de la demanda o en la reconvencción, el juez se pronunciará sobre la procedencia de la compensación económica y su monto, en el evento de dar lugar a ella, en la sentencia de divorcio o nulidad”.

²⁶⁸ Art. 65 NLMC Chileno: “En la sentencia, además, el juez determinará la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades: 1.- Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Tratándose de dinero, podrá ser entregado en una o varias cuotas reajustables, respecto de las cuales el juez fijará seguridades para su pago. 2.- Constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo”.

determinará la forma de pago de la compensación, para lo cual podrá establecer las siguientes modalidades:

1.- Entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes. Tratándose de dinero, podrá ser entregado en una o varias cuotas reajustables, respecto de las cuales el juez fijará garantías para su pago.

2.- Constitución de derechos de usufructo, uso o habitación, respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor. La constitución de estos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario hubiere tenido a la fecha de su constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviere en cualquier tiempo.

Si el deudor no tuviere bienes suficientes para solucionar el montante de la compensación mediante las modalidades expresadas en los antecedentes, es decir, las convenidas por las partes, el juez podrá dividirlo en cuantas cuotas como fuere necesario. Para ello, tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajutable. La cuota respectiva se considerará alimentos para el efecto de su cumplimiento, a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia²⁶⁹.

Por último, y respecto de la posibilidad de demandar la reparación del daño moral provocado por el divorcio, no existe en el Derecho Chileno una disposición legal especial que lo autorice expresamente, ni tampoco se conocen precedentes judiciales que lo hayan declarado. Sin embargo, acudiendo a las normas generales de Derecho Civil, (responsabilidad extracontractual por culpa, que regula nuestro Derecho civil en el artículo 1.902 CC), los tribunales podrían reconocer una indemnización al cónyuge por los daños que le provoque el divorcio, de forma compatible con la compensación económica por los perjuicios que ésta no logre cubrir.

²⁶⁹ Art. 66 NLMC Chileno: Si el deudor no tuviere bienes suficientes para solucionar el monto de la compensación mediante las modalidades a que se refiere el artículo anterior, el juez podrá dividirlo en cuantas cuotas fuere necesario. Para ello, tomará en consideración la capacidad económica del cónyuge deudor y expresará el valor de cada cuota en alguna unidad reajutable. La cuota respectiva se considerará alimentos para el efecto de su cumplimiento, a menos que se hubieren ofrecido otras garantías para su efectivo y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia". y oportuno pago, lo que se declarará en la sentencia".

4.5.- Derecho Colombiano

La legislación colombiana consagra el divorcio en la Ley 1ª de 1.976. La norma se refiere al matrimonio civil regulado por el Código Civil, pero con la vigencia de la Constitución Política de 1.991 se estableció que los matrimonios religiosos, reconocidos por el Estado Colombiano, pueden obtener la cesación de los efectos civiles por vía de divorcio²⁷⁰.

Los efectos patrimoniales del divorcio respecto de los cónyuges son:

- Se disuelve la sociedad conyugal de bienes, si estuviere vigente, y en tal caso, los ex cónyuges están llamados a liquidar la comunidad de bienes de acuerdo con el régimen pactado en las capitulaciones²⁷¹.
- El cónyuge inocente puede revocar las donaciones que por causa de matrimonio hubiere hecho al cónyuge culpable y este no puede invocar, en su favor, ninguna cláusula capitular.
- Ninguno de los cónyuges puede alegar derechos en la sucesión del otro.
- Si se ha señalado en la sentencia que uno de los cónyuges es culpable del divorcio, ha lugar a imponerle el pago de una cuota periódica a favor del cónyuge inocente, siempre que éste la haya solicitado previamente, conforme lo preceptuado en los artículos 160²⁷² y 411²⁷³ del Código Civil Colombiano.

²⁷⁰ La Ley modificó el texto del artículo 153 Código Civil Colombiano: “El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados”.

²⁷¹ MONTROYA PÉREZ, Guillermo. “El Divorcio en el Derecho Colombiano”. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 165 y ss.

²⁷² Art. 160 CC Colombiano: “Efectos del divorcio. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí”.

²⁷³ Art. 411 CC Colombiano: Art. 411: “Titulares del derecho de alimentos. Se deben alimentos: 1. Al cónyuge. 2. A los descendientes. 3. A los ascendientes. 4. Modificado. L. 1ª/76, artículo 23. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. 5. Modificado. L. 75/68, artículo 31. A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. 6. Modificado. L. 75/68, artículo 31. A los ascendientes naturales. 7. A los hijos adoptivos. 8. A los padres adoptantes. 9. A los hermanos legítimos. 10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una Ley se los niegue”.

Los titulares del derecho de alimentos, o personas que tienen derecho de alimentos son: el cónyuge, los descendientes, los ascendientes. Posteriormente se modificó a los ascendientes naturales, los hijos naturales, los nietos naturales, los hijos adoptivos, los padres adoptivos, los padres adoptantes, los hermanos legítimos, y por último y en lo que se refiere a los alimentos entre cónyuges, correrá a cargo del cónyuge declarado culpable dar alimentos al cónyuge divorciado o separado sin culpa.

Las causas de divorcio se regulan en el artículo 154 CC Colombiano modificado por la Ley n° 25 de 1.992 que²⁷⁴ y se pueden agrupar en dos categorías: Las causas que responden a casos de incumplimiento de las obligaciones entre cónyuges o de éstos en su calidad de padres, y que incurso uno de ellos en una de las causas (1, 2, 3 y 7) es considerado culpable, y las causas que responden a casos de solución o remedio de la crisis matrimonial sin que se pueda imputar culpabilidad a ninguno de ellos (4, 5, 6 8 y 9).

En los casos en que hay cónyuge culpable del divorcio se impone a éste la obligación de abonar una pensión de alimentos mediante el pago de una cuota periódica a favor del cónyuge inocente siempre que la haya solicitado previamente. Excepcionalmente, cuando se prueba la causal 6ª, pese a que no puede hablarse de cónyuge culpable, se debe señalar la cuota alimenticia a quien los padece la grave e incurable enfermedad, si carece de medios económicos o le son insuficientes.

La cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente y a cargo del culpable se contiene en el artículo 411 CC Colombiano. Por ello se considera que la cuota debe fijarse acorde con las necesidades del acreedor y teniendo en cuenta la capacidad económica del deudor. La cuota

²⁷⁴ Artículo 154 CC Colombiano: Son causas de divorcio: 1.- Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los conyuges, (salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado). 2.- El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 3.- Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 4.- La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 5.- El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa. 6.- Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 7.- Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que esten a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. 8.- La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por mas de dos (2) años. 9.- El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.

alimentaria es susceptible de variación o exoneración dependiendo de los cambios que se den respecto de los sujetos vinculados.

No hay en el Derecho Colombiano referencias a la pensión compensatoria o al derecho de reparación del daño moral en razón del matrimonio propiamente dicha. Sin embargo, por la vía de la reparación del daño podrían hacerse reclamaciones de indemnizaciones entre ex cónyuges, pero no se han recogido por la jurisprudencia.

La pensión alimentaria, a cargo de un ex cónyuge culpable, no se pierde por el cambio de las condiciones económicas de los sujetos vinculados, viéndose como una sanción vitalicia respecto de quien es beneficiario de ella; esta cualidad le confiere un carácter sancionador más que alimentario.

4.6.- Derecho Costarricense

En Costa Rica las leyes que existieron en los primeros años de la independencia fueron las leyes españolas, Leyes de Indias, que se mantuvieron hasta 1.842. El divorcio se estableció en el año 1.888 con la aprobación del Código Civil, proclamándose la plena capacidad jurídica de las mujeres y su igualdad. El Código de Familia se aprobó en el año 1.973, habiendo sufrido diversas modificaciones desde su inicio de forma continuada así, en 1.976, 1.977, 1.985, 1.989, 1.990, 1.994, 1.995, 1.996, 1.997, 2.001, 2002 y 2.004²⁷⁵.

El divorcio en Costa Rica se decreta en virtud de alguna causa de las previstas en el artículo 48 CF Costarricense²⁷⁶, siete causas contenciosas²⁷⁷,

²⁷⁵ BENAVIDES SANTOS, Diego. "El Divorcio en el Derecho Costarricense. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 187 y ss.

²⁷⁶ Art. 48 CF Costarricense: Será motivo para decretar el divorcio: 1) El adulterio de cualquiera de los cónyuges; El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos; La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de cualquiera de ellos; 4) La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos; La separación judicial por un término no menor de un año, si durante ese lapso no ha mediado reconciliación entre los cónyuges; durante dicho lapso el Tribunal, a solicitud de los interesados y con un intervalo mínimo de tres meses, celebrará no menos de dos comparecencias para intentar la reconciliación entre los cónyuges. La primera comparecencia no podrá celebrarse antes de tres meses de decretada la separación. Para tales efectos, el Tribunal solicitará los informes que considere pertinentes. Si alguno de los cónyuges no asistiere a las comparecencias, si éstas no se solicitan, o si las conclusiones a que llegue el Tribunal así lo aconsejan, el plazo para decretar el divorcio será de dos años; 6) La ausencia del

o de mutuo acuerdo, siendo el procedimiento de mutuo acuerdo el que se utiliza con más frecuencia, siendo preceptiva la intervención de los Juzgados de Familia, para su aprobación o para dictar sentencia en los procedimientos contenciosos, siendo reformado por la Ley Número 5.895 del 23 de marzo de 1.976.

En Costa Rica se prevé pensión alimentaria en lo que respecta a los hijos, su guarda, crianza y educación, pero no se regula la pensión compensatoria en los términos de la regulación española. Sin embargo sí se contempla una pensión alimentaria a favor de uno de los cónyuges, el cónyuge declarado inocente, a cargo del cónyuge declarado culpable²⁷⁸. Esta pensión se estableció con la reforma hecha por la Ley Número 7654 del 19 de diciembre de 1.996.

La pensión de alimentos entre cónyuges se podrá conceder en la sentencia que declare el divorcio o la separación, y normalmente a favor del cónyuge declarado inocente y a cargo del culpable, todo ello mientras el perceptor de la pensión alimentaria no contraiga nuevas nupcias o establezca una unión de hecho.

En caso de no existir cónyuges culpables, en función de las circunstancias el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. No procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas nupcias o conviva en unión de hecho.

cónyuge, legalmente declarada; y 7) El mutuo consentimiento de ambos cónyuges. El divorcio por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de tres años de celebrado el matrimonio y deberá presentarse al Tribunal el convenio en escritura pública en la forma indicada en el artículo 60 de esta Ley. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los derechos de los menores, se aprobarán por el Tribunal en resolución considerada; el Tribunal podrá pedir que se complete o aclare el convenio presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de previo a su aprobación.

²⁷⁷ Art. 48-7º CF Costarricense regula el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges.

²⁷⁸ Art. 57 CF Costarricense de 1.973: “En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al cónyuge declarado inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable. Igual facultad tendrá cuando el divorcio se base en una separación judicial donde existió cónyuge culpable. Esta pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre alimentos y se revocará cuando el inocente contraiga nuevas nupcias o establezca unión de hecho. Si no existe cónyuge culpable, el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. No procederá la demanda de alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas nupcias o conviva en unión de hecho.

En conclusión, en Costa Rica existe divorcio por mutuo acuerdo y divorcio contencioso, sea cual sea la vía se debe disponer sobre la guarda, crianza, educación de los hijos y pensión alimentaria, no compensatoria, si bien aunque se denomine pensión de alimentos entre cónyuges tiene similitudes con la pensión compensatoria española.

4.7.- Derecho Cubano

La primera Ley del divorcio en Cuba fue promulgada el 29 de julio de 1.918, ya que con anterioridad existía únicamente la separación de cuerpos y bienes, que era lo único admitido en el Derecho Canónico y en el Derecho Civil. Con anterioridad, el Código Civil español de 11 de mayo de 1.888 se hizo extensivo a Cuba por Real Decreto de 31 de julio de 1.889, vigente hasta el 5 de noviembre del mismo año al ser una colonia española, que prohibía el divorcio²⁷⁹.

Los efectos patrimoniales del divorcio se dan en tres órdenes: extinción y consecuente división y liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, en la extinción y de los derechos sucesorios ab intestato entre cónyuges y en el derecho de alimentos a favor del cónyuge que los necesite, y en todo caso de los hijos menores.

Los alimentos a que pueden tener derecho los cónyuges, esto es, todo lo indispensable para la satisfacción de las necesidades de sustento, alimentación y vestido, conforme al artículo 121 del Código de Familia Cubano, y al artículo 56 del Código de la Familia Cubano, dentro de la legislación Cubana de Divorcio²⁸⁰.

La exigibilidad de alimentos procede en dos supuestos:

²⁷⁹ PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., "El Divorcio en el Derecho Cubano. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 209 y ss.

²⁸⁰ Art. 56 CF Cubano: "Si los cónyuges hubieren convivido por más de un año o procreado durante el matrimonio, el tribunal, al fallar el divorcio, concederá pensión a favor de uno de ellos en los casos siguientes: 1.- Al cónyuge que no tenga trabajo remunerado y carezca de otros medios de subsistencia. Esta pensión tendrá carácter provisional será pagada por el otro cónyuge por el término de seis meses si no existieren hijos menores a su guarda y cuidado, o de un año, si los hubiere, a los efectos de que el beneficiario pueda obtener trabajo remunerado; 2.- O al cónyuge que por causa de incapacidad, edad enfermedad u otro impedimento insuperable esté imposibilitado de trabajar y, además carezca de otros medios de subsistencia. En este caso la pensión se mantendrá mientras persista el impedimento".

Cuando uno de los cónyuges tenga necesidad de ello al momento de disolverse el matrimonio, la pensión que será fijada con carácter provisional a su favor, a pagar por el otro cónyuge por el término de seis meses, si no existieren hijos menores a su guarda y cuidado, y de un año, si los hubiere, de modo que en dicho término, en uno y otro caso, tiene el alimentista que procurarse un empleo, pues transcurrido dicho período de tiempo, cesará a su favor la mencionada pensión.

Para que el cónyuge tenga derecho a alimentos tras el divorcio por un término de un año, es necesario que los requiera por no tener medios propios de subsistencia, que haya procreado hijos durante el matrimonio, que sean menores de edad, no se tiene en cuenta a los hijos mayores de edad incapacitados.

Cuando uno de los cónyuges al disolverse el vínculo matrimonial tiene una edad que no le permite incorporarse a un empleo o que por razones de incapacidad, enfermedad u otro impedimento insuperable este imposibilitado para trabajar y, además, carezca de otros medios de subsistencia, lo cual es todo caso será apreciado y valorado por el tribunal, quien tomara en cuenta las circunstancias del caso y actuara conforme a las reglas de la lógica y racionalidad.

No se señala una edad determinada, el cónyuge a se refiere la legislación cubana podrá ser cualquiera de los dos, hombre o mujer y la duración de la pensión podrá tener carácter temporal o definitiva cuando las circunstancias son perennes en el cónyuge que requiere alimentos, sin que, por ejemplo, sea razón suficiente para no establecerse el que el cónyuge solicitante conviva con uno de sus hijos, aunque tenga salario propio.

La Ley de Divorcio Cubana en su reforma por Ley Número 7.654 del 19 de diciembre de 1.996 modificó el artículo 57 introduciendo la pensión de alimentos entre cónyuges sin hacer mención a la culpabilidad o inocencia de los mismos, solo por razones de necesidad de uno de ellos²⁸¹.

²⁸¹ Art. 57 LD Cubana: "En la sentencia que declare el divorcio, el tribunal podrá conceder al cónyuge declarado inocente una pensión alimentaria a cargo del culpable. Igual facultad tendrá cuando el divorcio se base en una separación judicial donde existió cónyuge culpable. Esta pensión se regulará conforme a las disposiciones sobre alimentos y se revocará cuando el inocente contraiga nuevas nupcias o establezca unión de hecho. Si no existe cónyuge culpable, el tribunal podrá conceder una pensión alimentaria a uno de los cónyuges y a cargo del otro, según las circunstancias. No procederá la demanda de

De tal manera que la pensión alimenticia en Cuba no hace distinción de sexos, sino que se otorgara al cónyuge que necesite alimentos, no existiendo la pensión compensatoria.

4.8.- Derecho Dominicano

En la República Dominicana el divorcio²⁸², como forma de extinción del matrimonio, tuvo una vigencia de corta duración en 1.789, pues con la codificación decimonónica del Código Civil Napoleónico, guiado por el Derecho Canónico, se reintrodujo en el Derecho positivo de origen francés, el principio de la indisolubilidad del matrimonial que al margen del rigor de antaño, el divorcio vincular se admitió por causas determinadas. A través de la Ley de 8 de mayo de 1.816 se consignó la prohibición de la disolución del matrimonio por medio del divorcio, lo cual perduró hasta el año 1.884, en que se produjo el restablecimiento de tal vía de derecho para poner fin al conflicto conyugal.

La introducción del divorcio en la República Dominicana proviene del año 1.895 el día 29 de abril, en sustitución de la separación personal establecida y reglamentada por los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, ya que el divorcio ofrecía el medio de romper el vínculo que los unía y poder contraer nuevo matrimonio.

En el año 1.937 fue promulgada la Ley numero 1.306 bis, sobre Divorcio, lo cual, ponía trabas: "...que por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio que por esto mismo podrá ser aplicado por los Tribunales Civiles a los matrimonios católicos". Debido a esto, excepto en raras ocasiones, solo se entendía lícito recurrir a la separación de cuerpos y bienes, a la cual la misma ley daba mayor facilidad.

El divorcio como figura jurídica está contenido en un instrumento de regulación especial, a la cual se le han introducido varias modificaciones en los años 1.921, 1.929, 1.935 y, finalmente el día 21 de mayo de 1.937, que es la que actualmente rige en materia de divorcio. Dentro de las

alimentos del ex cónyuge inocente que contraiga nuevas nupcias o conviva en unión de hecho".

²⁸² NOLASCO, Daniel y CASTILLO OGANDO, Nelson. "El Divorcio en el Derecho Dominicano. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 285 y ss.

modificaciones más importantes que se han realizado a la Ley del Divorcio se puede citar la Ley 3.937, que instituye la separación personal entre los cónyuges, y la Ley 142 de 4 de junio de 1.971 sobre Divorcio Rápido o A Vapor.

En el curso de la acción en divorcio por la mujer casada, puede requerir la fijación de una pensión alimenticia como medida provisional cuyo pago, tras ser ordenada por la jurisdicción competente, correrá por cuenta del esposo que ostente la condición de parte actora en justicia, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1.306-bis, de 21 de mayo de 1.937²⁸³, habida cuenta que tal disposición jurídica halla su asidero ético-moral en el deber matrimonial que radica en la prestación de ayuda mutua y recíproca entre cónyuges.

La pensión alimenticia consiste en pagar una suma de dinero que haya sido ordenada por un juez en provecho de la mujer casada puesta en causa por una demanda tendente a la disolución matrimonial por la vía del divorcio, cuyo monto monetario consignado por sentencia tendrá vigencia mientras dure el procedimiento judicial incurso.

²⁸³ Art. 22 de la Ley 1.306-bis, de 21 de mayo de 1.937, Ley Dominicana del Divorcio: "Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del artículo ciento ocho del código civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcionada a las facultades de aquél. El tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir, y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar. Todas las notificaciones incluyendo cualesquiera actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros hechos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta, a su propia persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento de la mujer. Párrafo.— (Agregado por la Ley 2153, de fecha 12 de noviembre de 1949).— En todos los casos en que los emplazamientos tengan que hacerse al fiscal, será obligatorio para el marido demandante bajo pena de nulidad radical y absoluta, publicar previamente en un diario del Distrito Nacional, de los de mayor circulación nacional, un aviso, durante tres días consecutivos, que contenga advertencia a la mujer demandada, de que, a falta de información relativa al lugar de su residencia, se procederá a emplazarla en acción de divorcio ante el fiscal del Tribunal que deba conocer de la demanda. En dicho aviso se expresará cuál es este Tribunal, la fecha en que se notificará la demanda al fiscal, la causa de ésta, el nombre de la parte demandante, el nombre de la mujer contra quien se dirigirá la demanda, el lugar de la última residencia que le hubiere conocido el marido a su mujer, y el día y hora de la audiencia. Copia inextenso de este aviso se dará al fiscal en cabeza de la demanda. El juez apoderado del caso, declarará irrecibible la demanda si no se le demuestra que se han hecho las publicaciones indicadas, con el depósito de los tres ejemplares de los periódicos, certificados por los impresores, que contengan las tres publicaciones consecutivas ordenadas por esta Ley.

En la República Dominicana se denomina “la provisión in ítem” al avance monetario de la proporción que le pueda corresponder a la mujer casada de la masa indivisa de bienes acumulados durante la vigencia del vínculo matrimonial, de contenido jurídico como para el proceso, para el juicio, para la litis, para el pleito, para la causa, para el litigio, con objeto de que la mujer casada puesta en causa pueda solventar los gastos del procedimiento de divorcio debiendo, esa suma de dinero, ser suministrada globalmente en provecho de la esposa una sola vez en cada instancia, lo que es equivalente a nuestras “litis expensas”.

Derivado de la sentencia de divorcio surten dos efectos jurídicos: en primer lugar, trae consigo la ruptura o extinción del matrimonio, y posteriormente la disolución, partición o liquidación del patrimonio comunitario, de la masa indivisa de bienes, o bien de la sociedad conyugal. La mujer divorciada tiene el derecho de opción que consiste en determinar la aceptación, el repudio o la renuncia a la comunidad, cuya composición contiene tanto el patrimonio indiviso como el acervo de obligaciones onerosas contraídas por los esposos con cargo a la masa común de bienes.

La “fijación de sellos” es una medida conservatoria destinada a colocar valores mobiliarios fuera de la libre disposición de una que otra persona que tenga interés en distraer una masa común de bienes en perjuicio de la otra, conforme al artículo 24 de la Ley 1.306 bis, de 21 de mayo de 1.937²⁸⁴.

En virtud de esta medida se le concede a la mujer casada puesta en causa o que esté como parte de actora en justicia, la potestad de usar la fijación de sellos como vía de derecho para proteger sus legítimos intereses como copropietaria de los bienes muebles existentes a la hora de contraer nupcias y de los fomentados durante la vigencia del matrimonio.

Posteriormente se reformó la legislación en virtud de la Ley 3.937 de 20 de septiembre de 1.954, por la que por ministerio legis, las partes contratantes al contraer matrimonio canónico renuncian ipso jure a la facultad civil de pedir el divorcio, por lo que los tribunales ordinarios

²⁸⁴ Art. 24 de la Ley 1.306 bis, de 21 de mayo de 1.937, Ley dominicana del Divorcio: “La mujer común en bienes, demandante o demandada en divorcio, podrá en todo estado de causa -a partir de la demanda-, requerir para la conservación de sus derechos, la fijación de sellos sobre los efectos mobiliarios de la comunidad. No se levantarán estos sellos sino haciendo un inventario estimativo, quedando el marido obligado a presentar los efectos inventariados, o a responder de su valor como guardián judicial”.

carecen de jurisdicción para disolver por la vía del divorcio laico tales matrimonios.

Con fecha uno de abril de 1.977, la doctrina jurisprudencial vino a erigir el divorcio como uno de los derechos humanos de carácter fundamental de la persona.

4.9.- Derecho Ecuatoriano

El divorcio en Ecuador se fue estableciendo de forma paulatina, introduciéndose en el año 1.895, vigente ya el Código Civil medio siglo, el contrato matrimonial como contrato de carácter civil, pues hasta esa fecha, la única fórmula matrimonial era el sacramento católico sin connotaciones de carácter civil²⁸⁵.

En el año 1.902 se estableció el divorcio por la causa de adulterio de la mujer. Más adelante, en 1.904, se establecieron las causas que podían dar lugar al divorcio, y que fueron tres: el adulterio de la mujer, el concubinato del marido y el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro.

En el año 1.910 se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento. En el año 1.958 se aprobó “La separación conyugal judicialmente Autorizada”, que era una especie de divorcio o separación de cuerpos.

La regulación del divorcio se encuentra en el artículo 105, parágrafo segundo número 4 CC Ecuatoriano, que trata de la Terminación del matrimonio y trata como causa el divorcio. Para acceder al divorcio en Ecuador hay dos maneras: el divorcio por mutuo consentimiento, y el divorcio por causa contenciosa. El artículo 106 CC Ecuatoriano señala que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer un nuevo matrimonio con las limitaciones relativas al caso del cumplimiento de un año de ejecutoria del fallo para quien fue actor en el juicio o si el fallo tuvo lugar en rebeldía del demandado.

El artículo 107 CC Ecuatoriano señala la forma de manifestación de la voluntad de los cónyuges que quieren acogerse al divorcio por mutuo

²⁸⁵ SOTOMAYOR UNDA, Jorge. “El Divorcio en el Derecho Ecuatoriano. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 309 y ss.

consentimiento. Este divorcio puede ser judicial o notarial. El divorcio en tramite notarial obedece a la reforma de la Ley Notarial publicada por Ley numero 2.006-62, Registro Oficial numero 406 del martes 28 de noviembre de 2.006, por la que se faculta a los notarios a tramitar divorcio por mutuo consentimiento, unicamente en los casos en que los cónyuges no tengan hijos menores de edad o bajo su dependencia.

El artículo 110 CC Ecuatoriano regula el divorcio contencioso²⁸⁶, estableciéndose una clasificación entre causas criminologicas, simplemente culposas, eugeneticas, objetiva e indeterminadas.

Las características de la acción de divorcio son:

- La acción es de carácter personalísima y privativa de los cónyuges, acogiéndose a las causales establecidas en el Código Civil, a fin de que se declare judicialmente, por sentencia firme y ejecutada, la disolución del vínculo matrimonial.
- Es una acción a la que no puede renunciarse, porque no solamente que está en juego el interés individual de los cónyuges, sino el de la sociedad en general, y el Código Civil establece como irrenunciabiles: la acción de nulidad del matrimonio y la del divorcio.
- La acción también es susceptible de prescripción, señalándose diversos plazos en función de las causales que se invoquen para el divorcio.

²⁸⁶ Art. 110 CC Ecuatoriano: "Son causas de divorcio: 1ª.- El adulterio de uno de los cónyuges. 2ª.- Sevicia. 3ª.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonia de las dos voluntades en la vida matrimonial. 4ª.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 5ª.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o cómplice. 6ª.- El hecho de que de a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, conforme a este Código. 7ª.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, o a uno o mas de los hijos. 8ª.- El hecho de adolece los cónyuges de enfermedad grave considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 9ª.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en general toxicomano. 10ª.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor, y, 11ª.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por mas de un año ininterrumpidamente. Sin embargo, si el abandono al que se refiere el inciso anterior hubiere durado mas de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los cónyuges. En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este articulo, serán apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. El divorcio por estas causas sera declarado judicialmente por sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuges que se creyere perjudicado por la existencia de una o mas de dichas causas con la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11ª.- de este articulo".

- La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges.
- Se extingue la acción de divorcio por la reconciliación de los cónyuges.

El divorcio requiere de un juicio ya que se trata de una acción legal de carácter civil, sujeta a solemnidades que suponen la intervención de la autoridad pública competente.

El vínculo matrimonial no puede concluir ni disolverse en determinados casos cuando los cónyuges se convierten en incapaces absolutos.

El vínculo no puede disolverse sino de acuerdo con las leyes ecuatorianas, aunque se haya celebrado en el exterior.

Los efectos del divorcio se proyectan con respecto a los mismos cónyuges, sus hijos y a terceros, incluido desde el trámite del juicio. Con respecto a los cónyuges:

Se establece las litis expensas durante el trámite del juicio, o sea, los valores que deben sufragarse por concepto de gastos y honorarios profesionales que la mujer deba contratar para el juicio.

Se establecen los acuerdos matrimoniales en orden a los hijos y a los bienes, incluyendo la quinta parte de los bienes cuando el cónyuge carece de lo necesario para su alimentación, o su derecho al complemento si tuviese bienes, tomando en cuenta el valor de sus gananciales en la sociedad conyugal.

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja amplitud a los cónyuges para contraer un nuevo matrimonio, con los casos de excepción.

El divorcio pone fin a la sociedad conyugal.

Con el divorcio cesan los deberes inherentes al matrimonio como son la convivencia, protección, sucesión domicilio legal, etc.

Se puede revocar las donaciones por parte del cónyuge inocente.

Desaparece toda incapacidad o limitación de la mujer con respecto a la administración de sus bienes, así como su responsabilidad con respecto a los compromisos económicos de la antigua sociedad, por ello y para interés de terceros se ha de inscribir la sentencia de divorcio en el Registro civil, para conocimiento de dichos terceros y de la ciudadanía en general.

El adúltero no puede contraer matrimonio con el autor o cómplice del delito de homicidio cometido contra el otro cónyuge.

No hereda y pierde el derecho a la porción conyugal.

Los divorciados no pueden ser tutores o curadores, en el caso de que el cónyuge haya dado causa para el divorcio por diversas causales.

4.10.- Derecho Guatemalteco

En la primera Legislación Civil Guatemalteca de 1.877 el matrimonio se regulo como un contrato, ahora es una institución social²⁸⁷.

En Guatemala el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio²⁸⁸. La separación de personas, así como el divorcio pueden declararse por mutuo acuerdo de los cónyuges, conocido como divorcio voluntario, y por voluntad de uno de ellos alegando una causa determinada, conocido como divorcio ordinario²⁸⁹.

La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, puede pedirse después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio.

²⁸⁷ ROBERTO MUÑOZ, Nery. "El Divorcio en el Derecho Guatemalteco. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 421 y ss.

²⁸⁸ Art. 153 CC Guatemalteco: "El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio

²⁸⁹ "Separación y divorcio: Art. 154 CC Guatemalteco: "La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse; 1° Por mutuo acuerdo de los cónyuges; y 2° Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio.

Las causas²⁹⁰ que pueden alegar cualquiera de los cónyuges para obtener la separación y el divorcio son las siguientes: La infidelidad de cualquiera de los cónyuges; Los malos tratamientos de obra, las riñas, y disputas continuas, las injurias graves ofensas al honor y en general, la conducta que haga insoportable la vida en común. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. La separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, por más de un año. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente doméstica. La disipación de la hacienda doméstica. Los hábitos de juego o embriaguez, el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. La conducta de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de cinco años de prisión. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente

²⁹⁰ Art. 155 CC Guatemalteco: Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio: 1° La infidelidad de cualquiera de los cónyuges; 2° Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida en común; 3° El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos; 4° La separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, por más de un año; 5° El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio; 6° La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos; 7° La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado; 8° La disipación de la hacienda doméstica; 9° Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal; La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro; La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de cinco años de prisión; La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia; La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio; La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción; y Asimismo, es causa para obtener el divorcio, la separación de personas declarada en sentencia firme”.

para declarar la interdicción. Y la separación de personas declarada en sentencia firme.

El divorcio y la separación sólo puede solicitarlo el cónyuge que no lo hubiera causado, y dentro de 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda.

Si ambos cónyuges están de acuerdo con la separación o con el divorcio tienen la posibilidad de solicitarlo por mutuo acuerdo sin alegar, justificar o probar causal determinada.

Los efectos comunes a la separación y el divorcio son los siguientes²⁹¹:

- La liquidación del patrimonio conyugal.
- El derecho de alimentos a favor de cónyuge inocente o no culpable.
- La suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal la lleve consigo y haya petición expresa.

Los efectos propios de la separación son²⁹²:

- El derecho del cónyuge inocente o no culpable, a la sucesión intestada del otro cónyuge.
- El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido.
- En el caso de la separación subsiste el vínculo conyugal.

Los efectos propios del divorcio son:

- La disolución del vínculo conyugal.
- Libera a los cónyuges, quienes pueden contraer nuevo matrimonio.
- La mujer queda limitada a volver a contraer matrimonio hasta pasados 300 días contados desde la disolución del matrimonio anterior, salvo excepciones.

²⁹¹ Efecto de la separación y del divorcio: Art. 159 CC Guatemalteco: “Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio, los siguientes: 1° La liquidación del patrimonio conyugal; 2° El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, en su caso; y 3° La suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada”.

²⁹² Art. 160 CC Guatemalteco: “Son efectos propios de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes: 1° El derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada del otro cónyuge; y 2° El derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido”.

Cuando ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse lo pueden solicitar de mutuo acuerdo o voluntario, en este caso aunque exista una causa determinada, no necesitan alegarla ni probarla, ni siquiera mencionarla.

En este caso los cónyuges deben presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes:

- A quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio.
- Por cuenta de quién de los cónyuges deben ser alimentados y educados los hijos, o si es sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuye cada uno.
- El montante de la pensión que debe pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias suficientes.
- La garantía que preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges.

En cuanto a la pensión a la mujer²⁹³; ésta podrá gozar de una pensión alimenticia que podrá ser fijada por las partes, y en caso de que no hubiere sido fijada por éstos, será fijada por el juez, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. Pero para poder tener derecho a la pensión, la mujer no tendrá que ser declarada culpable, observar buena conducta, y no contraer nuevo matrimonio.

En el caso del marido para poder tener acceso al derecho a una pensión, deberá también no ser declarado culpable y además solo tendrá derecho a una pensión de alimentos a cargo de su ex mujer cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y además no contraiga nuevo matrimonio.

Pero además, en el Derecho Civil Guatemalteco se recoge la posibilidad de instar las medidas provisionales²⁹⁴, en el sentido de la

²⁹³ Pensión a la mujer: Art. 169 CC Guatemalteco: “La mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el inciso 3° del artículo 163, la cual será fijada por el juez, si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. La mujer gozará de la pensión mientras observe buena conducta y no contraiga nuevo matrimonio; y el marido inculpable tendrá el mismo derecho, sólo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio”.

²⁹⁴ Medidas cautelares: Art. 427 del Código Procesal Civil y Mercantil: Guatemalteco: “Al darle curso a la solicitud, el juez podrá decretar la suspensión de la

posibilidad de que de forma provisional, el juez pueda determinar, entre otras medidas, cuál será la pensión que debe prestar la mujer al marido, si fuera necesario.

Cabe la posibilidad también de que se proceda a la elaboración de un Convenio entre las partes, en el que necesariamente deberá contenerse a quién quedaran confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio, los alimentos a los hijos, la proporción entre los progenitores, y la pensión a pagar del marido a la mujer si esta no tuviere rentas propias para cubrir sus necesidades, conforme al artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil²⁹⁵.

4.11.- Derecho Mexicano

En México el divorcio es una institución universal que ha sido reconocida, con efectos más o menos rigurosos, en todos los tiempos como remedio para los matrimonios frustrados²⁹⁶, salvo en la época colonial. Con la conquista de México el matrimonio se consideró un sacramento y por ende indisoluble hasta que se aprobó la Ley del Matrimonio Civil en julio de 1.859, regulado también en 1.870 por el primer Código Civil para el Distrito Federal, y posteriormente por el de 1.884, pero en ambos se

vida en común y determinará provisionalmente quién de los cónyuges se hará cargo de los hijos y cuál será la pensión alimenticia que a éstos corresponda, así como la que deba prestar el marido a la mujer, si fuere el caso. También podrá dictar todas las medidas que estime convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer. Los hijos, menores de diez años, sin distinción de sexo, y las hijas de toda edad, quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación, al cuidado de la madre; y los hijos varones, mayores de diez años, al cuidado del padre. Sin embargo, si en concepto del juez hubiere motivos fundados, podrá confiarlos al cuidado del otro cónyuge o de una tercera persona. Los jueces determinarán, igualmente, el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentren en su poder”.

²⁹⁵ Convenio: Art. 429 del Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco: “Si no hubiere conciliación, en la misma junta o con posterioridad, se presentará al juez un proyecto de convenio en que consten, en su caso, los puntos siguientes: 1º A quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio. 2º Por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. 3º Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. 4º Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. El convenio no perjudicará a los hijos, quienes a pesar de las estipulaciones, conservarán íntegros sus derechos, a ser alimentados y educados, con arreglo a la Ley”.

²⁹⁶ GUZMAN AVALOS, Guzmán. “El Divorcio en el Derecho Mexicano. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalia, 2.009. Páginas 431 y ss.

consideró indisoluble y solamente se estableció el divorcio o separación de cuerpos, cuyo efecto era suspensivo de algunas obligaciones civiles.

El 29 de diciembre de 1.914, en plena Revolución, se aprobó la Ley de Divorcio Vincular que posteriormente fue acogida por la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1.917²⁹⁷. Finalmente el Código Civil de 1.928, acogió también el divorcio con una serie de causas y otras que se han ido acumulando.

El divorcio en México puede realizarse voluntariamente, es decir, de mutuo acuerdo, o, en su caso, de forma contenciosa. El divorcio voluntario se puede dar cuando los cónyuges están casados por lo menos un año o más y ambos están de acuerdo en que se realice²⁹⁸.

La ley ha simplificado los procedimientos de esta clase de divorcios, ya que no se plantean entre los cónyuges conflicto alguno:

Divorcio voluntario. Puede ser administrativo y judicial:

- Administrativo: Forma de divorcio que prevé la ley cuando no están en juego los intereses de los hijos y puede disolverse el matrimonio con toda rapidez.

- Judicial: Los cónyuges que no se encuentran en el supuesto para que proceda el divorcio voluntario pueden divorciarse por mutuo consentimiento, que se va a decretar por sentencia dictada por la autoridad judicial, sobre la base de un convenio que fije al situación jurídica de los hijos, de los cónyuges y de los bienes; quien disuelve el vínculo matrimonial y en caso de existir, la sociedad conyugal.

Divorcio necesario²⁹⁹. Este tipo de divorcio procede cuando existe una o varias causas imputables a uno de los cónyuges, o en su caso,

²⁹⁷ La Ley de Divorcio Vincular que posteriormente fue acogida por la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1.917.

²⁹⁸ Art. 266 CC Federal: "El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.

²⁹⁹ Art. 267 CC Federal: Son causales de divorcio: I. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; II. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer; IV. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; V. Los

imputables a los dos, en donde uno demande y el otro reconvenga, siendo las causas las siguientes:

- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges.
- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo.
- La propuesta del marido ara prostituir a su mujer, no sólo cuando el mismo marido lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer.
- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal.
- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción.

actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción; VI. Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio; VII. Padecer enajenación mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente; VIII. La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; IX. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; X. La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la declaración de ausencia; XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 164, sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a su cumplimiento, así como el incumplimiento, sin justa causa, por alguno de los cónyuges, de la sentencia ejecutoriada en el caso del Art. 168; XIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión; XIV. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; XV. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal; XVI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la Ley una pena que pase de un año de prisión; XVII. El mutuo consentimiento. XVIII. La separación de los cónyuges por más de 2 años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos. XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello”.

- Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio.

- Padecer enajenación mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge demente.

- La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada.

- La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio.

- La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta porque preceda la declaración de ausencia.

- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro.

- La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 164, (contribución económica al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación, distribución de la carga de forma proporcional a sus posibilidades), sin que sea necesario agotar previamente los procedimientos tendentes a su cumplimiento, así como el incumplimiento, sin justa causa, por alguno de los cónyuges de la sentencia ejecutoriada.

- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años de prisión.

- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años.

- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal.

- Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión.

- El mutuo consentimiento.

- La separación de los cónyuges por más de 2 años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos.

- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.
- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, tendentes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello.

Los efectos del divorcio se clasifican en provisionales, derivados de la admisión de la demanda, y definitivos, producidos por la sentencia.

Las medidas provisionales en el juicio de divorcio y mientras dure el procedimiento hasta antes de dictar sentencia que atañen a la persona de los cónyuges y de los hijos, así como a los bienes de los esposos, referentes a las obligaciones de naturaleza patrimonial entre los esposos y respecto a los hijos.

Los efectos durante el procedimiento y antes de dictar sentencias son:

- Proceder a la separación de los cónyuges.
- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos.
- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal.
- Dictar en su caso, las medidas precautorias que la Ley establece respecto a la mujer que quede encinta.
- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges pudiendo ser uno de éstos, en defecto de acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos.

Los efectos definitivos de la sentencia de divorcio son los que tienen mayor trascendencia, porque se van a referir a la situación permanente en que quedaran los divorciados, sus hijos o sus bienes.

- En relación con las personas de los divorciados, los cónyuges recobran su capacidad para contraer nuevo matrimonio. Sólo en el divorcio contencioso, el cónyuge que dio causa esperará dos años para volver a contraer otro. A diferencia de los supuestos de divorcio por mutuo consentimiento, solo deberá esperar para contraer nuevo matrimonio un año.

- En relación con los bienes de los cónyuges, el primer efecto del divorcio se refiere a las donaciones antenupciales, conforme al artículo 286 CC Federal³⁰⁰, el cónyuge que diera causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido, conservando el cónyuge inocente lo recibido.

Los efectos patrimoniales del divorcio consisten en señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos estableciéndose así mismo litis expensas durante la tramitación del divorcio. Igualmente, se requerirá a ambos cónyuges para que exhiban al juez, bajo promesa de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición.

El juez puede dictar sentencia condenando al culpable al pago de alimentos del inocente, en tanto viva honestamente y no contraiga nuevas nupcias, tomando en cuenta las circunstancias del caso, y la capacidad de trabajar de los cónyuges y su situación económica, (edad, estado de salud de los cónyuges, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia, colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como sus necesidades, y las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

También puede, en su caso, el juez condenar al cónyuge culpable al pago de daños y perjuicios si los origina.

4.12.- Derecho Nicaragüense

En Nicaragua el marco jurídico que regula el Derecho de Familia está contenido en una multiplicidad de instrumentos legales que van desde el vetusto Código Civil de 1.904 a la Constitución Política de 1.987, además

³⁰⁰ Art. 286 CC Federal de México: "El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho".

de diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país³⁰¹.

El primer Código Civil de Nicaragua es de 1.867, sometía todo lo referido al matrimonio y su disolución a las leyes y autoridades eclesiásticas, reservando sus efectos civiles a las leyes y judicaturas civiles.

Se estableció el divorcio perpetuo que era una separación permanente de cuerpos y bienes, sometido a las leyes del Derecho Canónico, a menos que uno de los cónyuges sobreviviera al otro, y esa sí era una causal absoluta de disolución del vínculo.

Esta posición del Código de 1.867 quedó matizada con la Ley Reglamentaria del Matrimonio de 28 de junio de 1.894, la que estableció el divorcio por causales.

Al Código Civil Nicaragüense de 1.871 le sucedió el Código Civil Nicaragüense de 1.904, que asumió la posición de la Ley Reglamentaria del Matrimonio de 1.894, en el sentido que mantuvo el divorcio causal, bajo la concepción del divorcio sanción. El Código Civil Nicaragüense de 1.904, disciplinó dos modalidades de divorcio: el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio que denunciaba el cónyuge inocente, invocando alguna de las causas contra el cónyuge culpable. En ambas modalidades se sustanciaba el divorcio ante el juez de la materia, oído el Ministerio Público.

Posteriormente al Código Civil de 1.904, se promulgó la Ley de 18 de febrero de 1.926, que autorizó a los que profesaban la religión católica, para acudir ante la autoridad eclesiástica, para que decidiera sobre las causales de disolución del matrimonio católico. Esta Ley de 1.926 fue derogada en el año 1.933, restableciéndose el régimen previsto en el entonces, y aún vigente, Código Civil Nicaragüense de 1.904.

Los cambios sustanciales que introduce en esta materia el Código Nicaragüense de 1.904 respecto de su predecesor Código de 1.867 Nicaragüense son:

³⁰¹ ABOUD CASTILLO, Neylia L. "El Divorcio en el Derecho Nicaragüense. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 187 y ss.

- Separación de la Iglesia y el Estado, poniendo fin a la injerencia eclesiástica.
- No produce efecto legal alguno en el matrimonio civil el matrimonio religioso.
- Suprime la sociedad de bienes quedando cada cónyuge como dueño de sus bienes y con libre disponibilidad sobre ellos, a menos que existieren capitulaciones matrimoniales.
- Establece causales para la disolución del vínculo superando la referencia a la indisolubilidad del vínculo.
- Introduce como causas de extinción del matrimonio la muerte, el divorcio y la nulidad.

Las normas del Código Civil Nicaragüense de 1.904, para el divorcio unilateral, sucumben a partir de abril de 1.988, en que se establece un régimen especial para esta forma de culminación de la relación marital, con la entrada en vigencia de la Ley numero 38, Ley para la Disolución del Matrimonio por Voluntad de una de las Partes de Nicaragua³⁰².

Esta Ley deja vigente del Código Civil de 1.904, en esta materia, todo lo relativo al matrimonio por mutuo consentimiento, pero deroga expresamente la normativa para el divorcio unilateral, suprimiendo esencialmente las causas de divorcio, la situación de desigualdad de la mujer ante la disolución del vínculo, y suprime la coercibilidad a que la ley la obligaba, como era el caso de que no podía abandonar el hogar conyugal durante la tramitación del proceso, a menos que el juez lo decidiera.

El divorcio puede hacerse por mutuo consentimiento, y por voluntad unilateral, son las dos formas admitidas por el Derecho positivo, para deshacer la unión matrimonial por voluntad de las partes.

En el marco de la Ley cualquiera de los cónyuges puede instar el divorcio, de forma personal o mediante un tercero que acredite tener un poder especialísimo que además de las solemnidades deberá de contener: indicación del juzgado ante el cual se radicara la causa, nombre y generales del otro cónyuge; si existen hijos indicar los nombres y fechas de nacimiento, a quien corresponderá la guarda y cuidado, el mandato de

³⁰² Ley para la Disolución del Matrimonio por voluntad de una de las Partes de Nicaragua. Ley N°. 38 de 28 de Abril de 1.988. Publicada en La Gaceta N°. 80 de 29 de Abril de 1.988.

interponer la disolución del vínculo matrimonial, la posición a adoptarse en el trámite de mediación, montante de la pensión alimenticia y forma de distribución de los bienes, en su caso³⁰³.

Los criterios para establecer la pensión alimenticia están contenidos en la Ley numero 143, Ley de Alimentos³⁰⁴, sobre la proporcionalidad que debe existir entre la capacidad económica de quien da alimentos y las necesidades de quien los recibe³⁰⁵.

Los factores a tener en cuenta para establecer la pensión alimenticia, conforme al artículo 4 LA Nicaragua de 1992, están en función de las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las necesidades de quien los recibe, debiendo tenerse en cuenta el capital o los ingresos económicos del alimentante y la edad y necesidades de otros alimentistas y otros factores, sin que en ningún caso los gastos personales del alimentante hagan que pueda evadir las responsabilidades de la pensión³⁰⁶.

³⁰³ Art. 4 de la Ley para la Disolución del Matrimonio por voluntad de una de las Partes de Nicaragua: "La solicitud, además de expresar claramente la voluntad de disolver el matrimonio, sin dar razón alguna por ello, deberá contener: 1) A quién corresponde la guarda de los hijos menores; de los incapacitados; y, de los discapacitados si hubiere mérito para ello. 2) El monto de la pensión alimenticia para los hijos menores; los incapacitados; y, los discapacitados si hubiere mérito para ello. 3) La forma cómo se garantizará la pensión. 4) Distribución de los bienes comunes. 5) El monto de la pensión para el cónyuge que tenga derecho a recibirla".

³⁰⁴ LA Nicaragua. Ley N°. 143 de 22 de Enero de 1.992. Publicado en La Gaceta No. 57 de 24 de Marzo de 1992.

³⁰⁵ Art. 2 LA Nicaragua de 1.992: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades siguientes: a) Alimenticias propiamente dichas; b) De atención médica y medicamentos. Esto comprende la asistencia de rehabilitación y de educación especial, cuando se trate de personas con severas discapacidades, independientemente de su edad y según la posibilidad económica del dador de alimentos; c) De vestuario y habitación; ch) De educación e instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio; d) Culturales y de recreación.

³⁰⁶ Art. 4 LA Nicaragua de 1.992: Los alimentos se fijarán o variarán en relación con las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las necesidades de quien los recibe. Para fijar la pensión se tomarán en cuenta: a) El capital o los ingresos económicos del alimentante; b) Su último salario mensual y global ganado. Si el alimentante renunciare a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual será la base para fijar la pensión; c) Si el alimentante trabajare sin salario fijo o no se pudiere determinar sus ingresos, el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta presuntiva; ch) La edad y necesidades de los hijos; d) La edad y necesidades de otros alimentistas; e) Los gastos personales del alimentante, el que en ningún caso podrá evadir las responsabilidades de la pensión".

Se deben alimentos en el siguiente orden³⁰⁷:

- a) A los hijos.
- b) Al cónyuge.
- c) Al compañero en unión de hecho estable.

También se debe alimentar a los ascendientes y descendientes del grado de consanguinidad más cercano cuando se encuentren en estado de desamparo.

La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en escritura pública, por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, salvo en casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por sí mismos sus medios de subsistencia.

Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera provechosa.

Si bien no puede hablarse en el Derecho Nicaragüense de una pensión compensatoria en el sentido en el que se regula en el Derecho Civil Español, la legislación nicaragüense sí establece una pensión alimenticia a favor del cónyuge en algunas circunstancias.

En el caso de disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento sin llegar a un acuerdo sobre la obligación alimenticia, el Juez en la sentencia de divorcio establecerá la pensión para el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio del juzgador³⁰⁸. Esta obligación cesará cuando el

³⁰⁷ Sujetos en la Obligación Alimentaria Art. 6 LA Nicaragua de 1.992: “Se deben alimentos en el siguiente orden: a) A los hijos; b) Al Cónyuge; c) Al compañero en unión de hecho estable”.

³⁰⁸ Art. 9 LA Nicaragua de 1.992: “Cuando se trata del cónyuge en el caso de disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento sin llegar a un acuerdo sobre la obligación alimenticia, el Juez en la sentencia de divorcio establecerá la pensión para el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio del juzgador. Esta obligación cesará cuando el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable o llegare a tener solvencia económica.

cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable o llegare a tener solvencia económica.

Los alimentos que han de ser entregados de un cónyuge a otro, se darán en proporción a la en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades. Si los recursos del alimentante no alcanzaren a satisfacer las necesidades de todos sus acreedores alimentistas se ha de atender a unos criterios equitativos priorizando los alimentos a los menores.

El derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable e intransferible. Los alimentos son inembargables. No es compensable con ningún tipo de deuda, tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante. Se podrán reclamar pensiones alimenticias atrasadas por un período de doce meses. Las pensiones alimenticias se pagaran mensual o quincenalmente.

En el caso de los asalariados las pensiones se pagarán según la forma de pago del salario. El empleador está obligado a deducir la pensión fijada por el Juez bajo pena de cancelarla personalmente si no la dedujere. En todo caso la pensión alimenticia deberá pagarse en el plazo de tres días después de recibida la remuneración.

Las pensiones alimenticias podrán complementarse con especies de acuerdo a las circunstancias del obligado debidamente valoradas por el Juez. El crédito alimenticio podrá afectar cualquier ingreso que perciba el alimentante; el atraso en el pago de las pensiones alimenticias sin justa causa, será penado con el pago de un 5 % por cada mes de retraso. El Juez resolverá que se pague o no, en base a la equidad.

4.13.- Derecho Panameño

El divorcio en Panamá se regula por primera vez en el Código Civil de Panamá de 1.917, estableciéndose un orden en función de su gravedad.

La clasificación de las causas de divorcio es: causas contenciosas y causas no contenciosas.

Las causas, tanto las contenciosas como las no contenciosas constituían una especie de catálogo para obtener la disolución del vínculo

conyugal, cuando se acudía al juez, ya que no se admitía el divorcio ante notario, más adelante se permitirá en los divorcios por mutuo consentimiento acudir tanto al juez como al notario.

La naturaleza contractual o institucional del matrimonio ha sido polémica, prevaleciendo la tesis de la naturaleza institucional. Así el divorcio, la nulidad y la separación de cuerpos es materia que conoce el juez de familia, atendiendo al principio de especialidad en la materia. En Panamá el Código de Familia entró en vigor en el año 1.995³⁰⁹.

Las normas relativas a la familia, en Panamá son consideradas de orden público y de interés social, por lo que el matrimonio, aunque es disoluble conforme a la Constitución Nacional, la materia no es transigible, disponible, como si se tratase de contratos privados.

En Panamá, solo se acepta el matrimonio, y por ende, el divorcio, entre personas que al casarse no tengan impedimentos matrimoniales, (por ejemplo; personas del mismo sexo). Sin embargo el Derecho tiene que adecuarse a las realidades sociales, tal y como lo han aceptado en Holanda, España, las uniones fácticas y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En América Latina, en Brasil se ha abierto este debate³¹⁰.

El divorcio hoy en día es aceptado en todo el continente, superándose las tesis divorcistas y no divorcistas. También se ha logrado que las causas para la mujer no tengan que ser más graves que para el hombre, y se atienen a los principios de igualdad jurídica de la pareja, de solidaridad, de equidad, sin distinguir si se trata de un matrimonio formal, o solemne, o de una relación de pareja, libre de impedimentos matrimoniales, en la que se hace y comparte una vida en común de forma fáctica e ininterrumpida, por un lapso de tiempo de cinco años.

En cuanto a las modalidades de divorcio, el matrimonio puede disolverse por diversas causas que se regulan en el Código de Familia, clasificándose en orden a su gravedad, pudiendo clasificarse en

³⁰⁹ Ley número 3 de 17 de mayo de 1.994, por la cual se aprueba el Código de la Familia en Panamá.

³¹⁰ PITTI GONZALEZ, Ulises. "Derechos Patrimoniales y Solidaridad en las relaciones de pareja en el Siglo XXI". "El Divorcio en el Derecho Panameño. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 481 y ss.

contenciosas y no contenciosas. Entre las no contenciosas, tenemos el divorcio por mutuo consentimiento y la separación de hecho por más de dos años; las demás son de naturaleza contenciosa. La conversión del divorcio contencioso en uno no contencioso atiende a la voluntad de las partes, sin que ello implique que las causales de divorcio sufran modificaciones. Por ello, se puede hablar de causas a través de las cuales puede disolverse el matrimonio, y causales de divorcio cuando son imputables a uno de los cónyuges.

Las causas de divorcio que se regulan en el artículo 212 CF Panameño son básicamente las que consisten en atentar contra la vida del otro cónyuge o sus hijos, hijas, hijastros o hijastras. El trato cruel físico o psíquico La relación sexual extramarital como causal de divorcio. La propuesta para prostituir al otro o para corromper o prostituir a sus hijos, hijas, hijastros. El abandono. 7.- El uso habitual e injustificado de sustancias psicotrópicas incluyendo la embriaguez habitual. 9.- La separación de hecho por más de dos años. 10.- Mutuo Consentimiento”³¹¹.

Los efectos personales del divorcio son:

- Se disuelve el vínculo jurídico que une a los cónyuges y surte efectos a partir de su inscripción en el Registro Civil, por lo que podrá contraerse nuevas nupcias, conforme al artículo 219 CF Panameño.
- La pensión alimenticia se puede establecer para uno de los cónyuges y a favor de los hijos o hijas.

La primera puede surgir con ocasión de la disolución del vínculo conyugal, cuando se es cónyuge culpable, mientras que la segunda surge como una obligación inherente al ejercicio de la patria potestad, como un derecho de los hijos e hijas, ya estén o no casados entre sí sus progenitores, o bien cuando se disuelva el vínculo matrimonial.

³¹¹ Art. 212 CF Panameño: “Son causales de divorcio: 1.- El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras. 2.- El trato cruel físico o psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico. 3.- La relación sexual extramarital como causal de divorcio. 4.- La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro. 5.- El conato del marido o de la mujer para corromper o prostituir a sus hijos, hijas, hijastros o hijastras o la convivencia en su corrupción o prostitución. 6.- El abandono. 7.- El uso habitual e injustificado de sustancias psicotrópicas. 8.- La embriaguez habitual. 9.- La separación de hecho por más de dos años. 10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que los cónyuges sean mayores de edad; 2. Que el matrimonio tenga como mínimo dos años de celebrado; y 3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos meses desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de los seis (6) meses de la citada presentación”.

Cuando se trate de una pensión alimenticia concedida durante el proceso de divorcio, a cargo del cónyuge culpable, la misma puede subsistir disuelto el vínculo matrimonial hasta cuando deje de ser necesaria, o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias.

La pensión alimenticia así concedida se fija a fin de que la persona pueda mantener el mismo status social que tenía durante el matrimonio, por lo que, si mejora de fortuna, puede suspenderse.

El artículo 223 CF Panameño, de forma similar a nuestra pensión compensatoria, hace una mención al nivel de vida previo durante el matrimonio, al manifestar que para el cálculo de la pensión alimenticia a percibir por el cónyuge inocente, se tendrá en cuenta que conserve la posición social que tenía durante el matrimonio.

También se hace relación de forma similar en la forma de extinguirse dicha pensión, al contraer de nuevo matrimonio el cónyuge acreedor de la pensión³¹².

El Código de Familia indica lo que comprenden los alimentos en su artículo 377³¹³: Los alimentos consisten en una prestación económica proporcional a las necesidades del que los recibe y a las posibilidades de quien los abona. Esta pensión de alimentos debe cubrir el propio alimento de comida, atención médica, vestido y habitación. Esta pensión de alimentos incluye la obligación de proporcionar los recursos necesarios a

³¹² Art. 223 CF Panameño: “En la sentencia que declare el divorcio, puede el juez, conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente a cargo del culpable. Esta pensión se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición social que tenía durante el matrimonio, y se revocará cuando deje de ser necesaria, o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias”.

³¹³ Art. 377 CF Panameño: “Una prestación económica, que debe guardar la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y a las necesidades de quien o quienes los requieran. Estos comprenden: 1.- Suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención médica y medicamentos. 2.- Las necesidades de vestido y habitación. 1.- Suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención médica y medicamentos. 2.- Las necesidades de vestido y habitación. 3.- La obligación de proporcionar los recursos necesarios a fin de procurar la instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte y oficio, aún después de la mayoría de edad hasta un máximo de 25 años, si los estudios se realizan con provecho tanto en tiempo como en el rendimiento académico, salvo si se trata de un discapacitado profundo, en cuyo caso hasta que éste lo requiera; y 4.- Tratándose de menores, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la concepción. La autoridad competente apreciara estas circunstancias y otras que estime convenientes para determinar las necesidades del que recibe los alimentos”.

fin de procurar la instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte y oficio.

Los efectos patrimoniales del divorcio en Panamá están sujetos a dos legislaciones diferentes: la contenida en el Código Civil de 1.917, y que rigió hasta el año 1.995, hasta que entró en vigor el Código de Familia, el cual estableció un sistema diferente al Código Civil en esta materia, que será la liquidación del régimen económico matrimonial.

Así mismo, y como consecuencia del divorcio, como efecto patrimonial puede haberse producido un daño moral, el cual se define en el artículo 1.664-a CC Panameño³¹⁴.

El daño moral debe ser resarcido por la persona responsable del hecho, y tiene la obligación de repararlo mediante una indemnización, que se concreta en dinero. La afectación a sentimientos, a la dignidad, a la estima, a la salud física y psíquica, origina el derecho a que la persona afectada sea resarcida. Cuando se produce la ruptura del vínculo conyugal, se puede ocasionar situaciones donde se produzca daño moral a alguno de los ex cónyuges, más cuando se trate de una ruptura, fundamentada en alguna causal de divorcio contenciosa, donde exista un cónyuge culpable y otro inocente.

El sujeto lesionado en una relación de pareja que se unen para hacer y compartir vida en común es aquél que se ve humillado y maltratado en sus sentimientos y afectos. En estos supuestos, la indemnización por daño moral reviste un carácter resarcitorio para la víctima y al mismo tiempo, una sanción para el miembro de la pareja que se le atribuye el ilícito.

4.14.- Derecho Paraguay

En Paraguay, desde su independencia en el año 1.811, solo se acogía el sistema de separación de cuerpos, que no fue modificado hasta el año 1.991 en el que se sancionó la Ley número 45/1.991 del Divorcio Vincular. Este cuerpo normativo permite la disolución del vínculo matrimonial

³¹⁴ Art. 1.664-a CC Panamá: “El daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencia, decoro, humor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí mismos tienen los demás”.

mediante el instituto del divorcio vincular sin derogarse las normas relativas a la separación de cuerpos³¹⁵.

El derecho privado Paraguayo estuvo regido, desde el año 1.877 hasta el año 1.987, en que entro en vigor el actual Código Civil, por el Código de Vélez Sasfield, y en algunos casos, como el del matrimonio, por leyes posteriores de reforma del mismo, razón por la cual resulta imposible estudiar su desarrollo histórico en forma separada del Derecho Civil Argentino.

En Paraguay coexisten dos formas de obtener el divorcio, por presentación conjunta o por mutuo consentimiento, y el divorcio con expresión de causa.

El divorcio por presentación conjunta o por mutuo consentimiento se realiza conforme a la Ley número 45/91 del Divorcio de Paraguay que en su artículo 5 establece³¹⁶ que para solicitar el divorcio de forma conjunta han de haber transcurrido tres años desde la celebración del matrimonio y ser los solicitantes mayores de edad, debiendo ser oídos por el juez de forma separada para intentar la reconciliación, antes de su ratificación, considerándose que ambos cónyuges son culpables, salvo que se acuerde la admisión de la culpa de uno solo de los cónyuges.

El divorcio con expresión de causa, o divorcio causal, se inicia por el esposo o la esposa de forma unilateral cuando no existe común acuerdo entre las partes. En este supuesto el cónyuge peticionante está obligado a

³¹⁵ MORENO RODRÍGUEZ ALCALA, Roberto. "El Divorcio en el Derecho Paraguayo. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 507 y ss.

³¹⁶ Art. 5 de la Ley número 45/91 Divorcio de Paraguay: "Transcurridos tres años de matrimonio los cónyuges podrán solicitar conjuntamente al juez su divorcio vincular. Los menores emancipados por el matrimonio, sólo después de cumplida la mayoría de ambos podrán plantear la acción. Antes de dar trámite al juicio de divorcio por presentación conjunta, el juez escuchara separadamente a las partes procurando su reconciliación y fijando una plazo de 30 a 60 días dentro del cual convocara a las partes a una audiencia para que se ratifiquen o no en su voluntad de divorciarse. En caso negativo, se archivara el expediente y, de lo contrario, se dará el trámite correspondiente al juicio. Deberá observarse lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley. El divorcio por mutuo consentimiento se reputará en sus efectos como decretado por culpa de ambos cónyuges, pero el juez podrá admitir la culpa de uno solo de los cónyuges si existe convención en ese sentido.

invocar alguna causa de las previstas en la Ley número 45/91 en su artículo 4³¹⁷.

El legislador ha incluido una norma especial de culpabilidad para evitar situaciones de injusticia, así en la Ley 45/91, el artículo 6 LD Paraguay³¹⁸, con remisión al artículo 4 inciso e), (la enfermedad mental permanente y grave, declarada judicialmente), el cónyuge solicitante de divorcio deberá prestarle de por vida toda asistencia en el caso que él o la persona enferma mental no tenga medios económicos para su alimentación y los gastos de enfermedad, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges.

Los efectos del divorcio son:

- La disolución del vínculo conyugal.
- La disolución de la comunidad conyugal.
- La extinción de la vocación hereditaria.
- La obligación de prestar alimentos y el apellido de la mujer divorciada.

En el artículo 20 de la Ley 45/91 del Divorcio en Paraguay, se contempla una pensión de alimentos con similitudes a nuestra pensión compensatoria³¹⁹, al afirmar el derecho de alimentos del cónyuge no declarado culpable respecto del otro, derecho que se extinguirá si contrae

³¹⁷ Art. 4 de la Ley número 45/91 del Divorcio de Paraguay : Son causales del divorcio: a) el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro; b) la conducta inmoral de uno de los cónyuges o su incitación al otro a cometer adulterio, prostitución u otros vicios o delitos; c) la sevicia, los malos tratos y las injurias graves; d) el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas estupefacientes, cuando hicieren insoportables la vida conyugal, así como el juego de azar cuando amenace la ruina familiar; e) la enfermedad mental permanente y grave, declarada judicialmente; f) el abandono voluntario y malicioso del hogar por cualquiera de los cónyuges. Incurrir también en abandono el cónyuge que faltase a los deberes de asistencia para con el otro o con sus hijos, o que, condenado a prestar alimentos, se hallase en mora por más de cuatro meses consecutivos, sin causa justificada; g) el adulterio; y h) la separación de hecho por más de un año, sin voluntad de unirse de cualquiera de los cónyuges.

³¹⁸ “Cuando la causal de divorcio invocada fuese la prevista en el artículo 4 inc. e) El cónyuge solicitante de divorcio deberá prestarle de por vida toda asistencia en el caso que él o la demente no tenga medios económicos para su alimentación y los gastos de enfermedad, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges”.

³¹⁹ Art. 20 artículo 20 de la Ley 45/91 del Divorcio en Paraguay: “El cónyuge no declarado culpable conservará su derecho alimentario respecto del otro, pero ese derecho se extinguirá si contrae nuevo matrimonio, si vive en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge. La mujer divorciada no usará el apellido del que fuera su cónyuge.

nuevo matrimonio, si vive en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge.

La obligación de prestar alimentos subsiste en algunos supuestos, no obstante la disolución del vínculo matrimonial, conforme al precepto citado. Dado que la mujer utiliza el apellido del marido, una vez divorciada no utilizara el apellido del que fuera su cónyuge.

Finalmente, en Paraguay no existe regulación expresa respecto a los daños y perjuicios por parte del cónyuge culpable a la terminación del vínculo matrimonial, en general se está a la negación de daños y perjuicios derivados del divorcio, salvo en los casos en que exista realmente un acto ilícito que se regiría por las disposiciones generales en materia de indemnización de daños y no derivados del divorcio.

4.15.- Derecho Peruano

El Código Civil de 1.852 de Perú no contemplaba el divorcio vincular como institución jurídica, únicamente la separación de cuerpos quedando subsistente el vínculo matrimonial. Este Código reflejaba el Derecho Español y Canónico, que consagraban el matrimonio religioso con carácter monogámico e indisoluble, con una actitud claramente excluyente del divorcio³²⁰.

Posteriormente, en diciembre del año 1.897, se establece el matrimonio civil para los no religiosos, para que aquellos que no profesaban la religión católica pudieran contraer matrimonio. En 1.930 se estableció el matrimonio civil obligatorio para todos los habitantes de la República, introduciéndose además el divorcio absoluto.

El 22 de mayo de 1.934 se promulgó la Ley número 7.894, por la cual el mutuo disenso fue comprendido como una causa más de divorcio. El Código Civil de 1.936 mantuvo las normas sobre el matrimonio civil obligatorio y el divorcio vincular y así lo hizo también el Código Civil de 1.984 que estableció diez causas por las que podía obtener el divorcio:

1.- El adulterio.

³²⁰ CABELLO MATAMALA, Carmen Julia: "El Divorcio en el Derecho Peruano. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 525 y ss.

2.- La violencia, física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias.

3.- El atentado contra la vida del otro cónyuge.

4.- La injuria grave.

5.- El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda de este plazo.

6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.

7.- El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía.

8.- La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del matrimonio.

9.- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.

10.-La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio.

La Ley 27.495 de 7 de julio de 2.001 ha introducido cambios significativos en el régimen de divorcio nacional, fundamentalmente en la causa número 4 relativa a la injuria grave, en el cual se puntualiza que debe hacer insoportable la vida en común.

En la causa numero 8 se contempla la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio, comprendiendo expresamente el SIDA como causa de separación de cuerpos y divorcios. Los cambios más significativos se ubican en la incorporación de la causal número 11, que incluye la imposibilidad de hacer vida común, debidamente probada judicialmente y la causal número 12, que prevé la separación de hecho de los cónyuges.

Respecto a las nuevas causas de divorcio, la imposibilidad de hacer vida común, debidamente probada judicialmente y la separación de hecho de los cónyuges, se ha de destacar como efecto de ésta última la posible indemnización o adjudicación de bien social al cónyuge perjudicado por el divorcio; de singular importancia resulta la determinación del cónyuge perjudicado.

En este sentido le corresponde al juez velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, para lo cual deberá señalar una

indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiere corresponder. Los derechos irrogados por el divorcio, si son derechos familiares, éstos son de carácter patrimonial, y que en consecuencia la afectación debe ser alegada por el perjudicado.

Se ha de distinguir entre las consecuencias del divorcio y los derechos que emergen por las condiciones particulares de una causa, que al admitir la invocación del hecho propio, otorga al afectado, ventajas derivadas de su propia condición.

Son consecuencias del divorcio³²¹: la conclusión del régimen de sociedad de gananciales, el señalamiento del régimen de la patria potestad, la pérdida del derecho hereditario entre los cónyuges divorciados entre otros. En cambio es un derecho patrimonial, que debe ser alegado por su titular, el relativo a daños resultantes de los hechos ilícitos configurativos de la causa de divorcio o separación así como los derivados del divorcio en sí mismo, sean éstos materiales o morales, por cuanto el fundamento de la reparación consiste en la existencia de hechos culpables, que han generado un perjuicio.

Las manifestaciones del daño moral son múltiples, hay daño patrimonial en lo que afecte la reputación e incidan en la actividad laboral del cónyuge inocente, disminuyendo las expectativas razonables de obtener ingresos, así como en las lesiones físicas o psíquicas sufridas, en el contagio de enfermedades o la destrucción de bienes.

También puede haber daño moral con motivo de la sentencia, ya sea de separación o de divorcio, por la disolución de pleno derecho de la sociedad conyugal, con la siguiente secuela de partición de los gananciales,

³²¹ Art. 350 CC Peruano: "Efectos del divorcio para los cónyuges: "Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquél. El ex-cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su ex-cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, el reembolso."

o por el desplazamiento del nivel socio económico de vida llevado hasta ese momento, o por la eventual necesidad de la mujer de tener que emprender una tarea remunerada fuera del hogar, o por los gastos extraordinarios que se derivan del cuidado de los hijos.

Por último, y respecto de la causal de separación de hecho, si bien no se habla de cónyuge inocente, se trata de identificar al cónyuge perjudicado a quien se le protegerá entre otros con una pensión de alimentos, para su fijación debe considerarse que cesará la obligación alimentaria con el divorcio, salvo que el perjudicado no tuviera los bienes propios suficientes, o esté imposibilitado de trabajar; perjuicio y condiciones de necesidad que deberán ser invocados por el acreedor alimentario y establecidas en la sentencia de divorcio, con la prueba correspondiente. En el caso de los hijos menores de edad, su estado de necesidad se presume³²².

En Perú, el 16 de mayo de 2.008, mediante la Ley numero 29.227 se introdujo el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarias, aprobándose su reglamentación mediante Decreto Supremo numero 009-2.008 JUS, publicado el día 13 de junio de 2.009 que agiliza los procedimientos de divorcio.

4.16.- Derecho Puertorriqueño

El Código Civil español de 1.989 se hizo extensivo a Puerto Rico, entrando en vigor el 1 de enero de 1.890. El Código Civil de Puerto Rico data de 1.930, con múltiples enmiendas³²³.

El divorcio en Puerto Rico sólo puede concederse por los tribunales de justicia, por alguna de las causales establecidas por la ley, estando reguladas en el artículo 96 CC Puertorriqueño³²⁴.

³²² Art. 351 CC Peruano: “Reparación del daño moral al cónyuge inocente: Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral.

³²³ SILVA-RUIZ, Pedro F. “El Divorcio en el Derecho Puertorriqueño. *“El divorcio en el Derecho Iberoamericano”*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 583 y ss.

Disponiéndose que en tales casos, la corte nombrará un defensor judicial al cónyuge demente loco para que lo represente en el juicio. El cónyuge demandante vendrá obligado a proteger y satisfacer las necesidades del cónyuge demente en proporción a su condición y medios de fortuna, mientras sea necesaria para su subsistencia. Disponiéndose, además, que esta obligación en ningún momento ha de ser menos de dos quintas (2/5) partes del ingreso bruto por sueldos o salarios o entradas de cualquier otra clase que tuviere el cónyuge demandante.

El mutuo consentimiento, como causa de divorcio, fue creado por decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 1.978, siendo la causal más invocada para la disolución del matrimonio. El Tribunal, único competente para conceder el divorcio, se cerciorara de que hay consentimiento, libre y voluntario.

Iniciado el procedimiento de divorcio se han previsto ciertas medidas provisionales a que puede dar lugar el juicio por divorcio: Así se regula la pensión de alimentos respecto del cónyuge en el artículo 100 CC Puertorriqueño³²⁵ para los supuestos en que uno de los cónyuges no

³²⁴ Art. 96 CC Puertorriqueño: "Las causas de divorcio son: 1.- Adulterio de cualquiera de los cónyuges. 2.- La condena de reclusión de uno de los cónyuges por delito grave, excepto cuando dicho cónyuge se acoja a los beneficios de sentencia suspendida. 3.- La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo de opio, morfina o cualquier otro narcótico. 4.- El trato cruel o las injurias graves. 5.- El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un término mayor de un (1) año. 6.-La impotencia absoluta perpetua e incurable sobrevenida después del matrimonio. 7.-El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la convivencia en su corrupción o prostitución. 8.- La propuesta del marido para prostituir a su mujer. 9.-La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de dos (2) años. Probado satisfactoriamente la separación por el expresado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable. 10.- La locura incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del matrimonio, por un período de tiempo de más de 7 años, cuando impida gravemente la convivencia espiritual de los cónyuges, comprobada satisfactoriamente en juicio por el dictamen de 2 peritos médicos.

³²⁵ Art. 100 de la Ley 31 L.P.R.A. sec. 343 Puertorriqueña de Pensión para alimentos: "Si uno de los cónyuges no contase con suficientes recursos para vivir durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia ordenará al otro cónyuge que le pase una pensión alimentaria en proporción a los bienes propios de este de acuerdo a la posición social de la familia y en aquel caso en que la sociedad legal de gananciales no cuente con bienes de fortuna suficientes o los cónyuges hubieren otorgado capitulaciones matrimoniales. En aquel caso en que la sociedad legal cuente con bienes de fortuna, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar a petición de cualquiera de los cónyuges que se reconozca el derecho del cónyuge reclamante a ejercitar la coadministración de todos o parte de los bienes gananciales, o el acceso a un bien ganancial particular o suma líquida que le permita alimentarse, o ambos, o una pensión alimentaria sin que ello constituya un crédito o una deuda a cargo de las respectivas participaciones en el caudal ganancial al momento de la liquidación. Para el caso anterior, el cónyuge reclamante no tendrá que

contase con suficientes recursos para vivir durante el juicio, la cantidad de dicha pensión lo será en proporción a los bienes propios de este de acuerdo a la posición social de la familia.

En aquel caso en que la sociedad legal cuente con bienes de fortuna, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar, a petición de cualquiera de los cónyuges, que se reconozca el derecho del cónyuge reclamante a ejercitar la coadministración de todos o parte de los bienes gananciales, o el acceso a un bien ganancial particular o suma líquida que le permita alimentarse, o ambos, o una pensión alimentaria sin que ello constituya un crédito o una deuda a cargo de las respectivas participaciones en el caudal ganancial al momento de la liquidación.

Para el caso anterior, el cónyuge reclamante no tendrá que probar necesidad inclusive durante el trámite del divorcio, excepto cuando reclame que se le conceda acceso a una suma líquida mensual que equivalga a más de la mitad del total de ingresos mensuales o bienes líquidos de la sociedad.

La sentencia de divorcio no se inscribe en registro particular alguno.

Los efectos del divorcio son:

- La disolución del matrimonio y división de bienes. El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges.

- El cuidado de hijos menores después del divorcio. En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor protegidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.

probar necesidad inclusive durante el trámite del divorcio, excepto cuando reclame que se le conceda acceso a una suma líquida mensual que equivalga a más de la mitad del total de ingresos mensuales o bienes líquidos de la sociedad. (Enmendado en el 1976, Ley 84; 1999, Ley 46).

El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad.

En todos los casos de custodia y patria potestad se deberá considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica de los progenitores, para la determinación de los mejores intereses del menor. En este sentido se evaluará si ya ha sido beneficiario del programa de desvío establecido en la «Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica». Será discrecional del Tribunal escuchar el testimonio del menor para la determinación de custodia y patria potestad.

La pensión de alimentos, regulada en el artículo 109 CC Puerto Rico, se concede a favor del cónyuge necesitado, en los casos en los que alguno de los cónyuges no cuente con medios suficientes para vivir y sera a cargo del otro cónyuge³²⁶.

La cuantía será fijada por el Tribunal a cargo de las rentas y bienes propiedad del otro cónyuge teniendo en cuenta, en primer lugar, los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges y otras circunstancias como la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y

³²⁶ Art. 109 CC Puerto Rico, Alimentos. (31 L.P.R.A. sec. 385): “Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales que establece divorcio por cualesquiera de las causales que establece la [31 LRPA sec. 321] de este código, cualesquiera de los ex cónyuges no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del otro cónyuge. El tribunal concederá los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: (a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges. (b) La edad y el estado de salud. (c) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. (d) La dedicación pasada y futura a la familia. (e) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. (f) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. (g) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. (h) Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso. Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la fortuna de uno u otro ex cónyuge. La pensión será revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión nuevo matrimonio o viviese en público concubinato. (Enmendado en el 1948, Ley 90; 1952, Ley 11; 1995, Ley 25)”.

de la convivencia conyugal, al caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge y cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso, es decir, si bien la regulación es propia de la pensión de alimentos entre cónyuges las circunstancias a tener en cuenta no varían sustancialmente de la pensión compensatoria española.

Así mismo, la cuantía de la pensión alimenticia puede ser modificada por el juez, y ello podrá efectuarse si concurren alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la fortuna de uno u otro ex cónyuge.

La pensión será revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor de la pensión nuevo matrimonio o viviese en público concubinato.

4.17.- Derecho Uruguayo

El Código Civil Uruguayo data de 1.868, donde el vínculo matrimonial era indisoluble, si bien se aceptaba la separación de cuerpos, que producía efectos pero no disolvía el matrimonio³²⁷.

La primera Ley del Divorcio en Uruguay fué la Ley número 3.245, aprobada el día 26 de octubre de 1.907. Esta Ley estableció como causas de disolución del matrimonio: la muerte y el divorcio, consagró cinco causales de divorcio, y admitió el divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges. También estableció la nulidad de la renuncia a la facultad de solicitar el divorcio.

La segunda Ley referida al divorcio en Uruguay, fue la Ley número 3.641 de 11 de julio de 1.910, modificó algunas de las causales hasta entonces admitidas por la primera ley y aceptó la conversión en divorcio de la sentencia de la separación de cuerpos una vez transcurridos tres años desde ésta.

Posteriormente, por la Ley 4.802, de 9 de septiembre de 1.913 de Uruguay, se estableció el divorcio por la sola voluntad de la mujer,

³²⁷ RIVERO DE ARHANCET, Mabel, y RAMOS CABANELLAS, Beatriz: "El Divorcio en el Derecho Uruguayo: *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 607 y ss.

actualmente vigente, con la finalidad de otorgar, al que en aquel momento era el miembro más débil de la pareja, la posibilidad de pedir el divorcio sin expresión de causa.

Así, el divorcio se clasificó conforme a tres tipos:

- Divorcio sanción.
- Divorcio remedio.
- Divorcio derivado de la voluntad, por mutuo acuerdo.

En el año 1.978 fueron modificadas varias disposiciones en esta materia, a través del Decreto-Ley número 14.766 de 18 de abril de 1.978. Así se equiparó el tratamiento para el caso de que el adulterio cometido por el hombre o por la mujer tuviera un tratamiento igual, se derogó la sanción a la mujer que cometiera adulterio con la pérdida de los gananciales y, se incorporaron dos causales de divorcio: la separación de hecho por más de tres años, y la incapacidad mental de cualquiera de los cónyuges cuando no fuera posible el restablecimiento de la comunidad espiritual y material del matrimonio.

Se suprimió la limitación referida a que la mujer que habiendo intentado el divorcio por su sola voluntad, no pudiera volver a utilizar esta vía si había un desistimiento previo.

Se prohibió dictar la sentencia definitiva de divorcio o separación de cuerpos si antes no se hubiera resuelto la situación de los hijos menores de edad o incapaces, en cuanto a su guarda, régimen de visitas y pensión alimenticia.

Para promover el divorcio el Código Civil Uruguayo previene las mismas causas que para promover la separación de cuerpos, y además el legislador prevé en el artículo 187 CC Uruguayo que, por procesos autónomos pueda también promoverse la disolución del vínculo matrimonial, como es el caso de divorcio por la sola voluntad de la mujer o el divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges, existiendo también la posibilidad de convertir la sentencia de separación de cuerpos.

Sólo hay divorcio si así se declara por sentencia judicial ejecutoria, debiendo ser dictada en vida de los cónyuges, ya que si antes de que recayera la sentencia de divorcio falleciera uno de los cónyuges, tendría

lugar la disolución del matrimonio por muerte. Dicha sentencia es constitutiva de un nuevo estado civil, el de divorciados.

El juzgado competente será el Juzgado Letrado de Familia, debiendo intervenir de forma preceptiva el Ministerio Público.

La acción de divorcio es personalísima, debiendo ser intentada por uno sólo de los cónyuges o por ambos, no pudiendo ser accionada como en la nulidad del matrimonio por el Ministerio Público o por terceros, salvo que el cónyuge lo haya facultado expresamente mediante un poder especial en forma.

El matrimonio se disuelve conforme al artículo 186 CC Uruguayo: Por la muerte de uno de los cónyuges y por el divorcio legalmente pronunciado³²⁸.

El divorcio sólo puede pedirse conforme al artículo 187 CC Uruguayo:

1º. Por las causas anunciadas en el artículo 148 de este Código.

2º. Por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En este caso será necesario que los cónyuges comparezcan personalmente en el mismo acto ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrán su deseo de separarse. El Juez propondrá los medios conciliatorios que crea convenientes y si éstos no dieren resultado, decretará desde luego la separación provisoria de los cónyuges y las medidas provisionales que correspondan.

De todo se levantará acta que el Juez firmará con las partes y al final de la que fijará nueva audiencia con plazo de tres meses a fin de que comparezcan nuevamente los cónyuges a manifestar que persisten en sus propósitos de divorcio. También se labrará acta de esta audiencia y se citará nuevamente a las partes que comparezcan en un nuevo plazo de tres meses, a fin de que hagan manifestación definitiva de su voluntad de divorciarse. Si así lo hicieren se decretará el divorcio, pero si los cónyuges no comparecieren a hacer la manifestación, se dará por terminado el procedimiento.

³²⁸ Art. 186 CC Uruguayo: “El matrimonio se disuelve: 1º. Por la muerte de uno de los cónyuges. 2º. Por el divorcio legalmente pronunciado. Por la muerte de uno de los cónyuges y por el divorcio legalmente pronunciado”.

3°. Por la sola voluntad de la mujer. En este caso la solicitante deberá comparecer personalmente ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el matrimonio. El Juez hará constar en acta esta petición y en el mismo acto fijará audiencia para celebrar un comparecencia entre los cónyuges en la que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos, si los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el marido debe suministrar a la mujer mientras no se decrete la disolución del vínculo y se resolverá sobre la situación provisoria de los bienes.

Si no comparece el cónyuge contra quien se pide el divorcio, el Juez resolverá, oídas las explicaciones del compareciente sobre la situación de los hijos y la pensión alimenticia, decretando en todos los casos la separación provisional de los cónyuges y fijando nueva audiencia con plazo de seis meses a fin de que comparezca la parte que solicita el divorcio para manifestar que persiste en sus propósitos. También se levantará acta de esta audiencia y se señalará una nueva, con plazo de un año, para que la peticionante concurra a manifestar que insiste en su deseo de divorciarse.

En esta última audiencia el Juez citará a los cónyuges a una nueva comparecencia e intentará de nuevo la conciliación entre ellos y comparezca o no el esposo, decretará siempre el divorcio, en caso de no conciliarse, sea cual fuere la oposición de éste. Siempre que la que inició el procedimiento dejara de concurrir a alguna de las audiencias o comparendos prescritos en este numeral, se la tendrá por desistida.

El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino después de haber transcurrido dos años de la celebración del matrimonio. Cada cónyuge tendrá derecho, desde el momento que se decrete la separación provisional, a elegir libremente su domicilio. Cuando al cónyuge que no ha pedido el divorcio no se le pudiera citar personalmente o estuviera ausente del país, el Juez lo citará por edictos y si no compareciese vencido el término del emplazamiento, se le nombrará defensor de oficio”.

En cuanto a las medidas provisionales que deben ser dictadas por el Juez que entiende del proceso de divorcio, pueden ser en algunos casos, además medidas de urgencia. Son las relativas a los hijos, y litis expensas y pensión de alimentos para la mujer.

En cuanto a los efectos del divorcio, el principal efecto del divorcio en la disolución del matrimonio, modificando el estado civil de los cónyuges que pasaran a ser divorciados.

Los efectos personales del divorcio son:

- La mujer no podrá usar ya el apellido del marido.
- Renace la aptitud nupcial en los cónyuges, quedando habilitados para contraer nuevas nupcias, incluso entre sí.

Los efectos patrimoniales del divorcio son:

- Se produce la disolución de la sociedad conyugal.
- Posibilidad de perder las donaciones y promesas que hubieren sido hechas en consideración al matrimonio.
- El cónyuge divorciado queda excluido de la sucesión intestada de su ex cónyuge.
- Derecho de la mujer no culpable del divorcio, a una decente y congrua pensión alimenticia según las posibilidades del ex cónyuge y a sus necesidades, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Dicha pensión la perderá si lleva una vida desarreglada o contrae nuevo matrimonio.

El artículo 183 CC Uruguayo³²⁹ mantiene la obligación del marido de contribuir al sustento de la mujer no culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las posibilidades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Y establece de forma clara el derecho de alimentos entre cónyuges para cubrir las necesidades de sustento.

Se reconoce el derecho de ambos ex cónyuges a solicitarse mutuamente alimentos (aun la mujer culpable del divorcio), que le permitan su modesta sustentación, en cuyo caso se deberá tener en cuenta

³²⁹ Art. 183 CC Uruguayo: “El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y decente sustentación de la mujer no culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta obligación si la mujer lleva una vida desarreglada. El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser socorrido por su consorte, en lo que necesite para su modesta sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero en este caso, el Juez al reglar la asignación, tomará en cuenta la conducta actual del cónyuge que reclama el socorro”.

la conducta actual (o sea, al momento en que se solicitan) de quien los reclama.

4.18.- Derecho Venezolano

El divorcio aparece en Venezuela con el Código Civil de 1.904, aún cuando se llamaba también divorcio a la simple separación de cuerpos. Dicha separación, conforme a los Códigos de 1.862 y 1.867, se tramitaba ante los Tribunales eclesiásticos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Derecho Canónico, y solo pasa a la competencia exclusiva de los Tribunales civiles a partir de la promulgación del Decreto Ley de matrimonio civil de 1.873.

Como origen de la norma en el Derecho Venezolano se señala la legislación francesa de 1.804, la cual por la vía del Proyecto del Código Civil español de García Goyena de 1.851 y en Venezuela se redactan tal y como aparece en el Código Civil de 1.867³³⁰.

En 1.904 se consagró la institución regulando por igual las causales del divorcio, repitiéndose la institución en los Códigos posteriores de 1.916, 1.942 y el actualmente vigente, de 1.982. En este último Código incremento las causas de divorcio, en la interdicción de uno de los cónyuges por defecto mental grave, y la causa de divorcio por separación de hecho prolongada por más de cinco años³³¹.

El sustento de la mayoría de las causas es el acaecimiento de injuria civil grave que haga imposible la vida en común, excepto las causas

³³⁰ BAUMEISTER TOLEDO, Alberto: "El Divorcio en el Derecho Venezolano. *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*". Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A., Editorial Ubijus, Editorial Reus Zavalía, 2.009. Páginas 647 y ss.

³³¹ Art. 185 CC Venezolano: "Son causales únicas de divorcio: 1º El adulterio. 2º El abandono voluntario. 3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5º La condenación a presidio. 6º La adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común 7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.

relativas al artículo 185 A CC Venezolano³³², siendo características de la institución que no puede considerarse ninguna otra causa que dé lugar a la disolución del vínculo entre los cónyuges, ni podrá autoridad judicial alguna admitir demanda de divorcio que no esté debidamente fundada en alguna de dicha causales, ya que en caso de intentarse podrá oponerse la cuestión previa de admitir la acción, con la sola excepción de las causas de interdicción por defecto mental grave, la separación de hecho prolongada y la conversión en divorcio de la separación legal de cuerpos, conforme a los artículos 185-7^a, 185-A y 185 penúltima parte CC Venezolano.

Por ello, puede considerarse que en el sistema venezolano se acoge la tesis de la institución como divorcio sanción, pues dichas causales implican violaciones graves de los deberes conyugales por parte de quien da lugar a ellas, y en consecuencia, es necesario que el acto que constituye o da lugar a la causal pueda imputarse al cónyuge que aparece como culpable o responsable de tales circunstancias.

Entre las causas cabe decir que las seis primeras reguladas en el artículo 185 CC Venezolano se pueden calificar como causales perentorias de divorcio, con lo cual se quiere destacar que, una vez comprobada cualquiera de ellas, la autoridad judicial está obligada a declarar el divorcio, sin que le corresponda efectuar estimación alguna en torno a la gravedad en la violación de los deberes del matrimonio, mientras que el resto de las causales son facultativas, corresponderá al Juez que conoce del divorcio en cualquiera de dichos supuestos, analizar debidamente los hechos que constituyen fundamento de ellas, para determinar si los hechos invocados dan o no lugar a infracción grave de los derechos conyugales.

Conforme al artículo 184 CC Venezolano, todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio.

³³² Art. 185 A CC Venezolano: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.

Las causas del divorcio en Derecho Venezolano se regulan en los artículos 185 y 185 A CC Venezolano³³³.

Son causas únicas de divorcio: el adulterio, el abandono, sevicias e injurias graves, el intento de corrupción o prostitución del otro cónyuge o a los hijos, la condena con una privativa de libertad, las adicciones, sea alcohólica u otras, las perturbaciones psiquiátricas graves, y por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.

En este caso el Tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de ellos, declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio, previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior.

Y por último, como una nueva causal que se regula en el artículo 185 A CC Venezolano: Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.

El divorcio provoca diversos efectos y consecuencias tanto desde el punto de vista personal como patrimonial, ya sea en los casos del proceso ordinario, como en los supuestos especiales de conversión o por separación de hecho prolongada.

Efectos personales:

- La disolución del matrimonio, desapareciendo el vínculo conyugal, pudiendo contraer los esposos libremente nuevas nupcias una vez declarado y firme el divorcio.

- La extinción de los deberes y derechos conyugales; firme la decisión de divorcio, desaparecen los deberes legales de cohabitación, fidelidad,

³³³Art.s 185 y 185 A CC Venezolano: 1º El adulterio. 2º El abandono voluntario. 3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5º La condenación a presidio. 6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común 7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges”.

asistencia, socorro y de protección entre los esposos. Se le prohíbe a la mujer divorciada usar el apellido de su ex cónyuge.

Efectos patrimoniales:

- Consecuencias sobre el régimen de bienes, disuelto el vínculo se extingue y desaparece el régimen de bienes, si era de comunidad de gananciales u otro, queda disuelta pero debe procederse a su liquidación, conforme al artículo 187 del CC Venezolano.

- Consecuencias sobre el derecho-deber de alimentos, dicho derecho-deber legal se extingue entre quienes fueran esposos, con independencia de cuál sea en el futuro la posición económica de ellos.

Excepciones:

- Cuando la causal invocada para el divorcio es la del ordinal 7 del artículo 185 CC Venezolano (interdicción por perturbaciones psiquiátricas graves), no puede pronunciarse el divorcio sin previamente tomar las medidas necesarias para asegurar la manutención y tratamiento médico del esposo enfermo.

- Si el divorcio es declarado con base a cualquiera otra de las causales, diferente a la anterior y distinta a la de conversión de la separación en divorcio por separación prolongada, el tribunal podrá conceder pensión alimentaria al cónyuge que no haya dado lugar al juicio, cuando éste por incapacidad física u otro impedimento estuviere imposibilitado para trabajar y no tener otros medios para sufragar sus necesidades. Tales alimentos serán temporales, y mientras dure la incapacidad o contraiga nuevo matrimonio conforme al artículo 195 CC Venezolano.

CAPÍTULO V

DERECHO COMPARADO (III): PAÍSES ASIÁTICOS Y PAÍSES ÁRABES

5.1.- Países Asiáticos

Además de los países examinados resulta conveniente hacer una referencia a otros países de otros continentes con culturas y tradiciones muy distintas. Así los países asiáticos tienen sus propias características, y dentro de éstos hacemos una mención al Derecho de Singapur y de China.

El continente asiático alberga en su interior países que poseen tradiciones políticas, sociales, culturales y religiosas muy arraigadas y muy particulares. Las diferencias legislativas entre estos países son muy significativas y la armonización entre éstas es absolutamente inexistente. A grandes rasgos puede decirse que las legislaciones sobre divorcio asiáticas son bastante conservadoras, pues si bien se reconoce el divorcio, las condiciones para acceder a él suelen ser muy restrictivas y las sociedades suelen ser muy reticentes a acudir a esta vía para disolver el matrimonio. Corea del Sur, Taiwan y Singapur son los Estados con un mayor número de divorcios del continente asiático.

Se trata de Estados modernos, que se han industrializado muy rápidamente en los últimos años (son los “tigres asiáticos”) y que se estructuran sobre un sistema económico capitalista. En lo que respecta a sus regímenes políticos, se estructuran como democracias en las que existe un catálogo de derechos y libertades amplio. Por ello, resulta comprensible que sus legislaciones sean las más avanzadas del continente.

Por lo que se refiere a China y Japón, sus legislaciones sobre divorcio son más conservadoras que las anteriores. Ello se entiende, en el caso de China, por un lado, teniendo en cuenta el régimen político comunista que recorta las libertades individuales, y por otro, por la arraigada tradición china de la perdurabilidad del matrimonio.

En el caso de Japón, son las tradiciones sociales muy conservadoras y protectoras del concepto de la familia tradicional, las que llevan a que sean muy pocos los japoneses que optan por divorciarse. La legislación actual

esta enraizada en el sistema medieval de "ie" (hogar en japonés), por el cual cada vivienda constituía una unidad familiar donde el patriarca (antiguamente casi siempre el hombre), tenía poder absoluto dentro del domicilio.

Por dichas razones divorciarse en Japón puede suponer la pérdida de contacto total entre los menores y uno de los progenitores, ya que en el país no existen ni la custodia compartida ni los regímenes de visita. La imposibilidad de compartir la custodia y el que los regímenes de visitas propiamente dichos sean inexistentes supone que muchos niños resulten separados por completo de sus dos padres, al menos hasta cumplir los 20 años, que es la mayoría de edad en Japón.

Contar con la custodia física del menor o menores supone obtener la potestad sobre ellos en la mayoría de los casos, se convierte en el factor decisivo que el juez esgrime bajo el argumento de que permanecer en el lugar de residencia actual es la opción menos traumática para los menores. Los juzgados de familia intentan lograr por todos los medios que las partes alcancen acuerdos al margen del tribunal para evitar tener que fallar a favor de uno u otro, y así tener que interferir en los asuntos del "ie".

En el año 2.014, en el mes de febrero, se formó por primera vez un comité de 50 parlamentarios japoneses para estudiar la posibilidad de una modificación legislativa.

En Japón no existen pensión compensatoria pero si pensión de alimentos al cónyuge necesitado, lo que supone solamente cubrir las necesidades del cónyuge que no puede afrontar los gastos mínimos de supervivencia.

La legislación del divorcio en Singapur y en China.

5.1.1.- Derecho de Singapur

La legislación vigente del divorcio en Singapur está recogida en una ley llamada "Carta de las Mujeres" de 1.961³³⁴, que ha sido desde entonces reformada en varias ocasiones, la última de ellas en 2.001. Esta ley regula

³³⁴ "Women's Charter", de 15 de septiembre de 1961. web: <http://statutes.agc.gov.sg/>

el matrimonio monógamo, el divorcio, los derechos y deberes de las parejas casadas, la protección de la familia y las sanciones en caso de delitos contra las mujeres y las niñas, entre otras cuestiones.

En su capítulo dedicado al divorcio la ley regula aspectos como el plazo de tiempo exigido antes de solicitar el divorcio, y las causas del mismo. Así, en primer lugar, la ley exige que hayan transcurrido al menos tres años desde la celebración del matrimonio para poder presentar demanda de divorcio.

Excepcionalmente, el tribunal podrá admitir a trámite una demanda de divorcio de un matrimonio cuya duración haya sido inferior a tres años cuando las circunstancias del caso concreto así lo aconsejen. El Tribunal podrá asimismo intentar la reconciliación de las partes mediante un oficial de mediación.

Respecto de las causas de divorcio, éste sólo podrá solicitarse judicialmente alegando una ruptura irremediable del matrimonio. Ambos cónyuges están legitimados para solicitar el divorcio ante el juez alegando tal causa.

El demandante, como prueba de la ruptura irremediable del matrimonio deberá alegar alguno de los siguientes hechos: (a) adulterio del demandado; (b) comportamiento del demandado que hace imposible la convivencia; (c) abandono por un periodo de 2 años contabilizado antes de la presentación de la demanda de divorcio; (d) separación de hecho durante al menos 3 años antes de la demanda de divorcio, siempre que el demandado esté de acuerdo; y (e) separación de hecho durante al menos 4 años antes de presentar la demanda de divorcio.

Una vez oídas las partes, el juez tendrá en consideración todas las circunstancias, incluyendo los intereses de los hijos del matrimonio y la situación de las partes, y dictará sentencia. Podrá denegar el divorcio si considera que los intereses de los hijos o de una de las partes se verían gravemente lesionados en caso de disolución del matrimonio.

La ley admite asimismo la separación judicial, que podrá ser solicitada en base a las mismas circunstancias señaladas para el divorcio.

Para convertir la separación judicial en divorcio, será necesario acudir a un procedimiento específico en el que el demandante deberá aportar las pruebas correspondientes.

La ley también regula cuestiones importantes como la disolución del régimen económico del matrimonio, la pensión compensatoria y la guarda y custodia de los hijos.

5.1.2.- Derecho de China

El divorcio está regulado en China por la Ley del Matrimonio de 10 de septiembre de 1.980, que fue modificada ampliamente en 2.001. La ley regula las condiciones para obtener el divorcio y las causas que cabe alegar para solicitarlo.

Así, en primer lugar, se reconoce el divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges. La autoridad competente para registrar el matrimonio se ocupará también de entregar un certificado de divorcio a los cónyuges cuando éstos estén de acuerdo en divorciarse y hayan realizado los arreglos económicos oportunos así como las gestiones pertinentes en relación a los hijos comunes.

Cuando es sólo uno de los cónyuges el que desea divorciarse, podrá introducir demanda de divorcio ante un tribunal popular, el cual podrá llevar a cabo labores de mediación. Se concederá el divorcio cuando la mediación fracase porque ya no existe *affectio maritalis* entre los cónyuges.

También se concederá el divorcio cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes y la mediación haya fracasado: (a) bigamia o relaciones extramatrimoniales o concubinato de una de las partes; (b) violencia doméstica o abandono familiar; (c) ludopatía, drogadicción y otros vicios incorregibles; (d) separación de hecho durante dos años dada la falta de *affectio maritalis* entre los cónyuges; (e) otras circunstancias que hayan conducido a la falta de *affectio maritalis* entre los cónyuges.

Asimismo, la ley establece otras cláusulas como la que señala que cuando la esposa de un soldado en activo quiera solicitar el divorcio, deberá previamente obtener el consentimiento de su marido, salvo que éste se encuentre gravemente herido. Asimismo, se establece que el marido

no podrá pedir el divorcio cuando su esposa esté embarazada, ni tampoco en el plazo de un año después de haber dado a luz a un hijo, ni en los seis meses siguientes al final de la gestación.

5.2.- Derecho de los Países Árabes y/o Islámicos

5.2.1.- La disolución del matrimonio en el Derecho islámico

5.2.1.1.- El matrimonio como contrato rescindible por el marido

El matrimonio, conforme a la religión y al Derecho islámico, se considera como un contrato que se perfecciona con el acuerdo de las partes y que es rescindible por el marido. Aunque los cónyuges disponen de una cierta autonomía material a la hora de incluir en el contrato las cláusulas que deseen, la ley islámica de la *Sharia* impone ciertas restricciones. Así, por ejemplo, la mujer musulmana sólo puede casarse con un musulmán, a diferencia del hombre musulmán que puede escoger una esposa no musulmana.

Respecto de las condiciones de validez del matrimonio musulmán, cabe decir que si bien la legislación sobre esta materia no es idéntica en todos los países musulmanes, existen algunos rasgos comunes a destacar: la necesidad de que exista consentimiento, la presencia de un tutor matrimonial para la esposa *Wali* y de dos testigos, y la fijación obligatoria de una dote *Sadaq* dada por el esposo a la esposa.

En relación con la dote matrimonial conviene destacar, en primer lugar, el hecho de que ésta pasa a ser propiedad de la mujer una vez entregada por el marido. En segundo lugar, la dote, además de actuar como requisito de validez del matrimonio, actúa como pago del repudio.

En ningún caso se admite que los contrayentes pacten que el esposo musulmán no tenga la facultad de repudiar a la esposa, ya que dicha cláusula resultaría nula por atentar contra el orden público religioso.

5.2.1.2.- Formas de disolución del matrimonio: divorcio y repudio

Los códigos de familia de los países musulmanes prevén dos modos de disolución del matrimonio en vida de los cónyuges: el divorcio y el repudio. El repudio es una forma de disolución del matrimonio musulmán

que sólo puede ejercitar el marido musulmán. El divorcio, en cambio, se puede ejercitar por ambos cónyuges. Así, si la esposa desea romper el vínculo matrimonial debe necesariamente acudir al divorcio judicial, salvo que logre ser repudiada por su marido.

A) Causas de divorcio

En las legislaciones de los países musulmanes se exige que la esposa, para obtener el divorcio, alegue y pruebe ante el juez que concurre una de las causas tipificadas por la ley. En la mayoría de códigos de familia, como el marroquí, se prevén las siguientes cinco causas de divorcio: a) falta de sustento, b) enfermedad o vicio recalcitrante, c) sevicias, d) ausencia del marido, y e) promesa de continencia. El divorcio pronunciado por el juez sobre la base de estas cinco causas es irrevocable excepto en el caso de falta de sustento o de promesa de continencia.

En estos dos casos, si el marido demuestra su voluntad de cumplir con su obligación conyugal durante los tres meses siguientes al pronunciamiento del divorcio por el juez, el divorcio queda revocado y se reanuda el matrimonio, aunque la mujer quiera disolverlo.

1º) Divorcio por incumplimiento de la obligación de manutención. El Derecho musulmán impone al esposo la obligación de mantenimiento de la esposa, por lo que la mujer musulmana queda eximida de contribuir a las cargas del matrimonio. Si el marido incumple su obligación de manutención para con su esposa, ésta puede solicitar el divorcio. Si el marido prueba que es indigente, el juez fija un plazo de tres meses, transcurrido el cual, si el marido no asegura el sustento de su esposa, se pronuncia el divorcio. Este divorcio es revocable.

2º) Divorcio por enfermedad grave o vicio recalcitrante. El Derecho musulmán faculta a la esposa para pedir el divorcio cuando descubre que su marido tiene una enfermedad incurable o que no se puede curar antes de un año y que le impide hacer vida marital. El divorcio por enfermedad grave es irrevocable.

3º) Divorcio por sevicias. Las sevicias o malos tratos sufridos por la esposa a manos del marido son causa de divorcio. La esposa deberá alegar y probar que es objeto de malos tratos por parte de su marido que hacen que la vida conyugal sea imposible. El juez intentará la conciliación entre

los esposos y si ésta es infructuosa, podrá pronunciar el divorcio. Este divorcio es irrevocable.

4º) Divorcio por ausencia del marido. La esposa puede solicitar el divorcio si su marido está ausente por más de un año, en paradero desconocido y sin motivo válido. El que el esposo hubiera dejado bienes para el sustento de la esposa no impide que ésta solicite el divorcio. Este divorcio es irrevocable.

5º) Divorcio por promesa de continencia. Cuando el marido hace un juramento de continencia y abandona sus deberes sexuales, la esposa está facultada para pedir el divorcio. El juez fijará un plazo de cuatro meses al marido para que reconsidere su actitud y si pasado el plazo el marido no modifica su actitud, el juez pronunciará el divorcio. Recordemos que este divorcio es revocable.

B) Clases de repudio

El repudio marital es una forma de disolución del matrimonio musulmán que se configura como un privilegio masculino y religioso. Poner fin a un matrimonio mediante el repudio marital es más usual, fácil, rápido y económico que iniciar un proceso de divorcio, por lo que la mayoría de hombres optan por él. Tampoco es infrecuente que la mujer intente llegar a un acuerdo con su marido para que éste la repudie en vez de iniciar un proceso de divorcio.

Existen dos clases de repudio: el irrevocable y el revocable.

El repudio irrevocable tiene su fundamento en el Corán. Así, en el Derecho musulmán clásico el esposo puede repudiar a la mujer pronunciando tres veces la fórmula “yo te repudio” sucesivamente y en un mismo acto. Este repudio produce la disolución definitiva e irrevocable del matrimonio, si bien el Corán recomienda un plazo de reflexión antes de que se considere el repudio definitivo para evitar que el matrimonio se disuelva por una reacción espontánea del marido.

Mientras dura el plazo de reflexión el repudio es revocable y el matrimonio subsiste a todos los efectos legales. Si el esposo en ese plazo cambia de opinión respecto a su decisión de repudiar a su mujer, se restablece la situación anterior y se reanuda el matrimonio. Si pasado el

plazo de reflexión, el marido mantiene su decisión de repudiar, el repudio deviene irrevocable y tiene los efectos propios de un divorcio.

Mientras es revocable, el repudio puede equipararse a una suerte de separación, aunque el Derecho islámico no contempla esta figura. Sin embargo, conviene retener la idea que la revocabilidad del repudio es temporal y limitada en el tiempo.

En el repudio puramente revocable, cuando el marido repudia a la esposa, ésta debe observar un periodo de retiro legal *Idda* de tres meses de duración (o de diez meses si está embarazada) durante el cual el marido puede volverse atrás y decidir reanudar el matrimonio.

Si el marido se retracta durante esos tres meses y reanuda la vida en común antes de que concluya la *Idda* puede repudiar a su mujer por segunda vez y hasta por tercera vez, pero a partir de la tercera vez el repudio deviene irrevocable. Pero si el marido deja transcurrir los tres meses de la *Idda* consecutivos al primer repudio sin retractarse, el repudio deviene definitivo e irrevocable y el matrimonio queda disuelto.

Sin perjuicio de las especificidades procedimentales recogidas en las diversas legislaciones nacionales, con carácter general, el repudio necesita de la homologación judicial para desplegar sus efectos.

El juez dictará una orden recogiendo los efectos del repudio, a saber: la pensión alimenticia de la mujer durante el periodo de la *Idda*, el lugar donde debe vivir durante ese periodo, las eventuales indemnizaciones debidas a la mujer, el pago de la dote, la pensión alimenticia de los hijos y los derechos de guarda *Hadana* y visita.

5.2.1.3.- Los efectos patrimoniales del divorcio y del repudio respecto de los esposos y de los hijos

- Divorcio:

En el Derecho islámico no existe la noción de “régimen económico matrimonial”. Durante el matrimonio, el marido está obligado a mantener a la esposa pero existe una absoluta separación de bienes. Así,

teóricamente no hay patrimonio que dividir tras el divorcio³³⁵. Cada cónyuge es propietario de los bienes adquiridos antes del matrimonio y, en caso de duda, cada uno de los esposos deberá probar la propiedad del bien en cuestión. Sin embargo, la mayoría de legislaciones establecen unas presunciones entre cosas “propias al uso de las mujeres” y cosas “propias al uso de los hombres” que se reparten los esposos bajo juramento³³⁶.

• Repudio *Talaq*:

La mujer repudiada tiene conforme al Derecho islámico compensaciones económicas que se concretan en: una pensión alimenticia, limitada al tiempo de la *Idda* y una eventual indemnización o “don de consolación”.

La pensión alimenticia está limitada al plazo de la *Idda* (tres meses o diez meses, si la mujer está embarazada), a contar desde el día del repudio. En lo que respecta al “don de consolación”, éste encuentra su fundamento en el repudio sin motivo.

Así, el marido no tiene que motivar el repudio pero si no le reprocha nada a ésta, se presume que la repudia sin motivo, por lo que está obligado a entregarle a la esposa un don de consolación en función del perjuicio material y moral que le causa. Será el juez el encargado de fijar el montante de esta indemnización y para ello deberá atender a la situación financiera de los esposos.

En lo que respecta a la atribución del domicilio conyugal, éste corresponde siempre a su propietario, que suele ser el marido. Aunque la mujer tenga los hijos a su cuidado sólo podrá disfrutar del domicilio conyugal si éste le pertenece.

³³⁵ El Derecho Tunecino es el único derecho musulmán que admite una pensión de duración indeterminada para la esposa tras el divorcio.

³³⁶ Art. 73 del CFA Argelino.

5.2.1.4.- Efectos del divorcio y del repudio respecto de los hijos: tutela y *Hadana*

Los ordenamientos islámicos inspirados en la *Sharia* otorgan la patria potestad de los hijos al padre³³⁷ y atribuyen el cuidado de los hijos menores *Hadana*³³⁸ –que no es equiparable a la guarda– a la madre en función de la edad del hijo. Se recogen tres causas de pérdida de la *Hadana* por parte de la madre:

1) Nuevas nupcias, salvo que contraiga matrimonio con un pariente del niño.

2) Residencia en el extranjero: Si la madre a quien se le ha atribuido la *Hadana*, se establece en un país distinto al de la residencia del padre, y ello dificulta el que el padre pueda ejercer sus funciones, la mujer pierde la *Hadana* que pasa al pariente siguiente según el orden establecido.

3) La no educación del hijo en la fe musulmana: El hijo debe ser educado en la religión islámica de su padre y aunque no es necesario que la madre guardiana tenga la misma religión que el hijo, si no lo educa en la religión musulmana (del padre) la madre cuidadora pierde su derecho.

Las demandas de disolución del matrimonio presentadas por nacionales de países islámicos en España donde la competencia judicial internacional, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1.985, y, hasta febrero de 2.001, los artículos 22.2 y 3 de la LOPJ regulaban la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en caso de separación, divorcio y nulidad matrimonial. Sin embargo, el 1 de marzo de 2.001, entró en vigor el Reglamento CE 1.347/2.000 del Consejo, de 29 de mayo de 2.000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes.

³³⁷ La patria potestad no es compartida por los esposos sino que corresponde al padre que decide acerca de la educación del hijo, lo representa y administra su patrimonio.

³³⁸ El CFA Argelino configura la *Hadana* en su artículo 62 como la institución que consiste en “el cuidado, la escolarización y la educación del niño en la religión de su padre así como en la salvaguarda de su salud física y mental”.

Desde ese momento, las normas de competencia judicial internacional en él recogidas se impusieron sobre las normas internas que regulaban hasta entonces dichas materias. Estas normas de competencia obligatorias sólo podían dejar de aplicarse cuando no existiera un juez de un Estado contratante competente en virtud del Reglamento, y sólo entonces se admitía la competencia residual de las normas internas.

No obstante, el Reglamento CE 1347/2.000 ha sido derogado y sustituido por el nuevo Reglamento CE 2201/2.003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2.003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y que resulta plenamente aplicable desde el 1 de marzo de 2.005.

El Reglamento 1.347/2.000 determinaba la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones para dos materias: a) procedimientos civiles de divorcio, separación y nulidad, b) responsabilidad parental que se derive de tales procesos sobre los hijos comunes habidos en el matrimonio.

Por su parte, el Reglamento 2.201/2.003 aunque continúa tratando ambas materias, dedica una mayor atención a la protección de los menores. Así, la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental ya no tendrá que ser consecuencia de uno de los procedimientos referidos como sucede en el Reglamento 1.347/2.000 y, además, en relación al ámbito de aplicación personal, tales medidas podrán ser aplicadas a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio comunes o no. Hay que recordar que el Reglamento 1.347/2.000 se refiere sólo a los hijos comunes habidos dentro del matrimonio.

El propio Reglamento 2.201/2.003 señala en su exposición de motivos que *“con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento se aplica a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial”*.

En todo caso, en materia matrimonial, el Reglamento 2.201/2.003 establece un amplio abanico de posibilidades para facilitar el acceso a la justicia en materia de divorcio. Así, el artículo 3, bajo la rúbrica de

“competencia general” establece foros alternativos que toman como criterio de base la residencia (la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar de residencia habitual de los cónyuges), siempre que uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del demandado, o la residencia habitual de cualquiera de los esposos si la demanda es de mutuo acuerdo, o la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, plazo que se reduce a seis meses si el demandante es nacional del Estado miembro en cuestión o tiene allí su domicilio de origen.

Y por otra parte, son también competentes los tribunales de la nacionalidad de ambos cónyuges o en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del domicilio común.

El artículo 7 del Reglamento 2.201/2.003, bajo la rúbrica de “competencia residual”, está pensado para los litigios extracomunitarios. Así, si ninguna autoridad de un Estado contratante es competente conforme a las reglas anteriores, la competencia de cada Estado miembro se rige por su derecho interno.

Y el párrafo segundo de este precepto señala que todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro puede, al igual que los nacionales de este último, invocar en dicho Estado las reglas de competencia que sean aplicables en el mismo frente a un demandado que no tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro ni la nacionalidad de un Estado miembro. Se afirma la competencia de los tribunales españoles en las demandas de divorcio planteadas por matrimonios de inmigrantes musulmanes residentes en España.

La ley aplicable en estos supuestos, al regir en España, el “estatuto personal” de los extranjeros (capacidad, matrimonio, divorcio, etc.) se regula por la ley nacional del interesado, de conformidad con las normas de conflicto de los artículos 9 y 107 CC. Sin embargo, hoy en día son muchos los países europeos que han decidido reformular la normativa de Derecho internacional privado a favor de la ley propia (lex fori) frente a la ley extranjera que por ejemplo no permita el divorcio.

Mediante normas de conflicto unilaterales³³⁹ y especialmente mediante las cláusulas especiales de orden público³⁴⁰, se aplica la *lex fori* en lugar de la ley extranjera (ley de la nacionalidad común de los cónyuges) que no permite el divorcio.

La norma de conflicto española en materia de separación y divorcio es el artículo 107 CC, introducido por Ley 30/1.981, de 7 de mayo. Hasta su reforma por Ley Orgánica 2.003, de 29 de septiembre³⁴¹, el artículo 107 CC era una norma de conflicto bilateral clásica que privilegiaba la ley de la nacionalidad común de los esposos y desconocía las cláusulas especiales de orden público.

Así, si la ley designada por el precepto desconocía el divorcio, el juez se veía obligado a recurrir a la excepción del orden público internacional conforme al artículo 12.3 CC³⁴² o a la falta de alegación y prueba del derecho extranjero.

Con la modificación operada por la L.O. 1/2.003, el artículo 107³⁴³ recoge en su párrafo 2º letra c) una cláusula especial de orden público en materia de divorcio, que subsana las deficiencias anteriores.

En cuanto al reconocimiento del divorcio y del repudio islámico en España la LEC de 1.881, en los artículos 951 y siguientes de la nueva

³³⁹ Art. 310 CC Francés, por ejemplo.

³⁴⁰ El artículo 31 de la Ley italiana de Derecho internacional privado, donde la ley extranjera es descartada a favor de la ley italiana cuando no permita el divorcio. También el artículo 17.1, párrafo 2 del EGBGB incluye este tipo de cláusula.

³⁴¹ LO 1/2.003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (BOE de 30-9-2.003).

³⁴² Art. 12-3º CC: “En ningún caso tendrá lugar la aplicación de la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público”.

³⁴³ Art. 107.2 CC: “La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España: d) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas. e) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. f) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.”

regulación sigue regulando el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en nuestro país. Hasta el año 2.001, el reconocimiento de las sentencias de divorcio extranjeras se hacía, de conformidad con la LEC, mediante el procedimiento del exequátur, ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, con la entrada en vigor del Reglamento comunitario 1.347/2.000, el reconocimiento de tales sentencias se facilitó considerablemente.

En cuanto al nuevo Reglamento 2.211/2.003, se mantienen las mismas pautas para el reconocimiento de sentencias que en el anterior Reglamento. Habrá que estar siempre a los requisitos de aplicabilidad personal, territorial y material exigidos en el Reglamento 2.201/2.003 para determinar si procede o no acogerse a sus disposiciones. En los casos en que el Reglamento no resulte aplicable, el reconocimiento de una sentencia de divorcio extranjera deberá seguir como regla general el procedimiento del exequátur³⁴⁴.

Recientemente se ha publicado la ley 29/2.015 de cooperación internacional en materia civil, publicada en el BOE de 31 de julio de 2.015, aplicandose la ley en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Esta ley integra y detalla el artículo 177 LEC, dedicado a la cooperación internacional.

Sin embargo, en relación con los países islámicos, se plantea una cuestión fundamental sobre la posible equiparación del repudio islámico con las sentencias de divorcio extranjeras. Quiñones Escamez³⁴⁵ se pronuncia claramente a favor, siempre y cuando se trate de un divorcio oficial reconocido como tal por las autoridades del país en el que es pronunciado y donde despliega sus efectos, modificando el estado civil de los esposos.

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de reconocimiento de divorcio/repudio islámico es errática. Así, si nuestro alto Tribunal subraya que el carácter privado y extrajudicial del divorcio constituye un obstáculo para su reconocimiento, cuando tal divorcio es

³⁴⁴ Hay que tener en cuenta la existencia de diversos convenios bilaterales, como el Convenio entre España y Marruecos sobre reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones judiciales, de 30 de mayo de 1.997.

³⁴⁵ QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana, “La disolución del matrimonio: especial referencia al repudio islámico” en el libro “La multiculturalidad: especial referencia al islam”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2.002.

pronunciado por una autoridad extranjera revestida de *imperium*, suele otorgar el exequátur.

Pero, la cuestión reside en que el Tribunal Supremo a veces considera probado, y otras no, que el funcionario autorizante del divorcio estaba revestido de *imperium*. Lo que resulta evidente es que un simple acto de repudio marital que no se comuniqué ni se respalde por la autoridad de origen de los esposos, no será reconocido en España³⁴⁶.

Asimismo, el principio de orden público, en su vertiente procesal conforme al artículo 24 CE, exige al juez del exequátur que verifique si en el procedimiento llevado a cabo en el extranjero se han respetado los derechos de la defensa, el principio de igualdad y de contradicción. El propio artículo 954.2 LEC prevé que el juez verifique si ha habido indefensión.

Dada la desigualdad intrínseca entre marido y mujer en el acceso al divorcio, el juez español deberá atender al respeto a la voluntad de la esposa, por cuanto el repudio y habitualmente también el divorcio responden a la voluntad exclusiva del marido. Así, en el caso de que sea propiamente la mujer quien solicite el exequátur, se entenderá que el control de los derechos de la defensa resulta innecesario.

5.2.2.- En particular, Marruecos

Por último, cabe señalar la dificultad existente hasta la fecha para lograr el otorgamiento del exequátur a los repudios pronunciados en Marruecos, por el carácter revocable del mismo en este país. Sin embargo, la revocabilidad del repudio es temporal, limitada en el tiempo, y en lo que respecta al divorcio, sólo en base a determinadas causas legalmente tasadas resulta éste revocable³⁴⁷.

El Código del Estatuto Personal de Marruecos, o *Mudawana*, es un compendio normativo equiparable a nuestro Código Civil. Fue redactado

³⁴⁶ En los Estados islámicos, el legislador también ha intervenido para superar los obstáculos relativos al carácter privado y extrajudicial del divorcio, exigiendo la presencia de funcionarios públicos (juez o notario) y/o la homologación judicial.

³⁴⁷ QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana, “Derecho e inmigración: repudio islámico en Europa”, Barcelona, Fundación La Caixa, 2.000.

entre 1.957 y 1.958, y consta de seis libros³⁴⁸ de los cuales los libros I y II regulan el matrimonio y su disolución. En ellos, se consagra un Derecho de familia islámico conservador, redactado por teólogos musulmanes y que pretendía ser provisional. Sin embargo, la *Mudawana* ha estado cuarenta y siete años en vigor, sin más modificaciones que las acordadas en 1.993 por el rey Hassan II, las cuales no representaron un cambio sustancial.

Ha sido necesario esperar hasta el reinado de Mohamed VI para poner en marcha una reforma de la *Mudawana* acorde con los tiempos actuales y la realidad social marroquí. En su discurso de acceso al trono, el 10 de octubre de 2.003, el Rey Mohamed VI confirmó la necesidad de modernizar la *Mudawana* sin que ello vulnerara de ningún modo los principios de la *Sharia*.

La nueva *Mudawana*, promulgada en febrero de 2.004³⁴⁹, sido redactada por una comisión heterogénea en la que junto con los ulemas, ha habido juristas, sociólogos, asociaciones feministas y otros representantes sociales, y los tres grandes ejes en los que se estructura la reforma son, en opinión de la profesora Zekri, la igualdad de sexos, una mejor protección de la mujer y la protección de los menores³⁵⁰.

La *Mudawana* has sufrido modificaciones en el ámbito del matrimonio, su disolución y las consecuencias derivadas de ésta. Así, en primer lugar, la nueva *Mudawana* redefine el matrimonio y sus objetivos y modifica los deberes y obligaciones de los cónyuges. La responsabilidad del hogar se convierte en una responsabilidad compartida entre ambos cónyuges y se instituye la toma conjunta de decisiones relativas a los hijos, a la gestión del hogar y a la planificación familiar.

Asimismo, si en la antigua *Mudawana* la mujer debía recurrir a un *Wali* (tutor) matrimonial para poder casarse, el nuevo código restaura la

³⁴⁸ Los libros I y II sobre el matrimonio y su disolución se promulgaron el 22 de noviembre de 1957, el libro III sobre filiación el 18 de diciembre del mismo año, el libro IV sobre la capacidad y la representación legal el 25 de enero de 1958, el libro V sobre el testamento el 20 de febrero de 1958 y el libro VI sobre las sucesiones el 3 de marzo de 1958.

³⁴⁹ Dahir (decreto) número 1.04.22 de 3 de febrero de 2004, publicado en el BO núm. 5184 de 5 de febrero de 2.004.

³⁵⁰ ZEKRI, Houda. "El nuevo código de familia marroquí a la luz de las relaciones bilaterales hispano marroquíes", en Revista Española de Derecho Internacional, volumen LVI (2004). Páginas 301 a 313.

plena capacidad matrimonial a la mujer mayor de edad (dieciocho años) y convierte la tutela matrimonial en una mera opción a discreción de la mujer. La dote continúa siendo requisito fundamental del matrimonio, aunque ahora se subraya su valor simbólico y no económico.

En lo que respecta a la poligamia³⁵¹, aceptada en Marruecos, la nueva *Mudawana* la limita a casos excepcionales y somete cada caso a la apreciación del juez. Así, se prohíbe la poligamia si se teme injusticia entre las esposas o si existe una condición prematrimonial de monogamia exigida por la esposa. Por otra parte, para autorizar la poligamia se exige probar la situación de excepción (justificación objetiva como enfermedad incurable o esterilidad de la primera esposa) así como los medios suficientes para sustentara a ambas familias e igualdad de trato en todos los aspectos de la vida.

Por lo que se refiere a la disolución del matrimonio, la nueva *Mudawana* mantiene la institución del repudio *Talaq* aunque la modifica sustancialmente.

El artículo 78 del nuevo CEP Marroquí, se establece que *“El repudio es la disolución de los vínculos del matrimonio ejercido por el esposo y por la esposa, dependiendo de las condiciones de cada situación y bajo el control judicial, en virtud de las disposiciones de esta Mudawana”*.

En esta nueva regulación hay que destacar dos notas:

- En primer lugar, el repudio, antes prerrogativa exclusiva del marido, puede ahora también ser ejercido por la esposa, cuando ésta tiene el derecho de opción cedido por su esposo a la hora de contraer matrimonio conforme al artículo 89 CEP. Además, se establece el mismo procedimiento para regular el repudio por la esposa o por el esposo.

- En segundo lugar, se introduce el control judicial en el ámbito del repudio, antes regido por la voluntad exclusiva y arbitraria del marido. La exigencia de notificación judicial introduce un mayor control y mayores garantías del proceso de repudio. Así, a la luz de esta nueva reglamentación, se favorecen las condiciones para el reconocimiento, por un juez español, de una decisión de repudio pronunciada en Marruecos.

³⁵¹ ZEKRI, Houda. *“El nuevo código de familia marroquí a la luz de las relaciones bilaterales hispano marroquíes”*, finalidad con la que se instauró la poligamia en el Derecho islámico, Revista Española de Derecho Internacional, volumen LVI, 2004. Páginas 301 a 313.

Entre las exigencias del procedimiento de repudio pueden destacarse el resumen de la citación de las partes, de sus peticiones y sus pruebas, la fecha de autenticación del acto por el juez, la persona a quien se le atribuye la *Hadana* y la organización del derecho de visita, así como la determinación de los derechos pecuniarios conforme al artículo 84 CEP y de la pensión por *Hadana* posterior al plazo de la *Idda* (retiro legal). En cuanto a la pensión alimenticia, ésta se determina teniendo en cuenta las condiciones de vida y de escolaridad de los hijos.

En lo que respecta al divorcio, como modo alternativo al repudio para disolver el matrimonio, la nueva *Mudawana* ha introducido dos nuevas causas legales de divorcio, junto a los supuestos clásicos existentes³⁵²: el divorcio por disensión y el divorcio por mutuo acuerdo. Estos dos nuevos supuestos resultan más acordes con la realidad social actual.

El divorcio por disensión se regula en los artículos 94 a 97 CEP, recoge los casos en que los cónyuges, o uno de ellos, solicitan del tribunal la resolución de un litigio que pone en peligro la unión conyugal. Por su parte, el divorcio por mutuo acuerdo conforme al artículo 114 CEP, supone abrir la vía del divorcio para los cónyuges que hayan decidido de común acuerdo, poner fin a su matrimonio. Sin embargo, en ambos casos, el tribunal debe esforzarse por conciliar a las partes. Si la conciliación resulta infructuosa, el juez autorizará y dará fe del acto de divorcio, después de decidir las cargas pecuniarias correspondientes a cada cónyuge.

Asimismo, en el supuesto clásico del divorcio por sevicias, la nueva *Mudawana* incluye en el artículo 99 CEP el concepto de perjuicio entendido como “*todo comportamiento del marido que sea contrario a los buenos modales y que perjudique a la esposa material o moralmente, de forma que imposibilite la continuación de sus relaciones conyugales*”.

Por último, la nueva *Mudawana* mantiene la opción del divorcio “*jol’â*” o divorcio por compensación³⁵³, aunque lo reglamenta de un modo más riguroso para evitar posibles abusos de este procedimiento. Así, si una mujer prueba que fue víctima de extorsión por su marido para pactar el

³⁵² Causas de divorcio clásicas en el epígrafe correspondiente, a saber: divorcio por incumplimiento de la obligación de manutención, por enfermedad o por grave o vicio recalcitrante, por sevicias, por ausencia del marido y por promesa de continencia.

³⁵³ Esta forma de divorcio se aplica cuando la voluntad de disolver el matrimonio emana exclusivamente de la esposa y ésta ofrece una compensación económica a su marido a cambio de su libertad

divorcio “jol’â”, el juez le restituirá el objeto de la compensación y pronunciará el divorcio conforme al artículo 117 CEP.

En lo que respecta al ejercicio de la *Hadana*, la nueva *Mudawana* amplía las circunstancias en que la madre no pierde la *Hadana* de sus hijos por contraer un nuevo matrimonio: si el niño es menor de siete años o puede ser perjudicado por la separación o si el menor sufre una minusvalía difícil de tratar por otra persona que la madre conforme al artículo 175 CEP.

Tampoco pierde su derecho a la *Hadana* la madre que se traslada a vivir en otra localidad dentro del país a menos que el juez estime lo contrario. Asimismo, la nueva *Mudawana* establece normas de protección del menor en los supuestos de crisis matrimoniales. Por ejemplo, se exige un domicilio para los hijos puestos en *Hadana* conforme al artículo 168 CEP, se limitan las personas que pueden ejercer la *Hadana* legalmente (sucesivamente, madre, padre y abuela materna) y se deja al juez absoluta libertad para que elija a la persona más adecuada.

También se incluyen medidas especiales para los niños con minusvalías físicas y psíquicas y se confirma la competencia del fiscal general en materia de protección de los menores y particularmente, en el ámbito del control de su traslado ilícito.

Por último, se amplía la regulación del derecho de visita que se regula en los artículos 80 a 186 CEP, introduciéndose el derecho de visita de los abuelos si fallece uno de los padres del menor en *Hadana*, y se prolonga hasta la edad de veinticinco años la *Nafaqa* o pensión alimenticia, para los hijos que prosiguen sus estudios.

La reforma de la *Mudawana* sido ambiciosa pero queda por saber si su aplicación será llevada a cabo adecuadamente³⁵⁴. Mohamed Tozy califica de revolucionaria esta reforma del código de familia pero apunta que la reforma deberá ir acompañada de un esfuerzo en la educación y de cambios sociales. Por su parte, Leila Rhiwi apunta que la reforma es de una importancia capital porque sustituye la sumisión por la igualdad, pero teme que ésta no se aplique en los tribunales.

³⁵⁴ TOZY, Mohamed, y RHIWI, Leila Rhiwi, “Débats entre femmes en terres d’islam”, *Le Monde Diplomatique*, abril 2.004.

Al día de hoy los recursos humanos y materiales de los tribunales marroquíes son muy limitados y no parece posible que se pueda implementar esta reforma a corto plazo. No obstante, se han adoptado diversas medidas complementarias, entre las que destaca la creación de secciones para la justicia familiar, la formación de magistrados y de auxiliares de justicia especializados y la elaboración de una guía práctica del código de familia susceptible de orientar y evitar posibles deslices de la jurisprudencia en su labor de interpretación de las nuevas disposiciones.

CAPÍTULO VI

NATURALEZA JURÍDICA DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Se ha discutido por la doctrina sobre la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria y cuál es ésta; por ello, se atribuyen diversas acepciones en atención a la función que cumple, realizándose la clasificación que seguidamente exponemos.

4.1.- Alimenticia

Se ha de diferenciar la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria de la que tiene la alimenticia, ya que a veces existe el riesgo de confundir aquélla con la obligación de alimentos.

Se basa esta posible afirmación en los siguientes tipos de argumentos:

A) En el antecedente histórico de la pensión compensatoria, que es la pensión alimenticia entre divorciados que arbitró la Ley de Divorcio de 1.931, de la II República.

B) En las reservas sobre la idea de que con el divorcio desaparezcan todas las obligaciones asistenciales que la Ley impone al marido y a la mujer.

C) En las circunstancias que el artículo 97 CC menciona, entre otras, para graduar la pensión, algunas de las cuales parecen conferirle carácter de pensión alimenticia en los términos que se establecen los alimentos entre parientes regulados en los artículos 142 y siguientes CC.

Sin embargo, existen algunos fundamentales aspectos diferenciadores entre pensión compensatoria y pensión alimenticia:

1.- En el ámbito objetivo, la primera tiene como fin la compensación de desequilibrio, mientras que la segunda se establece para la cobertura de necesidades.

2.- En el ámbito subjetivo, la pensión compensatoria sólo puede acordarse en beneficio del cónyuge o ex-cónyuge perjudicado por la separación o el divorcio, sin que requiera la persistencia de vínculo familiar o parentesco, en la más amplia extensión del artículo 143 CC³⁵⁵.

3.- Si se analizan sus principios informadores, la pensión compensatoria está sometida al principio dispositivo para las partes, mientras que los alimentos no son disponibles conforme al artículo 151 CC³⁵⁶.

4.- Si se contempla el nacimiento del derecho, la pensión compensatoria procede de la sentencia de separación o divorcio y el derecho a los alimentos nace desde que existe la situación de necesidad.

5.- En cuanto a las causas de extinción, la pensión compensatoria del artículo 97 CC no desaparece con la muerte del deudor, sino que hay sucesión *mortis causa*, mientras que la obligación alimenticia cesa con la muerte del obligado.

Por otra parte, el derecho a alimentos no se extingue por nuevo matrimonio o convivencia *more uxorio* con otra persona del beneficiario y sí lo hace la pensión compensatoria.

6.- Los criterios de cuantificación de ambas pensiones son también diferentes. Las circunstancias enumeradas en el artículo 97 CC y otras semejantes constituyen el baremo a tener en cuenta para esta pensión compensatoria. Las necesidades del alimentista y medios del alimentante, lo son para esta obligación conforme al artículo 146 CC, con carácter

³⁵⁵ Art. 143 CC: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”.

³⁵⁶ Art. 151 CC: “No es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos. Pero podrán compensarse y renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a demandarles”.

exclusivo, aunque también deban ser tenidos en cuenta los medios, en la primera.

7.- Difieren también ambas pensiones en cuanto a los plazos de prescripción de las acciones para reclamarlos. La pensión compensatoria, ha de reclamarse con la demanda, o en su caso, la reconvención, de separación o divorcio. El derecho a alimentos es imprescriptible, y pueden reclamarse sin plazo.

8.- Los alimentos permiten la prestación alternativa en el propio domicilio conforme al artículo 149 CC³⁵⁷, que no existe en la pensión compensatoria, que, en cambio, tiene la posibilidad de ser sustituida por la entrega de un capital, en bienes o dinero, o la constitución de una renta vitalicia o el usufructo de determinados bienes conforme al artículo 99 CC, lo que no es posible en los alimentos.

9.- La pensión compensatoria puede servir para cubrir necesidades, pero ésta no es su finalidad, ni su objetivo.

La pensión compensatoria no tiene naturaleza alimenticia, ya que en su configuración actual tiene como presupuesto básico el desequilibrio económico existente entre ambos cónyuges en el momento de la separación o divorcio, mientras que la pensión de alimentos, regulada en los artículos 142 y siguientes CC, presupone la constatación de un estado de necesidad del alimentista, que dota a esta segunda institución de una verdadera naturaleza asistencia y no reequilibradora.

La jurisprudencia menor mayoritariamente declara que constituye el presupuesto esencial para el establecimiento de la pensión compensatoria, la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No siendo necesario probar la existencia de un estado de necesidad del cónyuge más desfavorecido con la ruptura de la relación, que puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo.

³⁵⁷ Art. 149 CC: "El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concorra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad".

Por lo tanto, no es necesario acreditar el estado de necesidad del cónyuge acreedor en el establecimiento de la pensión compensatoria, lo que la aleja de la naturaleza de la pensión alimenticia. Y correlativamente, hay que exigir la constatación de un efectivo desequilibrio económico generado por la ruptura del vínculo matrimonial³⁵⁸.

Constituye un presupuesto básico para la concesión o reconocimiento de la pensión compensatoria la existencia de un desequilibrio económico entre los cónyuges provocado por la ruptura conyugal que determine, para el acreedor de la pensión, un empeoramiento con relación a la situación de la que disfrutaba en el matrimonio, y no una situación de necesidad, por lo que resulta compatible su percepción incluso en el caso de contar con medios económicos para subsistir, siendo necesariamente al tiempo de producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver lo referente a si procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía, sobre su duración indefinida o su fijación con carácter temporal.

4.2.- Asistencial

Este carácter agrupa el contenido de las obligaciones derivadas del matrimonio, de mutua ayuda del artículo 67 CC³⁵⁹ y socorro del artículo 69 CC³⁶⁰ y es, en realidad, semejante al alimenticio.

Esta condición asistencial está ligada al mantenimiento de alguna forma de estos deberes, después del matrimonio. Sin embargo, si en la separación puede hablarse todavía de una obligación residual de socorro y ayuda, éstos tienen su traducción en el deber de alimentos, pero no en la pensión compensatoria que, por definición, excede en sus objetivos de la pura neutralización de la necesidad y, consiguientemente, del socorro o ayuda.

³⁵⁸ BELIÓ PASCUAL, Ana Clara. *“La pensión compensatoria”*, Tirant Lo Blanch Tratados, 2.013. Página 21.

³⁵⁹ Art. 67 del Código Civil. “Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”.

³⁶⁰ Art. 69 CC: “Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos”.

4.3.- Reparadora

La naturaleza reparadora de la pensión compensatoria viene contemplada en la jurisprudencia, interesando destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18^a de 1 de octubre de 1.998, que razona así:

“La pensión compensatoria, recogida en el artículo 97 CC, es una medida no de índole o carácter alimenticio, sino de naturaleza reparadora tendente a equilibrar en lo posible el descenso que la separación o el divorcio puedan ocasionar en el nivel de vida de uno de los cónyuges en relación con el que conserve el otro, por lo que habrá de partirse como momento inicial para la constatación de si se produce o no desequilibrio económico y consecuentemente si nace el derecho a la pensión, de la situación instaurada en el matrimonio”.

La pensión compensatoria sirve para reparar el perjuicio que un cónyuge sufre a consecuencia de la ruptura matrimonial, recalcando, de esta forma, el carácter o naturaleza indemnizatorios.

4.4.- Indemnizatoria

Algunos autores, como Pilar Haza Díaz³⁶¹, se oponen a la calificación de indemnizatoria en base a que:

1º.- La jurisprudencia y la doctrina consideran unánimemente que las obligaciones indemnizatorias se cumplen mediante pago único generalmente.

La entrega de una cantidad de dinero periódicamente. Esta forma de cumplimiento, unido al desequilibrio que tiende a corregir, hace pensar que pretende no la simple reparación de un daño, sino el mantenimiento en el tiempo de una determinada forma de vida.

2º.- Existe una valoración de la evolución futura.

3º.- Es posible modificar la cuantía de la prestación.

³⁶¹ HAZA DIAZ, Pilar. “La pensión de separación y divorcio”. La Ley. Madrid 1.989. Página 15.

4º.- No se explica por qué la circunstancia de la convivencia, mediando o no matrimonio válidamente contraído, debe ser considerada como un hecho que repara el perjuicio y más cuando el mencionado precepto no exige para la extinción de la pensión que esta convivencia permita al acreedor vivir en igual situación económica que la que gozaba durante la existencia del matrimonio.

Sin embargo, lo cierto es que en modo alguno hay que acreditar para alcanzar una pensión del artículo 97 CC, que haya existido una pérdida de los costes de oportunidad, sino que es suficiente que se constate un desequilibrio en relación con el otro cónyuge y en relación con la situación anterior en el matrimonio, para que se conceda la pensión. La naturaleza indemnizatoria se deduce, en todo caso, del fundamento de la pensión, que se basa en la responsabilidad civil objetiva o sin culpa.

4.5.- Compensatoria

En realidad, se trata de una matización de la calificación de indemnizatoria y, por lo tanto, confiere esta naturaleza jurídica a la pensión. Su denominación deriva del precepto jurídico conforme al artículo 97 CC que la define como aquella que sirve para *compensar* el perjuicio que un cónyuge sufre a consecuencia de la ruptura matrimonial, utilizando el término compensar en lugar de indemnizar, pero con un objetivo común.

Para el Diccionario de la Real Academia compensar es «dar una cosa en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado». En otro sentido compensar es equilibrar.

La diferencia entre indemnizar y compensar reside únicamente en la extensión de la reparación. Indemnizar pretende dejar «indemne» al sujeto pasivo e «indemne» es «libre o exento de daño»: de todo daño. O, dicho de otra manera, en la indemnización el objetivo es neutralizar la totalidad del daño causado, con identidad, en la medida de lo posible, entre el perjuicio y su reparación. Por contra, compensar tiene un significado aritméticamente menos igualatorio, aunque su origen semántico sea el mismo.

4.6.- Mixta

4.6.1.- Alimenticia e indemnizatoria

La Audiencia Territorial de Barcelona, Sala 1.^a, en su resolución de 10 de abril de 1.987 subrayó este carácter híbrido, al considerar que: *“...la pensión no tiene una naturaleza ni alimentaria ni indemnizatoria, aunque se valoren circunstancias que tengan este carácter (entre otras, sentencias de esta misma Sala de 6 de mayo de 1985, 19 de junio de 1.986, 9 de diciembre de 1.986 y 21 de enero de 1.987), sino un carácter mixto o híbrido asistencial, resarcitorio y compensatorio, primando una u otra faceta en atención a las peculiares circunstancias concurrentes en cada caso concreto, según han venido sosteniendo numerosos autores en nuestro ordenamiento, mereciendo especial mención en el Derecho comparado, que se ha venido a mantener tal naturaleza mixta respecto del assegno per divorzio en la sentencia del Tribunal Constitucional Italiano de 10 de julio de 1.975”*.

4.6.2.- Indemnizatoria y asistencial

Para Aparicio Aruñón³⁶², se ha de diferenciar la naturaleza de la pensión según atienda a resarcir del pasado o lo haga con respecto al futuro: “La desigualdad peyorativa puede afectar al patrimonio, en cuyo caso la pensión tendrá carácter indemnizatorio; o afectar a las expectativas de futuro, en cuyo caso tendrá carácter asistencial.”

En conclusión, la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria es denominada en algunas resoluciones judiciales de la jurisprudencia menor, utilizando los términos indemnizatoria, compensatoria y reparadora como sinónimos.

La realidad es que la equidad justifica la obligación, la utilización de elementos dispares no económicos, de carácter moral, para su cuantificación; permite la sucesión en la deuda, con limitaciones en la legítima, proporcionando una nota de orden familiar, excediéndose de la conyugal.

³⁶² APARICIO AUÑÓN, Eusebio. “La pensión compensatoria”. Revista de Derecho de Familia, número 5, octubre 1.989. Páginas 40 y 42, nota 37.

La obligación del acreedor es la contribución del deber de mitigar el efecto del desequilibrio, mediante la búsqueda de los medios para adquirir una independencia económica; se produce la extinción por nuevo matrimonio o convivencia semejante a la conyugal, y evidencia la aplicabilidad de la culpa exclusiva del acreedor en la quiebra del matrimonio o en el desequilibrio económico, para exonerar de la obligación a la otra parte.

CAPÍTULO VII

DISTINCIÓN ENTRE LA PENSIÓN COMPENSATORIA Y OTRAS FIGURAS AFINES

La pension compensatoria guarda similitudes con otras figuras afines pero no coincidentes, haciendose necesario diferenciarla.

5.1.- Pensión de alimentos al cónyuge

A parte de la pensión compensatoria, también llamada pensión por desequilibrio, existen otras figuras afines, pero claramente diferenciadas como la pensión de alimentos.

La pensión de alimentos puede referirse a alimentos al cónyuge o a los hijos menores de edad e incluso a mayores de edad no emancipados en términos económicos. La pensión de alimentos al cónyuge tiende a la protección de las necesidades vitales de una persona, a diferencia de la pensión compensatoria³⁶³.

Así es definida por la STS de 10 de octubre de 2.008, en la que diferencia las dos figuras: *“La finalidad de la pensión compensatoria no es subvenir las necesidades del cónyuge, sino compensar razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio produzcan en uno de los cónyuges y así se ha dicho que el presupuesto esencial para que nazca el derecho a obtener la pensión estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de que gozaba cada uno antes y después de la ruptura. Se trata de un derecho que puede ser renunciado por quien sería su beneficiario.”*

Por lo tanto, la pensión por desequilibrio o pensión compensatoria es renunciable, y la pensión de alimentos al cónyuge es irrenunciable.

³⁶³ BELIÓ PASCUAL, Ana Clara. *“La Pensión Compensatoria”*. Tirant Lo Blanch. Valencia 2.013. Páginas 51 y ss.

Si la pensión compensatoria se regula en el artículo 97 CC, la pensión de alimentos entre cónyuges se regula en los artículos 142 y siguientes, el deber de socorro se regula en el artículo 68 CC³⁶⁴. Por lo tanto, son figuras claramente diferenciadas, que pueden coexistir, es decir, son figuras compatibles, si bien es cierto que si la pensión compensatoria nace cuando se produce la ruptura matrimonial, la pensión de alimentos al cónyuge se extingue cuando se produce el divorcio o la nulidad, pero no cuando se produce la separación legal pues subsiste el vínculo matrimonial; incluso si así se pactase por las partes podría mantenerse después del divorcio.

No obstante lo anteriormente expuesto, una vez que se ha producido el divorcio o la nulidad matrimonial no será posible que los ex cónyuges se reclamen pensión de alimentos, al haberse extinguido el vínculo legal que fundamenta esta obligación.

Para que nazca la pensión de alimentos al cónyuge es preciso acreditar la necesidad. Conforme al artículo 146 CC³⁶⁵; se han de acreditar los medios de quien los da y la necesidad de quien los recibe. Sin embargo para que nazca la pensión compensatoria, simplemente se ha de dar un desequilibrio, y la necesidad que si se contempla en el artículo 97 CC en su número 8º es sólo uno de los criterios para fijar la cuantía de la pensión compensatoria.

La STS de 19 de enero de 2.010, admite la compatibilidad de ambas figuras. Una vez se ha producido la ruptura matrimonial, no se produce automáticamente la disolución del vínculo; por lo tanto, ese periodo puede ser breve o más prolongado en el tiempo, en función de si el procedimiento se hace de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, ya que si se efectúa de mutuo acuerdo probablemente se realizara muy pronto en el tiempo, sin necesidad de solicitar la pensión de alimentos entre cónyuges, pactando de forma libre y por voluntad de las partes el establecimiento de una pensión compensatoria.

³⁶⁴ Art. 68 CC: “Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.

³⁶⁵ Art. 146 CC: “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”.

Sin embargo, cuando este acuerdo, que se plasma en la redacción, firma y ratificación en presencia judicial de un convenio regulador, no se produce ha de acreditarse el desequilibrio y la necesidad.

En defecto de pacto ha de ser solicitarse la pensión por el presunto acreedor de la pensión compensatoria, ya sea en las medidas previas, en el escrito de demanda, mediante reconvencción en la contestación a la demanda, o en el procedimiento de medidas paterno filiales, en tanto en cuanto recaiga una resolución judicial.

Dicha resolución judicial puede tardar en el tiempo en función del cúmulo de asuntos que se tramiten, o del posible colapso, que no es infrecuente en los Juzgados de Familia en España, se puede solicitar este llamado “socorro conyugal” por quien pretende su otorgamiento, siendo preciso acreditar la necesidad que invoca con las dificultades que conlleva la prueba de dichos extremos.

Es numerosa la jurisprudencia menor que declara la compatibilidad entre la pensión de alimentos entre cónyuges y la pensión compensatoria, al declarar, en síntesis que: *La pensión compensatoria, es pues, una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio.*

La diferencia fundamental entre los alimentos y la pensión compensatoria estriba en que ésta no sustituye el derecho de alimentos que se va a perder por la extinción del matrimonio por divorcio, y si no existió desequilibrio en el momento de la ruptura matrimonial no va a poder reclamarse pensión compensatoria en el divorcio.

Lo básico para que nazca la pensión compensatoria está en la existencia del desequilibrio que ha de darse en el momento de la ruptura matrimonial, no la necesidad de alimentos, la extinción del derecho de alimentos puede generar por sí mismo el derecho a obtener la pensión compensatoria.

Pero puede pactarse una pensión de alimentos y el futuro acreedor reservarse el derecho a reclamar la pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio, pudiendo serle concedida siempre que exista desequilibrio en el momento de la ruptura matrimonial.

La obligación de alimentos tiene un sentido amplio³⁶⁶, el Código Civil la denomina “alimentos entre parientes”, ya que es una obligación de carácter legal en la que se encuentran enumerados dentro del artículo 143 CC³⁶⁷ los cónyuges y los hijos como posibles sujetos a esta obligación no sólo en su condición de parientes sino por el conjunto de derechos y deberes propios de la institución matrimonial y paterno-filial, siendo deberes distintos y mas exigentes que el de meros alimentos que, en cierto modo, lo engloban y lo sustituyen³⁶⁸.

A pesar de su contenido alimenticio, en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la vida³⁶⁹, algunos autores se refieren a ellos como deberes de mantenimiento e incluso de asistencia e incluso como deudas alimenticias de régimen especial³⁷⁰.

Los alimentos derivados del matrimonio se basan en el deber de socorro mutuo entre cónyuges que impone el artículo 68 CC de atender cada uno de ellos a atender a las necesidades del otro. Mientras la pareja convive, tal deber se materializa a través de sus respectivas aportaciones a las cargas del matrimonio, a cuyo levantamiento están sujetos sus bienes. Por ello en tanto subsista la convivencia conyugal, carece de sentido hablar

³⁶⁶ Art. 142 CC: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”.

³⁶⁷ Art. 143 CC: “Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente: 1º.- Los cónyuges, 2º.- Los ascendientes y descendientes. Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderan en su caso a los que precisen para su educación”.

³⁶⁸ DELGADO ECHEVERRÍA, “*Comentario a los artículos 142 y siguientes del Código Civil*”. Comentario al Código Civil, Volumen I. Ministerio de Justicia. Madrid 1.991. Página 522.

³⁶⁹ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves. “*La obligación legal de alimentos entre parientes*”. Editorial La Ley. Edición 2.002. Página 45.

³⁷⁰ PEÑA BERNARDO DE QUIRÓS, “*Derecho de Familia*”. Universidad de Madrid. Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones. Madrid. 1.999. Página 627.

de necesidad individual de alguno de los esposos, pues la comunidad de vida que deriva del matrimonio implica un compromiso de asistencia mutua, un nivel de vida homogéneo en el hogar familiar, con independencia de sus respectivas capacidades económicas individuales.

Únicamente cuando se rompe la comunidad de vida se configura como una obligación independiente. En las situaciones de crisis matrimonial mientras el matrimonio continúe existiendo, el deber de socorro se mantiene, pero convertido, ya, en la estricta obligación de alimentos, así la obligación alimenticia actúa de forma complementaria para supuestos en los que la obligación de asistencia conyugal ha decaído³⁷¹.

Por último, y en cuanto a los alimentos en la liquidación de la sociedad de gananciales, conforme al artículo 1.408 CC³⁷² corresponde a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos, un derecho a ser alimentados de la masa común de los bienes, “mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber...”, este derecho no se configura como un derecho de alimentos entre parientes propiamente dicho, ya que sus reglas, en principio no les son aplicables³⁷³.

No se genera una auténtica relación obligatoria alimenticia entre dos partes y, ni siquiera, puede hablarse en puridad de un derecho de alimentos sobre una masa de bienes, sino simplemente de un derecho a pedir anticipos a cuenta de las cantidades detraídas en concepto de frutos y rentas de los bienes de los que son o van a ser propietarios. Cantidades que, en cualquier caso, habrán de ser restituidas en lo que excedan de lo que les hubiese correspondido en razón de frutos y rentas.

En los alimentos entre parientes, la obligación de alimentos produce sus efectos sin contraprestación alguna del alimentista; en los alimentos en

³⁷¹ LASARTE ALVAREZ, “*Principios de Derecho Civil*”. Tomo 6º, Derecho de Familia, 1ª Edición. Trivium, 1.997. Página 389.

³⁷² Art. 1.408 CC: “De la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos mientras se haga efectiva la liquidación del caudal inventariado y, hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajaran de éste en la parte que excedan de los que les hubieran correspondido en razón de frutos y rentas”.

³⁷³ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves. “*La obligación legal de alimentos entre parientes*”. La Ley, Actualidad, S.A. 2.002. Página 56.

la liquidación de la sociedad de gananciales, esta asignación es a cuenta de la futura adjudicación. Además, este derecho no parece presuponer el estado de necesidad del alimentista, pues el tenor literal del precepto no hace alusión a la necesidad.

5.2.- Cargas del matrimonio

Tampoco pueden confundirse las cargas del matrimonio con los alimentos entre parientes; entre uno y otro existen importantes diferencias que los configuran como instituciones distintas. Mientras que las cargas del matrimonio en cuanto a los presupuestos de su nacimiento, se derivan directamente de la condición de cónyuge, el derecho de alimentos requiere, además, que uno de ellos se encuentre en situación de necesidad. Las cargas del matrimonio se manifiestan en la fase de convivencia de los cónyuges, y los alimentos cuando tal convivencia se ha roto.

La pensión compensatoria no está incluida en las cargas del matrimonio y ello es debido a que no se pueden asimilar las circunstancias que concurren en el cónyuge acreedor de la pensión compensatoria, al ser la existencia de un desequilibrio la causa del nacimiento del derecho a la misma, ni a las necesidades vitales de la pensión de alimentos entre los cónyuges, ya que tienen distinta naturaleza.

El artículo 1.318 CC señala la posibilidad del nacimiento del derecho a la pensión compensatoria en base a la existencia de un desequilibrio imputable al que no cumpliera con el deber de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio:

“Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges incumpliera su deber de contribuir al levantamiento de estas cargas, el Juez, a instancia del otro, dictará las medidas cautelares que estime conveniente a fin de asegurar su cumplimiento y los anticipos necesarios o proveer a las necesidades futuras”.

El artículo 1.362 CC hace una enumeración de lo que se entiende por cargas familiares:

“Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas:

1.- El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia.

La alimentación y educación de los hijos de un solo de los cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por la sociedad de gananciales pero darán lugar a reintegro en el momento de la liquidación.

2.- La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes.

3.- La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.

4.- La explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge”.

En este sentido parecen claros los conceptos que se consideran como cargas familiares que se incluyen o deben incluirse en la sociedad de gananciales, no incluyéndose la pensión compensatoria en las mismas, ya que la separación o divorcio disuelven la sociedad de gananciales.

La cuestión que ha sido polémica es el pago de la hipoteca que grava la vivienda familiar, cuestión que ha influido de forma determinante en la fijación y la cuantía de la pensión compensatoria.

La STS de 28 de marzo de 2.011, con interés casacional, aclara de forma definitiva la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales al respecto en lo relativo al carácter que, tras la disolución de la sociedad de gananciales, ostenta el crédito hipotecario existente sobre la vivienda común y sienta la siguiente doctrina: *“El pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el artículo 1.362-2º CC y no constituye carga del matrimonio a los efectos de los artículos 90 y 91 CC”.*

Es decir, el pago de la hipoteca es una deuda de la sociedad de gananciales y no puede en ningún caso constituir una carga del matrimonio. La diferencia conceptual es clave para determinar que el pago de la hipoteca ha de hacerse por mitad e iguales partes y no en proporción a los recursos de cada uno de los ex cónyuges.

Por ello, con esta doctrina, ya no es posible que se permita al cónyuge con menos ingresos o menos capacidad adquisitiva pagar un porcentaje de hipoteca inferior al recogido en el crédito hipotecario y seguir

manteniendo sus mismos derechos de propiedad, con independencia de lo que hubiere pagado de hipoteca tras la separación o divorcio.

Por lo que, si finalmente uno de los cónyuges asumiera un pago que no le corresponde, tendría un derecho de crédito sobre el exceso de la cuota abonada y, en consecuencia, podría pedir el reintegro de dicha cantidad actualizada en el momento de la liquidación de la vivienda.

No obstante deben de distinguirse dos tipos de gastos que pueden afectar a la vivienda familiar:

1º) Los relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble destinado a vivienda familiar, que sí tienen la categoría de gastos familiares aun después de la disolución del matrimonio.

2º) El pago de las cuotas del préstamo que ha permitido que ambos cónyuges hayan accedido a la propiedad por mitad del local destinado a vivienda en tanto que bien ganancial.

Los copropietarios del inmueble deben de contribuir, de modo igualitario, a la cobertura económica de la carga de su copropiedad, de conformidad con lo que previene el artículo 393 CC³⁷⁴.

De lo expuesto se pueden extraer varias conclusiones:

1º) Debe de tratarse del domicilio conyugal y no de otro bien inmueble que hubieran podido adquirir los cónyuges vigente la sociedad de gananciales.

2º) No resulta de aplicación a otros gastos de conservación y mantenimiento del inmueble destinado a vivienda, los cuales sí mantienen la categoría de cargas o gastos familiares aún después de la disolución del matrimonio.

La repercusión es clara a la hora de establecer judicialmente la cuantía de la pensión compensatoria, ya que después de dicha sentencia dictada en interés casacional el cónyuge que tenga menos ingresos no podrá abonar menos del 50% del importe de la hipoteca, por lo que

³⁷⁴ Art. 393 CC: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad”.

probablemente tenga interés en solicitar mayor cuantía en concepto de pensión compensatoria para poder sufragar dicho gasto.

Si se estableciese la obligación del pago de la hipoteca en distinta cuantía y proporción en relación con el porcentaje de su titularidad como copropietario pro indiviso y cotitular de la sociedad de gananciales, el reconocimiento de ese abono en exceso sobre el crédito por parte del que haya abonado más, tendrá una repercusión directa en la liquidación de la sociedad de gananciales que se realice, repartiendo de forma proporcional a las aportaciones de los miembros de la sociedad de gananciales.

Finalmente, el abono de la hipoteca que grava el domicilio conyugal como deuda de la sociedad de gananciales y no como carga del matrimonio, será por partes iguales, y si uno de los cónyuges pagase un porcentaje superior al suscrito con la entidad bancaria de acuerdo con el grado de proporción a su propiedad, tendrá un derecho de crédito frente al otro por la diferencia abonada, el cual podrá hacer valer dentro de la liquidación que se efectúe.

5.3.- Indemnización prevista en el artículo 1.438 CC

Conforme al artículo 1.438 CC: *Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.*

La compensación que recoge este artículo no es la misma que la pensión compensatoria y resulta compatible con ésta. El derecho a la indemnización que se recoge en el artículo 1.438 CC estriba en que uno de los cónyuges haya contribuido a las cargas del matrimonio sólo con el trabajo de casa, con independencia de que el otro haya obtenido un incremento patrimonial o no.

La STS de 14 de julio de 2.011 sienta las bases para el otorgamiento de la indemnización prevista en el artículo 1.438 CC y establece la siguiente doctrina:

“Para que uno de los cónyuges tenga derecho a obtener la compensación establecida en el artículo 1.438 CC será necesario:

1º.- Que los cónyuges hayan pactado un régimen de separación de bienes.

2º.- Que haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Deben excluirse, por tanto, criterios basados en el enriquecimiento o el incremento patrimonial del otro cónyuge que no pueden tenerse en consideración cuando uno de ellos ha cumplido su obligación legal de contribuir con trabajo doméstico”.

En cuanto a la cuantificación el criterio que se mantiene por la jurisprudencia para fijar el importe de la indemnización sería el consistente en el sueldo que cobraría una tercera persona por realizar ese trabajo.

La sentencia señalada en primer lugar se remite al convenio, a los criterios fijados por la voluntad de las partes: *“Los cónyuges al pactar este régimen, pueden determinar los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de pagarla o por la voluntad de las partes...”*.

En segundo lugar, y para el supuesto de que las partes no hayan convenido ninguna cantidad y no exista ni pacto ni acuerdo al respecto, señala la sentencia: *“La cantidad a fijar será la resultante en función del sueldo que cobraría por realizar el trabajo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorrara por la falta de necesidad de contratar servicio doméstico ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar”.*

Belió Pascual³⁷⁵ sostiene que el criterio mantenido por el Tribunal Supremo para la cuantificación de la compensación no resulta del todo adecuado, ya que parte de lo que *cobraría por realizar el trabajo una tercera persona* y no valora la pérdida de la posible promoción profesional o de un empleo cualificado por el hecho de realizar ese trabajo doméstico; pero en cambio, si considera que resulta pertinente no hacer depender la compensación del incremento patrimonial del cónyuge deudor.

En definitiva, según la jurisprudencia la finalidad de la indemnización contemplada en el artículo 1.438 CC se basa de forma exclusiva en la valoración del trabajo doméstico realizado por uno de los

³⁷⁵ BELIO PASCUAL, Ana Clara. *“La pensión compensatoria”*. Editorial Tirant Lo Blanch. 2.013. Página 63.

cónyuges y su dedicación de forma exclusiva a dichas tareas domésticas, siendo éste el elemento generador del nacimiento del derecho a ser acreedor de la indemnización.

La compatibilidad entre el otorgamiento de la pensión compensatoria contemplada en el artículo 97 CC y el derecho a la indemnización contemplado en el artículo 1.438 CC es reconocida, ya que responden a presupuestos distintos: la pensión compensatoria se establece en consideración al desequilibrio que la separación o divorcio puede generar a uno de los cónyuges, y la indemnización del artículo 1.438 CC se establece en función de la dedicación a la familia vigente el régimen de separación de bienes.

Esta dedicación a la familia no es respecto del futuro sino que se refiere a la dedicación pasada a la familia estando vigente el régimen económico de separación de bienes, y hasta la extinción de dicho régimen económico, siendo por ello ambas figuras compatibles.

CAPÍTULO VIII

FUNDAMENTO, FINALIDAD Y FUNCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Con independencia de su naturaleza jurídica, en el examen de la pensión del artículo 97 CC, se han de analizar el fundamento, la finalidad de esta pensión, su función y objetivos, pues pueden ser varios.

Si bien pueden tener similitudes procedemos a distinguir los supuestos de matrimonios celebrados, ya sean solo de forma civil o canónica y los de parejas de hecho.

6.1.- Matrimonio

Es éste un marco en el que pueden coexistir finalidades alimenticias, -que pretenden atender a las necesidades del beneficiario-, de retribución de servicios prestados, posibilidad de un enriquecimiento injusto, intención de equilibrar patrimonios. Es una ayuda al cónyuge necesitado, con condiciones, así *sub conditione* de que no vuelva a casarse o a convivir maritalmente, cuya contrapartida *mortis causa* sería el legado de pensión regulado en el artículo 793 CC³⁷⁶ por el tiempo que el legatario permanezca soltero o viudo.

La doctrina es diversa en estas cuestiones, el mantenimiento por el beneficiario de la pensión, del *nivel de vida* que llevaba antes de la ruptura es una finalidad contemplada por doctrina.

Existen resoluciones de la jurisprudencia menor que tienen en cuenta las posibles pérdidas en su formación o preparación para el trabajo que el matrimonio ha podido representar para uno de los esposos, más comúnmente la mujer. En muchos casos ha abandonado los estudios o un puesto de trabajo, o ha renunciado a una promoción, para dedicarse con

³⁷⁶ Art. 793 CC: “La condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio se tendrá por no puesta, a menos que lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consorte o por los ascendientes o descendientes de éste”.

mayor intensidad a las labores del hogar, el cuidado de los hijos y la atención del otro consorte, con la consiguiente pérdida de expectativas.

En primer lugar se señala como objetivo de la pensión la sustitución de los deberes de asistencia y de socorro mutuos entre casados del artículo 69 CC.

Hay sentencias que subrayan como objetivo de la pensión, el consistente en colocar al cónyuge beneficiario en situación de potencial igualdad de oportunidades a las que habría tenido de no haber mediado el anterior vínculo matrimonial o en cuales no son las finalidades de la pensión compensatoria.

Se puede criticar, desde otra óptica, su carácter lucrativo y la calificación de parasitaria de la posición de algunos ex cónyuges, que viven de la pensión a cargo de una persona con la que ya no tiene lazos de clase alguna.

La celebración del negocio jurídico conyugal no supone algo equivalente (para uno, para el otro o para ambos cónyuges) a la suscripción de una póliza de seguro vitalicia, sólo se trata de paliar el desequilibrio durante el tiempo que se calcule preciso para que el desfavorecido pueda proporcionarse nuevos medios de vida, pues la pensión compensatoria nunca puede constituir una renta vitalicia, ni una contribución indefinida a la que se tenga derecho por razón de haber contraído matrimonio.

Por medio de la pensión compensatoria no se trata de reparar otros daños causados por un cónyuge a otro, cuya reclamación tiene un cauce y unos medios diferentes.

Por otra parte, es pacífica la jurisprudencia que considera que no es el propósito de la pensión igualar el patrimonio privativo de los cónyuges después de la separación o el divorcio o economías dispares.

Hay otra finalidad ligada a la pensión que no parece deducirse directamente del texto del precepto, sino de un concepto de equidad, que ha venido incorporándose lentamente a la jurisprudencia menor. Se trata de un propósito para fomentar en el acreedor la eliminación en el futuro

del desequilibrio determinante de la pensión, que da origen a la temporalidad.

Hay que tener en cuenta que si después de la separación o el divorcio, el cónyuge a cuyo favor se haya determinado una pensión compensatoria la puede perder, o incluso debe perderla, si desaparece el desequilibrio, y éste termina por acceder el beneficiario a un puesto de trabajo, dejaremos en manos del deudor el mantenimiento de la pensión.

Hay alguna sentencia que cita de modo negativo como objetivo de la pensión la necesidad de igualar los patrimonios privativos de ambos cónyuges, aunque sea para rechazarlo.

Una cosa es la finalidad y otra diferente, el fundamento o razón de ser de la pensión. Se ha de plantear si debe o no existir una compensación de un cónyuge en favor del otro como consecuencia del divorcio.

Del análisis de los fundamentos de la pensión compensatoria, cabe destacar los que a continuación se exponen

6.1.1.- La solidaridad post conyugal

La solidaridad post conyugal es un concepto ciertamente extraño, ya que en virtud del mismo se procede a extender la solidaridad del matrimonio más allá de sus propios límites temporales, especialmente cuando se ha terminado por causa habitualmente de enfrentamientos entre los cónyuges, lo que resulta ciertamente paradójico.

6.1.2.- Enriquecimiento injusto

La figura del enriquecimiento injusto es un concepto común en el derecho civil español. Ciertamente en el ámbito de la separación o divorcio sería más preciso hablar del empobrecimiento injusto, que es lo habitual, y ya que este principio unificaría todas las obligaciones que se contraen sin convenio, cuyo concepto es más amplio que el de enriquecimiento injusto.

El enriquecimiento injusto de una persona implica, por definición, el empobrecimiento injusto de otra, y una relación de causa a efecto entre ambos fenómenos. Pero puede haber también empobrecimientos injustos

sin contrapartida; o al menos donde no importe si ha habido o no un enriquecimiento simultáneo para alguien.

De cualquier forma, este empobrecimiento necesitará para justificar el derecho a una pensión a cargo de otro, el componente de injusticia que le califica y una razón que haga recaer en el otro cónyuge la obligación de compensar este empobrecimiento.

Este mismo principio básico del Derecho puede ser el fundamento de justamente lo contrario y convertirse en un óbice para el nacimiento del derecho a la pensión.

Si el cónyuge que sufre el desequilibrio por la separación o el divorcio, es el causante, incluso doloso, o más aún, delictivo, atentando contra la vida del otro, de la ruptura, su enriquecimiento a través de la compensación debería ser calificado de gravísimamente injusto, si bien es cierto que nuestro sistema de divorcio no contempla el divorcio sanción.

6.1.3.- Responsabilidad por daños

Las obligaciones, nacen, de acuerdo con el artículo 1.089 CC³⁷⁷, de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

En consecuencia, si la obligación de resarcir a través de la pensión compensatoria, tuviera su origen en un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, el matrimonio, se referiría a una responsabilidad contractual. Pero no es así en el artículo 97 CC, ya que no existe obligación conyugal alguna de equilibrar patrimonios durante la vigencia de la unión, lo cual no es obstáculo para que cualquiera daño, causado por un esposo al otro, en el que sea de aplicación el artículo 1.902 CC³⁷⁸, pueda ser objeto de una acción independiente, criterios que se han seguido para la imposición de la obligación de compensar, como los siguientes:

³⁷⁷ Art. 1.089 CC: “Los contratos nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.

³⁷⁸ Art. 1.902 CC: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

A) Imponer la obligación de compensar al causante físico del daño o cambio peyorativo.

B) Imponer la obligación al culpable del daño (responsabilidad por culpa).

C) Imponer la obligación a quien se benefició del perjuicio ajeno, pero sólo hasta donde se benefició (enriquecimiento injusto).

D) Imponer la obligación a quien se benefició del riesgo (responsabilidad por riesgo).

E) Imponer la obligación, por motivos de equidad, a quien estando unido con el perjudicado por vínculos familiares o consorciales, no ha sufrido daño o ha resultado menos perjudicado como consecuencia de un cambio fortuito (compensación propiamente dicha).

Estas indemnizaciones de equidad pertenecen a la misma clase de obligaciones que la pensión compensatoria. Estamos, pues, ante un supuesto de responsabilidad objetiva. Pero ésta no tiene su justificación en el riesgo; con este principio de responsabilidad objetiva se pretende reformar el concepto de culpa, con repercusiones sobre la imputabilidad y la responsabilidad individual, en los que está presente también el elemento de peligrosidad.

Se ha ampliado este criterio de la responsabilidad objetiva teniendo en cuenta otros factores, diferentes del riesgo, como es la protección de la confianza, la justicia distributiva y otras semejantes de matiz social. Así, se han incorporado a esta determinación de responsabilidad, sectores como el de las leyes protectoras de consumidores y usuarios, las relativas a productos defectuosos o la prestación de servicios alimenticios, farmacéuticos, sanitarios y para niños.

En suma, se trata de una fundamentación basada en la equidad. De esta forma, la imputación de la responsabilidad a quien produce el daño no es absoluta.

Así, en la responsabilidad objetiva, la exclusiva culpa del paciente del daño exonera al agente de responsabilidad, porque es esencial a los efectos del posible nacimiento de la pensión compensatoria, y fundamental a los efectos de su proyección.

Resulta lógico que, al considerar la responsabilidad del productor de los daños, en determinados casos, como objetiva, con independencia de su culpa o de cualquier otro requisito más, tenga que proceder a abonar una indemnización. Por otra parte, hay un factor que debe limitar estas consecuencias para el agente. Se trata de aquellos casos en que la culpa corresponde exclusivamente al que sufre el daño.

Si se intenta analizar los fundamentos posibles de la pensión compensatoria, se ha de concluir que la única base o justificación de la pensión compensatoria de la separación y el divorcio matrimonial resulta de la responsabilidad objetiva, informada por un principio de equidad.

En la obligación de indemnizar, se han de analizar los elementos concurrentes:

a) Daño

Se ha dicho que el fundamento de esta pensión compensatoria es objetivo, basado en la diferencia del nivel de vida de los cónyuges en relación al status matrimonial". Se trata de un resarcimiento por la concurrencia de un daño objetivo producido por la ruptura, pero la pensión compensatoria no tiene la naturaleza de la responsabilidad civil, se trata de una indemnización en el sentido estricto del término, puesto que el daño objetivo a resarcir viene caracterizado por consistir en la pérdida de expectativas de todo tipo que pertenecían al propio estatuto del matrimonio, y que desaparecen como consecuencia del divorcio.

En realidad, el daño lo ha concretado la Ley en el artículo 97 CC, en el desequilibrio, sea éste lo que sea. Existe, pues, un daño que es causado por la separación o el divorcio: el desequilibrio, si bien no ha de equipararse de forma idéntica el concepto de daño con el concepto de desequilibrio, que además en la pensión compensatoria ha de ser un desequilibrio económico lo que no ocurre en el daño.

b) Relación de causa a efecto

En lo que respecta a la relación de causa a efecto, es evidente que en cada caso particular habrá de constatarse la realidad de que ese desequilibrio, o daño, haya sido producido directamente por la separación o el divorcio y no por cualquier otro hecho o causa, quizá concurrente en el

tiempo. Tiene que ser la separación o el divorcio el que produce directa y efectivamente el desequilibrio, de forma que si no hubiera tal ruptura, el desequilibrio no se produciría.

c) Imputación

Es en la imputación de la responsabilidad donde se debe analizar, la causa del daño por el desequilibrio no viene producido por la acción de uno de la que el otro es sujeto pasivo, sino por la separación o el divorcio.

Así la pensión compensatoria no puede descansar en la culpa, ya que en la determinación del derecho a la pensión del artículo 97 CC debe prescindirse del elemento culpa, por parte de ninguno de los cónyuges.

La realidad es que el fundamento de la pensión compensatoria debe ser la equidad, para todos los supuestos, tanto en los supuestos en que no exista un convenio entre los cónyuges, ni acción de ninguna clase dolosa, ni culposa, por parte del deudor, como en los demás casos.

La equidad aparece recogida en el artículo 3 CC³⁷⁹, según la cual las normas han de interpretarse según el sentido propio de sus palabras, y la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas.

Otro tanto se puede decir de la sucesión *mortis causa* en la obligación y su vinculación a la legítima de los herederos del deudor, que resulta antagónica con la compensación de un daño, padecido y medido en un momento determinado.

La modificación por esta causa o por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, sólo puede explicarse con normas o criterios de equidad.

La equidad puede ser la justificación de que en el artículo 97 CC se regule la compensación de un desequilibrio económico por medio de una obligación pecuniaria y que a la hora de cuantificar la equivalencia se

³⁷⁹ Art. 3 CC: "1. Las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2.- La equidad habrá de ponderarse en la aplicación e las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita".

valoren factores tan poco congruentes con los económicos como la edad y el estado de salud (2ª), la dedicación pasada y futura a la familia (4ª), la colaboración prestada (5ª) o la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal (6ª). Factores que pueden ser tenidos en cuenta pero que difieren del criterio del desequilibrio económico y sin embargo, influyen en el momento de proceder a la cuantificación de la pensión compensatoria.

Además de que el fundamento de la pensión compensatoria pueda descansar en el criterio de la equidad, como justicia aplicada al caso concreto, existen otros principios que pueden aplicarse incluso corregir el principio de equidad, como el principio de igualdad, el deber de trabajar, el régimen económico conyugal.

6.2.- Parejas de hecho

El régimen legal de las parejas de hecho se puede deducir de la doctrina sentada en la STC 93/2.013 de 23 de abril para las Comunidades con Derecho civil propio. Seguidamente destacamos los aspectos más relevantes de esta resolución judicial.

Las Comunidades Autónomas pueden legislar sobre las uniones no matrimoniales toda vez que éstas son una realidad distinta del matrimonio y, por lo tanto, no están protegidas por la reserva competencial a favor del Estado establecida en el artículo 149.1.8ª CE³⁸⁰ que le otorga la exclusividad de la regulación sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio.

Por el contrario, corresponde al Estado determinar cuál es la ley personal aplicable en los conflictos interregionales derivados de una hipotética concurrencia de legislaciones de distintas Comunidades Autónomas³⁸¹. Por lo tanto las Comunidades Autónomas no podrán definir

³⁸⁰ Art. 149.1.8ª CE: “Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí, donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”.

³⁸¹ Artículo 16 CC: “1.- Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV con las siguientes particularidades: 1ª Será ley personal la

el ámbito de su normativa en función de la ley personal de uno solo de los miembros de la pareja.

La legislación sobre parejas de hecho no puede imponer un régimen jurídico imperativo sino eminentemente dispositivo en aras a respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los miembros de la unión no matrimonial contenido en el artículo 10.1 CE³⁸². Es por ello que la operatividad de las normas se debe condicionar a la previa aceptación voluntaria por ambos miembros de la pareja.

Los miembros de la pareja pueden regular libremente su relación sin necesidad de respetar los derechos mínimos establecidos en la norma, a excepción de los derechos fundamentales. Podrá, por lo tanto, pactarse la constitución temporal de la pareja y someterse a condición así como las consecuencias de la ruptura de la unión.

En defecto de pacto no se puede atribuir a los miembros de la pareja ningún tipo de obligación económica de contribución a los gastos comunes.

En el caso de cese de la convivencia no se puede establecer el derecho a una compensación económica para el miembro perjudicado con la relación. En algunos de estos casos se podrán aplicar las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto conforme a lo preceptuado en el artículo 1.255 CC³⁸³.

La responsabilidad patrimonial de los miembros de la pareja frente a terceros no será, en principio, solidaria sino que seguirá el régimen que las normas civiles tienen establecido al efecto a no ser que estos pacten lo

determinada por la vecindad civil. 2ª No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1,2 y 3 del artículo 12 sobre calificación, remisión y orden público”.

³⁸² Artículo 10-1 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz social”.

³⁸³ Artículo 1.255 CC: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público”.

contrario y establezcan un régimen solidario de responsabilidad conforme a lo preceptuado en el artículo 1.137 CC³⁸⁴.

Los miembros de la pareja de hecho podrán acordar conjuntamente que sus relaciones se rijan por los mismos términos que las parejas unidas en matrimonio, pactandose en consecuencia el cumplimiento de obligaciones si se produce su ruptura.

La norma legal podrá atribuir determinadas consecuencias jurídicas a los miembros de las uniones de hecho, en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos propios del personal al servicio de las Administraciones públicas. Su disfrute dependerá en todo caso de su voluntad de acogerse o no a la previsión legal.

Los derechos sucesorios que se les reconozcan a las uniones de hecho deben tener un carácter dispositivo, por lo que su reconocimiento y aplicación dependerá de la voluntad de los miembros de la pareja.

A efectos fiscales los miembros de la unión de hecho no podrán ser considerados cónyuges a no ser que opten voluntariamente por esa opción.

La STC 81/2.013, de 11 de abril, ha venido a negar a las Comunidades que carecen de un Derecho Civil propio, la posibilidad de legislar sobre las relaciones entre particulares por ser encuadrables en una materia propia de la legislación civil sobre la que el Estado ostenta, conforme al primer inciso del artículo 149.1-8ª CE, la competencia exclusiva. No obstante sí les permite la regulación de registros de uniones de hecho al considerar que estos no tienen carácter civil, pues no inciden en el ámbito de las relaciones personales y patrimoniales de los integrantes de la unión de hecho, sino que simplemente tienen un carácter meramente administrativo que se limita a publicitar la existencia de la previa unión de hecho a fin de atribuirles determinada eficacia respecto a la legislación sobre parejas de hecho de la Comunidad Autónoma.

³⁸⁴ Artículo 1.137 CC: La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o mas deudores en una sola obligación no implica que cada uno de ellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar integramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria”.

En esta materia las consecuencias económicas que se derivan de la ruptura de la pareja de hecho y en concreto el derecho a una compensación que puede tener el conviviente perjudicado patrimonialmente por la relación, la STC 81/2.013, de 11 de abril, ha anulado la posibilidad de que los miembros de la unión de hecho pudieran establecer mediante pacto compensaciones económicas tras el cese de la convivencia. La STC 93/2.013, de 23 de abril, ha anulado la posibilidad de reclamar una pensión periódica en el caso de que la convivencia hubiera disminuido la capacidad del solicitante de obtener ingresos. Así, la posibilidad prevista que permitía reclamar una compensación económica en el caso de que durante la convivencia se hubiera generado una situación de desigualdad entre el patrimonio de los convivientes que implicara un enriquecimiento injusto a favor de uno de ellos.

Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la profusa legislación de las Comunidades Autónomas, han tratado el problema de los efectos patrimoniales que pueden darse tras la ruptura de la convivencia, ofreciendo soluciones muy distintas entre sí.

La solución a los problemas de índole económica y patrimonial que se plantean tras la ruptura de la pareja de hecho no ha sido pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, ni tan siquiera en las distintas regulaciones que las Comunidades Autónomas han llevado a cabo.

En lo que se refiere a la doctrina sí ha venido existiendo un acuerdo general en considerar que la unión extramatrimonial no es equivalente al matrimonio y, por tanto, no son aplicables automáticamente las normas matrimoniales para resolver este tipo de cuestiones. También se ha venido admitiendo que las partes puedan establecer pactos para la aplicación de las normas de los regímenes económicos matrimoniales, de las comunidades de bienes o de las sociedades, a sus relaciones durante la convivencia, normas que tendrán una influencia determinante al finalizar la relación.

No obstante empieza a haber diferencias cuando un sector de la doctrina admite que, a falta de un pacto expreso, puede darse la existencia de un pacto tácito entre los convivientes, una voluntad de formar un patrimonio común y que ello pueda conducir, tras la ruptura, a la adjudicación a uno de ellos de una parte de los bienes adquiridos por el otro durante la convivencia.

Así mismo existen divergencias en cuanto a la fundamentación jurídica que se le debe otorgar a la compensación económica que pueda recibir el conviviente que resulte perjudicado patrimonialmente. A tal efecto se dan tres soluciones distintas:

- La primera, basada en la teoría del enriquecimiento injusto.
- La segunda, que opta por la aplicación del principio general de «protección del conviviente perjudicado por la situación de hecho».
- La tercera postura se decanta por la aplicación analógica del artículo 97 CC.

Además, las Comunidades Autónomas están procediendo a la regulación de forma diferenciada cada una de ellas sobre las uniones extramatrimoniales y, en concreto, sobre las consecuencias patrimoniales que se deben derivar tras la ruptura de la pareja.

Se dan regulaciones diferentes en función de las Comunidades Autónomas que no cuentan con Derecho civil propio, las cuales han establecido en sus regulaciones que la compensación patrimonial entre los miembros de la pareja puede derivar exclusivamente del acuerdo al que estas lleguen (Andalucía, Asturias, Canarias, Madrid y Valencia).

Mientras que las que poseen un Derecho civil foral o especial han establecido, en ausencia de pacto, el derecho a obtener una compensación económica en los casos en los que la convivencia haya producido un desequilibrio económico entre los miembros de la pareja o una pensión periódica cuando se cumplen los requisitos legalmente establecidos que generalmente consisten en que el conviviente solicitante la necesite para atender a su sustento, cuando la convivencia haya disminuido su capacidad de obtener ingresos o cuando el cuidado de los hijos comunes a su cargo le impida desarrollar una actividad laboral (Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco). Aunque la Comunidad Autónoma de Extremadura no cuenta con Derecho civil propio ha optado por esta segunda opción.

El concepto que hoy se tiene de la unión extramatrimonial no se refleja en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma clara. En los años noventa se modificó la argumentación jurídica anterior sobre la división de patrimonios en cuotas iguales, proclamando que ante una situación de desequilibrio patrimonial producida durante la convivencia

que generó un perjuicio que debía ser compensado, para lo que se utilizó la teoría del enriquecimiento injusto.

Posteriormente se fueron alternando ambas soluciones hasta que a finales de los años noventa se argumentó la reparación del daño en base al “Principio General del Derecho de protección del conviviente perjudicado”, deducido por el Tribunal Supremo de normas constitucionales (artículo 10 CE, principio de dignidad de la persona; artículo 14 CE, principio de igualdad³⁸⁵; artículo 39 CE, principio de protección a la familia³⁸⁶; artículo 96 CC, normas de derecho privado y de las propias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Más tarde, en el año 2.001, se introdujo una nueva opción consistente en la aplicación analógica del artículo 97 CC, apelando a la necesidad jurídica de compensar económicamente al conviviente en peor situación económica, con causa en la ruptura de la convivencia.

Existen diferentes situaciones de comunidad sobre los bienes:

1º) El primer tipo de comunidad se da cuando una serie de bienes que corresponden a los dos miembros de la unión y la comunidad tiene una fórmula societaria que se contempla en el artículo 1.669 CC³⁸⁷ como sociedad irregular y en la que los bienes que integran su sustrato constituyen una comunidad de bienes cuyos titulares son los socios.

³⁸⁵ Art. 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

³⁸⁶ Art. 39 CE: 1.- “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2.- Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3.- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad, y en los demás casos que legalmente proceda. 4.- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

³⁸⁷ Art. 1.669 CC: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedad se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes”.

2º) El segundo tipo de comunidad es la que se contempla en los artículos 392 y siguientes del CC³⁸⁸; es la que surge como consecuencia de la adquisición conjunta de unos bienes o derechos. Puede haber adquisición de un bien por uno solo de los convivientes, con aportación del otro, debiendo en este caso determinarse por datos objetivos:

a) Si lo aportado por uno u otro, o por ambos, procede de bienes comunes (dinero depositado en una cuenta corriente común) o propios, pero aportados con la intención de participar en la titularidad del bien, en cuyo caso la existencia de la comunidad no ofrece duda alguna.

b) Si sólo se dá una aportación, pero sin intención de participar en la titularidad, no se estaría ante una comunidad sino ante una situación de un crédito personal a favor del aportante a fin de evitar el enriquecimiento injusto por parte del adquirente. También cabe que, sin aportación de dinero u otros bienes, colabore uno de los convivientes en la obtención de incrementos patrimoniales, circunstancia que tampoco supone el nacimiento de una comunidad sino que hace surgir una acción de reclamación de cantidad por la prestación de servicios.

3º) El tercer tipo de comunidad es la convencional surgida de un contrato por virtud del cual dos o más personas se obligan a poner bajo común titularidad unos bienes que le pertenecen con anterioridad, que adquieren en ese momento o que van a adquirir con posterioridad. Se da este tipo de comunidad en las uniones extramatrimoniales cuando mediante pactos expresos o tácitos los convivientes manifiestan su voluntad inequívoca de hacer comunes todos o alguno de los bienes adquiridos durante la convivencia.

En el momento de la ruptura, al finalizar la convivencia *more uxorio*, procede disolver, liquidar y adjudicar los bienes, debiendo analizarse si se produce una situación de desequilibrio patrimonial que al término de aquella genera un perjuicio para una de las partes, que debe ser compensado.

Para la aplicación de la compensación prevista en el artículo 97 CC es necesario que la ruptura produzca un desequilibrio económico en uno de

³⁸⁸ Art. 392 CC: "Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por la prescripciones de este título".

los cónyuges en comparación con el otro y, además, que esto vaya acompañado de un empeoramiento de su situación económica respecto a la que gozaba antes del cese de la convivencia. Es decir, habrá desequilibrio económico cuando, a partir de la ruptura, uno de los cónyuges no disfrute del nivel de vida que tenía durante la convivencia conyugal y que, además, sea inferior al que va a tener el otro cónyuge desde ese momento.

Por el contrario, en el enriquecimiento injusto no se tiene en cuenta la situación en la que la ruptura deja al conviviente perjudicado, sino el desequilibrio producido durante la vida en común en el que el incremento patrimonial experimentado por una de las partes tiene su causa en el empobrecimiento correlativo de la otra. Habrá que tener en consideración las distintas magnitudes de aportaciones, ahorro, costes etc. para llegar a la liquidación de las cuantías que representen el enriquecimiento y el empobrecimiento de cada una de las partes y, posteriormente, concretar el nexo causal que determine que el primero se produjo a costa del segundo.

Por su parte, la aplicación del principio general del derecho de protección del conviviente perjudicado por la situación de hecho, también supone el cumplimiento de unos requisitos materiales distintos de los dos anteriores.

Para la aplicación de este principio no es necesario que exista empobrecimiento de una de las partes, ni se debe tener en cuenta si alguno de los convivientes ha efectuado aportaciones económicas para el mantenimiento de la unión; basta con que durante la convivencia se haya producido un aumento patrimonial en el que no participe el miembro de la pareja que estuvo al cuidado del hogar y de los hijos. Las diferencias entre el enriquecimiento sin causa y con la compensación del artículo 97 CC son claras.

En las situaciones en las que se da la existencia de una comunidad de bienes entre los convivientes, se debe de proceder al reconocimiento de una cuota de participación en dicha comunidad, seguido de la liquidación de la misma y la adjudicación de los bienes a los comuneros.

Por el contrario, en los casos en los que exista un perjuicio para uno de los miembros de la pareja la respuesta debe ser el reconocimiento de su derecho a una compensación económica, su liquidación y pago. Incluso

pueden existir supuestos de hecho en los que se den ambas situaciones simultáneamente.

En el enriquecimiento injusto, la consecuencia jurídica será la liquidación y pago al conviviente perjudicado del empobrecimiento sufrido durante la convivencia. Para el cálculo de este empobrecimiento hay que computar distintas magnitudes que pueden tener signo negativo o positivo en los miembros de la pareja.

Así, entre las magnitudes de signo negativo estarán las aportaciones económicas hechas a la comunidad de vida, el trabajo personal realizado igualmente a favor de esa comunidad, así como la pérdida de oportunidad sufrida por quien dedicó su tiempo al cuidado del hogar y de los hijos en perjuicio de su promoción profesional.

Por el contrario, con signo positivo se computarán para cada conviviente los incrementos de patrimonio experimentados durante la unión y la promoción personal y profesional adquirida durante este tiempo por el desarrollo de una actividad empresarial o laboral.

El Tribunal Supremo ha establecido que, tras la ruptura de la pareja, serán de aplicación los pactos que las partes tengan por conveniente y, en su defecto, en determinados supuestos, entrarán en juego las reglas generales de responsabilidad por enriquecimiento injusto que existen en nuestro ordenamiento.

Con esta postura el Tribunal se está inclinando por un modelo de regulación privada o contractual de la unión extramatrimonial según el cual, de manera general, no se pueden imponer a la pareja obligaciones que no hayan sido convenidas de mutuo acuerdo, aunque sí puedan existir puntualmente algunas normas en el ordenamiento que establezcan determinados límites a esta autonomía privada.

Este modelo se fundamenta en la decisión libre de los convivientes de mantener una relación en común, no necesariamente formalizada jurídicamente, que, como regla de principio, excluye el estatus jurídico imperativo de derechos y obligaciones característicos de la institución matrimonial y encuentra su apoyo constitucional en el derecho al libre

desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 10.1 CE³⁸⁹ así como en el derecho a la intimidad personal del artículo 18.1 CE³⁹⁰.

La teoría del enriquecimiento es una creación jurisprudencial que ha construido la figura como una atribución patrimonial sin causa y que da lugar a la obligación de reparar el perjuicio si se concurren los siguientes requisitos:

a) Un enriquecimiento por parte de una persona, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo.

b) Un empobrecimiento de otra persona, como consecuencia de lo anterior, constituido por un daño positivo o por un lucro cesante.

c) La existencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio del derecho, o la inexistencia de una causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición legal en este sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico, válido y eficaz.

La teoría del enriquecimiento injusto se regula en el artículo 1.901 CC³⁹¹. Su naturaleza jurídica se corresponde con la de ser un principio general del derecho y una institución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico aplicable como fuente subsidiaria y recogida en abundantes preceptos legales aunque de forma inconexa y sin verdadera y propia sistematización generalizada. Para que concurra el enriquecimiento injusto no basta con invocarlo a modo de una regla general y abstracta sino que es

³⁸⁹ Art. 10 CE: “1.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

³⁹⁰ Art. 18 CE: “1.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2.- El domicilio familiar es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

³⁹¹ Art. 1.901 CC: “ Se presume que hubo error en el pago cuando se entregó cosa que nunca se debió o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pida la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por otra causa justa”.

preciso demostrar y justificar en cada caso la procedencia concreta de la acción de enriquecimiento, en relación con las particularidades que presente el respectivo desplazamiento patrimonial y con los elementos y requisitos que ha de reunir la noción del enriquecimiento sin causa para ser un postulado de equidad y justicia.

Se puede distinguir el enriquecimiento injusto con el enriquecimiento sin causa, el primero es un patrimonio que se haya enriquecido a costa de otro sin que el enriquecimiento responda a un fundamento jurídico susceptible de justificarlo suficientemente conforme al propio ordenamiento jurídico, el segundo consiste en que, a pesar de existir ese fundamento jurídico se alcancen resultados contrarios a la justicia, ya que en este segundo caso debe primar el principio de seguridad jurídica.

Existen posturas críticas a esta opción argumentando que las parejas de hecho son una forma de familia protegida por el artículo 39.1 CE³⁹², lo que debe permitir al legislador dictar normas orientadas a proteger a sus miembros sin que ello infrinja necesariamente el libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 CE. Concretamente se propugna el establecimiento de un modelo de regulación que prevea la posibilidad de exclusión voluntaria de la ley aplicable por parte de los miembros de la pareja y que por lo tanto sería respetuoso con la autonomía de la voluntad de la pareja y con el libre desarrollo de su personalidad toda vez que les permite optar por quedar al margen de toda regulación.

Teniendo en cuenta que hoy en España el matrimonio es una institución abierta también a las parejas del mismo sexo y que se puede instar su disolución en cualquier momento sin necesidad de alegar causa alguna, es evidente que cuando los miembros de la unión extramatrimonial inician su convivencia, están optando voluntariamente por un estatus muy concreto que conlleva la intención de quedar totalmente excluidos del ordenamiento que regula el matrimonio.

³⁹² Art. 39.1 CE: “1.- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2.- Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3.- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad, y en los demás casos que legalmente proceda. 4.- Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

La labor desarrollada por las Comunidades Autónomas en sus regulaciones en un intento de proteger a la familia que surge de la unión extramatrimonial, no hace sino violentar ese estatus escogido libremente por ambos miembros de la pareja. Además, como familia, la pareja de hecho no queda desprotegida toda vez que le son aplicables las normas y principios generales del ordenamiento, en el que el posible perjuicio causado a uno de los miembros durante la convivencia y puesto de manifiesto con la ruptura, se puede ver amparado por la aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto.

Durante varias décadas en el Derecho español se consideró que los pactos celebrados entre los convivientes no casados eran nulos de pleno derecho pues se consideraron contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Solo se consideraban válidos esos pactos en el caso de que las prestaciones tuvieran por objeto compensar los perjuicios sufridos por la mujer como consecuencia de la seducción del hombre para mantener relaciones amorosas fuera el matrimonio, pues se consideraban realizadas en cumplimiento de un deber moral o de conciencia y jurídicamente exigibles por incardinarlas dentro de la categoría de las obligaciones morales.

En la STC 93/2.013, de 23 de abril, el Tribunal Constitucional se pronuncia expresamente sobre la controversia y admite la validez plena de los pactos que los miembros de la unión tengan a bien establecer, no solo ya para regular sus relaciones patrimoniales sino también para aquéllas que tengan un carácter personal.

Respecto a los pactos de contenido personal, concretamente respecto a las obligaciones recíprocas de respeto, socorro y ayuda mutua, convivencia y fidelidad que los artículos 67³⁹³ y 68 CC³⁹⁴ establecen para los cónyuges, se ha señalado que resulta incoercible un pacto relativo al mantenimiento de la fidelidad entre los convivientes o a la prestación de socorro y ayuda mutua. Su incumplimiento no podría ir más allá de un reproche moral o ético que no tendría consecuencia jurídica alguna por la propia naturaleza de la pareja de hecho.

³⁹³ Art. 67 CC: "Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia".

³⁹⁴ Art. 68 CC: "Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartirlas responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo".

En comparación con el artículo 97 CC, el enriquecimiento injusto puede constituir una mejor opción por varias razones:

1º) En primer lugar, como ha señalado el Tribunal Constitucional, por la incoherencia que supone el aplicar un régimen jurídico propio del matrimonio a una realidad que nada tiene que ver con el mismo y cuyos protagonistas quisieron precisamente eludir.

2º) En segundo lugar, porque el requisito de la disminución del nivel de vida que se exige en el artículo 97 CC para uno de los cónyuges y que además tiene que ser inferior al que goza el otro, no se ajusta en absoluto en términos de justicia material a la naturaleza de la unión de hecho. El nivel de vida que se va tener con posterioridad a la ruptura no se puede poner en relación con el que se mantuvo durante la convivencia, como establece el artículo 97 CC, entre dos personas que optaron por una relación carente en absoluto de vínculo y basada esencialmente en la libertad en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, es justo que si durante la convivencia se ha producido algún tipo de desequilibrio patrimonial, se compense tal y como prevé la aplicación del enriquecimiento injusto.

3º) En tercer lugar, respecto a las circunstancias a tener en cuenta para determinar la cuantía concreta a pagar al perjudicado, existen varios parámetros en el artículo 97 CC, como son las relativas a la edad y el estado de salud de los miembros de la pareja, el caudal y medios económicos y las necesidades de cada uno, que tienen en cuenta la situación posterior a la ruptura. Sin embargo, en el enriquecimiento injusto la determinación de dicha cuantía viene dada únicamente por la comparación de magnitudes que se pusieron de manifiesto durante la convivencia, que es el periodo que realmente contemplaron los miembros de la pareja cuando iniciaron su comunidad de vida.

En relación al principio de protección del conviviente perjudicado por la relación, hay que decir que tampoco éste se presenta como una solución más adecuada y equitativa que el enriquecimiento injusto. Su aplicación depende únicamente de que durante la convivencia se haya producido un aumento patrimonial en el que no participe el miembro de la pareja que estuvo al cuidado del hogar y de los hijos. No se exige un empobrecimiento que tenga su causa en el correlativo enriquecimiento del otro miembro de la pareja, y es manifiesto que con estos requisitos se

pueden dar situaciones verdaderamente injustas toda vez que no se tienen en cuenta las aportaciones económicas que la otra parte pueda haber aportado a la comunidad.

En el caso de una pareja en la que uno de los miembros lleva a cabo una actividad económica con abundantes beneficios mientras que el otro nunca ha desarrollado una actividad laboral ni profesional, ni siquiera antes de iniciar la convivencia, dedicándose exclusivamente al cuidado de los hijos pues las tareas del hogar eran realizadas por personal contratado de servicio doméstico sin dedicación del cónyuge. El elevado nivel de vida familiar hace que durante la convivencia el titular del negocio haya aportado importantes cantidades al mantenimiento del hogar. Al finalizar la convivencia, y a los efectos de una posible compensación, habrá que computar, por una parte, el más que probable enriquecimiento del titular del negocio, y por otra, el trabajo desarrollado en el cuidado de los hijos y del hogar por el otro conviviente, tal y como propugna el Tribunal Supremo cuando aplica este principio general del derecho.

No obstante, será justo tener también en cuenta las cantidades aportadas por aquél para el mantenimiento del hogar que, dadas las características apuntadas, puede suponer una importante cuantía, y que, sin embargo, no serían tenidas en cuenta si se aplica el referido principio general.

En contra de esta postura se ha manifestado cierta doctrina que considera inapropiada la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto a las relaciones familiares argumentando que las normas o principios generales que rigen relaciones entre extraños no se adaptan fácilmente a una realidad tan personal y compleja como es la familia. Al respecto, estando excluidas expresamente de este ámbito las relaciones paterno-filiales que sí revisten una complejidad mayor por los intereses que deben protegerse y a las que se les aplica la normativa general de filiación, el resto de relaciones entre los convivientes queda suficientemente amparadas por las normas del enriquecimiento injusto, con un grado de equidad y justicia superior al resto de alternativas utilizadas.

Cuando los miembros de una pareja de hecho litigan tras su ruptura en reclamación de una compensación patrimonial, los jueces y tribunales de nuestro país vienen solucionando el problema hasta con cuatro

argumentaciones jurídicas distintas que pueden dar lugar a otras cuatro resoluciones de consecuencias diferentes en el litigio planteado. La situación de inseguridad jurídica que esta circunstancia ocasiona se hace insostenible, produciéndose una violación manifiesta del artículo 9.3 CE³⁹⁵ que está causando irreparables agravios comparativos entre los ciudadanos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional 81/2.013 y 93/2.013 han venido a aclarar importantes controversias que se venían produciendo en la legislación autonómica que hasta el momento ha regulado las relaciones de las uniones extramatrimoniales, no obstante, con respecto al problema concreto de la compensación patrimonial tras la ruptura de la convivencia no se ha producido un pronunciamiento determinante que acabe con la problemática apuntada.

El rechazo definitivo de la aplicación analógica del artículo 97 CC que se puede extraer de los referidos pronunciamientos judiciales, no nos conduce a una solución definitiva toda vez que aún son varias las opciones que los tribunales pueden utilizar para resolver los litigios siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Otros autores también señalan como necesaria la regulación de aspectos como su constitución, sus efectos personales y patrimoniales, así como la extinción de las mismas. Se deberían establecer de forma clara los efectos patrimoniales de la ruptura entre los convivientes con sujeción a la aplicación de los principios de la doctrina del enriquecimiento injusto. Paralelamente los Tribunales podrían seguir reconociendo la existencia de comunidades de bienes o de sociedades irregulares entre los convivientes cuyo patrimonio debe ser liquidado y adjudicado a estos, toda vez que ambas soluciones no son incompatibles y pueden concurrir en un mismo supuesto de hecho.

³⁹⁵ Art. 9 CE: “1.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3.- La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

En conclusión, se debería de establecer, en primer lugar, el derecho a la libertad absoluta de pactos en este ámbito y darle prioridad a lo regulado por las partes disponiendo que, solo en defecto de pacto, se pueda producir la aplicación supletoria de las demás soluciones, es decir, en los casos en los que las partes no hayan pactado nada respecto a la ruptura se apliquen las normas generales sobre el enriquecimiento injusto para resolver el posible derecho a una compensación económica a favor del miembro de la pareja perjudicado³⁹⁶.

³⁹⁶ PAREJO CARRANZA, Antonio José, “*Revista de Derecho Civil*”, vol. I, núm. 2 (abril-junio, 2.014), Estudios, Páginas 113-147.

CAPÍTULO IX

REQUISITOS DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

7.1.- Origen de la pensión compensatoria

El origen de la pensión compensatoria, esto es, el momento de su nacimiento es cuando concurre el desequilibrio económico conforme al artículo 97 CC. Por lo tanto, si el origen del otorgamiento de la pensión compensatoria se basa en la concurrencia de un desequilibrio económico respecto de la situación anterior al procedimiento de separación o de divorcio, es decir, el matrimonio, consistiendo en la prestación económica de un cónyuge al otro cónyuge en el que concurra el desequilibrio respecto de la situación de matrimonio, el origen de la pensión compensatoria se dará en el momento de la ruptura del matrimonio.

El Código Civil, redactado conforme a la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (BOE núm. 163, de 09-07-2005), establece en su artículo 97 CC el reconocimiento del derecho, la causa que da origen al nacimiento del derecho, y la primacía de la voluntad de las partes para su establecimiento.

El segundo párrafo del artículo 97 CC establece los parámetros a seguir por el Juez en caso de que dicho acuerdo no se produzca, estableciendo la concurrencia de circunstancias objetivas a tener en cuenta y que enumera. Son las siguientes:

- Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
- La edad y el estado de salud.
- La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
- La dedicación pasada y futura a la familia.
- La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
- La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

- La pérdida eventual de un derecho de pensión.
- El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
- Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

7.1.1.- La separación o divorcio como causa del derecho a la pensión

Evidentemente la causa del derecho a la pensión es el proceso de separación, ya que si hay reconciliación, desaparece el desequilibrio económico y por lo tanto, el derecho a la pensión compensatoria. Y ello, aunque con matices, también es aplicable al proceso de divorcio, aunque en este caso deberán contraer nuevo matrimonio.

El artículo 98 CC³⁹⁷ regula las situaciones solo en el caso de que el matrimonio haya sido declarado nulo. En caso de nulidad del matrimonio, el cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización, teniéndose en cuenta a estos efectos las circunstancias contempladas en el artículo 97 CC.

7.1.2.- El desequilibrio económico como causa de la pensión compensatoria

El desequilibrio económico que se produce entre los esposos es la causa principal de la pensión compensatoria. La finalidad de la concesión de la pensión compensatoria es precisamente paliar el desequilibrio producido, entendiéndose que los elementos integrantes del desequilibrio son, de una parte, el desequilibrio ha de afectar a la posición económica de un cónyuge en relación con la mantenida por el otro, efectuándose una comparación entre las necesidades de cada uno de los ex cónyuges y de los recursos que tienen para satisfacerlas³⁹⁸, y de otra, ha de implicar un deterioro respecto de la situación económica anteriormente disfrutada

³⁹⁷ Art. 98 CC: “El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97 del Código Civil”.

³⁹⁸ DE LA HAZA DIAZ, Pilar. “La pensión de separación y divorcio”, La Ley. Madrid 1.989. Página 36.

durante el matrimonio, en el sentido de que exista “una real situación de desventaja económica entre ambos cónyuges”³⁹⁹.

El desequilibrio no es referido solo al estatus social, sino el que se traduce en el reconocimiento y satisfacción de determinadas necesidades, no pudiendo identificarse con la imposibilidad de atender a las necesidades vitales, diferenciando así la necesidad de la noción de desequilibrio económico, para diferenciar la pensión de alimentos con la pensión compensatoria. Entendiéndose que el concepto de desequilibrio es más amplio y se dirige a restablecer el perjuicio económico derivado de los supuestos de crisis.

A los efectos de la apreciación del desequilibrio económico que pueda existir entre los ex cónyuges, tiene relevancia el régimen económico matrimonial⁴⁰⁰, ya que, si bien no tiene relevancia en constante matrimonio, si la tiene en la ruptura de la convivencia y cuando se proceda a la liquidación del mismo, y en este sentido, cuanto mayor haya sido la comunidad, menor será el posible desequilibrio existente entre ambos tras esa liquidación.

Como señalan Lasarte Álvarez y Valpuesta Fernández: *“Un régimen de sociedad legal de gananciales o de participación en ganancias, puede implicar, en algunos casos, la corrección de cualquier posible desequilibrio entre los esposos, como consecuencia del reparto igualitario del haber común que comporta su liquidación, por el contrario, un régimen de separación absoluta de bienes puede comportar un mayor desequilibrio tras la ruptura conyugal, al ser más patente el empeoramiento que se producirá en la situación económica del cónyuge que no ha aportado durante matrimonio ninguna fuente de ingresos, y de la que carece tras la separación o divorcio”*⁴⁰¹.

Para que proceda la pensión compensatoria es necesario, además de ese desequilibrio entre las situaciones de los ex esposos, que se haya

³⁹⁹ ROCA TRIAS, Encarna. *“Convenios Reguladores de las crisis matrimoniales: bases conceptuales y criterios judiciales”*. 1.989. Página 228.

⁴⁰⁰ Régimen económico matrimonial, que normalmente es el régimen económico de gananciales, si bien se contempla legalmente el régimen económico matrimonial de separación de bienes que puede ser pactado.

⁴⁰¹ LASARTE ALVAREZ, C. y VALPUESTA FERNANDEZ, M. R., *“Efectos comunes, nulidad, separación y divorcio”*. Comentarios al nuevo Título IV del Código Civil. Editorial Civitas, Madrid 1.982. Páginas 749 y siguientes.

producido un descenso del nivel de vida respecto del mantenido constante el matrimonio. El objetivo de la pensión compensatoria es el mantenimiento del nivel de vida o del mantenimiento del nivel económico, *modus vivendi*. La separación y el divorcio, suelen conllevar un empeoramiento económico, aunque sea temporal, del nivel de vida de ambos esposos⁴⁰².

En consecuencia, si ambos cónyuges cuentan con bienes o ingresos propios suficientes para continuar manteniendo un nivel de vida similar al disfrutado constante matrimonio, no procederá el derecho a la pensión compensatoria aunque exista una notable diferencia entre el patrimonio de los cónyuges separados o divorciados, y si ambos sufren pérdida respecto de la situación anterior durante el matrimonio, pero en igual medida, no habrá desequilibrio y, consecuentemente, tampoco derecho a la pensión⁴⁰³.

En todo caso, la situación de deterioro económico debe ser apreciada en relación con la anteriormente mantenida en el matrimonio, y todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 97 CC, lo cual plantea problemas de interpretación dependiendo también de la duración del matrimonio.

El momento en el que debe apreciarse el desequilibrio y por lo tanto, el momento para fijar la determinación del derecho a la pensión compensatoria, es el de la ruptura de convivencia y no el de la ruptura del matrimonio.

Al ser el desequilibrio económico la causa del nacimiento del derecho a la pensión compensatoria, la desaparición del desequilibrio conlleva, consecuentemente, la extinción del derecho al cobro de la pensión compensatoria, al desaparecer la causa que la motivó, por lo que mientras

⁴⁰² SANCHEZ GONZALEZ, M^a Paz. La extinción del derecho a la pensión compensatoria. Colección de Estudios de Derecho Privado. Editorial Comares. Los precedentes. Granada 2.005. Página 29.

⁴⁰³ GARCIA CANTERO, Gabriel. Comentarios a los artículo 97 a 101, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Alvadalejo, Madrid 1.982. Páginas 415 y ss.

subsista el desequilibrio económico debería de mantenerse la pensión en los mismos términos en que fue concedida⁴⁰⁴.

Pero la desaparición del equilibrio puede darse por la mejora de la situación del acreedor, o por el empeoramiento de la situación del deudor. Así cualquiera que sea la causa de la mejora de la fortuna del acreedor de la pensión puede ser alegada como causa de extinción, la incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera se considera causa extintiva de la pensión compensatoria, como una herencia cuantiosa, un premio etc., debiendo en todo caso instarse un nuevo procedimiento encaminado a demostrar que ha desaparecido el desequilibrio económico⁴⁰⁵.

Cuando concurre un empeoramiento de la situación del deudor, por ejemplo, respecto a la situación laboral, si bien la situación de paro laboral, no implica *per se* la desaparición de la pensión. Para ello es necesario que la reducción de los ingresos que se veían percibiendo, hasta los propios del subsidio de desempleo, implique una práctica igualación con la situación económica del ex cónyuge acreedor de la pensión compensatoria.

Para Torres Lana, *“La norma no puede pretender, por razones de equidad, gravar al deudor, incluso sobre su mínimo vital, para mantener al acreedor en una situación confortable o al menos desahogada. En este caso, la imposibilidad de mantenimiento del status anterior, que gravitaba exclusivamente sobre el cónyuge obligado, debe ser soportada por ambos”*⁴⁰⁶.

Por último, pueden darse las dos circunstancias conjuntamente: el enriquecimiento del acreedor y el empobrecimiento del deudor, produciéndose un nuevo equilibrio al aproximarse los medios de subsistencia de ambos.

Si el desajuste económico viene derivado de otras causas que no sean las contempladas literalmente en el artículo 97 CC, la separación o el

⁴⁰⁴ ROCA TRIAS, Encarna. Familia y cambio social. (De la casa a la persona). Editorial Civitas Ediciones S.L. Madrid 1.999. Página 228.

⁴⁰⁵ GARCIA CANTERO, Gabriel. Comentarios a los artículo 97 a 101, del Código Civil. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Alvadalejo, Madrid 1.982. Páginas 415 y ss.

⁴⁰⁶ TORRES LANA, José Ángel. Comentario al artículo 101 del Código Civil en el matrimonio y divorcio. Comentarios al nuevo Título IV del Libro 1º del Código Civil, Madrid 1.982. Páginas 78.

divorcio podría interpretarse que no son causa de extinción de la pensión compensatoria el desequilibrio surgido⁴⁰⁷.

7.2.- Mantenimiento de la pensión compensatoria

La pensión compensatoria se mantiene mientras subsistan y continúen las circunstancias que dieron lugar a su origen y reconocimiento, si bien es cierto que la misma puede mantenerse modificándose su cuantía y forma de pago si se modifican las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento y sin provocar su extinción.

El artículo 99 CC establece la posibilidad de sustituir la pensión compensatoria⁴⁰⁸. El texto literal del artículo 99 CC -que no ha sido reformado-, dice que puede realizarse “*en cualquier momento*”, lo que da una clara idea de manifiesta amplitud. Sin embargo, el propio precepto limita su autorización a “*la pensión fijada judicialmente*”.

El artículo 100 CC⁴⁰⁹ manifiesta que una vez que esté fijada la pensión y las bases de su actualización, que normalmente se refieren al IPC (Índice de Precios al Consumo), en la resolución judicial que haya recaído en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, es decir, limita la modificación de la pensión a situaciones que puedan acontecer de carácter objetivo y sustancial en las condiciones económicas de ambos.

Dado que el legislador prioriza el reconocimiento del derecho a la pensión compensatoria en la voluntad de las partes, una vez que estas han reflejado en el convenio regulador la obligación de pago de uno de los ex cónyuges de una pensión compensatoria a favor del otro ex cónyuge

⁴⁰⁷ TORRES LANA, José Ángel. Comentario al artículo 101 del Código Civil en el matrimonio y divorcio. Comentarios al nuevo Título IV del Libro 1º del Código Civil, Madrid 1.982. Páginas 78 y ss.

⁴⁰⁸ Art. 99 CC: “En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero”.

⁴⁰⁹ Art. 100 CC: “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge”.

mediante la firma y posterior ratificación en presencia judicial de forma libre, será difícil su modificación.

La libertad que tienen las partes de pactar el reconocimiento del establecimiento de la pensión compensatoria se puede dar incluso en aquellos supuestos en los que objetivamente no concurren las circunstancias que hagan merecer al ex cónyuge deudor su reconocimiento si las partes no la hubiesen pactado libremente.

La dificultad de suprimir con posterioridad la pensión compensatoria mientras se mantengan las condiciones que dieron lugar a su origen, queda únicamente limitada a los supuestos en los que existan una modificación sustancial que dieron lugar a su origen y la interpretación que se hace en vía jurisprudencial es claramente restrictiva.

La STS de 22 de marzo de 2.012, (STS núm. 233/2.012), establece que: *“El Convenio Regulador es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia, que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede tener pactos típicos, como atípicos...”*.

Por lo tanto, y al primar la voluntad de las partes, por ser la pensión compensatoria una cuestión de derecho dispositivo y no de orden público será muy difícil su modificación o supresión, no siendo suficiente la concurrencia de cualquier circunstancia para ello, debiendo de concurrir lo que el legislador denomina una modificación sustancial en las circunstancias.

La única limitación a la voluntad de las partes será que el pacto alcanzado mediante la inclusión de las cláusulas redactadas en el convenio regulador y ratificadas en presencia judicial sea *“gravemente perjudicial para uno de los cónyuges”*, cuestión que deberá valorar el juez de oficio o previo reparo del Ministerio Fiscal si fuera parte al existir menores y pudiera afectarles el procedimiento judicial y la sentencia.

Pero si el convenio regulador ha sido firmado pero no ha sido ratificado en presencia judicial, el pacto incluido será una prueba más a valorar para el establecimiento o no de la pensión compensatoria en un procedimiento contencioso de separación o divorcio.

Por lo tanto, la ratificación judicial es el requisito procesal que genera y determina la eficacia jurídica del negocio jurídico que expresa la voluntad de las partes. Pero si este acuerdo no se hubiera realizado en convenio regulador, podrá desplegar su eficacia entre las partes.

El mero transcurso del tiempo no es causa de extinción de la pensión compensatoria, si se mantiene la situación de desequilibrio, y no se puede presumir que ésta situación ha desaparecido salvo que la pensión compensatoria se hubiera pactado sujeta a una temporalidad, y dicho tiempo hubiera transcurrido.

Pero si la pensión compensatoria se hubiera otorgado con carácter vitalicio el transcurso del tiempo no modifica el derecho a la pensión compensatoria, que seguirá actualizándose conforme se haya pactado y siempre sujeta a la variación del Índice de Precios al Consumo o indicador que lo sustituya.

7.3.- Extinción de la pensión compensatoria conforme a las causas contempladas en el artículo 101 CC

La pensión compensatoria se extingue conforme al artículo 101 CC por la causa que motivo su otorgamiento, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.

Del contenido del artículo 101 CC ha de analizarse como causa de extinción de la pensión compensatoria: el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.

En las causas de extinción de la pensión compensatoria deben de incluirse todos aquellos supuestos que, con independencia de que se contemplen o no en el artículo 101 CC, determinen la desaparición hacia el futuro de la pensión por desequilibrio económico⁴¹⁰.

La extinción de la pensión compensatoria viene determinada por diversas causas reguladas en el artículo 101 CC. No se contemplan en este artículo la renuncia, la muerte del acreedor o la prescripción, entre otras

⁴¹⁰ SANCHEZ GONZALEZ, María Paz. "La extinción de la Pensión Compensatoria". Colección de Estudios de Derecho Privado. Editorial Comares. Granada 2.005.

causas que pueden producir idéntico efecto extintivo. Además, el cuadro de causas extintivas de la pensión compensatoria, debería de completarse con las que para las obligaciones en general establece el artículo 1.156 CC⁴¹¹.

Pero además, el artículo 101 CC no resulta claro al establecer de una forma genérica como causa de extinción de la pensión compensatoria, “*por cese de la causa que lo motivó*”, planteando numerosos problemas de interpretación⁴¹².

Es causa del establecimiento de la pensión compensatoria⁴¹³ el propio proceso de divorcio o separación: también lo es el desequilibrio económico⁴¹⁴ surgido entre los cónyuges⁴¹⁵, por ello se han de analizar las causas que motivaron el desequilibrio económico⁴¹⁶.

Existen otras causas además de las contempladas en el artículo 101 CC, o que se pueden deducir de éste. Una de las más problemáticas y menos aceptadas jurisprudencialmente, es cuando la causa de extinción que se alega es la existencia de nuevas obligaciones familiares del deudor de la prestación, ya que las nuevas cargas familiares se contraen de forma voluntaria y con pleno conocimiento de las anteriores obligaciones, siendo estimada esta causa como extintiva de la pensión, o de reducción de la misma, sólo en caso de real insuficiencia del patrimonio del deudor para atender a las obligaciones que tiene hacia su nueva prole.

Pero también esta causa, la del empobrecimiento del deudor, sin tener que llegar a la indigencia, se puede interpretar como desaparición del

⁴¹¹ Art. 1.156 CC: “Las obligaciones se extinguen: Por el pago. Por la pérdida de la cosa debida. Por la condonación de la deuda. Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor. Por la compensación. Por la novación”.

⁴¹² VILLAGOMEZ CEBRIAN, Alfonso J. “Establecimiento de la Pensión Compensatoria bajo condición o término”.

⁴¹³ TORRES LANA José Ángel. “Comentario al artículo 101 del Código Civil en el Matrimonio o Divorcio”. Comentarios al nuevo Título IV del Libro 1º del Código Civil, Madrid 1.982. Páginas 78 y ss.

⁴¹⁴ GONZALEZ POVEDA, Pedro. “La ley del Divorcio: Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho”. Cuadernos de derecho judicial. 1.997. Páginas 495-532.

⁴¹⁵ RUIZ-RICO RUIZ-MORON, Juan. “La concesión temporal de la Pensión por desequilibrio económico”.

⁴¹⁶ MARTIN GARCIA DE LEONARDO, Teresa. La temporalidad de la pensión compensatoria. Editorial Tiran Lo Blanch. Valencia 1.997. Página 66.

desequilibrio económico ente los ex cónyuges, y considerarse como causa extintiva de la pensión.

7.3.1.- Nuevo matrimonio del acreedor

La celebración de un nuevo matrimonio, por parte del beneficiario de la pensión compensatoria, determina su extinción. Esta causa de extinción de la pensión compensatoria es habitualmente reconocida como tal en el Derecho Comparado. Razones de tipo económico justifican esta causa de extinción de la pensión compensatoria, *“el hecho de contraer nuevo matrimonio permitirá normalmente al cónyuge beneficiario de la pensión reequilibrar su status económico-social, por lo cual cesa la ratio de aquella”*⁴¹⁷.

Si el fundamento de esta causa extintiva radica en que los recursos del nuevo cónyuge resultan suficientes para hacer desaparecer el desequilibrio económico inicialmente existente, lo que ocurre es que se produce el cese de la causa que motivó el derecho a la pensión, siendo, al ser formulada esta causa de extinción, de forma objetiva, independiente que se produzca o no equilibrio económico.

La pérdida del derecho a la pensión por razón del matrimonio del cónyuge acreedor se debe a que por razón de este nuevo matrimonio el acreedor de la pensión tendrá solventadas sus necesidades, por lo que debe acabar la referencia equilibrada a la situación conyugal anterior⁴¹⁸.

Otros autores fundamentan esta causa de extinción de la pensión compensatoria en razones de índole moral o ético, por entender que la subsistencia de la pensión a cargo del ex cónyuge, beneficiaría a un tercero, el nuevo cónyuge del acreedor y para evitar situaciones abusivas, además de producirse la desaparición del desequilibrio⁴¹⁹.

⁴¹⁷ GARCIA CANTERO, Gabriel. Comentarios al artículo 97 a 101, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Albadalejo, Madrid 1.982. Página 442.

⁴¹⁸ GARCIA CANTERO, Gabriel, PONS GONZALEZ, Manuel y DEL ARCO TORRES, Miguel Ángel. Separación, Divorcio y Nulidad Matrimonial, Régimen Jurídico. Granada 1.992. Página 316.

⁴¹⁹ GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar. *“La <Vida Marital> del Perceptor de la Pensión Compensatoria”*. Cuadernos de Aranzadi Civil-Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi. Página 58 y ss.

Por otra parte, se fundamenta esta causa de extinción de la pensión compensatoria, en que el deber de socorro, regulado en el artículo 68 CC descansa sobre el nuevo cónyuge, razón por la cual se produce el efecto extintivo de la pensión.

Por último, se fundamenta, en la denominada teoría del coste de oportunidades, que consiste en determinar el grado de perjuicio derivado de la ruptura de la convivencia, y evitar que gravite exclusivamente sobre uno sólo de los cónyuges, *“para el cálculo del desequilibrio necesariamente ha de compararse las situaciones de ambos cónyuges tras la convivencia matrimonial...”*⁴²⁰.

7.3.2.- Convivencia marital del acreedor con otra persona

El artículo 101 CC contempla como causa de extinción de la pensión compensatoria, la convivencia del acreedor con otra persona, entendiendo como tal convivencia *more uxorio*, debe ser una relación con carácter similar a la conyugal: la unión regular con comunicación personal y de intereses, en cuanto a grupo, comunes, distinta de la simple relación sentimental.

Esta causa de extinción de la pensión compensatoria requiere necesariamente una cohabitación o convivencia de carácter permanente y establece que en la práctica venga a generar una posesión de estado familiar de facto, esto es, en definitiva, que se trate de una convivencia *more uxorio*, lo que exige las notas de habitualidad y estabilidad propias del matrimonio, fundamentándose esta causa de extinción de la pensión compensatoria igualmente en el deber de socorro de la nueva pareja, y el hecho de que la convivencia determina, normalmente, la desaparición del desequilibrio que está en el origen de la pensión⁴²¹.

No es suficiente como causa de extinción la mera relación sentimental del deudor de la pensión, pero tampoco es necesario que se trate de una convivencia expresamente notoria. No obstante ha de tener publicidad suficiente como para generar la apariencia necesaria

⁴²⁰ GONZALEZ POVEDA, Pedro. *“La Ley del divorcio”*. Tratado de Derecho de Familia. Editorial Sepin. Madrid 1.987. Página 99.

⁴²¹ GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar. *“La <Vida Marital> del Perceptor de la Pensión Compensatoria”*. Cuadernos de Aranzadi Civil-Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi. Páginas 60 y ss.

socialmente y ha de tratarse de una relación definitiva o permanente. Ha de existir convivencia, lo que lleva implícito la nota de publicidad, en palabras de Campuzano Tome⁴²². Lo que la Jurisprudencia denomina “comunidad de vida”.

Sentado este principio, la principal duda existente en la actualidad debido a las circunstancias actuales es la consideración del concepto de “vivir maritalmente”, lo cual requiere una convivencia estable, con vocación de continuidad y permanencia. La pensión compensatoria es un mecanismo previsto con el fin de reequilibrar la situación económica de los esposos tras la ruptura de la convivencia conyugal, que intenta corregir los desequilibrios que se hayan provocado como consecuencia de la dedicación de cada uno de los esposos al matrimonio, por percibir una retribución muy inferior a la del otro o no percibir ninguna, particularmente porque su dedicación a la familia le ha impedido una mayor proyección profesional o laboral, que provoca que quede en una situación claramente desfavorable respecto del otro una vez rota la comunidad económica propia del matrimonio⁴²³.

A los efectos de extinción de la pensión compensatoria, ha de entenderse por “vivir maritalmente con una persona” conforme a la causa del artículo 101.1 CC no puede entenderse como una sanción, sino simplemente el cese de la obligación de mantener una prestación a cargo de una persona que ya no tiene ningún deber de socorro para con su ex cónyuge, y que está obligado a pagar la pensión únicamente si el divorcio ha producido un desequilibrio.

La extinción de la pensión en este supuesto tiene lugar cuando la relación tenga los caracteres de “permanencia, regularidad, y globalidad que permite equiparar la situación de hecho a la comunidad de vida propia de la institución matrimonial”, pero el percibo de una pensión compensatoria no obliga a realizar una vida de aislamiento social, estándole permitido efectuar cualquier actividad que sirva a su realización personal entre la que debe incluirse el pleno desenvolvimiento de su libertad sexual sin conllevar la sanción del artículo 101 CC solo reservada a

⁴²² CAMPUZANO TOME, Herminia. *“La pensión por desequilibrio económico”* Editorial J. M. BOSCH. Librería Bosch, Barcelona 1.986. Páginas 86 y ss.

⁴²³ REYES LOPEZ, Maria José. *“La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la extinción de la pensión compensatoria”*. Actualidad Jurídica Iberoamericana. ISSN 2386-4567, núm. 2, 2.015. Páginas 477-488.

la celebración de un nuevo economicomatrimonio o a la convivencia marital caracterizada por ese propósito.

La interpretación de la disposición contenida en el artículo 101.1 CC ha estado dividida en dos posturas: la de quienes entienden que el Código civil utiliza la expresión “vivir maritalmente” como equivalente a convivencia matrimonial, y la de quienes entienden que cualquier tipo de convivencia estable de pareja lleva a la extinción de la pensión y quedan excluidas las convivencias ocasionales o esporádicas.

La conclusión es que la finalidad de la norma es la de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada. En general, se sostiene que se produce este tipo de convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, *more uxorio*, y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones, tanto desde el punto de vista subjetivo, que se materializa en el hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma, como desde el punto de vista objetivo, basado en la convivencia estable.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo está contribuyendo con su doctrina a adecuar la pensión compensatoria a las necesidades actuales evitando que se produzcan situaciones de enriquecimiento injusto, creadas, bien por la inactividad del receptor de la pensión compensatoria en la búsqueda de la salida de dicha situación, bien porque se haya producido una alteración sustancial sobre las circunstancias que determinaron la fijación de la pensión. Uno de los supuestos que con más frecuencia se presenta ante los tribunales como motivo determinante para solicitar la modificación de medidas es que la situación que tenía el ex contrayente que debe pagar la pensión ha sufrido una merma en su posición económica que la hace merecedora de una revisión a la baja o de su extinción.

El derecho a percibir una pensión compensatoria descansa en dos requisitos esenciales: la existencia de un desequilibrio patrimonial entre los esposos y que la situación económica desfavorable sea consecuencia directa y esté vinculada causalmente a la separación o divorcio, todo ello con la finalidad es restablecer el equilibrio de las condiciones materiales de los esposos, de forma que la ruptura conyugal no coloque a uno de los dos en una situación desfavorable en relación con la posición que ostenta el

otro cónyuge y que era la que disfrutaba durante el matrimonio, permitiendo así que los esposos mantengan el mismo nivel de vida que tenían en el matrimonio.

Las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo, y constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas de alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores conforme al artículo 100 CC, o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho conforme al artículo 101 CC. Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente.

Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo 100 CC, como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida.

7.3.3.- La pensión de viudedad y la pensión compensatoria

Tal y como indicábamos en el Capítulo VI, la muerte del deudor de la pensión compensatoria, per se, no produce, de forma automática, la extinción de la pensión compensatoria, ya que la regla general será la transmisión *mortis causa* de la deuda y las excepciones vendrán constituidas por la insuficiencia del caudal hereditario para atender las necesidades de la deuda, lo que generará, en su caso, una reducción o la propia extinción de la pensión compensatoria

Añade el artículo 101 CC en un segundo párrafo, según el cual: *El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.*

Será la actitud del acreedor de la deuda la que determine si esta pensión compensatoria se extingue mediante su aceptación, ya que la muerte del deudor le puede generar el nacimiento de una pensión de viudedad.

Es decir, si el acreedor tenía reconocido el derecho a la pensión compensatoria, le corresponderá la pensión de viudedad, pero si reclamase a los herederos del deudor la pensión compensatoria no debiera de corresponderle la pensión de viudedad, pues duplicaría la pensión a recibir. No obstante ello, la reforma efectuada a partir del mes de enero de 2.008 sobre la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial cambia radicalmente en cuanto a los requisitos para su concesión⁴²⁴.

Esta nueva modificación legislativa supone un recorte de las prestaciones sociales para el supuesto de separados, divorciados y matrimonios nulos, justificando la misma en el hecho del importante crecimiento de la población de más de 65 años que se ha duplicado en los últimos 30 años.

La Ley de Seguridad Social (RDL 1/1.994, de 20 de Junio) inicialmente contemplaba la pensión de viudedad como una ayuda económica del Estado para atender el desequilibrio económico que producía la muerte del marido varón, en una viuda dependiente económicamente. La ley presumía en su concepto una realidad social como era el hecho de que las mujeres tradicionalmente sacrificaban su inserción laboral en favor de la familia, el matrimonio y la maternidad. En aquellos tiempos el hombre no podía ser pensionista de viudedad y era ciertamente discriminado en este sentido exceptuando el supuesto de que el viudo fuese a la fecha a la fecha de fallecimiento de su mujer inválido y dependiente económicamente de la fallecida.

En la década de los ochenta este escenario fue modificado por el Tribunal Constitucional, en primer lugar, y más tarde por el propio legislador en el sentido de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en los términos que obligaba nuestra Constitución, que establece la igualdad entre sexos y por extensión la necesidad de reconocer la pensión al hombre en condiciones iguales a la mujer.

⁴²⁴ BOSCH GUERRERO, Carlos. Valencia. Art. redactado el lunes día 18 de Febrero de 2.008. Noticias Jurídicas.

Con anterioridad a la reforma de enero de 2.008, la pensión de viudedad contemplada en la Ley General de Seguridad Social (RDL 1/1.994 de 20 de Junio) en su artículo 174.2⁴²⁵, se constituye como una ayuda económica estatal con carácter vitalicio a favor del cónyuge supérstite, sin distinción de género, debiendo concurrir unos requisitos mínimos, como son el alta o situación asimilada al sistema de la Seguridad Social, y una cotización efectiva por el causante en caso de fallecimiento por causa distinta a enfermedad profesional o accidente de trabajo.

La ley, hasta el 2.007, para los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial disponía que el derecho a la pensión de viudedad correspondía a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. Para el caso de nulidad matrimonial se devengaba igual para el cónyuge respecto al que no cupiera mala fe en la causa de la declaración de nulidad de matrimonio y no se hubiera vuelto a casar.

A partir de la realizada en enero de 2.008 la ley contempla para los viudos separados o divorciados o cuyo matrimonio fue anulado, otro escenario totalmente distinto con clara restricción de derechos efectiva a este colectivo.

La diferencia con la redacción anterior a la reforma estriba en la vinculación del derecho de viudedad a que exista una pensión compensatoria ex artículo 97 CC para los casos de separación o divorcio o la indemnizatoria del artículo 98 CC para los casos de nulidad.

⁴²⁵ Art. 174.2 de la Ley General de Seguridad Social: En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil, ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias”.

Sin embargo, ha habido cambios en la interpretación jurisprudencial⁴²⁶. Así la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao de fecha 13 de febrero de 2.009, siendo ponente la magistrada Mónica González Fernández, manifiesta que la cuestión debatida sobre la interpretación del artículo 174-2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) tras la reforma operada por la Ley 40/2.007, que entró en vigor el 1 de enero de 2.008, es una cuestión a debate estrictamente jurídica y rechaza la interpretación que la Seguridad Social imponía desde 2.008.

En la resolución dice que debe entenderse que la condición para acceder a la prestación de viudedad no está referida a la percepción de la pensión compensatoria, sino, en tal caso, a su extinción. Lo que se exige es que si se está percibiendo la pensión compensatoria ésta quede extinguida al fallecimiento del causante, ya que si se hubiera pretendido condicionar el acceso de la prestación a la existencia de una pensión compensatoria la redacción hubiera sido muy distinta.

El propio preámbulo de la Ley 40/2.007 señala que el acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria al que se refiere el artículo 97 CC.

La protección del sistema de la Seguridad Social, en forma de pensión de viudedad, se configura como un derecho que se reconoce al cónyuge supérstite por el fallecimiento de su consorte, pero que no está condicionada al vínculo matrimonial entre causante y beneficiario, pues también se reconoce la pensión a quien sobreviva en una pareja de hecho.

El ex cónyuge o la pareja de hecho viuda o viudo tienen derecho a recibir una pensión de viudedad, siempre y cuando cumplan con unos requisitos legales. Mediante la Ley 26/2.009, de 23 de diciembre, se ha dado una nueva redacción al artículo 174-2º de la Ley 40/2.007, de 4 de diciembre, de la Seguridad Social, sobre el derecho a la pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente, donde se describen cuáles son esos requisitos o condiciones:

⁴²⁶ VIGIL, Almudena, *“Renunciar a la pensión compensatoria ya no impide percibir la de viudedad”*. Art. 16/05/2.009, comentarios a la sentencia de 13 de febrero de 2.009 del Juzgado de lo social número 2 de Bilbao, magistrada Mónica González Fernández.

“En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 CC y esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanza la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de la pensión compensatoria pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de la sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho”.

En esta nueva redacción se hace una especial mención a las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes no se les exigirá la previa existencia de una pensión compensatoria, pero sí deberán acreditar su condición de víctimas, ya sea mediante sentencia, orden de protección, informe del ministerio fiscal o cualquier medio de prueba admitido en derecho.

A propósito de esto la Ley Orgánica 1/2.004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se impide que los asesinos de sus parejas puedan cobrar la pensión de viudedad, o hereden sus bienes, cuando se les ha declarado culpables de la muerte del cónyuge fallecido.

A las demás mujeres divorciadas o separadas judicialmente que no hayan sido víctimas de la violencia de género, se les exige que para tener derecho a percibir la pensión de viudedad por los años que permanecieron casados, y percibirán la pensión de viudedad siempre que acrediten que

eran perceptores de una pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 CC⁴²⁷.

7.4.- Otras causas de extinción de la pensión compensatoria: la renuncia

El artículo 101 CC no contempla de forma exhaustiva todas las causas posibles de la extinción de la pensión compensatoria, y como hemos visto, incluso no siempre las causas contempladas en dicho precepto del Código Civil se basan en la desaparición del desequilibrio económico, como se ha relatado anteriormente con relación a los supuestos contemplados como contraer nuevo matrimonio el acreedor o su convivencia marital o como pareja de hecho marital.

Pero la renuncia es una forma de extinción del derecho a la pensión compensatoria, o bien, una forma de que el nacimiento de este derecho no se produzca, pero para que se pueda considerar válida la renuncia como forma de extinción de la pensión compensatoria, o que no se produzca el nacimiento del derecho al cobro de la misma, han de concurrir determinados requisitos para que esta renuncia sea considerada válida y reconocida.

Dentro de la disponibilidad del derecho a la pensión compensatoria cabe la renuncia a este derecho. Para que la renuncia sea efectiva se exige que sea personal, clara, terminante, inequívoca, sin condicionante alguno y con expresión indiscutible de la voluntad determinante de la misma, conforme al artículo 6-2º CC.

Es eficaz la renuncia contenida en convenio regulador homologado, como también lo es el pacto en dicho convenio de no pagar la pensión. El artículo 90 CC impone la obligación de aprobar los pactos contenidos en los convenios reguladores de la nulidad, separación y divorcio, con dos únicas excepciones: la primera, es si los pactos son dañosos para los hijos, y la segunda que sean gravemente perjudiciales para los cónyuges.

⁴²⁷ IGLESIAS CABERO, Manuel, *“Pensión de viudedad, derecho de las viudas separadas o divorciadas, víctimas de violencia de género: no se precisa el reconocimiento de pensión compensatoria”*. Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Núm.8090, 2.013.

Conforme a este precepto y conforme a su literalidad, en ocasiones podría el juez rechazar la renuncia a una pensión compensatoria, que no estuviera marcada por la inexistencia de desequilibrio -que no sería una verdadera renuncia, al no concurrir la exigencia básica para el nacimiento del derecho-.

En algún supuesto, incluso, podrá desaprobarse, por considerar la existencia de un perjuicio indirecto para los hijos, si la renuncia la realiza el progenitor con el que vayan a convivir, que dispondría de menores medios a compartir con los hijos. Pero en los restantes casos, de aplicar esta teoría, de rechazar la renuncia, debería realizarse, solo en el caso, de que la renuncia al derecho pecuniario fuera “gravemente perjudicial para uno de los cónyuges”: para el renunciante.

Sin embargo, definido el perjuicio económico como *ganancia lícita que deja de obtenerse*, si no se reclama la pensión compensatoria a pesar de la existencia de dicho perjuicio y ésta no se abona lo que existiría es una dejación del derecho a la pensión. La realidad es que es de difícil compatibilidad esta excepción a la obligación de homologar los pactos entre esposos con la doctrina, clara y contundente, del Tribunal Supremo y de la jurisprudencia. La renuncia a la pensión en el proceso de separación proyecta su eficacia sobre el posterior de divorcio.

En todo caso, las resoluciones judiciales que han contemplado la validez y eficacia de la renuncia se pone de manifiesto una gran cautela, subrayando que la interpretación ha de ser restringida.

Existe una línea jurisprudencial amplia que considera nula la renuncia hecha antes del matrimonio, por estimar, en aplicación de la doctrina sentada, que sólo cabe tal renuncia respecto de los derechos que tienen por objeto algún concreto elemento de los que se hallen en el patrimonio jurídico del renunciante, por haberlos adquirido ya éste en el momento de la renuncia, considerando imposible renunciar a un derecho que todavía no ha nacido.

7.4.1. La renuncia expresa al derecho de la pensión compensatoria

Respecto a la renuncia expresa al derecho de la pensión compensatoria, cabe la posibilidad de que existan diversos supuestos. Así,

cuando los cónyuges una vez producida la ruptura conyugal pactan la renuncia a la pensión compensatoria.

Los requisitos que han de concurrir para que la renuncia al derecho a la pensión compensatoria sea considerada válida y sea reconocida, son los requisitos generales para todo tipo de renunciaciones. La renuncia, como tal derecho es una posibilidad que tienen los cónyuges, exigiéndose que la renuncia sea personal, clara, terminante e inequívoca, sin condicionante alguno y con expresión indiscutible de la voluntad determinante de la misma.

Es eficaz, en principio, la renuncia contenida en convenio regulador homologado, como también lo es el pacto en dicho convenio de no pagar dicha pensión. Se trata de un pacto libre y entre iguales, que se hace depender en última instancia del arbitrio de los cónyuges, quienes pueden renunciar a los beneficios que la ley les otorga sin que tal renuncia parezca injusta, ya que al que consiente no se le hace daño. La exclusión al beneficio legal es una manifestación de la libertad y de la igualdad, por quedar ambos idénticamente desprovistos de la pensión compensatoria.

Se pone el fundamento del valor de la justicia, a falta de otros criterios, en la voluntad de las partes, en las elecciones preferenciales realizadas por la voluntad, es decir, en ser libres para regular sus intereses conforme a lo que más les convenga.

El artículo 90 CC impone la obligación de aprobar los pactos contenidos en los convenios reguladores de la nulidad, separación y divorcio, con dos excepciones: si los pactos son perjudiciales para los hijos y que sean gravemente perjudiciales para los cónyuges.

Por lo que, en base a este precepto, en algunos casos el juez podría rechazar la renuncia a una pensión compensatoria que no estuviera fundada en la existencia de un desequilibrio económico, o por suponer un perjuicio aunque no fuera directo para los hijos. Si la renuncia la realiza un progenitor con el que vayan a convivir, que dispondrá de menores medios para compartir con ellos, o fundamentalmente que la renuncia sea gravemente perjudicial para uno de los cónyuges, es decir, para el propio acreedor de la pensión: el renunciante.

En cuanto al momento de la renuncia, es opinión mayoritaria de la jurisprudencia considerar nula la renuncia hecha antes del matrimonio, por estimar que sólo cabe tal renuncia respecto de los derechos que tienen por objeto algún concreto elemento de los que se encuentren en el patrimonio jurídico del renunciante, por haberlos adquirido ya éste en el momento de la renuncia, ya es imposible renunciar a un derecho que todavía no ha nacido.

La renuncia expresa puede darse en diferentes momentos, así con anterioridad al matrimonio, en los pactos pre-nupciales. Por ello, es necesario analizar el valor y la eficacia de los pactos prenupciales, así como la extensión objetiva de los mismos.

7.4.1.1.- En los pactos prenupciales

Es la ley 14/1.975 de 2 de mayo la que comienza la equiparación de la mujer al hombre, eximiendo a la mujer de la licencia marital dotándola de capacidad de obrar por sí sola.

Al considerar la igualdad de los cónyuges y que la esposa no estaba bajo la autoridad de su marido, les permite pactar y, consiguientemente, permitió otorgar capitulaciones no sólo antes sino después de contraer matrimonio. Este es el primer paso para reconocer, aunque con algunas limitaciones por razones de orden público, la autonomía de la voluntad de los cónyuges. La Constitución de 1.978 y las leyes 11 y 30/1981 de 13 de mayo y 7 de julio respectivamente, desarrollan los conceptos constitucionales de igualdad y abren una interpretación jurisprudencial cada vez más favorable a la eficacia de los pactos por razón del matrimonio, para regular aspectos de éste y para convenir las consecuencias de la ruptura, incluyendo algunas cuestiones relativas a los hijos.

A la voluntad tradicional de determinación del régimen económico matrimonial, completado con algún otro pacto específico, se ha unido la aspiración de regular las consecuencias de una ruptura cada vez más previsible, delimitando el alcance que pueden tener estos pactos prematrimoniales y posteriores al matrimonio, qué materias pueden convenirse eficazmente.

Como requisito general para poder efectuar la renuncia está la capacidad. A tenor del artículo 1.323 CC⁴²⁸, en general, los cónyuges pueden celebrar entre sí toda clase de actos y contratos. Los mayores de edad son capaces para todos los actos de la vida civil, conforme al artículo 322 CC⁴²⁹.

El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación, conforme al artículo 1.329 CC⁴³⁰. Estos menores no emancipados, mayores de 14 años y menores de 18 años, a los que, a tenor del artículo 48 CC⁴³¹, el juez de primera instancia les haya concedido dispensa al efecto, con justa causa y a instancia de parte ostentaran capacidad para celebrar toda clase de contratos y, en consecuencia para renunciar.

El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutores o curadores conforme al artículo 1.330 CC⁴³². Cuando se trata de capitulaciones posteriores al matrimonio, conforme al artículo 314 CC podrán otorgarse porque en virtud del matrimonio el menor tiene lugar su emancipación⁴³³.

Pero si entre los pactos alguno de ellos consistiera en tomar dinero a préstamo, enajenación o gravamen de inmuebles, establecimientos

⁴²⁸ Art. 1.323 CC: "Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título toda clase de bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos".

⁴²⁹ Art. 322 CC: "El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales de este Código".

⁴³⁰ Art. 1.329 CC: "El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación".

⁴³¹ Art. 48 CC: "El Ministerio de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior. El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa, y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor o sus padres o guardadores. La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes".

⁴³² Art. 1.330 CC: "El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador".

⁴³³ Art. 314 CC: "La emancipación tiene lugar: 1º Por la mayor edad. 2º Por el matrimonio del menor. 3º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. 4º Por concesión judicial".

mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor, el emancipado soltero precisa del consentimiento de sus padres y a falta de ellos, el de su curador o tutor, conforme al artículo 323 CC⁴³⁴. Para estos actos, excepto tomar dinero a préstamo, si fuera casado y si se tratara de bienes comunes, si el otro cónyuge es mayor de edad basta el consentimiento de ambos, pero si éste es también menor, se necesitará el de sus padres o curador.

El artículo 1.331 CC⁴³⁵ establece que para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si viviere y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas.

7.4.1.2.- En los convenios postnupciales

Con carácter general rige el principio de autonomía de la voluntad y libertad de pactar. El artículo 1.255 CC⁴³⁶ establece que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. Los límites que señala este mismo precepto a la libertad citada están impuestos por las leyes, la moral y el orden público. La validez y eficacia no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes conforme al artículo 1.256 CC⁴³⁷, y se perfeccionan por el mero consentimiento y desde ese momento obligan al cumplimiento de lo convenido y a todas las

⁴³⁴ Art. 323 CC: “La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuese mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el del curador. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad”.

⁴³⁵ Art. 1.331 CC: “Para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas”.

⁴³⁶ Art. 1.255 CC: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

⁴³⁷ Art. 1.256 CC: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de las partes”.

consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley, conforme al artículo 1.258 CC⁴³⁸.

Conforme a la teoría general de los contratos, para que exista contrato han de concurrir consentimiento libre (sin error, violencia, intimidación o dolo), objeto y causa.

El artículo 1.323 CC⁴³⁹ autoriza a los cónyuges a celebrar entre sí toda clase de actos y contratos, con los límites legales establecidos. El artículo 1.328 CC establece dichos límites en las estipulaciones que sean contrarias a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.

Los mayores de edad son capaces para todos los actos de la vida civil conforme al artículo 322 CC⁴⁴⁰. El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación, conforme al artículo 1.329 CC⁴⁴¹. Por lo tanto, estos menores no emancipados son los mayores de catorce años y menores de dieciocho a los que a tenor del artículo 48 CC⁴⁴², el juez de primera instancia les haya concedido dispensa al efecto, con justa causa y a instancia de parte. El incapacitado judicialmente sólo

⁴³⁸ Art. 1.328 CC: “Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge”.

⁴³⁹ Art. 1.323 CC: “Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos, y celebrar entre sí toda clase de contratos”.

⁴⁴⁰ Art. 322 CC: “El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código”.

⁴⁴¹ Art. 1.329 CC: “El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación”.

⁴⁴² Art. 48 CC: “El Ministerio de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior. El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores. La dispensa ulterior convalida desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes”.

podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador conforme al artículo 1.330 CC⁴⁴³.

Cuando se trata de capitulaciones posteriores al matrimonio, aunque un consorte no haya alcanzado la mayoría, en todo caso estará capacitado por estar emancipado por el matrimonio, conforme al artículo 314. 2º CC⁴⁴⁴.

Ahora bien, si entre los pactos hay alguno que entraña tomar dinero a préstamo, enajenación o gravamen de inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor, el emancipado soltero precisa el consentimiento de sus padres y a falta de ellos, el de su curador o tutor conforme al artículo 323 CC⁴⁴⁵. Pero para estos actos – excepto el tomar dinero a préstamo – si fuera casado y se tratara de bienes comunes, si el otro cónyuge es mayor de edad, basta el consentimiento de ambos, pero si éste es también menor, se necesitará el de los padres o curador.

A estas consideraciones ha de unirse que el artículo 1.331 CC⁴⁴⁶ establece que para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas.

⁴⁴³ Art. 1.330 CC: “El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador”.

⁴⁴⁴ Art. 314 CC: “La emancipación tiene lugar: 1.- Por la mayor edad. 2.- Por el matrimonio del menor. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. 4.- Por concesión judicial”.

⁴⁴⁵ Art. 323 CC: “La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad”.

⁴⁴⁶ Art. 1.331 CC: “Para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas”.

7.4.1.3.- En las capitulaciones matrimoniales

Conforme al artículo 1.325 CC⁴⁴⁷ el contenido de las capitulaciones está delimitado por la estipulación, modificación o sustitución del régimen económico del matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, pudiendo modificarse con las formalidades que se contienen en el artículo 1.315 CC⁴⁴⁸, que determina que el régimen económico matrimonial del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, con las limitaciones legales correspondientes.

Las capitulaciones matrimoniales, que pueden otorgarse antes o después del celebrado el matrimonio, habrán de constar en escritura pública, conforme a los artículos 1.326⁴⁴⁹ y 1.327 CC⁴⁵⁰, siendo requisito de validez, ya que sin cumplimentarse dicho requisito, serán nulas, no siendo requerido para otros pactos relacionados con el matrimonio o su ruptura.

En cuanto a su contenido, referido a la determinación del régimen económico matrimonial, el artículo 1.315 CC concede prioridad a la voluntad de las partes para elegir el régimen conyugal. Sólo en defecto de la determinación de las partes en capitulaciones, el régimen económico conyugal será el subsidiario, que variará de acuerdo con la legislación aplicable al caso.

Respecto a los pactos anteriores en el matrimonio, y partiendo de la libertad de pactos que alcanza a los cónyuges o futuros cónyuges, por lo que en principio, es posible legalmente alcanzar pactos relativos a la ruptura del matrimonio.

⁴⁴⁷ Art. 1.325 CC: "En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo".

⁴⁴⁸ Art. 1.315 CC: "El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código".

⁴⁴⁹ Art. 1326 CC: "Las capitulaciones matrimoniales podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos".

⁴⁵⁰ Art. 1.327 CC: "Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública".

Por lo tanto, los pactos entre los cónyuges reguladores de su ruptura, que no han sido sometidos a la aprobación judicial, son un negocio jurídico de derecho de familia con validez de lo convenido desplegando eficacia.

Respecto a los pactos preventivos de la separación o el divorcio, dentro de los límites del artículo 1.255 CC⁴⁵¹, los cónyuges pueden celebrar válidamente convenios en previsión de las situaciones de crisis matrimonial sobre cuestiones disponibles, como lo recoge el artículo 15 del Código de Familia de Cataluña, que determina la libre regulación de las relaciones familiares, con posibilidad de incluir en las capitulaciones matrimoniales las estipulaciones y pactos lícitos en previsión de una ruptura matrimonial, que ya se recoge en el Derecho anglosajón.

La cuestión, por lo tanto, está en determinar que pactos de los que pueden hacer los cónyuges después de su matrimonio son válidos.

Conforme al artículo 751 LEC⁴⁵² se establece que no surtirán efecto, la renuncia, el allanamiento y las transacciones en los procesos de separación y divorcio, que se regulan en el Título I del Libro IV, con la excepción de las que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, todo ello con las limitaciones especificadas que se contienen en el artículo 1.328 CC⁴⁵³, sobre las leyes o las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge.

⁴⁵¹ Art. 1.255 CC: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

⁴⁵² Art. 751 LEC: “Indisponibilidad del objeto del proceso: 1.- En los procesos a los que se refiere este Título no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción. 2.- El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal excepto en los casos siguientes: 1º.- En los procesos de declaración de prodigalidad, así como en los que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, incapacitados o ausentes interesados en el procedimiento. 2º.- En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad cuando el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la acción de nulidad. 3º.- En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave. 4º.- En los procesos de separación o divorcio. 5º.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las pretensiones que se formulen en los procesos a que se refiere este Título y que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título I del Libro I de esta Ley”

⁴⁵³ Art. 1.328 CC: “Será nula cualquier estipulación contraria a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge”.

Respecto a la pensión compensatoria que se regula en el artículo 97 CC, si se firma la renuncia a la percepción de tal derecho y se incluye en el convenio regulador de la separación o divorcio, que va a regular la ruptura de dicho matrimonio y ésta tiene lugar, el pacto es válido y eficaz, al ser un pacto de carácter disponible el de la pensión compensatoria.

En cambio, si la renuncia se produce en capitulaciones matrimoniales, o en un pacto anterior al matrimonio y preventivo de la ruptura, con anterioridad a la aparición de los problemas de la pareja, se considera que es irrenunciable la renuncia a un futuro derecho a la pensión compensatoria.

Cuando se reconoce que concurre una ausencia de desequilibrio por las partes otorgantes en el convenio regulador donde se regula la ruptura del matrimonio, la renuncia será válida, cuando se reconoce que no concurren los requisitos para la fijación de la pensión compensatoria, no se trata de una renuncia realmente, ya que el derecho no existe. Pero si por el contrario concurren todos los requisitos para que nazca este derecho y se renuncia al mismo, si se produce una verdadera renuncia.

En el supuesto de la pensión compensatoria futura existen dos formas de renuncia: la renuncia a los derechos que han sido ya adquiridos, y la renuncia a la ley, voluntad de no llegar a adquirir los derechos que en aplicación de la ley podrían llegar a tener, los que no podría darse en ningún caso respecto a los alimentos futuros o al derecho de alimentos por tener una naturaleza jurídica distinta y no de carácter dispositivo como la pensión compensatoria.

Pero pese a reconocerse jurisprudencialmente la eficacia de los pactos prematrimoniales alcanzados en capitulaciones prematrimoniales relativos a la renuncia a la pensión compensatoria, si se producen cambios de circunstancias en la económica del matrimonio se podrá dejar sin efecto la aplicación de lo convenido pudiendo concederse una pensión compensatoria del artículo 97 CC.

La expectativa de un derecho o un eventual futuro derecho es renunciante, siempre que su renuncia sea clara, inequívoca, terminante y

sin dudas sobre su significado, como admite el artículo 6 CC⁴⁵⁴, y que exista un consentimiento informado para que se dé eficacia al mismo.

Para su validez, las capitulaciones matrimoniales, que podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio, habrán de constar en escritura pública conforme a los artículos 1.326 CC y 1.327 CC. Esta forma, que en las capitulaciones es requisito esencial sin el cual son absolutamente nulas, no se exige en cualquier otro pacto relacionado con el matrimonio o su ruptura. El artículo 9.3 CC⁴⁵⁵ declara la validez de los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

El contenido de los convenios puede referirse a:

a) La determinación del régimen económico matrimonial. Las capitulaciones, otorgadas antes o después del matrimonio. El artículo 1.315 CC concede absoluta prioridad a la voluntad de las partes para elegir el régimen conyugal. Sólo en defecto de determinación por las partes en capitulaciones, el régimen económico conyugal, será el subsidiario, que variará de acuerdo con la legislación aplicable al caso.

b) Pactos en capitulaciones matrimoniales referidos tanto a las consecuencias de una posible ruptura, como a las consecuencias del fallecimiento de uno de ellos o pactos sucesorios.

Los pactos contenidos en un convenio regulador de la separación o el divorcio se pueden hacer en previsión a una ruptura probable, ya contemplada, aunque no decidida todavía, para regular una separación o un divorcio inminente.

⁴⁵⁴ Art. 6 CC: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen”.

⁴⁵⁵ Art. 9 CC: “La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. 2.- Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio. La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107”.

Partiendo de la libertad de pactar, que tienen los cónyuges o futuros cónyuges, los pactos han de contener los requisitos que han de concurrir para que sean válidos dichos pactos, conforme al artículo 1.261 CC, ya se hagan en capitulaciones o en otro documento, cuestiones relacionadas con la separación o el divorcio del matrimonio, o, en casos de parejas de hecho, de la quiebra de su convivencia.

El pacto contenido en un convenio regulador debe ser considerado como un negocio jurídico de Derecho de familia que requiere la aprobación judicial, *conditio iuris*, determinante de su eficacia jurídica.

Por lo tanto, hay que concluir que los pactos entre cónyuges reguladores de su ruptura, que no han sido sometidos a la aprobación judicial, son un negocio jurídico de Derecho de familia, aunque pueda resultar ineficaz alguna de sus estipulaciones, por su contenido, sin embargo, *a priori* son válidos y eficaces.

Los pactos preventivos de la separación o el divorcio, de conformidad con el artículo 1.255 CC, puede ser válidos, ya que los cónyuges pueden celebrar válidamente convenios en previsión de las situaciones de crisis matrimonial sobre cuestiones disponibles.

Conforme al artículo 751. 1º LEC no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento, ni la transacción en los procesos a que se refiere el título I del Libro IV, entre los que se encuentran los de separación y divorcio. Pero, las pretensiones que se formulen en los procesos que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento.

Conforme al artículo 1.328 CC⁴⁵⁶ cualquier estipulación contraria a las leyes, las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge es nula.

Respecto de la pensión compensatoria del artículo 97 CC, dado el carácter disponible de la misma, el pacto limitando su cuantía, la renuncia a la percepción de esta pensión, o el reconocimiento de la inexistencia del derecho a su percepción, son válidos y eficaces.

⁴⁵⁶ Art. 1.328 CC: “Será nula cualquier estipulación contraía a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge”.

Más cuestionable es si la renuncia es válida cuando se produce en capitulaciones matrimoniales o en un pacto anterior al matrimonio y preventivo de la ruptura, si debe considerarse no válida e irrenunciable la renuncia preventiva de la pensión compensatoria, al tratarse de una renuncia a un derecho futuro, hipotético e incierto, que nace en el momento de la separación y está sujeto a la condición de que la misma produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en relación con la situación que se mantenía en el matrimonio.

Por lo que es cuestionable la eficacia de los pactos que los cónyuges puedan celebrar, relativos a una expectativa de derecho, derecho futuro o derecho condicional, es decir, no cabe admitir la renuncia preventiva de la pensión compensatoria, ya que no cabe renunciar a un derecho que aún no ha nacido⁴⁵⁷.

No obstante, cuando la renuncia figura en el convenio regulador, aunque éste preceda al nacimiento del derecho a la pensión, que surge de la sentencia que al establecer la separación o el divorcio, el hecho de que se redacte y firme precisamente para surtir efectos en la ruptura del matrimonio, permite interpretar que los otorgantes reconocen la ausencia de desequilibrio.

Cuando se habla de la eficacia de la renuncia hay que referirse a aquélla que tiene como objeto un derecho existente o que puede existir y en la que los móviles pueden ser de motivos diferentes: morales, sociales, económicos, sentimentales, de dignidad, etc. Es más, podía estar integrada la renuncia en una transacción judicial de las contempladas en el artículo 1.809 CC⁴⁵⁸, con objeto de evitar un pleito o poner término al que habían comenzado, por el mismo.

Conforme al artículo 6. 2º CC la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

⁴⁵⁷ LÓPEZ MARCO, Pilar. “*Renuncia anticipada a la compensación por desequilibrio económico derivado de la separación o divorcio*”. Comentario a la sentencia 690/2000 de 12 de diciembre de la AP Asturias (S. 5ª)”.

⁴⁵⁸ Art. 1.809 CC: “La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”.

Pero en cuanto al caso concreto de la pensión compensatoria futura, la renuncia de este derecho futuro es que tanto la base de su existencia, que es el desequilibrio y la comparación en las personas y en tiempo: la situación del otro cónyuge y anterior en el matrimonio, como las de su cuantía, no sólo cabe que se hayan modificado de forma extrema desde que se suscribió el pacto renunciatorio, sino que además estos cambios hubieran sido impensables en el momento de la firma.

Debe primar la libertad contractual, siempre que no existan cuestiones afectadas por la ley o el orden público. La disponibilidad de la pensión compensatoria debe comprender la posibilidad de renuncia preventiva. La única condición que debe contemplarse es la de eficacia del consentimiento, que debe contener una exigencia especial de que ese consentimiento sea debidamente informado.

Se plantea también la eficacia de la renuncia tácita, reconocida en general por el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor ha contemplado distintos supuestos en que ha considerado la renuncia tácita, por no reclamar la pensión oportunamente.

La pensión compensatoria debe pedirse al romperse la convivencia y la no inclusión en el convenio de la separación constituye una renuncia.

Roca Trías no se muestra favorable a la consideración de renuncia tácita la ausencia de pacto sobre la pensión en el convenio regulador. No será suficiente —dice— el silencio del acreedor, sino que debería deducirse muy claramente la voluntad del afectado. La realidad —continúa— es que estando sujeta a prescripción, mientras no transcurra el término de ella podrá pedirse la pensión⁴⁵⁹.

Existen diferentes resoluciones judiciales que exigen algo más para que el silencio se valore como renuncia tácita: que de las circunstancias se deduzca tal renuncia, sin que la simple ausencia del pacto sea suficiente para deducirla.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil las pretensiones que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente,

⁴⁵⁹ ROCA TRÍAS, Encarna. “*Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*”, tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil dirigidos por Manuel Albadalejo, Edición Revista de Derecho Privado/Edersa, 2ª Edición, Madrid 1.982. Página 644.

constituyen excepciones de las normas generales de indisponibilidad del objeto del proceso en los capacidad, filiación, matrimonio y menores y podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento conforme se recoge en el artículo 751.3 LEC.

Dentro del concepto de disposición del derecho a la pensión se plantea la posibilidad de hacerlo en favor de terceros.

Para Haza Díaz el acreedor puede ceder su crédito o sus acreedores pueden subrogarse en su derecho, ... cuando los actos concretos a través de los cuales se manifiesta el poder de disposición (transmisión, cesión, donación, etc.) no lesionen gravemente el interés de ninguno de los ex cónyuges y esa falta de perjuicio esté verificada por el juez.

Roca Trias⁴⁶⁰ distingue entre la transmisibilidad del crédito, que, por su carácter personalísimo considera improcedente y la de la deuda, amparada en la posibilidad contemplada por el artículo 101.2º CC en favor de los herederos en caso de fallecimiento del deudor. La condición de personalísimo del derecho a la pensión la excluye de la norma general del artículo 1.112 CC⁴⁶¹.

La propia Haza Díaz⁴⁶², partiendo de que es el componente alimenticio el que puede limitar la transmisibilidad del crédito, manifiesta que: *“... resulta más coherente y, sobre todo, aplicable a la pensión concretamente, partir del propio límite que impone la Ley, en cuya virtud la cantidad de dinero o de bienes en que se fija la prestación que sobrepase lo necesario para la subsistencia, está dentro del ámbito de disponibilidad de las partes, puesto que su transmisión, cesión y demás actividades en que se manifiesta no implican lesión grave para el acreedor o el deudor de la pensión”*.

En todo caso, parece admisible que el deudor pueda disponer de su crédito con consentimiento del acreedor. Si el acreedor puede renunciar a

⁴⁶⁰ ROCA TRÍAS, Encarna: *“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”*, tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil. Dirigidos por Manuel Albaladejo. Editorial Revista de Derecho Privado/Edersa, 2ª edición, Madrid 1.982. Página 621.

⁴⁶¹ Art. 1.112 CC: “Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, sin no se hubiese pactado lo contrario”.

⁴⁶² HAZA DÍAZ, Pilar: *“La pensión de separación y divorcio”* La Ley, Madrid 1.989. Página 78.

la pensión, que es lo más, evidentemente puede legítimamente realizar lo menos, que es la sustitución del deudor.

Con ello queda resuelta la posibilidad de fijar la pensión en el propio convenio. Cuestión aparte es la pensión convenida por los cónyuges en un convenio que no alcanza la aprobación judicial. Si la pensión pactada como tal se califica de compensatoria, estará regulada por los artículos 97, 99, 100 y 101 CC y será variable por otro convenio, renunciable, sólo modificable a la baja en su cuantía y transmisible a los herederos en la forma señalada por el artículo 100 CC⁴⁶³.

7.4.2.- La renuncia tácita al derecho a la pensión compensatoria

La eficacia de la renuncia tácita ha sido reconocida como tal, el no ejercicio del derecho a reclamar la fijación de la pensión, al no ser una norma de derecho imperativo sino de derecho dispositivo, que puede ser renunciada por la partes no haciéndola valer.

Esta renuncia se concreta en el no ejercicio de las acciones legales correspondientes de reclamación de dicha pensión compensatoria por no solicitarla o por no incluirla dentro de la demanda de separación o por preclusión del derecho a pedirla, incluso por no incluir la petición de la pensión compensatoria dentro del convenio regulador.

Roca Trias no es partidaria de considerar renuncia tácita a la ausencia de pacto sobre la pensión compensatoria en el convenio regulador, al entender que no es suficiente el silencio del acreedor sin más, debiendo deducirse claramente la voluntad del afectado. Sin embargo, en tanto en cuanto el derecho no prescriba, y hasta su término, podrá pedirse la pensión compensatoria, por lo que no puede valorarse como renuncia tácita la simple ausencia de pacto.

Conforme al citado artículo 751 LEC, las pretensiones que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente, constituyen excepciones de las normas generales de indisponibilidad del objeto del proceso en los de capacidad, filiación, matrimonio y menores y podrán ser objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento.

⁴⁶³ ZARRALUQUI SANCHEZ-EZNARRIAGA, Luis. *“La pension compensatoria en la nueva ley del divorcio: Temporalización y su sustitución”*. Sevilla 2.005.

7.4.3.- *La renuncia al derecho a la pensión compensatoria en favor de terceros*

Dentro del concepto de disposición del derecho a la pensión puede darse la renuncia a favor de terceros. Para Haza Díaz el acreedor puede ceder su crédito o sus acreedores pueden subrogarse en su derecho cuando los actos concretos a través de los cuales se manifiesta el poder de disposición (transmisión, cesión, donación etc...), no lesionen gravemente el interés de ninguno de los cónyuges y esa falta de perjuicio este verificado por el juez.

Roca Trías distingue entre la transmisibilidad del crédito que, por su carácter personalísimo considera improcedente y la de la deuda amparada en la posibilidad contemplada en el artículo 101 CC a favor de los herederos en caso de fallecimiento del deudor. La condición de personalísimo del derecho a la pensión compensatoria la excluye de la norma general del artículo 1.112 CC⁴⁶⁴. La cantidad de dinero o de bienes en que se fija la prestación que sobrepase de lo necesario para la subsistencia esta dentro del ámbito de disponibilidad de las partes, puesto que su transmisión , cesión y demás actividades en que se manifiesta no implican lesión grave para el acreedor o el deudor de la pensión.

En todo caso, parece admisible que el deudor pueda disponer de su crédito con consentimiento del acreedor. Si el acreedor puede renunciar a la pensión compensatoria, puede también sustituir al deudor⁴⁶⁵.

⁴⁶⁴ Art. 1.112 CC: "Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario".

⁴⁶⁵ DIAZ MASEDA, Sandara. "Revista de Derecho UNED", Numero 2, 2.007, Páginas 243 y ss.

CAPÍTULO X

TEMPORALIDAD DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

No siempre el otorgamiento de la pensión compensatoria ha tenido carácter temporal, antiguamente su carácter era vitalicio, de hecho la temporalidad de la pensión compensatoria ha sido obra de la iniciativa de jueces y magistrados que ante la realidad en las situaciones fácticas a enjuiciar comenzaron a interpretar la ley que no lo decía expresamente, pero que al no prohibirlo se pudo comenzar a limitar en el tiempo la concesión de este derecho. Han sido los jueces y tribunales los que se han adelantado a la regulación legal para que se recogiera expresamente esta limitación temporal.

8.1.- En la Ley 30/1981, de 7 de julio

8.1.1.- Antecedentes

La finalidad compensatoria del desequilibrio económico producido por la separación o el divorcio, tiende a colocar al beneficiario en potencial igualdad de oportunidades a la que habría tenido de no haber mediado el anterior vínculo matrimonial. Aunque la posible temporalidad de la pensión no la contemplaba expresamente el Código Civil en su versión original, la opinión judicial más generalizada fue poco a poco limitando temporalmente la pensión cada vez más.

Los tribunales -con alguna excepción- venían señalando que no puede admitirse con carácter general e indiscriminado la concepción de la pensión como una pensión vitalicia. Finalmente la Audiencia no se pronunció sobre esta posible nulidad argumentando que nadie la había planteado, por lo que, fieles al principio de rogación, no podían resolver sobre ella.

Sí lo hace, por contra, el Código de Familia de Cataluña, después de amplia polémica entre las dos Secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona dedicadas a Familia. El artículo 86 Código de Familia Catalán

reconoce que el derecho a la pensión compensatoria se extingue: “d) Por el transcurso del plazo por el que se estableció”.

Existe una consolidada línea jurisprudencial menor que analiza e interpreta el alcance y contenido del derecho a la pensión compensatoria regulado en el artículo 97 CC, que señala que dicha pensión se configura como un derecho relativo, condicional y, sobre todo, limitado en el tiempo.

La temporalización de la pensión compensatoria ha tenido lugar debido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la STS, 1ª, de 10 de febrero de 2.005, dictada en recurso en interés casacional, que puso fin a la diversidad de resoluciones de los distintos órganos judiciales y después a una modificación legislativa -la Ley 15/2.005 de 8 de julio-, que resuelve el tema en cuanto a la posibilidad de poner un límite temporal, aunque no en relación con los factores o elementos a tener en cuenta para hacerlo y de qué forma determinarlo.

En su nueva redacción, el artículo 97 CC señala que: *“El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia”*.

Si no hay tal acuerdo, *“el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias”* que seguidamente especifica, y son determinantes para fijar la cuantía, pero no la procedencia de la pensión, ni la oportunidad de temporalizarla, ni, en caso positivo, la concreción del tiempo de vigencia, ni la posibilidad de que sea una pensión o una prestación única.

De la evolución de la pensión en su temporalización, se pueden deducir diferentes consecuencias en cuanto a la respuesta a los diversos interrogantes⁴⁶⁶.

El tema de la temporalidad de la pensión compensatoria se deduce de la propia norma y regulación, que no exige que la pensión compensatoria

⁴⁶⁶ RUIZ-RICO RUIZ-MORON, Juan. “La concesión temporal de la Pensión por desequilibrio económico”.

sea vitalicia o indeterminada⁴⁶⁷. El artículo 101 CC habla de su extinción por el cese de la causa que la motivó y no hay razón alguna para entender excluida como tal causa el mero transcurso del tiempo, si era temporal.

A este respecto las circunstancias que han determinado la imposición de la pensión compensatoria dependen de la situación personal, familiar, laboral y social del beneficiario, condicional, ya que una modificación de las concretas circunstancias concurrentes al momento de su concesión o reconocimiento puede determinar su modificación o supresión -artículos 100 y 101 CC-. Y, además, limitado en cuanto al tiempo de duración, por cuanto que su legítima finalidad no es otra que paliar el desequilibrio económico producido a uno de los cónyuges por la crisis del matrimonio, separación o divorcio, colocándole en una situación de potencial igualdad de oportunidades a la que habría tenido de no haber mediado el anterior vínculo matrimonial. No pudiéndose admitir con carácter general e indiscriminado la concepción de dicha pensión como una especie de pensión vitalicia, a virtud de la cual el beneficiario tendía un derecho de tal naturaleza frente al otro.

No se deben confundir las causas extintivas del derecho del artículo 101 CC con las causas modificativas del artículo 100 CC, y ello independientemente de la posibilidad de considerar una alteración sustancial como causa extintiva, dado el carácter genérico del artículo 101 CC.

La modificación posterior de la pensión va referida a la fijación del derecho y no a su nacimiento. Lo mismo que las ocho circunstancias tipificadas como “*numerus apertus*” en el citado artículo 97 CC, respecto a los cuales también tiene trascendencia la temporalidad, no respecto a la estructura de la pensión compensatoria sino como término cuantitativo de la misma.

En favor de la temporalización de la pensión compensatoria se argumentaban las siguientes razones:

a) Aunque la ley no establecía (hoy ya sí lo hace) expresamente esta posibilidad, no la prohibía.

⁴⁶⁷ MARTIN GARCIA DE LEONARDO, Teresa. La temporalidad de la pensión compensatoria. Editorial Tiran Lo Blanch. Valencia 1.997. Página 66.

b) El derecho a la pensión compensatoria es limitado en el tiempo.

c) No es un derecho absoluto ni vitalicio, sino por el contrario, relativo y limitado.

El concepto y naturaleza de la pensión compensatoria no es la de ser equivalente a una de carácter vitalicio, aunque el mero transcurso del tiempo no conlleva, sin más, su extinción o limitación temporal. Sin embargo, habrá de estarse al momento inicial de su concesión, porque si en tal momento, aunque existiera un real desequilibrio económico, éste tenía un carácter meramente coyuntural o temporal, de tal forma que era susceptible de ser superado en un tiempo limitado con una “normal implicación por parte del beneficiario de la pensión”, en tal caso es posible cuestionarse, ya su extinción, ya su limitación temporal, según las circunstancias del caso, una vez haya transcurrido aquel periodo limitado.

d) No es una póliza de seguro vitalicia, debe estar limitada en el tiempo, salvo casos excepcionales.

e) No es una renta vitalicia.

f) La propia ley en su artículo 101 CC, prevé la extinción, entre otras razones, cuando el desequilibrio haya desaparecido, por lo que cabe la posibilidad de que el propio juez fije en la sentencia la duración de pensión, como tiempo en el que el desequilibrio ha de permanecer.

g) La temporalidad es uno de los condicionantes que pueden establecerse al otorgarse la pensión.

h) Aunque no esté expresamente establecido, si cabe o no, la extinción, modificación o sustitución de la pensión, ningún obstáculo debe ponerse a la delimitación temporal de su duración, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en cada caso.

i) La actualización es una forma de previsión de futuro sobre la situación patrimonial de los cónyuges, realizando un juicio probabilístico, según el cual el acreedor se incorporará dentro de un plazo determinado al mercado laboral.

j) No es ilegítima la coacción judicial a través de la limitación temporal para que el beneficiario se sitúe en posición de ganarse la vida por sí mismo, sino que es una aplicación de los principios de los artículos 14 CE (igualdad) y 35 CE, que no sólo establece el derecho, sino también el deber de trabajar.

k) La temporalización está conforme con la naturaleza de la institución y con el principio de buena fe que debe presidir el ejercicio de los derechos que se regula en el artículo 7.1 CC.

l) La limitación temporal se corresponde con una interpretación conforme a la realidad del tiempo actual del artículo 3.1 CC. El riesgo que en la práctica presenta la atribución de pensiones compensatorias indefinidas que incentiven la dejadez, la pereza y ociosidad del favorecido, que pudiendo acceder al mercado de trabajo no lo hace.

m) No es una renta absoluta e ilimitada en el tiempo, porque sería insoportable para el obligado a abonarla y un beneficio o enriquecimiento injusto para quien la recibe, debiendo conectarse necesariamente con la posibilidad de rehacer la vida y conseguir un estatuto económico autónomo para el cónyuge perjudicado.

Existen también razonamientos en contra de esta limitación en el tiempo:

a) Las modificaciones en la pensión han de ser por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno y otro cónyuge, pero sobrevenidas, no adivinadas.

b) La ley no autoriza en precepto alguno, una restricción temporal, ni caben otras causas de extinción que las establecidas en el artículo 101 CC ya que no está previsto expresamente en el Código Civil que la pensión compensatoria se pueda limitar temporalmente.

c) La no temporalidad de la pensión no excluye que sea un derecho relativo, puesto que para su concesión y fijación de la cuantía se han de tener las circunstancias previstas en el artículo 97 CC.

d) Las circunstancias previstas en el artículo 97 CC sirven para conceder la pensión compensatoria y fijar su cuantía, pero no para limitarla temporalmente.

e) La no temporalidad no excluye la relatividad de este derecho, que se deduce, además, por ser un derecho que se puede modificar y se extingue cuando se alteran las circunstancias que han propiciado la concesión de la pensión compensatoria y su cuantía conforme al artículo 100 CC.

f) Cabe la sustitución de la pensión compensatoria por una prestación única conforme al artículo 99 CC.

g) La limitación temporal de la pensión impide que, una vez concluido el plazo fijado, no se pueda conceder nuevamente una pensión aun siendo las circunstancias las mismas que sirvieron de base para conceder la pensión compensatoria.

h) La limitación temporal puede dar lugar a situaciones de clara desprotección para el cónyuge cuya economía se ha empeorado como consecuencia de la separación judicial o del divorcio.

i) Cualquier fórmula de “reactualización” de la pensión compensatoria que se ha extinguido por haber expirado el plazo supone ir más allá de la ley.

j) Las cuantías que se conceden son casi siempre insuficientes para vivir dignamente por lo que el cónyuge desfavorecido económicamente, sobre todo cuando se es aún joven, se ve obligado a mejorar su situación lo que propiciará, en su caso, la modificación o la extinción de la pensión compensatoria.

k) Nada se opone a que la pensión compensatoria pueda ser vitalicia y esa posibilidad se desprende de las normas contenidas en el Código Civil.

l) La norma que previene que sólo podrá ser modificada la pensión por alteraciones sustanciales en la fortuna de los cónyuges, contiene una expresa prohibición de limitar temporalmente, por establecer expresamente que es éste el único medio de alteración y determinar el artículo 101 CC cuáles son las causas de extinción.

m) La *ratio* de los artículos 97, 99, 100 y 101 CC, no era la de dar un carácter temporal a la pensión compensatoria.

n) No es posible para un Tribunal determinar *a priori* el momento de extinción por encontrar el deudor un empleo.

ñ) Salvo excepciones en que pueda dilucidarse, de forma cierta y determinada, el tiempo de persistencia del desequilibrio, no puede juzgarse *a priori* el período de vigencia del derecho.

o) La pensión es de carácter indefinido y no vitalicio y sujeta a su extinción por el cese de la causa que la motivó.

p) El criterio sostenido de la perpetuidad por vida debe ir acompañado de una racionalidad imprescindible al tiempo de establecer el impone de la pensión, que deberá hacerse con criterios de moderación acordes con el caso concreto en que proceda fijarla.

Con independencia de los ya mencionados, existen otros motivos que avalan la limitación temporal del derecho a la pensión compensatoria.

También puede considerarse que la temporalización tiene presente la dignidad de la persona del acreedor y los derechos de los demás, y que no sería equitativo el mantenimiento indefinido del derecho a la pensión, puede representar un impedimento para el derecho del deudor a rehacer su vida. El carácter ilimitado en el tiempo, constituye, sin duda, una carga insostenible para el deudor y un beneficio o enriquecimiento injusto para el acreedor, que debe conseguir un *status* económico autónomo.

Debe, también, tenerse en cuenta la finalidad de la temporalización, que es colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades (singularmente laborales y económicas) a la que habría tenido de no haber mediado el anterior matrimonio. Cada cónyuge, dentro de sus posibilidades, debe procurarse un medio autónomo de subsistencia, en cumplimiento de la obligación que impone el artículo 35 CE, en consonancia con los elementales principios de autoestima y de valoración de la propia dignidad.

Habiendo desaparecido la vida en común, cada cónyuge debe procurarse, dentro de sus medios y circunstancias, un medio autónomo de subsistencia, sin que el hecho del matrimonio y la duración del mismo sirvan para una determinación automática e indefinida del derecho a la pensión compensatoria.

Por otra parte, la intemporalidad podría fomentar que el acreedor se abstuviese de intentar un puesto de trabajo, aun teniendo posibilidad de lograrlo, para persistir en la percepción de la pensión.

La finalidad equilibradora que busca el artículo 97 CC de colocar al perjudicado en una situación de potencial igualdad de oportunidad (singularmente laborales y económicas), puede cumplirse de manera más eficaz y equitativa en algunos casos, dotando a la pensión de una duración temporal.

La determinación de una limitación temporal sólo es posible cuando las circunstancias del acreedor evidencien que el desequilibrio es susceptible de ser superado en un tiempo limitado, con una implicación normal del acreedor en la superación de tal desequilibrio, como ocurre, por ejemplo, cuando existe la posibilidad de que el acreedor acceda a un trabajo que anteriormente haya desempeñado y al que, por excedencia u otra razón, no pueda reincorporarse de inmediato o cuando su formación así lo hace razonable.

Han de valorarse positivamente, para limitar temporalmente la pensión compensatoria, circunstancias tales como la corta duración del matrimonio, la inexistencia de hijos, la juventud del acreedor, la asunción de la custodia de los hijos por el deudor o la posibilidad de mercado de trabajo.

En el orden temporal, son valorados en repetidas resoluciones judiciales, de una parte que el mayor perjuicio producido por la separación o el divorcio sea temporal, así como el hecho de que el acreedor pueda superar, en un tiempo limitado, la situación de empeoramiento económico producida a raíz de la ruptura matrimonial o que el desequilibrio sea temporal o coyuntural y susceptible de ser superado en un tiempo limitado, con normal implicación del acreedor, lo cual exigirá la acreditación de la real y efectiva posibilidad de acceso a un empleo.

Y la jurisprudencia coincide en estimar que no procede la limitación temporal de la pensión compensatoria en los casos en que el cónyuge receptor que ha dedicado toda su vida al sostenimiento y cuidado de una familia, sin actividad laboral remunerada y ya en edad madura, sin cualificación profesional suficiente, que ve frustrado su proyecto vital, por la separación o el divorcio, en cuyo supuesto hay que concederle una pensión ilimitada en el tiempo, que le permita hacer frente a sus necesidades vitales, a cargo de quien se benefició de sus trabajos y esfuerzos. Tampoco consideran los Tribunales que se debe temporalizar en base a expectativas hereditarias del beneficiario.

En cualquier caso con anterioridad a su regulación legal diversos expertos en la materia se habían pronunciado claramente en favor de que la pensión entre los esposos se estableciese con carácter temporal, para permitir que el acreedor accediese a su independencia económica respecto del otro cónyuge.

*8.1.2.- Requisitos para la temporalización de la pensión compensatoria*⁴⁶⁸

a) Para que pueda ser temporalizada la pensión, ha de ser pedida expresamente. Incidiría en incongruencia la sentencia al señalar un límite temporal no solicitado por el obligado al pago, que no discute la procedencia del derecho, aunque sí podría limitarla si el deudor se opone totalmente al derecho. Tampoco se incurriría en incongruencia si se pide la extinción y se concede por tiempo limitado. Finalmente, puede introducirse la cuestión en segunda instancia.

b) La limitación debe establecerse en la sentencia que determina la pensión compensatoria, pero también puede hacerse al inicio o a lo largo de la percepción, o limitarse posteriormente en proceso de modificación de efectos de la separación o el divorcio, por cambio de circunstancias. Es válida la temporalidad de la pensión compensatoria establecida en convenio regulador, pero pactada indefinida en dicho convenio, no cabe temporalizarla en la sentencia, aunque podría hacerse en proceso de modificación de medidas por modificación sustancial de las circunstancias.

⁴⁶⁸ GONZALEZ POVEDA, Pedro. “*La pensión compensatoria temporal*”, Diez años de abogados de familia, coordinado por Cristina de Andres Irazabal y Gloria Hernández Catalán. 2.003. Páginas 21-32.

La pensión compensatoria establecida de forma temporal puede ser modificada, si se ha establecido la limitación temporal en base a unas expectativas, de no cumplirse la previsión puede modificarse tal temporalización.

La pensión compensatoria puede extinguirse por una de las causas generales contempladas en el artículo 101 CC, antes del vencimiento del plazo de limitación temporal o si, por ejemplo, antes del transcurso del plazo, el acreedor encuentra trabajo, en cuyo caso, el deudor puede pedir la extinción. Pero extinguida la pensión compensatoria por cumplimiento del plazo establecido, no puede rehabilitarse.

La jurisprudencia menor viene aceptando un límite temporal a la pensión compensatoria por desequilibrio en supuestos de cortos períodos de convivencia unidos a la edad apta para el trabajo de los cónyuges, pues no puede convertirse el matrimonio en una fuente indefinida de ingresos, debiendo atender esta pensión a paliar el desequilibrio económico en tanto organiza nuevamente el cónyuge desfavorecido su situación personal y patrimonial, accediendo al mercado laboral. Tal límite temporal ha de establecerse en el momento inicial de concertarse la pensión compensatoria, pues no fijado entonces, no cabe ponerle fin ulteriormente sino por las causas legalmente previstas al efecto en el artículo 97 CC.

8.2.- La Ley 15/2005, de 8 de julio

En su artículo nueve, modifica el artículo 97 CC y cambia su redacción⁴⁶⁹. Basicamente la modificación consiste en la posibilidad de que en el caso de que se produzca un desequilibrio económico entre un cónyuge y el otro, y ello implique un empeoramiento con respecto a la situación que tenía durante el matrimonio, tendrá derecho a una

⁴⁶⁹ Art. 97: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1.^a Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 2.^a La edad y el estado de salud. 3.^a La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 4.^a La dedicación pasada y futura a la familia. 5.^a La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6.^a La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 7.^a La pérdida eventual de un derecho de pensión. 8.^a El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 9.^a Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad”.

compensación. Esta compensación económica, y aquí estriba la modificación legal, podrá consistir en una pensión con duración temporal o vitalicia, y mediante una prestación única según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

Continúa la regulación legal, otorgando prevalencia a los acuerdos a de los cónyuges, pero si estos acuerdos no son posibles, a falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe. Así mismo, En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y *las* garantías para su efectividad, como puede ser el embargo de la nómina u otras garantía de analoga eficacia.

La determinación del importe de la pensión compensatoria la puede determinar el Juez, atendiendo a las circunstancias que debe tener en teniendo en cuenta y que se circunscriben a la edad y estado de civil de ambos cónyuges, si tienen una determinada cualificación profesional, todo ello dirigido a comprobar las probabilidades de acceso a un empleo que reducirían o anularían el desequilibrio económico. Si uno de los cónyuges en menoscabo de su profesión o trabajo fuera del hogar se ha dedicado a la familia. Incluso la colaboración profesional en las actividades del otro cónyuge. La duración del matrimonio, esto es, el numero de años casados, y de convivencia conyugal, la posibilidad o hecho de la perdida de un derecho de pensión. Los medios económicos de ambos, sus necesidades y posibilidades, y cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante o trascendente a los efectos del otorgamiento de la pensión compensatoria.

La Exposición de Motivos de la reforma no dedica ni una línea a la pensión compensatoria. Aunque de modo insuficiente se ocupe de este tema, esta ausencia de explicación de las razones que mueven al legislador a proponer esta modificación legal revela que ha faltado voluntad de realizar la reforma total que el transcurso del tiempo, la deficiencia inicial de la ley y el cambio de la sociedad española durante estos años, exigían.

Por ello, materias como el uso de la vivienda familiar, con su enorme trascendencia en la familia y su crisis, se dejan aparte. Los efectos, medidas o consecuencias de la separación o el divorcio no merecen la atención del legislador.

Esta revisión de la normativa vigente, que no abarca la totalidad de las cuestiones pendientes, ni resuelve las contradicciones interpretativas

en muchas materias, manteniendo la inseguridad jurídica vigente, parece que, en materia de pensión compensatoria afronta las dos cuestiones básicas: limitación temporal y pago de una sola vez.

Con respecto a la temporalización, sin dar más pautas ni especificar más condiciones, va a venir a reconocer la posibilidad de limitar el plazo de percepción de la pensión. La realidad es que la STS de 10 de febrero de 2005, se ha adelantado al legislador y le ha arrebatado la oportunidad de haber cosechado un éxito de oportunidad.

El contenido básico de la reforma se centra en:

A) Sustituir “el derecho a una pensión” por “el derecho a una compensación”. Esta modificación de su denominación es consecuencia de la posibilidad de que no consista en una prestación periódica, por lo que debe dejar de llamarse *pensión*. Al mismo tiempo confirma su naturaleza jurídica compensatoria, distinta de la alimenticia.

B) Añadir *que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido*. A este respecto, se confirma que, al igual que ocurre en el Código de Familia de Cataluña en su artículo 86.1.d) y conforme al criterio favorable del Consejo de Europa, la pensión puede limitarse temporalmente.

Por otra parte, ya lo había resuelto de esta forma la STS, 1ª, de 10 de febrero de 2005, dilucidando la controversia doctrinal existente. Quizá hubiera sido útil determinar algunas de las circunstancias necesarias para la temporalización, aunque existe un cuerpo doctrinal abundante a estos efectos.

La jurisprudencia menor tiende a concederla por el tiempo que permita al acreedor obtener una posición económica ajustada a la nueva realidad, teniendo en cuenta las circunstancias y, de modo especial, la duración de la convivencia y del matrimonio, la cualificación laboral del acreedor y posibilidad de acceso a un empleo y, en su caso, la liquidación de la sociedad de gananciales y sus consecuencias.

Este período ha de ser razonable, según las circunstancias, para que cada uno se procure los medios económicos necesarios para su sostenimiento, sin gravarse un cónyuge al otro. También puede ligarse a

alguna circunstancia familiar, como la mayoría de edad de los hijos. La expresión por tiempo indefinido, evidentemente es más acertada que la inicial del anteproyecto que la denominaba vitalicia.

C) Añadir, “o en una prestación única”. En cuanto a la prestación única también podría señalarse los criterios para su determinación, que hasta ahora sólo por acuerdo de las partes, podía tener efectividad. En todo caso, la apertura del abanico de posibilidades, es acertado.

D) Añadir antes de la relación de circunstancias a tener en cuenta para fijar la pensión -ahora compensación- que el Juez determinará su importe en sentencia, sólo a falta de acuerdo de los cónyuges.

E) Aunque al referirse a las circunstancias ya se establecía en la redacción originaria, que la relación no era exhaustiva al señalar que las expresadas lo eran “entre otras”, la reforma establece la adición de una 9ª genérica de “cualquier otra relevante”.

8.3.- Criterios jurisprudenciales

La STS, 1ª, de 10 de febrero de 2.005, puso fin a la discusión sobre la posibilidad de limitar temporalmente, inclinándose claramente por la posibilidad de hacerlo, de forma que cabe deducir también consecuencias respecto de los casos en que procede y factores a ponderar:

“PRIMERO.- En el presente recurso de casación se plantea el tema de interés casacional relativo a si el artículo 97 del Código Civil permite fijar la pensión compensatoria con carácter temporal a cuyo efecto se afirma la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, se plantean dos cuestiones, a saber: con carácter principal, determinar si el artículo 97 CC, en relación con los artículos 99, 100 y 101 CC, permiten la temporalización de la pensión compensatoria, y en caso afirmativo, por consiguiente con carácter eventual y derivado, determinar si dicha posibilidad cabe en el caso concreto que se enjuicia.

SEGUNDO.- La problemática objeto de enjuiciamiento es la consecuencia de los avatares sufridos por la figura de la pensión compensatoria (desde su introducción en el año 1.981) y la incidencia de diversos factores, sobre todo sociales –y singularmente la condición de la mujer en el matrimonio y en el acceso al mundo derecho absoluto, ni vitalicio, sino, por el contrario, como relativo y circunstancial y especialmente limitado en cuanto al tiempo, pues su legítima finalidad no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de -singularmente laborales y económicas- a las que habría tenido de no haber mediado tal vínculo matrimonial...”

TERCERO.- Como consecuencia de lo razonado, al estimarse fundado el recurso, de conformidad con lo establecido en el artº 487.3 LEC, debe casarse la

resolución recurrida en el tema concreto relativo a la cuestión de interés casacional, resolviendo sobre el caso y declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiese producido la contradicción jurisprudencial, todo ello sin hacer pronunciamiento en costas por aplicación del artº 398.2 LEC”.

La importante STS, 1ª, de 10 de febrero de 2005, mencionada, tomó en cuenta para temporalizar la pensión en el divorcio (ya existía en la separación sin límite temporal), los siguientes hechos:

- 1.- Fecha de matrimonio: 17 de enero de 1.986;
- 2.- Separación conyugal acordada el 15 de febrero de 1.999;
- 3.- Convivencia efectiva: doce años hasta la separación
- 4.- Edad de la esposa: 40 años.
- 5.- Existencia de un único hijo de 10 años, bajo la custodia de la madre.
- 6.- Dedicación de la mujer al cuidado del esposo, hijo y hogar conyugal;
- 7.- Situación de gran invalidez del marido, con necesidad de una tercera persona para que le auxilie en las múltiples actividades cotidianas, aunque tiene "un importante patrimonio mobiliario del que disfruta, de más de 100 millones de pesetas";
- 8.- Los dos son condóminos de dos inmuebles que ocupan respectivamente;
- 9.- Capacitación profesional de la esposa y posibilidad de obtener una ocupación remunerada después de un periodo de "reciclaje" de conocimientos para recuperar los varios años de alejamiento de su actividad profesional.

Tomando como base todo ello, estableció la pensión compensatoria con una duración de casi cinco años.

Aún cuando la sentencia no precisa de más comentarios, se ha de recalcar que se subraya el efecto impulsor que la temporalización ha de tener para la corrección del desequilibrio por la parte con más desventaja.

Por otra parte, también determina la Sentencia que una cosa es la posibilidad de limitar temporalmente la pensión y otra muy distinta que tal sea la norma. El Tribunal Supremo, haciendo hincapié en la dificultad de relacionar los supuestos que han de justificar esta limitación, pone algunos ejemplos de casos o circunstancias, que pueden justificar tal límite.

La pensión compensatoria se ha de conceder al cónyuge que sufra un empobrecimiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfrutaba el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre dos patrimonios.

El tema se concretaba con anterioridad a la reforma legal en la determinación de si la fijación de una pensión compensatoria temporal está o no prohibida por la normativa legal, y si tal posibilidad, según las circunstancias del caso, puede cumplir la función reequilibradora, es decir, puede actuar como mecanismo corrector del desequilibrio económico generado entre los cónyuges como consecuencia inmediata de la separación o divorcio -que constituyó la *condictio iuris* determinante del nacimiento del derecho a la pensión-.

A favor y en contra, especialmente en cuanto a la primera perspectiva, se han multiplicado los argumentos de los respectivos partidarios de las posturas, muchos de ellos generados o asumidos por las resoluciones de las Audiencias Provinciales, que han llevado a cabo un encomiable esfuerzo discursivo y entre la multiplicidad de argumentos cabe indicar:

1º.- En contra de la temporalización se ha dicho que: el precepto del artículo 97 CC no la establece; se trata de una omisión voluntaria del legislador, que si la hubiera querido prever la hubiera establecido; es contraria a la "*ratio*" del precepto; contradice la literalidad de los artículos 99 y 101 CC; quedarían sin contenido los artículos 100 y 101; supone una condena de futuro sin base legal; significaría adoptar una decisión sin ninguna base cierta; y que la pensión compensatoria "tiene una vocación natural de perpetuidad, y que si la causa originadora de la misma es el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce a un cónyuge en relación a la posición del otro, dicha circunstancia, que se constata al término de la convivencia conyugal, en principio se proyecta estáticamente hacia el futuro, por lo que debe presumirse que subsiste hasta tanto no se acredite un cambio de fortuna en el acreedor, sin que sea posible suponer apriorísticamente que la suerte del beneficiario de la pensión evolucionará necesariamente hacia mejor, y menos que lo haga en un determinado periodo de tiempo.

2º.- Y en favor se sostiene que el artículo 97 CC no la recoge expresamente, pero tampoco la excluye, no contradice los artículos 99, 100 y 101 CC, y en absoluto es contrario a la "*ratio*" legal. El artículo 97 no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges separados o divorciados, sino que la *ratio* del precepto es restablecer un desequilibrio que puede ser coyuntural, y la pensión compensatoria aporta un marco que puede hacer posible o contribuir a la readaptación; y en sintonía con lo anterior también se destaca que la legítima finalidad de la norma legal no puede ser otra que la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, perfectamente atendible con la pensión temporal.

Asimismo se dice, que no constituye una renta vitalicia, póliza de seguro vitalicio o garantía vitalicia de sostenimiento, ni puede operar como una cláusula de dureza; que el matrimonio no crea un derecho a percibir una pensión, y que el derecho a la pensión compensatoria tiene carácter relativo, personal y condicionada, que la temporalización puede desempeñar una función instrumental de estimulación o incentivo indiscutible para el perceptor en orden a obtener el reequilibrio a través de la autonomía económica, entendida como posibilidad de desenvolverse autónomamente, y, en concreto, hallar pronto una colocación laboral o profesional, (y en sintonía con el planteamiento esbozado se habla de "evitar la pasividad en la mejora de la situación económica, combatir el desentendimiento o inactividad del acreedor en orden a obtener una ocupación remunerada, buscar o aceptar una actividad laboral").

Se hace especial hincapié en que "se potencia el afán de reciclaje o reinserción en el mundo laboral" por lo que cumple una finalidad preventiva de la desidia o indolencia del perceptor, y supone un signo de confianza en las posibilidades futuras de reinserción laboral. También se resalta que no cabe dejar en manos de una de las partes que la situación económica cambie a su antojo o comodidad, o dependa del propósito de perjudicar al otro, con lo que se evitan situaciones abusivas y se previenen conductas fraudulentas, tanto del acreedor como del deudor; evita la incertidumbre o situaciones de excesiva provisionalidad y se aduce el carácter dispositivo -se trata de materia sujeta a la disposición de las partes en cuanto está basada en un interés privado, y por ello es renunciable, transaccional, convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo.

Por consiguiente la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida -vitalicio-. Por otro lado, el contexto social permite y el sentir social apoya una solución favorable a la pensión temporal, por lo que la misma cuenta con un soporte relevante en una interpretación del artículo 97 CC adecuada a la realidad social actual, prevista como elemento interpretativo de las normas en el artículo 3.1 CC, con arreglo al que "se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Sin embargo, para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad -"*ratio*"- de la norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia.

De lo dicho se deduce que la ley, no prohíbe la temporalización, se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Ergo, debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación.

Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, cabe citar: la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar ya los hijos, cuántos de éstos hijos precisan atención futura, estado de salud, y su recuperabilidad, trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-, posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio), preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc.

Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la

prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección.

En la línea discursiva expresada se manifiesta la más reciente doctrina científica y jurisprudencia de las AAPP y del Tribunal Supremo, en la citada sentencia al pronunciarse por primera vez y sentar como doctrina jurisprudencial la posibilidad de establecer una duración limitada para la pensión compensatoria del artº 97 CC, siempre que cumpla la función reequilibradora por concurrir presupuestos conocidos que acrediten una base real para dicha limitación temporal.

Concreción del tiempo.- En cuanto a los plazos concretos, la jurisprudencia menor tiende a concederla por el tiempo que permita al acreedor obtener una posición económica ajustada a la nueva realidad, teniendo en cuenta las circunstancias y, de modo especial, la duración de la convivencia y del matrimonio, la cualificación laboral del acreedor y posibilidad de acceso a un empleo y, en su caso, la liquidación de la sociedad de gananciales y sus consecuencias. Este período ha de ser razonable, según las circunstancias, para que cada uno se procure los medios económicos necesarios para su sostenimiento, sin gravarse un cónyuge al otro. También puede ligarse a alguna circunstancia familiar, como la mayoría de edad de los hijos. En la práctica, comúnmente se acuerdan las pensiones por plazos de dos años, tres años (por aceleración en las relaciones sociales, y en las posibilidades de remontar las consecuencias adversas de separación o el divorcio) y 5 años. El plazo más común es la fijación por el plazo de un año, limitada casi exclusivamente a matrimonios de duración singularmente escasa, o por plazo, también excepcional, de diez años.

La STS, 1ª, de 28 de abril de 2.005, siendo ponente D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, reitera lo manifestado en la anterior sentencia sobre la

posibilidad de limitar temporalmente la pensión compensatoria, inclinándose claramente por la posibilidad de hacerlo, de forma que cabe deducir también consecuencias respecto de los casos en que procede y factores a ponderar. En este supuesto se plantea la duración de la pensión compensatoria a un plazo de dos años, solicitando la parte recurrente que se deje sin efecto su temporalidad utilizando el cauce para el acceso a la casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, el previsto en el artículo 477. 2. 3º, del *interés casacional*, apareciendo invocado el caso de la "jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales".

El Tribunal Supremo, con el fin de crear uniforme doctrina jurisprudencial, siempre que el recurrente invoque una o varias infracciones legales relevantes para la casación de la sentencia de segunda instancia, opera el "interés casacional" como un requisito de recurribilidad, esencial en el sistema, pero funcionalmente distinto al motivo del recurso, de ahí que la contradicción entre Audiencias Provinciales –al igual que la oposición a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o la inexistencia de ésta en relación con normas nuevas– opere como presupuesto, diferenciado de la infracción, con trascendencia, eso sí, para la función uniformadora de la jurisprudencia, al contemplar el artículo 487.3 de la LEC que la Sala, con alcance general, solventa la divergencia entre órganos jurisdiccionales de segunda instancia y mantenga, cambie o genere doctrina jurisprudencial, según sea el supuesto del *interés casacional* que concurra.

En dicha sentencia se expresa literalmente: *el recurso se ha justificado el requisito, en la fase de preparación del recurso de casación, acreditándose la existencia de contradicción sobre la temporalidad de la pensión compensatoria, al considerar la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, que la pensión compensatoria no puede limitarse temporalmente, como se recoge en las sentencias de 15 de mayo de 2000 y 29 de enero de 2001, mientras que se admite tal posibilidad por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Quinta, en las sentencias de 26 de enero y 18 de octubre de 2000 . Igual infracción que la denunciada en este recurso, y el mismo caso de "interés casacional", fueron estudiados en la sentencia de esta Sala, de fecha 10 de febrero de 2005, en el recurso 1876/2002 , en la que se dejó sentada la doctrina sobre la posibilidad de limitar temporalmente la pensión compensatoria, en los siguientes términos:*

"La problemática objeto de enjuiciamiento es la consecuencia de los avatares sufridos por la figura de la pensión compensatoria (desde su introducción en el año 1.981) y la incidencia de diversos factores, sobre todo sociales -y singularmente la condición de la mujer en el matrimonio y en el acceso al mundo laboral-, que han dado lugar a un importante cambio de opinión en la doctrina científica y la práctica forense, y una notoria evolución de la jurisprudencia de las Audiencias, que, si bien en un principio se mantuvieron fieles a la opinión claramente dominante de que la pensión debía ser vitalicia, sin embargo, singularmente, a partir de los años 90, comenzaron a mostrarse favorables a la temporalización -unas veces, en circunstancias excepcionales; y otras, con mayor flexibilidad-, hasta el punto de que en la actualidad tal corriente favorable es claramente mayoritaria.

El artículo 97 CC dispone que "el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:". Del precepto se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora.

Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios".

La realidad social que es cómo han de ser interpretadas las normas, conforme al artículo 3.1 CC, hace que sea normal y encuadrable en la

sociedad actual, la temporalidad de la pensión compensatoria, ya que los argumentos sociológicos que se manejaban al tiempo de crearse la figura de la pensión compensatoria y a los cambios sociales y el nuevo sentir social, en relación con la evolución de la sociedad española desde el año 1.981 hasta la fecha de la modificación legal, y más aún, en la actualidad, debido a la diferente perspectiva y situación de la mujer en relación con el matrimonio y el mercado laboral.

Desde una perspectiva diferente a la expuesta debe destacarse el criterio favorable a la temporalización del Consejo de Europa (Informe del Comité de expertos sobre el derecho relativo a los esposos. Reunión de Estrasburgo de 20 a 24 de octubre de 1.980); el Código de Familia de Cataluña, Ley 9/98, de 15 de julio - en cuyo art. 86.1 d) se establece que el derecho a la pensión compensatoria se extingue por el transcurso del plazo por el que se estableció-; y el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.

La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1.981, de 7 de julio, regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis". Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia -que atiende al concepto de necesidad-, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101, ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la *perpetuatio de un modus vivendi*, o a un derecho de nivelación de patrimonios. Como consecuencia de ello procede decir, además de que no resulta excluida por el artículo 97 CC, aunque el que no la recoja no significa que la prohíba, que la pensión temporal no afecta a la regulación de los artículos 99, 100 y 101 CC, y nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada.

Por consiguiente la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida -vitalicio-.

Por otro lado, el contexto social permite y el sentir social apoya una solución favorable a la pensión temporal, por lo que la misma cuenta con un soporte relevante en una interpretación del artículo 97 CC adecuada a la realidad social actual, prevista como elemento interpretativo de las normas en el artículo 3.1 CC, con arreglo al que "se interpretarán según el

sentido propio de sus palabras en relación con..... y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

La jurisprudencia de la Sala ha resaltado, con carácter general, la importancia del elemento sociológico, sin perjuicio de poner énfasis en que debe utilizarse con tino y cautela (SS. 31 marzo 1.978 y 7 enero y 25 abril 1.991, entre otras), tanto antes de su regulación expresa en el Código por la modificación legislativa de 31 de mayo de 1.974 - SS. 21 noviembre 1.934 y 24 enero 1.970 -, como con posterioridad - SS. 31 marzo 1.978 y 28 enero 1.989 -, que se refieren a su integración por aquella serie de factores ideológicos, morales y económicos que revelan y plasman las necesidades y espíritu de las comunidades en cada momento histórico. Significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad (STS 10 abril 1.995 y 18 diciembre 1.997).

Y lo ha aplicado en numerosas ocasiones, entre las que cabe citar, las SS. 17 mayo 1.982 y 6 junio 1.984, (sobre influencia del criterio objetivo o minorismo del culpabilismo originario en relación con el artículo 1.902 CC; 10 diciembre 1.984 (el progreso técnico concretado en la evolución en la construcción de edificios en sede de medianería); 13 julio 1.994 (innecesariedad en determinadas situaciones de la unanimidad ex artículo 16 LPH)⁴⁷⁰; 18 diciembre 1.997 (realidad social del mundo laboral); 13 de marzo de 2.003 (evitar supuestos de abuso notorio de derecho).

Sin embargo, para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad - "*ratio*"- de la norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia.

De lo dicho se deduce que la ley -que de ningún modo cabe tergiversar- no prohíbe la temporalización, se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Por los que debe admitirse su posibilidad,

⁴⁷⁰ Art. 16 Ley de Propiedad Horizontal relativo a las consecuencias de la muerte del arrendatario en las viviendas arrendadas.

aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación.

Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver-reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión.

Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección.

En la línea discursiva expresada se manifiesta la más reciente doctrina científica y jurisprudencia de las AAPP y ahora este Tribunal, que se pronuncia por primera vez y sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de establecer una duración limitada para la pensión compensatoria del artículo 97 CC, siempre que cumpla la función reequilibradora por concurrir presupuestos conocidos que acrediten una base real para dicha limitación temporal.

“En el presente caso la edad de la esposa es de 37 años, es Diplomada en Técnicas de Comunicación; el matrimonio ha durado 3

años, y las medidas patrimoniales acordadas en la sentencia de separación dejan una situación preeminente a la parte recurrente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 487-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil⁴⁷¹, debe procederse a efectuar un pronunciamiento unificador sobre la contradicción existente entre diferentes Audiencias Provinciales, dejando zanjada la divergencia en el mismo sentido que la anterior sentencia de 10 de febrero de 2.005, sentando como doctrina jurisprudencial la posibilidad de acordar una duración limitada temporalmente a la pensión compensatoria.

“3º.- Declarar como doctrina jurisprudencial la posibilidad de acordar como medida, en los procesos matrimoniales, una pensión compensatoria de duración limitada -pensión compensatoria temporal-”.

La Jurisprudencia menor, en general ha disminuido el tiempo de concesión de la pensión compensatoria de cinco años a tres años, al considerar que es tiempo suficiente para que el beneficiario lograse su independencia económica.

⁴⁷¹ Art. 487 LEC: “El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su sustancia; pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimentos de los bienes”.

CAPÍTULO XI

FORMAS DE PAGO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

El pago de la pensión compensatoria se puede realizar de diferentes formas, las cuales, en función del modo de abonarse, tienen distintas consecuencias.

9.1.- Pago de una cantidad mensual fija

Habitualmente la pensión del artículo 97 CC se concreta en una cantidad mensual fija, abonable durante doce meses al año. Es cierto que, en algunas ocasiones, se han dictado resoluciones en las que se han tenido en cuenta períodos de tiempo dispares, proyectando sobre este instituto la pluralidad de los ingresos por el trabajo por cuenta ajena, abonando catorce mensualidades, es decir, los doce meses y las dos pagas coincidentes con el abono de las dos pagas extraordinarias, en junio y en diciembre.

Pero esta periodicidad diferente existe con mayor frecuencia en los convenios reguladores, en los que se incorporan, dentro del concepto de pensión compensatoria, pagos por Navidad o vacaciones, u otros consecuentes a la percepción por el obligado de comisiones, participaciones anuales en beneficios, incentivos o similares. Es indiscutible que los pactos a este respecto son perfectamente válidos y desde luego, no desnaturalizan el fundamento y la finalidad de la pensión.

También hay que considerar que hay resoluciones judiciales que, en lugar de concretar una cantidad fija y fija mensual, establecen la obligación en un porcentaje sobre los ingresos del deudor, por considerar preferible un tanto por ciento de los ingresos que éste genere. La cantidad concreta resulta más aconsejable cuando faltan unos ingresos fijos, con objeto de evitar discusiones y comprobaciones que podría, incluso resultar relativas y poco veraces, cuando haya que hacer reducciones, o en las actualizaciones anuales. Otras sentencias, sin embargo, estiman que la fijación porcentual

no es conveniente, mostrándose partidarios de una cantidad fija mensual. Consideran que el resultado de aplicar un tanto por ciento, crea una situación excesivamente sensible a las oscilaciones de los ingresos, que puede dar lugar a cantidades extraordinariamente superiores o inferiores a las razonables, atendidas las demás circunstancias concurrentes.

La fórmula del pago de una cantidad mensual fija es la más habitual, y se actualiza anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo, que se realiza bien en la fecha que se indique en el convenio regulador o en sentencia, siendo lo más común su actualización en el mes de enero de cada año.

9.2.- Sustitución del pago de la pensión compensatoria

La pensión compensatoria sólo puede sustituirse por acuerdo de las partes: la sustitución, que es voluntaria, en ningún supuesto puede realizarse por el juez.

Por lo tanto solo las partes, acreedor y deudor de la pensión compensatoria están legitimados para proceder a su sustitución, y esta legitimación ha de incluir necesariamente a los herederos del deudor.

Dado que la obligación del pago de la pensión compensatoria no se extingue por la muerte del deudor, conforme al artículo 101 CC, - circunstancia que si ocurre con la muerte del acreedor, en cuyo caso se extingue el derecho al cobro de la pensión compensatoria por sus herederos,- los herederos del deudor de la pensión compensatoria si pueden adquirir dicha obligación, susceptible de ser reducida o extinguida en función de nuevos parámetros, entre otros, de la cuantía del caudal hereditario y de sus derechos legitimarios. Así, dichos sucesores podrán ser parte en un convenio de sustitución de la pensión, haya sido ésta fijada judicialmente o de mutuo acuerdo.

La norma no regula de forma expresa cuál deba ser la forma de pago de la pensión compensatoria. La doctrina con base tanto en criterios sistemáticos como en la dicción del artículo 97 CC, se refiere a “pensión” y a su “actualización”.

El Código Civil Francés, origen de la pensión compensatoria en España, es diferente en este sentido, ya que el artículo 275 CC Francés,

autoriza al juez a decidir acerca de las diversas modalidades de pago de pensión que la ley previene, dando preferencia al pago de una suma a tanto alzado, conforme al artículo 274 CC Francés⁴⁷². En consecuencia, el Código Civil Francés, no permite decidir la adopción de una modalidad diferente a la del pago periódico de una suma determinada.

Roca Trías considera que se puede llegar a esta conclusión aplicando por analogía el artículo 148 CC⁴⁷³ aplicable respecto a la forma de pagarse los alimentos, considerando que la pensión alimenticia y la pensión compensatoria tienen finalidad semejante, cual es la de proporcionar un medio de afrontar unas necesidades que pueden suponer una precariedad económica mayor o menor⁴⁷⁴.

La SAP, 7ª, Cádiz 14 de septiembre de 2.001, Ponente: Pérez de Vargas Gil) AC nº 6. 4/10. 2. 2002, 45, página 461, contiene un amplio estudio jurisprudencial sobre la sustitución.

La jurisprudencia menor⁴⁷⁵, no admite que la pensión compensatoria pueda sustituirse por el juzgador: *“... sin que pueda tal pensión sustituirse por el Juzgador, a priori, en un señalamiento de capital a abonar en plazos o fracciones mensuales durante el período que resulte de dividir el capital por las mensualidades, determinación que no autoriza el artículo 99 CC que sea realizada por el juez, siendo facultad que sólo se concede a los cónyuges separados o divorciados, para que, en cualquier tiempo, puedan convenir la sustitución de la pensión fijada judicialmente en las formas que el mismo artículo indica y que podrán ejercitar a partir de ahora si lo estimaren conveniente”*.

⁴⁷² Art. 274 CC Francés; “Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital”.

⁴⁷³ Art. 148 CC: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la denuncia. Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente. El juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad pública y otra persona y proveer a las futuras necesidades.

⁴⁷⁴ ROCA TRÍAS, Encarnación. Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo, Ed. Revista de Derecho Privado/Edersa. 2.ª ed., Madrid 1982. Página 634.

⁴⁷⁵ AT Madrid 13 de octubre de 1.988 (RGD, 1.988. Página 6.974.

El texto literal del artículo 99 CC vigente, dice que puede realizarse “en cualquier momento”, lo que da una clara idea de manifiesta amplitud. Sin embargo, el propio precepto limita su autorización a “la pensión fijada judicialmente”.

Puede interpretarse que, con independencia de la consideración de la pensión entre cónyuges, que los mismos pacten, sólo y exclusivamente puede ser sustituida la fijada por el juez, o, lo que es lo mismo, que hay que esperar a que el juez determine la pensión periódica para poderla sustituir y que la convenida por las partes no podría serlo. Si sólo el juez puede fijar una pensión periódica, la sustitución de ésta, que entraña un cambio, únicamente podrá hacerse después de que exista.

Pero eso no quiere decir que la convenida por los esposos no tenga las características de la pensión del artículo 97 CC, ya que el artículo 90 CC que se refiere al convenio regulador, incluye en su relación de mínimos del mismo y, en su apartado F) se refiere de forma expresa a la pensión que pudiese corresponderle a uno de los esposos de acuerdo con el artículo 97 CC⁴⁷⁶.

Por lo tanto, la pensión compensatoria convenida por los consortes de mutuo acuerdo, tanto antes, como después de la reforma de la Ley 15/2005, mantiene la misma naturaleza jurídica que la pensión compensatoria fijada judicialmente y ambas están sujetas a idéntica normativa.

La cuestión que se plantea es la necesidad o no del establecimiento de una pensión periódica en el convenio regulador, y una vez ratificada judicialmente y homologada por el juez, puede interpretarse que la resolución judicial que recaiga aprobando el convenio regulador se puede considerar como fijación de la pensión compensatoria por el juez, debiendo de esperar a este momento de aprobación para poder sustituir la pensión compensatoria en los términos que se establecen en el artículo 99 CC.

Roca Trías considera que los cónyuges en convenio no pueden inicialmente fijar la compensación del desequilibrio en un capital, renta o usufructo: *“Cuando sean los propios interesados quienes acuerden una*

⁴⁷⁶ Art. 90 CC: “La pensión que, conforme al artículo 97, correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges”.

forma concreta de pago en el Convenio regulador de la separación o divorcio, no puedan en un momento posterior modificar su acuerdo y acogerse a alguna de las formas previstas en el artículo 99 o cualquier otra que se ajuste más a sus necesidades. Ello deberá realizarse en trámite de modificación del convenio, y por ello no resulta aplicable en esta caso lo dispuesto en el artículo 99”.

Como señala la SAP de Girona (Sec. 2.^a, Pte.: Rey Huidobro) de 17 de diciembre 1998, *“Fijada en sentencia de separación matrimonial de la primera instancia pensión compensatoria del artículo 97 CC en favor de la esposa, los litigantes consideran más favorable la sustitución de dicha pensión por la transmisión de la propiedad de la mitad indivisa del marido sobre la vivienda familiar en favor de la mujer, a lo cual en apelación ha de accederse si se considera que el artículo 99 CC permite convenir la sustitución en cualquier momento de la pensión por la entrega de un capital en bienes o en dinero”.*

La jurisprudencia menor⁴⁷⁷ ha reconocido la sustitución hecha por los herederos y la necesidad de que para su modificación concurren las circunstancias legales respecto de los mismos herederos.

Roca Trías considera que los herederos sí pueden modificar la pensión compensatoria pero después de fijada en una renta periódica, no siendo de aplicación el artículo 99 CC⁴⁷⁸.

Pero una cosa es que sea de aplicación el artículo 99 CC, limitado en su texto a la alteración de la pensión compensatoria fijada por el juez, y otra cosa distinta es que los esposos carezcan de posibilidad legal de determinar en convenio la compensación al desequilibrio, en forma distinta de la periódica.

Si la voluntad de los cónyuges puede sustituir la pensión periódica, también puede fijar desde el inicio la compensación en forma distinta de un pago regular desde el primer momento. Carece de lógica pensar que, primero, tienen que convenir algo que no quieren y, luego, sustituir este pacto por el que realmente desean.

⁴⁷⁷ SAP Cádiz, Sec. 7^a, 14 de septiembre de 2.001 (Pte.: Pérez de Vargas Gil).

⁴⁷⁸ ROCA TRIAS, Encarnación. *“Comentarios a la reforma del Derecho de Familia”*, artículos 90 a 101, vol. I, Tecnos, Madrid, 1.984. Página 634.

El juez, además, puede aprobar la determinación hecha por los interesados, a quienes la ley deja esta facultad. Ello, por otra parte, está en consonancia con la disponibilidad plena que la pensión tiene para los cónyuges.

Campuzano Tomé, plantea la necesidad de que lo convenido por los cónyuges sea aprobado judicialmente, ya que la sustitución “*podría también resultar perjudicial para alguno de los esposos*”.

Y, es más, Haza Díaz señala que “*el pacto privado, si no es aprobado por el juez, no es válido, ni tiene eficacia sustitutoria*”.

A este respecto, de nuevo se plantea el sentido que puede tener la exigencia de homologación judicial de lo pactado por los cónyuges sobre la pensión compensatoria.

Si la misma es disponible y renunciable -no sólo sustituible-, según la repetidamente citada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el control judicial de su posible carácter perjudicial para uno se revela innecesario, por incongruente. Toda renuncia gratuita es perjudicial. Y no sólo el perjuicio material puede ser digno de estimación en esta materia. Pero el derecho a renunciar lo que es disponible, es indiscutible.

Haza Díaz sostiene que la libertad de los cónyuges para pactar tiene como límite que: “*tal pacto no perjudique directamente a uno de ellos e, indirectamente, dañe a los hijos*”.

Por lo tanto, mayoritariamente se considera que la pensión mensual puede sustituirse “*a priori*” por el Juzgador con el señalamiento de un capital, por no autorizarlo el artículo 99 CC, siendo facultad que sólo se concede a los cónyuges separados o divorciados para que en cualquier tiempo puedan sustituir la pensión fijada judicialmente en las formas que el mismo artículo indica.

Como el sistema legal permite la sustitución de la pensión compensatoria por alguna de las modalidades del artículo 99 CC, constitución de una renta vitalicia, usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. Sólo si así se conviene después de que la pensión judicial sea fijada judicialmente, para evitar una vinculación que puede durar muchos años, y si lo permite el estado entre

los cónyuges separados o divorciados, en la práctica, se elude que la pensión llegue a fijarse judicialmente, mediante el acuerdo entre las partes, lo que si se permite en el artículo 97 CC⁴⁷⁹.

Se redacta un contrato en el que se expresa que, a los efectos del artículo 97-6º CC, se fija la entrega de un capital en bienes o cantidad alzada, como saldo o finiquito, con renuncia expresa del beneficiario o nada más pedir ni reclamar por este concepto. Con ello y mediante pacto de los interesados, se realiza una válida anteposición de las normas del artículo 99 CC sobre la fórmula legal del artículo 97 CC, desligando para el futuro a ambos firmantes del riesgo de determinación judicial de la pensión por debajo o por encima de sus respectivas pretensiones⁴⁸⁰.

Con independencia de que la forma de cuantificar se aleja de la pura medida del desequilibrio, dando entrada a magnitudes que ni siquiera tienen contenido económico, y haciendo abstracción de la práctica imposibilidad de una medición aritmética que permita determinar cuando la fijación se corresponde cuánticamente con dicho desequilibrio, toda esta calificación pugna con la libertad de pactar y, por lo tanto, de renunciar.

García Cantero sitúa el límite mínimo de lo que es disponible por las partes, en lo necesario para la subsistencia, con aplicación analógica del artículo 151.1º CC, establecido para los alimentos entre parientes.

Pero si la pensión compensatoria respecto de su naturaleza jurídica tiene algún componente alimenticio, sería únicamente la pensión derivada de la separación, porque la consecuente al divorcio, al extinguirse el parentesco, no podría asimilarse de forma alguna a los alimentos de los artículos 142 y siguientes del Código Civil. Y siendo la pensión compensatoria de la misma naturaleza en ambas situaciones de ruptura matrimonial, si no tiene un componente alimenticio en un caso no lo tiene en ninguno.

⁴⁷⁹ HAZA DÍAZ, Pilar, “ *La pensión de separación y divorcio*”, La Ley, Madrid 1.989. Página 80.

⁴⁸⁰ CAMPUZANO TOMÉ, Herminia:, “*La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento*”, Librería Bosch, Barcelona 1.986. Página 183.

Si la pensión del artículo 97 CC no es alimenticia, no parece tener ningún sentido que exista una limitación a la libertad de las partes para pactar.

La diferencia entre la aprobación judicial o no de lo convenido por los esposos, es que, si el convenio regulador forma parte de la solicitud de separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo, tiene que pasar el trámite de homologación judicial y con ello se integra en la resolución judicial que concede separación o divorcio, lo que le confiere la posibilidad directa de ser ejecutado por el mismo juez.

Por el contrario, si no forma parte de un proceso, el valor que tenga lo establecido es el de un convenio entre los esposos, que es válido y eficaz conforme al artículo 1.323 CC⁴⁸¹, pero precisará para poder ejecutarse de modo forzoso, la previa existencia de un proceso en el que se condene a la parte a su cumplimiento.

En la práctica y pese a la deficiente redacción del precepto, prima el carácter plenamente disponible de la pensión compensatoria y, por lo tanto, no se considera precisa la determinación previa judicial o en convenio regulador, en forma periódica, y los cónyuges pueden pactar libremente, en sustitución de pagos periódicos, la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de bienes o dinero. Es más, incluso se admite la forma mixta en que parte se establezca mediante pagos periódicos y otra parte en las formas ya señaladas. Lo único que se limita es respecto a las facultades del Juez, que sólo él mismo puede fijar pensión periódica.

De acuerdo con el artículo 99 CC sólo existen tres posibilidades de sustituir la pensión compensatoria: la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero⁴⁸².

⁴⁸¹ Art. 1.323 CC: “Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos”.

⁴⁸² GARCÍA CANTERO, Gabriel: «Art.s 42 a 107», en “*Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*,” dirigidos por Manuel Albaladejo, Ed. de Derecho Privado Edersa, tomo II, 2.^a ed., Madrid 1982. Página 440.

Luna Serrano, considera que no es necesaria la aprobación judicial⁴⁸³. Ha de plantearse la cuestión de que si la sustitución de la pensión compensatoria fijada judicialmente es sólo posible a través de estas tres posibilidades o si, por el contrario, esta relación no constituye un *numerus clausus* y es factible cualquier otra forma de sustitución.

De la lectura del precepto parece deducirse que se trata de una relación exhaustiva, ya que en otros supuestos, la ley ha utilizado claras menciones reveladoras de la posibilidad de otras adicciones, por ejemplo, “entre otras” del propio artículo 97 CC.

Roca Trías considera que el contenido de la sustitución contemplada por el artículo 99 CC es restringido, porque: *“... los interesados acuerdan únicamente cambiar la forma de pago de la pensión, no su cuantía. Por ello me inclino por incluir el supuesto contemplado en el artículo 99 CC dentro de la dación en pago y excluyo la novación; a mi modo de entender, sólo cambia aquí la forma de hacer efectivo un derecho, conformado definitivamente en la decisión judicial anterior, pero el derecho se mantiene tal cual es, sin cambiar en ninguno de sus extremos. Debe aplicarse, pues, el artículo 1166 CC y por ello se exige acuerdo de voluntades para que quede sustituida válidamente una forma de pago consistente en la entrega periódica de unas cantidades, la que puedan acordar los interesados en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 CC. Esta exigencia se deduce de la expresión «podrá convenirse» que se utiliza en la disposición que se comenta”*.

Sin embargo, es dudosa tal limitación habida cuenta del reconocimiento de la naturaleza disponible de la pensión compensatoria. Si las partes, mediante la libre expresión de su voluntad, pueden establecer, desconocer, limitar, renunciar o sustituir la pensión compensatoria periódica por una prestación única en bienes o dinero, la constitución de una renta vitalicia o la cesión del usufructo de determinados bienes, estas tres modalidades deben de tener posibilidad de ser novadas por la propia voluntad de las partes.

Si bien es verdad que el legislador no ha incluido de forma expresa otras posibles alternativas, no por ello ha de interpretarse que la omisión de éstas se deba a una intención limitativa, que carece de justificación.

⁴⁸³ LUNA SERRANO, Agustín “El nuevo régimen de la familia”, Tomo I, Matrimonio y Divorcio, Cuadernos Civitas, Madrid 1.982. Página 372.

Porque si, en lugar de entregar bienes o dinero, se pacta la sustitución, por ejemplo, por otro derecho real de habitación, sería igualmente válida la sustitución convenida porque los esposos o ex-esposos, ya que no existen inconvenientes para que bajo el término empleado de “*bienes*” no estén incluidos toda clase de derechos.

No obstante, esta interpretación no es pacífica en la doctrina, al plantearse como alternativa el usufructo, que es otro derecho real, y el dinero, que también un bien.

Mayoritariamente la doctrina se inclina a adoptar la postura de admitir cualquier otra sustitución que las partes convengan, en uso de su libertad de pactar. Pero considerando las tres posibilidades que el artículo 99 CC menciona expresamente, la prestación única en bienes o dinero, la constitución de una renta vitalicia y la cesión del usufructo de determinados bienes, de su análisis se suscitan diversas cuestiones.

La primera cuestión que suscita el análisis de los efectos de la sustitución es la de si ésta es una dación en pago o una novación de la obligación.

Rodríguez Ramos observa sobre el tema de la dación en pago consigna la concurrencia de cuatro requisitos para que tenga lugar la dación en pago:

- “1.- Que medie acuerdo entre las partes;
- 2.- Que la obligación que se pretende extinguir exista;
- 3.- Que la prestación nueva sea distinta de la debida;
- 4.- Y, que la nueva prestación sea entregada al acreedor como requisito constituyente y perfeccionador del contrato atípico de dación en pago...”

De estos requisitos merece especial atención el tercero, que concreta en que la nueva prestación guarde cierta equivalencia con la que sustituye en cuanto a su valor económico objetivo: “*Es consustancial a la dación en pago que el acreedor, para el caso el cónyuge o ex-cónyuge “desequilibrado”, abrogue de los principios de identidad conforme al artículo 1.166 CC e integridad conforme a los artículos 1.157 y 1.166 CC de la res debita*”.

Esta cierta equivalencia exige que lo que se entrega no deba de ser menor valor objetivo que la prestación que se entrega, o siéndolo nunca guardar una diferencia excesiva o desproporcionada, porque de ser así no se satisfaría por entero el interés del acreedor, quien en pago aceptó otra prestación, pero no otra deuda de menor cuantía⁴⁸⁴.

Si se considera que la sustitución recogida en el artículo 99 CC es una dación en pago, sería preciso que exista esta cierta equivalencia para que la obligación anterior quede extinguida⁴⁸⁵.

En cuanto a la exigencia de equivalencia, aunque sea cierta, hay algunas objeciones en el caso de la sustitución de la pensión compensatoria. La primera es la dificultad de comparar una pensión periódica, sujeta a eventuales y desconocidas actualizaciones, y de un límite temporal ignorado, por una renta o un usufructo, de duración igual a la vida del acreedor, o de una cantidad fija o un bien concreto, claramente evaluable. Una renta o un usufructo vitalicio pueden ser comparados con una pensión vitalicia, pero no cuando ésta plantea un sinfín de variables más.

Hay que tener en cuenta que, a menos que la pensión compensatoria sea temporal, en cuyo caso es fácilmente capitalizable, la duración de la misma es vitalicia, salvo que se incurra en cualquiera de las causas de extinción: desaparición del desequilibrio, nuevo matrimonio o convivencia marital, a lo que hay que añadir las posibilidades de modificación de su cuantía por nuevas circunstancias, cuya relación es infinita.

La segunda objeción nace de la condición de disponible de la pensión. Si se puede renunciar expresa o tácitamente, si se puede pactar libremente la cuantía, sin necesidad de que se identifique con la cuantificación del desequilibrio, matizado por múltiples circunstancias de imposible valoración ¿por qué ha de limitarse la voluntad, libre e informada, de los cónyuges o ex cónyuges respecto a la extinción o, lo que es menos, la sustitución de la pensión?

⁴⁸⁴ RODRÍGUEZ RAMOS, Antonio Manuel: «Un ejemplo de dación en pago: el artículo 99 del Código Civil», *Actualidad Civil*, núm. 8, 21 al 27 de febrero de 2000. Páginas 269. 169.

⁴⁸⁵ ALBADALEJO GARCÍA, Manuel: La dación en pago y la determinación de la deuda que se paga (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 8 de febrero de 1996, *Revista de Derecho Privado*, tomo LXXXI, diciembre 1997. Página 913.

La otra figura que puede aplicarse a esta sustitución es la novación. De acuerdo con el artículo 1.203 CC las obligaciones pueden modificarse:

- 1º) Variando su objeto o sus condiciones principales;
- 2º) Sustituyendo la persona del deudor;
- 3º) Y subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.

Roca Trías plantea la cuestión en un supuesto posible: *“Si cuando habiéndose acordado la entrega de un capital fallece, bien el cónyuge acreedor, bien el deudor antes de que sea satisfecho. Hay que tener en cuenta que aunque nos hallemos ante un derecho de crédito, existe un componente familiar que hace que la solución no pueda ser la misma que cuando se trata de un derecho de crédito de otra clase y así, si el acreedor fallece antes de haber cobrado la cantidad acordada, sus herederos no pueden reclamar el pago acordado, ya que ha desaparecido la base familiar para la que se había acordado dicho pago; si quien fallece es el deudor, deberá aplicarse la misma norma del artículo 101.2 CC, de modo que los herederos asumen la obligación de su causante, pero siempre con la limitación de los derechos de legítima correspondientes y la suficiencia del caudal hereditario”*⁴⁸⁶.

El mantenimiento de este «componente familiar» en la obligación sustituida hace deducir que no se trata de una dación en pago, con extinción de la obligación anterior, sino de una variación en la misma. Se trataría de una novación impropia o modificativa, en la que subsistirá el vínculo primitivo, excepto cuando se trata de la entrega de bienes o de dinero, y ésta se consuma, que será una novación extintiva.

Aparece confirmada esta condición, no sólo por la propia palabra utilizada por el artículo 99 CC -*sustituir* y no *satisfacer* o *pagar* -sino por la ausencia de obligación de equivalencia a que se ha hecho mención antes, que sería imprescindible en la dación en pago, pero no lo es en la novación.

También ratifica el carácter de novación, la cita expresa de la constitución de una pensión vitalicia que representa una sustitución del

⁴⁸⁶ ROCA TRÍAS, Encarna. *“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”*, Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo, Edición Revista de Derecho Privado Edersa, 2ª edición, Madrid 1982. Páginas 637. 63.

deudor, que es el supuesto 2º del artículo 1.203 CC ⁴⁸⁷ referente a la novación, que parece opuesta a la dación en pago.

Clemente Meoro, señala, en cuanto a los efectos de la sustitución: *“Al mismo tiempo la relación quedaría desvinculada de las circunstancias personales que afectaren a los cónyuges: ya no cabría su modificación por alteración de las circunstancias en la fortuna de uno u otro cónyuge conforme al artículo 100 CC, y se extinguirá el derecho conforme a sus propias reglas señaladas en los artículos 513 y ss. y 1.803 CC, no por las previstas para la pensión en el artículo 101-1º CC.”*

Por otra parte, esta sustitución elimina la necesidad de actualización de las rentas o frutos periódicos, que existía por imperativo del artículo 97 *in fine* y la posibilidad de modificación del artículo 100 CC⁴⁸⁸.

Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida sostienen que: *“una vez realizada la constitución del usufructo o la entrega del capital, éstos escapan a cualquier actualización: son sucedáneos de la renta, pero no están sujetos a modificación (restitución o nueva entrega) por alteración de las circunstancias en la fortuna de uno de los cónyuges”.*

La aplicabilidad del artículo 101 CC puede cesar en el supuesto de nuevas nupcias o de convivencia marital, posteriores a la sustitución. Se pueden plantear la posibilidad de no considerar extinguida la relación derivada de la pensión compensatoria, sino que la sustitución implique una capitalización de la pensión y que en función del número de años considerados para ello y de los transcurridos⁴⁸⁹.

En relación con la posibilidad de que existan alimentos en la separación y de que no se integren en una única prestación, la de pensión compensatoria, materia en la que existen discrepancias, y partiendo de la permanencia del derecho de alimentos, con autonomía respecto de la pensión del artículo 97 CC, podría plantearse el tema de que aunque la

⁴⁸⁷ Art. 1.203 CC: “Las obligaciones pueden modificarse: 1º.- Variando su objeto o sus condiciones principales. 2.- Sustituyendo la persona del deudor. 3.- Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor”.

⁴⁸⁸ RODRÍGUEZ RAMOS, Antonio Manuel: “Un ejemplo de dación en pago: el artículo 99 del Código Civil”, Actualidad Civil, núm. 8, 21 al 27 de febrero de 2000. Página 280.66.

⁴⁸⁹ CLEMENTE MEORO, Manuel. “En Derecho de Familia”, Tirant lo Blanch, Valencia 1991, Página 167.

pensión compensatoria se haya extinguido por novación, en el caso de la separación —no en el divorcio—, si a uno de los cónyuges le sobreviene una situación de necesidad, podría reclamar al otro alimentos⁴⁹⁰.

Roca Trías se muestra favorable a esta posibilidad, “*dada la subsistencia del deber del socorro y ayuda mutua en este caso*”.

La realidad es que habría que partir de que acordada la separación judicialmente, los derechos y deberes de los cónyuges por razón de su matrimonio y, entre ellos, los de socorro y ayuda mutua, que tiene un contenido más amplio que el meramente económico, quedan en suspenso y son sustituidos por lo determinado en la sentencia o en el convenio regulador, aprobado por el juez.

El abuso de derecho constituiría un obstáculo para cualquier petición con base en este deber después de la separación. El Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina del abuso de derecho regulado en el artículo 7.2 CC⁴⁹¹ incluso para rechazar reclamaciones fundadas en la existencia de una sociedad de gananciales, posterior a una prolongada separación de hecho, y lo ha motivado en que el fundamento de los derechos conyugales es la convivencia y la solidaridad entre los esposos, aplicándose este criterio sólo en casos particulares, resolviendo en favor de la permanencia del derecho de alimentos.

En los casos de separación legal, los efectos de la misma, por imperativo de los artículos 90 y 91 CC han de establecerse en la sentencia y no en otra resolución posterior o independiente, en la forma desarrollada en los artículos siguientes, entre los que el artículo 93 CC hace referencia a los alimentos.

La separación suspende los deberes de ayuda mutua y de actuación en interés de la familia, concebida ésta partiendo de la pareja matrimonial

⁴⁹⁰ PEÑA BERNARDO DE QUIRÓS, Manuel: “*Derecho de Familia*”, Universidad de Madrid 1.989. Página 126.

⁴⁹¹ Art. 7 CC: “1.- Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fé. 2.- La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

alrededor de la que se crea. Pero no se mantiene la obligación de vivir juntos, absolutamente contraria a la separación, ni la de fijación conjunta del domicilio conyugal, que desaparece, poniéndose fin a la presunción de convivencia (artículos 68, 70 y 69 CC) y tampoco permanece el deber de fidelidad, del cual exonera el artículo 82.1^a, párrafo 2º CC⁴⁹².

A la hora de interpretar los pactos de los cónyuges en orden a la novación de la obligación de pago de una pensión compensatoria, es necesario considerar si la prestación sustitutoria tiene carácter gratuito u oneroso, ya que, en caso de que fuera imposible resolver las dudas interpretativas por las reglas de los artículos 1.281 a 1.288 CC, el artículo 1.289 CC dispone soluciones distintas según el contrato se encuentre en uno u otro supuesto. Las dudas se resolverán, si el convenio es gratuito en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, mientras que si fuera oneroso la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

El derecho a la pensión es un derecho lucrativo, aunque no tenga por causa la liberalidad, ya que no existe contraprestación alguna, ni puede considerarse como tal las posibles prestaciones personales anteriores, que no tuvieron nunca la consideración de compensación por una hipotética e incierta pensión posterior.

Pero el hecho de que la constitución o determinación del derecho a la pensión tenga carácter gratuito, no quiere decir que la prestación sustitutoria lo mantenga. Cuando las partes pactan la novación de la pensión, parten de la preexistencia de este derecho y, por lo tanto, ambos contratantes realizan una prestación conforme al artículo 1.274 CC⁴⁹³ diferente cada uno: el acreedor extingue la pensión preexistente y el deudor entrega bienes o dinero, o constituye en favor del primero una renta o un usufructo, por lo tanto; este convenio sustitutorio es oneroso.

Por último, hay que hacer mención al posible incumplimiento por parte del deudor de aquellas obligaciones, establecidas en el pacto

⁴⁹² ROCA TRÍAS, Encarna. *“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”*, Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo, Ed. Revista de Derecho Privado Edersa, 2ª edición, Madrid 1982. Página 636.

⁴⁹³ Art. 1.274 CC: “En los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; e los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.”

sustitutorio, que no se hubieran consumado en el acto. Si se convienen pagos aplazados y no se satisfacen, el acreedor podrá acudir a los trámites de ejecución de la sentencia de separación o divorcio, cuando el convenio del artículo 99 CC haya sido homologado por el juez. De no ser así, tendrá que proceder a una reclamación en un juicio ordinario, dependiendo de la cuantía.

También cabe la posibilidad de resolver el convenio sustitutorio a tenor del artículo 1.124 CC⁴⁹⁴, tratándose de obligaciones recíprocas las asumidas por ambas partes, con el resarcimiento de daños y perjuicios.

9.3.- Formas de sustitución del pago de la pensión compensatoria

Las formas de sustitución del pago de la pensión compensatoria son: prestación única en bienes o dinero, constituyendo una renta vitalicia o cediendo el usufructo de determinados bienes.

La pensión compensatoria ha aparecido en nuestro ordenamiento por vez primera en 1.981; se inspira en la “*prestation compensatoire*” establecida por el CC Francés por Ley de 11 de julio de 1.975.

En el artículo 270 CC Francés se establece que “*uno de los esposos puede ser obligado a entregar al otro una prestación destinada a compensar, dentro de lo posible, la disparidad que la ruptura del matrimonio cree en las condiciones de vida respectivas*”.

Posteriormente, la Ley nº 2.000-595, de 30 de junio de 2.000, relativa a la prestación compensatoria en materia de divorcio, no modifica los caracteres de la misma, que continúa siendo revisable, a tanto alzado y transmisible a los herederos.

⁴⁹⁴ Art. 1.124 CC: “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”.

En cuanto a las modalidades de pago de la prestación compensatoria, el artículo 275 CC Francés, modificado por Ley de 30 junio 2.000, señala las siguientes:

1.- Entrega de una cantidad de dinero, que es la modalidad tipo. Si el deudor no puede hacerlo de una sola vez, el juez puede concederle una forma fraccionada de pago, hasta un máximo de ocho años, con plazos mensuales o anuales actualizados.

2.- Transmisión de un bien en propiedad o en usufructo.

3.- Depósito de valores productivos de rentas entre las manos de un tercero a favor del acreedor.

Se establecen dos excepciones:

1.- Si el deudor no está en condiciones de pagar el capital, el juez puede sustituir las formas de entrega de la prestación compensatoria y establecer el pago de una renta mensual o anual, por un tiempo que no puede exceder de ocho años.

2.- A título excepcional y por decisión especialmente motivada, el juez puede, en razón a la edad o estado de salud del acreedor, fijar la prestación compensatoria a pagar bajo la forma de una renta vitalicia, es decir, una renta abonable hasta la muerte del acreedor.

En todo caso, se prohíbe la fórmula mixta de pago en parte de un capital y en parte de una renta periódica por decisión de la Cour de cassation de 10 de mayo de 2.011.

Inicialmente, en nuestra regulación de la separación y el divorcio, se optó por la fórmula de la pensión periódica, pero con la posibilidad de sustituirla de común acuerdo, por una entrega única en bienes o dinero, la constitución de una renta vitalicia o la cesión del usufructo de determinados bienes. No obstante, en la reforma de 2.005 se modificó la ley para que la prestación pueda consistir en una pensión vitalicia ó temporal ó un tanto alzado según se determine en el convenio regulador ó en la sentencia.

Al no reformarse el artículo 99 CC, en principio parece mantenerse la posibilidad de alterarse la condena judicial de una pensión periódica o de una cantidad a tanto alzado, por las alternativas actuales de entrega de bienes, constitución de renta vitalicia o cesión de bienes en usufructo. Tampoco parece inviable que la condena al pago de una cantidad determinada se compatibilice con su pago a plazos.

En cualquier caso, es preciso distinguir entre la pensión consistente en el abono de una cantidad periódica, aunque sea temporal, y la condena a satisfacer una única cantidad, aunque su pago se realice en plazos periódicos.

En el primer caso, si llegado el término temporal fijado, o se produce una causa de extinción de la obligación antes de alcanzar el final del tiempo señalado, los plazos que no hayan vencido quedarían extinguidos. Por el contrario, en el segundo caso, la deuda no se vería afectada por la causa de extinción y se mantendría la obligación. Es más, si la causa fuera el fallecimiento del acreedor, sus herederos le sucederían en la titularidad del crédito.

La forma establecida por la ley para el pago de la pensión del artículo 97 CC es un abono en metálico de carácter periódico o en una prestación única. Estas son, pues, las únicas formas en que puede ser fijada por el juez en su sentencia. Pero además, el legislador ha facultado a los cónyuges para sustituir la forma de pago periódico por otra, a través del artículo 99 CC⁴⁹⁵.

La legislación en Cataluña, el Código de Familia de Cataluña, al contrario que el Código Civil, permite que la sustitución pueda hacerse por el juez, cuando no exista acuerdo de los cónyuges, pero limita las posibilidades a “*la entrega de bienes en dominio o usufructo*”, como se refleja en el artículo 85 CF Cataluña⁴⁹⁶.

Con respecto al carácter limitativo o no de estos supuestos, son de aplicar los mismos razonamientos que se han formulado para el territorio común en lo que respecta a la capacidad de los cónyuges para pactar cualesquiera otras fórmulas para reemplazar a la pensión, por la condición de disponible de ésta y la posibilidad de los cónyuges de realizar entre sí toda clase de actos o contratos.

⁴⁹⁵ Art. 99 CC: “En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero”.

⁴⁹⁶ Art. 85 CF Cataluña. “Pago de la pensión compensatoria: 2. En cualquier momento, por acuerdo de los cónyuges o, en defecto de éste, por resolución judicial, el cónyuge obligado al pago de la pensión compensatoria puede sustituirla por la entrega de bienes en dominio o usufructo”.

Sin embargo, una vez que se considera que las posibilidades de pago de la pensión compensatoria, en sustitución de la del abono de una pensión periódica, son solo tres, las enumeradas, y consideradas como *numerus clausus*, en ausencia de acuerdo el juez no puede imponer cualquier forma de pago de la pensión compensatoria, ya que se trata de una medida extraordinaria de pago de la misma, al ser la ordinaria la del pago de una pensión periódica.

En ausencia de acuerdo, aunque sea precisa la resolución judicial, lo es para que el cónyuge obligado pueda sustituir el pago de la pensión, para lo cual como mínimo se hace necesaria la voluntad del deudor y su iniciativa. Por lo tanto, cuando no exista convenio entre las partes, el ejercicio de esta prerrogativa por el juez, de fijar la pensión compensatoria sustitutoria, no será de su elección exclusivamente, sino que ha de efectuarse a instancia del obligado, quien propondrá una u otra, no siendo declarada la sustitución de la forma de pagar la pensión compensatoria de oficio por el juez.

9.3.1.- Prestación única en bienes o dinero, constituyendo una renta vitalicia

La renta vitalicia es, de acuerdo con el artículo 1.802 CC⁴⁹⁷, es el contrato por el que una persona, el deudor, se obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas. En el artículo 1.803 CC⁴⁹⁸ se señala cómo puede constituirse la renta que da el capital, sobre la vida del que la paga, sobre la de un tercero o sobre la de varias personas y también puede constituirse a favor de aquella o aquellas personas sobre cuya vida se otorga.

Esta regulación general de la pensión vitalicia permite condicionar la percepción a la vida del deudor, del acreedor o de otro u otros, ya que el artículo 99 CC nada dice al respecto. Parece, no obstante, que se entiende normalmente que su constitución ha de hacerse sobre la vida del

⁴⁹⁷ Art. 1.802 CC: “El contrato aleatorio por el que se obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión”.

⁴⁹⁸ El artículo 1.803 CC: “Puede constituirse la renta sobre la vida del que da el capital, sobre la de un tercero o sobre la de varias personas y también puede constituirse a favor de aquella o aquellas personas sobre cuya vida se otorga, o a favor de otra u otras personas distintas”.

beneficiario. Pero es igualmente posible que lo sea sobre la vida del deudor, en una clara finalidad de que los herederos de éste no se vean afectados con esta carga, siempre teniendo en cuenta la posible temporalidad de la pensión compensatoria y, por lo tanto, la ausencia de una necesaria finalidad de cobertura de desequilibrios del acreedor durante toda la vida de éste.

Para Campuzano Tomé⁴⁹⁹: *“... pactada por los cónyuges esta modalidad de pago, carecería de sentido entender que la finalidad perseguida es la de que sea el deudor de la pensión por desequilibrio quien se erija en deudor de la pensión vitalicia. Lo lógico es entender que una vez acogida esta modalidad, será un tercero quien, en virtud del capital que previamente le ha sido satisfecho por el deudor de la pensión por desequilibrio económico, va a quedar obligado a pagar al acreedor de la misma, una renta vitalicia...”*.

Del mismo modo Roca Trías⁵⁰⁰ señala que: *“la redacción de este artículo podría hacer pensar, en una primera lectura muy precipitada, que el contrato de renta vitalicia tiene lugar entre el deudor y el acreedor lo que resulta absurdo, dada la naturaleza del contrato en cuestión. Lo que sí es posible y es lo previsto en el artículo 99 CC es la constitución de una renta vitalicia en favor del acreedor de la pensión, mediante un contrato celebrado entre el deudor y un tercero, con las condiciones previstas en el artículo 1802 CC. Nos hallamos, evidentemente, ante un contrato en favor de tercero, en el que el beneficiario es el acreedor de la pensión y en el que el tercero debe satisfacer la renta pactada, no a quien sería su acreedor (el que entrega el capital), sino a un tercero. Ello es posible dado el carácter no personalísimo predicado del pago de la pensión”*.

Luna Serrano⁵⁰¹ considera que respecto de esta forma de sustitución de la pensión se pueden plantear cuestiones *“en cuanto al mantenimiento del valor monetario de la renta asignada y al aseguramiento de su pago”*,

⁴⁹⁹ CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, Librería Bosch, Barcelona 1986. Página 184.

⁵⁰⁰ ROCA TRÍAS, Encarna: *“Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”*, Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo, Edición. Revista de Derecho Privado Edersa, 2ª edición, Madrid 1982. Página 635.

⁵⁰¹ LUNA SERRANO, Agustín: *«El nuevo régimen de la familia»*, Tomo I, Matrimonio y divorcio, Cuadernos Civitas, Madrid 1982. Página 372.

concluyendo que *“tratándose de una conmutación paccionada de la pensión ya judicialmente fijada y que no requiere la aprobación judicial, a aquellas eventualidades deberá atender el pacto novatorio”*.

En esta modalidad se produce una sustitución del deudor, novándose la obligación anterior. La novación de la pensión fijada por el juez o de la convenida por los esposos en sustitución de la periódica, debe regirse en cuanto a todas sus características por lo acordado por las partes. El problema surge cuando los esposos no han hecho mención alguna de cláusulas como las antes apuntadas, sobre actualización del valor o sobre causas extraordinarias de extinción. En tales supuestos, operan las condiciones modificativas y extintivas de la pensión compensatoria.

En general, esta modalidad de sustitución suele tener lugar contratando el deudor la renta vitalicia con una entidad bancaria o aseguradora, lo que permite al acreedor, de una parte, obtener una mayor seguridad en el cobro de la pensión, por la solvencia de la entidad que pasa a ser deudora, y de otra, evitarse, a través de lo pactado, reducciones o temporalizaciones de la cuantía, en virtud de cambios de circunstancias.

Por el contrario, para el deudor puede ser una forma de disminuir la cuantía de la prestación a convenir, precisamente por las ventajas antes citadas. En realidad el obligado al pago hace entrega de unos bienes, si bien no a su acreedor, sino a un tercero.

Pero puede constituirse una renta temporal y no vitalicia, ya que aunque la expresión literal del artículo 99 CC sólo contempla que la renta sea de por vida, en base al principio de la autonomía de la voluntad de los cónyuges o ex –cónyuges, les permite considerar la posibilidad de cualquier pacto, vitalicio o temporal.

9.3.2.- Constitución de un usufructo sobre determinados bienes

El usufructo, de conformidad con el artículo 467 CC⁵⁰² da derecho a disfrutar de bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia.

⁵⁰² Art. 467 CC: “El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa”.

Conforme al artículo 469 CC este usufructo podrá constituirse “*en todo o en parte de los frutos de la cosa*”, “*desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición*” y puede constituirse “*sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible*”.

Conforme al artículo 470 CC los derechos y obligaciones del usufructuario serán “*los que determine el título constitutivo del usufructo*” y “*en su defecto, o por insuficiencia de éste, se observarán las disposiciones contenidas*” en los artículos 471 al 512 CC.

Por otra parte, permite que el deudor de la pensión sea el nudo propietario o un tercero, y en todo o en parte. A diferencia del caso anterior, en éste la cifra a percibir por el acreedor de la pensión no está predeterminada. Es más, ni siquiera es únicamente una cantidad dineraria, ya que el usufructo comprende, no sólo el derecho a percibir los frutos y rentas de los bienes usufructuados, sino el disfrute de dichos bienes. El beneficiario puede utilizar, por ejemplo, una vivienda sobre la que se haya constituido un usufructo a su favor o alquilarla y percibir las rentas. En cualquier supuesto, así como en la renta vitalicia, se puede asegurar, además del importe a percibir, la periodicidad de su cobro, en el usufructo el carácter aleatorio se incrementa.

En cuanto al tiempo, por el que se cede o constituye, y las causas de extinción, habrá de estarse al título constitutivo, siendo amplia la libertad de los contratantes, según el artículo 467 CC, entre ellos el referido al plazo. Aquí el artículo 99 CC ni siquiera menciona el calificativo vitalicio, como lo hace como en el caso anterior de la pensión, con lo que todavía la existencia de esta posibilidad es más clara, si ello fuera preciso.

Haza Díaz opina sobre la obligatoriedad de prestación de fianza establecida en el artículo 491 CC que: “*... quedan dispensadas de prestarla algunas personas, entre las cuales menciona el citado precepto (artículo 492 CC) el cónyuge sobreviviente respecto del usufructo viudal; por razón de la semejanza entre ambas instituciones, quedará eximido de afianzar el cónyuge usufructuario, que lo sea por aplicación del artículo 99 CC y si incumpliera esta obligación podría aplicársele lo dispuesto en el artículo 494 CC...*”.

En cuanto a la obligación de formación de inventario, también exigida en el citado artículo 491, la misma autora señala: “*Respecto al*

deber de formar inventario, podrá dispensarse al usufructuario de esta obligación previa a la posesión de los bienes usufructuados, tanto por el cónyuge deudor o nudo propietario, como por el juez que apruebe el convenio sustitutorio de la pensión”.

Es cierto que el artículo 493 CC permite que, cualquiera que sea el título del usufructo, el usufructuario podrá ser dispensado de ambas obligaciones: prestación de fianza y formación de inventario. Sin embargo, respecto de la fianza, no puede aplicarse por analogía al cónyuge separado o ex-cónyuge por el divorcio, la consideración de cónyuge viudo al que corresponde la cuota viudal usufructuaria. La discrepancia entre ambas situaciones es evidente y la diferente relación con el nudo propietario, también.

Tampoco se puede relevar de estas obligaciones el juez. Tratándose de una relación que nace de un convenio entre las partes, sólo éstas pueden eximir de las obligaciones de afianzar o inventariar. El juez no puede crear nada en el convenio. En el curso de un proceso de mutuo acuerdo, las facultades del juez se ordenan en el artículo 777 LEC y anterior disposición adicional sexta de la Ley 30/1.981. Si desaprueba algún extremo, ha de requerir a las partes para que lo modifiquen y propongan uno nuevo. Si aprueba este cambio, homologa el convenio y, si no lo confirma, resuelve él.

Por lo tanto, su actuación, la del juez, ha de venir restringida al cumplimiento de estos trámites y no existe razón alguna por la cual, incluida en un convenio una sustitución de la pensión periódica por el usufructo de un bien, en el que no se haya eximido al usufructuario de las obligaciones de prestación de fianza y formación de inventario, vaya a desaprobarlo y a incluir esta exoneración.

Por otra parte, siendo la pensión y su sustitución competencia exclusiva de los interesados, y nunca del juez, y siendo la materia plenamente disponible, el mismo nada puede hacer al respecto. Sólo los cónyuges intervinientes pueden hacer uso de la facultad que les concede el artículo 493 CC, cuando no resulte perjuicio para nadie.

9.3.3.- Entrega de un capital en bienes o dinero

En realidad, este tercer medio de sustituir la pensión compensatoria a tenor de la legislación comparada, es la alternativa clara a la pensión periódica y, en algunos países, la única que puede fijar el juez.

Por otra parte, es la más eficaz y la que pone fin a las relaciones económicas derivadas del matrimonio, con excepción de las derivadas de la liquidación del régimen económico.

Este medio de sustitución debe incluir cualquier cesión de bienes y/o derechos, así como la condonación o asunción de deudas del beneficiario por parte del obligado al pago de la pensión. Aunque el texto legal se refiere a bienes o dinero, hay que tener en cuenta que la ley diferencia en repetidas ocasiones *bienes*, *derechos* y *obligaciones*, como ocurre en el artículo 659 CC, y en otras parece comprender en el término *bienes*, tanto a éstos como a los «*derechos*» específicamente considerados. Hay que pensar que la referencia a *bienes* en el citado precepto legal se entiende hecha, en realidad, a un derecho sobre ellos: el de dominio, aunque cabe que se entreguen los mismos en concepto distinto del de dueño.

En este apartado del artículo 99 CC deben considerarse incluidas todas las cesiones favorables al acreedor a cargo del deudor o de un tercero, por cuenta de éste.

Pueden las partes pactar que la sustitución realizada mediante la entrega de bienes o dinero se realice de forma aplazada o fraccionada en plazos. Ello puede plantear el problema de si el aplazamiento o fraccionamiento priva a la cesión de su carácter liberador de la obligación, y el de si es el consenso el que produce la sustitución de la pensión, fijada judicialmente o convenida, o es la entrega real de la contraprestación.

La diferencia puede tener especial relevancia si durante el tiempo que media entre la sustitución y la entrega real y completa, se produce, por ejemplo, alguna causa de extinción, como la muerte del acreedor. Si es el consentimiento el que produce la novación, existirá, en caso de defunción del beneficiario, un crédito que se integrará en su sucesión; y si contrae matrimonio o convive maritalmente con otro, mantendrá el derecho a cobrar lo que se le adeude. Por el contrario, si sólo el cumplimiento total de la obligación sustitutoria es el que produce la extinción o modificación

de la obligación de pago de la pensión compensatoria, la causa extintiva operará respecto a las cantidades no vencidas, aunque no en cuanto a las vencidas y no satisfechas, en que el crédito se ha consolidado.

Roca Trías plantea esta cuestión en la siguiente forma: “*¿Qué ocurre cuando habiéndose acordado la entrega de un capital, fallece bien el cónyuge acreedor bien el deudor antes de que sea satisfecho? Hay que tener en cuenta aquí que aunque nos hallemos ante un derecho de crédito, existe un componente familiar que hace que la solución no pueda ser la misma que cuando se trata de un derecho de crédito de otra clase y así, si el acreedor fallece antes de haber cobrado la cantidad acordada, sus herederos no pueden reclamar el pago acordado, ya que ha desaparecido la base familiar para la que se había acordado dicho pago; si quien fallece es el deudor, deberá aplicarse la misma norma del artículo 101.2 CC, de modo que los herederos asumen la obligación de su causante, pero siempre con la limitación de los derechos de legítima correspondientes y la suficiencia del caudal hereditario.*”

Esta solución pretende armonizar las características de estos negocios jurídicos de naturaleza familiar, con el texto literal del artículo 99 CC, que se refiere a entrega, que tiene un sentido de efectivo cumplimiento y de transmisión posesoria de los bienes o el dinero, y no de mero convenio. Por otra parte, la falta de total cumplimiento de la obligación, aunque se haya pactado el aplazamiento, no parece que deba beneficiar al que no ha completado su prestación.

Esta consecuencia debe también aplicarse al supuesto del matrimonio o convivencia *more uxorio* del acreedor. Hay que tener en cuenta que, en este pacto sustitutorio, la posibilidad de tales nupcias o convivencias posteriores, está presente en su negociación: para el acreedor, al eliminar los riesgos de pérdida; y para el deudor a fin de reducir la cuantía por idéntica razón.

Sin embargo, en ocasiones, cuando los plazos son periódicos, iguales y por un plazo de tiempo de una cierta extensión podría considerarse el fraccionamiento como una pensión limitada temporalmente y durante su vigencia estar sujeta a la normativa íntegra de la pensión compensatoria.

Como cualquier otro contrato, el pacto novatorio está sujeto a la interpretación de la voluntad de los estipulantes. Porque es cierto que, con

independencia de la sustitución que regula el artículo 99 CC, los cónyuges o ex-cónyuges, en uso de su libertad de contratar, pueden sustituir la pensión inicialmente establecida por el juez o convenida por ellos, por otra compensatoria, de diferente cuantía o límite temporal, quizá transigiendo posibles modificaciones por alteración de las circunstancias. Y, en ese caso, seguirá existiendo una pensión del artículo 97 CC, sujeta a sus causas especiales de extinción y modificación o de sucesión limitada de la deuda.

La entrega de bienes o de un capital plantea otro problema, el de si debe existir una cierta equivalencia entre la pensión y el valor de los bienes o dinero entregados o, por el contrario, si la sustitución es absolutamente libre y no precisa de equivalencia alguna entre las prestaciones. O lo que es lo mismo, el de si es o no necesario capitalizar la pensión para poder sustituirla.

Roca Trías⁵⁰³ se pronuncia en contra de esta última exigencia: *“En cuanto al primer punto sobre la necesidad de capitalizar las pensiones para encontrar la suma exacta del capital a entregar creo que ello no es absolutamente necesario, aunque está en la autonomía de los interesados realizarlo así. Cuando se acuerda la sustitución de la pensión por la entrega de un capital una tantum, las partes asumen un alea que está insito en la base del propio acuerdo y ello ocurre tanto si se capitaliza la pensión, como si se pacta la entrega de una suma, sin capitalización”*.

Al igual que ocurre en ocasiones con las liquidaciones de gananciales, que por realizarse en perjuicio de acreedores, pueden estar sujetas a la acción rescisoria, la sustitución de la obligación del pago periódico de la pensión compensatoria por la entrega de bienes puede verse afectada por idéntica circunstancia.

⁵⁰³ ROCA TRÍAS, Encarnación: “Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, Tomo II, artículos 42 al 107 del Código Civil, dirigidos por Manuel Albaladejo, Edición Revista de Derecho Privado/Edersa, 2ª edición, Madrid 1.982. Página 636, y pág. 637.

CAPÍTULO XII

CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL IMPAGO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Cuando el obligado al pago de la pensión compensatoria no procede a su abono, el deudor de la misma, tiene diferentes opciones, la primera, acudir a la vía civil, para solicitar que la ejecución forzosa de la resolución judicial recaída, ó, la segunda, si concurren los requisitos que se señalan en los artículos 226 y 227 CP, acudir a la vía penal. Las consecuencias que se derivan en un caso y en el otro son de distinta naturaleza, si bien el objetivo del acreedor de la pensión compensatoria es el cobro de la pensión.

10.1.- En el orden civil

En el orden civil las consecuencias que se derivan del impago de la pensión compensatoria, han de ser solicitadas en el juzgado de familia, son de ámbito procesal, y se realizan mediante el procedimiento de ejecución forzosa de la resolución recaída en la que se declara el derecho a la pensión compensatoria, en la cuantía que se haya señalado en ésta.

Si el momento a partir del cual se puede solicitar la pensión compensatoria⁵⁰⁴ es el de la ruptura conyugal mediante la interposición de la correspondiente demanda, o la solicitud judicial de medidas provisionales, la reclamación de las cantidades debidas y no pagadas en concepto de pensión compensatoria tendrá lugar, a través de un procedimiento judicial.

El procedimiento se iniciara mediante la interposición de la correspondiente demanda ejecutiva, de ejecución forzosa, estando legitimado activamente quien resulte acreedor de la pensión compensatoria, al haber recaído sentencia o resolución judicial en su favor,

⁵⁰⁴ ALBERRUCHE DÍAS-FLORES, María Mercedes, *“Fijación del momento a partir del cual se puede solicitar la pensión de alimentos”*. Actualidad civil, ISSN 02113-7100, 2.014, núm. 6, pp.

condenando al pago de la pensión al otro cónyuge, que resulta el deudor, y siempre que exista una resolución judicial, bien por aprobación del convenio regulador firmado por las partes y ratificado en presencia judicial o bien mediante procedimiento contencioso entre las partes en el que haya recaído sentencia.

Así mismo, el acreedor de la pensión compensatoria puede haber sido el actor en el procedimiento interponiendo la correspondiente demanda o el demandado, quien lo deberá haber realizado a través de la reconvencción, de forma expresa, y separada al ser una cuestión de derecho dispositivo sobre la que no ha de pronunciarse de forma obligada el juzgador, conforme a los artículos 406-3º⁵⁰⁵ y 770-2º LEC⁵⁰⁶. Pero no es necesaria la reconvencción si la parte actora ha introducido a debate dicha cuestión.

El procedimiento se regula en los artículos 538 y siguientes de la LEC⁵⁰⁷, la finalidad de la interposición de la demanda ejecutiva, en ejecución forzosa es el cobro de las cantidades adeudadas, y para ello se

⁵⁰⁵ Art. 406-3º LEC: “La reconvencción se propondrá a continuación de la contestación y se acomodará a lo que para la demanda se establece en el artículo 399 LEC. La reconvencción habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos. En ningún caso se considerará formulada reconvencción en el escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la demanda principal”.

⁵⁰⁶ Art. 770-2º LEC: “La reconversión se propondrá con la contestación a la demanda. El actor tendrá diez días para contestarla. Sólo se admitirá la reconvencción: a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio. b) Cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad pretenda el divorcio. c) Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. d) Cuando el cónyuge demandado la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio”.

⁵⁰⁷ Art. 538 LEC: “Partes y sujetos de la ejecución forzosa: 1. Son partes en el proceso de ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho de la ejecución y la persona o personas frente a las que ésta se despacha. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 540 a 544 a instancia de quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo, sólo podrá despacharse ejecución frente a los siguientes sujetos: 1º.- Quien aparezca como deudor en el mismo título. 2º. Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público. 3º. Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección derive de la Ley o se acredite mediante documento fehaciente. La ejecución se concretaría respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos. 3. También podrán utilizar los medios de defensa que la ley concede al ejecutado aquellas personas frente a las que no se haya despachado ejecución, pero a cuyos bienes haya dispuesto el tribunal que ésta se extienda por entender que, pese a no pertenecer dichos bienes al ejecutado, están afectos los mismos al cumplimiento de la obligación por la que se proceda. 4. Si el ejecutante indujera al tribunal a extender la ejecución frente a personas o bienes que el título o la ley no autorizan, será responsable de los daños y perjuicios.

propondrá el embargo de la nómina, saldos en cuentas corrientes, o incluso el embargo de bienes inmuebles.

El requisito de procedibilidad será únicamente respetar el plazo contemplado en el artículo 548 LEC⁵⁰⁸ del transcurso de 20 días hábiles para poder presentar la demanda ejecutiva, no debiendo esperar al transcurso de los plazos que se requieren en el ámbito penal.

Junto con el escrito de demanda deberá de aportar la copia de la resolución judicial en que se le reconoce el derecho al cobro de la pensión compensatoria en la cuantía que se haya fijado. Le corresponde la carga de la prueba al deudor de la pensión compensatoria, que es quien tiene que acreditar que si que ha abonado la pensión compensatoria al acreedor de la misma.

Las pensiones que podrán ser reclamadas son las que resulten no atendidas desde la fecha en que se hubiera dictado resolución de la constitución de la obligación del pago por el deudor, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones que se dicten serán eficaces desde que se dicten momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.

10.2.- En el orden penal

En el orden penal las consecuencias que se derivan del impago de la pensión compensatoria por quien está obligado a ello constituye el delito de abandono de familia, que se regula en los artículos 226⁵⁰⁹ y 227 CP⁵¹⁰.

⁵⁰⁸ Art. 548 LEC: “Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales. No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena o de aprobación de convenio haya sido notificado al ejecutado.

⁵⁰⁹ Art. 226 CP: “El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia e inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses”.

⁵¹⁰ Art. 227 CP: “1.- El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 2.- Con la misma pena será castigado el que dejare de

El delito básico de abandono de familia se regula por primera vez en España en virtud de la ley que se integra en el Código Penal de 1.944 y cuyo origen se sitúa en una Ley inglesa de 1.924.

El delito se configura como de omisión permanente de deberes asistenciales, con una norma penal en blanco, que ha de integrarse con el Código Civil, regulador de los mismos, abarcando tanto los de orden ético, moral o espiritual, como los de índole económica.

En relación con estos delitos ha de tenerse en cuenta que se trata de un delito permanente de modo que el plazo de prescripción no comienza en tanto se mantenga la situación típica, no considerándose nuevo delito continuar en la misma actitud de incumplimiento de deberes después de haber recaído sentencia condenatoria.

Tanto este delito, del artículo 226 CP, como en el del artículo 227 CP, sólo se perseguirán, conforme al artículo 228 CP⁵¹¹, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, calificándose como delitos semi públicos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (Vivas Marzal), ha declarado que, formulada denuncia por el representante del menor o incapacitado, no es necesario, si cumple los dieciocho años o recobra la capacidad durante el decurso del procedimiento, que formule nueva denuncia o renueve o convalide la ya deducida (STS 30-01-1.989).

Conforme al artículo 130 CP es irrelevante el perdón al no preverlo el Código Penal, lo que dará lugar a que haya que recurrirse a la vía del indulto particular o de la suspensión de la ejecución.

En la reforma del año 1.989 se suprimió el inciso *“pudiendo hacerlo”*, referido al incumplimiento de deberes que tipifica, sin duda por considerarlo como una aclaración superflua, en cuanto no cometerá el delito quién esté imposibilitado para el cumplimiento de tales deberes, no pudiendo olvidarse el principio de culpabilidad.

pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 3.- La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas”.

⁵¹¹ Art. 228 CP: “Previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”.

Estos delitos de impago de prestaciones tienen antecedentes en la reforma introducida en el Código Penal de 1.989, que a su vez, tenía su precedente en la Ley de Divorcio de 1.932 la pena consiste en prisión o multa, debiendo de abonarse al mismo tiempo las cuantías adeudadas, es decir, que en la propia pena se contiene la responsabilidad civil.

La Ley de 1.989 justificaba en su Preámbulo la tipificación de estas conductas en el intento de otorgar la máxima protección a quienes, en las crisis matrimoniales, padecen las consecuencias de la insolidaridad del obligado a las prestaciones, que señala, y que la Fiscalía General del Estado consideró en la Consulta 1/1.993, de 16 de marzo, *“de difícil justificación a la vista de los principios inspiradores de un Derecho Penal moderno”*, nacido *“ante la insatisfacción social por el deficiente funcionamiento del sistema de ejecución en la jurisdicción civil”*.

La tipificación de estas conductas como delitos en el Código Penal no puede interpretarse como una prisión por deudas y, en ambos tipos penales, artículo 226 y 227 CP, habrá de respetarse el principio de culpabilidad.

La estructura de los tipos penas permite, según la Fiscalía General del Estado, Circular numero 2/1.990, la continuidad delictiva.

Respecto a la reparación del daño, está expresamente prevista, como novedad del Código Penal de 1.995.

El Código Penal regula este mismo comportamiento como falta en el artículo 618-2º CP, introducida por Ley Orgánica 15/2.003, de 25 de noviembre⁵¹², castigando dicho comportamiento con la pena de 10 días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.

El hecho delictivo en el tipo penal del artículo 226 CP supone dejar de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, y el hecho delictivo en el tipo penal del artículo 227 CP supone dejar de pagar

⁵¹² Art. 618-2º CP: “El que incumpliére obligaciones familiares establecidas en Convenio judicialmente aprobado resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos, que no constituya delito, será castigado con la pena de 10 días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días”.

durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge, siendo los sujetos del delito el ex cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria, en calidad de víctima, y el obligado al abono de la misma, como autor del delito de abandono de familia.

Los tipos de delito de ambos artículos del Código Penal son de omisión pura, porque la acción consiste en una omisión, dejar de hacer algo a lo que está obligado a hacer, y es de carácter temporal, es decir, la omisión del pago del deudor de la pensión compensatoria en este caso, ha de darse dentro de un periodo de tiempo.

Cuando el obligado al pago de la pensión compensatoria deja de abonarla voluntariamente, comete el delito, desde el momento en que se produce la dejación de cumplir con las prestaciones establecidas, y se concreta en el tipo penal del artículo 227 CP, en el impago de dos mensualidades consecutiva o cuatro no consecutivas, y cuya duración se entiende hasta que la conducta cesa.

Conforme a la Circular 1/2.007 de la Fiscalía General del Estado define el delito de abandono de familia: *“El delito tipificado en el artículo 227 CP se configura como un delito de omisión pura que se consume por el simple incumplimiento durante los períodos de tiempo señalados en el precepto legal, en cuyo desarrollo se aprecian dos fases: una de comisión, cuando concurren los elementos constitutivos del tipo, y otra de mantenimiento de la situación creada, en la que van acumulándose los impagos posteriores, sucesivos o alternos, que se configuran como elementos de la misma dinámica omisiva: reiterados incumplimientos.*

En la actualidad, la jurisprudencia mayoritaria de las Audiencias Provinciales se inclina por atribuir al delito de impago de pensiones el carácter de delito permanente, es decir, o existe un momento consumativo como en el llamado delito espontaneo, sino un período durante el cual, al persistir los elementos objetivos y la intencionalidad, el delito se sigue consumando en todo momento, y, por tanto, no le son de aplicación las reglas de continuidad delictiva del artículo 74 CP.

Es decir, el delito se consume cuando no se paguen dos pensiones mensuales seguidas o cuatro alternas, pero sus efectos penales se mantienen mientras duren los impagos. Se produce, pues, un único delito

permanente, cuyo momento final tiene lugar tras la cesación ininterrumpida de la lesión al bien jurídico o el enjuiciamiento de la conducta lesiva”.

La consideración del delito de impago de pensiones como delito permanente arranca de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El tipo penal tiene como elementos del delito el elemento objetivo y el elemento subjetivo.

Para que la conducta del deudor de la pensión compensatoria que no haya abonado dos pensiones mensuales seguidas o cuatro alternas sea considerada como ilícito penal, es decir, delito de abandono económico de familia, han de concurrir los siguientes elementos:

a) La existencia de una resolución judicial firme dictada en procedimiento de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación de abonar una prestación económica a favor del cónyuge o de sus hijos; sin que sea preciso que a tal derecho de crédito le acompañe una situación de necesidad vital por parte del beneficiario de la prestación. Es decir, aunque el cónyuge acreedor de la pensión compensatoria no se encuentre en situación de desamparo económico debido al impago de la pensión compensatoria, el delito se entenderá cometido.

b) La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, conducta ésta de omisión cuya realización consuma el delito por serlo de mera actividad, sin necesidad de que derive ningún resultado perjudicial complementario a la falta misma de percepción de la prestación establecida.

c) La necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabilísticos del artículo 5 CP⁵¹³ con la concurrencia, en este caso, de omisión dolosa, conforme al artículo 12 CP⁵¹⁴, del conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago; voluntariedad

⁵¹³ Art. 5 CP: “No hay pena sin dolo o imprudencia”.

⁵¹⁴ Art. 12 CP: “Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”.

que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida.

El elemento objetivo del delito se recoge en el propio artículo 227 CP y consiste en dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica establecida en favor del acreedor en el convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración de nulidad del matrimonio.

El elemento subjetivo del delito requiere el dolo, es decir, el comportamiento debe ser doloso, voluntario y no producto de la imposibilidad de asumir tales deberes. Estos delitos no pueden ser cometidos por imprudencia, pues cualquier persona conoce que debe atender, económicamente y en el ámbito moral y humano a su ex cónyuge, así que no es de aplicación si lo que existió fue únicamente una negligente o culposa dejación de los deberes en la confianza de que estaban siendo atendidos, dejando de prever y evitar lo previsible y evitable.

El elemento subjetivo del injusto se da en la carga de la prueba, será el deudor de la pensión compensatoria, el acusado, el que deberá probar que no abonó la pensión compensatoria por absoluta imposibilidad de hacerlo no bastando la mera afirmación de su incapacidad, debiendo acreditar que carecía de capacidad económica para ello.

Se consuma el delito cuando la omisión ha provocado una real situación de inseguridad para el sujeto pasivo. Es un delito permanente de omisión que se perpetra de manera ininterrumpida mientras el culpable persista en el abandono familiar, de manera que sus efectos duran mientras persista la situación de incumplimiento, no iniciándose el plazo de prescripción hasta que cese la situación ilícita.

El bien jurídico protegido es la protección a la familia en su función ético-social, procurando la consecución armónica y estable de las finalidades y objetivos tradicional y legalmente asignados a la misma respecto a la mutua asistencia, comprensión y colaboración de los miembros más cercanos que la integran repudiando las formas más graves de incumplimiento de los deberes familiares. Estos tipos penales no

protegen el incumplimiento de las resoluciones judiciales sino el cumplimiento de las obligaciones entre las personas obligadas⁵¹⁵.

El sujeto activo es el que ostenta la calidad de ex cónyuge y la conducta típica la integran las conductas omisiva en las que se sanciona el coportamiento que consiste en “*no hacer*” por parte de quien se encuentra obligado a observar un determinado comportamiento positivo que es el incumplimiento de asistencia necesaria para el sustento respecto del cónyuge.

Aunque la obligación de pago es mensual, el delito contemplado en el artículo 227 CP se perfecciona por el impago de dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. El incumplimiento debe derivar de un convenio judicialmente aprobado en el supuesto de separación legal, divorcio o nulidad, aunque el convenio judicialmente aprobado sea provisional o definitivo⁵¹⁶.

El artículo 226 CP es un delito que contiene un precepto genérico, y el artículo 227 CP es un delito que contiene un precepto específico, y pueden darse supuestos en que se den situaciones concursales, de leyes y de delitos, ya que es posible que para no abonar una pensión declarada judicialmente se cometan otros delitos, así el delito de alzamiento de bienes, obstrucción a la justicia, estafa, contra la Hacienda Pública, etc...

A continuación procedemos a establecer los criterios del Tribunal Supremo sobre el delito de abandono de familia o impago de pensión en relación con algunas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo respecto de estos delitos:

En los delitos por impago de pensiones se establece que se excluye el delito cuando hay imposibilidad de pago de las prestaciones. Las pensiones no pueden ser compensar con deudas derivadas del régimen matrimonial si estas no son líquidas ni exigibles. La responsabilidad civil del delito en caso de no abonarse las pensiones se pueden cobrarse mediante

⁵¹⁵ RODRÍGUEZ RAMOS, Luís y MARTÍNEZ GUERRA, Amparo. “*Código Penal comentado*”. La Ley, Grupo Wolters Kluwer. 3ª edición. Diciembre 2.009. Páginas 749 y ss.

⁵¹⁶ VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos. “*Comentario al Código Penal*” Actualizado por LO 5/2.010, de 22 de junio. La Ley Grupo Wolters Kluwer. 1ª Edición. Septiembre 2.010. Páginas 536 y ss.

compensación de deudas en la liquidación régimen matrimonial⁵¹⁷. STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito abandono de familia. Num. Res.: 1148/1999. Fecha: 28/07/1.999.

Hay supuestos en los que para cometer el delito de abandono de familia o impago de pensión que se regula en los artículos 226 y 227 CP se comete otro delito. Se podrán penar en concurso real previsto y penado en el artículo 73 CP, es decir penar los dos delitos, por ejemplo el delito de alzamiento de bienes regulado en el artículo 257 CP, ya sea en su forma comisiva u omisiva, siendo la esencia del delito la descapitalización ante la inminencia de la ejecución para el cobro de las pensiones, utilizando las diferentes formas posibles, así: alzamiento de bienes, compraventa, donación, fraudes, imprudencia, simulación⁵¹⁸.

Cabe la posibilidad de que el acusado por el delito de abandono de familia pueda no ser el propio deudor de la pensión no abonada, o serlo en concepto de coautor con el obligado a generar que se produzca el pago, siendo autor del delito de obstrucción a la justicia, previsto y penado en el artículo 464 CP, por ejemplo por incumplimiento de la obligación de retener parte del sueldo de la nomina del deudor del pago de la pensión, o el supuesto en que el ex esposo pide la baja voluntaria en su empresa⁵¹⁹.

En los supuestos en los que el deudor de la pensión alega situación de necesidad, pero no acredita que la razón del impago de la pensión se debe a una situación de imposibilidad real de impago podrá ser condenado como autor de un delito de abandono de familia. Si este extremo se acreditase y fuera absuelto de dicho delito seguirá debiendo las cantidades no abonadas en concepto de pensión compensatoria o alimentos, pudiéndole ser embargado el sueldo o retribuciones que pudiese percibir⁵²⁰.

⁵¹⁷ STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito abandono de familia. Num. Res.: 1148/1999. Fecha: 28/07/1999.

⁵¹⁸ STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito abandono de familia y alzamiento de bienes. Num. Rec.: 4734/1999. Num. Res.: 2068/2.001. Fecha: 08/11/2.001.

⁵¹⁹ STS. Sala Segunda. Jurisprudencia penal. Delito: Abandono de familia y obstrucción a la justicia. Fallo: Condena. Rec: 3536/2.000. Res: 1350/2.002. Fecha: 08/02/2.002. También STS. Jurisdicción Penal. Sala Segunda. Delito abandono de familia y obstrucción a la justicia. Fallo: Condena. Rec.: 4603/1.999. Res.: 18810/2.001. Fecha: 22/10/2001.

⁵²⁰ STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito de abandono de familia. Fallo: Condena. Rec.:1941. Res.: 560/2.002.

La mayoría de los delitos de abandono de familia se cometen so pretexto de no poder abonar las pensiones por imposibilidad económica y, siendo cierta la imposibilidad en muchos casos, en algunos otros de los supuestos se procede a cometer el delito de alzamiento de bienes, siendo éste el más común, que consiste fundamentalmente en ejecutar actos de ocultación de bienes y patrimonio con objeto de simular insolvencia, denominándose también delito de insolvencia punible⁵²¹.

Pero también hay supuestos en que el delito que se comete junto con el delito de impago de pensiones es el de estafa⁵²².

Por último, también se cometen delitos contra la Hacienda Pública en aquellos supuestos en los que los deudores del pago de la pensión compensatoria que con objeto de no abonar la pensión realizan una apariencia de tener ingresos menores ocultando sus ingresos a la Hacienda Pública. Por lo que como se puede ver el delito de impago de pensiones puede ser cometido de forma separada o conjuntamente con otros delitos, existiendo numerosa jurisprudencia al respecto que analiza detalladamente los diferentes delitos que se pueden cometer de forma conjunta con el delito de impago de pensiones.

La reforma del Código Penal de 31 de marzo de 2.015 efectuada mediante la Ley Orgánica 1/2.015 ha entrado en vigor el día 1 de julio del mismo año introduciendo novedades en esta materia, si bien no afecta directamente al tema que nos ocupa, ha suprimido las faltas de abandono, que son referidas fundamentalmente a los deberes contraídos como progenitores de los padres y frente a sus hijos menores.

Las conductas mas graves de incumplimiento de deberes familiares quedan tipificadas como delito en los artículos 226 y 227 Código Penal sin que se hayan producido modificaciones. La supresión de las faltas establecidas en el Código Penal conlleva, en esta materia de familia, la derogación del artículo 622 CP, relativo al incumplimiento del régimen de

⁵²¹ STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito de abandono de familia y alzamiento de bienes. Núm. Rec.: 10301/2012. Núm. Res.: 670/2012. Fallo condena. Fecha: 19/07/2012.

⁵²² STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito de abandono de familia, alzamiento de bienes y estafa. Núm. Rec.: 2531/2.011. Núm. Res.: 906/2012. Fallo: Condena. Fecha: 02/11/2.012. También STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Delito de abandono de familia y estafa. Núm. Rec.: 2119/2011. Núm. Res.: 670/2012. Fallo: Condena. Fecha: 19/07/2.012.

visitas, incumplimiento que hasta ahora era considerado como una falta en el Código Penal, pero a partir de la entrada en vigor de dicha reforma pasa a ser sancionado solo civilmente en virtud del artículo 776 LEC.

Los temas relativos al impago de las pensiones alimenticias y la suspensión de la pensión de alimentos, no se han visto prácticamente modificados, pero el impago de dichas pensiones es constitutivo de delito, tipificado en los artículos 226 y 227 Código Penal como hasta ahora.

Sin embargo, y, respecto a la rúbrica, que hasta ahora se mantenía en la Sección 3ª del Capítulo III del Título XII del Libro II, con el nombre *“Del abandono de familia, menores e incapaces”*, ha sido modificada y pasa a denominarse bajo la rúbrica: *“Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”*. En esta Sección se integran las conductas mas graves de incumplimiento de deberes familiares, todas ellas tipificadas como delitos.

Se deroga, en definitiva la falta contemplada en el artículo 622 CP de 1.995 y que la reforma de 2.010 no modificó, que establecía: *“Los padres que sin llegar a incurrir en delito contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia infringiesen el régimen de custodia de sus hijos menores establecido por la autoridad judicial o administrativa serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses”*. En lo demás se mantiene el reproche penal existente hasta la fecha sin modificaciones.

La supresión de las faltas en este ámbito puede producir consecuencias de falta de denuncia de comportamientos que antes de la reforma se realizaban, forzando a que tengan una apariencia delictiva con el fin de que puedan ser castigadas como delitos comportamientos que antes lo eran como faltas, con reproche disuasorio pero levemente castigado y no de forma más grave como acontece cuando el comportamiento es considerado como delito.

TABLAS ORIENTATIVAS DE LA DURACIÓN Y CUANTÍA DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Tabla para la duración temporal de la pensión en atención a un matrimonio donde el cónyuge que sufre el desequilibrio no trabaja.

Convivencia de 0 a 4 años..... 16 %

Convivencia de 5 a 9 años 26 %

Convivencia de 10 a 14 años..... 38 %

Convivencia de 15 a 19 años 52 %

Convivencia de 20 a 24 años..... 67 %

Convivencia de 25 a 29 años 84 %

Convivencia de 30 o más años .. 100 %

El porcentaje a aplicar para percibir la pensión compensatoria se multiplica a los meses que duró el matrimonio. Por ejemplo, 67 meses de convivencia (cinco años y siete meses) se multiplica por 26% y resulta 17,42; es decir, 18 meses. Implica que cobrará la pensión durante dieciocho meses.

CONVIVENCIA	EDAD BENEF.	INGRESOS BENEF.	CUALIF. BENEF.	INGRESOS OBLIGADO	HIJOS	CUANTÍA PENSIÓN	DURACIÓN
0-2 años	20-40	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre 60 y 90	1 año
0-2 años	20-40	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	90	3-5 años
2-10 años	20-40	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre 90 y 120	Más de 5 años
2-10 años	20-40	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	Entre 90 y 120	Hasta mayoría edad hijos o indep. económica
5-25 años	40-55	No	No	Entre 841 y 1.202	No	120	Hasta conseguir un trabajo o 5 años
5-25 años	40-55	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	120	Hasta conseguir un trabajo o 5 años
+25 años	+55	No	No	Entre 841 y 1.202	No	150	Indefinida
+25 años	+55	No	No	Pensión jubilación	No	90	Indefinida

Nueva tabla actualizada de la pensión compensatoria:

CONVIVENCIA	EDAD BENEF.	INGRESOS BENEF.	CUALIF. BENEF.	INGRESOS OBLIGADO	HIJOS	CUANTÍA PENSIÓN	DURACIÓN
0-2 años	20-40	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre 200 y 250	1 año
0-2 años	20-40	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	250	3-5 años
2-10 años	20-40	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre 200 y 250	Más de 5 años
2-10 años	20-40	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	Entre 200 y 250	Hasta mayoría edad hijos o indep. económica
5-25 años	40-55	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre 300 y 380	Hasta conseguir un trabajo o 5 años
5-25 años	40-55	No	Sí	Entre 841 y 1.202	Sí	Entre 300 y 380	Hasta conseguir un trabajo o 5 años
+25 años	+55	No	No	Entre 841 y 1.202	No	Entre el 35% y el 45% de la nómina	Indefinida
+25 años	+55	No	No	Pensión jubilación	No	Entre el 35% y el 45% de la pensión	Indefinida

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El artículo 97 CC existe en España desde 1.981 al regularse los procedimientos de nulidad, separación y divorcio con la Ley 30/1.981, de 7 de julio, pues hasta dicha fecha no cabía en nuestro derecho ninguna disolución del matrimonio, salvo la nulidad y en vía canónica, siendo el matrimonio indisoluble. Dicho artículo recoge el contenido de la pensión compensatoria, como forma de corregir un desequilibrio que surge como consecuencia de la ruptura de la pareja, estableciendo un derecho de crédito a favor de una frente a la otra.

De conformidad con dicho precepto, la pensión compensatoria es la cantidad periódica que un cónyuge debe satisfacer a otro tras la separación o el divorcio, para corregir el desequilibrio padecido por un cónyuge (el acreedor), en relación con el otro cónyuge (el deudor), como consecuencia directa de dicha separación o divorcio, siempre que implique un empeoramiento en relación con su anterior situación en el matrimonio.

Tradicionalmente la pensión compensatoria se ha establecido de forma vitalicia, y ha sido por vía doctrinal y jurisprudencial antes de su modificación legal, como se ha procedido a limitar temporalmente la concesión de la pensión compensatoria.

SEGUNDA.- Mientras los roles tradicionales de los cónyuges dentro del matrimonio estaban claramente diferenciados, el hombre trabajaba fuera del hogar y era quien mantenía económicamente a la familia, la mujer se encargaba del hogar y de los hijos habidos en el matrimonio, sin percibir por ello retribución alguna, si un matrimonio se separaba, obviamente el cónyuge al que se le producía desequilibrio económico habitualmente era la mujer, quien además solía ser a quien generalmente se atribuía la custodia de los hijos menores habidos en el matrimonio, y la atribución del uso de la que fuera vivienda conyugal, gozando el cónyuge alimentador del derecho de visitas de sus hijos, así como de la patria potestad compartida, debiendo abonar pensión de alimentos a los hijos menores habidos en el matrimonio, y la pensión compensatoria en muchos casos.

Pero en la actualidad, la evolución de la propia sociedad ha hecho que surjan otros modelos de familias y de uniones de hecho, parejas del mismo sexo, retraso de la edad de procrear, masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; factores todos ellos que influyen en la propia configuración de las parejas y matrimonios, no teniendo sentido en la actualidad que la pensión compensatoria se otorgue de manera habitual.

Mediante la ley 15/2.005, de 8 de julio se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Dicha Ley introduce cambios en el artículo 97 CC en cuanto al pago de la pensión compensatoria, que consistía, hasta la fecha, en el abono de una renta vitalicia, introduciendo la posibilidad de la temporalidad de la pensión compensatoria; y a la renta periódica establecida como forma de pago añade la posibilidad alternativa de compensar el desequilibrio mediante la entrega de una prestación económica única, un único pago.

Determinada la temporalidad del otorgamiento de la pensión compensatoria, en la que se adelantó la jurisprudencia al legislador, también actualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo está contribuyendo con su doctrina a adecuar la pensión compensatoria a las necesidades actuales, estableciendo el criterio de que la pensión compensatoria no es un medio de igualación entre los patrimonios de los cónyuges, aplicando un criterio más restringido tanto respecto a los presupuestos, como al periodo de concesión.

En la sociedad actual no parece lógico que la pensión compensatoria se establezca con arreglo a criterios de naturaleza reequilibradora, para corregir desequilibrios económicos que se dan como consecuencia de la ruptura del matrimonio, en vez de hacerse en base a una necesidad económica, en un sentido amplio, de auxilio al cónyuge que necesita alimentos, lo que se regula en nuestro derecho en el artículo 142 CC.

TERCERA.- El Código Civil no define el desequilibrio, lo que, además de propiciar muchas demandas ante los tribunales, también ha obligado a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre ello, estableciendo qué circunstancias no alteran los pactos suscritos en el convenio y cuáles sí suponen una alteración sustancial de las mismas. El artículo 97 CC, en relación con los artículos 100 y 101 CC y la doctrina jurisprudencial que los desarrolla, señalan que es presupuesto para la pensión la existencia de un

desequilibrio entre los cónyuges que determine para el acreedor de la pensión un empeoramiento de la situación de la que disfrutaba durante el matrimonio, aplicable también a los procedimientos de modificación de medidas, por lo que el límite temporal, en el caso de que no se haya fijado en el momento de establecerse la pensión, podrá judicialmente decretarse posteriormente, si se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para el establecimiento de la pensión con limitación temporal, ya que la pensión compensatoria está concebida en la ley como un medio para evitar el desequilibrio producido en uno de los cónyuges por la separación o el divorcio, lo que no implica que sea un medio para lograr la igualación entre los cónyuges.

Las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo y constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos, en dichas normas, de alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores conforme al artículo 100 CC, o la convivencia del perceptor con una nueva pareja, o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho conforme al artículo 101 CC. Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo está contribuyendo con su doctrina a adecuar la pensión compensatoria a las necesidades actuales, evitando que se produzcan situaciones de enriquecimiento injusto, creadas, bien por la inactividad del perceptor de la pensión compensatoria en la búsqueda de la salida de dicha situación, bien porque se haya producido una alteración sustancial sobre las circunstancias que determinaron la fijación de la pensión.

CUARTA.- Entre las formas de extinción de la pensión compensatoria que se contemplan en el artículo 101 CC, la jurisprudencia aplica un sentido amplio de interpretación a la causa relativa al “cese de la causa que lo motivó”, procediendo a declarar la extinción de la pensión compensatoria en muchos más supuestos en la actualidad. Más polémica suele ser la causa de extinción consistente en que el acreedor de la pensión viva maritalmente con otra persona, la cual, para que opere la terminación

del derecho de pensión, conforme ha señalado la jurisprudencia requiere una convivencia estable, con vocación de continuidad y permanencia.

La práctica jurisprudencial ha puesto de manifiesto que ambas circunstancias se prestan a ser objeto de diversas interpretaciones, entre las que juegan un papel relevante la grave situación económica que atraviesa la sociedad en el momento presente, caracterizada por la falta de trabajo o su precariedad, y determinados cambios en el papel atribuido tradicionalmente a la mujer en el hogar, unido a un nuevo modelo de convivencia más abierto, que ha ido propiciando un cambio instado por la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, a la luz de la realidad actual, ha reinterpretado cuándo debe apreciarse una alteración sustancial de las circunstancias que determinaron la fijación de la pensión compensatoria, que oscila entre valorar que el cambio de circunstancias requiere desde la reducción de la pensión hasta alcanzar la supresión de la misma y, respecto al segundo supuesto, cuándo se presume la existencia de vida marital y cuáles son los presupuestos que determinan la vida en común.

QUINTA.- Cabe que los futuros contrayentes establezcan pactos prenupciales sobre la pensión compensatoria, en razón tanto de la igualdad jurídica del hombre y la mujer respecto del matrimonio como de la libertad de contratación. A la voluntad tradicional de determinación del régimen económico matrimonial, completado con algún otro pacto específico, se ha unido la aspiración de regular las consecuencias de una ruptura cada vez más previsible, delimitando el alcance que pueden tener estos pactos prematrimoniales al matrimonio y qué materias pueden convenirse eficazmente.

La ley 14/1.975 de 2 de mayo, establece la equiparación de la mujer al hombre, eximiéndola de la licencia marital y dotándola de capacidad de obrar por sí sola. Al considerar la igualdad de los cónyuges y que la esposa no estaba bajo la autoridad de su marido, es posible el pacto y, consiguientemente, está permitido otorgar capitulaciones no sólo antes sino después de contraer matrimonio. Así se reconoce la autonomía de la voluntad de los cónyuges.

En esta materia son decisivos el artículo 1.323 CC, que autoriza a los cónyuges a celebrar entre sí toda clase de actos y contratos, con los límites legales establecidos; el artículo 1.328 CC, que establece dichos límites en

las estipulaciones que sean contrarias a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge; y el artículo 1.255 CC, que, en concordancia con el anteriormente citado, establece el principio de autonomía privada en los contratos.

SEXTA.- Cada vez proliferan más socialmente las situaciones de parejas de hecho, y dentro de estas, las que acaban en ruptura, momento en el cual se plantea el modo de corregir el posible desequilibrio económico entre los integrantes. Para la ello, en la jurisprudencia se han aplicado tres soluciones, que son: la teoría del enriquecimiento injusto, el principio de protección del conviviente perjudicado por la situación de hecho, y la aplicación analógica del artículo 97 CC, siendo más lógica la primera por su carácter objetivo y por haber excluido los convivientes la celebración del matrimonio entre ellos. Este tema debiera de ser objeto de una armonización por parte de las Comunidades Autónomas, que están procediendo cada una de ellas a la regulación de forma diferenciada de las uniones extramatrimoniales.

SÉPTIMA.- En el Derecho civil autonómico se han introducido como novedad preceptos que regulan el pacto sobre la pensión compensatoria con carácter previo a la celebración del matrimonio, si bien en este aspecto cabe destacar la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En el Derecho civil catalán, junto a la denominada prestación compensatoria, análoga la pensión compensatoria regulada en el Código Civil, existe la compensación económica por razón del trabajo, que puede atribuirse a uno de los cónyuges cuando se produce la disolución del régimen económico matrimonial de separación de bienes.

En los pactos previos a la ruptura matrimonial se puede llegar a acuerdos sobre la prestación compensatoria, que en todo caso deberán tener carácter recíproco y cuyo objeto puede recaer sobre la modalidad, cuantía, duración y extinción de la prestación compensatoria.

La naturaleza de la compensación por trabajo ha girado en torno a tres requisitos: la realización de unas prestaciones de trabajo (bien en la casa o en la actividad del otro), no retribuidas o retribuidas de forma insuficiente; la existencia de una desigualdad patrimonial entre ambos cónyuges, en el momento de plantear la separación o el divorcio, causada

por ese defecto retributivo; y la diferencia económica que implica un enriquecimiento injusto.

El legislador ha separado los dos criterios que originan el nacimiento del derecho: para el trabajo doméstico exige que el beneficiario haya trabajado sustancialmente más que el otro, partiendo de la idea de que ambos deben trabajar en la casa y compartir las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. Pretende el resarcimiento de un daño objetivo: la desigualdad patrimonial inducida y el coste de oportunidades que esa actividad ha representado para el que reclama. Se prescinde de la idea de enriquecimiento injusto del demandado, aunque ese enriquecimiento está latente, ya que la norma acaba obligando, si se solicita, a traspasar bienes a quien ha obtenido menos ganancias que el otro en el momento de liquidar el régimen.

OCTAVA.- El Derecho Civil de las demás Comunidades Autónomas no contiene diferencias sustanciales respecto a la regulación de la pensión compensatoria en el Código Civil. Así, en el Derecho Civil Foral de Aragón la denominada asignación compensatoria es equivalente a la pensión compensatoria establecida en el artículo 97 CC. En otras Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio, tales como Galicia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco, no hay una regulación específica de la pensión compensatoria, por lo que es de aplicación el Derecho Civil común.

NOVENA.- En Derecho comparado, dentro del ámbito de la Unión Europea, hay distintos modelos de pensión compensatoria.

Francia, claro precedente de la pensión compensatoria en España, ha evolucionado respecto a su forma de pago, siendo lo habitual la entrega de un capital único y teniendo la entrega de una renta periódica carácter excepcional, es decir, lo contrario que en España hasta la reforma.

En Italia es relevante el comportamiento culpable de los cónyuges, teniendo la pensión compensatoria en el divorcio un carácter indemnizatorio, y en la separación un carácter de derecho al mantenimiento y un derecho de alimentos, con independencia, en este último caso, de la idea de culpa, y otorgándose siempre que se reconociese la existencia de una situación de necesidad, lo que difiere del derecho en España, donde no interviene la culpa.

En Alemania la regulación de la pensión compensatoria, está al margen de la idea de la culpa, considerando que solo excepcionalmente cabe denegar la concesión de alimentos en el caso en que la concesión de los mismos, respecto del deudor, sea gravemente injusta, denominándose doctrinalmente “cláusula negativa de equidad”. La prestación alemana para el supuesto de divorcio guarda más parecido con una obligación alimenticia que con la pensión compensatoria del artículo 97 CC Español, donde existe una clara distinción entre la pensión compensatoria y la pensión de alimentos a los hijos.

En Portugal se regulan las prestaciones entre cónyuges efectuando una distinción entre los procesos de separación y divorcio, y basa la prestación en la culpabilidad o no de los cónyuges. En el caso de divorcio prevé la obligación del cónyuge declarado único o principal culpable, de reparar los daños no patrimoniales causados al otro cónyuge por la disolución del matrimonio. En la medida que resulte culpable, uno de los cónyuges, pierde todos los beneficios recibidos o que deba recibir, del otro cónyuge o de un tercero, en consideración al estado de casado, en tanto que el cónyuge inocente conserva todos esos beneficios. En el caso de separación, establece la subsistencia del deber de alimentos, con independencia de la culpabilidad. El sistema portugués tiene un marcado carácter culpabilístico, en materia de prestaciones entre cónyuges tras la crisis matrimonial, lo cual no ocurre en la legislación española en materia de divorcio.

En conclusión, no se puede decir, que exista una clara influencia del Derecho Comparado en nuestra legislación en materia de divorcio. De un lado, las regulaciones del divorcio y separación en los países de nuestro entorno europeos son anteriores en el tiempo, y de otro, no tienen como causa principal de la prestación de la pensión compensatoria a cargo de uno de los cónyuges, como deudor, a favor del otro, como acreedor, lo que constituye su fundamento en nuestra legislación, el de la existencia de un desequilibrio económico.

No obstante lo anterior, sería conveniente una modificación legal en cuanto al derecho a la pensión compensatoria, restringiendo su ámbito y modificando los supuestos de devengo, derivando su otorgamiento a supuestos de necesidad y no a corregir desequilibrios económicos.

DÉCIMA.- La mayoría de los países Latinoamericanos no contienen en sus regulaciones la pensión compensatoria tal y como la entendemos en España. Algunos países, aunque no de forma idéntica, pero sí de forma aproximada, contemplan la figura de la pensión compensatoria, si bien la denominan pensión alimenticia: Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Argentina, mediante los alimentos amplios en el sentido del mantenimiento del nivel económico del que gozaron durante la convivencia, teniéndose en cuenta como factores para la fijación de la pensión criterios idénticos a los contenidos en el artículo 97 CC.

Brasil, en el derecho a la pensión alimenticia, debe ser preservado, en la medida de lo posible, el status quo del cónyuge y de los hijos, por medio de la pensión alimenticia, alargando el concepto de necesidad no solo para fines de subsistencia y supervivencia, sino también para el mantenimiento del mismo patrón de vida existente durante la vigencia del matrimonio.

Chile, nace el derecho para exigir compensación económica en beneficio del cónyuge que se dedicó al hogar y a los hijos, y que por ello no pudo realizar, o lo hizo en menor medida, una actividad remunerada durante el matrimonio, este derecho intenta disminuir la disparidad que la ruptura provoca en las condiciones de vida, y para fijar su procedencia y monto se toma en cuenta no sólo la pasada inactividad laboral de un cónyuge, sino también su edad, estado de salud, calificación profesional, patrimonio, etc.

Nicaragua, los criterios para establecer la pensión alimenticia se basan en la proporcionalidad que debe existir entre la capacidad económica de quien da alimentos y las necesidades de quien los recibe. Los factores a tener en cuenta para establecer la pensión alimenticia, están en función de las posibilidades y recursos económicos de quien los debe y las necesidades de quien los recibe, debiendo tenerse en cuenta el capital o los ingresos económicos del alimentante y la edad y necesidades de otros alimentistas y otros factores, sin que en ningún caso los gastos personales del alimentante hagan que pueda evadir las responsabilidades de la pensión. Siendo prioritarios los hijos, después el cónyuge y, por último al compañero en unión de hecho estable.

Panamá, la pensión alimenticia que se puede establecer para uno de los cónyuges y a favor de los hijos o hijas. La primera puede surgir, con ocasión de la disolución del vínculo conyugal, cuando se es cónyuge culpable y puede subsistir disuelto el vínculo matrimonial hasta cuando deje de ser necesaria, o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. La pensión alimenticia así concedida se fija a fin de que la persona pueda mantener el mismo status social que tenía durante el matrimonio, por lo que, si mejora de fortuna, puede suspenderse. Se hace una mención al nivel de vida previo durante el matrimonio, al manifestar que para el cálculo de la pensión alimenticia a percibir por el cónyuge inocente, se tendrá en cuenta que conserve la posición social que tenía durante el matrimonio y también de forma similar se extingue dicha pensión, al contraer de nuevo matrimonio el cónyuge acreedor de la pensión, mientras que la segunda, surge como una obligación inherente al ejercicio de la patria potestad, como un derecho de los hijos e hijas, ya estén o no casados entre sí sus progenitores o bien cuando se disuelva el vínculo matrimonial.

Paraguay, existe la obligación de prestar alimentos y la pérdida del apellido de la mujer divorciada, se contempla una pensión de alimentos con similitudes a nuestra pensión compensatoria, al afirmar el derecho de alimentos del cónyuge no declarado culpable respecto del otro, derecho que se extinguirá si contrae nuevo matrimonio, si vive en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge.

Uruguay, la mujer no culpable del divorcio tiene derecho a una decente y congrua pensión alimenticia según las posibilidades del ex cónyuge y a sus necesidades, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Dicha pensión la perderá si lleva una vida desarreglada o contrae nuevo matrimonio, los factores para tener en cuenta su cuantía se determinarán en función de las posibilidades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Y establece de forma clara el derecho de alimentos entre cónyuges para cubrir las necesidades de sustento. Se reconoce el derecho de ambos ex cónyuges a solicitarse mutuamente alimentos, (aun la mujer culpable del divorcio), que le permitan su modesta sustentación, en cuyo caso se deberá tener en cuenta la conducta actual, (o sea, al momento en que se solicitan) de quien los reclama.

UNDÉCIMA.- La mayoría de los Países Latinoamericanos solo contienen obligaciones de alimentos entre cónyuges y en base a una necesidad de quien los recibe: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico y Venezuela.

En Bolivia, si el esposo que no dio motivo para el divorcio carece de medios suficientes para su subsistencia y los necesita, puede pedir pensión de asistencia familiar de prestación de alimentos, siendo de cumplimiento inexcusable y obligatorio.

En Colombia, si se ha señalado en la sentencia que uno de los cónyuges es culpable del divorcio, ha lugar a imponerle el pago de una cuota periódica a favor del cónyuge inocente, siempre que éste la haya solicitado previamente. Por tanto, el cónyuge declarado culpable ha de satisfacer alimentos al cónyuge divorciado o separado sin culpa.

Costa Rica prevé una pensión alimentaria en lo que respecta a los hijos, su guarda, crianza y educación, pero no se regula la pensión compensatoria en los términos de la regulación española. Sin embargo sí se contempla una pensión alimentaria a favor de uno de los cónyuges, el cónyuge declarado inocente, a cargo del cónyuge declarado culpable.

Cuba prevé el derecho de alimentos a favor del cónyuge que los necesite, y en todo caso de los hijos menores. La exigibilidad de alimentos procede cuando uno de los cónyuges tenga necesidad de ello al momento de disolverse el matrimonio, y serán fijados por el término de seis meses, si no existieren hijos menores a su guarda y cuidado, y de un año, si los hubiere y no tenga medios propios de subsistencia.

En la Republica Dominicana, durante el curso de la acción en divorcio por la mujer casada, puede requerir la fijación de una pensión alimenticia como medida provisional cuyo pago, tras ser ordenada por la jurisdicción competente, que correrá por cuenta del esposo. La pensión alimenticia consistirá en una suma de dinero consignado por sentencia tendrá vigencia mientras dure el procedimiento judicial incurso.

En Ecuador, en los acuerdos matrimoniales en orden a los hijos y a los bienes, se incluyen la quinta parte de los bienes cuando el cónyuge carece de lo necesario para su alimentación, o su derecho al complemento

si tuviese bienes, tomando en cuenta el valor de sus gananciales en la sociedad conyugal.

En Guatemala se contempla el derecho de alimentos a favor de cónyuge inocente o no culpable y el montante de la pensión que debe pagar el marido a la mujer, si ésta no tiene rentas propias suficientes. La pensión podrá ser fijada por las partes, y en su defecto será fijada por el juez, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y las necesidades de quien ha de recibirla. Pero para poder tener derecho a la pensión, la mujer no tendrá que ser declarada culpable, observar buena conducta, y no contraer nuevo matrimonio. En el caso del marido para poder tener acceso al derecho a una pensión, deberá también no ser declarado culpable y además sólo tendrá derecho a una pensión de alimentos a cargo de su ex mujer cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y además no contraiga nuevo matrimonio.

En México se señalan y aseguran los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos, estableciéndose, asimismo, litis expensas durante la tramitación del divorcio. Igualmente, se requerirá a ambos cónyuges para que exhiban al juez, bajo promesa de decir verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición. También puede, en su caso, el juez condenar al cónyuge culpable al pago de daños y perjuicios si los origina.

Puerto Rico, contempla los alimentos al cónyuge, el demandante vendrá obligado a proteger y satisfacer las necesidades del cónyuge demente en proporción a su condición y medios de fortuna, mientras sea necesaria para su subsistencia, disponiéndose, además, que esta obligación en ningún momento ha de ser menos de dos quintas (2/5) partes del ingreso bruto por sueldos o salarios o entradas de cualquier otra clase que tuviere el cónyuge demandante. La pensión de alimentos, se concede a favor del cónyuge necesitado, en los casos en los que alguno de los cónyuges no cuente con medios suficientes para vivir y a cargo del otro cónyuge.

Venezuela, tiene como efectos patrimoniales del divorcio por separación prolongada, que el tribunal podrá conceder pensión alimentaria al cónyuge que no haya dado lugar al juicio, cuando éste por incapacidad física u otro impedimento estuviere imposibilitado para trabajar y no tener otros medios para sufragar sus necesidades. Tales alimentos serán temporales, y mientras dure la incapacidad o contraiga nuevo matrimonio.

DUODÉCIMA.- Existen también Países Latinoamericanos que contemplan un derecho al resarcimiento de daños y perjuicios a causa del divorcio equivalente a la figura que se contempla en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1.438 CC: México, Panamá y Perú.

En México el juez puede, también, en su caso, condenar al cónyuge culpable al pago de daños y perjuicios si los origina. En Panamá la pensión alimenticia se puede establecer para uno de los cónyuges y a favor de los hijos o hijas. La primera puede surgir, con ocasión de la disolución del vínculo conyugal, cuando se es cónyuge culpable, mientras que la segunda surge como una obligación inherente al ejercicio de la patria potestad, como un derecho de los hijos e hijas, ya estén o no casados entre sí sus progenitores o bien cuando se disuelva el vínculo matrimonial. Si se ha producido un daño moral debe ser resarcido por la persona responsable del hecho, y tiene la obligación de repararlo mediante una indemnización, que se concreta en dinero. La afectación a sentimientos, a la dignidad, a la estima, a la salud física y psíquica, origina el derecho a que la persona afectada sea resarcida. Y, por último en Perú el derecho, que debe ser alegado por su titular, relativo a daños resultantes de los hechos ilícitos configurativos de la causal de divorcio o separación así como los derivados del divorcio en sí mismo, sean éstos materiales o morales, por cuanto el fundamento de la reparación consiste en la existencia de hechos culpables, que han generado un perjuicio.

Las manifestaciones del daño moral son múltiples, hay daño patrimonial en lo que afecte la reputación e incidan en la actividad laboral del cónyuge inocente, disminuyendo las expectativas razonables de obtener ingresos, así como en las lesiones físicas o psíquicas sufridas, en el contagio de enfermedades o la destrucción de bienes. También puede haber daño moral con motivo de la sentencia, ya sea de separación o de divorcio, por la disolución de pleno derecho de la sociedad conyugal, con la siguiente secuela de partición de los gananciales, o por el desplazamiento

del nivel socioeconómico de vida llevado hasta ese momento, o por la eventual necesidad de la mujer de tener que emprender una tarea remunerada fuera del hogar, o por los gastos extraordinarios que se derivan del cuidado de los hijos.

DECIMOTERCERA.- En nuestro país existe dificultad para el otorgamiento del *exequatur* a los repudios pronunciados en Marruecos, debido a su carácter revocable en este país cuando concurren determinadas causas.

La nueva *Mudawana*, compendio normativo equiparable a nuestro Código Civil, promulgada en febrero de 2004, se reconoce la igualdad de sexos, una mejor protección de la mujer y la protección de los menores. Redefine el matrimonio y sus objetivos y modifica los deberes y obligaciones de los cónyuges. La responsabilidad del hogar se convierte en una responsabilidad compartida entre ambos cónyuges y se instituye la toma conjunta de decisiones relativas a los hijos, a la gestión del hogar y a la planificación familiar.

En lo que respecta a la poligamia aceptada en Marruecos, la nueva *Mudawana* la limita a casos excepcionales y somete cada caso a la apreciación del juez. Así, se prohíbe la poligamia si se teme injusticia entre las esposas o si existe una condición prematrimonial de monogamia exigida por la esposa. Por otra parte, para autorizar la poligamia se exige probar la situación de excepción (justificación objetiva, como enfermedad incurable o esterilidad de la primera esposa), así como los medios suficientes para sustentar a ambas familias e igualdad de trato en todos los aspectos de la vida.

En cuanto a la disolución del matrimonio, la nueva *Mudawana* mantiene la institución del repudio o *Talaq*, aunque la modifica sustancialmente. El repudio, antes prerrogativa exclusiva del marido, puede ahora también ser ejercido por la esposa, cuando ésta tiene el derecho de opción cedido por su esposo a la hora de contraer matrimonio y se introduce el control judicial en el ámbito del repudio, antes regido por la voluntad exclusiva y arbitraria del marido. La exigencia de notificación judicial introduce un mayor control y mayores garantías del proceso de repudio. Así, a la luz de esta nueva reglamentación, se favorecen las condiciones para el reconocimiento, por un juez español, de una decisión de repudio pronunciada en Marruecos.

DECIMOCUARTA.- A la vista de la experiencia del Derecho Comparado y sobre la base del cambio de la situación social que se tuvo en cuenta en el momento en que se creó la figura, parece necesario realizar un planteamiento armonizado sobre la pensión compensatoria, al menos en el ámbito de la Unión Europea y, en mi opinión, su otorgamiento debiera tener lugar tan solo en supuestos excepcionales.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo
Sala de lo Civil
Sala de lo Penal
Tribunal Constitucional
Audiencias Provinciales

Tribunal Supremo

Sala de lo Civil

- STS 26/03/2.015.- Núm. 1.490/2.015, Recurso 3107/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 23/03/2.015.- Núm.972/2.015, Recurso 914/2.014. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 27/11/2.014.- Núm. 4.790/2.014, Recurso 1.961/2.013. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 18/11/2.014.- Núm. 4.771/2.014, Recurso 1.695/2.013. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 28/10/2.014.- Núm. 4.239/2.014, Recurso 2.816/2.013. Ponente: Antonio Salas Carceller.
- STS 24/10/2.014.- Núm. 4.790/2.014, Recurso 1.961/2.013. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 29/09/2.014.- Núm. 3.739/2.014, Recurso 3.074/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 12/07/2.014.- Núm. 3.438/2.014, Recurso 79/2.013. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 03/07/2.014.- Núm. 2.832/2.014, Recurso 1.385/2.013. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 26/03/2.014.- Núm. 1.406/2.014, Recurso 1.444/2.012. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 26/03/2.014.- Núm. 1.226/2.014, Recurso 953/2.012. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 25/03/2.014.- Núm. 1.907/2.014, Recurso 1.313/2.011. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 18/03/2.014.- Núm. 1.227/2.014, Recurso 201/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 17/03/2.014.- Núm. 852/2.014, Recurso 1.482/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.

- STS 21/02/2.014.- Núm. 655/2.014, Recurso 2.197/2.012. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 20/02/2.014.- Núm. 851/2.014, Recurso 2.489/2.012. Ponente: Francisco Javier Orduña Moreno.
- STS 20/11/2.013.- Núm. 5.721/2.013, Recurso 1.022/2.012. Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.
- STS 15/11/2.013.- Núm. 5.579/2.013, Recurso 157/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 24/10/2.013.- Núm. 5.028/2.013, Recurso 2.159/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 16/07/2.013.- Núm. 5.579/2.013, Recurso 1.044/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 21/06/2.013.- Núm. 3.349/2.013, Recurso 2.524/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 20/06/2.013.- Núm. 3.346/2.013, Recurso 876/2.011. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 03/06/2.013.- Núm. 2.879/2.013, Recurso 417/2.011. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 17/05/2.013.- Núm. 2.419/2.013, Recurso 419/2.011. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 20/12/2.012.- Núm. 8.523/2.012, Recurso 2.043/2.010. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 17/12/2.012.- Núm. 8.302/2.012, Recurso 1.997/2.010. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 10/12/2.012.- Núm. 8.539/2.012, Recurso 1.891/2.010. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 10/12/2.012.- Núm. 8.030/2.012, Recurso 2.560/2.011. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 04/12/2.012.- Núm. 8.531/2.012, Recurso 691/2.010. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 16/11/2.012.- Núm. 7.266/2.012, Recurso 1.215/2.010. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 14/11/2.012.- Núm. 7.150/2.012, Recurso 785/2.012. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 30/10/2.011.- Núm. 6.995/2.012, Recurso 2.352/2.011. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 23/10/2.012.- Núm. 6.683/2.012, Recurso 660/2.010. Ponente: José Antonio Seijas Quintana.
- STS 10/09/2.012.- Núm. 7.070/2.012, Recurso 1.519/2.012. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 13/07/2.012.- Núm. 5.674/2.012, Recurso 1.148/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 27/06/2.012.- Núm. 4.473/2.012, Recurso 748/2.011. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 07/06/2.012.- Núm. 3.791/2.011, Recurso 1.132/2.011. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 30/05/2.012.- Núm. 3.809/2.012, Recurso 451/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.

- STS 08/05/2.012.- Núm. 3.066/2.012, Recurso 1.437/2.009. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 20/04/2.012.- Núm. 2.906/2.012, Recurso 2.099/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 02/04/2.012.- Núm. 2.572/2.012, Recurso 1.594/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 28/03/2.012.- Núm. 2.534/2.012, Recurso 1.002/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 09/02/2.012.- Núm. 624/2.012, Recurso 1.381/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 23/01/2.012.- Núm. 234/2.012, Recurso 124/2.009. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 10/01/2.012.- Núm. 627/2.012, Recurso 802/2.009. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 30/11/2.011.- Núm. 8.280/2.011, Recurso 2.750/2.004. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 25/11/2.011.- Núm. 627/2.012, Recurso 943/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 24/11/2.011.- Núm. 7.774/2.011, Recurso 8.402/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 23/11/2.011.- Núm. 7.666/2.011, Recurso 757/2.010. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 03/11/2.011.- Núm. 7.178/2.011, Recurso 1.025/2.008. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 27/10/2.011.- Núm. 7.174/2.011, Recurso 1.022/2.008. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 19/10/2.011.- Núm. 6.899/2.011, Recurso 1.005/2.009. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 03/10/2.011.- Núm. 6.096/2.011, Recurso 1.739/2.008. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 05/09/2.011.- Núm. 7.174/2.011, Recurso 6.237/2.008. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 20/07/2.011.- Núm. 5.254/2.011, Recurso 290/2.009. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 27/06/2.011.- Núm. 4.632/2.011, Recurso 599/2.009. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 22/06/2.011.- Núm. 5.570/2.011, Recurso 1.940/2.008. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 15/06/2.011.- Núm. 4.825/2.011, Recurso 1.387/2.009. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 14/04/2.011.- Núm. 7.588/2.011, Recurso 701/2.007. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 31/03/2.011.- Núm. 2.158/2.011, Recurso 807/2.007. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 14/03/2.011.- Núm. 1.668/2.011, Recurso 2.114/2.007. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 14/02/2.011.- Núm. 511/2.011, Recurso 523/2.008. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 04/11/2.010.- Núm. 7.208/2.010, Recurso 514/2.007. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 29/09/2.010.- Núm. 4.718/2.010, Recurso 1.722/2.007. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 28/04/2.010.- Núm. 707/2.010, Recurso 2.165/2.006. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios.
- STS 09/02/2.010.- Núm. 292/2.010, Recurso 501/2.006. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 19/01/2.010.- Núm. 327/2.010, Recurso 52/2.006. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 17/07/2.009.- Núm. 4.821/2.009, Recurso 1.369/2.004. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 10/03/2.009.- Núm. 1.130/2.009, Recurso 1.541/2.003. Ponente: José Almagro Nosete.

- STS 21/11/2.008.- Núm. 6.271/2.008, Recurso 411/2.004. Ponente: José Almagro Nosete.
- STS 05/11/2.008.- Núm. 5.805/2.008, Recurso 962/2.002. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 30/10/2.008.- Núm. 7.175/2.008, Recurso 1.058/2.006. Ponente: Clemente Auger Liñan.
- STS 17/10/2.008.- Núm. 5.363/2.008, Recurso 2.650/2.003. Ponente: José Almagro Nosete.
- STS 17/10/2.008.- Núm. 5.543/2.008, Recurso 531/2.005. Ponente: José Almagro Nosete.
- STS 14/10/2.008.- Núm. 5.454/2.008, Recurso 726/2.005. Ponente: José Almagro Nosete.
- STS 10/10/2.008.- Núm. 5.995/2.008, Recurso 1.923/2.002. Ponente: Encarnación Roca Trias.
- STS 09/10/2.008.- Núm. 923/2.008, Recurso 516/2.005. Ponente: José Almagro Nosete.
- STS 03/10/2.008.- Núm. 917/2.008, Recurso 2.727/2.004. Ponente: Clemente Auger Liñan.
- STS 29/12/2.005- Núm. 1.025/2.005, Recurso 2.038/2.002. Ponente: Jesús Eugenio Corbal Fernandez.
- STS 19/12/2.005- Núm. 1.024/2.005, Recurso 1.194/2.002. Ponente: Jesús Eugenio Corbal Fernandez
- STS 25/04/2.005- Núm. 307/2.005, Recurso 2.180/2.002. Ponente: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
- STS 10/02/2.005- Núm. 43/2.005, Recurso 1.876/2.002. Ponente: Jesús Eugenio Corbal Fernandez.

Sala de lo Penal

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 27/07/2015. REC: 10062/2014. RES: 508/2015. Ponente: Juan Ruiz Saavedra.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 20/12/2012. REC: 259/2012. RES: 1020/2012. Ponente: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 03/12/2012. REC: 10301/2012. RES: 972/2012. Ponente: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 02/11/2.012. REC: 2531/2.011. RES: 906/2.012. Ponente: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 19/07/2012. REC: 2119/2011. RES: 670/2012. Ponente: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 28/10/2.010. REC: 946/2.010. RES: 929/2.010. Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibáñez.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 13/05/2.010. REC: 2348/2.009. RES: 445/2.010. Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Lurca.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 16/10/2.009. REC: 2097/2.008. RES: 1026/2.009. Ponente: Juan Ramón Soriano Soriano.
- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 27/06/2.005. REC: 143/2.004. RES: 811/2005. Ponente el Colmenero Menéndez de Lurca.

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 08/07/2.002. REC: 3536/2.000. RES: 1350/2.002. Ponente: José Jiménez Villarejo.

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 27/03/2.002. REC: 1.350/2.002. RES: 560/2.002. Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Lurca.

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 08/11/2.001. REC: 4734/1.999. RES: 2068/2001. Ponente: Julián Artemio Sánchez Melgar.

- STS. Sala Segunda - Jurisdicción: Penal - Fecha: 22/10/2001. REC: 4734/1.999. RES: 1881/2.001. Ponente: Joaquín Delgado García.

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción: Penal. Fecha: 28/07/1.999. REC: 3662/1.998. RES: 1148/1.999. Ponente: Candido Conde Pumpido.

- STS. Sala Segunda. Jurisdicción Penal. Fecha: 13/02/1.997. REC: 173/1.997. RES: 3302/1.997. Ponente el Roberto García Calvo-Montiel.

Tribunal Constitucional

- STC 79/2.015, de 30 de abril de 2.015. Fecha: 30/04/2.015. REC: 4021/2.012. RES: 79/2.015. Ponente: Encarnación Roca Trías. Fecha publicación: 08/06/2.015.

- STS 98/2.014, de 23 de junio de 2.014. Fecha: 23/06/2.014. REC: 734/2.005. RES: 98/2.014. Ponente: Luís Ignacio Ortega Alvarez. Fecha publicación: 22/07/2.014.

- STC 44/2014, de 07 de abril de 2.014. Fecha: 07/04/2.014. REC: 5800/2.011. RES: 44/2.014. Ponente: Adela Asua Batarrita. Fecha publicación: 07/05/2014.

- STC 1/2014, de 13 de enero de 2.014. Fecha: 13/01/2.014. REC: 3121/2.011. RES: 01/2.014. Ponente: Adela Asua Batarrita. Fecha publicación: 10/02/2014.

- STC 93/2.013, de 23 de abril de 2.013. Fecha: 13/01/2.014. REC: 3121/2.011. RES: 01/2.014. Ponente: Adela Asua Batarrita. Fecha publicación: 10/02/2014.

- STC 81/2.013, de 11 de abril de 2.013. Fecha: 11/04/2013. REC: 6760/2.003. RES: 81/2.013. Ponente: Luis Ignacio Oretga Alvarez. Fecha publicación: 10/05/2013.

- STC 19/2.012, de 15 de febrero de 2.012. Fecha: 15/02/2.012. REC: 1046/1.999. RES: 19/2.012. Ponente: Elisa Pérez Vera. Fecha publicación: 12/03/2.012.

- STC22/2.010, de 27 de abril de 2.010. Fecha: 27/04/2.010. REC: Cuestión de inconstitucionalidad 176-2.006. RES: 22/2.010. Ponente: Ramón Rodríguez Arribas. Fecha publicación: 27/05/2.010.

- STC 204/2.007, de 24 de septiembre de 2.007. Fecha 24/09/2.007. REC: Recurso de amparo 279-2.005. RES: 96/2.005. Ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. Fecha publicación: 23/10/2007.

- STC 291/2.006, de 9 de octubre de 2.006. Fecha 09/10/2.006. REC: Recurso de Amparo 4470/2.004. RES: 291/2.006. Ponente: Ponente: Ramón Rodríguez Arribas. Fecha publicación: 03/11/2006.

- STC 119/2.006, de 24 de abril de 2.006. Fecha 24/04/2.006. REC: Recurso de Amparo 2272/2.002. RES: 119/2.006. Ponente: Javier Delgado Barrio. Fecha publicación: 24/04/2006.

- STC 33/2.006, de 13 de febrero de 2.006. Fecha 13/02/2.006. REC: Recursos de Amparo acumulados 180-2.000, 182-2.000, 1287-2.001 y 927-2.002. RES: 33/2.006. Ponente: Javier Delgado Barrio. Fecha publicación: 24/04/2.006.

- STC 57/2.005, de 14 de marzo de 2005. Fecha 14/03/2.005. REC: Recurso de Amparo 4062-2.001. RES: 57/2.005. Ponente: Elisa Pérez Vera. Fecha publicación: 14/03/2.005.
- STC 223/2.004, de 29 de noviembre de 2.004. Fecha 29/11/2.004. REC: Recurso de Amparo 3956-2.002. RES: 223/2.004. Ponente: Pascual Sala Sanchez. Fecha publicación: 29/11/2.004.
- STC 186/2.004, de 02 de noviembre de 2.004. Fecha: 02/11/2.004. REC: Recurso de Amparo 1863-2.001. RES: 186/2.004. Ponente: Javier Delgado Barrios. Fecha publicación: 02/11/2.004.
- STC 174/2.002, de 09 de octubre de 2.002. Fecha: 09/10/2.002. REC: Recurso de amparo 1401-2.000. RES: 174/2.002. Ponente: Tomás S. Vives Antón. Fecha publicación: 09/10/2.002.
- STC 1/2.001, de 15 de enero de 2.001. Fecha: 15/01/2.001. RES: 1/001. Ponente: Rafael de Mendizábal Allende. Fecha publicación: 15/01/2.001.

Audiencias Provinciales

Años 2005-2015

AÑO 2.015

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 140/2.015 - Núm. Rec.: 112/2.015 - Ponente: Fernando Paumard Collado. Fecha: 09/06/2.015.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 137/2.015 - Núm. Rec.: 118/2.015 - Ponente: Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 03/06/2.015.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 114/2.015 - Núm. Rec.: 122/2.015 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 22/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 498/2.015 - Núm. Rec.: 921/2.014 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 19/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 143/2.015 - Núm. Rec.: 101/2.015 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 18/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 487/2.015 - Núm. Rec.: 1051/2.014 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 18/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 465/2.015 - Núm. Rec.: 1085/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 12/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 161/2.015 - Núm. Rec.: 161/2.015 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 08/05/2.015.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 74/2.015 - Núm. Rec.: 73/2.015 - Ponente: José Aurelio Navarro Guillén. Fecha: 07/05/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 434/2.015 - Núm. Rec.: 1015/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 04/05/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 272/2.015 - Núm. Rec.: 678/2013 - Ponente: Gonzalo Ferrer Amigo. Fecha: 30/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 153/2.015 - Núm. Rec.: 8/2.015 - Ponente: Josefa Otero Seivane. Fecha: 30/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 417/2.015 - Núm. Rec.: 1029/2.014 - Ponente: María del Pilar Gonzálvez Vicente. Fecha: 24/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 249/2.015 - Núm. Rec.: 1329/2.013 - Ponente: Elena Farre Trepas. Fecha: 23/04/2.015.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 85/2.015 - Núm. Rec.: 94/2.015 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 22/04/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 126/2.015 - Núm. Rec.: 130/2.015 - Ponente: María del Carmen Martelo Pérez. Fecha: 21/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 104/2.015 - Núm. Rec.: 134/2.015 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. Fecha: 21/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimo segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 405/2.015 - Núm. Rec.: 509/2.014 - Ponente: María del Pilar González Vicente. Fecha: 21/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 158/2.015 - Núm. Rec.: 317/2.014 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 20/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 98/2.015 - Núm. Rec.: 12/2.015 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 20/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 109/2.015 - Núm. Rec.: 118/2.015 - Ponente: José Luís Casero Alonso. Fecha: 20/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 259/2.015 - Núm. Rec.: 470/2.014 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 20/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 166/2.015 - Núm. Rec.: 20/2.015 - Ponente: María Elia Mata Albert. Fecha: 14/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 97/2.015 - Núm. Rec.: 93/2.015 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 13/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 131/2.015 - Núm. Rec.: 51/2.015 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 13/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 128/2.015 - Núm. Rec.: 110/2.015 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 13/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 129/2.015 - Núm. Rec.: 153/2.015 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 13/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 122/2.015 - Núm. Rec.: 65/2.015 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 10/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 61/2.015 - Núm. Rec.: 288/2.014 - Ponente: Ana Descalzo Pino. Fecha: 10/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 97/2.015 - Núm. Rec.: 41/2.015 - Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. Fecha: 09/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 16/2.015 - Núm. Rec.: 4/2.015 - Ponente: Mariano Santos Peñalver. Fecha: 08/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 74/2.015 - Núm. Rec.: 94/2.015 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 07/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 71/2.015 - Núm. Rec.: 248/2.014 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 06/04/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 148/2.015 - Núm. Rec.: 210/2.014 - Ponente: María Rebeca Carpi Martín. Fecha: 30/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 144/2.015 - Núm. Rec.: 63/2.014 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 30/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 14/2.015 - Núm. Rec.: 83/2.014 - Ponente: Mariano Santos Peñalver. Fecha: 30/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 109/2015 - Núm. Rec.: 87/2015 - Ponente: Eduardo García Valtueña. Fecha: 26/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 90/2.015 - Núm. Rec.: 472/2.014 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 25/03/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 111/2.015 - Núm. Rec.: 421/2.014 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 25/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 109/2.015 - Núm. Rec.: 533/2.014 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 24/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 146/2.015 - Núm. Rec.: 358/2.014 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 20/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 131/2.015 - Núm. Rec.: 514/2.014 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 20/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 66/2.015 - Núm. Rec.: 63/2.015 - Ponente: Jesús Souto Herreros. Fecha: 19/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 61/2.015 - Núm. Rec.: 76/2.015 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 19/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 103/2.015 - Núm. Rec.: 420/2.014 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 17/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 101/2.015 - Núm. Rec.: 142/2.014 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 16/03/2.015.

Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia- Núm. Res.: 143/2.015 - Núm. Rec.: 439/2.014 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 16/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 72/2.015 - Núm. Rec.: 398/2.014 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 16/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 74/2.015 - Núm. Rec.: 52/2.015 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 16/03/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 80/2.015 - Núm. Rec.: 477/2.014 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 13/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 99/2.015 - Núm. Rec.: 52/2.014 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 12/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 139/2.015 - Núm. Rec.: 964/2.013 - Ponente: María Isabel Cámara Martínez. Fecha: 10/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 57/2.015 - Núm. Rec.: 31/2.015 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 10/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 33/2.015 - Núm. Rec.: 269/2.014 - Ponente: Ana María Iguacel Pérez Fecha: 10/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 230/2.015 - Núm. Rec.: 706/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 06/03/2.015.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 47/2.015 - Núm. Rec.: 49/2.015 - Ponente: Fernando Solsona Abad. Fecha: 05/03/2.015.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 44/2.015 - Núm. Rec.: 31/2.015 - Ponente: Manuel García Prada. Fecha: 04/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 109/2.015 - Núm. Rec.: 447/2.014 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 02/03/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 108/2.015 - Núm. Rec.: 567/2.014 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 02/03/2.015.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 38/2.015 - Núm. Rec.: 39/2.015 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 27/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 65/2.015 - Núm. Rec.: 123/2.014 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 27/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 52/2.015 - Núm. Rec.: 9/2.015 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 27/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 112/2.015 - Núm. Rec.: 965/2.013 - Ponente: María Isabel Cámara Martínez. Fecha: 26/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 100/2.015 - Núm. Rec.: 29/2.015 - Ponente: Pedro José Vela Torres. Fecha: 26/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 101/2.015 - Núm. Rec.: 74/2.015 - Ponente: Pedro José Vela Torres. Fecha: 26/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 75/2.015 - Núm. Rec.: 553/2.013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 24/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 182/2.015 - Núm. Rec.: 616/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 24/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 137/2.015 - Núm. Rec.: 21/2.014 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 24/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 84/2.015 - Núm. Rec.: 487/2.014 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 24/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 23/2.015 - Núm. Rec.: 248/2.014 - Ponente: Jesús García García. Fecha: 23/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 65/2.015 - Núm. Rec.: 5110/2.014 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 18/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 65/2.015 - Núm. Rec.: 37/2.015 - Ponente: María Zulema Gento Castro. Fecha: 18/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 120/2.015 - Núm. Rec.: 1167/2.013 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 17/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 39/2.015 - Núm. Rec.: 26/2.015 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 16/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 170/2.015 - Núm. Rec.: 678/2.014 - Ponente: María del Pilara Gonzalvez Vicente. Fecha: 13/02/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 58/2.015 - Núm. Rec.: 257/2.014 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 13/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 102/2.015 - Núm. Rec.: 1219/2.013 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 11/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 40/2.015 - Núm. Rec.: 580/2.013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 10/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 29/2.015 - Núm. Rec.: 358/2.014 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 10/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 142/2.015 - Núm. Rec.: 566/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 10/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 98/2.015 - Núm. Rec.: 1109/2.013 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 10/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 32/2.015 - Núm. Rec.: 3/2.015 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 09/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia- Núm. Res.: 64/2.015 - Núm. Rec.: 8/2.015 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 09/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 42/2.015 - Núm. Rec.: 530/2.014 - Ponente: José Manuel García Sánchez. Fecha: 06/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 60/2.015 - Núm. Rec.: 550/2.014 - Ponente: María Lourdes Arranz Freijó. Fecha: 05/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 20/2.015 - Núm. Rec.: 270/2.014 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 05/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia- Núm. Res.: 56/2015 - Núm. Rec.: 28/2015 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 04/02/2015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia- Núm. Res.: 59/2.015 - Núm. Rec.: 573/2.014 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 04/02/2015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 33/2.015 - Núm. Rec.: 4/2.015 - Ponente: Pablo Martínez-Hombre Guillén. Fecha: 04/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 73/2.015 - Núm. Rec.: 62/2.014 - Ponente: Elena Farre Trepas. Fecha: 03/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 31/2.015 - Núm. Rec.: 527/2.014 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 02/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 50/2.015 - Núm. Rec.: 1222/2.014 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 02/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 21/2.015 - Núm. Rec.: 425/2.014 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 02/02/2.015.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 18/2.015 - Núm. Rec.: 3385/2.014 - Ponente: María del Carmen Vidarras Alzuri. Fecha: 30/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 101/2.015 - Núm. Rec.: 475/2.014 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 30/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 103/2.015 - Núm. Rec.: 261/2.014 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 30/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 35/2.015 - Núm. Rec.: 550/2.014 - Ponente: María Pilar Fernández Alonso. Fecha: 29/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 23/2.015 - Núm. Rec.: 6/2015 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 28/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 18/2.015 - Núm. Rec.: 210/2.014 - Ponente: Emilio Buceta Miller. Fecha: 27/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 92/2.015 - Núm. Rec.: 372/2.014 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 27/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 12/2.015 - Núm. Rec.: 458/2.014 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 26/01/2.015.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 13/2.015 - Núm. Rec.: 312/2.014 - Ponente: María del Pilar Robles García. Fecha: 23/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 17/2.015 - Núm. Rec.: 544/2.014 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 22/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 20/2.015 - Núm. Rec.: 399/2.014 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 21/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 12/2.015 - Núm. Rec.: 448/2.014 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 20/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 17/2.015 - Núm. Rec.: 180/2.014 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 19/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 28/2.015 - Núm. Rec.: 960/2.013 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 15/01/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 14/2.015 - Núm. Rec.: 400/2.014 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 14/01/2.015.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 2/2.015 - Núm. Rec.: 331/2.014 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 14/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 9/2.015 - Núm. Rec.: 1052/2.013 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 14/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 8/2.015 - Núm. Rec.: 378/2.014 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 14/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 3/2.015 - Núm. Rec.: 376/2.014 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 13/01/2.015.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 3/2.015 - Núm. Rec.: 299/2.014 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 13/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 1/2.015 - Núm. Rec.: 254/2.014 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 09/01/2.015.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 5/2.015 - Núm. Rec.: 431/2.014 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 08/01/2.015.

- AÑO 2.014.-

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 316/2014 - Núm. Rec.: 480/2014 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 30/12/2014.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 196/2014 - Núm. Rec.: 233/2013 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 30/12/2014.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 748/2014 - Núm. Rec.: 672/2014 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 26/12/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 821/2014 - Núm. Rec.: 776/2013 - Ponente: Elena Farre Trepas. Fecha: 23/12/2014.

-Audiencia Provincial de Álava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 332/2014 - Núm. Rec.: 433/2014 - Ponente: Iñigo Madaria Azcoitia. Fecha: 22/12/2014.

-Audiencia Provincial de Navarra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 398/2014 - Núm. Rec.: 667/2014 - Ponente: Ildefonso Prieto García-Nieto. Fecha: 22/12/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 458/2014 - Núm. Rec.: 132/2014 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 18/12/2014.

-Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 302/2014 - Núm. Rec.: 427/2014 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 18/12/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil- Sentencia - Núm. Res.: 862/2014 - Núm. Rec.: 988/2013 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 18/12/2014.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 192/2014 - Núm. Rec.: 290/2012 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 17/12/2014.

-Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 784/2014 - Núm. Rec.: 526/2013 - Ponente: Elena Farre. Trepas. Fecha: 16/12/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- Sentencia - Núm. Res.: 411/2014 - Núm. Rec.: 435/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 15/12/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 588/2014 - Núm. Rec.: 470/2014 - Ponente: Carlos Erchilla Labarta. Fecha: 22/12/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 1089/2014 - Núm. Rec.: 161/2014 - Ponente: Eduardo Híjas Fernández. Fecha: 12/12/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 774/2014 - Núm. Rec.: 1107/2013 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 11/12/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 321/2014 - Núm. Rec.: 321/2014 - Ponente: Lorena Tallón García. Fecha: 10/12/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 396/2014 - Núm. Rec.: 504/2014 - Ponente: José Luís Seoane Spiegelberg. Fecha: 10/12/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 569/2014 - Núm. Rec.: 541/2014 - Ponente: José Antonio Pérez Nevot. Fecha: 09/12/2014.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 683/2014 - Núm. Rec.: 256/2014 - Ponente: María Lourdes Arranz Freijó. Fecha: 09/12/2014.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 300/2014 - Núm. Rec.: 592/2014 - Ponente: Francisco José Martín Mazuelos. Fecha: 05/12/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 423/2014 - Núm. Rec.: 215/2014 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 05/12/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 502/2014 - Núm. Rec.: 315/2013 - Ponente: Lucia Legido Gil. Fecha: 05/12/2014.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 696/2014 - Núm. Rec.: 456/2014 - Ponente: Francisco José Carrillo Vinader. Fecha: 04/12/2014.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 297/2014 - Núm. Rec.: 322/2014 - Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. Fecha: 04/12/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 401/2014 - Núm. Rec.: 658/2013 - Ponente: Antonio García Paredes. Fecha: 04/12/2014.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 301/2014 - Núm. Rec.: 256/2012 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 03/12/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 366/2014 - Núm. Rec.: 408/2014 - Ponente: Francisco Javier Romero Costa. Fecha: 02/12/2014.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 296/2014 - Núm. Rec.: 305/2014 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 01/12/2014.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 293/2014 - Núm. Rec.: 298/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 28/11/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 413/2014 - Núm. Rec.: 104/2014 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 27/11/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 547/2014 - Núm. Rec.: 452/2014 - Ponente: JOSE Antonio Pérez Nevot. Fecha: 26/11/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 550/2014 - Núm. Rec.: 6838/2013 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 25/11/2014.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 507/2014 - Núm. Rec.: 1004/2014 - Ponente: Pedro José Vela Torres. Fecha: 20/11/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 532/2014 - Núm. Rec.: 1674/2014 - Ponente: Carlos María Piñol Rodríguez. Fecha: 19/11/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimotercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 485/2014 - Núm. Rec.: 500/2013 - Ponente: Juan Bautista Cremades Morant. Fecha: 19/11/2014.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 277/2014 - Núm. Rec.: 3335/2014 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 18/11/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 357/2014 - Núm. Rec.: 413/2014 - Ponente: María Piedad Liebana Rodríguez. Fecha: 17/11/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 532/2014 - Núm. Rec.: 458/2014 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 17/11/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 523/2014 - Núm. Rec.: 2278/2014 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 14/11/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 275/2014 - Núm. Rec.: 323/2014 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 14/11/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 380/2014 - Núm. Rec.: 271/2014 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 13/11/2014.

Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 519/2014 - Núm. Rec.: 903/2014 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 13/11/2014.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 209/2014 - Núm. Rec.: 307/2014 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 13/11/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 965/2014 - Núm. Rec.: 269/2014 - Ponente: María del Pilar González Vicente. Fecha: 12/11/2014.

- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 388/2014 - Núm. Rec.: 554/2014 - Ponente: María Zulema Gento Castro. Fecha: 12/11/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 276/2014 - Núm. Rec.: 270/2014 - Ponente: Marta María Gutiérrez García. Fecha: 10/11/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 278/2014 - Núm. Rec.: 305/2014 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 10/11/2014.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 307/2014 - Núm. Rec.: 398/2014 - Ponente: María Isabel Soler Navarro. Fecha: 04/11/2014.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 416/2014 - Núm. Rec.: 303/2014 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 04/11/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 818/2014 - Núm. Rec.: 483/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 03/11/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 358/2014 - Núm. Rec.: 540/2014 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 03/11/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 361/2014 - Núm. Rec.: 474/2014 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 03/11/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 519/2014 - Núm. Rec.: 310/2014 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 31/10/2014.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 210/2014 - Núm. Rec.: 272/2014 - Ponente: Manuel García Prada. Fecha: 31/10/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 673/2014 - Núm. Rec.: 551/2013 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 31/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 269/2014 - Núm. Rec.: 389/2014 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 31/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 270/2014 - Núm. Rec.: 384/2014 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 31/10/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 260/2014 - Núm. Rec.: 349/2014 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 30/10/2014.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 217/2014 - Núm. Rec.: 280/2014 - Ponente: Juana Calderón Martín. Fecha: 30/10/2014.

- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 372/2014 - Núm. Rec.: 451/2014 - Ponente: María Zulema Gento Castro. Fecha: 29/10/2014. -

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 334/2014 - Núm. Rec.: 356/2014 - Ponente: José Luís Seoane Spiegelberg. Fecha: 29/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 265/2014 - Núm. Rec.: 408/2014 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. Fecha: 29/10/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 357/2014 - Núm. Rec.: 506/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 28/10/2014.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 197/2014 - Núm. Rec.: 261/2014 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 28/10/2014.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 261/2014 - Núm. Rec.: 258/2014 - Ponente: Alfonso Santisteban Ruíz. Fecha: 24/10/2014.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 245/2014 - Núm. Rec.: 3286/2014 - Ponente: Iñigo Francisco Suárez Odriozola. Fecha: 24/10/2014.

- Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 185/2014 - Núm. Rec.: 233/2014 - Ponente: Santiago Serena Puig. Fecha: 24/10/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 495/2014 - Núm. Rec.: 140/2014 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 24/10/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 792/2014 - Núm. Rec.: 573/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 23/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 500/2014 - Núm. Rec.: 291/2014 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 23/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 251/2014 - Núm. Rec.: 397/2014 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. Fecha: 22/10/2014.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 249/2014 - Núm. Rec.: 313/2014 - Ponente: Marta Sánchez Prieto. Fecha: 21/10/2014.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 187/2014 - Núm. Rec.: 247/2014 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 21/10/2014.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 158/2014 - Núm. Rec.: 219/2014 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 20/10/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 470/2014 - Núm. Rec.: 591/2014 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 20/10/2014.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 129/2014 - Núm. Rec.: 144/2014 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 20/10/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 249/2014 - Núm. Rec.: 307/2014 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 20/10/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 480/2014 - Núm. Rec.: 92/2014 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 17/10/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 346/2014 - Núm. Rec.: 165/2014 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 17/10/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 758/2014 - Núm. Rec.: 597/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 16/10/2014.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 423/2014 - Núm. Rec.: 536/2014 - Ponente: Herminio Ramón Padilla Alba. Fecha: 09/10/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 232/2014 - Núm. Rec.: 370/2014 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. Fecha: 09/10/2014.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 231/2014 - Núm. Rec.: 334/2014 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 08/10/2014.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 223/2014 - Núm. Rec.: 72/2014 - Ponente: Isabel Serrano Frías. Fecha: 07/10/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 723/2014 - Núm. Rec.: 646/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 07/10/2014.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 613/2014 - Núm. Rec.: 171/2014 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 07/10/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 260/2014 - Núm. Rec.: 309/2014 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 03/10/2014.

Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 531/2014 - Núm. Rec.: 278/2014 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 30/09/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 456/2014 - Núm. Rec.: 185/2014 - Ponente: José Antonio Pérez Nevot. Fecha: 30/09/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 585/2014 - Núm. Rec.: 1014/2013 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 30/09/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 691/2014 - Núm. Rec.: 616/2014 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 29/09/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 808/2014 - Núm. Rec.: 169/2014 - Ponente: María del Pilar González Vicente. Fecha: 26/09/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 438/2014 - Núm. Rec.: 33/2014 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 26/09/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 249/2014 - Núm. Rec.: 265/2014 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 26/09/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 806/2014 - Núm. Rec.: 1307/2013 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 26/09/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 639/2014 - Núm. Rec.: 689/2013 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 26/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 689/2014 - Núm. Rec.: 493/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 25/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 688/2014 - Núm. Rec.: 580/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 25/09/2014.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 441/2014 - Núm. Rec.: 2/2014 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 23/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 676/2014 - Núm. Rec.: 628/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 23/09/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 241/2014 - Núm. Rec.: 268/2014 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 23/09/2014.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 392/2014 - Núm. Rec.: 518/2013 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 22/09/2014.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 190/2014 - Núm. Rec.: 133/2014 - Ponente: María Otilia Martínez Palacios. Fecha: 22/09/2014.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 206/2014 - Núm. Rec.: 3235/2014 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 22/09/2014.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 336/2014 - Núm. Rec.: 109/2014 - Ponente: José Manuel García Sánchez. Fecha: 19/09/2014.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 329/2014 - Núm. Rec.: 98/2014 - Ponente: Ramón Ruiz Jiménez. Fecha: 19/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 662/2014 - Núm. Rec.: 365/2014 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 19/09/2014.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 140/2014 - Núm. Rec.: 129/2014 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 19/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 657/2014 - Núm. Rec.: 541/2014 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 18/09/2014.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 138/2014 - Núm. Rec.: 147/2014 - Ponente: Ana Descalzo Pino. Fecha: 18/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 653/2014 - Núm. Rec.: 526/2014 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 18/09/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 648/2014 - Núm. Rec.: 516/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 17/09/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 219/2014 - Núm. Rec.: 283/2014 - Ponente: José Luís Casero Alonso. Fecha: 16/09/2014.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 189/2014 - Núm. Rec.: 323/2014 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 15/09/2014.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 198/2014 - Núm. Rec.: 140/2014 - Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. Fecha: 11/09/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 409/2014 - Núm. Rec.: 400/2014 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 10/09/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 407/2014 - Núm. Rec.: 784/2013 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 08/09/2014.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 159/2014 - Núm. Rec.: 330/2014 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 05/09/2014.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 188/2014 - Núm. Rec.: 80/2014 - Ponente: María Jesús Alarcón Barcos. Fecha: 04/09/2014.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 160/2014 - Núm. Rec.: 331/2014 - Ponente: Francisco José Martín Mazuelos. Fecha: 03/09/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 723/2014 - Núm. Rec.: 1265/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 31/07/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 729/2014 - Núm. Rec.: 1345/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 31/07/2014.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 335/2014 - Núm. Rec.: 301/2013 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 30/07/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 530/2014 - Núm. Rec.: 1271/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 29/07/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 288/2014 - Núm. Rec.: 379/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 28/07/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 603/2014 - Núm. Rec.: 506/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 25/07/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 511/2014 - Núm. Rec.: 180/2013 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 25/07/2014.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 347/2014 - Núm. Rec.: 585/2014 - Ponente: Cristina Mir Ruza. Fecha: 24/07/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 598/2014 - Núm. Rec.: 5/2014 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 23/07/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 256/2014 - Núm. Rec.: 226/2014 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 23/07/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 270/2014 - Núm. Rec.: 32/2014 - Ponente: María Piedad Liebana Rodríguez. Fecha: 18/07/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 371/2014 - Núm. Rec.: 8581/2013 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 18/07/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 449/2014 - Núm. Rec.: 309/2013 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 16/07/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 558/2014 - Núm. Rec.: 545/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 16/07/2014.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 472/2014 - Núm. Rec.: 94/2014 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 16/07/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 249/2014 - Núm. Rec.: 118/2014 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 15/07/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 437/2014 - Núm. Rec.: 365/2013 - Ponente: Magdalena Fernández Soto. Fecha: 14/07/2014.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 182/2014 - Núm. Rec.: 238/2014 - Ponente: Luís Romualdo Hernández Díaz-Ambrona. Fecha: 14/07/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 514/2014 - Núm. Rec.: 506/2013 - Ponente: Elena Farre Trepas. Fecha: 11/07/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 245/2014 - Núm. Rec.: 174/2014 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 11/07/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 236/2014 - Núm. Rec.: 83/2014 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 11/07/2014.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 284/2014 - Núm. Rec.: 63/2014 - Ponente: José Manuel García Sánchez. Fecha: 11/07/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 258/2014 - Núm. Rec.: 428/2013 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 11/07/2014.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 253/2014 - Núm. Rec.: 463/2013 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 10/07/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 260/2014 - Núm. Rec.: 348/2014 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 10/07/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 261/2014 - Núm. Rec.: 279/2014 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 10/07/2014.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 188/2014 - Núm. Rec.: 155/2013 - Ponente: Ana de Pedro Puertas. Fecha: 10/07/2014.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 196/2014 - Núm. Rec.: 64/2014 - Ponente: Manuel Eduardo Regalado Valdés. Fecha: 08/07/2014.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 188/2014 - Núm. Rec.: 349/2013 - Ponente: José Ramón González Clavijo. Fecha: 08/07/2014.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 387/2014 - Núm. Rec.: 521/2013 - Ponente: Álvaro Gaspar Pardo de Andrade. Fecha: 07/07/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 422/2014 - Núm. Rec.: 266/2013 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 07/07/2014.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 185/2014 - Núm. Rec.: 351/2013 - Ponente: Ana de Pedro Puertas. Fecha: 04/07/2014.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 243/2014 - Núm. Rec.: 137/2014 - Ponente: Dámaso Manuel Brañas Santa María. Fecha: 04/07/2014.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 172/2014 - Núm. Rec.: 41/2014 - Ponente: Mónica Céspedes Cano. Fecha: 04/07/2014.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 177/2014 - Núm. Rec.: 316/2013 - Ponente: José María Tapia Chinchón. Fecha: 02/07/2014.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 385/2014 - Núm. Rec.: 303/2013 - Ponente: Antonio María Rodero García. Fecha: 02/07/2014.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 496/2014 - Núm. Rec.: 328/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 01/07/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 635/2014 - Núm. Rec.: 821/2013 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 01/07/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 183/2014 - Núm. Rec.: 237/2014 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 30/06/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 480/2014 - Núm. Rec.: 541/2014 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 30/06/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 240/2014 - Núm. Rec.: 625/2013 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 27/06/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 179/2014 - Núm. Rec.: 226/2014 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 26/06/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 172/2014 - Núm. Rec.: 248/2014 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 26/06/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 472/2014 - Núm. Rec.: 349/2014 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 26/06/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 477/2014 - Núm. Rec.: 1064/2013 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 26/06/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 616/2014 - Núm. Rec.: 107/2013 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 25/06/2014.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 231/2014 - Núm. Rec.: 164/2014 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 25/06/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 460/2014 - Núm. Rec.: 420/2013 - Ponente: Elena Farre Trepas. Fecha: 25/06/2014.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 339/2014 - Núm. Rec.: 348/2014 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 24/06/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 453/2014 - Núm. Rec.: 1498/2012 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 24/06/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 448/2014 - Núm. Rec.: 324/2013 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 20/06/2014.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 384/2014 - Núm. Rec.: 120/2014 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 19/06/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 451/2014 - Núm. Rec.: 353/2013 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 19/06/2014.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 265/2014 - Núm. Rec.: 43/2014 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 18/06/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 234/2014 - Núm. Rec.: 291/2013 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 18/06/2014.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 232/2014 - Núm. Rec.: 343/2013 - Ponente: María José González Movilla. Fecha: 16/06/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 431/2014 - Núm. Rec.: 165/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 16/06/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 564/2014 - Núm. Rec.: 1126/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 12/06/2014.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 112/2014 - Núm. Rec.: 236/2013 - Ponente: Emilio Buceta Miller. Fecha: 12/06/2014.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 249/2014 - Núm. Rec.: 73/2014 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 11/06/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 419/2014 - Núm. Rec.: 437/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 11/06/2014.

Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 552/2014 - Núm. Rec.: 1196/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 11/06/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 177/2014 - Núm. Rec.: 194/2014 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 05/06/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 392/2014 - Núm. Rec.: 441/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 04/06/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 166/2014 - Núm. Rec.: 206/2014 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 03/06/2014.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 99/2014 - Núm. Rec.: 45/2014 - Ponente: Emilio Buceta Miller. Fecha: 03/06/2014.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 144/2014 - Núm. Rec.: 265/2013 - Ponente: Ana de Pedro Puertas. Fecha: 03/06/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 379/2014 - Núm. Rec.: 428/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz... Fecha: 02/06/2014.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 223/2014 - Núm. Rec.: 672/2013 - Ponente: Ramón Ruiz Jiménez. Fecha: 30/05/2014.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 117/2014 - Núm. Rec.: 124/2014 - Ponente: María Isabel bueno Trenado. Fecha: 28/05/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 362/2014 - Núm. Rec.: 374/2014 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 28/05/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 123/2014 - Núm. Rec.: 127/2014 - Ponente: Jaime Riaza García. Fecha: 26/05/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 207/2014 - Núm. Rec.: 280/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 26/05/2014

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 139/2014 - Núm. Rec.: 182/2014 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 26/05/2014.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 192/2014 - Núm. Rec.: 300/2013 - Ponente: María José González Movilla. Fecha: 23/05/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 165/2014 - Núm. Rec.: 85/2014 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 23/05/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 187/2014 - Núm. Rec.: 177/2014 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 22/05/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 474/2014 - Núm. Rec.: 924/2013 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 20/05/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 257/2014 - Núm. Rec.: 5124/2013 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 20/05/2014.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 130/2014 - Núm. Rec.: 56/2013 - Ponente: Rafael García Laraña. Fecha: 20/05/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 130/2014 - Núm. Rec.: 163/2014 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 20/05/2014.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 290/2014 - Núm. Rec.: 691/2013 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 16/05/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 344/2014 - Núm. Rec.: 1050/2012 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 15/05/2014. Fecha: 15/05/2014.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 100/2014 - Núm. Rec.: 90/2014 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 14/05/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 151/2014 - Núm. Rec.: 308/2013 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 14/05/2014.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 131/2014 - Núm. Rec.: 27/2014 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 13/05/2014.

- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 190/2014 - Núm. Rec.: 70/2014 - Ponente: María Zulema Gento Castro. . Fecha: 13/05/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 124/2014 - Núm. Rec.: 391/2013 - Ponente: María del Carmen Martelo Pérez. Fecha: 13/05/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 104/2014 - Núm. Rec.: 97/2014 - Ponente: Jaime Riaza García. Fecha: 12/05/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 164/2014 - Núm. Rec.: 605/2013 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 10/05/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 322/2014 - Núm. Rec.: 975/2012 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 08/05/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 147/2014 - Núm. Rec.: 142/2014 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 07/05/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 296/2014 - Núm. Rec.: 174/2013 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 02/05/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 228/2014 - Núm. Rec.: 783/2013 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés. Fecha: 02/05/2014.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 107/2014 - Núm. Rec.: 91/2013 - Ponente: Ana de Pedro Puertas. Fecha: 02/05/2014.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 221/2014 - Núm. Rec.: 274/2013 - Ponente: Álvaro Gaspar Pardo de Andrade. Fecha: 30/04/2014.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 106/2014 - Núm. Rec.: 116/2014 - Ponente: Juan Miguel Careras Maraña. Fecha: 30/04/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 303/2014 - Núm. Rec.: 1296/2012 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 30/04/2014.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 85/2014 - Núm. Rec.: 2/2014 - Ponente: Cesáreo Miguel Monsalve Argandoña. Fecha: 29/04/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 416/2014 - Núm. Rec.: 476/2013 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 29/04/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 282/2014 - Núm. Rec.: 103/2013 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 29/04/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 275/2014 - Núm. Rec.: 129/2013 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 28/04/2014.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 292/2014 - Núm. Rec.: 59/2014 - Ponente: Ana Belén Acacheta Undagoitia. Fecha: 25/04/2014.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 63/2014 - Núm. Rec.: 246/2013 - Ponente: Emilio Buceta Miller. Fecha: 22/04/2014.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 234/2014 - Núm. Rec.: 740/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 21/04/2014.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 99/2014 - Núm. Rec.: 66/2013 - Ponente: Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón. Fecha: 21/04/2014.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 45/2014 - Núm. Rec.: 41/2014 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 16/04/2014.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 38/2014 - Núm. Rec.: 75/2014 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 16/04/2014.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 197/2014 - Núm. Rec.: 138/2014 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 14/04/2014.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 184/2014 - Núm. Rec.: 30/2013 - Ponente: Antonio María Rodero García. Fecha: 14/04/2014.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 88/2014 - Núm. Rec.: 65/2014 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 14/04/2014.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 98/2014 - Núm. Rec.: 161/2014 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. Fecha: 11/04/2014.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 181/2014 - Núm. Rec.: 241/2013 - Ponente: Álvaro Gaspar Pardo de Andrade. Fecha: 11/04/2014.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 126/2014 - Núm. Rec.: 502/2013 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 11/04/2014.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 161/2014 - Núm. Rec.: 553/2013 - Ponente: Klaus Jochen Albiez Dohrmann. Fecha: 11/04/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 266/2014 - Núm. Rec.: 1222/2012 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. | Fecha: 10/04/2014.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 143/2014 - Núm. Rec.: 292/2014 - Ponente: Rafael Morales Morales Ortega. Fecha: 09/04/2014.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 41/2014 - Núm. Rec.: 179/2013 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 09/04/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 238/2014 - Núm. Rec.: 696/2013 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 08/04/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 157/2014 - Núm. Rec.: 124/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 07/04/2014.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 55/2014 - Núm. Rec.: 301/2013 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 04/04/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 252/2014 - Núm. Rec.: 1578/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 04/04/2014

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 58/2014 - Núm. Rec.: 36/2014 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 04/04/2014.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 94/2014 - Núm. Rec.: 137/2014 - Ponente: Antonio María González Floriano Fecha: 03/04/2014.

- Audiencia Provincial de Álava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 96/2014 - Núm. Rec.: 542/2013 - Ponente: Iñigo Elizburu Aguirre. Fecha: 03/04/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 242/2014 - Núm. Rec.: 274/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 02/04/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 185/2014 - Núm. Rec.: 536/2013 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 02/04/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 224/2014 - Núm. Rec.: 1053/2013 - Ponente: Olga Casas Herraiz. Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 61/2014 - Núm. Rec.: 2067/2014 - Ponente: María Teresa Fontcuberta de la Torre. Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 103/2014 - Núm. Rec.: 25/2014 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. | Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 339/2014 - Núm. Rec.: 1124/2012 - Ponente: María del Pilar Gonzalvez Vicente. Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 67/2014 - Núm. Rec.: 261/2013 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 86/2014 - Núm. Rec.: 114/2014 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 31/03/2014

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 236/2014 - Núm. Rec.: 314/2013 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 31/03/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 231/2014 - Núm. Rec.: 1195/2013 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 31/03/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 227/2014 - Núm. Rec.: 66/2014 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 26/03/2014.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 32/2014 - Núm. Rec.: 4/2014 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 19/03/2014.
- Audiencia Provincial de Teruel - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 17/2014 - Núm. Rec.: 28/2014 - Ponente: Fermín Francisco Hernández Gironella. Fecha: 18/03/2014.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 113/2014 - Núm. Rec.: 571/2012 - Ponente: Miguel Ángel Aguiló Monjo. | Fecha: 18/03/2014.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 83/2014 - Núm. Rec.: 1052/2012 - Ponente: María Paloma Fernández Reguera. Fecha: 14/03/2014.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 120/2014 - Núm. Rec.: 505/2013 - Ponente: Ramón Ruiz Jiménez. Fecha: 14/03/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 238/2014 - Núm. Rec.: 625/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 13/03/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 95/2014 - Núm. Rec.: 616/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 13/03/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 225/2014 - Núm. Rec.: 705/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 12/03/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 171/2014 - Núm. Rec.: 1293/2012 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 12/03/2014.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 56/2014 - Núm. Rec.: 6/2014 - Ponente: Ángel Salvador Carabias Gracia. Fecha: 11/03/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 97/2014 - Núm. Rec.: 322/2013 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 11/03/2014.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 169/2014 - Núm. Rec.: 1286/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 11/03/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 214/2014 - Núm. Rec.: 447/2013 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 07/03/2014.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 217/2014 - Núm. Rec.: 1390/2013 - Ponente: María del Pilar González Vicente. Fecha: 06/03/2014.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 61/2014 - Núm. Rec.: 3039/2014 - Ponente: Iñigo Francisco Suárez Odriozola. Fecha: 06/03/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 81/2014 - Núm. Rec.: 796/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 06/03/2014.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 93/2014 - Núm. Rec.: 183/2013 - Ponente: Francisco Javier Oficial Molina. Fecha: 05/03/2014.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 178/2014 - Núm. Rec.: 1098/2012 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 05/03/2014.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 19/2014 - Núm. Rec.: 36/2014 - Ponente: Miguel Ángel Callejo Sánchez. Fecha: 28/02/2014.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 137/2014 - Núm. Rec.: 1208/2012 - Ponente: Juan Antonio Jover Coy. Fecha: 27/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 148/2014 - Núm. Rec.: 80/2013 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 27/02/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 52/2014 - Núm. Rec.: 257/2013 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 27/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 147/2014 - Núm. Rec.: 1231/2012 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 26/02/2014.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 62/2014 - Núm. Rec.: 644/2013 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 26/02/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 76/2014 - Núm. Rec.: 399/2013 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 25/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 140/2014 - Núm. Rec.: 1211/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 25/02/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 192/2014 - Núm. Rec.: 494/2013 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 25/02/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 146/2014 - Núm. Rec.: 557/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 24/02/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 156/2014 - Núm. Rec.: 1305/2012 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 20/02/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 141/2014 - Núm. Rec.: 1192/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 19/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 105/2014 - Núm. Rec.: 562/2013 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 13/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 106/2014 - Núm. Rec.: 1516/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 13/02/2014.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 49/2014 - Núm. Rec.: 616/2013 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 13/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 107/2014 - Núm. Rec.: 1501/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 13/02/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 122/2014 - Núm. Rec.: 136/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 12/02/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 123/2014 - Núm. Rec.: 137/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 12/02/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 127/2014 - Núm. Rec.: 416/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 12/02/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 50/2014 - Núm. Rec.: 5/2014 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 11/02/2014.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 42/2014 - Núm. Rec.: 78/2014 - Ponente: María Elena Arias-Salgado Robsy. Fecha: 07/02/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 108/2014 - Núm. Rec.: 1002/2013 - Ponente: Francisco Javier Correas González. Fecha: 06/02/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 71/2014 - Núm. Rec.: 540/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 06/02/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 33/2014 - Núm. Rec.: 495/2013 - Ponente: Dámaso Manuel Brañas Santa María. Fecha: 06/02/2014.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 30/2014 - Núm. Rec.: 3462/2013 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 05/02/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 84/2014 - Núm. Rec.: 1127/2012 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 05/02/2014.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 38/2014 - Núm. Rec.: 158/2013 - Ponente: Isabel Serrano Frías. Fecha: 05/02/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 67/2014 - Núm. Rec.: 416/2013 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 04/02/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 98/2014 - Núm. Rec.: 131/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 04/02/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 31/2014 - Núm. Rec.: 126/2013 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 03/02/2014.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 30/2014 - Núm. Rec.: 279/2013 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 30/01/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 60/2014 - Núm. Rec.: 1311/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 30/01/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 51/2013 - Núm. Rec.: 145/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 29/01/2014.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 4/2014 - Núm. Rec.: 340/2013 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 28/01/2014.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 53/2014 - Núm. Rec.: 465/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 27/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 55/2014 - Núm. Rec.: 487/2013 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 27/01/2014.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 17/2014 - Núm. Rec.: 143/2013 - Ponente: José Luís Antón Blanco. Fecha: 27/01/2014.

- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 5/2014 - Núm. Rec.: 14/2014 - Ponente: Javier García Encinar. Fecha: 24/01/2014.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 69/2014 - Núm. Rec.: 974/2012 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 24/01/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 516/2013 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 23/01/2014.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 9/2014 - Núm. Rec.: 310/2013 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 21/01/2014.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 23/2014 - Núm. Rec.: 876/2013 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/01/2014.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 6/2014 - Núm. Rec.: 260/2014 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 19/01/2014.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 262/2013 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 17/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 37/2014 - Núm. Rec.: 259/2013 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 17/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 41/2014 - Núm. Rec.: 21/2013 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 17/01/2014.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 4/2014 - Núm. Rec.: 149/2013 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 16/01/2014.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 32/2014 - Núm. Rec.: 1513/2012 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 16/01/2014.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 5/2014 - Núm. Rec.: 178/2013 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 16/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 702/2013 - Ponente: Rafael de los Reyes Sainz de la Maza. Fecha: 16/01/2014.

-Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 23/2014 - Núm. Rec.: 663/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 15/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 25/2014 - Núm. Rec.: 18/2013 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 14/01/2014.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 7/2014 - Núm. Rec.: 1386/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/01/2014.

-Audiencia Provincial de Madrid - Sección Decimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Rec.: 445/2013 - Ponente: Amparo Camazón Linacero. Fecha: 08/01/2014.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Rec.: 511/2013 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 03/01/2014.

- AÑO 2.013.-

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 547/2013 - Núm. Rec.: 3045/2013 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 30/12/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 766/2012 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 23/12/2013.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 329/2013 - Núm. Rec.: 342/2013 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 20/12/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 1157/2013 - Núm. Rec.: 225/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 19/12/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 871/2013 - Núm. Rec.: 195/2013 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 19/12/2013.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 339/2013 - Núm. Rec.: 438/2013 - Ponente: Joaquín Miguel Fernández Font. Fecha: 18/12/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 867/2013 - Núm. Rec.: 1391/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 18/12/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 868/2013 - Núm. Rec.: 626/2013 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 18/12/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 994/2013 - Núm. Rec.: 25/2013 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 17/12/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 778/2013 - Núm. Rec.: 748/2012 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 17/12/2013.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 461/2013 - Núm. Rec.: 836/2012 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 13/12/2013.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Núm. Res.: 276/2013 - Núm. Rec.: 312/2013 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 12/12/2013.
- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 450/2013 - Núm. Rec.: 630/2013 - Ponente: José Antonio Varela Agrelo. Fecha: 12/12/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 852/2013 - Núm. Rec.: 1299/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 11/12/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Rec.: 465/2013 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 10/12/2013.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 360/2013 - Núm. Rec.: 282/2013 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 10/12/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 962/2013 - Núm. Rec.: 179/2013 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 09/12/2013.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 1/2014 - Núm. Rec.: 832/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 05/12/2013.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 721/2013 - Núm. Rec.: 806/2013 - Ponente: Francisco José Carrillo Vinader. Fecha: 05/12/2013.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 432/2013 - Núm. Rec.: 833/2012 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 04/12/2013.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 319/2013 - Núm. Rec.: 257/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 03/12/2013.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 225/2013 - Núm. Rec.: 139/2013 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 02/12/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 440/2012 - Ponente: María Nuria Zamora Pérez. Fecha: 02/12/2013.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 289/2013 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 29/11/2013.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 217/2013 - Núm. Rec.: 154/2013 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 26/11/2013.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 679/2013 - Núm. Rec.: 1086/2012 - Ponente: María José Torres Cuellar. Fecha: 25/11/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 1062/2013 - Núm. Rec.: 997/2012 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 25/11/2013.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 767/2013 - Núm. Rec.: 715/2013 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 25/11/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 923/2013 - Núm. Rec.: 1736/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 22/11/2013.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 319/2013 - Núm. Rec.: 419/2013 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 21/11/2013.
- Audiencia Provincial de Álava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 406/2013 - Núm. Rec.: 400/2013 - Ponente: Iñigo Madaria Azcoitia. Fecha: 20/11/2013.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 305/2013 - Núm. Rec.: 305/2013 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 19/11/2013.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 262/2013 - Núm. Rec.: 161/2013 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre. Fecha: 19/11/2013.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 448/2013 - Núm. Rec.: 7994/2012 - Ponente: Carlos María Piñol Rodríguez. Fecha: 18/11/2013.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 458/2013 - Núm. Rec.: 610/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 16/11/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 869/2013 - Núm. Rec.: 1787/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 12/11/2013.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 234/2013 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 08/11/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Rec.: 398/2013 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 08/11/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 546/2013 - Núm. Rec.: 6/2013 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 07/11/2013.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 308/2013 - Núm. Rec.: 250/2013 - Ponente: María del Carmen Araujo García. Fecha: 07/11/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 564/2013 - Núm. Rec.: 186/2013 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 06/11/2013.

- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 391/2013 - Núm. Rec.: 529/2013 - Ponente: José Antonio Varela Agrelo. Fecha: 05/11/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 130/2013 - Ponente: José Ramón Sánchez Herrero. Fecha: 05/11/2013.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 201/2013 - Núm. Rec.: 92/2013 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 04/11/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 530/2013 - Núm. Rec.: 325/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 04/11/2013.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 290/2013 - Núm. Rec.: 142/2013 - Ponente: María Jesús Alarcón Barcos. Fecha: 31/10/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 451/2013 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 31/10/2013.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 214/2013 - Núm. Rec.: 99/2013 - Ponente: Jesús Souto Herreros. Fecha: 29/10/2013.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 279/2013 - Núm. Rec.: 233/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 29/10/2013-

Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 426/2013 - Núm. Rec.: 710/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 28/10/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 837/2013 - Núm. Rec.: 1592/2012 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 25/10/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 919/2013 - Núm. Rec.: 26/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 23/10/2013.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 368/2013 - Núm. Rec.: 333/2013 - Ponente: Fernando Javier Fernández-Espinar López. Fecha: 23/10/2013

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 349/2013 - Núm. Rec.: 306/2013 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 22/10/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 818/2013 - Núm. Rec.: 1561/2012 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 22/10/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 626/2013 - Núm. Rec.: 767/2012 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 18/10/2013.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 299/2013 - Núm. Rec.: 234/2013 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 17/10/2013.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 163/2013 - Núm. Rec.: 164/2013 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 16/10/2013.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 272/2013 - Núm. Rec.: 333/2013 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 16/10/2013.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 477/2012 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 16/10/2013.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Rec.: 529/2013 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 15/10/2013.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 384/2013 - Núm. Rec.: 354/2013 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 15/10/2013.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 333/2013 - Núm. Rec.: 151/2013 - Ponente: José Ramón González Clavijo. Fecha: 14/10/2013.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 598/2013 - Núm. Rec.: 483/2013 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 10/10/2013

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 219/2013 - Núm. Rec.: 97/2013 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 09/10/2013.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 123/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 08/10/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 225/2013 - Ponente: Dámaso Manuel Brañas Santa María. Fecha: 04/10/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 839/2013 - Núm. Rec.: 1538/2012 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 03/10/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 834/2013 - Núm. Rec.: 1725/2013 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 02/10/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 474/2013 - Núm. Rec.: 257/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 02/10/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 1111/2012 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 30/09/2013.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 386/2013 - Núm. Rec.: 10005/2012 - Ponente: Carlos María Piñol Rodríguez. Fecha: 30/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 471/2013 - Núm. Rec.: 277/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 30/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 500/2013 - Núm. Rec.: 72/2013 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 30/09/2013,

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 78/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 30/09/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 673/2013 - Núm. Rec.: 988/2012 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 30/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cuenca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 235/2013 - Núm. Rec.: 137/2013 - Ponente: Ramón Ruiz Jiménez. Fecha: 27/09/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 715/2013 - Núm. Rec.: 1417/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 27/09/2013.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 57/2013 - Núm. Rec.: 44/2013 - Ponente: José Luís Martín Tapia. Fecha: 27/09/2013.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 557/2013 - Núm. Rec.: 656/2013 - Ponente: Francisco José Carrillo Vinader. Fecha: 26/09/2013.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 247/2013 - Núm. Rec.: 124/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 26/09/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 688/2013 - Núm. Rec.: 1557/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 24/09/2013.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 198/2013 - Núm. Rec.: 419/2012 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 24/09/2013.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 202/2013 - Núm. Rec.: 33/2013 - Ponente: José Aurelio Navarro Guillén. Fecha: 24/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 445/2013 - Núm. Rec.: 950/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 19/09/2013.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 312/2012 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 18/09/2013.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 18/2013 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 18/09/2013.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 241/2013 - Núm. Rec.: 119/2013 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 17/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 442/2013 - Núm. Rec.: 203/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 12/09/2013.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 356/2013 - Núm. Rec.: 136/2013 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández Fecha: 10/09/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 312/2013 - Núm. Rec.: 701/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 10/09/2013.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 155/2013 - Núm. Rec.: 297/2012 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 09/09/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 309/2012 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 09/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 428/2013 - Núm. Rec.: 167/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 05/09/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 321/2012 - Ponente: Magdalena Fernández Soto. Fecha: 05/09/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 434/2013 - Núm. Rec.: 121/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 04/09/2013.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 49/2013 - Núm. Rec.: 42/2013 - Ponente: Mariano Santos Penalver. Fecha: 31/07/2013.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 338/2013 - Núm. Rec.: 248/2012 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 30/07/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 341/2013 - Núm. Rec.: 95/2013 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 25/07/2013.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 192/2013 - Núm. Rec.: 31/2013 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre, Fecha: 25/07/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 297/2013 - Núm. Rec.: 125/2013 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 25/07/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 429/2013 - Núm. Rec.: 34/2013 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés Fecha: 24/07/2013

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 139/2013 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 24/07/2013.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 311/2013 - Núm. Rec.: 470/2011 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 22/07/2013.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 284/2013 - Núm. Rec.: 1/2013 - Ponente: José Antonio Martín Pérez. Fecha: 19/07/2013.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 340/2013 - Núm. Rec.: 191/2013 - Ponente: Manuel García Prada. | Fecha: 18/07/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 673/2013 - Núm. Rec.: 1237/2012 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 17/07/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 544/2013 - Núm. Rec.: 889/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz Fecha: 16/07/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 217/2013 - Núm. Rec.: 262/2013 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 15/07/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 251/2013 - Núm. Rec.: 683/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 12/07/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 389/2013 - Núm. Rec.: 95/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 12/07/2013.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 200/2013 - Núm. Rec.: 122/2013 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 11/07/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 202/2013 - Núm. Rec.: 251/2013 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acota. Fecha: 11/07/2013.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 396/2013 - Núm. Rec.: 1242/2012 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 11/07/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 645/2013 - Núm. Rec.: 1106/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco d | Fecha: 10/07/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 386/2013 - Núm. Rec.: 1087/2012 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés. Fecha: 09/07/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 472/2013 - Núm. Rec.: 580/2012 - Ponente: Francisco Javier Pereda Gámez. Fecha: 09/07/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 311/2013 - Núm. Rec.: 33/2013 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 09/07/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 386/2013 - Núm. Rec.: 931/2012 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 09/07/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 635/2013 - Núm. Rec.: 1664/2012 - Ponente: María Josefa Ruiz Marín. Fecha: 08/07/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 521/2013 - Núm. Rec.: 742/2012 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 05/07/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 560/2013 - Núm. Rec.: 994/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 05/07/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 454/2013 - Núm. Rec.: 538/2012 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 04/07/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 360/2013 - Núm. Rec.: 632/2012 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 04/07/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 225/2013 - Núm. Rec.: 556/2012 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 28/06/2013.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 265/2013 - Núm. Rec.: 237/2013 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 28/06/2013.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 289/2013 - Núm. Rec.: 1696/2013 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 27/06/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 287/2013 - Núm. Rec.: 779/2012 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 27/06/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 501/2013 - Núm. Rec.: 395/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 27/06/2013.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 274/2013 - Núm. Rec.: 1011/2012 - Ponente: Antonio Doreste Armas. Fecha: 27/06/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 488/2013 - Núm. Rec.: 722/2012 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 26/06/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 237/2013 - Núm. Rec.: 274/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 26/06/2013.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 266/2013 - Núm. Rec.: 545/2012 - Ponente: María Paloma Fernández Reguera. Fecha: 26/06/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 515/2013 - Núm. Rec.: 619/2013 - Ponente: María del Pilar Gonzalvez Vicente. Fecha: 25/06/2013.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 365/2013 - Núm. Rec.: 988/2012 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 25/06/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 184/2013 - Núm. Rec.: 217/2013 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 25/06/2013.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 224/2013 - Núm. Rec.: 130/2013 - Ponente: Alfonso Santisteban Ruíz. Fecha: 21/06/2013.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 158/2013 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 20/06/2013.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 182/2013 - Núm. Rec.: 115/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 20/06/2013.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 167/2012 - Ponente: Juan Manuel Alfaya Ocampo. Fecha: 20/06/2013. Fecha: 18/06/2013.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 352/2013 - Núm. Rec.: 1125/2012 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 18/06/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 184/2013 - Núm. Rec.: 225/2013 - Ponente: José Manuel Barral Díaz. Fecha: 17/06/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 186/2013 - Núm. Rec.: 182/2013 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 17/06/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 316/2013 - Núm. Rec.: 61/2013 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 17/06/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 207/2013 - Núm. Rec.: 82/2013 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Asturias Fecha: 17/06/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 449/2013 - Núm. Rec.: 821/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 14/06/2013.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 258/2013 - Núm. Rec.: 809/2012 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 13/06/2013.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 239/2013 - Núm. Rec.: 129/2013 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 13/06/2013.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 152/2013 - Núm. Rec.: 104/2013 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta.. Fecha: 12/06/2013.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 488/2012 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 11/06/2013.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 253/2013 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 11/06/2013.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 132/2013 - Núm. Rec.: 388/2012 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 11/06/2013.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 247/2013 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 11/06/2013.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 378/2012 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 11/06/2013.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 59/2013 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 10/06/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 435/2013 - Núm. Rec.: 1156/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 07/06/2013.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 92/2013 - Núm. Rec.: 61/2013 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 06/06/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 291/2013 - Núm. Rec.: 3/2013 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 05/06/2013.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Rec.: 145/2013 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas.. Fecha: 05/06/2013.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 157/2013 - Núm. Rec.: 474/2012 - Ponente: Manuel Eduardo Regalado Valdés. Fecha: 04/06/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 449/2013 - Núm. Rec.: 1244/2012 - Ponente: María Josefa Ruiz Marín. Fecha: 03/06/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 416/2013 - Núm. Rec.: 1115/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 31/05/2013.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 196/2013 - Núm. Rec.: 290/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 31/05/2013.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 359/2013 - Núm. Rec.: 688/2012 - Ponente: Juan Antonio Jover Coy. Fecha: 30/05/2013.-
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 180/2013 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. . Fecha: 29/05/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 274/2013 - Núm. Rec.: 927/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 27/05/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 170/2013 - Núm. Rec.: 96/2013 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 27/05/2013.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 209/2013 - Núm. Rec.: 158/2013 - Ponente: Fernando Javier Fernández-Espinar López. Fecha: 27/05/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 378/2013 - Núm. Rec.: 1104/2012 - Ponente: María del Pilar Gonzalez Vicente. Fecha: 24/05/2013.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 215/2013 - Núm. Rec.: 703/2012 - Ponente: José María Jiménez Burkhardt.Fecha: 24/05/2013.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 112/2013 - Núm. Rec.: 323/2012 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 22/05/2013.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 287/2013 - Núm. Rec.: 40/2013 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 22/05/2013.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 284/2013 - Núm. Rec.: 1090/2012 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 22/05/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 322/2013 - Núm. Rec.: 370/2012 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 21/05/2013.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 213/2013 - Núm. Rec.: 521/2012 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 21/05/2013.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 320/2012 - Ponente: Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón. Fecha: 20/05/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 142/2013 - Núm. Rec.: 206/2013 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 20/05/2013.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 202/2013 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/05/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 156/2013 - Núm. Rec.: 73/2013 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 17/05/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 201/2013 - Núm. Rec.: 319/2012 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 16/05/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 175/2013 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 15/05/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 124/2013 - Núm. Rec.: 192/2013 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta. . Fecha: 14/05/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 221/2013 - Núm. Rec.: 667/2012 - Ponente: Marta María Gutiérrez García. Fecha: 14/05/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 148/2013 - Núm. Rec.: 61/2013 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 13/05/2013.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 272/2013 - Núm. Rec.: 1066/2012 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 10/05/2013.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 195/2013 - Núm. Rec.: 404/2012 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 10/05/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 350/2013 - Núm. Rec.: 773/2012 - Ponente: María Cruz Eugenia Bodas Daga. Fecha: 09/05/2013.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 271/2013 - Núm. Rec.: 1115/2012 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 09/05/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 145/2013 - Núm. Rec.: 458/2012 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 09/05/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 236/2013 - Núm. Rec.: 823/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 08/05/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 346/2013 - Núm. Rec.: 1272/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 08/05/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 331/2013 - Núm. Rec.: 1193/2012 - Ponente: Carmen Neira Vázquez. Fecha: 07/05/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 329/2013 - Núm. Rec.: 107/2012 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 06/05/2013

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 230/2013 - Núm. Rec.: 214/2013 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta.. Fecha: 03/05/2013.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 258/2013 - Núm. Rec.: 143/2013 - Ponente: Javier de la Hoz de la Escalera. . Fecha: 02/05/2013.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 125/2013 - Núm. Rec.: 420/2012 - Ponente: María Jesús Alarcón Barcos. Fecha: 25/04/2013.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 115/2013 - Núm. Rec.: 59/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 25/04/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 322/2013 - Núm. Rec.: 1116/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 25/04/2013.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 80/2013 - Núm. Rec.: 273/2012 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 24/04/2013.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 119/2013 - Núm. Rec.: 12/2013 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 22/04/2013.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 137/2013 - Núm. Rec.: 7202/2011 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 22/04/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 290/2013 - Núm. Rec.: 955/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 19/04/2013.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 74/2013 - Núm. Rec.: 272/2012 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 18/04/2013.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 281/2013 - Núm. Rec.: 380/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. . Fecha: 18/04/2013.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 150/2013 - Núm. Rec.: 493/2012 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 16/04/2013.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 155/2013 - Núm. Rec.: 34/2013 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 16/04/2013
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 12/2013 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 11/04/2013.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 102/2013 - Núm. Rec.: 44/2013 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 11/04/2013.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 266/2013 - Núm. Rec.: 815/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 11/04/2013.. Fecha: 10/04/2013.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 1173/2012 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 09/04/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 172/2013 - Núm. Rec.: 683/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 05/04/2013.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 199/2013 - Núm. Rec.: 1025/2012 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 03/04/2013.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 165/2013 - Núm. Rec.: 84/2013 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. . Fecha: 03/04/2013.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 232/2013 - Núm. Rec.: 297/2012 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 01/04/2013.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 132/2013 - Núm. Rec.: 615/2012 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 01/04/2013.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 121/2013 - Núm. Rec.: 222/2012 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 25/03/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 140/2013 - Núm. Rec.: 439/2012 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 22/03/2013.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 127/2013 - Núm. Rec.: 686/2012 - Ponente: José María Jiménez Burkhardt. Fecha: 22/03/2013.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 494/2012 - Ponente: Saturnino Regidor Martínez. Fecha: 22/03/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 129/2013 - Núm. Rec.: 577/2012 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 21/03/2013. –

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 72/2013 - Núm. Rec.: 7991/2012 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 18/03/2013.

Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 167/2013 - Núm. Rec.: 38/2013 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 18/03/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 140/2013 - Núm. Rec.: 617/2012 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 15/03/2013.

Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 160/2013 - Núm. Rec.: 7/2013 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 13/03/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 85/2013 - Núm. Rec.: 503/2012 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 12/03/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 127/2013 - Núm. Rec.: 19/2013 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 08/03/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 161/2013 - Núm. Rec.: 172/2012 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 06/03/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 172/2013 - Núm. Rec.: 535/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 06/03/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 87/2013 - Núm. Rec.: 32/2013 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 04/03/2013.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 57/2013 - Núm. Rec.: 410/2012 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 04/03/2013.

Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 153/2013 - Núm. Rec.: 765/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/02/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 141/2013 - Núm. Rec.: 164/2012 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 26/02/2013.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 53/2013 - Núm. Rec.: 3513/2012 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 25/02/2013.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Rec.: 438/2012 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 25/02/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 101/2013 - Núm. Rec.: 657/2012 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 22/02/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 62/2013 - Núm. Rec.: 389/2012 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 21/02/2013. —

Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 115/2013 - Núm. Rec.: 153/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/02/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 65/2013 - Núm. Rec.: 61/2013 - Ponente: Luís Aurelio Sanz Acosta .Fecha: 19/02/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 107/2013 - Núm. Rec.: 313/2012 - Ponente: María Joana Valldepérez Machi.. Fecha: 18/02/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 127/2013 - Núm. Rec.: 399/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 18/02/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 85/2013 - Núm. Rec.: 512/2012 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 15/02/2013.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 59/2013 - Núm. Rec.: 487/2012 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 14/02/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 54/2013 - Núm. Rec.: 568/2012 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 14/02/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 106/2013 - Núm. Rec.: 626/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 13/02/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 83/2013 - Núm. Rec.: 741/2012 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés. Fecha: 13/02/2013.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 27/2013 - Núm. Rec.: 4/2013 - Ponente: Francisco Bellido Soria... Fecha: 12/02/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 84/2013 - Núm. Rec.: 349/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 07/02/2013.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 76/2013 - Núm. Rec.: 1063/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 06/02/2013

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 38/2013 - Núm. Rec.: 579/2012 - Ponente: José Luís Seoane Spiegelberg. Fecha: 05/02/2013.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 29/2013 - Núm. Rec.: 3469/2012 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 04/02/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 36/2013 - Núm. Rec.: 561/2012 - Ponente: José Manuel Barral Díaz. Fecha: 04/02/2013.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 63/2013 - Núm. Rec.: 463/2012 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 01/02/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 49/2013 - Núm. Rec.: 342/2012 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 30/01/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 33/2013 - Núm. Rec.: 608/2012 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas.. Fecha: 30/01/2013.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 51/2013 - Núm. Rec.: 759/2012 - Ponente: Bruno Arias Berrioategortua.. Fecha: 30/01/2013.

Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 44/2013 - Núm. Rec.: 563/2012 - Ponente: Fernando Javier Fernández-Espinar López. Fecha: 29/01/2013.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 32/2013 - Núm. Rec.: 99/2012 - Ponente: Agustín Azparren-Lucas. . Fecha: 29/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 41/2013 - Núm. Rec.: 640/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo Fecha: 28/01/2013.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 22/2013 - Núm. Rec.: 186/2012 - Ponente: Eloísa Gómez Santana. Fecha: 25/01/2013.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 51/2013 - Núm. Rec.: 576/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 23/01/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 47/2013 - Núm. Rec.: 325/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer.. Fecha: 23/01/2013.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 8/2013 - Núm. Rec.: 321/2012 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 22/01/2013

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 22/2013 - Núm. Rec.: 472/2012 - Ponente: Francisco Javier Rubio Sánchez. Fecha: 21/01/2013.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Núm. Res.: 18/2013 - Núm. Rec.: 467/2012 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 21/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 20/2013 - Núm. Rec.: 620/2012 - Ponente: Ángel Luís Sanabria Parejo. Fecha: 21/01/2013.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 12/2013 - Núm. Rec.: 273/2012 - Ponente: Paloma Sancho Mayo. Fecha: 18/01/2013.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 10/2013 - Núm. Rec.: 472/2012 - Ponente: Fernando Solsona Abad. . Fecha: 18/01/2013.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 11/2013 - Núm. Rec.: 2/2013 - Ponente: María Isabel Bueno Trenado.. Fecha: 17/01/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 32/2013 - Núm. Rec.: 582/2012 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 17/01/2013.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Núm. Res.: 18/2013 - Núm. Rec.: 291/2012 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 17/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 19/2013 - Núm. Rec.: 536/2012 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 17/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 19/2013 - Núm. Rec.: 647/2012 - Ponente: María Teresa Vázquez Pizarro. Fecha: 16/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - - Núm. Res.: 21/2013 - Núm. Rec.: 683/2012 - Ponente: María Teresa Vázquez Pizarro. Fecha: 16/01/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 14/2013 - Núm. Rec.: 235/2012 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 15/01/2013.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 11/2013 - Núm. Rec.: 1140/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 14/01/2013.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 23/2013 - Núm. Rec.: 391/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 11/01/2013.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 12/2013 - Núm. Rec.: 680/2012 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 10/01/2013.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Núm. Res.: 13/2013 - Núm. Rec.: 707/2012 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 10/01/2013.

- AÑO 2.012.-

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 881/2012 - Num. Rec.: 386/2012 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 28/12/2012.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 221/2012 - Num. Rec.: 243/2012 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 28/12/2012.

Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 274/2012 - Num. Rec.: 247/2012 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 27/12/2012.

- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 252/2012 - Num. Rec.: 259/2012 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 26/12/2012.

- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 251/2012 - Num. Rec.: 221/2012 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 26/12/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 515/2012 - Num. Rec.: 468/2012 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 21/12/2012.

- Audiencia Provincial de Teruel - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 138/2012 - Num. Rec.: 152/2012 - Ponente: María Teresa Rivera Blasco. Fecha: 20/12/2012.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 870/2012 - Num. Rec.: 553/2012 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 19/12/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 841/2012 - Num. Rec.: 201/2012 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 18/12/2012.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 468/2012 - Num. Rec.: 380/2012 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 18/12/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 610/2012 - Num. Rec.: 394/2012 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 18/12/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 772/2012 - Num. Rec.: 1165/2011 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 18/12/2012.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 716/2012 - Num. Rec.: 227/2012 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés. Fecha: 17/12/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 760/2012 - Num. Rec.: 1173/2011 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 17/12/2012.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 455/2012 - Num. Rec.: 402/2012 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 14/12/2012.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 237/2012 - Num. Rec.: 245/2012 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 14/12/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 625/2012 - Num. Rec.: 585/2012 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 14/12/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 885/2012 - Num. Rec.: 298/2012 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 14/12/2012.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 315/2012 - Num. Rec.: 393/2012 - Ponente: José María Morillo-Velarde Pérez. Fecha: 13/12/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1365/2012 - Num. Rec.: 505/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 12/12/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 824/2012 - Num. Rec.: 59/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 12/12/2012.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 366/2012 - Num. Rec.: 3395/2012 - Ponente: Iñigo Francisco Suárez Odriozola. Fecha: 07/12/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 312/2012 - Num. Rec.: 481/2012 - Ponente: Bernardino José Varela Gómez. Fecha: 05/12/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 818/2012 - Num. Rec.: 899/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 05/12/2012.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 353/2012 - Num. Rec.: 3371/2012 - Ponente: María del Carmen Bildarrazaluri. Fecha: 04/12/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 726/2012 - Num. Rec.: 779/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquiús. Fecha: 03/12/2012.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 883/2012 - Num. Rec.: 278/2012 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 03/12/2012.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 378/2012 - Num. Rec.: 353/2012 - Ponente: Juana Calderón Martín. Fecha: 03/12/2012.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 668/2012 - Num. Rec.: 303/2012 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 30/11/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 468/2012 - Num. Rec.: 2912/2012 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 29/11/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1324/2012 - Num. Rec.: 495/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/11/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1321/2012 - Num. Rec.: 206/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/11/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 463/2012 - Num. Rec.: 1108/2012 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 28/11/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 612/2012 - Num. Rec.: 623/2012 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 28/11/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1322/2012 - Num. Rec.: 456/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/11/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 557/2012 - Num. Rec.: 216/2012 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 23/11/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 779/2012 - Num. Rec.: 956/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 23/11/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 582/2012 - Num. Rec.: 327/2012 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 243/2012 - Num. Rec.: 239/2012 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 458/2012 - Num. Rec.: 7900/2011 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 597/2012 - Num. Rec.: 700/2012 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 834/2012 - Num. Rec.: 770/2012 - Ponente: Ana Belén Iracheta Undagoitia. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 488/2012 - Num. Rec.: 82/2012 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 22/11/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1254/2012 - Num. Rec.: 76/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 21/11/2012.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 311/2012 - Num. Rec.: 312/2012 - Ponente: Alfonso Moreno Cardoso. Fecha: 20/11/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 683/2012 - Num. Rec.: 874/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 20/11/2012.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 426/2012 - Num. Rec.: 367/2012 - Ponente: Josefa Otero Seivane. Fecha: 19/11/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 422/2012 - Num. Rec.: 246/2012 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 19/11/2012.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2012 - Num. Rec.: 418/2012 - Ponente: Carlos Jesús Carapeto y Márquez de Prado. Fecha: 16/11/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 754/2012 - Num. Rec.: 861/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 15/11/2012.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 749/2012 - Num. Rec.: 843/2012 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 15/11/2012.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 421/2012 - Num. Rec.: 495/2012 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 14/11/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 671/2012 - Num. Rec.: 1015/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 13/11/2012 | /2011.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 616/2012 - Num. Rec.: 191/2012 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 13/11/2012 | Fallo: Estima | REC: 191/2012 | RES: 616/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 778/2012 - Num. Rec.: 349/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 12/11/2012.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 184/2012 - Num. Rec.: 218/2012 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 09/11/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 562/2012 - Num. Rec.: 282/2012 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 08/11/2012.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 445/2012 - Num. Rec.: 295/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 08/11/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 555/2012 - Num. Rec.: 291/2012 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilariño López. Fecha: 07/11/2012.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 718/2012 - Num. Rec.: 817/2012 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 05/11/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 279/2012 - Num. Rec.: 258/2012 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 31/10/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 417/2012 - Num. Rec.: 6466/2012 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 31/10/2012.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 286/2012 - Num. Rec.: 262/2012 - Ponente: María Jesús Alarcón Barcos. Fecha: 31/10/2012.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 381/2012 - Num. Rec.: 301/2012 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 31/10/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 707/2012 - Num. Rec.: 1191/2011 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 29/10/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 408/2012 - Num. Rec.: 3531/2012 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 29/10/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 421/2012 - Num. Rec.: 249/2012 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 29/10/2012.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 460/2012 - Num. Rec.: 516/2012 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 29/10/2012.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 593/2012 - Num. Rec.: 517/2012 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 29/10/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 733/2012 - Num. Rec.: 315/2012 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 26/10/2012.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 418/2012 - Num. Rec.: 386/2012 - Ponente: Federico Rodríguez Mira. Fecha: 25/10/2012.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 462/2012 - Num. Rec.: 356/2012 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 23/10/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 407/2012 - Num. Rec.: 344/2012 - Ponente: Jaime Ríaza García. Fecha: 22/10/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1128/2012 - Num. Rec.: 425/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 22/10/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 702/2012 - Num. Rec.: 242/2012 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 19/10/2012.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 430/2012 - Num. Rec.: 100/2012 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 19/10/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 615/2012 - Num. Rec.: 1012/2011 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 18/10/2012.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 374/2012 - Num. Rec.: 308/2012 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 18/10/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1114/2012 - Num. Rec.: 234/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 18/10/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 375/2012 - Num. Rec.: 266/2012 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 16/10/2012.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 444/2012 - Num. Rec.: 191/2012 - Ponente: Miguel Ángel Aguiló Monjo. Fecha: 16/10/2012.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 443/2012 - Num. Rec.: 513/2012 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 15/10/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 481/2012 - Num. Rec.: 443/2012 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 15/10/2012.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 339/2012 - Num. Rec.: 329/2012 - Ponente: Fernando Paumard Collado. Fecha: 15/10/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 685/2012 - Num. Rec.: 1197/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 15/10/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 372/2012 - Num. Rec.: 611/2011 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 15/10/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 383/2012 - Num. Rec.: 394/2012 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 11/10/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 397/2012 - Num. Rec.: 261/2012 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 11/10/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 665/2012 - Num. Rec.: 1145/2011 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 10/10/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1070/2012 - Num. Rec.: 186/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/10/2012.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 417/2012 - Num. Rec.: 829/2011 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 10/10/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 589/2012 - Num. Rec.: 825/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 09/10/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 664/2012 - Num. Rec.: 1467/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 09/10/2012.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 433/2012 - Num. Rec.: 377/2012 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 09/10/2012.

- Audiencia Provincial de Palencia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2012 - Num. Rec.: 234/2012 - Ponente: Carlos Miguélez del Río. Fecha: 08/10/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1058/2012 - Num. Rec.: 205/2012 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 08/10/2012.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 201/2012 - Num. Rec.: 42/2012 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 05/10/2012.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 640/2012 - Num. Rec.: 719/2012 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 04/10/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 489/2012 - Num. Rec.: 206/2012 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 04/10/2012.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 235/2012 - Num. Rec.: 216/2012 - Ponente: José María Morillo-Velarde Pérez. Fecha: 04/10/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2012 - Num. Rec.: 3062/2012 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 04/10/2012.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 321/2012 - Num. Rec.: 381/2012 - Ponente: Fernando Solsona Abad. Fecha: 03/10/2012.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2012 - Num. Rec.: 223/2012 - Ponente: María de los Ángeles Barcenilla Visus. Fecha: 03/10/2012.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 391/2012 - Num. Rec.: 88/2012 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 02/10/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 638/2012 - Num. Rec.: 138/2012 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 02/10/2012.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 397/2012 - Num. Rec.: 369/2012 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 01/10/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 620/2012 - Num. Rec.: 25/2012 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 01/10/2012.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2012 - Num. Rec.: 252/2012 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 28/09/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 233/2012 - Num. Rec.: 228/2012 - Ponente: José Ramón Sánchez Herrero. Fecha: 28/09/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 367/2012 - Num. Rec.: 696/2012 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 28/09/2012

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 618/2012 - Num. Rec.: 1067/2011 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 28/09/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 374/2012 - Num. Rec.: 7768/2011 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 28/09/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 484/2012 - Num. Rec.: 149/2012 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 28/09/2012.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 341/2012 - Num. Rec.: 268/2012 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 27/09/2012.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 422/2012 - Num. Rec.: 463/2012 - Ponente: María Teresa Vázquez Pizarro. Fecha: 27/09/2012.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 348/2012 - Num. Rec.: 66/2012 - Ponente: José María Tapia Chinchón. Fecha: 26/09/2012.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 534/2012 - Num. Rec.: 548/2011 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 25/09/2012.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 349/2012 - Num. Rec.: 252/2012 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 25/09/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 422/2012 - Num. Rec.: 261/2012 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 21/09/2012.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 487/2012 - Num. Rec.: 218/2012 - Ponente: Ángel Salvador Carabias Gracia.. Fecha: 21/09/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 982/2012 - Num. Rec.: 138/2012 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 20/09/2012.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 590/2012 - Num. Rec.: 661/2012 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 20/09/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 342/2012 - Num. Rec.: 330/2012 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 19/09/2012.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 415/2012 - Num. Rec.: 352/2012 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 19/09/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 598/2012 - Num. Rec.: 1147/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 18/09/2012.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 511/2012 - Num. Rec.: 440/2012 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 18/09/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 475/2012 - Num. Rec.: 413/2012 - Ponente: Dámaso Manuel Brañas Santa María. Fecha: 17/09/2012.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 374/2012 - Num. Rec.: 317/2012 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 14/09/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 405/2012 - Num. Rec.: 236/2012 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 14/09/2012.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2012 - Num. Rec.: 220/2012 - Ponente: María Pilar Astray Chacón. Fecha: 13/09/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 559/2012 - Num. Rec.: 981/2011 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 07/09/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 651/2012 - Num. Rec.: 381/2012 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 07/09/2012.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 462/2012 - Num. Rec.: 123/2012 - Ponente: José Antonio Martín Pérez. Fecha: 31/07/2012.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2012 - Num. Rec.: 136/2012 - Ponente: Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón. Fecha: 31/07/2012.
- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 70/2012 - Num. Rec.: 81/2012 - Ponente: José Luis Martín Tapia. Fecha: 31/07/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 148/2012 - Num. Rec.: 185/2012 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 27/07/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 332/2012 - Num. Rec.: 218/2012 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 27/07/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 532/2012 - Num. Rec.: 619/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 26/07/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 320/2012 - Num. Rec.: 1772/2012 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 26/07/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 384/2012 - Num. Rec.: 139/2012 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 23/07/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 309/2012 - Num. Rec.: 411/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 20/07/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 560/2012 - Num. Rec.: 334/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 20/07/2012.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 297/2012 - Num. Rec.: 138/2012 - Ponente: José Maldonado Martínez. Fecha: 20/07/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 556/2012 - Num. Rec.: 1421/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 20/07/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 336/2012 - Num. Rec.: 282/2012 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 19/07/2012.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 376/2012 - Num. Rec.: 416/2012 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 19/07/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 503/2012 - Num. Rec.: 927/2011 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 19/07/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 363/2012 - Num. Rec.: 325/2012 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 19/07/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 330/2012 - Num. Rec.: 219/2012 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 19/07/2012.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 310/2012 - Num. Rec.: 204/2012 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 19/07/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 295/2012 - Num. Rec.: 1072/2012 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 18/07/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 887/2012 - Num. Rec.: 1455/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 17/07/2012.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 308/2012 - Num. Rec.: 91/2012 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 17/07/2012.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 340/2012 - Num. Rec.: 616/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 17/07/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 497/2012 - Num. Rec.: 486/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 16/07/2012.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 537/2012 - Num. Rec.: 487/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 16/07/2012.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 411/2012 - Num. Rec.: 259/2012 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 13/07/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 532/2012 - Num. Rec.: 1475/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 13/07/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 302/2012 - Num. Rec.: 282/2012 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 11/07/2012.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 521/2012 - Num. Rec.: 283/2012 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 10/07/2012.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 436/2012 - Num. Rec.: 278/2012 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 10/07/2012.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 235/2012 - Num. Rec.: 3225/2012 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 10/07/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 859/2012 - Num. Rec.: 586/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/07/2012.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 431/2012 - Num. Rec.: 267/2012 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 09/07/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2012 - Num. Rec.: 455/2012 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 05/07/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 367/2012 - Num. Rec.: 39/2012 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 04/07/2012.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 327/2012 - Num. Rec.: 480/2012 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 03/07/2012.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 379/2012 - Num. Rec.: 292/2012 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 03/07/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 320/2012 - Num. Rec.: 115/2012 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 02/07/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 280/2012 - Num. Rec.: 54/2012 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 29/06/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 343/2012 - Num. Rec.: 293/2012 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 28/06/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 479/2012 - Num. Rec.: 516/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 27/06/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 445/2012 - Num. Rec.: 665/2011 - Ponente: Agustín Vigo Morancho. Fecha: 27/06/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 782/2012 - Num. Rec.: 1405/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 26/06/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 439/2012 - Num. Rec.: 802/2011 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 26/06/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 293/2012 - Num. Rec.: 149/2012 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 26/06/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 461/2012 - Num. Rec.: 160/2012 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 25/06/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 474/2012 - Num. Rec.: 675/2011 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 25/06/2012.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 283/2012 - Num. Rec.: 94/2012 - Ponente: Josefa Otero Seivane. Fecha: 25/06/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 272/2012 - Num. Rec.: 107/2012 - Ponente: Luís Carlos Rey Sanfiz. Fecha: 25/06/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Rec.: 76/2012 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 25/06/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 329/2012 - Num. Rec.: 153/2012 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 22/06/2012.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 251/2012 - Num. Rec.: 8738/2011 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 21/06/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 431/2012 - Num. Rec.: 606/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 21/06/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 446/2012 - Num. Rec.: 1254/2011 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 20/06/2012.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 354/2012 - Num. Rec.: 201/2012 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 20/06/2012.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2012 - Num. Rec.: 132/2012 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 18/06/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 431/2012 - Num. Rec.: 348/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 15/06/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 272/2012 - Num. Rec.: 338/2012 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 14/06/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 338/2012 - Num. Rec.: 78/2012 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 14/06/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Rec.: 124/2012 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 14/06/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 291/2012 - Num. Rec.: 746/2011 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 12/06/2012.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 162/2012 - Num. Rec.: 183/2012 - Ponente: José María Morillo-Velarde Pérez. Fecha: 11/06/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 688/2012 - Num. Rec.: 749/2011 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 11/06/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2012 - Num. Rec.: 444/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 11/06/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 238/2012 - Num. Rec.: 97/2012 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 11/06/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 419/2012 - Num. Rec.: 1369/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 08/06/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 204/2012 - Num. Rec.: 72/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 08/06/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 215/2012 - Num. Rec.: 144/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 08/06/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 384/2012 - Num. Rec.: 736/2011 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 06/06/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 401/2012 - Num. Rec.: 1554/2012 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 05/06/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 245/2012 - Num. Rec.: 420/2011 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 05/06/2012.
- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2012 - Num. Rec.: 177/2012 - Ponente: Andrés Palomo del Arco. Fecha: 05/06/2012.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 304/2012 - Num. Rec.: 626/2011 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 01/06/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 277/2012 - Num. Rec.: 484/2011 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 01/06/2012.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 214/2012 - Num. Rec.: 102/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 01/06/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 290/2012 - Num. Rec.: 64/2012 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilariño López. Fecha: 31/05/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 365/2012 - Num. Rec.: 635/2011 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 30/05/2012.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 290/2012 - Num. Rec.: 507/2011 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 30/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 606/2012 - Num. Rec.: 974/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 29/05/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 261/2012 - Num. Rec.: 391/2011 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilariño López. Fecha: 28/05/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 264/2012 - Num. Rec.: 227/2012 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 28/05/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 357/2012 - Num. Rec.: 511/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 25/05/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 270/2012 - Num. Rec.: 4/2012 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 25/05/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 293/2012 - Num. Rec.: 195/2012 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 24/05/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 264/2012 - Num. Rec.: 616/2011 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 24/05/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 336/2012 - Num. Rec.: 487/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 22/05/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 214/2012 - Num. Rec.: 102/2012 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 22/05/2012.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 238/2012 - Num. Rec.: 376/2011 - Ponente: Juan Manuel de los Ríos Sánchez. Fecha: 22/05/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2012 - Num. Rec.: 183/2012 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 22/05/2012.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2012 - Num. Rec.: 63/2012 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 22/05/2012.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 230/2012 - Num. Rec.: 656/2011 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 18/05/2012
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 222/2012 - Num. Rec.: 271/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 17/05/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 222/2012 - Num. Rec.: 58/2012 - Ponente: Agustín Azparren Lucas... Fecha: 16/05/2012.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 151/2012 - Num. Rec.: 3094/2012 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 15/05/2012.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2012 - Num. Rec.: 291/2011 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 14/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 338/2012 - Num. Rec.: 339/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 11/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 347/2012 - Num. Rec.: 1329/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 11/05/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 208/2012 - Num. Rec.: 346/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 10/05/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 317/2012 - Num. Rec.: 314/2012 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 09/05/2012.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 301/2012 - Num. Rec.: 385/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 08/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 325/2012 - Num. Rec.: 1152/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 08/05/2012.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 139/2012 - Num. Rec.: 3136/2012 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 08/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 527/2012 - Num. Rec.: 1174/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 07/05/2012.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 209/2012 - Num. Rec.: 474/2011 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 07/05/2012. Fecha: 04/05/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 489/2012 - Num. Rec.: 1381/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 04/05/2012.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2012 - Num. Rec.: 520/2011 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 04/05/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 103/2012 - Num. Rec.: 328/2011 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 03/05/2012.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 227/2012 - Num. Rec.: 759/2011 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 02/05/2012 | Fallo: Desestima | REC: 759/2011 | RES: 227/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 213/2012 - Num. Rec.: 659/2010 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 30/04/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 202/2012 - Num. Rec.: 27/2012 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 27/04/2012.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 88/2012 - Num. Rec.: 34/2011 - Ponente: Manuel Espinosa Labella. Fecha: 27/04/2012.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2012 - Num. Rec.: 44/2012 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 26/04/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 439/2012 - Num. Rec.: 845/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 25/04/2012.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2012 - Num. Rec.: 510/2011 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 23/04/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 291/2012 - Num. Rec.: 1216/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 20/04/2012.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2012 - Num. Rec.: 97/2012 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 20/04/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 405/2012 - Num. Rec.: 1109/2011 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 18/04/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 399/2012 - Num. Rec.: 746/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 16/04/2012.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 216/2012 - Num. Rec.: 771/2011 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 13/04/2012.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 78/2012 - Num. Rec.: 81/2011 - Ponente: José Luis Castellano Trevilla. Fecha: 12/04/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 243/2012 - Num. Rec.: 315/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 12/04/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 240/2012 - Num. Rec.: 299/2011 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 11/04/2012.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 191/2012 - Num. Rec.: 416/2011 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 09/04/2012.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2012 - Num. Rec.: 525/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 09/04/2012.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 167/2012 - Num. Rec.: 159/2012 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 03/04/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 127/2012 - Num. Rec.: 603/2011 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 02/04/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 128/2012 - Num. Rec.: 49/2012 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 02/04/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 123/2012 - Num. Rec.: 648/2011 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 02/04/2012.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2012 - Num. Rec.: 599/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 30/03/2012.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 153/2012 - Num. Rec.: 536/2011 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 30/03/2012.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 190/2012 - Num. Rec.: 596/2011 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 30/03/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 138/2012 - Num. Rec.: 561/2011 - Ponente: Carlos Fuentes Candela. Fecha: 28/03/2012.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 137/2012 - Num. Rec.: 146/2012 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 27/03/2012.
- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 199/2012 - Num. Rec.: 760/2011 - Ponente: Bruno Arias Berrioategortua. Fecha: 27/03/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 117/2012 - Num. Rec.: 496/2011 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 23/03/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2012 - Num. Rec.: 426/2011 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 23/03/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 155/2012 - Num. Rec.: 702/2011 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 23/03/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 133/2012 - Num. Rec.: 536/2011 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 23/03/2012.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 75/2012 - Num. Rec.: 464/2011 - Ponente: María Pilar Astray Chacón... Fecha: 23/03/2012.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2012 - Num. Rec.: 167/2011 - Ponente: Ernesto Julio Vitale Vidal. Fecha: 22/03/2012.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 45/2012 - Num. Rec.: 203/2011 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 22/03/2012.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2012 - Num. Rec.: 225/2011 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 21/03/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 308/2012 - Num. Rec.: 920/2011 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 21/03/2012.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 60/2012 - Num. Rec.: 310/2011 - Ponente: José Luis Castellano Trevilla. Fecha: 20/03/2012.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 158/2012 - Num. Rec.: 883/2011 - Ponente: Vicente Ataulfo Ballesta Bernal. Fecha: 20/03/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2012 - Num. Rec.: 414/2011 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 20/03/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 43/2012 - Num. Rec.: 42/2012 - Ponente: Jesús Fernández Entralgo. Fecha: 19/03/2012 | Fallo: Desestima | REC: 42/2012 | RES: 43/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 41/2012 - Num. Rec.: 12/2012 - Ponente: Jesús Fernández Entralgo. Fecha: 16/03/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 205/2012 - Num. Rec.: 543/2011 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 16/03/2012.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 64/2012 - Num. Rec.: 64/2011 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 16/03/2012.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 138/2012 - Num. Rec.: 426/2011 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 16/03/2012.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 61/2012 - Num. Rec.: 422/2011 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 15/03/2012.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 184/2012 - Num. Rec.: 997/2011 - Ponente: María de los Reyes Castresana García.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 140/2012 - Num. Rec.: 623/2011 - Ponente: Andrés Montalbán Avilés. Fecha: 13/03/2012.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 158/2012 - Num. Rec.: 191/2011 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 12/03/2012.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 52/2012 - Num. Rec.: 263/2011 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 09/03/2012.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 91/2012 - Num. Rec.: 8962/2011 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 09/03/2012.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 120/2012 - Num. Rec.: 808/2011 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 08/03/2012.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 111/2012 - Num. Rec.: 734/2011 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 07/03/2012.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 44/2012 - Num. Rec.: 14/2012 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 06/03/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 110/2012 - Num. Rec.: 483/2011 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 05/03/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 175/2012 - Num. Rec.: 1001/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 02/03/2012.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 55/2012 - Num. Rec.: 29/2012 - Ponente: José María Morillo-Velarde Pérez. Fecha: 29/02/2012.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 96/2012 - Num. Rec.: 330/2011 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 29/02/2012.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 101/2012 - Num. Rec.: 656/2011 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 28/02/2012.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2012 - Num. Rec.: 1/2012 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 28/02/2012.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 91/2012 - Num. Rec.: 22/2012 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 28/02/2012.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2012 - Num. Rec.: 506/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 28/02/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 82/2012 - Num. Rec.: 476/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 27/02/2012.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 38/2012 - Num. Rec.: 231/2011 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 27/02/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 70/2012 - Num. Rec.: 13/2012 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 24/02/2012.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 80/2012 - Num. Rec.: 446/2011 - Ponente: Fernando Paumard Collado. Fecha: 22/02/2012.
- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 132/2012 - Num. Rec.: 75/2012 - Ponente: José Rafael Pedrosa López. Fecha: 22/02/2012.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 45/2012 - Num. Rec.: 15/2012 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 17/02/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 67/2012 - Num. Rec.: 639/2011 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 17/02/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2012 - Num. Rec.: 28/2012 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 17/02/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 148/2012 - Num. Rec.: 829/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 17/02/2012.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 70/2012 - Num. Rec.: 478/2011 - Ponente: Carlos Jesús Carapeto y Márquez de Prado. Fecha: 16/02/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 69/2012 - Num. Rec.: 558/2011 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 16/02/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 70/2012 - Num. Rec.: 442/2011 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 16/02/2012.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2012 - Num. Rec.: 707/2011 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 16/02/2012. Fecha: 15/02/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2012 - Num. Rec.: 502/2011 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 15/02/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 121/2012 - Num. Rec.: 944/2011 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 13/02/2012. Fecha: 10/02/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 54/2012 - Num. Rec.: 506/2011 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilariño López. Fecha: 10/02/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 58/2012 - Num. Rec.: 512/2011 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 10/02/2012.
- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 24/2012 - Num. Rec.: 42/2012 - Ponente: Andrés Palomo del Arco. Fecha: 10/02/2012.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2012 - Num. Rec.: 398/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 09/02/2012.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2012 - Num. Rec.: 858/2011 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 09/02/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 53/2012 - Num. Rec.: 498/2011 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 09/02/2012.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 71/2012 - Num. Rec.: 395/2011 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 07/02/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 109/2012 - Num. Rec.: 812/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 07/02/2012.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 61/2012 - Num. Rec.: 458/2011 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 07/02/2012.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 57/2012 - Num. Rec.: 636/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 07/02/2012.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 52/2012 - Num. Rec.: 829/2011 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez... Fecha: 06/02/2012.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 36/2012 - Num. Rec.: 462/2011 - Ponente: Miguel Ángel Larrosa Amante. Fecha: 02/02/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 94/2012 - Num. Rec.: 566/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 01/02/2012.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2012 - Num. Rec.: 371/2011 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 01/02/2012.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 39/2012 - Num. Rec.: 303/2011 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 01/02/2012.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 22/2012 - Num. Rec.: 206/2011 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 31/01/2012.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 30/2012 - Num. Rec.: 471/2011 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 30/01/2012.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 39/2012 - Num. Rec.: 207/2011 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 26/01/2012.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 39/2012 - Num. Rec.: 536/2011 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 26/01/2012.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 38/2012 - Num. Rec.: 637/2011 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 24/01/2012.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 29/2012 - Num. Rec.: 662/2011 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 24/01/2012.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 31/2012 - Num. Rec.: 326/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 24/01/2012.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 44/2012 - Num. Rec.: 775/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 20/01/2012.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2012 - Num. Rec.: 189/2011 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 19/01/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 30/2012 - Num. Rec.: 796/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 17/01/2012.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 29/2012 - Num. Rec.: 766/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 17/01/2012.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 15/2012 - Num. Rec.: 124/2011 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 16/01/2012.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 14/2012 - Num. Rec.: 369/2011 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 13/01/2012.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 8/2012 - Num. Rec.: 504/2011 - Ponente: Rafael Estévez Benito. Fecha: 11/01/2012.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2012 - Num. Rec.: 669/2011 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 10/01/2012.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 7/2012 - Num. Rec.: 312/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 10/01/2012.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 8/2012 - Num. Rec.: 228/2011 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 09/01/2012.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2012 - Num. Rec.: 100/2011 - Ponente: Eloísa Gómez Santana. Fecha: 04/01/2012.

- AÑO 2.011.-

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 500/2011 - Num. Rec.: 570/2011 - Ponente: Manuel García Prada. Fecha: 30/12/2011.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 436/2011 - Num. Rec.: 555/2010 - Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda. Fecha: 30/12/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 881/2011 - Num. Rec.: 80/2011 - Ponente: Carmen Neira Vázquez. Fecha: 29/12/2011.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 698/2011 - Num. Rec.: 329/2011 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 28/12/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 654/2011 - Num. Rec.: 769/2011 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 22/12/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 660/2011 - Num. Rec.: 543/2011 - Ponente: Ivana María Larrosa Ibáñez. Fecha: 20/12/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 592/2011 - Num. Rec.: 488/2011 - Ponente: Carlos Ercilla. Fecha: 19/12/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 397/2011 - Num. Rec.: 353/2011 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 16/12/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 713/2011 - Num. Rec.: 92/2011 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 13/12/2011.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 381/2011 - Num. Rec.: 435/2011 - Ponente: Carlos Jesús Carapeto y Márquez de Prado. Fecha: 09/12/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 618/2011 - Num. Rec.: 527/2011 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 02/12/2011.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 616/2011 - Num. Rec.: 752/2011 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 01/12/2011.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 434/2011 - Num. Rec.: 329/2011 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 01/12/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 121/2011 - Num. Rec.: 101/2011 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 30/11/2011
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 508/2011 - Num. Rec.: 662/2011 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 30/11/2011.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 605/2011 - Num. Rec.: 454/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 29/11/2011.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 522/2011 - Num. Rec.: 202/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 29/11/2011.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 566/2011 - Num. Rec.: 575/2011 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 28/11/2011.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2011 - Num. Rec.: 436/2011 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 28/11/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 600/2011 - Num. Rec.: 509/2011 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 25/11/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 683/2011 - Num. Rec.: 263/2011 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 24/11/2011.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 455/2011 - Num. Rec.: 323/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 24/11/2011.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 234/2011 - Num. Rec.: 240/2011 - Ponente: Manuel Eduardo Regalado Valdés. Fecha: 22/11/2011.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2011 - Num. Rec.: 442/2011 - Ponente: Fernando Solsona Abad. Fecha: 22/11/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 776/2011 - Num. Rec.: 602/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 22/11/2011.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2011 - Num. Rec.: 230/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 22/11/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 119/2011 - Num. Rec.: 73/2011 - Ponente: José Luis Antón Blanco. Fecha: 21/11/2011.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 448/2011 - Num. Rec.: 228/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 18/11/2011.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 413/2011 - Num. Rec.: 579/2011 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 404/2011 - Num. Rec.: 424/2011 - Ponente: José Manuel Barral Díaz. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 446/2011 - Num. Rec.: 267/2011 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 503/2011 - Num. Rec.: 311/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 502/2011 - Num. Rec.: 304/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 522/2011 - Num. Rec.: 454/2011 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 18/11/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1186/2011 - Num. Rec.: 474/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 17/11/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1168/2011 - Num. Rec.: 549/2011 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 17/11/2011.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 616/2011 - Num. Rec.: 439/2011 - Ponente: Javier de la Hoz de la Escalera. Fecha: 15/11/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 379/2011 - Num. Rec.: 193/2011 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 15/11/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 577/2011 - Num. Rec.: 486/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 15/11/2011.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 397/2011 - Num. Rec.: 253/2011 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 14/11/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 749/2011 - Num. Rec.: 204/2011 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 14/11/2011.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 361/2011 - Num. Rec.: 2304/2010 - Ponente: Ane Maite Loyola Iriondo. Fecha: 14/11/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 876/2011 - Num. Rec.: 4028/2011 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 14/11/2011.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 366/2011 - Num. Rec.: 429/2011 - Ponente: Alfonso Santisteban Ruíz. Fecha: 11/11/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 747/2011 - Num. Rec.: 576/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 11/11/2011.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 544/2011 - Num. Rec.: 610/2011 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 11/11/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 407/2011 - Num. Rec.: 478/2011 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 10/11/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 409/2011 - Num. Rec.: 494/2011 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 10/11/2011.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 450/2011 - Num. Rec.: 547/2011 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 10/11/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1137/2011 - Num. Rec.: 515/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/11/2011.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 401/2011 - Num. Rec.: 383/2011 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 09/11/2011.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 325/2011 - Num. Rec.: 218/2011 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 07/11/2011.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 315/2011 - Num. Rec.: 3290/2011 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 04/11/2011.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 431/2011 - Num. Rec.: 401/2011 - Ponente: Antonio María González Florián. Fecha: 04/11/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 604/2011 - Num. Rec.: 78/2011 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 03/11/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 627/2011 - Num. Rec.: 865/2010 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 03/11/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 628/2011 - Num. Rec.: 1048/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas. Fecha: 03/11/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 109/2011 - Num. Rec.: 64/2011 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 02/11/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 623/2011 - Num. Rec.: 941/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 02/11/2011.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 276/2011 - Num. Rec.: 91/2011 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 02/11/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 385/2011 - Num. Rec.: 403/2011 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 27/10/2011.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 510/2011 - Num. Rec.: 564/2011 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 27/10/2011.
- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 236/2011 - Num. Rec.: 299/2011 - Ponente: María Felisa Herrero Pinilla. Fecha: 26/10/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1078/2011 - Num. Rec.: 1276/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 26/10/2011.-
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 570/2011 - Num. Rec.: 1007/2010 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 26/10/2011.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 552/2011 - Num. Rec.: 196/2011 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 26/10/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 611/2011 - Num. Rec.: 991/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo- Fecha: 25/10/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 536/2011 - Num. Rec.: 340/2011 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 24/10/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 686/2011 - Num. Rec.: 432/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 21/10/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 406/2011 - Num. Rec.: 273/2011 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 20/10/2011.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 296/2011 - Num. Rec.: 416/2011 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 20/10/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 594/2011 - Num. Rec.: 894/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 18/10/2011.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 377/2011 - Num. Rec.: 2/2011 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 14/10/2011.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 447/2011 - Num. Rec.: 252/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 14/10/2011.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 336/2011 - Num. Rec.: 387/2011 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 13/10/2011.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 188/2011 - Num. Rec.: 160/2011 - Ponente: José Aurelio Navarro Guillén. Fecha: 13/10/2011.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 507/2011 - Num. Rec.: 351/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 13/10/2011.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2011 - Num. Rec.: 119/2011 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 13/10/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 394/2011 - Num. Rec.: 138/2011 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 13/10/2011.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 510/2011 - Num. Rec.: 5/2011 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 11/10/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 581/2011 - Num. Rec.: 959/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 11/10/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 582/2011 - Num. Rec.: 926/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 11/10/2011.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 436/2011 - Num. Rec.: 247/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 10/10/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 103/2011 - Num. Rec.: 50/2011 - Ponente: José Luis Antón Blanco. Fecha: 10/10/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 386/2011 - Num. Rec.: 385/2011 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 07/10/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 462/2011 - Num. Rec.: 237/2011 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 07/10/2011.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 414/2011 - Num. Rec.: 42/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 06/10/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 534/2011 - Num. Rec.: 145/2011 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 04/10/2011.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 237/2011 - Num. Rec.: 288/2011 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 30/09/2011.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 403/2011 - Num. Rec.: 300/2011 - Ponente: José María Jiménez Burkhardt. Fecha: 30/09/2011.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 361/2011 - Num. Rec.: 450/2011 - Ponente: Carlos María Piñol Rodríguez. Fecha: 29/09/2011.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 197/2011 - Num. Rec.: 205/2011 - Ponente: Jesús García García. Fecha: 29/09/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2011 - Num. Rec.: 73/2011 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 28/09/2011.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 253/2011 - Num. Rec.: 135/2011 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 28/09/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 446/2011 - Num. Rec.: 296/2011 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 28/09/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 410/2011 - Num. Rec.: 299/2011 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 28/09/2011.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 174/2011 - Num. Rec.: 112/2011 - Ponente: María del Carmen Martínez Sánchez. Fecha: 22/09/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 488/2011 - Num. Rec.: 459/2010 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 21/09/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 354/2011 - Num. Rec.: 405/2011 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 20/09/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 589/2011 - Num. Rec.: 211/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 20/09/2011.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 223/2011 - Num. Rec.: 62/2011 - Ponente: Gema Adoración Ocáriz Azaustre. Fecha: 19/09/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 634/2011 - Num. Rec.: 485/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 19/09/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 332/2011 - Num. Rec.: 217/2010 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 15/09/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2011 - Num. Rec.: 170/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 15/09/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 898/2011 - Num. Rec.: 315/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 15/09/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 872/2011 - Num. Rec.: 115/2011 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 13/09/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 292/2011 - Num. Rec.: 534/2010 - Ponente: Miguel Ángel Aguiló Monjo. Fecha: 13/09/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 454/2011 - Num. Rec.: 859/2010 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 06/09/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 450/2011 - Num. Rec.: 3/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 06/09/2011.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 210/2011 - Num. Rec.: 63/2011 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 29/07/2011.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 209/2011 - Num. Rec.: 92/2011 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 29/07/2011.
- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 470/2011 - Num. Rec.: 421/2011 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 29/07/2011.
- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 43/2011 - Num. Rec.: 60/2011 - Ponente: José Luis Martín Tapia. Fecha: 28/07/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 338/2011 - Num. Rec.: 184/2011 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 28/07/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 333/2011 - Num. Rec.: 273/2011 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilarinho López. Fecha: 28/07/2011.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2011 - Num. Rec.: 532/2011 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 27/07/2011.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 331/2011 - Num. Rec.: 170/2011 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 26/07/2011.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2011 - Num. Rec.: 377/2011 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 22/07/2011.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 334/2011 - Num. Rec.: 26/2011 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 22/07/2011.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 315/2011 - Num. Rec.: 375/2011 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 21/07/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 486/2011 - Num. Rec.: 727/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. | Fecha: 20/07/2011.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 328/2011 - Num. Rec.: 379/2011 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 20/07/2011.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 181/2011 - Num. Rec.: 289/2010 - Ponente: Luis Brualla Santos-Funcia. Fecha: 19/07/2011.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 379/2011 - Num. Rec.: 334/2011 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 19/07/2011.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 409/2011 - Num. Rec.: 418/2011 - Ponente: Luís Carlos Rey Sanfíz. Fecha: 19/07/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 400/2011 - Num. Rec.: 90/2011 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 18/07/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 412/2011 - Num. Rec.: 1026/2010 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 15/07/2011.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 204/2011 - Num. Rec.: 201/2011 - Ponente: Alfonso Moreno Cardoso. Fecha: 14/07/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 628/2011 - Num. Rec.: 4061/2011 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 08/07/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 321/2011 - Num. Rec.: 35/2011 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 08/07/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 287/2011 - Num. Rec.: 341/2011 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 08/07/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 332/2011 - Num. Rec.: 61/2011 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 08/07/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 389/2011 - Num. Rec.: 382/2010 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 08/07/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 527/2011 - Num. Rec.: 133/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 07/07/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 525/2011 - Num. Rec.: 216/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 07/07/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 385/2011 - Num. Rec.: 262/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 05/07/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 489/2011 - Num. Rec.: 331/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 05/07/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 351/2011 - Num. Rec.: 287/2011 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 04/07/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 306/2011 - Num. Rec.: 773/2010 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 01/07/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 501/2011 - Num. Rec.: 540/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 29/06/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 368/2011 - Num. Rec.: 973/2010 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 29/06/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 468/2011 - Num. Rec.: 95/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 28/06/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 409/2011 - Num. Rec.: 675/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 28/06/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 414/2011 - Num. Rec.: 665/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 28/06/2011.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 32/2011 - Num. Rec.: 20/2011 - Ponente: Mariano Santos Penalver. Fecha: 27/06/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 462/2011 - Num. Rec.: 907/2010 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 27/06/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2011 - Num. Rec.: 172/2011 - Ponente: María Pilar Fernández Alonso. Fecha: 27/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 478/2011 - Num. Rec.: 334/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 22/06/2011.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 200/2011 - Num. Rec.: 130/2011 - Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. Fecha: 22/06/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 258/2011 - Num. Rec.: 252/2011 - Ponente: Francisco Javier Romero Acosta. Fecha: 21/06/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 451/2011 - Num. Rec.: 11/2011 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 21/06/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 402/2011 - Num. Rec.: 652/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 21/06/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 347/2011 - Num. Rec.: 113/2010 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 17/06/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 397/2011 - Num. Rec.: 294/2010 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 17/06/2011.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 230/2011 - Num. Rec.: 275/2011 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 17/06/2011.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2011 - Num. Rec.: 132/2011 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 17/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 183/2011 - Num. Rec.: 220/2011 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 16/06/2011.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 135/2011 - Num. Rec.: 140/2011 - Ponente: María José Rodríguez Duplá. Fecha: 16/06/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 265/2011 - Num. Rec.: 529/2010 - Ponente: María del Carmen Martelo Pérez. Fecha: 15/06/2011.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 378/2011 - Num. Rec.: 299/2011 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 15/06/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 319/2011 - Num. Rec.: 276/2011 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Esteban. Fecha: 13/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 455/2011 - Num. Rec.: 536/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 13/06/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 323/2011 - Num. Rec.: 225/2011 - Ponente: Francisco Javier Valdés Garrido. Fecha: 13/06/2011.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 162/2011 - Num. Rec.: 91/2011 - Ponente: Saturnino Regidor Martínez. Fecha: 10/06/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2011 - Num. Rec.: 280/2011 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 09/06/2011.

- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 111/2011 - Num. Rec.: 140/2011 - Ponente: María Felisa Herrero Pinilla. Fecha: 07/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 435/2011 - Num. Rec.: 520/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 06/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 170/2011 - Num. Rec.: 75/2010 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 03/06/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 662/2011 - Num. Rec.: 1335/2010 - Ponente: Francisco Javier Correas González. Fecha: 02/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 424/2011 - Num. Rec.: 451/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/06/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 425/2011 - Num. Rec.: 387/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/06/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 205/2011 - Num. Rec.: 136/2011 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 31/05/2011.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 81/2011 - Num. Rec.: 161/2010 - Ponente: José María Contreras Aparicio. Fecha: 31/05/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 325/2011 - Num. Rec.: 1084/2010 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 31/05/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 410/2011 - Num. Rec.: 309/2011 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 30/05/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 310/2011 - Num. Rec.: 1067/2010 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 27/05/2011.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 197/2011 - Num. Rec.: 2497/2010 - Ponente: Ane Maite Loyola Iriondo. Fecha: 27/05/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 404/2011 - Num. Rec.: 1351/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 27/05/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 400/2011 - Num. Rec.: 368/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 26/05/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 300/2011 - Num. Rec.: 809/2010 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 26/05/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 398/2011 - Num. Rec.: 77/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 25/05/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 277/2011 - Num. Rec.: 255/2010 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 23/05/2011.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 76/2011 - Num. Rec.: 315/2010 - Ponente: Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón. Fecha: 23/05/2011.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 146/2011 - Num. Rec.: 39/2011 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 23/05/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 382/2011 - Num. Rec.: 1305/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 20/05/2011.

- Audiencia Provincial de Soria - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2011 - Num. Rec.: 76/2011 - Ponente: José Luis Rodríguez Greciano. Fecha: 19/05/2011.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 156/2011 - Num. Rec.: 315/2010 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 18/05/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 323/2011 - Num. Rec.: 529/2010 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 17/05/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2011 - Num. Rec.: 1302/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 17/05/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 232/2011 - Num. Rec.: 156/2011 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 16/05/2011.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 361/2011 - Num. Rec.: 382/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 16/05/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 561/2011 - Num. Rec.: 1286/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 13/05/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 208/2011 - Num. Rec.: 646/2010 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 13/05/2011.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2011 - Num. Rec.: 537/2010 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 11/05/2011.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 210/2011 - Num. Rec.: 160/2011 - Ponente: José Isidro Rey Huidobro. Fecha: 11/05/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 350/2011 - Num. Rec.: 1246/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 10/05/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 252/2011 - Num. Rec.: 408/2010 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 10/05/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 346/2011 - Num. Rec.: 1262/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 10/05/2011.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 213/2011 - Num. Rec.: 776/2010 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 09/05/2011.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 129/2011 - Num. Rec.: 38/2011 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 06/05/2011.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2011 - Num. Rec.: 92/2011 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 06/05/2011.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 232/2011 - Num. Rec.: 902/2010 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 06/05/2011.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2011 - Num. Rec.: 53/2011 - Ponente: María del Carmen González Carrasco. Fecha: 03/05/2011.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 252/2011 - Num. Rec.: 54/2011 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 03/05/2011.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 115/2011 - Num. Rec.: 23/2011 - Ponente: Marina de la Cruz Muñoz Acero. Fecha: 03/05/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 62/2011 - Num. Rec.: 2/2011 - Ponente: José Luis Antón Blanco. Fecha: 03/05/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 325/2011 - Num. Rec.: 1287/2010 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 29/04/2011.

- Audiencia Provincial de Soria - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 81/2011 - Num. Rec.: 59/2011 - Ponente: María Belén Pérez-Flecha Díaz. Fecha: 29/04/2011.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 110/2011 - Num. Rec.: 72/2011 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 29/04/2011.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2011 - Num. Rec.: 267/2010 - Ponente: María del Carmen Martínez Sánchez. Fecha: 27/04/2011.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 51/2011 - Num. Rec.: 11/2011 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 27/04/2011.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 203/2011 - Num. Rec.: 491/2010 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 26/04/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 474/2011 - Num. Rec.: 1154/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 26/04/2011.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 159/2011 - Num. Rec.: 2037/2011 - Ponente: Yolanda Domeño Nieto. Fecha: 20/04/2011.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 249/2011 - Num. Rec.: 96/2011 - Ponente: Bruno Arias Berriategortua. Fecha: 18/04/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 311/2011 - Num. Rec.: 335/2011 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 15/04/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 312/2011 - Num. Rec.: 1195/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 15/04/2011.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 107/2011 - Num. Rec.: 108/2011 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 15/04/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 139/2011 - Num. Rec.: 606/2010 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 15/04/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 469/2011 - Num. Rec.: 1109/2010 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 14/04/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 286/2011 - Num. Rec.: 346/2010 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 14/04/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 203/2011 - Num. Rec.: 744/2010 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 12/04/2011.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 175/2011 - Num. Rec.: 9/2011 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 12/04/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 216/2011 - Num. Rec.: 10/2011 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 12/04/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 201/2011 - Num. Rec.: 111/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 12/04/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 302/2011 - Num. Rec.: 1166/2010 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 11/04/2011.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 264/2011 - Num. Rec.: 681/2010 - Ponente: Fernando Valdés-Solís Cecchini. Fecha: 11/04/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 115/2011 - Num. Rec.: 330/2010 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 05/04/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 191/2011 - Num. Rec.: 94/2011 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 05/04/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2011 - Num. Rec.: 539/2010 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 05/04/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2011 - Num. Rec.: 102/2011 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 05/04/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 279/2011 - Num. Rec.: 1108/2010 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 04/04/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 141/2011 - Num. Rec.: 118/2011 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 31/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2011 - Num. Rec.: 648/2010 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 31/03/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2011 - Num. Rec.: 636/2010 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 30/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 174/2011 - Num. Rec.: 164/2011 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 30/03/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 173/2011 - Num. Rec.: 160/2010 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 29/03/2011.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 253/2011 - Num. Rec.: 137/2011 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 28/03/2011.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 88/2011 - Num. Rec.: 301/2010 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 22/03/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 351/2011 - Num. Rec.: 1125/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 22/03/2011.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 90/2011 - Num. Rec.: 284/2010 - Ponente: Albert Montell García. Fecha: 22/03/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 107/2011 - Num. Rec.: 111/2011 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 21/03/2011.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2011 - Num. Rec.: 2/2011 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 18/03/2011.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 110/2011 - Num. Rec.: 671/2010 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 18/03/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 105/2011 - Num. Rec.: 443/2010 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 18/03/2011.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 149/2011 - Num. Rec.: 956/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 17/03/2011.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2011 - Num. Rec.: 867/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 16/03/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 128/2011 - Num. Rec.: 1080/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 16/03/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 136/2011 - Num. Rec.: 34/2011 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 15/03/2011.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 119/2011 - Num. Rec.: 279/2010 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 15/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 132/2011 - Num. Rec.: 564/2010 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 15/03/2011.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 122/2011 - Num. Rec.: 369/2010 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 15/03/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2011 - Num. Rec.: 84/2011 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 15/03/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2011 - Num. Rec.: 283/2010 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 14/03/2011.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2011 - Num. Rec.: 54/2011 - Ponente: José Isidro Rey Huidobro. Fecha: 14/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 164/2011 - Num. Rec.: 775/2010 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 11/03/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 89/2011 - Num. Rec.: 97/2011 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 10/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 137/2011 - Num. Rec.: 735/2010 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 10/03/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 79/2011 - Num. Rec.: 612/2010 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 09/03/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 295/2011 - Num. Rec.: 958/2010 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 09/03/2011.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 116/2011 - Num. Rec.: 854/2010 - Ponente: Domingo Salvatierra Ossorio. Fecha: 09/03/2011.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 65/2011 - Num. Rec.: 559/2010 - Ponente: María Pilar Fernández Alonso. Fecha: 08/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2011 - Num. Rec.: 35/2011 - Ponente: Antonio María González Florian. Fecha: 07/03/2011.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2011 - Num. Rec.: 3261/2010 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 07/03/2011.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 111/2011 - Num. Rec.: 569/2010 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 07/03/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 86/2011 - Num. Rec.: 686/2010 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 04/03/2011.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2011 - Num. Rec.: 559/2010 - Ponente: Fernando Paumard Collado. Fecha: 02/03/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 120/2011 - Num. Rec.: 552/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 01/03/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2011 - Num. Rec.: 675/2010 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 01/03/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2011 - Num. Rec.: 4248/2010 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 25/02/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 159/2011 - Num. Rec.: 958/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 25/02/2011.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 101/2011 - Num. Rec.: 380/2010 - Ponente: Juan Antonio Jover Coy. Fecha: 24/02/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 67/2011 - Num. Rec.: 24/2011 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 23/02/2011.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 69/2011 - Num. Rec.: 618/2010 - Ponente: Dámaso Manuel Brañas Santa María. Fecha: 22/02/2011.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2011 - Num. Rec.: 283/2010 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 21/02/2011.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 47/2011 - Num. Rec.: 433/2010 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 21/02/2011.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 57/2011 - Num. Rec.: 282/2010 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 18/02/2011. Fecha: 18/02/2011.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 32/2011 - Num. Rec.: 210/2009 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 17/02/2011.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 59/2011 - Num. Rec.: 671/2010 - Ponente: Paloma Sancho Mayo. Fecha: 16/02/2011.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2011 - Num. Rec.: 24/2011 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 15/02/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 129/2011 - Num. Rec.: 842/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 15/02/2011.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 52/2011 - Num. Rec.: 224/2010 - Ponente: María Pilar Astray Chacón. Fecha: 14/02/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2011 - Num. Rec.: 634/2010 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 14/02/2011.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2011 - Num. Rec.: 181/2010 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 11/02/2011.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 44/2011 - Num. Rec.: 6756/2010 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 11/02/2011.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 54/2011 - Num. Rec.: 649/2010 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 11/02/2011.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 43/2011 - Num. Rec.: 566/2010 - Ponente: José María Jiménez Burkhardt. Fecha: 11/02/2011.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 23/2011 - Num. Rec.: 134/2010 - Ponente: Iciar Cordero Cutillas. Fecha: 11/02/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 120/2011 - Num. Rec.: 872/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 11/02/2011.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 66/2011 - Num. Rec.: 404/2010 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 10/02/2011.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 80/2011 - Num. Rec.: 975/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 10/02/2011
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 113/2011 - Num. Rec.: 1191/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 09/02/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 50/2011 - Num. Rec.: 24/2011 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 09/02/2011.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 54/2011 - Num. Rec.: 573/2009 - Ponente: Domingo Salvatierra Ossorio. Fecha: 08/02/2011.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 36/2011 - Num. Rec.: 587/2010 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 08/02/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2011 - Num. Rec.: 861/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 08/02/2011.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 45/2011 - Num. Rec.: 616/2008 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 04/02/2011.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 101/2011 - Num. Rec.: 491/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 04/02/2011.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 42/2011 - Num. Rec.: 573/2010 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 03/02/2011.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 76/2011 - Num. Rec.: 425/2010 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 03/02/2011.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil- 1 - Num. Res.: 46/2011 - Num. Rec.: 451/2010 - Ponente: Jaime Esaín Manresa. Fecha: 03/02/2011.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 43/2011 - Num. Rec.: 561/2010 - Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández. Fecha: 03/02/2011.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1- Num. Res.: 83/2011 - Num. Rec.: 911/2010 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarta. Fecha: 31/01/2011.
- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 21/2011 - Num. Rec.: 341/2010 - Ponente: María José Rodríguez Duplá. Fecha: 31/01/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 75/2011 - Num. Rec.: 845/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 28/01/2011.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 33/2011 - Num. Rec.: 776/2010 - Ponente: Francisco Carrillo Vinader. Fecha: 27/01/2011.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 23/2011 - Num. Rec.: 639/2010 - Ponente: Antonio Muñiz Díez. Fecha: 26/01/2011.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2011 - Num. Rec.: 366/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 26/01/2011.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 4/2011 - Num. Rec.: 324/2010 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 24/01/2011.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 18/2011 - Num. Rec.: 585/2010 - Ponente: Josefa Otero Seivane. Fecha: 20/01/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 13/2011 - Num. Rec.: 770/2010 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 20/01/2011.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 12/2011 - Num. Rec.: 569/2010 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 18/01/2011.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 12/2011 - Num. Rec.: 323/2010 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 17/01/2011.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 7/2011 - Num. Rec.: 307/2010 - Ponente: Saturnino Regidor Martínez. Fecha: 14/01/2011.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 11/2011 - Num. Rec.: 546/2010 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 13/01/2011.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 11/2011 - Num. Rec.: 176/2010 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 13/01/2011.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2011 - Num. Rec.: 527/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 13/01/2011.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 15/2011 - Num. Rec.: 688/2010 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 11/01/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 8/2011 - Num. Rec.: 533/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 03/01/2011.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 7/2011 - Num. Rec.: 521/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 03/01/2011.

- AÑO 2.010.-

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 519/2010 - Num. Rec.: 359/2010 - Ponente: Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 30/12/2010.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 349/2010 - Num. Rec.: 368/2010 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 27/12/2010.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 449/2010 - Num. Rec.: 548/2010 - Ponente: Fernando Ferrero Hidalgo. Fecha: 23/12/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 716/2010 - Num. Rec.: 107/2010 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 22/12/2010.
- Audiencia Provincial de Álava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 591/2010 - Num. Rec.: 402/2010 - Ponente: María Mercedes Guerrero Romeo. Fecha: 20/12/2010.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 522/2010 - Num. Rec.: 413/2010 - Ponente: María Cristina Martínez Rodríguez. Fecha: 17/12/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 521/2010 - Num. Rec.: 8/2010 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 17/12/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 660/2010 - Num. Rec.: 732/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 16/12/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 701/2010 - Num. Rec.: 69/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 14/12/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 626/2010 - Num. Rec.: 624/2010 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 13/12/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 685/2010 - Num. Rec.: 22/2010 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 13/12/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 510/2010 - Num. Rec.: 13/2010 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 13/12/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 504/2010 - Num. Rec.: 571/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 13/12/2010.
- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2010 - Num. Rec.: 331/2010 - Ponente: Andrés Palomo del Arco. Fecha: 13/12/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 406/2010 - Num. Rec.: 232/2010 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 09/12/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 482/2010 - Num. Rec.: 694/2009 - Ponente: Juan Ángel Rodríguez Cardama. Fecha: 09/12/2010.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 81/2010 - Num. Rec.: 49/2010 - Ponente: Horacio Badenes Puentes. Fecha: 03/12/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 517/2010 - Num. Rec.: 208/2010 - Ponente: Julián Pavesio Fernández. Fecha: 03/12/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 823/2010 - Num. Rec.: 709/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 03/12/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 520/2010 - Num. Rec.: 358/2010 - Ponente: Rafael Martín del Peso García. Fecha: 03/12/2010.
- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 310/2010 - Num. Rec.: 3321/2010 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 02/12/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 680/2010 - Num. Rec.: 64/2010 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 02/12/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 799/2010 - Num. Rec.: 997/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/12/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 527/2010 - Num. Rec.: 469/2010 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 01/12/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 499/2010 - Num. Rec.: 273/2010 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 01/12/2010.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 571/2010 - Num. Rec.: 497/2010 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 01/12/2010.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 449/2010 - Num. Rec.: 405/2010 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 30/11/2010.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 697/2010 - Num. Rec.: 301/2010 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 30/11/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1281/2010 - Num. Rec.: 705/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 29/11/2010.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 306/2010 - Num. Rec.: 350/2010 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 25/11/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1245/2010 - Num. Rec.: 409/2010 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 24/11/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2010 - Num. Rec.: 486/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 24/11/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 447/2010 - Num. Rec.: 479/2010 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 23/11/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 440/2010 - Num. Rec.: 171/2010 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 23/11/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 789/2010 - Num. Rec.: 655/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 23/11/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 581/2010 - Num. Rec.: 326/2010 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 22/11/2010.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 283/2010 - Num. Rec.: 288/2010 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 19/11/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 575/2010 - Num. Rec.: 415/2010 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 19/11/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 409/2010 - Num. Rec.: 280/2010 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 17/11/2010.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 604/2010 - Num. Rec.: 675/2010 - Ponente: Francisco Carrillo Vinader. Fecha: 17/11/2010.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 230/2010 - Num. Rec.: 179/2010 - Ponente: Luis Brualla Santos-Funcia. Fecha: 15/11/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 402/2010 - Num. Rec.: 101/2010 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 12/11/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 637/2010 - Num. Rec.: 1051/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 11/11/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 626/2010 - Num. Rec.: 1070/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 10/11/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 630/2010 - Num. Rec.: 970/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 10/11/2010.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 581/2010 - Num. Rec.: 512/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 09/11/2010.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2010 - Num. Rec.: 292/2010 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 05/11/2010.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 560/2010 - Num. Rec.: 639/2010 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 28/10/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 603/2010 - Num. Rec.: 983/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 28/10/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 523/2010 - Num. Rec.: 615/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 27/10/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 589/2010 - Num. Rec.: 943/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 26/10/2010.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2010 - Num. Rec.: 204/2010 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 25/10/2010.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 71/2010 - Num. Rec.: 70/2010 - Ponente: José Luis Antón Blanco. Fecha: 22/10/2010.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 482/2010 - Num. Rec.: 335/2010 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 22/10/2010.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 711/2010 - Num. Rec.: 516/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 22/10/2010.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 810/2010 - Num. Rec.: 321/2010 - Ponente: José Ángel Odriozola Fernández. Fecha: 21/10/2010.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1096/2010 - Num. Rec.: 254/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 14/10/2010.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 529/2010 - Num. Rec.: 544/2010 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 14/10/2010.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 403/2010 - Num. Rec.: 432/2010 - Ponente: Encarnación Caturla Juan. Fecha: 14/10/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 514/2010 - Num. Rec.: 886/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 14/10/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 486/2010 - Num. Rec.: 1115/2009 - Ponente: Myriam Sambola Cabrer. Fecha: 13/10/2010.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 657/2010 - Num. Rec.: 754/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 13/10/2010.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 455/2010 - Num. Rec.: 464/2010 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 08/10/2010.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 651/2010 - Num. Rec.: 758/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 07/10/2010.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 379/2010 - Num. Rec.: 395/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 07/10/2010.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 742/2010 - Num. Rec.: 423/2010 - Ponente: Ignacio Olaso Azpíroz. Fecha: 01/10/2010

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 162/2010 - Num. Rec.: 45/2010 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 01/10/2010

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 624/2010 - Num. Rec.: 479/2010 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 30/09/2010.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 159/2010 - Num. Rec.: 331/2009 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 30/09/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 381/2010 - Num. Rec.: 686/2009 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 29/09/2010.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 357/2010 - Num. Rec.: 256/2010 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 29/09/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 546/2010 - Num. Rec.: 840/2009 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 28/09/2010.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 234/2010 - Num. Rec.: 218/2010 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 24/09/2010.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 619/2010 - Num. Rec.: 4116/2010 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 24/09/2010.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 218/2010 - Num. Rec.: 241/2010 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 23/09/2010.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 545/2010 - Num. Rec.: 310/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 23/09/2010.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 333/2010 - Num. Rec.: 430/2010 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 22/09/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 531/2010 - Num. Rec.: 879/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 21/09/2010.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 965/2010 - Num. Rec.: 1315/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 21/09/2010.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 221/2010 - Num. Rec.: 212/2010 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 17/09/2010.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 441/2010 - Num. Rec.: 512/2010 - Ponente: Jacinto José Pérez Benítez. Fecha: 15/09/2010.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 371/2010 - Num. Rec.: 282/2010 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 13/09/2010.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 375/2010 - Num. Rec.: 255/2010 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 07/09/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 513/2010 - Num. Rec.: 487/2009 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquiús. Fecha: 06/09/2010.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 316/2010 - Num. Rec.: 112/2010 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 01/09/2010.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 133/2010 - Num. Rec.: 270/2009 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 16/08/2010.
- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 205/2010 - Num. Rec.: 171/2010 - Ponente: María Francisca Caridad Juárez Vasallo. Fecha: 30/07/2010.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 330/2010 - Num. Rec.: 261/2010 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 29/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 535/2010 - Num. Rec.: 227/2010 - Ponente: Ana Delia Muñoz Jiménez. Fecha: 27/07/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 355/2010 - Num. Rec.: 68/2010 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 26/07/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 289/2010 - Num. Rec.: 296/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 26/07/2010.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 151/2010 - Num. Rec.: 144/2010 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 23/07/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2010 - Num. Rec.: 333/2010 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 23/07/2010.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 415/2010 - Num. Rec.: 381/2010 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 22/07/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2010 - Num. Rec.: 91/2010 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 22/07/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 354/2010 - Num. Rec.: 330/2010 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 21/07/2010.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 339/2010 - Num. Rec.: 168/2010 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 21/07/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 304/2010 - Num. Rec.: 703/2009 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 20/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 514/2010 - Num. Rec.: 274/2010 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 20/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 501/2010 - Num. Rec.: 401/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 19/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 492/2010 - Num. Rec.: 207/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 15/07/2010.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 406/2010 - Num. Rec.: 300/2010 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 15/07/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2010 - Num. Rec.: 610/2009 - Ponente: Juan Ángel Rodríguez Cardama. Fecha: 14/07/2010.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2010 - Num. Rec.: 148/2010 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 13/07/2010.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 50/2010 - Num. Rec.: 15/2010 - Ponente: María Victoria Petit Lavall. Fecha: 12/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 210/2010 - Num. Rec.: 250/2010 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 09/07/2010.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 213/2010 - Num. Rec.: 198/2010 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 09/07/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2010 - Num. Rec.: 315/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 08/07/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 391/2010 - Num. Rec.: 279/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 08/07/2010.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2010 - Num. Rec.: 35/2010 - Ponente: María Victoria Petit Lavall. Fecha: 07/07/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 440/2010 - Num. Rec.: 767/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 07/07/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 506/2010 - Num. Rec.: 221/2010 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 06/07/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 305/2010 - Num. Rec.: 102/2010 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 05/07/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 315/2010 - Num. Rec.: 49/2010 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 05/07/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 798/2010 - Num. Rec.: 136/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 01/07/2010.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 292/2010 - Num. Rec.: 6661/2009 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 30/06/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 435/2010 - Num. Rec.: 56/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 30/06/2010.
- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 548/2010 - Num. Rec.: 131/2010 - Ponente: José Ángel Odriozola Fernández. Fecha: 30/06/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 375/2010 - Num. Rec.: 152/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 30/06/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 275/2010 - Num. Rec.: 227/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 29/06/2010.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2010 - Num. Rec.: 167/2010 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 29/06/2010.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 249/2010 - Num. Rec.: 231/2010 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 28/06/2010.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 333/2010 - Num. Rec.: 248/2010 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 25/06/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 764/2010 - Num. Rec.: 214/2010 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 24/06/2010.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2010 - Num. Rec.: 144/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 22/06/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 449/2010 - Num. Rec.: 126/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 18/06/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 403/2010 - Num. Rec.: 431/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 17/06/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2010 - Num. Rec.: 281/2010 - Ponente: Juan Francisco bote Saavedra. Fecha: 17/06/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 224/2010 - Num. Rec.: 238/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 16/06/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 228/2010 - Num. Rec.: 256/2010 - Ponente: Antonio Muñiz Díez. Fecha: 16/06/2010.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2010 - Num. Rec.: 29/2010 - Ponente: Ricardo Moreno García. Fecha: 15/06/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 274/2010 - Num. Rec.: 778/2009 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 14/06/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 222/2010 - Num. Rec.: 274/2010 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 11/06/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 247/2010 - Num. Rec.: 241/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 11/06/2010.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 309/2010 - Num. Rec.: 487/2009 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 10/06/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 246/2010 - Num. Rec.: 268/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 10/06/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 378/2010 - Num. Rec.: 322/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 09/06/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 318/2010 - Num. Rec.: 94/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 09/06/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 235/2010 - Num. Rec.: 277/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 07/06/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 235/2010 - Num. Rec.: 633/2009 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilarinho López. Fecha: 07/06/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2010 - Num. Rec.: 244/2010 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 04/06/2010.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 352/2010 - Num. Rec.: 84/2010 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 04/06/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 661/2010 - Num. Rec.: 171/2010 - Ponente: María del Rosario Hernández. Fecha: 04/06/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 305/2010 - Num. Rec.: 62/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 01/06/2010.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2010 - Num. Rec.: 90/2010 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 31/05/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 255/2010 - Num. Rec.: 12/2010 - Ponente: María del Carmen Martelo Pérez. Fecha: 31/05/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 193/2010 - Num. Rec.: 208/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 28/05/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 631/2010 - Num. Rec.: 1206/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 26/05/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 389/2010 - Num. Rec.: 45/2010 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 25/05/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 253/2010 - Num. Rec.: 182/2010 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 20/05/2010.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 224/2010 - Num. Rec.: 30/2010 - Ponente: Alfonso Santisteban Ruíz. Fecha: 20/05/2010.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 287/2010 - Num. Rec.: 90/2010 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 20/05/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 595/2010 - Num. Rec.: 31/2010 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 19/05/2010.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2010 - Num. Rec.: 118/2010 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 18/05/2010.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 267/2010 - Num. Rec.: 919/2009 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 18/05/2010.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 94/2010 - Num. Rec.: 94/2010 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 17/05/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 242/2010 - Num. Rec.: 160/2010 - Ponente: Alfonso Suárez Acevedo. Fecha: 14/05/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 181/2010 - Num. Rec.: 538/2009 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 14/05/2010.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2010 - Num. Rec.: 122/2010 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 14/05/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 306/2010 - Num. Rec.: 158/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 13/05/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 202/2010 - Num. Rec.: 516/2009 - Ponente: María del Carmen Antonia Vilariño López. Fecha: 13/05/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 167/2010 - Num. Rec.: 528/2009 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 12/05/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 300/2010 - Num. Rec.: 609/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 11/05/2010.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 177/2010 - Num. Rec.: 668/2009 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 10/05/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 264/2010 - Num. Rec.: 122/2010 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 07/05/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 546/2010 - Num. Rec.: 70/2010 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 06/05/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 185/2010 - Num. Rec.: 683/2009 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Fernández del Viso Blanco. Fecha: 05/05/2010.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 167/2010 - Num. Rec.: 586/2009 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 04/05/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 213/2010 - Num. Rec.: 74/2010 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 30/04/2010.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2010 - Num. Rec.: 127/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 30/04/2010.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 147/2010 - Num. Rec.: 152/2010 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 29/04/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 37/2010 - Num. Rec.: 373/2008 - Ponente: Jesús Ángel Santos Fernández. Fecha: 29/04/2010.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 55/2010 - Num. Rec.: 110/2009 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 29/04/2010.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 127/2010 - Num. Rec.: 128/2010 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 28/04/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 288/2010 - Num. Rec.: 1256/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 27/04/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 245/2010 - Num. Rec.: 42/2010 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 26/04/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 222/2010 - Num. Rec.: 400/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 26/04/2010.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 178/2010 - Num. Rec.: 535/2009 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 22/04/2010.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 80/2010 - Num. Rec.: 28/2010 - Ponente: María del Carmen Pazos Moncada. Fecha: 22/04/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 475/2010 - Num. Rec.: 1221/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 21/04/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2010 - Num. Rec.: 492/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 21/04/2010.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2010 - Num. Rec.: 178/2009 - Ponente: Andrés Manuel Encinas Bernardo. Fecha: 16/04/2010.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 154/2010 - Num. Rec.: 179/2010 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 15/04/2010.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2010 - Num. Rec.: 501/2009 - Ponente: Ricardo Moreno García. Fecha: 13/04/2010.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 145/2010 - Num. Rec.: 138/2010 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 12/04/2010.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 137/2010 - Num. Rec.: 248/2009 - Ponente: Eugenio Santiago. Fecha: 12/04/2010.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 86/2010 - Num. Rec.: 68/2010 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 12/04/2010.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2010 - Num. Rec.: 1159/2009 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 08/04/2010.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 21/2010 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 31/03/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2010 - Num. Rec.: 643/2009 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 30/03/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2010 - Num. Rec.: 472/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 24/03/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 86/2010 - Num. Rec.: 422/2009 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 22/03/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 80/2010 - Num. Rec.: 336/2009 - Ponente: Juan Cámara Ruiz. Fecha: 18/03/2010.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2010 - Num. Rec.: 1126/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 16/03/2010.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2010 - Num. Rec.: 44/2010 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 16/03/2010.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 97/2010 - Num. Rec.: 494/2009 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 15/03/2010.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 150/2010 - Num. Rec.: 461/2009 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 15/03/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 149/2010 - Num. Rec.: 770/2009 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 12/03/2010.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 109/2010 - Num. Rec.: 757/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 10/03/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 104/2010 - Num. Rec.: 654/2009 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 09/03/2010.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 79/2010 - Num. Rec.: 558/2009 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 09/03/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2010 - Num. Rec.: 1056/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 05/03/2010.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 36/2010 - Num. Rec.: 405/2009 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 04/03/2010.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2010 - Num. Rec.: 107/2010 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 04/03/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2010 - Num. Rec.: 344/2009 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 01/03/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 58/2010 - Num. Rec.: 561/2009 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 26/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2010 - Num. Rec.: 772/2009 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 26/02/2010.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 90/2010 - Num. Rec.: 589/2009 - Ponente: María Sara Uceda Sales. Fecha: 19/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 109/2010 - Num. Rec.: 1027/2009 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 19/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 105/2010 - Num. Rec.: 271/2009 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 18/02/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 111/2010 - Num. Rec.: 1162/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 18/02/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 71/2010 - Num. Rec.: 26/2010 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 17/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 101/2010 - Num. Rec.: 251/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 17/02/2010.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 28/2010 - Num. Rec.: 288/2009 - Ponente: Isabel Serrano Frías. Fecha: 16/02/2010.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 81/2010 - Num. Rec.: 448/2009 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 16/02/2010.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2010 - Num. Rec.: 616/2009 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 16/02/2010.
- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 23/2010 - Num. Rec.: 403/2009 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 15/02/2010.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 41/2010 - Num. Rec.: 6539/2009 - Ponente: Carlos María Piñol Rodríguez. Fecha: 12/02/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 89/2010 - Num. Rec.: 1141/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 11/02/2010.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2010 - Num. Rec.: 502/2009 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 11/02/2010.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2010 - Num. Rec.: 720/2009 - Ponente: Carlos Jesús Carapeto y Márquez de Prado. Fecha: 08/02/2010.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 43/2010 - Num. Rec.: 347/2009 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 08/02/2010.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 37/2010 - Num. Rec.: 527/2009 - Ponente: María del Carmen Araujo García. Fecha: 08/02/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2010 - Num. Rec.: 1234/2008 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 08/02/2010.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 34/2010 - Num. Rec.: 14/2010 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 05/02/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 45/2010 - Num. Rec.: 362/2009 - Ponente: José Ramón Sánchez Herrero. Fecha: 05/02/2010.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 75/2010 - Num. Rec.: 1099/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 04/02/2010.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 147/2010 - Num. Rec.: 1010/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 04/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 61/2010 - Num. Rec.: 130/2009 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 04/02/2010.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2010 - Num. Rec.: 481/2009 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 04/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 51/2010 - Num. Rec.: 237/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 02/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 53/2010 - Num. Rec.: 356/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 02/02/2010.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 33/2010 - Num. Rec.: 706/2009 - Ponente: Fernando Paumard Collado. Fecha: 01/02/2010.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 37/2010 - Num. Rec.: 705/2009 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 01/02/2010.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 38/2010 - Num. Rec.: 572/2009 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 01/02/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 32/2010 - Num. Rec.: 72/2009 - Ponente: Aurora Figueras Izquierdo. Fecha: 27/01/2010.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 26/2010 - Num. Rec.: 426/2009 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 26/01/2010.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 29/2010 - Num. Rec.: 722/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 26/01/2010.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 21/01/2010.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Calvet Botella. Fecha: 21/01/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2010 - Num. Rec.: 481/2009 - Ponente: Julio Tasende Calvo. Fecha: 21/01/2010.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2010 - Num. Rec.: 789/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 20/01/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 20/2010 - Num. Rec.: 186/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 19/01/2010.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 25/2010 - Num. Rec.: 691/2009 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 19/01/2010.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2010 - Num. Rec.: 627/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 18/01/2010.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Juan Manuel Alfaya Ocampo. Fecha: 18/01/2010.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 6/2010 - Num. Rec.: 611/2009 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 14/01/2010.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 14/2010 - Num. Rec.: 533/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 14/01/2010.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 14/01/2010.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 12/2010 - Num. Rec.: 494/2009 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 13/01/2010.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 11/2010 - Num. Rec.: 76/2009 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 13/01/2010.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 3/2010 - Num. Rec.: 352/2009 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 08/01/2010.

-AÑO 2.009.-

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 722/2009 - Num. Rec.: 749/2009 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 30/12/2009.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 711/2009 - Num. Rec.: 862/2009 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 30/12/2009.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 468/2009 - Num. Rec.: 561/2009 - Ponente: María Isabel Soler Navarro. Fecha: 30/12/2009.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2009 - Num. Rec.: 355/2009 - Ponente: Jesús García García Fecha: 30/12/2009.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 320/2009 - Num. Rec.: 266/2009 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 23/12/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 573/2009 - Num. Rec.: 626/2009 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 21/12/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 879/2009 - Num. Rec.: 438/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 21/12/2009.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 394/2009 - Num. Rec.: 458/2009 - Ponente: María del Carmen Araujo García. Fecha: 21/12/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 636/2009 - Num. Rec.: 347/2009 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 18/12/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1287/2009 - Num. Rec.: 446/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 17/12/2009.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 17/12/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1296/2009 - Num. Rec.: 747/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 17/12/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 767/2009 - Num. Rec.: 789/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 15/12/2009.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 765/2009 - Num. Rec.: 956/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 15/12/2009.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 14/12/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 426/2009 - Num. Rec.: 388/2009 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 11/12/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 756/2009 - Num. Rec.: 775/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 11/12/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 674/2009 - Num. Rec.: 30/2009 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 10/12/2009.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Soledad Guerra Vales. Fecha: 09/12/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 606/2009 - Num. Rec.: 209/2009 - Ponente: Julián Pavesio Fernández. Fecha: 04/12/2009.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 508/2009 - Num. Rec.: 391/2009 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 04/12/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 603/2009 - Num. Rec.: 397/2009 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 03/12/2009.
- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 446/2009 - Num. Rec.: 152/2009 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda. Fecha: 03/12/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 831/2009 - Num. Rec.: 561/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 02/12/2009.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 597/2009 - Num. Rec.: 376/2009 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 30/11/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 26/11/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 383/2009 - Num. Rec.: 484/2009 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 26/11/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 713/2009 - Num. Rec.: 709/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 24/11/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 625/2009 - Num. Rec.: 650/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 24/11/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 714/2009 - Num. Rec.: 712/2009 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 24/11/2009.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 712/2009 - Num. Rec.: 703/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 23/11/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 808/2009 - Num. Rec.: 524/2009 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 23/11/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 401/2009 - Num. Rec.: 435/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 20/11/2009.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 626/2009 - Num. Rec.: 592/2009 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 20/11/2009.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 625/2009 - Num. Rec.: 653/2009 - Ponente: Juan Martínez Pérez. Fecha: 20/11/2009 | Fallo: Desestima | REC: 653/2009 | RES: 625/2009
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 398/2009 - Num. Rec.: 196/2009 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 19/11/2009 .
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1175/2009 - Num. Rec.: 527/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 18/11/2009.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 785/2009 - Num. Rec.: 589/2009 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 18/11/2009.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 17/11/2009.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 548/2009 - Num. Rec.: 42/2009 - Ponente: Ricardo Rodríguez López. Fecha: 16/11/2009.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 550/2009 - Num. Rec.: 667/2009 - Ponente: Ildfonso Quesada Padrón. Fecha: 16/11/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 390/2009 - Num. Rec.: 219/2008 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 13/11/2009.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 359/2009 - Num. Rec.: 479/2009 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 12/11/2009.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1157/2009 - Num. Rec.: 961/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 12/11/2009.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 219/2009 - Num. Rec.: 258/2009 - Ponente: Jesús García García. Fecha: 11/11/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 679/2009 - Num. Rec.: 838/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 10/11/2009.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 552/2009 - Num. Rec.: 417/2009 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 09/11/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 361/2009 - Num. Rec.: 358/2009 - Ponente: María del Pilar Robles García. Fecha: 06/11/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1125/2009 - Num. Rec.: 496/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 05/11/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Juan Manuel Alfaya Ocampo. Fecha: 05/11/2009

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 752/2009 - Num. Rec.: 828/2008 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 05/11/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 583/2009 - Num. Rec.: 26/2009 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 04/11/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1087/2009 - Num. Rec.: 518/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 02/11/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 749/2009 - Num. Rec.: 367/2009 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 02/11/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 653/2009 - Num. Rec.: 605/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 30/10/2009.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 374/2009 - Num. Rec.: 193/2009 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 29/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1080/2009 - Num. Rec.: 701/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 29/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1082/2009 - Num. Rec.: 681/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 29/10/2009.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 370/2009 - Num. Rec.: 317/2009 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 28/10/2009.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 706/2009 - Num. Rec.: 292/2009 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 27/10/2009.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 572/2009 - Num. Rec.: 545/2009 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 22/10/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 632/2009 - Num. Rec.: 726/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 21/10/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 689/2009 - Num. Rec.: 180/2009 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 20/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 629/2009 - Num. Rec.: 549/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 20/10/2009.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 686/2009 - Num. Rec.: 439/2009 - Ponente: Javier de la Hoz de la Escalera. Fecha: 20/10/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 492/2009 - Num. Rec.: 423/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 20/10/2009.

- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 191/2009 - Num. Rec.: 376/2009 - Ponente: Rafael de los Reyes Sáinz de la Maza. Fecha: 20/10/2009.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 487/2009 - Num. Rec.: 319/2009 - Ponente: Klaus Jochen Albiez Dohrmann. Fecha: 16/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1019/2009 - Num. Rec.: 1189/2008 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 16/10/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 559/2009 - Num. Rec.: 1020/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 15/10/2009.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 381/2009 - Num. Rec.: 482/2009 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 13/10/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 554/2009 - Num. Rec.: 1010/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 13/10/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 419/2009 - Num. Rec.: 273/2009 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 13/10/2009.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 240/2009 - Num. Rec.: 306/2009 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 13/10/2009.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 340/2009 - Num. Rec.: 343/2009 - Ponente: Santiago Oliver Barceló. Fecha: 13/10/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 541/2009 - Num. Rec.: 873/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 08/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 969/2009 - Num. Rec.: 296/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 07/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 965/2009 - Num. Rec.: 458/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 07/10/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 973/2009 - Num. Rec.: 720/2009 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 07/10/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 652/2009 - Num. Rec.: 167/2009 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 07/10/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 557/2009 - Num. Rec.: 215/2009 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 06/10/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 360/2009 - Num. Rec.: 401/2009 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 03/10/2009.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2009 - Num. Rec.: 138/2009 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 02/10/2009.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 400/2009 - Num. Rec.: 710/2007 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 30/09/2009.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 30/09/2009.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 396/2009 - Num. Rec.: 89/2009 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 30/09/2009.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 30/09/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 396/2009 - Num. Rec.: 459/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 29/09/2009.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 407/2009 - Num. Rec.: 206/2009 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 28/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 560/2009 - Num. Rec.: 1407/2008 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 24/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 909/2009 - Num. Rec.: 297/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 24/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 896/2009 - Num. Rec.: 566/2009 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 23/09/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 380/2009 - Num. Rec.: 427/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 23/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 558/2009 - Num. Rec.: 442/2009 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 22/09/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 516/2009 - Num. Rec.: 245/2009 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 22/09/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 516/2009 - Num. Rec.: 245/2009 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 22/09/2009.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2009 - Num. Rec.: 345/2009 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 21/09/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 504/2009 - Num. Rec.: 832/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 18/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 545/2009 - Num. Rec.: 757/2008 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 17/09/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 323/2009 - Num. Rec.: 293/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 17/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 884/2009 - Num. Rec.: 438/2009 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 17/09/2009.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 316/2009 - Num. Rec.: 7/2009 - Ponente: Albert Montell García. Fecha: 17/09/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 594/2009 - Num. Rec.: 354/2009 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 16/09/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 456/2009 - Num. Rec.: 177/2009 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 14/09/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 434/2009 - Num. Rec.: 427/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 14/09/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 368/2009 - Num. Rec.: 183/2009 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 14/09/2009 .

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 527/2009 - Num. Rec.: 386/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 11/09/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 847/2009 - Num. Rec.: 1336/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/09/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 535/2009 - Num. Rec.: 523/2009 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 08/09/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 532/2009 - Num. Rec.: 542/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 07/09/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2009 - Num. Rec.: 400/2009 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 04/09/2009 .

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 341/2009 - Num. Rec.: 709/2008 - Ponente: Josefa Otero Seivane. Fecha: 01/09/2009.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 438/2009 - Num. Rec.: 299/2009 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 31/07/2009.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 163/2009 - Num. Rec.: 207/2009 - Ponente: María Francisca Caridad Juárez Vasallo. Fecha: 31/07/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 549/2009 - Num. Rec.: 941/2008 - Ponente: Agustín Vigo Morancho. Fecha: 28/07/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 483/2009 - Num. Rec.: 584/2008 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 28/07/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 533/2009 - Num. Rec.: 931/2008 - Ponente: Agustín Vigo Morancho. Fecha: 27/07/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 265/2009 - Num. Rec.: 253/2009 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 24/07/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 394/2009 - Num. Rec.: 263/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 24/07/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2009 - Num. Rec.: 272/2009 - Ponente: María Nuria Zamora Pérez. Fecha: 22/07/2009.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 364/2009 - Num. Rec.: 71/2009 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 20/07/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 515/2009 - Num. Rec.: 511/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/07/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 490/2009 - Num. Rec.: 355/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 14/07/2009.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 14/07/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 273/2009 - Num. Rec.: 67/2009 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 13/07/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 334/2009 - Num. Rec.: 149/2009 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 10/07/2009.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2009 - Num. Rec.: 64/2009 - Ponente: Rafael Sánchez Aristi. Fecha: 10/07/2009.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 277/2009 - Num. Rec.: 173/2009 - Ponente: Manuel Morán González. Fecha: 10/07/2009.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Calvet Botella. Fecha: 09/07/2009

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 478/2009 - Num. Rec.: 463/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 09/07/2009.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 216/2009 - Num. Rec.: 39/2009 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre. Fecha: 08/07/2009.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 216/2009 - Num. Rec.: 606/2008 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 08/07/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 335/2009 - Num. Rec.: 307/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 07/07/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 07/07/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 07/07/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 462/2009 - Num. Rec.: 311/2009 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 06/07/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 264/2009 - Num. Rec.: 304/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 06/07/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 382/2009 - Num. Rec.: 87/2009 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 03/07/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 322/2009 - Num. Rec.: 148/2009 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 03/07/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 457/2009 - Num. Rec.: 289/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 03/07/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 382/2009 - Num. Rec.: 14/2009 - Ponente: Fernando Javier Sanz Llorente. Fecha: 30/06/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 456/2009 - Num. Rec.: 1018/2008 - Ponente: Agustín Vigo Morancho. Fecha: 30/06/2009.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2009 - Num. Rec.: 378/2008 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda. Fecha: 30/06/2009.

Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 445/2009 - Num. Rec.: 1341/2008 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 30/06/2009.

-Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 30/06/2009.

-Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Valvet Botella. Fecha: 29/06/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 253/2009 - Num. Rec.: 218/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 29/06/2009.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 111/2009 - Num. Rec.: 274/2008 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 25/06/2009.

-Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2009 - Num. Rec.: 372/2008 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 25/06/2009.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 281/2009 - Num. Rec.: 738/2009 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 24/06/2009.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2009 - Num. Rec.: 664/2008 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 24/06/2009.

-Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 277/2009 - Num. Rec.: 5289/2008 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 24/06/2009.

Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 326/2009 - Num. Rec.: 227/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 24/06/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 316/2009 - Num. Rec.: 55/2009 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 23/06/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 23/06/2009.

-Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Calvet Botella. Fecha: 23/06/2009

-Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 19/06/2009

-Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 19/06/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 274/2009 - Num. Rec.: 279/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 18/06/2009.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2009 - Num. Rec.: 537/2008 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda. Fecha: 17/06/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 16/06/2009.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2009 - Num. Rec.: 61/2009 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre. Fecha: 16/06/2009.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2009 - Num. Rec.: 428/2008 - Ponente: Manuel Díaz Muyor. Fecha: 15/06/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 201/2009 - Num. Rec.: 255/2009 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 12/06/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 346/2009 - Num. Rec.: 213/2009 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 12/06/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 384/2009 - Num. Rec.: 212/2009 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 09/06/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2009 - Num. Rec.: 649/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 05/06/2009.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2009 - Num. Rec.: 48/2009 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 04/06/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 240/2009 - Num. Rec.: 301/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 04/06/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 326/2009 - Num. Rec.: 381/2008 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 04/06/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 210/2009 - Num. Rec.: 203/2009 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 04/06/2009.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 209/2009 - Num. Rec.: 52/2009 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda. Fecha: 04/06/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 594/2009 - Num. Rec.: 1286/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 03/06/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 237/2009 - Num. Rec.: 263/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 03/06/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 362/2009 - Num. Rec.: 178/2009 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 02/06/2009.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 262/2009 - Num. Rec.: 770/2008 - Ponente: José Ramón Navarro Miranda. Fecha: 01/06/2009.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 308/2009 - Num. Rec.: 146/2009 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 29/05/2009.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 29/05/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 29/05/2009 | Fallo: Desestima

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 311/2009 - Num. Rec.: 739/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 28/05/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 246/2009 - Num. Rec.: 469/2008 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 28/05/2009.

- Audiencia Provincial de Guipuzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2009 - Num. Rec.: 3110/2009 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 27/05/2009.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 95/2009 - Num. Rec.: 81/2009 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 26/05/2009.

- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 95/2009 - Num. Rec.: 128/2009 - Ponente: Jesús García García. Fecha: 22/05/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 21/05/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 217/2009 - Num. Rec.: 176/2009 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 20/05/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 228/2009 - Num. Rec.: 15/2009 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 20/05/2009.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 91/2009 - Num. Rec.: 26/2009 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 20/05/2009.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2009 - Num. Rec.: 708/2008 - Ponente: Manuel Conde Núñez. Fecha: 20/05/2009.

- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2009 - Num. Rec.: 171/2009 - Ponente: Andrés Palomo del Arco. Fecha: 20/05/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 223/2009 - Num. Rec.: 75/2009 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 19/05/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 243/2009 - Num. Rec.: 199/2009 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 18/05/2009.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 149/2009 - Num. Rec.: 97/2009 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 15/05/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 197/2009 - Num. Rec.: 53/2009 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 15/05/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 329/2009 - Num. Rec.: 215/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 14/05/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 197/2009 - Num. Rec.: 166/2009 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 14/05/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 193/2009 - Num. Rec.: 204/2009 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 14/05/2009.

- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 65/2009 - Num. Rec.: 85/2009 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 14/05/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 168/2009 - Num. Rec.: 21/2009 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 14/05/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 311/2009 - Num. Rec.: 644/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 13/05/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 304/2009 - Num. Rec.: 623/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 12/05/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 12/05/2009.

- Audiencia Provincial de Soria - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 90/2009 - Num. Rec.: 114/2009 - Ponente: José Luis Rodríguez Greciano. Fecha: 11/05/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 157/2009 - Num. Rec.: 229/2009 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 08/05/2009.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 104/2009 - Num. Rec.: 112/2009 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 07/05/2009.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 166/2009 - Num. Rec.: 82/2009 - Ponente: María Pilar Fernández Alonso. Fecha: 06/05/2009.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 180/2009 - Num. Rec.: 33/2009 - Ponente: José Antonio Vega Bravo. Fecha: 06/05/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 06/05/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 183/2009 - Num. Rec.: 86/2009 - Ponente: Agustín Azparren Lucas. Fecha: 05/05/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 295/2009 - Num. Rec.: 86/2009 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 05/05/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 284/2009 - Num. Rec.: 1023/2008 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 04/05/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 149/2009 - Num. Rec.: 175/2009 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 30/04/2009.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 136/2009 - Num. Rec.: 581/2008 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 30/04/2009.

Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 30/04/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 208/2009 - Num. Rec.: 150/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 29/04/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 29/04/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 260/2009 - Num. Rec.: 617/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 28/04/2009.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 97/2009 - Num. Rec.: 74/2009 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 27/04/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 399/2009 - Num. Rec.: 1075/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 22/04/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 242/2009 - Num. Rec.: 1049/2008 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 21/04/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 237/2009
- Num. Rec.: 58/2009 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 07/04/2009.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Calvet Botella. Fecha: 07/04/2009

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 124/2009 - Num. Rec.: 32/2009 - Ponente: María Pilar Fernández Alonso. Fecha: 07/04/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 07/04/2009.

- Audiencia Provincial de Palencia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 124/2009 - Num. Rec.: 117/2009 - Ponente: Juan Miguel Donis Carracedo. Fecha: 06/04/2009.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2009 - Num. Rec.: 9/2009 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 03/04/2009.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 135/2009 - Num. Rec.: 494/2008 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 31/03/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 335/2009 - Num. Rec.: 1045/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 30/03/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2009 - Num. Rec.: 128/2009 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 30/03/2009.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2009 - Num. Rec.: 248/2008 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 27/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 145/2009 - Num. Rec.: 43/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 25/03/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 298/2009 - Num. Rec.: 935/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 24/03/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Magdalena Fernández Soto. Fecha: 23/03/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 18/03/2009.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 91/2009 - Num. Rec.: 469/2008 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 17/03/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 161/2009 - Num. Rec.: 370/2008 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 17/03/2009.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 17/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2009 - Num. Rec.: 637/2008 - Ponente: Paulino Rico Rajo.. Fecha: 17/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2009 - Num. Rec.: 721/2008 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 16/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 149/2009 - Num. Rec.: 492/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 16/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2009 - Num. Rec.: 774/2008 - Ponente: Carlos Erchilla Labarta. Fecha: 16/03/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 88/2009 - Num. Rec.: 286/2008 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 16/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 119/2009 - Num. Rec.: 32/2009 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 13/03/2009.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 56/2009 - Num. Rec.: 171/2008 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 12/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 142/2009 - Num. Rec.: 1094/2007 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 12/03/2009.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 12/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2009 - Num. Rec.: 63/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 10/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 126/2009 - Num. Rec.: 30/2009 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 10/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 133/2009 - Num. Rec.: 796/2008 - Ponente: Joaquín Bayo Delgado. Fecha: 05/03/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 109/2009 - Num. Rec.: 778/2008 - Ponente: Carlos Erchilla Labarta. Fecha: 04/03/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 77/2009 - Num. Rec.: 81/2009 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 04/03/2009.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2009 - Num. Rec.: 111/2008 - Ponente: Arabela Carmen García Espina. Fecha: 04/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 105/2009 - Num. Rec.: 474/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 03/03/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 135/2009 - Num. Rec.: 419/2008 - Ponente: Ana del Ser López. Fecha: 02/03/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 109/2009 - Num. Rec.: 384/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 26/02/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 65/2009 - Num. Rec.: 110/2009 - Ponente: Alberto Francisco Álvarez Rodríguez. Fecha: 25/02/2009.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 24/02/2009 | Fallo: Desestima

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 61/2009 - Num. Rec.: 55/2009 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 20/02/2009.

- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 58/2009 - Num. Rec.: 53/2009 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 19/02/2009.

-Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 76/2009 - Num. Rec.: 198/2008 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 17/02/2009.

-Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 16/02/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 97/2009 - Num. Rec.: 1248/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 12/02/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 96/2009 - Num. Rec.: 1225/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 12/02/2009.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 148/2009 - Num. Rec.: 1260/2008 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 11/02/2009.

-Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 11/02/2009.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 10/02/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2009 - Num. Rec.: 1102/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 05/02/2009.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 04/02/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 35/2009 - Num. Rec.: 369/2008 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 30/01/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 33/2009 - Num. Rec.: 8/2008 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 30/01/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 34/2009 - Num. Rec.: 291/2008 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 30/01/2009.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 29/01/2009.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 26/2009 - Num. Rec.: 467/2008 - Ponente: Antonio Mascaro Lazcano. Fecha: 28/01/2009.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 29/2009 - Num. Rec.: 240/2008 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 27/01/2009.

-Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal Fecha: 23/01/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 50/2009 - Num. Rec.: 551/2008 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 21/01/2009.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 33/2009 - Num. Rec.: 436/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 20/01/2009 | Fallo: Estima parcialmente | REC: 436/2008 | RES: 33/2009

-Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 26/2009 - Num. Rec.: 1163/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/01/2009.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio Calvet Botella. Fecha: 20/01/2009.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 20/2009 - Num. Rec.: 1075/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 19/01/2009.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 13/01/2009 | Fallo: Desestima

- Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Antonio Angos Ullate. Fecha: 13/01/2009 | Fallo: Estima

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2009 - Num. Rec.: 426/2008 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 12/01/2009.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 30/2009 - Num. Rec.: 710/2008 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 12/01/2009.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 02/01/2009.

- AÑO 2008.-

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2008 - Num. Rec.: 421/2008 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 23/12/2008.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 368/2008 - Num. Rec.: 447/2008 - Ponente: Alfonso Santisteban Ruíz. Fecha: 22/12/2008.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 284/2008 - Num. Rec.: 352/2008 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 19/12/2008.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 373/2008 - Num. Rec.: 423/2008 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 19/12/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 802/2008 - Num. Rec.: 1022/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 16/12/2008.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 369/2008 - Num. Rec.: 412/2008 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 15/12/2008.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 471/2008 - Num. Rec.: 448/2008 - Ponente: Juana María Gelabert Ferragut. Fecha: 15/12/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 793/2008 - Num. Rec.: 942/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 11/12/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 688/2008 - Num. Rec.: 772/2008 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 11/12/2008.

- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 327/2008 - Num. Rec.: 141/2008 - Ponente: Luis Adolfo Mallo Mallo. Fecha: 10/12/2008.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 146/2008 - Num. Rec.: 127/2007 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 09/12/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 346/2008 - Num. Rec.: 377/2008 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 09/12/2008.

- Audiencia Provincial de Guipuzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 354/2008 - Num. Rec.: 3369/2008 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 05/12/2008.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1306/2008 - Num. Rec.: 787/2008 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 04/12/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 02/12/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 02/12/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 769/2008 - Num. Rec.: 974/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/12/2008.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 420/2008 - Num. Rec.: 407/2008 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 27/11/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 697/2008 - Num. Rec.: 1127/2007 - Ponente: Ana María Hortensia García Esquius. Fecha: 25/11/2008.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 344/2008 - Num. Rec.: 384/2008 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 25/11/2008.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 486/2008 - Num. Rec.: 571/2008 - Ponente: Carlos Moreno Millán. Fecha: 21/11/2008.
- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 389/2008 - Num. Rec.: 438/2008 - Ponente: Alberto Guilaña Foix. Fecha: 21/11/2008
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 315/2008 - Num. Rec.: 266/2008 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 21/11/2008.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 238/2008 - Num. Rec.: 286/2008 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 20/11/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 694/2008 - Num. Rec.: 234/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 13/11/2008.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1195/2008 - Num. Rec.: 900/2008 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 13/11/2008.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 323/2008 - Num. Rec.: 269/2008 - Ponente: Ildefonso García del Pozo. Fecha: 11/11/2008.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 276/2008 - Num. Rec.: 326/2007 - Ponente: María Blanca Gesto Alonso. Fecha: 10/11/2008.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 317/2008 - Num. Rec.: 290/2008 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 07/11/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 675/2008 - Num. Rec.: 236/2008 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 07/11/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 651/2008 - Num. Rec.: 209/2008 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 04/11/2008.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 769/2008 - Num. Rec.: 388/2008 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 31/10/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 673/2008 - Num. Rec.: 801/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 30/10/2008.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Amor Martínez Atienza. Fecha: 28/10/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 28/10/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 286/2008 - Num. Rec.: 279/2008 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 27/10/2008.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 751/2008 - Num. Rec.: 448/2008 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 24/10/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 637/2008 - Num. Rec.: 861/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 24/10/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 405/2008 - Num. Rec.: 371/2008 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 23/10/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 23/10/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 643/2008 - Num. Rec.: 815/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 23/10/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 583/2008 - Num. Rec.: 608/2008 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 23/10/2008.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 328/2008 - Num. Rec.: 232/2008 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 21/10/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 20/10/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 624/2008 - Num. Rec.: 884/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 20/10/2008.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Amor Martínez Atienza. Fecha: 17/10/2008.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Amor Martínez Atienza. Fecha: 17/10/2008.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 15/10/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 626/2008 - Num. Rec.: 504/2008 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 15/10/2008.

- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 268/2008 - Num. Rec.: 87/2008 - Ponente: Luís Adolfo Mallo Mallo. Fecha: 14/10/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. - Fecha: 14/10/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 14/10/2008.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 230/2008 - Num. Rec.: 22/2008 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 13/10/2008.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 228/2008 - Num. Rec.: 149/2008 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 09/10/2008.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 314/2008 - Num. Rec.: 142/2008 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 08/10/2008.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 217/2008 - Num. Rec.: 153/2008 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 02/10/2008.
- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 594/2008 - Num. Rec.: 121/2008 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 02/10/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 616/2008 - Num. Rec.: 1225/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 02/10/2008.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 360/2008 - Num. Rec.: 688/2007 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 30/09/2008.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 416/2008 - Num. Rec.: 374/2008 - Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández. Fecha: 30/09/2008.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2008 - Num. Rec.: 196/2008 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 29/09/2008.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 258/2008 - Num. Rec.: 144/2008 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 25/09/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 559/2008 - Num. Rec.: 410/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 24/09/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 23/09/2008
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2008 - Num. Rec.: 154/2008 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 19/09/2008.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 231/2008 - Num. Rec.: 154/2008 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 19/09/2008.
- Audiencia Provincial de León - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 207/2008 - Num. Rec.: 156/2008 - Ponente: Antonio Muñoz Díez. Fecha: 18/09/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 545/2008 - Num. Rec.: 544/2008 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 18/09/2008.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2008 - Num. Rec.: 28/2008 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 18/09/2008.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 516/2008 - Num. Rec.: 508/2008 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 17/09/2008.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 543/2008 - Num. Rec.: 351/2008 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 17/09/2008
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 16/09/2008.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 15/09/2008.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 571/2008 - Num. Rec.: 427/2008 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 15/09/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 202/2008 - Num. Rec.: 178/2008 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 15/09/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 199/2008 - Num. Rec.: 226/2008 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 15/09/2008.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2008 - Num. Rec.: 432/2007 - Ponente: Miguel Ángel Larrosa Amante. Fecha: 15/09/2008.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 10/09/2008.
- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 249/2008 - Num. Rec.: 525/2007 - Ponente: Luis Miguel Rodríguez Fernández. Fecha: 05/09/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 508/2008 - Num. Rec.: 574/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 04/09/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 198/2008 - Num. Rec.: 209/2008 - Ponente: María Nuria Zamora Pérez. Fecha: 03/09/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 562/2008 - Num. Rec.: 159/2008 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 30/07/2008.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 157/2008 - Num. Rec.: 154/2008 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 25/07/2008.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 157/2008 - Num. Rec.: 154/2008 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 25/07/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 25/07/2008.
- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 309/2008 - Num. Rec.: 70/2008 - Ponente: Manuel García Prada. Fecha: 25/07/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 492/2008 - Num. Rec.: 489/2008 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 24/07/2008.
- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 490/2008 - Num. Rec.: 152/2008 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 24/07/2008
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 203/2008 - Num. Rec.: 246/2008 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 23/07/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 467/2008 - Num. Rec.: 494/2008 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 23/07/2008.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2008 - Num. Rec.: 45/2008 - Ponente: Iciar Cordero Cutillas. Fecha: 22/07/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 481/2008 - Num. Rec.: 521/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 21/07/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 533/2008 - Num. Rec.: 113/2008 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 21/07/2008.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 150/2008 - Num. Rec.: 100/2008 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 18/07/2008.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 150/2008 - Num. Rec.: 100/2008 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 18/07/2008.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 302/2008 - Num. Rec.: 293/2008 - Ponente: José Isidro Rey Huidobro. Fecha: 18/07/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 212/2008 - Num. Rec.: 216/2008 - Ponente: Jaime Riaza García. Fecha: 17/07/2008.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 124/2008 - Num. Rec.: 113/2008 - Ponente: María Ángeles Martínez Domínguez. Fecha: 17/07/2008.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 208/2008 - Num. Rec.: 195/2008 - Ponente: Ildelfonso García del Pozo. Fecha: 11/07/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 817/2008 - Num. Rec.: 265/2008 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 10/07/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 494/2008 - Num. Rec.: 495/2008 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 08/07/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 484/2008 - Num. Rec.: 81/2008 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 04/07/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 431/2008 - Num. Rec.: 377/2008 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 03/07/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 436/2008 - Num. Rec.: 417/2008 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 03/07/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 457/2008 - Num. Rec.: 974/2007 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 03/07/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 448/2008 - Num. Rec.: 958/2007 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 01/07/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 201/2008 - Num. Rec.: 190/2008 - Ponente: Jaime Riaza García. Fecha: 30/06/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 468/2008 - Num. Rec.: 529/2008 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 27/06/2008.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 441/2008 - Num. Rec.: 1006/2007 - Ponente: José Antonio Morales Mateo. Fecha: 26/06/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 24/06/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 234/2008 - Num. Rec.: 161/2008 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 20/06/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2008 - Num. Rec.: 216/2008 - Ponente: José Cáliz Covalada. Fecha: 18/06/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2008 - Num. Rec.: 216/2008 - Ponente: José Cáliz Covalada. Fecha: 18/06/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 417/2008 - Num. Rec.: 1234/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 17/06/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 338/2008 - Num. Rec.: 774/2007 - Ponente: Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente. Fecha: 16/06/2008.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 219/2008 - Num. Rec.: 621/2007 - Ponente: Antoni Vaquer Aloy. Fecha: 16/06/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 416/2008 - Num. Rec.: 445/2008 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 13/06/2008.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2008 - Num. Rec.: 49/2007 - Ponente: Catalina María Moragues Vidal. Fecha: 13/06/2008.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2008 - Num. Rec.: 168/2008 - Ponente: José Antonio Carnerero Parra. Fecha: 13/06/2008.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 122/2008 - Num. Rec.: 72/2008 - Ponente: María del Mar Blanco Flores. Fecha: 11/06/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 10/06/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 412/2008 - Num. Rec.: 1304/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 10/06/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 224/2008 - Num. Rec.: 109/2008 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 09/06/2008.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 160/2008 - Num. Rec.: 174/2008 - Ponente: Jesús Souto Herreros. Fecha: 06/06/2008.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 346/2008 - Num. Rec.: 1063/2007 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 06/06/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 398/2008 - Num. Rec.: 859/2006 - Ponente: Pascual Martín Villa. Fecha: 04/06/2008.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 217/2008 - Num. Rec.: 30/2008 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 03/06/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 376/2008 - Num. Rec.: 1111/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 29/05/2008.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 386/2008 - Num. Rec.: 1088/2007 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 28/05/2008.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 82/2008 - Num. Rec.: 23/2008 - Ponente: José Luis Antón Blanco. Fecha: 28/05/2008
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 27/05/2008.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 246/2008 - Num. Rec.: 259/2007 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Blanco Fernández del Viso. Fecha: 26/05/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 112/2008 - Num. Rec.: 22/2008 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 23/05/2008.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 344/2008 - Num. Rec.: 1127/2007 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 23/05/2008.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 373/2008 - Num. Rec.: 1047/2007 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón, Fecha: 22/05/2008.
- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 175/2008 - Num. Rec.: 498/2007 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 21/05/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 312/2008 - Num. Rec.: 806/2007 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 20/05/2008
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 20/05/2008.
- Audiencia Provincial de Palencia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 86/2008 - Num. Rec.: 94/2008 - Ponente: Carlos Javier Álvarez Fernández. Fecha: 16/05/2008.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 122/2008 - Num. Rec.: 233/2007 - Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. Fecha: 15/05/2008.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 305/2008 - Num. Rec.: 336/2008 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 14/05/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 13/05/2008.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 99/2008 - Num. Rec.: 109/2008 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 12/05/2008.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 226/2008 - Num. Rec.: 666/2007 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 12/05/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 284/2008 - Num. Rec.: 281/2008 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 12/05/2008.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 189/2008 - Num. Rec.: 113/2008 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 07/05/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 518/2008 - Num. Rec.: 180/2008 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 05/05/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 216/2008 - Num. Rec.: 88/2007 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 02/05/2008.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 219/2008 - Num. Rec.: 80/2008 - Ponente: Carlos Ercilla Labarta. Fecha: 02/05/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 214/2008 - Num. Rec.: 25/2008 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 02/05/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 301/2008 - Num. Rec.: 824/2007 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 30/04/2008.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 28/04/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 301/2008 - Num. Rec.: 286/2008 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 25/04/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 110/2008 - Num. Rec.: 447/2007 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 24/04/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 176/2008 - Num. Rec.: 516/2007 - Ponente: María del Carmen Martelo Pérez. Fecha: 22/04/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2008 - Num. Rec.: 48/2008 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 21/04/2008.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 142/2008 - Num. Rec.: 357/2007 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 16/04/2008.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 70/2008 - Num. Rec.: 6/2008 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 15/04/2008.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 15/04/2008.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 53/2008 - Num. Rec.: 40/2008 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 14/04/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2008 - Num. Rec.: 976/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 11/04/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 176/2008 - Num. Rec.: 532/2007 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 11/04/2008.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 205/2008 - Num. Rec.: 14/2008 - Ponente: Bruno Arias Berritotergortua. Fecha: 10/04/2008.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 223/2008 - Num. Rec.: 926/2007 - Ponente: José Antonio Morales Mateo. Fecha: 10/04/2008.

- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2008 - Num. Rec.: 469/2007 - Ponente: Ana Cristina Sáinz Pereda. Fecha: 08/04/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 245/2008 - Num. Rec.: 31/2007 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 08/04/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 246/2008 - Num. Rec.: 44/2007 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 08/04/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 118/2008 - Num. Rec.: 785/2007 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 04/04/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 176/2008 - Num. Rec.: 1121/2007 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 03/04/2008.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 172/2008 - Num. Rec.: 23/2008 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 03/04/2008.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Ramón Sánchez Herrero. Fecha: 01/04/2008.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 117/2008 - Num. Rec.: 685/2007 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 01/04/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 01/04/2008.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 151/2008 - Num. Rec.: 58/2008 - Ponente: José Manuel Busto Lago. Fecha: 31/03/2008.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 37/2008 - Num. Rec.: 55/2008 - Ponente: Francisco Bellido Soria. Fecha: 31/03/2008.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 137/2008 - Num. Rec.: 352/2008 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 27/03/2008.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 209/2008 - Num. Rec.: 590/2007 - Ponente: Fr.... Fecha: 27/03/2008.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 203/2008 - Num. Rec.: 209/2008 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 27/03/2008.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2008 - Num. Rec.: 82/2008 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 26/03/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 210/2008 - Num. Rec.: 120/2007 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 26/03/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 200/2008 - Num. Rec.: 767/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 19/03/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 189/2008 - Num. Rec.: 832/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 18/03/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 191/2008 - Num. Rec.: 1025/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 14/03/2008.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 167/2008 - Num. Rec.: 879/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 12/03/2008.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julián Carlos Arque Bescos. Fecha: 12/03/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2008 - Num. Rec.: 612/2007 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 12/03/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 64/2008 - Num. Rec.: 85/2008 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 11/03/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 143/2008 - Num. Rec.: 12/2008 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 06/03/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2008 - Num. Rec.: 78/2008 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 05/03/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 154/2008 - Num. Rec.: 647/2007 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 04/03/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2008 - Num. Rec.: 941/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 27/02/2008.

- Audiencia Provincial de Guipuzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2008 - Num. Rec.: 3028/2008 - Ponente: Ana Isabel Moreno Galindo. Fecha: 25/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 127/2008 - Num. Rec.: 814/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 25/02/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2008 - Num. Rec.: 434/2007 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 22/02/2008.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 66/2008 - Num. Rec.: 331/2007 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 21/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 132/2008 - Num. Rec.: 594/2007 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 21/02/2008.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2008 - Num. Rec.: 1159/2007 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 20/02/2008

Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 103/2008 - Num. Rec.: 365/2007 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 20/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 120/2008 - Num. Rec.: 547/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 19/02/2008.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 107/2008 - Num. Rec.: 638/2007 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 18/02/2008.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2008 - Num. Rec.: 308/2007 - Ponente: José Francisco Cobo Sáenz. Fecha: 18/02/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 77/2008 - Num. Rec.: 405/2007 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 15/02/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 58/2008 - Num. Rec.: 424/2007 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 15/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2008 - Num. Rec.: 796/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 14/02/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 67/2008 - Num. Rec.: 625/2007 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 13/02/2008.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2008 - Num. Rec.: 546/2007 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 13/02/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 172/2008 - Num. Rec.: 1121/2007 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 13/02/2008

- Audiencia Provincial de Alava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 44/2008 - Num. Rec.: 546/2007 - Ponente: Íñigo Madaria Azcoitia. Fecha: 12/02/2008.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2008 - Num. Rec.: 4/2008 - Ponente: José Manuel Barral Díaz. Fecha: 11/02/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 54/2008 - Num. Rec.: 420/2007 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 11/02/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 31/2008 - Num. Rec.: 42/2008 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 11/02/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2008 - Num. Rec.: 372/2007 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 08/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 82/2008 - Num. Rec.: 508/2007 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 05/02/2008

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 44/2008 - Num. Rec.: 357/2007 - Ponente: Javier Antón Guijarro. Fecha: 04/02/2008.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 36/2008 - Num. Rec.: 39/2008 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 01/02/2008.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 75/2008 - Num. Rec.: 859/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 31/01/2008.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 28/2008 - Num. Rec.: 552/2007 - Ponente: Luis Miguel Rodríguez Fernández. Fecha: 30/01/2008.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 39/2008 - Num. Rec.: 383/2007 - Ponente: María José Pérez Pena. Fecha: 29/01/2008.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2008 - Num. Rec.: 537/2007 - Ponente: Miguel Carlos Fernández Díez. Fecha: 28/01/2008.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 15/2008 - Num. Rec.: 28/2008 - Ponente: Jesús María Passolas Morales Fecha: 25/01/2008.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 42/2008 - Num. Rec.: 738/2007 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 22/01/2008

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 19/2008 - Num. Rec.: 294/2007 - Ponente: Cristina Pla Navarro. Fecha: 14/01/2008.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2008 - Num. Rec.: 660/2007 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra . Fecha: 14/01/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2008 - Num. Rec.: 4204/2007 - Ponente: Jaime Carrera Ibarzábal. Fecha: 11/01/2008.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 7/2008 - Num. Rec.: 775/2007 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 10/01/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 20/2008 - Num. Rec.: 465/2007 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 10/01/2008.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 6/2008 - Num. Rec.: 336/2007 - Ponente: María Ángeles Martínez Domínguez. Fecha: 09/01/2008

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 6/2008 - Num. Rec.: 343/2007 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 08/01/2008.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 19/2008 - Num. Rec.: 373/2007 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 07/01/2008.

- AÑO 2007.-

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 384/2007 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 28/12/2007.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 291/2007 - Num. Rec.: 408/2007 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 21/12/2007.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 557/2007 - Num. Rec.: 466/2007 - Ponente: Eduardo Luis Martínez López. Fecha: 21/12/2007.

- Audiencia Provincial de Guipuzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 3364/2007 - Ponente: Iñigo Francisco Suárez Odriozola Fecha: 17/12/2007.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 413/2007 - Num. Rec.: 420/2007 - Ponente: José Ramón González Clavijo. Fecha: 07/12/2007.

- Audiencia Provincial de Guipuzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 308/2007 - Num. Rec.: 3186/2007 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 04/12/2007.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Ramón Sánchez Herrero. Fecha: 27/11/2007.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 734/2007 - Num. Rec.: 774/2007 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 26/11/2007.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 532/2007 - Num. Rec.: 420/2007 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 23/11/2007.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 20/11/2007.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 544/2007 - Num. Rec.: 2557/2007 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 14/11/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 704/2007 - Num. Rec.: 555/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 13/11/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 699/2007 - Num. Rec.: 536/2007 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 13/11/2007.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 695/2007 - Num. Rec.: 942/2007 - Ponente: María Amparo Ivars Marín. Fecha: 12/11/2007.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1318/2007 - Num. Rec.: 451/2007 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 07/11/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 664/2007 - Num. Rec.: 602/2007 - Ponente: María del Mar Alonso Martínez. Fecha: 02/11/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 524/2007 - Num. Rec.: 180/2007 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 25/10/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 219/2007 - Num. Rec.: 252/2007 - Ponente: Rafael Sánchez Aristi. Fecha: 17/10/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 504/2007 - Num. Rec.: 700/2006 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 16/10/2007. -

Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 483/2007 - Num. Rec.: 658/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 08/10/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 04/10/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 473/2007 - Num. Rec.: 689/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 03/10/2007.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Salinero Román. Fecha: 27/09/2007.

- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 521/2007 - Num. Rec.: 341/2007 - Ponente: Milagros Martínez Rionda. Fecha: 25/09/2007.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 317/2007 - Num. Rec.: 156/2007 - Ponente: Modesto Valentin Adolfo Blanco Fernandez del Viso. Fecha: 24/09/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 200/2007 - Num. Rec.: 224/2007 - Ponente: Concepción Espejel Jorquera. TOFecha: 21/09/2007.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 585/2007 - Num. Rec.: 723/2007 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 19/09/2007.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 129/2007 - Num. Rec.: 67/2007 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 06/09/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 456/2007 - Num. Rec.: 464/2007 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 06/09/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 456/2007 - Num. Rec.: 464/2007 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 06/09/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 433/2007 - Num. Rec.: 645/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 05/09/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 465/2007 - Num. Rec.: 465/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 04/09/2007.

- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 342/2007 - Num. Rec.: 357/2007 - Ponente: José Isidro Rey Huidobro. Fecha: 30/07/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 399/2007 - Num. Rec.: 585/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 26/07/2007.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 154/2007 - Num. Rec.: 11/2007 - Ponente: María Blanca Gesto Alonso. Fecha: 23/07/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2007 - Num. Rec.: 196/2007 - Ponente: Rafael Sánchez Arísti. Fecha: 23/07/2007.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 177/2007 - Num. Rec.: 203/2007 - Ponente: María Elena Arias-Salgado Robsy. Fecha: 20/07/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 386/2007 - Num. Rec.: 105/2007 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 19/07/2007.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1031/2007 - Num. Rec.: 500/2007 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 19/07/2007.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 267/2007 - Num. Rec.: 278/2007 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardo. Fecha: 13/07/2007.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 267/2007 - Num. Rec.: 278/2007 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardo. Fecha: 13/07/2007.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 488/2007 - Num. Rec.: 608/2007 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 10/07/2007.
- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 147/2007 - Num. Rec.: 117/2007 - Ponente: Luis Adolfo Mallo Mallo. Fecha: 06/07/2007.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 326/2007 - Num. Rec.: 154/2007 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 06/07/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 472/2007 - Num. Rec.: 155/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 03/07/2007.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2007 - Num. Rec.: 90/2007 - Ponente: María Elvira Afonso Rodríguez. Fecha: 02/07/2007.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 266/2007 - Num. Rec.: 492/2006 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 28/06/2007.
- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 129/2007 - Num. Rec.: 156/2007 - Ponente: Andrés Palomo del Arco. Fecha: 28/06/2007.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 378/2007 - Num. Rec.: 3408/2007 - Ponente: Andrés Palacios Martínez. Fecha: 24/06/2007.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 263/2007 - Num. Rec.: 698/2006 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 22/06/2007.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 229/2007 - Num. Rec.: 227/2007 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 21/06/2007.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 229/2007 - Num. Rec.: 227/2007 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 21/06/2007.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 380/2007 - Num. Rec.: 111/2007 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 20/06/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 380/2007 - Num. Rec.: 111/2007 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 20/06/2007.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2007 - Num. Rec.: 172/2007 - Ponente: José Alfredo Caballero Gea. Fecha: 15/06/2007.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2007 - Num. Rec.: 241/2006 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 15/06/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 422/2007 - Num. Rec.: 300/2007 - Ponente: Luis Francisco Carrillo Pozo. Fecha: 14/06/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2007 - Num. Rec.: 110/2007 - Ponente: Concepción Espejel Jorquera. Fecha: 13/06/2007.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 796/2007 - Num. Rec.: 91/2007 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 13/06/2007.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 307/2007 - Num. Rec.: 203/2007 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 12/06/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 272/2007 - Num. Rec.: 367/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 07/06/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 252/2007 - Num. Rec.: 930/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 29/05/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 388/2007 - Num. Rec.: 9/2007 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 29/05/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 119/2007 - Num. Rec.: 131/2007 - Ponente: Concepción Espejel Jorquera. Fecha: 28/05/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 233/2007 - Num. Rec.: 329/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 15/05/2007.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 416/2006 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 14/05/2007.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 305/2007 - Num. Rec.: 4322/2006 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 11/05/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 338/2007 - Num. Rec.: 178/2007 - Ponente: Ramón Foncillas Sopena. Fecha: 10/05/2007.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 04/05/2007.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 179/2007 - Num. Rec.: 214/2007 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 02/05/2007.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 182/2007 - Num. Rec.: 472/2006 - Ponente: Juan Miguel Carreras Carraña. Fecha: 02/05/2007.

Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 206/2007 - Num. Rec.: 1988/2006 - Ponente: Manuel Damián Álvarez García. Fecha: 27/04/2007.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 184/2007 - Num. Rec.: 613/2006 - Ponente: Miguel Álvaro Artola Fernández. Fecha: 24/04/2007.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 147/2007 - Num. Rec.: 118/2007 - Ponente: José María Álvarez Seijo. Fecha: 23/04/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 169/2007 - Num. Rec.: 558/2006 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 16/04/2007.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 16/04/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 277/2007 - Num. Rec.: 960/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 03/04/2007.

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 392/2006 - Ponente: Fernando Alañón Olmedo. Fecha: 30/03/2007. -

- Audiencia Provincial de Orense - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 387/2006 - Ponente: Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández. Fecha: 28/03/2007.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 82/2007 - Num. Rec.: 76/2007 - Ponente: María Jesús Jurado Cabrera. Fecha: 26/03/2007.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2007 - Num. Rec.: 64/2007 - Ponente: Concepción Espejel Jorquera. Fecha: 23/03/2007.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Encarnación Caturla Juan. Fecha: 23/03/2007.

- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Novena - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Domingo Salvatierra Ossorio. Fecha: 23/03/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 188/2007 - Num. Rec.: 1054/2006 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 21/03/2007.

- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 38/2007 - Num. Rec.: 42/2006 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 20/03/2007.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 161/2007 - Num. Rec.: 69/2007 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 13/03/2007.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 127/2007 - Num. Rec.: 54/2007 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 13/03/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 200/2007 - Num. Rec.: 893/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 09/03/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2007 - Num. Rec.: 876/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 09/03/2007.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 46/2007 - Num. Rec.: 63/2007 - Ponente: María Elena Arias-Salgado Robsy. Fecha: 06/03/2007.

- Audiencia Provincial de Guipúzcoa - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 35/2007 - Num. Rec.: 3486/2006 - Ponente: Juana María Unanue Arratibel. Fecha: 01/03/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 144/2007 - Num. Rec.: 855/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 01/03/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 116/2007 - Num. Rec.: 660/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 01/03/2007.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 127/2007 - Num. Rec.: 46/2007 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 26/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 106/2007 - Num. Rec.: 61/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 22/02/2007.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 69/2007 - Num. Rec.: 753/2006 - Ponente: José Manuel García Sánchez. Fecha: 16/02/2007.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2007 - Num. Rec.: 1046/2006 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 15/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 120/2007 - Num. Rec.: 760/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 14/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 84/2007 - Num. Rec.: 222/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 14/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2007 - Num. Rec.: 776/2006 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 14/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 77/2007 - Num. Rec.: 180/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 13/02/2007.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2007 - Num. Rec.: 1121/2006 - Ponente: Miriam de la Fuente García. Fecha: 12/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2007 - Num. Rec.: 354/2006 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 06/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 60/2007 - Num. Rec.: 542/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 05/02/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2007 - Num. Rec.: 496/2006 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 01/02/2007.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Decimonovena - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 54/2007 - Num. Rec.: 822/2006 - Ponente: Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez. Fecha: 31/01/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 51/2007 - Num. Rec.: 1021/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 30/01/2007.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Julio César Picatoste Bobillo. Fecha: 29/01/2007.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 106/2007 - Num. Rec.: 1100/2006 - Ponente: Miriam de la Fuente García. Fecha: 29/01/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 37/2007 - Num. Rec.: 524/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 23/01/2007.
- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 22/2007 - Num. Rec.: 327/2006 - Ponente: Luis Adolfo Mallo Mallo. Fecha: 18/01/2007.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 27/2007 - Num. Rec.: 573/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 12/01/2007. -
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 7/2007 - Num. Rec.: 556/2006 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 11/01/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2007 - Num. Rec.: 338/2006 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 10/01/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 11/2007 - Num. Rec.: 50/2006 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 09/01/2007.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2007 - Num. Rec.: 497/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 08/01/2007.

- AÑO 2006.-

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 687/2006 - Num. Rec.: 572/2006 - Ponente: Celso Joaquín Montenegro Viéitez. Fecha: 28/12/2006.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2006 - Num. Rec.: 311/2006 - Ponente: María Lourdes Molina Romero. Fecha: 22/12/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 764/2006 - Num. Rec.: 260/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 20/12/2006.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 803/2006 - Num. Rec.: 68/2006 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 18/12/2006.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Jaime Sanz Cid. Fecha: 12/12/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 743/2006 - Num. Rec.: 254/2006 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 12/12/2006.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 441/2006 - Num. Rec.: 396/2006 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 05/12/2006.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 258/2006 - Num. Rec.: 324/2006 - Ponente: María Jesús Jurado Cabrera. Fecha: 04/12/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1255/2006 - Num. Rec.: 779/2006 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 30/11/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 730/2006 - Num. Rec.: 349/2006 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 29/11/2006.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 429/2006 - Num. Rec.: 159/2006 - Ponente: Francisco Carrillo Vinader. Fecha: 28/11/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 717/2006 - Num. Rec.: 187/2006 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 28/11/2006.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 28/11/2006.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 633/2006 - Num. Rec.: 783/2006 - Ponente: María de la Soledad Jurado Rodríguez. Fecha: 24/11/2006.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 643/2006 - Num. Rec.: 811/2006 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 21/11/2006.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 240/2006 - Num. Rec.: 281/2006 - Ponente: Concepción Espejel Jorquera. Fecha: 21/11/2006.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 245/2006 - Num. Rec.: 307/2006 - Ponente: María Jesús Jurado Cabrera Fecha: 17/11/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 639/2006 - Num. Rec.: 1040/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 16/11/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 555/2006 - Num. Rec.: 387/2005 - Ponente: Alfonso Suárez Acevedo. Fecha: 13/11/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 377/2006 - Num. Rec.: 379/2006 - Ponente: María Paz Fernández-Rivera González. Fecha: 08/11/2006.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 08/11/2006.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2006 - Num. Rec.: 284/2006 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 03/11/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 582/2006 - Num. Rec.: 392/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 26/10/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 588/2006 - Num. Rec.: 508/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 26/10/2006.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 226/2006 - Num. Rec.: 250/2006 - Ponente: José Antonio Córdoba García. Fecha: 25/10/2006.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Ramón Alonso-Mañero Pardal. Fecha: 20/10/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 609/2006 - Num. Rec.: 1024/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors Fecha: 17/10/2006.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 530/2006 - Num. Rec.: 579/2006 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 13/10/2006.

- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 214/2006 - Num. Rec.: 272/2006 - Ponente: José Antonio Córdoba García. Fecha: 10/10/2006.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: María Jesús de Gracia Muñoz. Fecha: 10/10/2006.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 188/2006 - Num. Rec.: 238/2006 - Ponente: Isabel Serrano Frías. Fecha: 04/10/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 514/2006 - Num. Rec.: 585/2006 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 28/09/2006,

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 531/2006 - Num. Rec.: 309/2006 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 27/09/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 529/2006 - Num. Rec.: 463/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 26/09/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 501/2006 - Num. Rec.: 553/2006 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 26/09/2006.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 489/2006 - Num. Rec.: 695/2006 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 25/09/2006.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 327/2006 - Num. Rec.: 230/2006 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 22/09/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 523/2006 - Num. Rec.: 351/2006 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 21/09/2006.

- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 239/2006 - Num. Rec.: 175/2006 - Ponente: José Antonio San Millán Martín. Fecha: 14/09/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 352/2006 - Num. Rec.: 440/2006 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 14/09/2006.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2006 - Num. Rec.: 230/2006 - Ponente: María Ángeles Martínez Domínguez. Fecha: 13/09/2006.

- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 169/2006 - Num. Rec.: 219/2006 - Ponente: María Ángeles Martínez Domínguez. Fecha: 13/09/2006.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Juan Ignacio Medrano Sánchez. Fecha: 06/09/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 541/2006 - Num. Rec.: 892/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 05/09/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 331/2006 - Num. Rec.: 345/2006 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 25/07/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 293/2006 - Num. Rec.: 275/2006 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 17/07/2006.

- Audiencia Provincial de Alava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 146/2006 - Num. Rec.: 185/2006 - Ponente: José Jaime Tapia Parreño. Fecha: 14/07/2006.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 337/2006 - Num. Rec.: 120/2006 - Ponente: Catalina María Moragues Vidal. Fecha: 12/07/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 304/2006 - Num. Rec.: 340/2006 - Ponente: Abel Manuel Bustillo Juncal. Fecha: 07/07/2006.

- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 98/2006 - Num. Rec.: 175/2006 - Ponente: José García Bleda. Fecha: 30/06/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 400/2006 - Num. Rec.: 207/2006 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 22/06/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 275/2006 - Num. Rec.: 342/2006 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 22/06/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 281/2006 - Num. Rec.: 32/2006 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 16/06/2006.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 145/2006 - Num. Rec.: 161/2006 - Ponente: Andrés Manuel Encinas Bernardo. Fecha: 13/06/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 408/2006 - Num. Rec.: 684/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 07/06/2006.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 178/2006 - Num. Rec.: 2/2006 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 06/06/2006.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Manuel Valero Díez. Fecha: 05/06/2006.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 262/2006 - Num. Rec.: 10167/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 31/05/2006.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 262/2006 - Num. Rec.: 10167/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 31/05/2006.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2006 - Num. Rec.: 228/2006 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 31/05/2006.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 259/2006 - Num. Rec.: 228/2006 - Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Fecha: 31/05/2006.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 248/2006 - Num. Rec.: 161/2006 - Ponente: Mariano Zaforteza Fortuny. Fecha: 29/05/2006.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 179/2006 - Num. Rec.: 221/2006 - Ponente: María Amor Martínez Atienza.. Fecha: 25/05/2006.
- Audiencia Provincial de Alava - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2006 - Num. Rec.: 100/2006 - Ponente: José Jaime Tapia Parreño. Fecha: 24/05/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 384/2006 - Num. Rec.: 672/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 23/05/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 387/2006 - Num. Rec.: 874/2005 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 23/05/2006.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 232/2006 - Num. Rec.: 194/2006 - Ponente: Mateo Lorenzo Ramón Homar. Fecha: 19/05/2006.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 123/2006 - Num. Rec.: 150/2006 - Ponente: Juana Calderón Martín. Fecha: 18/05/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 337/2006 - Num. Rec.: 97/2006 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 17/05/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 360/2006 - Num. Rec.: 804/2005 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 17/05/2006.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 249/2006 - Num. Rec.: 126/2006 - Ponente: María Elia Mata Albert. Fecha: 16/05/2006.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 170/2006 - Num. Rec.: 68/2006 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 16/05/2006
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 290/2006 - Num. Rec.: 56/2006 - Ponente: José Luis López Fuentes. Fecha: 16/05/2006.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 255/2006 - Num. Rec.: 279/2005 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 16/05/2006.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 254/2006 - Num. Rec.: 477/2005 - Ponente: Francisco Acín Garos. Fecha: 16/05/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 265/2006 - Num. Rec.: 220/2006 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 11/05/2006.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 279/2006 - Num. Rec.: 220/2006 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 10/05/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 338/2006 - Num. Rec.: 862/2005 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 08/05/2006.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 117/2006 - Num. Rec.: 176/2006 - Ponente: Klaus Jochen Albiez Dohrmann. Fecha: 05/05/2006.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 156/2006 - Num. Rec.: 432/2005 - Ponente: Juan Manuel de la Cruz Mora. Fecha: 05/05/2006.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 211/2006 - Num. Rec.: 201/2006 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 04/05/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 190/2006 - Num. Rec.: 149/2006 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 04/05/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 243/2006 - Num. Rec.: 109/2006 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 03/05/2006.

- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 167/2006 - Num. Rec.: 527/2005 - Ponente: Modesto Valentín Adolfo Blanco Fernández del Viso. Fecha: 02/05/2006.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 95/2006 - Num. Rec.: 84/2006 - Ponente: Juana Calderón Martín. Fecha: 28/04/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 298/2006 - Num. Rec.: 594/2005 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 27/04/2006.

- Audiencia Provincial de León - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 91/2006 - Num. Rec.: 14/2006 - Ponente: Luis Adolfo Mallo Mallo. Fecha: 26/04/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 232/2006 - Num. Rec.: 202/2006 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 26/04/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 145/2006 - Num. Rec.: 13/2006 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 20/04/2006.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 58/2006 - Num. Rec.: 34/2006 - Ponente: Rafael del Río Delgado. Fecha: 20/04/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 267/2006 - Num. Rec.: 1112/2005 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 19/04/2006 | Fallo: Desestima.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 105/2006 - Num. Rec.: 77/2006 - Ponente: Andrés Manuel Encinas Bernardo. Fecha: 19/04/2006.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2006 - Num. Rec.: 182/2005 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre. Fecha: 18/04/2006.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 153/2006 - Num. Rec.: 31/2006 - Ponente: Andrés Pacheco Guevara. Fecha: 17/04/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 250/2006 - Num. Rec.: 681/2005 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 07/04/2006.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 126/2006 - Num. Rec.: 133/2006 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 07/04/2006.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 194/2006 - Num. Rec.: 196/2006 - Ponente: Antonio Alcalá Navarro. Fecha: 06/04/2006.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 187/2006 - Num. Rec.: 278/2006 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 05/04/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 229/2006 - Num. Rec.: 1019/2005 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 04/04/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 230/2006 - Num. Rec.: 1035/2005 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 04/04/2006.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 89/2006 - Num. Rec.: 89/2006 - Ponente: Klaus Jochen Albiez Dohrmann. Fecha: 24/03/2006.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 198/2006 - Num. Rec.: 995/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 24/03/2006.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 152/2006 - Num. Rec.: 919/2005 - Ponente: José Requena Paredes. Fecha: 24/03/2006.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2006 - Num. Rec.: 41/2006 - Ponente: María del Carmen Muñoz Muñoz. Fecha: 23/03/2006.
- Audiencia Provincial de Lugo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2006 - Num. Rec.: 20/2006 - Ponente: José Rafael Pedrosa López. Fecha: 23/03/2006.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 107/2006 - Num. Rec.: 131/2006 - Ponente: María Amor Martínez Atienza. Fecha: 23/03/2006.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2006 - Num. Rec.: 81/2006 - Ponente: María Begoña Rodríguez González. Fecha: 22/03/2006.
- Audiencia Provincial de Guadalajara - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 59/2006 - Num. Rec.: 63/2006 - Ponente: María Ángeles Martínez Domínguez. Fecha: 21/03/2006.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 125/2006 - Num. Rec.: 81/2006 - Ponente: Pedro Roque Villamor Montoro. Fecha: 20/03/2006.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 150/2006 - Num. Rec.: 129/2006 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 16/03/2006.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 87/2006 - Num. Rec.: 232/2005 - Ponente: María Pilar Astray Chacón. Fecha: 13/03/2006.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2006 - Num. Rec.: 595/2005 - Ponente: Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 07/03/2006.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 67/2006 - Num. Rec.: 298/2005 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 06/03/2006.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 76/2006 - Num. Rec.: 10099/2005 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 03/03/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 114/2006 - Num. Rec.: 502/2005 - Ponente: Rafael Martín de Peso. Fecha: 03/03/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 257/2006 - Num. Rec.: 811/2005 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 01/03/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2006 - Num. Rec.: 839/2005 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 01/03/2006.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 116/2006 - Num. Rec.: 767/2005 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 01/03/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 246/2006 - Num. Rec.: 826/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/02/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 93/2006 - Num. Rec.: 5115/2005 - Ponente: Francisco Javier romero Costas. Fecha: 24/02/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 108/2006 - Num. Rec.: 318/2005 - Ponente: José Pascual Ortuño Muñoz. Fecha: 23/02/2006.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 17/2006 - Num. Rec.: 122/2005 - Ponente: Juan Rafael Benítez Yébenes. Fecha: 23/02/2006.

- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 18/2006 - Num. Rec.: 132/2005 - Ponente: Juan Rafael Benítez Yébenes. Fecha: 23/02/2006.

- Audiencia Provincial de Palencia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 56/2006 - Num. Rec.: 23/2006 - Ponente: Mauricio Bugidos San José. Fecha: 22/02/2006.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 56/2006 - Num. Rec.: 57/2006 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 20/02/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 79/2006 - Num. Rec.: 554/2005 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 20/02/2006.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 52/2006 - Num. Rec.: 351/2005 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 16/02/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2006 - Num. Rec.: 963/2005 - Ponente: Carmen Neira Vázquez. Fecha: 14/02/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2006 - Num. Rec.: 225/2005 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 14/02/2006.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2006 - Num. Rec.: 178/2005 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 13/02/2006.

- Audiencia Provincial de La Rioja - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 41/2006 - Num. Rec.: 331/2005 - Ponente: Luis Miguel Rodríguez Fernández. Fecha: 13/02/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 161/2006 - Num. Rec.: 1070/2005 - Ponente: María del Rosario Hernández Hernández. Fecha: 09/02/2006.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 42/2006 - Num. Rec.: 547/2005 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 09/02/2006.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 19/2006 - Num. Rec.: 128/2005 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 09/02/2006.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 50/2006 - Num. Rec.: 567/2005 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 08/02/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2006 - Num. Rec.: 305/2005 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 03/02/2006.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 39/2006 - Num. Rec.: 814/2005 - Ponente: Ricardo Moyano García. Fecha: 03/02/2006.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2006 - Num. Rec.: 1073/2005 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 02/02/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 54/2006 - Num. Rec.: 260/2005 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 31/01/2006.

Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 38/2006 - Num. Rec.: 553/2005 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 30/01/2006.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 47/2006 - Num. Rec.: 491/2005 - Ponente: Andrés Pacheco Guevara. Fecha: 30/01/2006.

- Audiencia Provincial de Almería - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 3/2006 - Num. Rec.: 282/2005 - Ponente: Rafael García Laraña. Fecha: 25/01/2006.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 5/2006 - Num. Rec.: 25/2005 - Ponente: Ángel Luis Sanabria Parejo. Fecha: 19/01/2006.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 17/2006 - Num. Rec.: 787/2005 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 17/01/2006.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 21/2006 - Num. Rec.: 1018/2005 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 16/01/2006.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 6/2006 - Num. Rec.: 5050/2005 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 11/01/2006.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 27/2006 - Num. Rec.: 186/2005 - Ponente: José Luis Portugal Sáinz. Fecha: 11/01/2006.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2006 - Num. Rec.: 668/2005 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 09/01/2006.

- AÑO 2005.-

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2006 - Num. Rec.: 668/2005 - Ponente: María José de la Vega Llanes. Fecha: 30/12/2005.

- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 316/2005 - Num. Rec.: 215/2005 - Ponente: Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro. Fecha: 30/12/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 469/2005 - Num. Rec.: 1545/2005 - Ponente: Juan Ángel Rodríguez Cardama. Fecha: 30/12/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 466/2005 - Num. Rec.: 475/2005 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 30/12/2005.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 206/2005 - Num. Rec.: 228/2005 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 29/12/2005.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 205/2005 - Num. Rec.: 153/2005 - Ponente: Francisco José Goyena Salgado. Fecha: 29/12/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 176/2005 - Ponente: Fernando Francisco Rodríguez de Sanabria Mesa. Fecha: 28/12/2005.
- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 275/2005 - Num. Rec.: 343/2005 - Ponente: Miguel Ángel Callejo Sánchez. Fecha: 23/12/2005.
- Audiencia Provincial de Lleida - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 92/2005 - Num. Rec.: 125/2005 - Ponente: Andreu Enfedaque i Marco. Fecha: 22/12/2005.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 779/2005 - Num. Rec.: 916/2005 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 21/12/2005.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 647/2005 - Num. Rec.: 752/2005 - Ponente: José Antonio González González. Fecha: 21/12/2005.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 476/2005 - Num. Rec.: 485/2005 - Ponente: Fernando Ferrero Hidalgo. Fecha: 20/12/2005.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 501/2005 - Num. Rec.: 6757/2005 - Ponente: Ruperto Molina Vázquez. Fecha: 19/12/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 512/2005 - Num. Rec.: 10099/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 15/12/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 786/2005 - Num. Rec.: 751/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 15/12/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 779/2005 - Num. Rec.: 660/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 14/12/2005.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 551/2005 - Num. Rec.: 401/2005 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 14/12/2005.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 554/2005 - Num. Rec.: 617/2005 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 12/12/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 802/2005 - Num. Rec.: 340/2005 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 07/12/2005.
- Audiencia Provincial de Melilla - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 106/2005 - Num. Rec.: 139/2005 - Ponente: Juan Rafael Benítez Yébenes. Fecha: 05/12/2005.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 540/2005 - Num. Rec.: 458/2005 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña.. Fecha: 05/12/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 798/2005 - Num. Rec.: 481/2004 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 01/12/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 543/2005 - Num. Rec.: 805/2004 - Ponente: Rafael Martín del Peso. Fecha: 30/11/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 426/2005 - Num. Rec.: 520/2005 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 29/11/2005.
- Audiencia Provincial de Huesca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 282/2005 - Num. Rec.: 21/2005 - Ponente: Santiago Serena Fecha: 29/11/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 424/2005 - Num. Rec.: 461/2005 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 29/11/2005.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 451/2005 - Num. Rec.: 513/2005 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 28/11/2005.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 350/2005 - Num. Rec.: 222/2005 - Ponente: José Manuel Nicolás Manzanares. Fecha: 24/11/2005.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 565/2005 - Num. Rec.: 610/2005 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 24/11/2005.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Andrés Bodega del Val. Fecha: 24/11/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 138/2005 - Num. Rec.: 143/2005 - Ponente: Miguel Ángel Feliz Martínez. Fecha: 23/11/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1214/2005 - Num. Rec.: 597/2005 - Ponente: Inmaculada Melero Claudio. Fecha: 23/11/2005.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 256/2005 - Num. Rec.: 199/2005 - Ponente: Rafael García Laraña. Fecha: 22/11/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 111/2005 - Num. Rec.: 126/2005 - Ponente: Margarita Álvarez-Ossorio Benítez. Fecha: 22/11/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 749/2005 - Num. Rec.: 113/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 21/11/2005.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 494/2005 - Num. Rec.: 485/2005 - Ponente: María Rosa Rigo Roselló. Fecha: 16/11/2005.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 421/2005 - Num. Rec.: 496/2005 - Ponente: Joaquín Miguel Fernández Font. Fecha: 16/11/2005.
- Audiencia Provincial de Ceuta - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 83/2005 - Num. Rec.: 126/2005 - Ponente: Fernando Tesón Martín. Fecha: 15/11/2005.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 680/2005 - Num. Rec.: 754/2005 - Ponente: María Pilar Manzana Laguarda. Fecha: 15/11/2005.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 425/2005 - Num. Rec.: 2509/2005 - Ponente: Marcos Antonio Blanco Leira. Fecha: 14/11/2005.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 519/2005 - Num. Rec.: 433/2005 - Ponente: Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez-Moldes. Fecha: 14/11/2005.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 499/2005 - Num. Rec.: 379/2005 - Ponente: Mauricio Muñoz Fernández. Fecha: 11/11/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 207/2004 - Ponente: Rosa María Fernández Núñez. Fecha: 10/11/2005.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 482/2005 - Num. Rec.: 381/2005 - Ponente: María del Pilar Aguilar Vallino. Fecha: 09/11/2005.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 470/2005 - Num. Rec.: 363/2005 - Ponente: Santiago Oliver Barceló. Fecha: 09/11/2005.
- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 329/2005 - Num. Rec.: 288/2005 - Ponente: Jesús Souto Herreros. Fecha: 09/11/2005.
- Audiencia Provincial de Valladolid - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 361/2005 - Num. Rec.: 162/2005 - Ponente: Miguel Ángel Sendino Arenas. Fecha: 08/11/2005.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 573/2005 - Num. Rec.: 227/2005 - Ponente: Eduardo Navarro Peña. Fecha: 08/11/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 842/2005 - Num. Rec.: 445/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 08/11/2005.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 400/2005 - Num. Rec.: 355/2005 - Ponente: Fernando Lacaba Sánchez. Fecha: 07/11/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 1155/2005 - Num. Rec.: 661/2005 - Ponente: Hipólito Hernández Barea. Fecha: 07/11/2005.
- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 333/2005 - Num. Rec.: 42/2005 - Ponente: Gema Adoración Ocariz Azaustre. Fecha: 03/11/2005.
- Audiencia Provincial de Girona - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 404/2005 - Num. Rec.: 364/2005 - Ponente: Jaime Masfarre Coll. Fecha: 02/11/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 365/2005 - Num. Rec.: 410/2005 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 31/10/2005.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 463/2005 - Num. Rec.: 545/2005 - Ponente: Jesús Pérez Serna. Fecha: 28/10/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 689/2005 - Num. Rec.: 1039/2004 - Ponente: María Isabel Cámara Martínez. Fecha: 28/10/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 671/2005 - Num. Rec.: 72/2005 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 24/10/2005.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 389/2005 - Num. Rec.: 467/2005 - Ponente: Eugenio Santiago Dobarro Ramos. Fecha: 24/10/2005.
- Audiencia Provincial de Tenerife - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 359/2005 - Num. Rec.: 325/2005 - Ponente: Pilar Aragón Ramírez. Fecha: 24/10/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 353/2005 - Num. Rec.: 385/2005 - Ponente: María Elena Rodríguez-Vigil Rubio. Fecha: 24/10/2005.
- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 395/2005 - Num. Rec.: 435/2005 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 21/10/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 646/2005 - Num. Rec.: 509/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 20/10/2005.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 815/2005 - Num. Rec.: 589/2005 - Ponente: Melchor Antonio Hernández Calvo. Fecha: 20/10/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 633/2005 - Num. Rec.: 582/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 19/10/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 342/2005 - Num. Rec.: 370/2005 - Ponente: Guillermo Sacristán Represa. Fecha: 19/10/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 626/2005 - Num. Rec.: 55/2005 - Ponente: Ana Jesús Fernández San Miguel. Fecha: 18/10/2005.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 270/2005 - Num. Rec.: 212/2005 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 18/10/2005.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 695/2005 - Num. Rec.: 782/2004 - Ponente: José Ángel Odriozola Fernández. Fecha: 18/10/2005.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 454/2005 - Num. Rec.: 293/2005 - Ponente: Francisco Javier Romero Costas. Fecha: 14/10/2005.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 514/2005 - Num. Rec.: 403/2005 - Ponente: Julio Pedro Manrique de Lara Morales. Fecha: 14/10/2005.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 434/2005 - Num. Rec.: 438/2005 - Ponente: Idelfonso García del Pozo. Fecha: 10/10/2005.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 374/2005 - Num. Rec.: 401/2005 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 07/10/2005.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 437/2005 - Num. Rec.: 279/2005 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 07/10/2005.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 435/2005 - Num. Rec.: 345/2005 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 07/10/2005.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 291/2005 - Num. Rec.: 155/2005 - Ponente: José Joaquín Hervís Ortiz. Fecha: 06/10/2005.

- Audiencia Provincial de Granada - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 671/2005 - Num. Rec.: 267/2005 - Ponente: José María Jiménez Burkhardt. Fecha: 05/10/2005.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 716/2005 - Num. Rec.: 666/2005 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 05/10/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 627/2005 - Num. Rec.: 1020/2004 - Ponente: Margarita Blasa Noblejas Negrillo. Fecha: 05/10/2005.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 196/2005 - Num. Rec.: 129/2005 - Ponente: Pedro Javier Altares Medina. Fecha: 04/10/2005.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 363/2005 - Num. Rec.: 326/2005 - Ponente: Salvador Castañeda Bocanegra. Fecha: 03/10/2005.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 453/2005 - Num. Rec.: 587/2005 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 03/10/2005.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 211/2005 - Num. Rec.: 197/2005 - Ponente: María Jesús Jurado Cabrera. Fecha: 03/10/2005. Fecha: 30/09/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 618/2005 - Num. Rec.: 7/2005 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 30/09/2005.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 447/2005 - Num. Rec.: 475/2005 - Ponente: Francisco Javier José Morales Mirat. Fecha: 30/09/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 753/2005 - Num. Rec.: 282/2005 - Ponente: Manuel Torres Vela. Fecha: 29/09/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 388/2005 - Num. Rec.: 957/2005 - Ponente: Juan Ángel Rodríguez Cardama. Fecha: 29/09/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 575/2005 - Num. Rec.: 446/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 28/09/2005.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 513/2005 - Num. Rec.: 668/2004 - Ponente: Javier Seoane Prado. Fecha: 28/09/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 853/2005 - Num. Rec.: 354/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 28/09/2005.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 321/2005 - Num. Rec.: 187/2005 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 27/09/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 631/2005 - Num. Rec.: 526/2005 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 27/09/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 688/2005 - Num. Rec.: 95/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 27/09/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 659/2005 - Num. Rec.: 601/2005 - Ponente: José Javier Díez Núñez. Fecha: 21/09/2005.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 343/2005 - Num. Rec.: 2370/2005 - Ponente: Ruperto Molina Vázquez. Fecha: 19/09/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 326/2005 - Num. Rec.: 1194/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 16/09/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 579/2005 - Num. Rec.: 1056/2004 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 16/09/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 573/2005 - Num. Rec.: 1057/2004 - Ponente: María Dolores Viñas Maestre. Fecha: 15/09/2005.
- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 181/2005 - Num. Rec.: 46/2005 - Ponente: Eloisa Gómez Santana. Fecha: 12/09/2005.
- Audiencia Provincial de Granada - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 597/2005 - Num. Rec.: 703/2005 - Ponente: Carlos José de Valdivia Pizcueta. Fecha: 12/09/2005.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Octava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 279/2005 - Num. Rec.: 3116/2005 - Ponente: José María Frago Bravo. Fecha: 05/09/2005.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 689/2005 - Num. Rec.: 68/2005 - Ponente: Melchor Antonio Hernández Calvo. Fecha: 29/07/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 294/2005 - Num. Rec.: 327/2005 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 29/07/2005.

- Audiencia Provincial de Segovia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 166/2005 - Num. Rec.: 275/2005 - Ponente: Gonzalo del Rey Tremps. Fecha: 29/07/2005.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 423/2005 - Num. Rec.: 264/2005 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 29/07/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 509/2005 - Num. Rec.: 439/2004 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 27/07/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 375/2005 - Num. Rec.: 259/2005 - Ponente: José Gómez Rey. Fecha: 27/07/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 528/2005 - Num. Rec.: 978/2003 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 26/07/2005.

- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 227/2005 - Num. Rec.: 320/2005 - Ponente: Miguel Ángel Larrosa Amante. Fecha: 26/07/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 497/2005 - Num. Rec.: 354/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 21/07/2005.

- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 376/2005 - Num. Rec.: 318/2005 - Ponente: Juan Miguel Carreras Maraña. Fecha: 20/07/2005.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 393/2005 - Num. Rec.: 293/2005 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 20/07/2005.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 595/2005 - Num. Rec.: 396/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 18/07/2005.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 207/2005 - Num. Rec.: 224/2005 - Ponente: María Esther González González. Fecha: 18/07/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 285/2005 - Num. Rec.: 172/2005 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 18/07/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 298/2005 - Num. Rec.: 483/2005 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 15/07/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 300/2005 - Num. Rec.: 1043/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 15/07/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 463/2005 - Num. Rec.: 457/2004 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 13/07/2005.

- Audiencia Provincial de Vizcaya - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 561/2005 - Num. Rec.: 797/2004 - Ponente: María de los Reyes Castresana García. Fecha: 12/07/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 486/2005 - Num. Rec.: 313/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 12/07/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 270/2005 - Num. Rec.: 1060/2005 - Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández. Fecha: 11/07/2005.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 318/2005 - Num. Rec.: 3398/2005 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 08/07/2005.

- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 362/2005 - Num. Rec.: 106/2005 - Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez. Fecha: 06/07/2005.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 421/2005 - Num. Rec.: 434/2005 - Ponente: José María Llanos Pitarch. Fecha: 06/07/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 258/2005 - Num. Rec.: 217/2005 - Ponente: María José Pueyo Mateo. Fecha: 04/07/2005.

- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 329/2005 - Num. Rec.: 380/2005 - Ponente: Idelfonso García del Pozo. Fecha: 04/07/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 238/2005 - Num. Rec.: 931/2005 - Ponente: Carlos Fuentes Candelas. Fecha: 01/07/2005.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 280/2005 - Num. Rec.: 316/2005 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 30/06/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 442/2005 - Num. Rec.: 814/2004 - Ponente: Miguel Julián Collado Nuño. Fecha: 30/06/2005.

Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 238/2005 - Num. Rec.: 251/2005 - Ponente: María Amor Martínez Atienza. Fecha: 30/06/2005.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 355/2005 - Num. Rec.: 86/2005 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 30/06/2005.

- Audiencia Provincial de Badajoz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 204/2005 - Num. Rec.: 252/2005 - Ponente: Jesús Souto Herreros. Fecha: 28/06/2005.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 638/2005 - Num. Rec.: 201/2005 - Ponente: Rafael Caballero-Bonald Campuzano. Fecha: 28/06/2005.

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 272/2005 - Num. Rec.: 644/2004 - Ponente: Miguel Ángel Aguiló Monjo. Fecha: 27/06/2005.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 491/2005 - Num. Rec.: 166/2005 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 24/06/2005.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 276/2005 - Num. Rec.: 3016/2005 - Ponente: Marcos Antonio Blanco Leira. Fecha: 23/06/2005.

- Audiencia Provincial de Castellón - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 121/2005 - Num. Rec.: 79/2005 - Ponente: María Cristina Domenech Garret. Fecha: 23/06/2005.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 161/2005 - Num. Rec.: 148/2005 - Ponente: Andrés Manuel Encinas Bernardo. Fecha: 23/06/2005.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 347/2005 - Num. Rec.: 378/2005 - Ponente: Ildefonso Quesada Padrón. Fecha: 22/06/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 390/2005 - Num. Rec.: 158/2004 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 21/06/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 368/2005 - Num. Rec.: 234/2004 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 16/06/2005.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 381/2005 - Num. Rec.: 370/2005 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 14/06/2005.

- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 265/2005 - Num. Rec.: 1996/2005 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 13/06/2005.

- Audiencia Provincial de Zamora - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 143/2005 - Num. Rec.: 176/2005 - Ponente: Pedro Jesús García Garzón. Fecha: 10/06/2005.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 139/2005 - Num. Rec.: 120/2005 - Ponente: José Alfredo Caballero Gea. Fecha: 10/06/2005.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 240/2005 - Num. Rec.: 263/2005 - Ponente: Antonio María González Floriano. Fecha: 10/06/2005.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 436/2005 - Num. Rec.: 301/2005 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 10/06/2005.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 435/2005 - Num. Rec.: 298/2005 - Ponente: Eduardo Hijas Fernández. Fecha: 10/06/2005.

- Audiencia Provincial de León - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 161/2005 - Num. Rec.: 63/2005 - Ponente: Alfonso Lozano Gutiérrez. Fecha: 09/06/2005.

- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 452/2005 - Num. Rec.: 934/2004 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 07/06/2005.

- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 170/2005 - Ponente: José Luis Portugal Sáinz. Fecha: 07/06/2005.

- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: José Javier Solchaga Loitegui. Fecha: 06/06/2005.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 350/2005 - Num. Rec.: 397/2005 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/06/2005.

- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 150/2005 - Num. Rec.: 4/2005 - Ponente: María Pilar Astray Chacón. Fecha: 01/06/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 350/2005 - Num. Rec.: 960/2004 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 31/05/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 316/2005 - Num. Rec.: 787/2004 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 31/05/2005.

- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 113/2005 - Num. Rec.: 118/2005 - Ponente: Felipe Luis Moreno Gómez. Fecha: 30/05/2005.

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 197/2005 - Num. Rec.: 114/2005 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 27/05/2005.

- Audiencia Provincial de Cáceres - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 213/2005 - Num. Rec.: 229/2005 - Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. Fecha: 25/05/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 449/2005 - Num. Rec.: 169/2005 - Ponente: Melchor Antonio Hernández Calvo. Fecha: 20/05/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 183/2005 - Num. Rec.: 9/2005 - Ponente: Francisco Tuero Aller. Fecha: 20/05/2005.
- Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Ponente: Eduardo Navarro Peña. Fecha: 20/05/2005.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 81/2005 - Num. Rec.: 71/2005 - Ponente: Mercedes Izquierdo Beltrán. Fecha: 19/05/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 156/2005 - Num. Rec.: 629/2005 - Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández. Fecha: 19/05/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 155/2005 - Num. Rec.: 447/2005 - Ponente: Antonio Miguel Fernández-Montells Fernández. Fecha: 19/05/2005.
- Audiencia Provincial de Ciudad Real - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 152/2005 - Num. Rec.: 136/2005 - Ponente: Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo. Fecha: 17/05/2005.
- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 403/2005 - Num. Rec.: 947/2004 - Ponente: Juana Criado Gámez. Fecha: 17/05/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 380/2005 - Num. Rec.: 5/2005 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 17/05/2005.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 206/2005 - Num. Rec.: 97/2005 - Ponente: José Luis Portugal Sáinz. Fecha: 14/05/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 369/2005 - Num. Rec.: 835/2004 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 12/05/2005.
- Audiencia Provincial de Córdoba - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 197/2005 - Num. Rec.: 174/2005 - Ponente: Pedro Roque Villamamor Montoro. Fecha: 11/05/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 68/2005 - Num. Rec.: 203/2004 - Ponente: Antonio Marín Fernández. Fecha: 10/05/2005.
- Audiencia Provincial de Ávila - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 101/2005 - Num. Rec.: 144/2005 - Ponente: María Carmen Molina Mansilla. Fecha: 06/05/2005.
- Audiencia Provincial de Santander - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 226/2005 - Num. Rec.: 55/2005 - Ponente: Bruno Arias Berrioategortua. Fecha: 04/05/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 65/2005 - Num. Rec.: 60/2005 - Ponente: Miguel Ángel Feliz Martínez. Fecha: 03/05/2005.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 34/2005 - Num. Rec.: 310/2004 - Ponente: José Carlos Montero Gamarra. Fecha: 03/05/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 204/2005 - Num. Rec.: 54/2005 - Ponente: Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 02/05/2005.

- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 26/2005 - Num. Rec.: 379/2005 - Ponente: María José Pérez Pena. Ángel Manuel Pantín Reigada. Fecha: 29/04/2005.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 89/2005 - Num. Rec.: 115/2005 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 28/04/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 275/2005 - Num. Rec.: 1008/2004 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 27/04/2005.
- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Séptima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 214/2005 - Num. Rec.: 88/2005 - Ponente: José Luis Casero Alonso. Fecha: 26/04/2005.
- Audiencia Provincial de Les Illes Balears - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 171/2005 - Num. Rec.: 102/2005 - Ponente: Mateo Lorenzo Ramón Homar. Fecha: 26/04/2005.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 165/2005 - Num. Rec.: 600/2005 - Ponente: Rafael Márquez Romero. Fecha: 25/04/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 209/2005 - Num. Rec.: 279/2004 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 19/04/2005.
- Audiencia Provincial de Cádiz - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 74/2005 - Num. Rec.: 44/2005 - Ponente: Ramón Romero Navarro. Fecha: 19/04/2005.
- Audiencia Provincial de Murcia - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 158/2005 - Num. Rec.: 47/2005 - Ponente: Matías Manuel Soria Fernández-Mayoralas. Fecha: 18/04/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 301/2005 - Num. Rec.: 964/2004 - Ponente: José Ángel Chamorro Valdés. Fecha: 18/04/2005.
- Audiencia Provincial de Albacete - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 100/2005 - Num. Rec.: 424/2004 - Ponente: Eduardo Salinas Verdeguer. Fecha: 14/04/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 214/2005 - Num. Rec.: 59/2005 - Ponente: María José Pérez Tormo. Fecha: 12/04/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimosegunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 291/2005 - Num. Rec.: 95/2005 - Ponente: Eladio Galán Cáceres. Fecha: 12/04/2005.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 181/2005 - Num. Rec.: 151/2005 - Ponente: Julio Pedro Manrique de Lara Morales. Fecha: 07/04/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 179/2005 - Num. Rec.: 602/2004 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 06/04/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 208/2005 - Num. Rec.: 929/2004 - Ponente: Paulino Rico Rajo. Fecha: 06/04/2005.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 169/2005 - Num. Rec.: 166/2005 - Ponente: Mónica García de Yzaguirre. Fecha: 05/04/2005.
- Audiencia Provincial de Pontevedra - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 134/2005 - Num. Rec.: 59/2005 - Ponente: Manuel Almenar Belenguer. Fecha: 31/03/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 148/2005 - Num. Rec.: 689/2003 - Ponente: Enrique Anglada Fors. Fecha: 17/03/2005.

- Audiencia Provincial de Toledo - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 69/2005 - Num. Rec.: 279/2004 - Ponente: Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro. Fecha: 17/03/2005.
- Audiencia Provincial de Jaén - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 55/2005 - Num. Rec.: 80/2005 - Ponente: Jesús María Passolas Morales. Fecha: 15/03/2005.
- Audiencia Provincial de Alicante - Sección Cuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 96/2005 - Num. Rec.: 357/2004 - Ponente: Manuel Benigno Flórez Menéndez. Fecha: 10/03/2005.
- Audiencia Provincial de Madrid - Sección Vigésimocuarta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 194/2005 - Num. Rec.: 925/2004 - Ponente: Ángel Sánchez Franco. Fecha: 07/03/2005.
- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 88/2005 - Num. Rec.: 486/2004 - Ponente: Enrique Alavedra Farrando. Fecha: 02/03/2005.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Undécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 124/2005 - Num. Rec.: 975/2004 - Ponente: José Alfonso Arolas Romero. Fecha: 28/02/2005.
- Audiencia Provincial de Salamanca - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 96/2005 - Num. Rec.: 84/2005 - Ponente: Idelfonso García del Pozo. Fecha: 28/02/2005.
- Audiencia Provincial de Sevilla - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Rec.: 412/2005 - Ponente: José Herrera Tagua. Fecha: 18/02/2005.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 42/2005 - Num. Rec.: 283/2004 - Ponente: Rafael García Laraña. Fecha: 18/02/2005.
- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 105/2005 - Num. Rec.: 750/2004 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 16/02/2005.
- Audiencia Provincial de Burgos - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 52/2005 - Num. Rec.: 29/2005 - Ponente: Agustín Picón Palacio. Fecha: 15/02/2005.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 27/2005 - Num. Rec.: 27/2005 - Ponente: Gema María Solar Beltrán. Fecha: 15/02/2005.
- Audiencia Provincial de Almería - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 43/2005 - Num. Rec.: 27/2005 - Ponente: Gema María Solar Beltrán. Fecha: 15/02/2005.
- Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 34/2005 - Num. Rec.: 120/2004 - Ponente: Ricardo Javier González González. Fecha: 14/02/2005.
- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 20/2005 - Num. Rec.: 237/2004 - Ponente: Luis Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas. Fecha: 11/02/2005.
- Audiencia Provincial de La Coruña - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 72/2005 - Num. Rec.: 1689/2004 - Ponente: Rafael Jesús Fernández-Porto García. Fecha: 11/02/2005.
- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 63/2005 - Num. Rec.: 756/2004 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 09/02/2005.
- Audiencia Provincial de Palencia - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 20/2005 - Num. Rec.: 428/2004 - Ponente: Carlos Javier Álvarez Fernández. Fecha: 03/02/2005.
- Audiencia Provincial de Tarragona - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 73/2005 - Num. Rec.: 518/2004 - Ponente: Antonio Carril Pan. Fecha: 02/02/2005.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 62/2005 - Num. Rec.: 991/2004 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 01/02/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Duodécima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 49/2005 - Num. Rec.: 906/2004 - Ponente: Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón. Fecha: 31/01/2005.

- Audiencia Provincial de Huelva - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 10/2005 - Num. Rec.: 257/2004 - Ponente: Luis Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas. Fecha: 27/01/2005

- Audiencia Provincial de Asturias - Sección Quinta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 14/2005 - Num. Rec.: 334/2004 - Ponente: María Pilar Muriel Fernández-Pacheco. Fecha: 19/01/2005.

- Audiencia Provincial de Valencia - Sección Décima - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 21/2005 - Num. Rec.: 959/2004 - Ponente: José Enrique de Motta García-España. Fecha: 18/01/2005.

- Audiencia Provincial de Las Palmas - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 6/2005 - Num. Rec.: 326/2004 - Ponente: Rosalía Mercedes Fernández Alaya. Fecha: 17/01/2005.

- Audiencia Provincial de Málaga - Sección Sexta - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 13/2005 - Num. Rec.: 818/2004 - Ponente: María Inmaculada Suárez-Bárcena Florencio. Fecha: 13/01/2005.

- Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoctava - Jurisdicción: Civil - 1 - Num. Res.: 19/2005 - Num. Rec.: 1097/2003 - Ponente: Enrique Anglada Fors.. Fecha: 12/01/2005.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV., *Matrimonio: Nulidad Canónica y Civil, Separación y Divorcio: Aspectos sustantivo y procesal conforme a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, coord. Xavier O´CALLAGHAN MUÑOZ, Editorial Universitaria Ramon Areces, Madrid 2001.
- ABBOUD CASTLLO, Neylia L., “El Divorcio en el Derecho Nicaragüense”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 461-479.
- ALBADALEJO GARCÍA, Manuel, “La dación en pago y la determinación de la deuda que se paga (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.ª) de 8 de febrero de 1996”, *Revista de Derecho Privado*, tomo LXXXI, diciembre 1.997, páginas 902-916.
- ALBERRUCHE DIAS FLORES, María Mercedes, “Fijación del momento a partir del cual se puede solicitar la pensión de alimentos”, *Actualidad Civil*. ISSN 0213-7100, 2.014.
- ANGOSTO SÁEZ, José Fulgencio, “La concesión con carácter temporal de la pensión por desequilibrio del art. 97 C.c.”, *Homenaje al profesor Bernardo Moreno Quesada*, coord. por Ramón Herrera Campos, Vol. 1, Almería 2.000, páginas. 131-152.
- APARICIO AUÑÓN, Eusebio, “La pensión compensatoria”, *Revista de Derecho de Familia. Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, núm. 5, 1.999, páginas 23-66.
- BATTEUR A. et RAOUL-CORMEIL G., “Fin ou éclatement de la notion de prestation compensatoire? Commentaire de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce”, *Droit & Patrimoine*, núm. 97, 2.001.
- BAUMEISTER TOLEDO, Alberto, “El Divorcio en el Derecho Venezolano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 647-671.

- BAYO DELGADO, Joaquín, *Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña*, Editorial Sepin, Las Rozas (Madrid) 2.011.
- BELIÓ PASCUAL, Ana Clara, *La pensión compensatoria*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2.013.
- BELTRÁ CABELLO, Carlos, “Divorcio: pensión compensatoria”, *CEF Legal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*. ISSN 1699-129X, núm. 146, 2.013, páginas 55-58.
- BÉNABENT, A, “Plaidoyer pour quelques reformes du divorce, I – Sur les effets”, *Le Dalloz*, 1.997.
- BENAVIDES SANTOS, Diego, “El Divorcio en el Derecho Costarricense”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.), Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 187-207.
- BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel, “De nuevo la pensión compensatoria”, *Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Joaquín José Rams Albesa*, Coordinado por Matilde CUENA CASAS, Luís Antonio ANGUITA VILLANUEVA, y Jorge ORTEGA DOMENECH, 2.013, ISBN 978-84-9031-271-1, páginas 1143-1168.
- “La reducción de la pensión de alimentos por alteración sustancial de las circunstancias”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, ISBN 0210-0444, núm. 742, 2.014, páginas 620-644.
- BOSCH GUERRERO, Carlos, “Sin viudos en los parques. Pensión de Viudedad en Separación o Divorcio. Nueva Regulación”, *Noticias Jurídicas*, 1 de febrero de 2.008.
- CABELLO MATAMALA, Carmen Julia, “El Divorcio en el Derecho Peruano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 525-550.
- CALLEJO RODRÍGUEZ, Carmen, “El pacto de modificación de la pensión compensatoria contenido en convenio regulador”, *Actualidad Civil*, ISSN 0213-7100, núm. 9, 2.014.
- CAMPUZANO TOMÉ, Herminia, *La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración de sus*

presupuestos de otorgamiento, Editorial Librería Bosch, Barcelona 1.986.

--- *La pensión por desequilibrio económico en los casos de separación y divorcio*, 3ª Edición, J.M. Bosch Editor, Barcelona 1.994.

CARRIÓN VIDAL, Almudena, “Divorcio y separación en el Código Civil tras la reforma por Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 3, agosto 2015, páginas 395-412.

CASADO CASADO, Belén, “Carácter constitutivo de la sentencia de divorcio en relación con la extinción de la pensión compensatoria”. *Revisa de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, ISSN 1139-5168, núm. 58, 2.013, páginas 63-105.

CLEMENTE MEORO, Mario E., *Derecho de Familia*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 1991.

CUENCA ALCAINE, Begoña, “Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de Separación de Bienes, ¿procede o no procede?”, *Noticias Jurídicas*, 1 de mayo de 2.010.

DE PERALTA Y CARRASCO, Manuel, “El Divorcio en el Derecho Portugués”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 551-582.

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, Comentario de los artículos 142 y siguientes del Código Civil, *Comentario al Código Civil*, Volumen I. Ministerio de Justicia, Madrid 1.991.

DÍAZ MASEDA, Sandara, “Breves apuntes sobre la renuncia al derecho a la pensión compensatoria”, en *Revista de Derecho UNED*, ISSN 1886-9912, núm. 2, 2007, págs. 243-264

EIXIMENIS, Francesc, *Lo libre de les dones*, Edicions La Caixa, Barcelona 1.983.

FOLGUERA CRESO, José Ángel, “Pensión compensatoria y prestación de viudedad después de separación y divorcio: cambio jurisprudencial”, *Diario La Ley*, ISSN 1138-9907, núm. 8276, 2.014.

- GARCÍA CANTERO, Gabriel, Comentario de los artículos 42 a 107 del Código Civil, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por Manuel Albaladejo, Editorial Revista de Derecho Privado (Edersa), tomo II, 2.^a ed., Madrid 1982.
- Comentario de los artículos 97 a 101 del Código Civil, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dirigidos por Albadalejo, Madrid 1.982.
- GARCÍA CANTERO, Gabriel, PONS GONZÁLEZ, Manuel y DEL ARCO TORRES, Miguel Ángel, *Separación, Divorcio y Nulidad Matrimonial: Régimen Jurídico*, Editorial Comares, Granada 1.992.
- GONZÁLEZ POVEDA, Pedro, *Tratado de Derecho de Familia. La Ley del divorcio*, Editorial Sepin, Madrid 1.987.
- GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar, “La ‘Vida Marital’ del Perceptor de la Pensión Compensatoria”, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Madrid 2.013.
- GUZMÁN AVALOS, Guzmán, “El Divorcio en el Derecho Mexicano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 431-460.
- HAZA DÍAZ, Pilar de la, *La pensión de separación y divorcio*, Editorial La Ley, Madrid 1.989.
- HERRERA, Marisa, “El Divorcio en el Derecho Argentino”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 27-100.
- HOYA COROMINA, José y ANAUT ARREDONDO, Sofia, “La Pensión Compensatoria”, *Estudios Jurídicos, Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, 15 de julio de 2.000, núm. 1.873.
- HUGOT, Jean y PILLEBOUT, Jean-François, *La prestation compensatoire et le divorce*, Litec, Groupe Lexis Nexis, Editions du Juris-Classeur, 2^a edición, París 2006.
- IGLESIA MONJE, María Isabel de la, “Algunas cuestiones jurisprudenciales en torno a la extinción de la pensión

compensatoria”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, ISSN 0210-0444, núm. 736, 2.013.

--- “Reducción de la pensión de alimentos por el nacimiento de nuevos hijos”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, ISSN 0210-0444, núm. 742, 2.014.

IGLESIAS CABERO, Manuel, “Pensión de viudedad, derecho de las viudas separadas o divorciadas, víctimas de violencia de género: no se precisa el reconocimiento de la pensión compensatoria”, *Diario La Ley*, ISSN 1138-9907, núm. 8090, 2.013.

LASARTE ÁLVAREZ, Carlos y VALPUESTA FERNÁNDEZ, María del Rosario, Comentario del artículo 97 del Código Civil, en *Matrimonio y Divorcio. Comentarios al nuevo Título IV del Libro Primero del Código Civil*, coordinados por José Luis LACRUZ BERDEJO, Editorial Civitas, Madrid 1.982.

--- *Principios de Derecho Civil*. Tomo 6º, *Derecho de Familia*, 1ª Edición, Editorial Trivium, Madrid 1.997.

LIENHARD, Godfrey, http://www.cnb.avocat.fr/PDF/2003-09-18_colloque_div_Lienhard.pdf.

LLERANDI GONZÁLEZ, Natalia, “La pensión compensatoria entre cónyuges: su limitación temporal”, I, Colegio de Abogados de Oviedo, julio 1995.

LÓPEZ MARCO, Pilar, “Renuncia anticipada a la compensación por desequilibrio económico derivado de la separación o divorcio. Comentario a la sentencia 690/2000 de 12 de diciembre de la AP Asturias (S. 5ª)”.

LUNA SERRANO, Agustín, “El nuevo régimen de la familia”, *Matrimonio y Divorcio. Comentarios al nuevo Título IV del Libro Primero del Código Civil*, coordinados por José Luis LACRUZ BERDEJO, Editorial Civitas, Madrid 1.982.

MARFIL GÓMEZ, Jorge A., “Hacia un planteamiento racional de la pensión compensatoria: la tabulación”, *Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, núm. 6, 2.000.

MARTÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, *La temporalidad de la pensión compensatoria*, Editorial Tiran Lo Blanch, Valencia 1.997.

- MARTÍNEZ CENTENO, Toribio, “El Divorcio en el Derecho Boliviano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 101-122.
- MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia, “Una nueva lectura de la pensión compensatoria desde la perspectiva del enriquecimiento injusto”, *Revista de Derecho de Familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*, ISSN 1139-5168, N°. 22, 2004, págs. 21-44.
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, *La obligación legal de alimentos entre parientes*, Editorial La Ley, Las Rozas (Madrid) 2.002.
- MAZEAUD, Henry, Léon y Jean, CHABAS, François, *Leçon de Droit Civil*, tomo 1, volumen 3, *La famille*, Editorial Montchrestien, 7ª Edición, par L. LEVENER, Issy-les-Moulineaux (Francia) 2.001.
- MIRALLES GONZÁLEZ, Isabe, “La compensación económica por razón del trabajo en el Libro segundo del Código Civil de Cataluña: algunas cuestiones civiles y fiscales”, *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, enero 2.012.
- MITJANS, E. y CASTELLÁ JORDS, J.M., *Canadá: introducción al sistema político y jurídico*, Editorial Universidad de Barcelona, Barcelona 2.001.
- MONTERO AROCA, Juan, *La pensión compensatoria en la separación y divorcio*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2.001.
- MONTOYA PÉREZ, Guillermo, “El Divorcio en el Derecho Colombiano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 165-186.
- MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, Roberto, “El Divorcio en el Derecho Paraguay”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 507-524.
- MURILLAS ESCUDERO, Juan Manuel, “La practica legislativa de las CCAA sobre su Derecho Civil propio”, *Anuario Jurídico de La Rioja*, páginas 145-217.

- NOLASCO, Daniel y CASTILLO OGANDO, Nelson, “El Divorcio en el Derecho Dominicano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 285-308.
- PAREJO CARRANZA, Antonio José, “El derecho a una compensación económica tras la ruptura de la unión no matrimonial. Una revisión tras las SSTC 81/2013, de 11 de abril, y 93/2013, de 23 de abril”, *Revista de Derecho Civil*, Volumen I, núm. 2 (abril-junio, 2.014).
- PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel, *Derecho de Familia*, Sección publicaciones de la Facultad de Derecho de Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1.989.
- *Derecho de Familia*, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid 1.999.
- PEREDA GÓMEZ, F. Javier y VEGA SALA., Francisco, *Derecho de Familia*. Editorial Praxis, Barcelona 1.994.
- PÉREZ GALLARDO, Leonardo B., “El Divorcio en el Derecho Cubano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 209-284.
- PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “Enfoque actual de la Pensión Compensatoria”, *Boletín Derecho de Familia*, 1 de septiembre de 2.011.
- PITTI GONZÁLEZ, Ulises, “Derechos Patrimoniales y Solidaridad en las relaciones de pareja en el Siglo XXI”. “El Divorcio en el Derecho Panameño”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 481-505.
- QUINONES ESCÁMEZ, Ana, “La disolución del matrimonio: especial referencia al repudio islámico”, *La multiculturalidad: especial referencia al islam*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2.002.

- REYES LÓPEZ, Maria José, “La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la extinción de la pensión compensatoria”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, ISSN 2386-4567, núm. 2, 2.015.
- RIVERO DE ARHANCET, Mabel, y RAMOS CABANELLAS, Beatriz, “El Divorcio en el Derecho Uruguayo”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 607-645.
- ROBERTO MUÑOZ, Nery, “El Divorcio en el Derecho Guatemalteco”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalía, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 421-430.
- ROCA TRÍAS, Encarnación, Comentario de los artículos 42 al 107 CC, *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo II, Editorial Revista de Derecho Privado (Edersa), 2ª edición, Madrid 1.982.
- *El Convenio Regulador y los conceptos de alimentos, cargas familiares, pensión por desequilibrio e indemnización en caso de nulidad*, Barcelona 1.996.
- *Familia y cambio social (De la casa a la persona)*, Editorial Civitas, Madrid 1.999.
- RODRÍGUEZ RAMOS, Antonio Manuel, “Un ejemplo de dación en pago: el artículo 99 del Código Civil”, *Actualidad Civil*, 2.000, núm. 8.
- RODRÍGUEZ RAMOS, Luís y MARTÍNEZ GUERRA, Amparo, *Código Penal comentado*, Editorial La Ley, 3ª edición, Las Rozas (Madrid) 2.009.
- RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, J., “La concesión temporal de la pensión por desequilibrio económico”, *Aranzadi Civil*, 1.995, núm. 1.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Paz, *La extinción del derecho a la pensión compensatoria*, Editorial Comares, Granada 2.005.
- SILVA-RUIZ, Pedro F., “El Divorcio en el Derecho Puertorriqueño”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca

Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 583-606.

SOTOMAYOR UNDA, Jorge, “El Divorcio en el Derecho Ecuatoriano”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 309-336.

TAPIA RODRÍGUEZ, Mauricio, “El Divorcio en el Derecho Chileno”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 147-163.

TORRES LANA, José Ángel, Comentario del artículo 101 del Código Civil, *Matrimonio y Divorcio. Comentarios al nuevo Título IV del Libro Primero del Código Civil*, Editorial Civitas, Madrid 1.982.

TOZY, Mohamed, y RHIWI, Leila Rhiwi, “Débats entre femmes en terres d’islam”, *Le Monde Diplomatique*, abril 2.004.

VAINSENCHE, Tania, “El Divorcio en el Derecho Brasileño”, en *El divorcio en el Derecho Iberoamericano*, ACEDO PENCO, Ángel y PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. (coord.). Editoriales Biblioteca Iberoamericana de Derecho, Temis S.A., Ubijus, Reus y Zavalia, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires, 2.009, páginas 123-145.

VALLADARES RASCÓN, Etelvina, *Nulidad, separación, divorcio. Comentarios a la Ley de Reforma del Matrimonio*, Editorial Civitas, Madrid 1.982.

VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, *Comentario al Código Penal*, Editorial La Ley, Las Rozas (Madrid) 2.010.

VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, Alfonso J., Establecimiento de la pensión compensatoria bajo condición o término.

ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, LUIS, *La pensión compensatoria y otras prestaciones económicas derivadas de la separación, el divorcio y la nulidad matrimonial*, 2ª edición, Editorial La Ley, Las Rozas (Madrid) 2.000.

--- *La pensión compensatoria de la separación conyugal y el divorcio*, Editorial Lex Nova, 2ª edición, Valladolid 2003.

--- *Derecho de Familia y de la Persona*, Tomo 6, Editorial Bosch, 1ª edición, Barcelona 2.007.

ZEKRI, Houda. “El nuevo código de familia marroquí a la luz de las relaciones bilaterales hispano marroquíes”, *Revista Española de Derecho Internacional*, volumen LVI, 2004, páginas 301-303.